

**TESIS DOCTORAL**

**EL PATRIMONIO MUNICIPAL DE MADRID EN EL ANTIGUO  
REGIMEN.**

**BIENES DE PROPIOS, COMUNALES Y BALDIOS, SIGLOS XI – XVIII.**

**Doctorando: Francisco Javier Hernando Ortego**

**Director: Dr. D. Santos Madrazo Madrazo**

Departamento de Historia Moderna

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad Autónoma de Madrid

2003

# INDICE

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>11</b>
<b>PRIMERA PARTE – EL REGIMEN COMUNAL EN LA VILLA Y TIERRA DE MADRID, EDAD MEDIA Y EDAD MODERNA.....</b>	<b>17</b>
<b>CAPITULO 1 – EL CONCEJO DE VILLA Y TIERRA EN EL MADRID MEDIEVAL..</b>	<b>18</b>
1 – Qué entendemos por concejo de Villa y Tierra.....	19
2 – Conquista y organización de la Transierra.....	30
3 – La formación de un espacio: la Villa y Tierra de Madrid.....	38
3.1- Delimitación de términos.....	38
3.2- El proceso de señorialización.....	52
4 – La formación de una institución: el concejo de Villa y Tierra de Madrid.....	61
4.1- Concejo, oligarquía y señorío urbano.....	61
4.2- La articulación de la Tierra.....	70
<b>CAPITULO 2- EL REGIMEN COMUNAL DE VILLA Y TIERRA EN EL MADRID MEDIEVAL.....</b>	<b>85</b>
1 – Territorio concejil y régimen comunal.....	85
1.1-Vigilancia y reserva del término concejil.....	85
1.2-Los pleitos de términos bajomedievales.....	98
2 – El Real de Manzanares, ¿un espacio comunal para Madrid y su Tierra?.....	107
3 – La articulación del régimen comunal de villa y tierra.....	122
3.1- Pastos y montes: los exidos y carrascales.....	124
3.2- Los pastizales: las dehesas.....	128

3.3- El monte. El caso del monte de El Pardo.....	134
4 – Procesos de transformación del patrimonio municipal.....	143
4.1 – Usurpaciones y defensa del régimen comunal.....	144
4.2 – La conversión de comunales en propios. El papel de los baldíos.....	149

### CAPITULO 3 – EL REGIMEN COMUNAL DE VILLA Y TIERRA EN LA EDAD MODERNA: DEL ESPLENDOR A LA DECADENCIA.....153

1 – Expansión agraria, roturaciones y pastizales en el s. XVI.....	156
2 – La venta de baldíos en el siglo XVII.....	162
3 – De ejidos a sotos, o de comunales a propios.....	172
4 – El monte en la Edad Moderna. El Pardo, de comunal a propiedad real.....	176
4.1-Regulación y uso del monte en el Madrid de la Edad Moderna.....	177
4.2- El Pardo, espacio comunal y cazadero real.....	183
4.3- Los pastos.....	189
4.4- Usos forestales: leñas y carboneo.....	195
4.5- La presión de los cultivos.....	202
4.6- La expropiación de El Pardo en el s. XVIII.....	205

## **SEGUNDA PARTE – BIENES DE PROPIOS Y HACIENDA MUNICIPAL EN EL MADRID DEL ANTIGUO REGIMEN.....219**

### CAPITULO 4 – EL NACIMIENTO DE UNA HACIENDA MUNICIPAL. LOS BIENES DE PROPIOS EN LA EDAD MEDIA.....220

1 -Estructura y composición de los bienes de propios.....	222
1.1-Edificios.....	222
1.2-Rentas.....	227
1.3-Censos.....	232
2 - Evolución de los ingresos y los gastos.....	236
2.1-Los antecedentes medievales (hasta 1480).....	236
2.2-La consolidación del patrimonio municipal (1480-1561).....	243
 CAPITULO 5 – LOS BIENES DE PROPIOS DE UNA CAPITAL, 1561-1700.....	254
1- Estructura y evolución de los Bienes de Propios.....	254
1.1. Las tierras.....	254
1.2-Edificios.....	257
1.3-Rentas.....	269
1.4-Censos.....	272
2- Evolución de los ingresos y gastos de los Propios de Madrid.....	279
2.1-El impacto de la Corte: un patrimonio hipotecado, 1561-1600.....	279
2.2-Crisis y recuperación de los propios en el s. XVII.....	284
 CAPITULO 6 – ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LOS PROPIOS DE MADRID EN EL S. XVIII: EDIFICIOS, RENTAS Y CENSOS.....	292
1-Transformaciones de los bienes de propios madrileños en el s. XVIII. El “caudal” de El Pardo.....	292
1.1-Dehesas carniceras.....	295
1.2-Dehesa de la Serena.....	298
1.3-Redención de censos sobre los Propios.....	299
1.4-Inversión en reformas de inmuebles y urbanísticas.....	303
1.5-Acciones del Banco de San Carlos.....	304
2- Edificios.....	306

2.1-La Plaza Mayor.....	306
2.2-Carnicerías, hornos y mesones.....	310
2.3-Transformaciones en los inmuebles urbanos.....	313
3- Rentas.....	315
4- Censos.....	318
<b>CAPITULO 7 – LAS TIERRAS DE PROPIOS DE MADRID EN EL S. XVIII.....</b>	<b>324</b>
1- Las tierras de labor.....	326
1.1-Los censos perpetuos.....	326
1.2-Arrendamientos a corto plazo.....	329
1.3-Las tierras de propios de Madrid en Las Rozas.....	330
2- Las tierras de pasto: dehesas y sotos.....	337
2.1- Dehesas.....	339
2.2-Sotos.....	340
2.3-El soto del Porcal en el s. XVIII.....	345
2.4- Las nuevas dehesas.....	356
3 – La Dehesa de la Serena.....	358
3.1- Los propios de Madrid en la Serena.....	358
3.2- Arrendamientos en la Dehesa de la Serena, 2ª mitad del s. XVIII.....	363
4- Apeos y usurpaciones: propiedad y “economía moral”.....	373
<b>CAPITULO 8 - LOS BIENES DE PROPIOS DE MADRID EN EL S. XVIII.</b>	
<b>INGRESOS Y GASTOS.....</b>	<b>385</b>
1- Evolución de los ingresos.....	385
1.1-Ingresos por tierras.....	390

1.2 Ingresos por inmuebles urbanos.....	395
1.3-Ingresos por rentas.....	397
1.4-Ingresos por censos.....	399
2- Formas de explotación: arrendamiento y administración.....	400
3- Los gastos de Propios.....	408
3.1-La evolución del gasto municipal.....	408
3.2-La distribución del gasto.....	410
 CAPITULO 9 – LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.....	428
1-La administración del patrimonio en la Baja Edad Media.....	429
1.1 -Los “poderosos”: regidores y caballeros y su control del patrimonio municipal.....	429
1.2- El mayordomo de propios.....	431
1.3-La presencia real: pesquisidores y corregidores.....	434
2- La administración del patrimonio municipal en la Edad Moderna.....	435
2.1-Los órganos de gobierno: corregidor y regidores.....	435
2.2-El mayordomo de propios.....	445
2.3-Contadurías y Tesorerías.....	458
2.4-Visitador de propios y personal subalterno.....	466
2.5- La Administración central.....	468
 CONCLUSIONES.....	472
 APÉNDICES	
- Apéndice 1 – Abreviaturas.....	479

- Apéndice 2 – Rentas de Propios de Madrid en la primera mitad del s. XVI.....	480
- Apéndice 3 – Ingresos de los Bienes de Propios en el s. XVI.....	488
- Apéndice 4 – Ingresos de los Bienes de Propios, siglos XVII-XVIII.....	495
- Apéndice 5 – Gastos de Propios, siglos XVII-XVIII.....	554
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>578</b>

## ÍNDICE DE MAPAS

- Mapa 1: La Tierra de Madrid con el Real de Manzanares en la actual Comunidad de Madrid.....	51
- Mapa 2: La Tierra de Madrid en la Edad Media.....	60
- Mapa 3: La Tierra de Madrid en la Edad Moderna.....	155
- Mapa 4: El monte de El Pardo hasta 1749.....	188
- Mapa 5: El monte de El Pardo en la Edad Moderna: Usos del espacio.....	194



# ÍNDICE DE CUADROS

- Cuadro 1 – Superficie de algunos concejos de la Transierra y la Extremadura.....	49
- Cuadro 2 – Venta de baldíos del Cuarto de Palacio, 1646.....	160
- Cuadro 3 – Guardas de montes y dehesas de Madrid, 1629.....	182
- Cuadro 4 – Producto de la corta de los montes de El Pardo, 1707-1750.....	201
- Cuadro 5 – Tasación forestal de las tierras de Madrid en El Pardo, 1751-1752.....	216
- Cuadro 6 – Arrendamientos de las casas de Propios, 1523.....	226
- Cuadro 7 – Ingresos de propios, 2ª mitad del s. XV.....	237
- Cuadro 8 – Arrendamiento de los exidos y carrascales, 1524-1567.....	248
- Cuadro 9 – La renta del Peso, con y sin la Corte en Madrid, 1528-1542.....	252
- Cuadro 10 – Multas al Real de Manzanares (ducados).....	259
- Cuadro 11 – Ingresos de Propios procedentes de las fiestas de toros en la Plaza Mayor, 1650-1652.....	265
- Cuadro 12 – Ingresos de Propios, 1561, 1600 (Rs).....	280
- Cuadro 13 – Las tierras de Propios en la 2ª mitad del s. XVII.....	290
- Cuadro 14 – Censos sobre los Propios de Madrid, s. XVIII.....	300
- Cuadro 15 – Alquileres de viviendas de los Propios en la Plaza Mayor, 1802.....	308
- Cuadro 16 – Veintenas cobradas por los Propios de Madrid, 1754-1768.....	321
- Cuadro 17 – Distribución de las tierras de Propios entre vecinos de Las Rozas, 1723-1727.....	332
- Cuadro 18 – Tasación de los sotos y dehesas de Madrid, 1809.....	338
- Cuadro 19 – El soto del Porcal en el s. XVIII – Ingresos.....	353
- Cuadro 20 – El soto del Porcal en el s. XVIII – Inventarios forestales.....	354
- Cuadro 21 – Arrendamientos de la Dehesa de la Serena, 1772.....	370
- Cuadro 22 – Tierras de los Propios de Madrid a finales del s. XVIII.....	382

- Cuadro 23 – Gastos del Corpus, año 1753.....	418
- Cuadro 24 – Ingresos y gastos en los 42 hornos de Villanueva, 1682-1737.....	424
- Cuadro 25 – Mayordomos de Propios, 1665-1810.....	449

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

- Gráfico 1 – Ingresos de Propios, 1ª mitad del s. XVI.....	243
- Gráfico 2 – Ingresos de Propios, 1ª mitad del s. XVI. Valores reales.....	244
- Gráfico 3 – Evolución de la renta de nihares, 1504-1544.....	246
- Gráfico 4 – Renta de los exidos y carrascales, 1525-1567.....	249
- Gráfico 5 – Renta del soto del Porcal, 1525-1567.....	250
- Gráfico 6 – Renta del soto del Negralejo, 1525-1562.....	251
- Gráfico 7 – Ingresos de Propios – 1561, 1600. Valores reales.....	281
- Gráfico 8 – Ingresos de Propios, 1629-1679. Valores nominales (Rs).....	286
- Gráfico 9 – Ingresos de Propios, 1629-1699. Valores reales.....	287
- Gráfico 10 – Ingresos de Propios, s. XVIII (Rs) – I .....	386
- Gráfico 11 – Ingresos de Propios, s. XVIII (Rs) – II .....	387
- Gráfico 12 – Ingresos de Propios, s. XVIII. Valores reales – I .....	388
- Gráfico 13 – Ingresos de Propios, s. XVIII. Valores reales – II .....	389

## **INTRODUCCIÓN**

Los patrimonios municipales han sido objeto de estudio ya desde el s. XIX. La consolidación de la Revolución Liberal y los nuevos derechos que imponía situaría a la defensiva las fórmulas alternativas de acceso a los recursos. El resultado fue una vigorosa reacción “comunalista” que reivindicaba unas formas de propiedad condenadas por los liberales como ineficientes, arcaicas y responsables de atraso económico en la agricultura. Extendida por buena parte de Europa, llegó también a España.<sup>1</sup> Se plantearon así dos grandes posturas, la exégesis comunalista o el ataque a ultranza de los partidarios de la propiedad privada, que durante mucho tiempo dejaron profunda huellas de su influencia.<sup>2</sup>

Desde un principio la perspectiva de análisis predominante fue histórico-jurídica, orientada especialmente a la búsqueda de los antecedentes que la historia del derecho podía aportar a la justificación de la coetánea estructura de la propiedad de la tierra. Precisamente esta línea de interpretación jurídica ha seguido teniendo gran vigencia hasta nuestros días.<sup>3</sup>

Más reciente, la historia agraria ha irrumpido con fuerza en el estudio de la propiedad concejil. Si en un principio la orientación básica era contribuir a un mejor conocimiento de la estructura de la propiedad de la tierra, con el tiempo las aproximaciones se han diversificado, consiguiendo así un claro enriquecimiento de los resultados conseguidos. De esta forma,

---

<sup>1</sup> Los grandes clásicos del estudio de los patrimonios públicos, COSTA, J.- *Colectivismo agrario en España*, 2 vols., Madrid, 1898; ALTAMIRA Y CREVEA, R.- *Historia de la propiedad comunal*, Madrid, 1890 (reed. Madrid, 1981); CÁRDENAS, F.- *Ensayo sobre la Historia de la propiedad territorial en España*, Madrid, 1873, 2 vols.; AZCARATE, G. de- *Ensayo sobre la Historia del Derecho de propiedad y su estado actual en Europa*, Madrid, 1903, 2 vols. y SAIZ MILANES, J.- "Origen e historia de los Bienes de Propios", en ESTAPE y RODRÍGUEZ, F., ed.- *Textos olvidados*, Madrid, 1973, págs. 441-489. Estudios de todos estos trabajos desde un punto de vista sociológico en JIMÉNEZ ROMERO, C.- "La polémica europea sobre la comunidad aldeana (1850-1900)", *Agricultura y Sociedad*, nº 55 (1990); el mismo- "El pensamiento agrario de Joaquín Costa a la luz del debate europeo sobre el campesinado", *Agricultura y sociedad*, nº 56 (1990); el mismo- *Valdelaguna y Coatepec. Permanencia y funcionalidad del régimen comunal agrario en España y México*, Madrid, 1991, págs. 41-110; GARAYO URRUELA, J. M.- *La propiedad comunal en el pensamiento social agrario: perspectivas sociológicas*, Tesis Doctoral en microficha, Universidad de Deusto, 1999

<sup>2</sup> Así lo expresaba A. M. Bernal: "Las tierras de propios y comunales son los materiales del argumento idílico del campo español; también la bestia negra de los primeros liberales españoles. La polémica sigue abierta pues aún quedan ayuntamientos con tierras de propios y municipios con sus comunales. La falta de estudios históricos, de carácter económico y cuantitativo, no deja de llamar la atención, máxime si se tiene en cuenta que los archivos municipales conservan parte muy considerable de documentación relativa a dicha tierra". BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.- "La propiedad de la tierra: problemas que enmarcan su estudio y evolución", en ANES ALVAREZ, G. y otros- *La economía agraria en la historia de España. Propiedad, explotación, comercialización, rentas*, Madrid, 1979, págs 108-109

<sup>3</sup> Por citar trabajos auténticamente clásicos ya, NIETO, A.- *Ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras*, 2 vols., Valladolid, 1959, y, sobre todo, *Bienes comunales*, Madrid, 1964; CUADRADO IGLESIAS, M.- *Naturaleza jurídica de las aprovechamientos comunales de pastos y leñas*, Salamanca, 1961; el mismo- *Aprovechamientos en común de pastos y leñas*, Madrid, 1980; MANGAS NAVAS, J. M.- *El régimen comunal agrario de los concejos de Castilla*, Madrid, 1981; el mismo- *La propiedad de la tierra en España: los Patrimonios Públicos. Herencia contemporánea de un reformismo inconcluso*, Madrid, 1984

conocemos mucho mejor la importancia del régimen comunal como mecanismo fundamental para organizar el acceso a recursos económicos básicos, y por tanto su papel en distintos procesos de la economía agraria del Antiguo Régimen, como la organización de la producción agrícola y ganadera o la distribución de la renta en unas sociedades nada igualitarias.<sup>4</sup>

Por otro lado, desde un punto de vista teórico se ha producido una renovación sustancial. Los términos comunales han sido objeto de interés preferente por parte de distintas perspectivas con planteamientos muy diferentes, con frecuencia enfrentados. Para empezar, la célebre teoría de la “tragedia de los comunales” de G. Hardin, que justamente pudo despachar E. P. Thompson con el argumento de ser “ignorante históricamente” y que otros autores han criticado por confundir bienes de libre acceso con unos comunales cuyo uso está regulado por instituciones.<sup>5</sup> Precisamente éste es el objeto de estudio de la “perspectiva institucionalista”, que centra la discusión en las normas que crean las condiciones de uso y disfrute de los recursos comunales y las normas de exclusión para garantizar su continuidad, identificando la propiedad privada como la más eficiente.<sup>6</sup> Por último, la “perspectiva medioambientalista”, preocupada por analizar el papel de los patrimonios colectivos en la sustentabilidad de los ecosistemas, insistiendo en la capacidad de adaptación de la propiedad comunal y su importante papel en el pasado y en el presente en este sentido.<sup>7</sup>

Con este panorama por delante, mi objetivo fundamental se ha centrado en el estudio de un patrimonio municipal a largo plazo, más concretamente desde la repoblación medieval hasta finales del s. XVIII. Esta opción es fundamental para plantear la dinámica y transformaciones de un patrimonio municipal. El área elegida ha sido Madrid, que presentaba

---

<sup>4</sup> Citaré tan sólo dos trabajos recientes que sintetizan lo que he llamado perspectiva de historia agraria por diferencias de la que tiene su origen en la historia del derecho. MARCOS MARTÍN, S.- “Evolución de la propiedad pública municipal en Castilla la Vieja durante la Edad Moderna”, *Studia Historica. Historia Moderna*, nº 16 (1997), págs. 57-100, y MORENO FERNÁNDEZ, J. R.- “La lógica del comunal en Castilla en la Edad Moderna: avances y retrocesos de la propiedad común”, en DIOS, S. de; INFANTE, J.; ROBLEDO, R.; TORIJANO, E.- *Historia de la Propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente. II Encuentro Interdisciplinar*. Salamanca, 2002, págs. 139-177

<sup>5</sup> Un resumen de esta polémica en AGUILERA KLINK, F.- “¿La tragedia de la propiedad común o la tragedia de la malinterpretación en economía?”, *Agricultura y Sociedad*, nº 61 (1991), págs. 157-181

<sup>6</sup> OSTROM, E.- *Governing the Commons. The evolution of institutions for collective action*, Cambridge, 1990

<sup>7</sup> Un clarificador resumen de este planteamiento en GONZALEZ DE MOLINA, M.; ORTEGA SANTOS, A. y TORIJANO PEREZ, E.- “Bienes comunales desde la perspectiva medioambiental”, en DIOS, S. de; INFANTE, J.; ROBLEDO, R.; TORIJANO, E.- *Historia de la Propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente. II Encuentro Interdisciplinar*, Salamanca, 2002, págs. 493-531

dos elementos destacados para su estudio. En primer lugar, había constituido un concejo de villa y tierra relativamente extenso al sur del sistema Central durante la Edad Media. Y, como es claro, la importancia adquirida después de la capitalidad resaltaba el interés de las transformaciones posteriores del patrimonio colectivo.

La primera cuestión que aborda todo estudio del patrimonio municipal es la clasificación jurídica de estos bienes. Se distingue entre *bienes de propios*, aquellos atribuidos al ayuntamiento como entidad jurídica propia, y los *bienes comunales*, cuya atribución corresponde al común de vecinos y que mantienen su carácter de común aprovechamiento. Más discusión se plantea en el caso de los baldíos y realengos, los términos cuya titularidad no ha sido expresamente atribuida y por tanto permanecen como dominio eminente de la Corona. Sin embargo, en la práctica funcionan como unos bienes comunales más, de los que disponen los concejos y habitantes de las localidades en que se enclavan. Sólo en determinados momentos la monarquía decidió –y pudo– ejercer su derecho sobre estas tierras para proceder a su venta, pero fuera de estas ocasiones los pueblos disponían tranquilamente de su usufructo. Por tanto lo que me interesa destacar de los baldíos es su carácter comunal, pues, como demostrará el caso de Madrid, van a estar en el origen de buena parte de las tierras de los propios del ayuntamiento.

Así clasificado, lo que caracteriza al patrimonio municipal es su variación. Diversos estudios han comprobado las profundas transformaciones que experimentan los bienes colectivos desde finales de la época medieval y a lo largo de la Edad Moderna. Una dirección predomina: la *patrimonialización* o *conversión de bienes comunales en bienes de propios*, lo que significa la pérdida del usufructo colectivo y su sustitución por la explotación rentística de este patrimonio por parte del municipio. El caso de Madrid, como se comprobará es un rotundo ejemplo de esta vía de transformación patrimonial.

Sin embargo, pretendo evitar una visión teleológica de este proceso, como si fuera una senda inevitable que se debía recorrer con objetivos bien marcados. Por el contrario, el análisis a muy largo plazo permite precisar los ritmos, desiguales, de esta transformación. Y sobre todo analizar los mecanismos institucionales y sociales que determinaban su dirección. En efecto, constituye el resultado de la actuación de diversos agentes con intereses distintos y contrapuestos. En primer lugar, el municipio madrileño, controlado por la oligarquía, pero donde hay al menos cierto tiempo participación pechera que deja hacer oír sus intereses. En

segundo lugar, el Estado, que influirá por medio de la venta de baldíos, la regulación legal, la presión fiscal, y, en el caso de Madrid la creación de un importante patrimonio real que colisionará –veremos- con el municipal. Y, por último, los concejos aldeanos, representantes de las comunidades campesinas en las que el proceso de diferenciación económica y social va a crear asimismo intereses contrapuestos. De la interacción de estos tres agentes institucionales, que representan sectores sociales distintos, procederán las normas de regulación y atribución de uso del patrimonio municipal.

Los cambios a los que se ve sometido el patrimonio concejil son, por ello, mecanismos de adaptación a circunstancias cambiantes, tanto a nivel económico como social o político. De ahí la necesidad del estudio institucional que se plantea en este trabajo, ya que permite comprobar quienes ganan y quienes pierden con las mutaciones patrimoniales.

Una aclaración: esta investigación se centra en el *régimen comunal de villa y tierra*, es decir, los bienes y derechos comunales que eran compartidos por los habitantes del núcleo urbano y los de las aldeas jurisdiccionalmente dependientes; más concretamente en su gestión, sus transformaciones y sus usos agrarios. No se estudia el papel de estos bienes como recursos determinantes para las economías campesinas, que además contaban con otros patrimonios municipales exclusivos de sus propios concejos. Haber orientado el estudio por esta dirección hubiera sido, sencillamente, otro trabajo distinto.

El resultado de la patrimonialización de derechos comunales sobre parte del terrazgo por el ayuntamiento madrileño es la aparición de los *bienes de propios*, un componente de la hacienda municipal. Estudiar su composición, transformaciones, gestión y funcionalidad es el objetivo de la segunda parte. Ya no nos encontramos sólo ante patrimonio rústico, sino que aparecen también inmuebles urbanos, rentas o censos. Con todo, insistiré de manera particular en la situación de las tierras de propios, comprobando hasta que punto se producían cambios en su uso tras la anulación de los aprovechamientos comunales.

La funcionalidad de los bienes de propios era generar también servicios y rentas a los pobladores de la ciudad. Su análisis a largo plazo permite asimismo precisar el cumplimiento de sus objetivos, así como determinar los agentes y grupos que participaban en su explotación.



Para cubrir los objetivos presentados, hay disponibles una gran cantidad de fuentes documentales, primordialmente municipales, que se localizan en el Archivo de Villa de Madrid (AVM). De las diversas secciones que componen el archivo madrileño, la de Secretaría es la más importante por la cantidad de expedientes y variedad de temas tratados. Está integrada por la documentación que tramitaban los secretarios del ayuntamiento. La sección se halla clasificada en grupos, de los cuales presentan fondos de especial interés para el estudio del patrimonio municipal los siguientes: Grupo VII- Cargas municipales, Grupo XI- Empleados fuera de las oficinas centrales, Grupo XII- Fincas urbanas, Grupo XIII- Fincas rústicas, Grupo XXI- Rentas municipales, además de documentación dispersa contenida en otros grupos. En la sección de Contaduría del mismo archivo predomina la información de índole cuantitativa. Allí se encuentran las cuentas de los administradores municipales y las revisiones que realizan las diversas contadurías, junto con interesantes relaciones e informes de estas oficinas. Los expedientes en este caso son más voluminosos que en Secretaría, constituyendo auténticos legajos, si bien la calidad de su clasificación es notoriamente insuficiente. El intento de reconstrucción de la serie de las cuentas del mayordomo de propios, incompleta, ha quedado reflejado en el Apéndice.

Otros archivos tienen un papel complementario al municipal, con diversos grados de importancia. Interesante pero dispersa es la documentación que sobre los propios madrileños se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, sección de Consejos. Su aportación es relevante, pues se trata de expedientes que recogen asuntos litigiosos, recurridos ante el Consejo de Castilla, o de documentación que revela la relación institucional entre el ayuntamiento de Madrid y el máximo órgano de gobierno. Menos frecuentados pero importantes en algún caso puntual han sido el Archivo General de Palacio y, por último, el Archivo General de Simancas.

Por último, señalar que la medida de superficie es la fanega del marco de Madrid, que equivale a 0,34 Has. He decidido mantener en el texto la referencia en términos de fanegas, si bien la facilidad de su conversión a medidas actuales facilita un conocimiento exacto de la superficie citada. Por su parte, la yunta equivalía a 50 fanegas, si bien la utilización de esta medida después de la Edad Media no es muy frecuente.

## **PRIMERA PARTE**

### **EL REGIMEN COMUNAL EN LA VILLA Y TIERRA DE MADRID,**

#### **EDAD MEDIA Y EDAD MODERNA**

## **CAPITULO 1 - EL CONCEJO DE VILLA Y TIERRA EN EL MADRID MEDIEVAL**

Una herencia: la organización territorial musulmana. Un objetivo: la implantación del modelo de concejo de villa y tierra que estaba cristalizando al norte del Sistema Central. El resultado: la delimitación del término municipal madrileño, que será larga y tremendamente conflictiva. En otras palabras, el ámbito jurisdiccional (que es, en buena medida, también económico) de un concejo que integra el núcleo urbano (la Villa) con su zona rural (la Tierra). Una integración que se da en dos niveles. En primer lugar frente al exterior: otros poderes (sean nobles, eclesiásticos o municipios) que compiten por el mismo espacio. Integración asimismo hacia el interior: el concejo aglutina tanto el núcleo urbano sobre el que se asienta como el mundo rural que está dentro de los límites marcados. Una relación que dista de establecerse en un plano de igualdad y armonía; sabemos que desde su origen la ciudad (y, más exactamente, el grupo social que controla sus resortes de poder) desarrolla el sometimiento del término rural (más exactamente también, a los campesinos) con el objetivo de conseguir la extracción y concentración del excedente en sus manos. Una dependencia, en suma, feudal, que ha permitido a la historiografía más reciente definir la existencia de un auténtico "señorío urbano".

Tal es, en síntesis, lo que se podría llamar la declaración de intenciones de este capítulo inicial. Para dotarla de contenido, trataré en primer lugar el proceso de fijación de un espacio, el término concejil madrileño. Un término cuyos límites no son únicamente el resultado de una decisión de un poder superior (léase real), sino de una larga sucesión tanto de acuerdos como de conflictos con las entidades territoriales vecinas. Destacadamente, la secular pugna con el concejo de Segovia por el área serrana, más tarde conocida como el Real de Manzanares. Ni siquiera cuando este proceso concluya -allá por los albores del período bajomedieval- los límites jurisdiccionales de la Villa permanecerán estables: comenzará entonces la señorialización de parte de sus localidades, lo que mermará notablemente su extensión. Hasta que ya en el siglo XVII un nuevo proceso señorializador suponga otro golpe, esta vez casi definitivo, a la entidad del término madrileño.

Una vez conocido el elemento "exterior", el territorio, el siguiente paso consistirá en dirigir la atención hacia el "interior" que, como es sabido, integra a la Villa y la Tierra. En otras palabras, un municipio urbano dotado de jurisdicción sobre un espacio rural. Por ello me centraré en la plasmación institucional de ambas entidades: el concejo de la Villa por un lado y la Tierra

de Madrid como entidad diferenciada de la ciudad por otro, un análisis necesario para definir la relación señorial entre ambas, lo que significa precisar los elementos del dominio feudal de la ciudad sobre el campo y los intentos de defensa de éste.

Quedará así establecido el marco para el estudio de la organización del término concejil y el papel del régimen comunal en la Villa y Tierra de Madrid, objetivo del siguiente capítulo.

## 1 – QUÉ ENTENDEMOS POR CONCEJO DE VILLA Y TIERRA

El concejo de villa y tierra (o aldeas) constituye la principal forma de organización del territorio al sur del río Duero. Su nacimiento deriva de las necesidades de ocupación y defensa creadas durante el proceso de reconquista, tan diferentes de las de otras áreas de la Corona de Castilla.<sup>8</sup> Constituidos como tales a lo largo del s. XII, su evolución culminará en la Baja Edad Media con el fin de sus peculiaridades y la práctica uniformización del régimen municipal en todo el reino.

Desde mediados del s. X se fue configurando una línea fronteriza en torno al río Duero, que sólo será definitivamente superada con el nuevo empuje que la reconquista cristiana adquirirá con Alfonso VI. A partir de este momento se acelerarán los mecanismos (en parte preexistentes) que vertebrarán dos “sociedades de frontera” organizadas cada vez más para la guerra.<sup>9</sup> El concejo de villa y tierra nacerá por tanto en un contexto de militarización de la sociedad cristiana; desde su origen forma parte de la consolidación del feudalismo castellano.

---

<sup>8</sup> Uno de los pioneros en establecer una clara tipología urbana en función de los avatares del proceso de reconquista y repoblación en la Corona de Castilla es GAUTIER DALCHE, J.- *Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII)*, Madrid, 1979, págs. 67-168. Clasifica la trama de ciudades que se van constituyendo en tres grandes zonas: el tercio norte peninsular, donde predominarían los factores económicos; el espacio central, en el que lo determinante es el aspecto militar; y Andalucía y Murcia, con un nuevo tipo urbano como consecuencia de la imposición de instituciones cristianas en ciudades musulmanas. Una visión convertida ya en clásica, como demuestra, añadiendo algunas matizaciones, GARCIA DE CORTAZAR, J. A. y otros- *Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV*, Barcelona, 1985.

<sup>9</sup> La interpretación de esta aparición de la frontera del Duero como un proceso más tardío de lo que se consideraba tradicionalmente, así como de sus consecuencias sociales, en GARCIA DE CORTAZAR, J. A.- “De una sociedad de frontera (el valle del Duero en el siglo X) a una frontera entre sociedades (el valle del Tajo en el s. XII)”, en *Las sociedades de frontera en la España medieval. Sesiones de trabajo. Seminario de Historia Medieval*, Zaragoza, 1993, págs. 53-57.

Al norte del Duero dos fueron las fórmulas de organización del espacio y repoblación predominantes: la dirigida directamente por el rey o sus delegados y la colonización llevada a cabo por individuos o grupos reducidos. En cualquier caso, la estructura social arcaica de los inicios (comunidades de valle de origen gentilicio) evolucionó hacia la configuración de aldeas. Unas comunidades aldeanas que desde el s. X irán experimentando un doble proceso de jerarquización: por un lado, una diferenciación social interna, por otro, el sometimiento a otras entidades de población (desde aldeas capitales a centros militares y finalmente ciudades).<sup>10</sup> Cuando el avance territorial se acerque a la frontera del Duero la monarquía irá estableciendo un entramado de núcleos fortificados en la orilla derecha del río, al frente de los cuales se colocarían delegados regios, a los que se subordinarán otros enclaves militares menores (castros, torres). En torno a estos centros defensivos (que con el tiempo irán adquiriendo en numerosos casos vida urbana) se fue constituyendo el *alfoz* o territorio dependiente, que tenía en estos primeros momentos un claro carácter de circunscripción o territorio militar: el conjunto de comunidades aldeanas sometidas a una serie de prestaciones bélicas articuladas por las urbes fortificadas. Un modelo de organización espacial que, sin embargo, estaba lejos de aplicarse homogéneamente en todo el reino.<sup>11</sup>

Desde comienzos del s. XI la relación de fuerzas entre cristianos y musulmanes cambiará radicalmente. La desarticulación del califato cordobés y su sustitución por los reinos de taifas resultaría decisiva, pero también lo fue la progresiva feudalización de la sociedad cristiana, cada vez más articulada por y para la guerra.<sup>12</sup> Tras un período de transición en el que el cobro de parias reflejaría tanto la superioridad militar castellano leonesa como su incapacidad para asimilar y poblar amplios espacios, con el reinado de Alfonso VI tendría lugar una rápida expansión territorial que trasladaría la frontera hasta el río Tajo. La amplitud

---

<sup>10</sup> De nuevo cabe citar los trabajos de J. A. García de Cortázar, así como de sus discípulos. Por su carácter de síntesis, pueden seleccionarse GARCÍA DE CORTAZAR, J. A.- “Del Cantábrico al Duero”, en GARCÍA DE CORTAZAR, J. A. y otros- *Organización social del espacio en la España medieval*, págs. 43-83 y “Sociedad castellana y organización del espacio en los siglos IX a XI: de la dispersión a la definición de los usos económicos del espacio”, en SEGURA GRAÍÑO, C., edit.- *Orígenes históricos de la actual Comunidad Autónoma de Madrid. La organización social del espacio en la Edad Media. I*, Madrid, 1995, págs. 11-39.

<sup>11</sup> ESTEPA DIEZ, C.-“El alfoz castellano en los siglos IX al XII”, *En la España Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez. Tomo I*, Madrid, 1984, págs. 305-341. La evolución posterior de esta organización territorial hacia el concejo de villa y tierra castellano en ESTEPA DIEZ, C.- “El alfoz y las relaciones campo-ciudad en Castilla y León durante los siglos XII y XIII”, *Studia Historica. Historia Medieval*, t. II (1984), págs. 7-26. También, ALVAREZ BORGE, I.- *Monarquía feudal y organización territorial. Alfoces y merindades en Castilla (siglos X-XIV)*, Madrid, 1993.

y celeridad de la conquista provocó la definición de nuevas formas de organización social del espacio.<sup>13</sup>

La conquista de Toledo en 1085 representa la culminación de la hegemonía cristiana. Al incorporar el reino taifa toledano no sólo se ganaba un nuevo y extenso territorio, sino que también se aseguraba el comprendido entre el río Duero y el Sistema Central. El asentamiento casi simultáneo a finales del s. XI entre el Duero y el Tajo es lo que dota a esta región de una clara unidad histórica, representada por instituciones similares, más que la similitud geográfica.<sup>14</sup> La reacción norteafricana (almorávide primero y almohade después), sin embargo, marcó un diferente ritmo evolutivo durante el s. XII. Si el área al norte de la Sierra (que recibiría la denominación de Extremadura castellana) quedaba definitivamente controlado y desarrollaba en plenitud las nuevas fórmulas organizativas, en cambio la Transierra, como se conocería a la antigua taifa, se convertirá en una región de frontera, lo que retrasaría su desarrollo institucional, con consecuencias que tendremos ocasión de analizar en el caso de Madrid.

La ocupación de la Extremadura castellana en el entorno del Duero, que se desarrolla lentamente desde comienzos del s. XI, se enfrenta al reto de asegurar el poblamiento y la organización de un espacio poco poblado y fronterizo. Por ello los asentamientos iniciales se desarrollaron en torno a los castros o centros fortificados, además de establecer condiciones más favorables que permitieran atraer población. Posiblemente en un primer momento la organización administrativa aplicada fuera la misma que se consolidaba más al norte: los *alfoces* como distritos militares dependientes de las fortalezas, que estarían gobernadas por el *palatium*, conjunto de cargos de gobierno local nombrados y responsables directamente ante el rey.<sup>15</sup> A su frente se encontraba el *dominus villae*, dotado de amplias atribuciones administrativas, judiciales o militares, asistido por un conjunto de oficiales y agentes.

---

<sup>12</sup> Las principales líneas de esta evolución aparecen sintetizadas en IRADIEL, P.; MORETA, S. y SARASA, E.- *Historia medieval de la España cristiana*, Madrid, 1989, págs. 66-81.

<sup>13</sup> Una organización del espacio que se enmarca en la imposición de una sociedad feudal completamente nueva que llevan a cabo los conquistadores. Angel Barrios afirma que “la sociedad feudal extremadurana no puede interpretarse como el resultado final de ninguna transformación o integración de elementos económicos y sociales preexistentes en la zona”. BARRIOS GARCIA, A.- “Repoblación y feudalismo en las Extremaduras”, en *En torno al feudalismo hispánico. I Congreso de Estudios Medievales*, Avila, 1989, p. 424.

<sup>14</sup> Como resalta PORTELA, E.- “Del Duero al Tajo”, en GARCIA DE CORTAZAR, J. A.- *La organización social del espacio en la España medieval*, p.86.

<sup>15</sup> Según argumenta MARTINEZ LLORENTE, F. J.- *Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval. Las Comunidades de Villa y Tierra (S: X-XIV)*, Valladolid, 1990, págs. 77-80.

Paralelamente se fue consolidando y adquiriendo cada vez más importancia en estos centros de población otra institución, el *concilium*, que en sus inicios era la asamblea de vecinos que se reunía periódicamente para regular distintos aspectos de interés común. Heredero de fórmulas asociativas anteriores, el *concilium* estaba presente tanto en las comunidades aldeanas como protourbanas del norte. Sin embargo, fue en los núcleos urbanos de Extremadura donde alcanzaría su pleno desarrollo y madurez institucional. Sus primeras funciones se centraban en la regulación de la actividad económica y en la defensa de los intereses comunitarios, pero en definitiva no tenía reconocida aún una personalidad jurídico-pública ni constituía un aparato de poder. Progresivamente su ámbito competencial se fue extendiendo, así como su capacidad para nombrar determinados cargos u oficiales, lo que de hecho representaba una paralela disminución de las atribuciones del *palatium*.<sup>16</sup> Desde el s. XII, con importantes disparidades cronológicas según las áreas y ciudades, el concejo se fue convirtiendo en un órgano de administración y gobierno. Desde un punto de vista institucional, nacía así el municipio plenamente consolidado,<sup>17</sup> que en el espacio comprendido entre el Duero y el Tajo asumirá la forma de *concejo de villa y tierra*.

Los primeros pasos de este proceso se remontan al reinado de Alfonso VI, momento en que las necesidades de asentar población y organizar la defensa del territorio conquistado se traducen en la concesión de una amplia autonomía organizativa a los concejos recogida en los textos forales. El caso de Sepúlveda resulta paradigmático. La concesión de su Fuero en 1076 revela la existencia de una población previamente asentada que ha ido desarrollando sus propias normas de organización colectiva. En el texto se articula “el esquema básico de la organización institucional de los concejos de frontera: una autoridad exterior, el *dominus villae*, *senior* o *tenente*; unos oficios locales: un juez local, varios alcaldes y oficiales subalternos, aún escasos, todos ellos de la villa y escogidos o sorteados anualmente por los habitantes de las collaciones; además, estará el *concilium* entendido específicamente como instancia asamblearia de la comunidad”.<sup>18</sup> Y junto a la configuración del concejo urbano, el

---

<sup>16</sup> GAUTIER DALCHE, J.- *Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media*, págs. 343-359.

<sup>17</sup> Así lo resume un reconocido institucionalista: “Expresión de la comunidad local fue en los Estados de la Reconquista la comunidad de vecinos, que entendía en la regulación de la vida de la localidad por medio de la asamblea vecinal, del Concilium o Concejo, término romance este último que se hizo sinónimo de Municipio cuando la comunidad local se constituyó como una entidad jurídico pública investida de jurisdicción y dotada de mayor o menor autonomía de gobierno”. GARCIA DE VALDEAVELLANO, L.- *Curso de Historia de las Instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media*, Madrid, 1982. p. 583 (1ª edic.: 1968).

fueiro recogía una de sus atribuciones más destacadas: la de organizar un amplio territorio en que se asentaban aldeas ya establecidas, cuya dependencia de la ciudad quedaba ya claramente especificada.<sup>19</sup> El nuevo concejo que aparece en la frontera es, pues, también una nueva forma de organizar socialmente el espacio.

Será en la primera mitad del s. XII, durante el reinado de Alfonso VII, cuando tenga lugar la consolidación de este régimen concejil en la Extremadura. Las necesidades de la guerra, sin olvidar el período de inestabilidad política en el reino, obligarán a reforzar el papel militar de las ciudades, que formarán milicias concejiles en las que se encuadra la caballería popular. El resultado es la generalización de los concejos urbanos como fórmula básica de organización político-administrativa del territorio. La plasmación legal tiene lugar por medio de la concesión regia de *fueros* o *Privilegios Forales Fundacionales*,<sup>20</sup> por los que la monarquía reconocía y organizaba la nueva realidad concejil.

Dos son los componentes básicos de la institución concejil que está naciendo en la frontera castellanoleonesa del s. XII. Por un lado, la autonomía política que quedaba garantizada por medio del *pacto foral* y que tenía como contrapartida la asunción de funciones de gobierno en su ámbito territorial, lo que se traduce en la existencia de un personal de gobierno y administración local, los *oficiales* concejiles. Aún cuando pervivan los *dominus villae* como representantes del poder monárquico, sus atribuciones serán cada vez más honoríficas hasta desaparecer totalmente. Si bien esta autonomía política del concejo era limitada pues estaba supeditada al poder del monarca, que mantenía la capacidad de intervenir y decidir en los asuntos de gobierno local, suponía que el concejo se convertía en un aparato de poder, subordinado pero poder al fin y al cabo, reflejando la fragmentación de la soberanía tan característica del feudalismo,<sup>21</sup> así como la incapacidad de la nobleza, ya tan importante al norte del Duero, para asumir la tarea de ocupar y organizar el espacio conquistado.

---

<sup>18</sup> MONSALVO ANTÓN, J. M.- “Transformaciones sociales y relaciones de poder en los concejos de frontera, siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante las instituciones municipales”, en PASTOR, R.- *Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna*, Madrid, 1990, p. 117.

<sup>19</sup> Vid. el análisis que del Fuero de Sepúlveda como institucionalización de la vida de frontera hace VILLAR GARCIA, L. M.- *La Extremadura castellano-leonesa. Guerreros, clérigos y campesinos (711-1252)*, Valladolid, 1986, págs. 84-87.

<sup>20</sup> La expresión es de MARTINEZ LLORENTE, F. J.- *Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval*, p. 128. Afirma que estos privilegios, que debieron existir en todos los casos aunque no se hayan conservado, reflejan “una política general desarrollada por Alfonso VII durante su reinado, en orden a la ordenación territorial del Estado, y en particular de la Extremadura o tierra de frontera”, p. 129.



Un segundo componente es el ámbito territorial sobre el que ejercer sus funciones de gobierno, esto es, su jurisdicción, que desde sus orígenes se extiende tanto al entorno urbano (o protourbano) como al rural, un espacio que pasa a estar regido por los oficiales y la normativa del concejo. Ya en el caso pionero de Sepúlveda el fuero dejaba claro el sometimiento de un territorio y de las aldeas que lo poblaban al órgano de gobierno de la villa. Sobre el procedimiento de adjudicación del término, F. J. Martínez Llorente distingue “entre dos tipos de Comunidades de tierra de frontera: aquellas cuya tierra, junto con las villas y aldeas que la integran necesita ser objeto de una donación regia al concejo cabeza de alfoz para entrar en posesión de términos, hasta el momento autónomos; y aquellas otras en las que el rey, de modo originario, les ha concedido el dominio absoluto sobre un extenso territorio, en su mayoría aún sin ocupar, yermo, escaso de población y de contornos imprecisos, a fin de que ejercieran sobre el mismo competencias principalmente de señorío, reservados tradicionalmente al monarca o a sus delegados”.<sup>22</sup> Independientemente de su proceso de constitución, la evolución posterior resultará similar en ambos casos. Este término concejil o espacio jurisdiccional en el ámbito rural recibirá tempranamente la denominación de *alfoz*, por extensión de los anteriores distritos militares o de la ciudad,<sup>23</sup> si bien su uso se centrará destacadamente en el espacio extremadurano, mientras que se irá extendiendo cada vez más el vocablo *tierra* para designar esta misma realidad.<sup>24</sup> Un conjunto de concejos llenó así el espacio comprendido entre el Duero y el Sistema Central. La superficie de sus términos presenta un panorama tremendamente variado: junto a los que apenas abarcaban un pequeño grupo de aldeas, las grandes ciudades de la Extremadura, como Avila, Segovia o Soria, se

---

<sup>21</sup> El concejo medieval como aparato o instancia de poder político integral en el feudalismo ha sido analizado en los trabajos de J. M. Monsalvo Antón. Destacar MONSALVO ANTÓN, J. M.- “Poder político y aparatos de estado en la Castilla bajomedieval. Consideraciones sobre su problemática”, *Studia Historica. Historia Medieval*, t. IV (1986), págs. 100-167; *El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra*, Salamanca, 1988 y “Transformaciones sociales y relaciones de poder en los concejos de frontera...”.

<sup>22</sup> MARTINEZ LLORENTE, F. J.- *Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval*, p.151. Sobre la utilización del término Comunidad, las matizaciones que hago más adelante.

<sup>23</sup> “El alfoz de Castilla y León durante los siglos XII y XIII representa el ámbito de actuación jurisdiccional de un centro de población, significando así la presencia de aldeas, villas o concejos dependientes de la entidad principal”. ESTEPA DIEZ, C.- “El alfoz y las relaciones campo-ciudad en Castilla y León durante los siglos XII y XIII”, p. 13.

<sup>24</sup> En la documentación medieval madrileña predomina absolutamente la palabra *tierra*, por lo que será la que utilice en adelante.

extendían sobre una amplia extensión (que, en ciertos casos ampliaron al sur de la cordillera) y un gran número de aldeas.<sup>25</sup>

La evolución posterior de los *concejos de villa y tierra* será objeto de análisis al estudiar el caso de Madrid, pero conviene apuntar las líneas más destacadas, relacionando los aspectos estrictamente institucionales con la evolución económica y social en la que se enmarca.<sup>26</sup> En la etapa de formación o constitución concejil que hemos analizado hasta ahora, se había constituido una sociedad de frontera derivada de las necesidades militares: una sociedad relativamente abierta, con escaso desarrollo de las estructuras jerárquicas (aunque no totalmente igualitaria), sin grandes diferencias jurídicas y con procesos de movilidad en torno a la constitución de una caballería popular o villana, que adquirirá gran relevancia bélica. Las bases económicas, derivadas de la escasez de población en relación a la abundancia de tierra, se centraban en la obtención de *botín de guerra*,<sup>27</sup> pero también en la consolidación de explotaciones agropecuarias de tipo familiar, imprescindibles para garantizar la movilización de la caballería para la guerra.

Pero a partir de la segunda mitad del XII y culminando en el s. XIII, tuvo lugar la progresiva superación de esta economía y sociedad de frontera, lo que traería notables consecuencias en el marco institucional. El alejamiento de la frontera y de los botines consiguientes supuso una reorientación económica de los caballeros hacia la ganadería y la explotación agraria dentro del término. La acumulación de propiedades y ganado, junto con la concesión de privilegios legales por los monarcas y el proceso de control de los mecanismos de poder local, determinaron que la caballería villana fuera cristalizando como clase

---

<sup>25</sup> MARTINEZ DIEZ, G.- *Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana (Estudio Histórico-Geográfico)*, Madrid, 1983, reúne un total de 49, si bien el estudio presenta un carácter diacrónico, ya que aparecen todos los concejos que existieron en un momento dado.

<sup>26</sup> Recogida en una amplia bibliografía que ha tenido su epicentro en las investigaciones de los medievalistas castellanoleoneses (y con frecuencia desde sus propios centros universitarios). Además de la bibliografía citada hasta ahora de autores como Barrios García, Estepa Díez, Gautier Dalché, Martínez Llorente, Monsalvo Antón, Portela o Villar García, se pueden seleccionar como trabajos generales (dejando al margen los numerosos análisis de ciudades concretas): ASTARITA, C.- “Estudio sobre el concejo medieval de la Extremadura castellano leonesa: Una propuesta para resolver la problemática”, *Hispania*, t. XLII, nº 151 (1982), págs. 355-413; MINGUEZ FERNÁNDEZ, J. M.- “Feudalismo y concejos. Aproximación metodológica al análisis de las relaciones sociales en los concejos castellano-leoneses”, *En la España Medieval. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó, t. II*, Madrid, 1982, págs. 109-122; el mismo- “La transformación social de las ciudades y las Cortes de Castilla y León”, en *Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media. Tomo II*, Valladolid, 1988, págs. 15-43; y las distintas aportaciones de *Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales*, Avila, 1990.

dominante, convirtiéndose en una auténtica *oligarquía urbana* que controlará los mecanismos de poder concejil. En este sentido el reinado de Alfonso X resultó determinante y sus consecuencias se harán bien patentes durante todo el período bajomedieval.

Por otro lado, la institución concejil experimentó desde el reinado de Fernando III una política, que no haría sino acrecentarse, de intervención del poder central que fue tendiendo a equiparar y uniformizar el régimen municipal por todo el reino. Pero la autonomía municipal no estaba seriamente en cuestión. Por el contrario, ahora se irán desarrollando, con el apoyo decidido de los monarcas, un mayor grado de control de los concejos sobre sus términos jurisdiccionales, los *alfoces* o *tierra*. La relativa lasitud previa de la intervención urbana en las aldeas dependientes dará paso a lo largo del s. XIII a la consolidación de los concejos como auténticos *señoríos colectivos*.

El concepto de *señorío concejil* para describir las relaciones de dominio de esta institución sobre el campo ha sido desarrollado por un nutrido grupo de medievalistas durante las últimas décadas. Especial relevancia han tenido en su nacimiento las investigaciones centradas en el ámbito castellano leonés, a partir del cual se han ido aplicando a otros territorios. Aún cuando se pueden encontrar algunos antecedentes,<sup>28</sup> es en la década de 1980 cuando el concepto de señorío urbano empieza a aplicarse más sistemáticamente en estudios sobre los grandes concejos de las Extremaduras, especialmente en los referidos al período bajomedieval. Así, al presentar un “estado de la cuestión” sobre la historia urbana en Castilla y León en 1982, el profesor Estepa hacía referencia al señorío colectivo de las ciudades, recogiendo algo que ya estaba consolidándose entre los medievalistas de esta región.<sup>29</sup> Pronto una eclosión de trabajos contribuyó a dar categoría historiográfica a los señoríos urbanos.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Una exposición ya clásica en MACKAY, A.- *La España de la Edad Media. Desde la frontera hasta el Imperio (100-1500)*, Madrid, 1981.

<sup>28</sup> Resulta destacable por su anticipación CARLE, M<sup>a</sup> del C.- “La ciudad y su contorno en León y Castilla (siglos X-XIII)”, *Anuario de Estudios Medievales*, t. 8 (1972-71), págs. 69-103. Tras analizar las relaciones jurídicas entre la ciudad y su término afirma de forma concluyente: “la relación de la villa con sus aldeas era de tipo señorial, y su símbolo material más visible, la seña y el sello de la ciudad de uso obligatorio para las aldeas, a las que se prohibía tenerlos propios”, p.95.

<sup>29</sup> ESTEPA DIEZ, C.- “Estado actual de los estudios sobre las ciudades medievales castellano-leonesas”, en *Historia Medieval: cuestiones de metodología*, Valladolid, 1982, págs. 27-81. Sin embargo, este término no era objeto de particular atención, algo que el propio Estepa haría en trabajos posteriores citados en n. 4.

<sup>30</sup> La bibliografía de ámbito más general viene siendo citada en las notas precedentes. Por eso me limitaré a reseñar trabajos monográficos sobre concejos concretos: MORETA, S. y VACA, A.- “Los concejos urbanos núcleos de señoríos corporativos conflictivos. Aproximación a las relaciones entre oligarquía urbana y campesinos en Zamora y su tierra, siglo XV”, *Agricultura y Sociedad*, nº 23 (1982), págs. 343-385, donde se

De esta primera fase centrada en recopilar distintos casos se pasó a comienzos de los años 90 a una segunda en la que se intentó sistematizar los elementos que componían el señorío concejil, mientras se profundizaba en la base social de los órganos de poder concejil y en la articulación de este señorío con el poder real.<sup>31</sup> Y después de la consolidación de un concepto, la difusión y generalización: el carácter señorial de los concejos medievales ha pasado a ser aceptado comúnmente en los trabajos posteriores (a veces un tanto acríticamente). Ya no se discute por lo general su existencia o aplicabilidad, sino que se ha convertido en punto de partida de la investigación; ha adquirido por tanto categoría de concepto historiográfico.<sup>32</sup> Claro que siempre hay opiniones contrarias: si se niega en definitiva el concepto de feudalismo para explicar un período histórico, se negará asimismo el de señorío urbano inmerso en las relaciones feudales, como hacen determinados historiadores de influencia institucionalista.<sup>33</sup>

---

editan y analizan las Ordenanzas rurales bajomedievales; BARRIOS GARCIA, A.- *Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Avila (1085-1320)*, 2 vols., Salamanca, 1983-1984; MARTINEZ MORO, J.- *La Tierra en la Comunidad de Segovia. Un proyecto señorial urbano (1088-1500)*, Valladolid, 1985; SANTAMARÍA LANCHO, M.- “Del concejo y su término a la Comunidad de Ciudad y Tierra: surgimiento y transformación del señorío urbano de Segovia (siglos XIII-XVI)”, *Studia Historica. Historia Medieval*, t. III (1985), págs. 83-116; ASENJO GONZALEZ, M.- *Segovia. La ciudad y su tierra a fines del medievo*, Segovia, 1986. Por su parte, la publicación en 1988 del estudio de J. A. Bonachía sobre Burgos supuso ampliar por primera vez el ámbito geográfico de aplicación más allá de la Extremadura originaria: BONACHIA, J. A.- *El señorío de Burgos durante la Baja Edad Media (1255-1508)*, Valladolid, 1988.

<sup>31</sup> En este sentido representan un hito historiográfico los trabajos recogidos en *Concejo y ciudades en la Edad Media hispánica*, de tanta influencia posterior. Por su carácter de síntesis del tema que nos ocupa, resaltar BONACHIA HERNANDO, J. A.- “El concejo como señorío (Castilla, siglos XIII-XV)”, págs. 429-463; ESTEPA DIEZ, C.- “El realengo y el señorío jurisdiccional concejil en Castilla y León (siglos XII-XV)”, págs. 465-506 y MONSALVO ANTÓN, J. M.- “La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la época del Regimiento medieval. La distribución social del poder”, págs. 357-413, además de los debates que se produjeron y que están recogidos en la obra. Panorama que se puede completar con una interesante comparación del caso castellano con el alemán en DIAGO HERNANDO, M.- “Los señoríos territoriales de las ciudades europeas bajomedievales. Análisis comparativo de los ejemplos castellano y alemán”, *Hispania*, t. LIV-3, nº 188 (1994), págs. 791-844. Y, a un nivel más general, MACKAY, A.- “Campo y ciudad en la Europa medieval”, *Studia Storica. Historia Medieval*, t. II (1984), págs. 27-53.

<sup>32</sup> En el estudio del carácter señorial de los concejos predominó (aunque no fuera la única) desde sus inicios una clara orientación marxista, que tenía un doble objetivo: aplicar en España el concepto de formación social feudal y superar la visión tradicional (de tanta raigambre también en el marxismo) de la ciudad como ámbito desligado completamente del feudalismo. Pero ha terminado por ser aceptado y aplicado por otras corrientes historiográficas, incorporando matizaciones sobre el carácter incompleto de este señorío por su dependencia del monarca en última instancia o sobre la diversidad de situaciones concretas que se presentan en los diversos concejos. Un ejemplo: “El señorío colectivo concejil no deja por tanto de ser más que un señorío imperfecto”, MARTINEZ LLORENTE, F. J.- *Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval*, p. 320.

<sup>33</sup> Es el caso de C. Losa Contreras que afirma que la consideración del concejo como señorío es “un grave error de concepto, al presentar al concejo castellano inserto en las “relaciones de producción del mundo feudal”. Lo único que reconoce es algo tan inconcreto como que los concejos estaban “influenciados por las formas de gobierno “señorializantes” que presiden la vida de la Castilla de estos siglos, hecho que no debe llevarnos a simplificar, denominando como señoríos a esos concejos”. LOSA CONTRERAS, C.- *El Concejo de Madrid en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna*, Madrid, 1999, p. 118.

Así pues, los concejos castellanos fueron configurándose a lo largo del s. XIII como señoríos corporativos, es decir, ejercidos por un colectivo de personas, concretamente la caballería villana que se convierte en oligarquía urbana y tiende a integrarse en la baja nobleza, sobre las aldeas y sus habitantes que formaban parte de la tierra o alfoz concejil. El ejercicio de esa dominación feudal por el concejo se concreta en una serie de atribuciones que, siguiendo el esquema planteado por J. A. Bonachía, serían de tres tipos: jurisdiccionales, económicas y fiscales. La *potestad jurisdiccional* deriva de la subordinación jurídico-administrativa de las aldeas (que cuentan con sus propios concejos) en relación al concejo urbano, lo que se traduce en la capacidad de que éste dispone para nombrar cargos y oficiales aldeanos, establecer normativas u ordenanzas que regulan determinados aspectos de la vida rural y, finalmente, la administración de justicia (aunque los concejos aldeanos terminen por conseguir una cierta capacidad en este sentido). Por su parte, las *atribuciones económicas* se centran en primer lugar en el control de la propiedad del recurso económico fundamental, la tierra. Un control que se manifiesta en la disposición del patrimonio comunal, la organización del terrazgo de cada localidad (normas sobre roturaciones, concesión de dehesas y pastos o cesión de solares) y la organización por medio de ordenanzas de las explotaciones agropecuarias dentro del término jurisdiccional, actuación que tiene como objetivo básico la defensa de los intereses económicos de la oligarquía concejil. La regulación de la actividad comercial, centrada principalmente en el control del abastecimiento urbano y del mercado local sería una segunda gran función económica. Y en tercer término, las *atribuciones fiscales*, que se ejercen en varios niveles: la percepción de una serie de rentas y derechos propios del concejo (procedentes de tributos de carácter señorial y de los bienes de propios); la función de encuadrar la participación fiscal de la *tierra* en la contribución concejil a la Hacienda Real, y, por último, el conjunto de las cargas que el concejo urbano impone a la población rural en forma de sisas o repartimientos para contribuir a los gastos del aparato de poder urbano.<sup>34</sup>

Este concejo de villa y tierra estructurado en el s. XIII, va a experimentar en el período bajomedieval una doble línea evolutiva: por un lado se reforzarán algunos de sus

---

<sup>34</sup> BONACHIA HERNANDO, J. A.- “El concejo como señorío”, págs. 447-461. De interés sus conclusiones sobre la finalidad del señorío feudal: “la apropiación del excedente campesino por el Concejo ha de entenderse, no tanto, aunque sea un elemento clave, como un medio de obtención individual de ingresos, cuanto, fundamentalmente, como la concreción extractiva de una dominación feudal colectiva sobre las aldeas y hombres dependientes, exacción que, además, genera unos recursos –mayores o menores según los casos- que

rasgos más sobresalientes, como son su carácter señorial y, estrechamente vinculado, la concentración del poder local en manos de una oligarquía de contornos cada vez más precisos. Por otro, elementos novedosos (por su impacto, ya que estaban claramente presentes con anterioridad), como son la creciente intervención real en el gobierno urbano (por medio del Regimiento primero y sobre todo el envío de delegados regios que culminará en la figura del Corregidor después), y la progresiva contestación de los pecheros, el grupo dominado, al ejercicio del poder en el seno del concejo urbano, una repuesta cada vez más articulada institucionalmente y que tendrá importantes consecuencias en la evolución del régimen municipal.

Y, por último, antes de pasar a centrarme en el caso madrileño, una cuestión que formalmente es simplemente terminológica, pero que en el fondo no deja de ser conceptual. He venido utilizando hasta ahora, y lo seguiré haciendo en adelante, el término *concejo de villa y tierra*, pero en la bibliografía citada ha aparecido con frecuencia el de *comunidad de villa y tierra* para designar la misma realidad institucional.<sup>35</sup> En realidad, el término de Comunidad de Villa y Tierra se consolidó en la legislación liberal del s. XIX para designar a algo bien distinto del concejo medieval: las instituciones que disponían y regulaban todavía en ese período un amplio patrimonio comunal en el que participaban tanto el municipio urbano como los municipios rurales.<sup>36</sup> Estas Comunidades (o Asocio o Universidades) se situaban mayoritariamente en lo que había sido la Extremadura castellano leonesa medieval y muy secundariamente al Sur del Sistema Central. Como tales fueron apareciendo en el período

---

coadyuvan a sostener el aparato político que controla el patriciado urbano como instrumento de consolidación y reproducción de su dominio de clase”, p.461.

<sup>35</sup> Como ejemplos más significativos por tratarse de obras generales se pueden seleccionar MARTINEZ DIEZ, G.- *Las Comunidades de Villa y Tierra*; mantiene el mismo punto de vista en “Estructura administrativa local en el naciente Reino de Toledo”, en *Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes*, Toledo, 1988, págs. 43-162; y MARTINEZ LLORENTE, F. J.- *Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval*, en los que Comunidad es estrictamente sinónimo de Concejo. Incluso el segundo autor se plantea la necesidad de justificar la utilización de este término, reconociendo que “tras un pormenorizado análisis de la documentación medieval y moderna referente a los concejos extremeños, en ningún momento hemos apreciado el que se llegara a denominar a los mismos con un apelativo diferente al de *Concejo de villa e aldeas* o *Concejo de villa e tierra*. Únicamente desde los primeros años del siglo XIX comenzarán a ser calificados, ya de un modo sistemático, con el curioso sustantivo *Comunidad de Villa y Tierra*” (p. 118), a pesar de lo cual mantiene “la utilización de la expresión *Comunidad de Villa y Tierra* a fin de designar aquellos concejos de Villa y Tierra o aldeas que afloraron a lo largo de la Extremadura castellana y buena parte del territorio del Reino de Toledo” (p. 127). En numerosos estudios monográficos se mantiene la indistinción: CORRAL GARCIA, E.- *Las Comunidades Castellanas y la Villa y Tierra antigua de Cuellar*, Salamanca, 1978 y LUIS LOPEZ, C.- *La Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahita en el tránsito de la Edad Media a la Moderna*, Avila, 1987.

<sup>36</sup> Los avatares jurídicos de estas instituciones desde el s. XIX están estudiados en NIETO, A.- *Bienes comunales*, Madrid, 1964, págs. 323-348.

bajomedieval y comienzos de la Edad Moderna y en un área geográfica concreta. No se trata por tanto de un proceso general, sino que responde a una serie de circunstancias históricas, que serán analizadas al estudiar la evolución de la Tierra de Madrid durante esta compleja época.

## 2 – CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DE LA TRANSIERRA

La toma de Toledo en el año 1085 significó la conquista cristiana de un extenso territorio perteneciente al antiguo reino taifa que se extendía entre el Sistema Central y los Montes de Toledo. Junto a la capital, Alfonso VI controló un amplio conjunto de núcleos urbanos o castillos y sus respectivos términos: Talavera, Santa Olalla, Maqueda, Alamín, Olmos, Madrid, Talamanca, Uceda, Guadalajara, Alcalá, Hita, Riba de Santiuste, Consuegra y Mora.<sup>37</sup> Cronológicamente, por tanto, la ocupación de lo que será conocido como la Transierra o el Reino de Toledo<sup>38</sup> se produce de forma coetánea al control de la Extremadura castellana, pero las circunstancias de su evolución van a resultar muy distintas, lo que se reflejará en disparidad de los ritmos de su articulación del espacio.

En efecto, la dura reacción almorávide, provocada por el impacto emocional y político que la caída de Toledo tuvo entre los musulmanes, se traduce en la invasión de una parte considerable del territorio conquistado. Sin embargo, las murallas o ciudadelas de los núcleos de población más destacados, como la propia Toledo, Madrid, Talavera, Maqueda, o Guadalajara, resistirán eficazmente los ataques, si bien Alcalá terminó siendo ocupado por los musulmanes. Se convertirán así en una avanzadilla defensiva sometida a razzias continuas. El principal efecto de esta resistencia se dejará sentir en primer lugar al norte de la Cordillera, que quedará protegida eficazmente de las campañas almorávides, lo que posibilitó la

---

<sup>37</sup> La lista aparece en una obra fundamental sobre este tema, GONZALEZ, J.- *Repoblación de Castilla la Nueva, Tomo I*, Madrid, 1975, págs. 82-83, que resalta la falta de noticias en las fuentes sobre cómo se llevó a cabo esta incorporación.

<sup>38</sup> “En época medieval (siglos XII y XIII) se conocía a este espacio como *Tras la Sierra, Allén la Sierra* o *Reino de Toledo*. Siendo éste último nombre el más empleado...No obstante, en el transcurso de los siglos, y también como una forma de percepción del espacio, se fue acuñando la expresión de *Castilla la Nueva como sinónima del Reino de Toledo*”, GARCIA FERNÁNDEZ, J.- *Castilla. (Entre la percepción del espacio y la tradición erudita)*, Madrid, 1985, p. 69.

consolidación y desarrollo de los concejos que se estaban constituyendo en los enclaves protourbanos. Pero además actualizará el papel defensivo de estos concejos, que se articulará cada vez más eficazmente en las milicias que encuadran a la caballería villana y los peones del concejo; aliados fieles del monarca en unos momentos difíciles, su intervención en la defensa del reino reforzará el pacto foral que garantiza la autonomía municipal.

Con el reinado de Alfonso VII se recupera la iniciativa militar, gracias a la decadencia almorávide. La frontera se va alejando: en 1139 la toma del castillo de Oreja, de gran importancia estratégica, aseguraba el control de la cuenca del Tajo, mientras poco después la conquista de Calatrava extendía este dominio al valle del Guadiana, lo que parecía asegurar definitivamente la Transierra tras más de medio siglo de campañas permanentes. Una nueva reacción procedente del norte de Africa demostró la fragilidad de la situación: tras la batalla de Alarcos a finales del s. XII se suceden las expediciones de los almohades por el Reino de Toledo, que recupera así un carácter fronterizo que sólo tras la victoria de Las Navas perderá definitivamente.<sup>39</sup>

La organización de la Transierra comparte los rasgos esenciales de la Extremadura castellana: un mismo sistema social “fronterizo” en un primer momento y, en el aspecto institucional, el marco jurídico foral y el concejo de villa y tierra. También existen ciertas particularidades de este territorio respecto al norte; se han mencionado habitualmente tres: una tradición de urbanización militar procedente de la época musulmana, un menor número de aldeas y un mayor volumen de población.<sup>40</sup> No se ha insistido lo suficiente, en cambio, en otro que considero va a tener relevancia en la articulación espacial: la presión expansiva de los concejos del norte. Todo ello en el contexto de guerra prolongada, lo que supone un lógico retraso en la consolidación institucional.

La herencia musulmana se hacía patente en una densa red de núcleos fortificados que habían integrado la marca media, la frontera del reino toledano frente a la amenaza cristiana. Centrada en el control de los grandes ejes de comunicación (ríos principalmente), los centros se pueden clasificar en cuatro tipos: núcleos urbanos fortificados con importancia demográfica y administrativa, que contaban con un gobernador directamente por el poder central; enclaves amurallados de tamaño medio; pequeñas fortalezas o castillos sin relevancia poblacional y, finalmente, las atalayas o torres de vigilancia. Estos cuatro niveles de centros estratégicos

---

<sup>39</sup> La referencia obligada para este tema es GONZALEZ, J.- *Repoblación de Castilla la Nueva*, Tomo I.



estaban articulados jerárquicamente, formando así una completa retícula que aseguraba una efectiva ocupación del espacio y garantizaba las necesidades de protección del territorio.<sup>41</sup> Los dos primeros tipos de enclaves citados son los que van a constituirse en concejos tras la conquista cristiana, un proceso que se va a retrasar por las circunstancias de frontera que mantiene la Transierra.

La capital, Toledo, presenta un carácter excepcional. Primera gran ciudad musulmana conquistada por los cristianos, su organización muestra numerosas singularidades institucionales. Para empezar, la integración de grupos étnicos y religiosos amplios, a los que se reconocerá ordenamiento foral propio. Siguiendo con el gobierno urbano: el papel central corresponde a un *dominus villae* de funciones esencialmente militares, asistido por un grupo de jefes (*alacaides*) cuyas competencias se extendían por todo el territorio de la Transierra e incluso la Extremadura. “En este cuadro de las instituciones, un ausente: el concilium. Aparece tarde y no parece haber desempeñado un papel determinante”.<sup>42</sup> Lo mismo sucedería con el alfoz, muy tardíamente delimitado, sin duda por las urgencias de las necesidades defensivas.

También en el resto de los núcleos de la Trasierra se aprecia un cierto período de adaptación que se extenderá por la primera mitad del s. XII, en el que una estructura jerárquica de los centros de población en torno a la capital fue sustituido por un régimen concejil más descentralizado.<sup>43</sup> La documentación eclesiástica relativa al establecimiento de los límites del arzobispado toledano utiliza el término *oppida* para designar una serie de “localidades fortificadas situadas en territorio liberado y pobladas por cristianos” que sirven de base para la hitación diocesana.<sup>44</sup> En suma, son enclaves militares que todavía no

---

<sup>40</sup> Un ejemplo de estas consideraciones en PORTELA, E.- “Del Duero al Tajo”, págs 96-97.

<sup>41</sup> Tipología planteada por MATA LLANA UREÑA, A.; MARTINEZ LILLO, S. Y SAEZ LARA, F.- “La ruta del Jarama y su entorno en época andalusí”, en SEGURA GRAIÑO, C.- *Orígenes históricos de la actual Comunidad de Madrid*, págs. 150-151.

<sup>42</sup> GAUTIER DALCHE, J.- *Historia urbana de León y Castilla*, págs. 112-117. La cita en p. 115.

<sup>43</sup> “La organización municipal castellana, trasplantada al reino de taifa, rompió las antiguas estructuras. El reino, relativamente centralizado, gobernado a partir de la capital, se hizo pedazos. Las principales ciudades – Madrid, Guadalajara, Talavera-, dotadas de administración propia, escaparon a la autoridad de los visires de Toledo”, *ibídem*, p. 115.

<sup>44</sup> RIVERA RECIO, J. F.- *La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208). Volumen I*, Roma, 1966, págs. 61-86. La cita en p. 80. Añade que estos oppida son concejos en torno a los que se agrupan los núcleos de población rural, algo que no creo todavía consolidado, aunque sí en proceso. De haber existido *concilia* ya

constituyen concejos autónomos; la funciones de organizar económica y políticamente un territorio son todavía secundarias. En 1127 son citados quince *oppida*: Talavera, Alhamín, Maqueda, Santa Eulalia, Olmos, Canales, Madrid, Alcalá, Guadalajara, Hita, Peñahora, Beleña, Uceda, Talamanca, Buitrago; en 1148 se añaden: Calatalifa, Escalona, Zurita y Calatrava, y en 1192: Almoguera y Alcolea. Constituirán la base de la organización municipal del sector centro-occidental del Reino de Toledo (la reconquista del sector oriental es más tardía) y demuestran una clara línea de continuidad con los núcleos fortificados de la época califal.<sup>45</sup>

Julio González ha demostrado la importancia estratégica que tuvo la conquista del castillo de Oreja en 1139, completado con la toma de Coria y la fortaleza de Albalat en 1142, para asegurar el control de la línea del Tajo: “El Tajo, a partir de entonces, entró en largos períodos de tranquilidad, fundamental para una obra decidida de repoblación, sin ser cruzado por guerreros almorávides; eran los cristianos de los concejos extremaduranos y de Transierra los que lo cruzarían repasándolo con botín y cautivos a la vuelta de numerosas expediciones a tierras de Andalucía”.<sup>46</sup> Era el momento para la consolidación institucional de los concejos en el Reino de Toledo. “Para 1188, en lo que era la antigua taifa, y que comenzaba a llamarse Castilla la Nueva, estaban ya formados los concejos de Hita, Guadalajara, Uceda, Madrid, Maqueda, Magán, Huete, Cuenca, Talavera, Plasencia y Trujillo. Es decir, que se había ido poblando la mitad septentrional de la región”.<sup>47</sup>

Pero si la seguridad fronteriza posibilitó la maduración del régimen concejil en la Transierra, también está en el origen de un trascendental cambio económico: el desarrollo de la ganadería, especialmente desde mediados del s. XII. En efecto, si con anterioridad los magnates del reino castellano, como aristócratas o monasterios, han protagonizado el progreso

---

establecidos (con la consiguiente delimitación territorial), es de suponer que una documentación tan rigurosa como la eclesiástica lo hubiera recogido.

<sup>45</sup> Con pequeños reajustes, entre los que destaca la posterior decadencia y abandono de núcleos como Calatalifa, Olmos y Canales en la ribera del Guadarrama una vez pierdan actualidad militar. MOLENAT, J-P.- “Villes et forteresses musulmanes de la région tolédane disparues après l’occupation chrétienne”, *Castrum 3. Guerre, fortification et habitat dans le Monde méditerranéen au Moyen Age*, Madrid-Roma, 1988. En cuanto a las novedades, destaca Escalona, fundada por los cristianos con cualidades defensivas orientadas hacia el sur, y no hacia el norte como en la época musulmana.

<sup>46</sup> GONZALEZ, J.- *Repoblación de Castilla la Nueva. Tomo I*, págs. 143-145. La cita, en p. 145.

<sup>47</sup> Texto frecuentemente citado de PASTOR DE TOGNERI, R.- *Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económico-sociales*. Barcelona, 1985, p. 103 (1ª ed: 1975). Aunque la autora no da las referencias documentales, se deduce claramente que para esa fecha ya existen en todos estos casos.

ganadero, el proceso de reconquista desde la caída de Toledo va a crear nuevas condiciones que se traducirán en una organización del espacio pastoril más compleja. A la disponibilidad de amplias zonas incultas y a la permanente escasez de población, se suma el fin de las bases económicas tradicionales de las milicias concejiles (y de la caballería villana que las controla), las parias y el botín. El resultado es que desde mediados del s. XII la caballería centra su interés en la explotación del territorio concejil, orientándose preferentemente hacia la ganadería,<sup>48</sup> con una presencia del ovino cada vez mayor y que va practicando rutas de trashumancia cada vez más complejas. Al circuito “normal” o de verano (desplazamiento de los rebaños a las zonas montañosas para aprovechar los pastos de veranada), se va sumando la progresiva marcha del ganado hacia el sur en busca de pastizales para el invierno, creando así un circuito de trashumancia inversa, que sólo se desarrollará en plenitud tras el control del valle del Guadiana tras la batalla de Las Navas y que terminará por institucionalizarse en la creación de la Mesta a mediados del s. XIII.<sup>49</sup> Como consecuencia, una profunda reorganización del espacio ganadero, que en el área extremadurana será protagonizada por unos concejos que intentarán configurar su término como “unidades pastoriles”.<sup>50</sup> Para ello destinaron los “extremos”, los espacios periféricos de sus términos, a usos pastoriles y silvícolas, prohibiendo las roturaciones y limitando el establecimiento de aldeas. Incluso aprovecharon la contención que suponían los núcleos de la Transierra a las expediciones musulmanas para comenzar a extender sus extremos hacia el sur, sobrepasando en ocasiones la cordillera. “Esa circunstancia alentaría pronto a los concejos de la Extremadura, concretamente los de Salamanca, Avila, Segovia, Sepúlveda, Atienza y Medinaceli para ensanchar sus territorios en dirección Sur. La riqueza de tales términos contribuiría a crear una numerosa y dinámica caballería villana”.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Como muestra, el caso de Avila, documentado por BARRIOS GARCIA, A.- *Estructuras agrarias y de poder...*, Tomo 2, págs. 147-148.

<sup>49</sup> El trabajo pionero sobre este tema es PASTOR DE TOGNERI, R.- “La lana en Castilla y León antes de la organización de la Mesta” en GARCIA MARTÍN, P. y SÁNCHEZ BENITO, J. M., comp.- *Contribución a la historia de la trashumancia en España*, Madrid, 1986, págs. 363-390 (edición original: 1970). Desde entonces, un buen número de investigadores ha ampliado nuestro conocimiento sobre la ganadería de este período, como MINGUEZ FERNÁNDEZ, J. M.- “Ganadería, aristocracia y reconquista en la Edad Media castellana”, *Hispania*, nº 151, t. XLII (1982), págs. 341-354; GAUTIER DALCHE, J.- “L’organisation de l’espace pastoral dans les pays de la Couronne de Castille avant la création de la Mesta (XIème-mil.XIIIème siècles), en *Economie et société dans les pays de la Couronne de Castille*, Londres, 1982, págs. 153-166 y los numerosos trabajos de M-C. Gerbet, ahora sintetizados en GERBET, M-C.- *Un élevage original au Moyen Age. La Péninsule Ibérique*, Biarritz, 2000, págs. 73-110.

<sup>50</sup> La expresión es de GAUTIER DALCHE, J.- *L’organisation de l’espace pastoral*, p. 157.

La organización concejil en el Reino de Toledo, por tanto, tuvo que afrontar desde muy temprano la competencia de los poderosos vecinos del norte. La presión que suponía provocó que los más afectados recurrieran a privilegios reales para delimitar sus términos, algo que se hace evidente ya en el reinado de Alfonso VII; en 1152 los obtuvieron Madrid y Talavera. La disponibilidad de un territorio amplio era vital para las posibilidades de crecimiento de los concejos: el objetivo era una organización dual del término, con áreas especializadas en funciones económicas complementarias determinadas por la distancia al centro urbano. Por un lado el *ager*, que rodea a la ciudad, dedicado a la producción agraria y poblado de aldeas. Más alejado, en los extremos, el *saltus*, en el que los usos agrarios pero también forestales son los predominantes, hasta el punto de que las autoridades municipales frenarán el poblamiento y la creación de aldeas en esta zona.<sup>52</sup> Particular interés tenía el acceso hacia el área montañosa del Sistema Central, dadas sus excelentes condiciones para las pasturas de verano y la disponibilidad de amplios bosques.<sup>53</sup> Pero la expansión territorial de los concejos del Norte supuso un evidente y eficaz freno a esta posibilidad: el caso de Madrid y sus pleitos con Segovia es el ejemplo más conocido y será analizado con más detalle en el siguiente apartado. No es el único: Buitrago se enfrentará a la presencia de Sepúlveda, que traspasa la línea de cumbres,<sup>54</sup> mientras Talavera se encontrará en una situación muy similar con Avila. La única posibilidad de extensión de los alfores para los concejos de la Transierra sería por tanto el sur: de no existir otro núcleo importante encontrarían un territorio mayoritariamente deshabitado tras la ocupación musulmana. De esta manera se aseguraban una gama de recursos similares a los que obtendrían en las zonas montañosas (pastos y bosques básicamente) por cuanto éstos no dependían sólo de la

---

<sup>51</sup> GONZALEZ, J.- *Repoblación de Castilla la Nueva*, Tomo II, p. 335. Pese a la claridad del planteamiento de Julio González y los numerosos datos que aporta en su obra sobre la evolución de los distintos concejos, las investigaciones posteriores apenas han profundizado en esta idea y en las importantes consecuencias que tenía para la organización concejil en el Reino de Toledo.

<sup>52</sup> Modelo de especialización espacial planteado por MOLENAT, J. P.- “L’organisation du territoire entre Cordillère Centrale et Sierra Morena du XIIème au XIVème siècle”, en *Génesis medieval del Estado Moderno: Castilla y Navarra (1250-1370)*, Valladolid, 1987, págs. 67-78.

<sup>53</sup> Teniendo en cuenta que la viabilidad del sistema de trashumancia que se estaba gestando “quedó dependiente de la capacidad de las pasturas de verano, las del norte, naturalmente más escasas y más difíciles de obtener por la concurrencia existente entre los ganaderos”. PASTOR DE TOGNERI, R.- “La lana en Castilla y León”, p. 365.

dotación física (orografía, altitud), sino también de una deliberada organización del territorio, que se traduciría en el escaso interés por establecer núcleos poblados.

Esta organización del espacio se refleja claramente en el sector oriental, donde localidades como Atienza o Medinaceli llevaron a cabo la ampliación de sus término en dirección al sur, hasta que se vean amputados con la creación posterior de núcleos que se convertirán en señoríos: Cifuentes (laico) en el caso de la primera y Sigüenza (episcopal) en la segunda.<sup>55</sup> Pero por sus semejanzas con el caso madrileño me detendré en dos ciudades tan importantes como Talavera y Toledo.

Talavera se vio presionada muy pronto por la expansión de Avila que, impulsada por los intereses ganaderos de la caballería villana, superó en dirección sur el Sistema Central. Una situación que fue reconocida en 1152, fecha del privilegio real de Alfonso VII de concesión de término a Talavera, cuyos límites se situaban al sur de la cordillera. Hubo debates posteriores con Avila por esta cuestión, motivando incluso la formación de una hermandad con Plasencia para defenderse de las tendencias expansivas de los abulenses. Pero el conflicto por el territorio no resultó especialmente enconado, puesto que Talavera va a disponer de una salida relativamente fácil hacia el sur, donde se ha creado un auténtico desierto demográfico, cuando las circunstancias militares lo permitan: “Las esperanzas se cifraron entonces al otro lado del río, en una comarca inhóspita y despoblada, uno de los escenarios más frecuentados por los almorávides y almohades en las razzias, algares y correrías... Fue esta zona el único camino abierto que encontró la villa para iniciar su expansión...En el tránsito del siglo XII al XIII, un poco más tranquila ya la región desde que en 1198 había fallado el último intento islámico de tomar la población, Talavera pudo comenzar su despegue en esta dirección”. La ciudad obtuvo así un término de muy considerable extensión: en el s. XIV, después de diversas amputaciones territoriales, todavía alcanzaba los 4.000 km<sup>2</sup> de superficie. Fue en el sur por tanto donde Talavera obtuvo su *saltus*: los usos ganaderos y silvícolas (con especial incidencia en este caso de la apicultura) fueron los predominantes, desarrollando el concejo una política consciente para limitar el establecimiento de poblaciones.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Sobre Buitrago, LOMBANA DOMÍNGUEZ, N.- “El enclave estratégico de Buitrago de Lozoya y su evolución histórica (siglos X-XV)”, en SEGURA GRAIÑO, C., edit.- *Orígenes históricos de la actual Comunidad Autónoma de Madrid*, págs. 118-119.

<sup>55</sup> GONZALEZ, J.- *Repoblación de Castilla la Nueva. Tomo I*, págs. 152-162.

Toledo, por su parte, ha sido estudiado por Jean Pierre Molénat.<sup>57</sup> En relación a Talavera (y, como veremos, Madrid), presenta una clara singularidad: la ausencia de un “enemigo” de entidad considerable procedente del norte. Tampoco parece existir una clara intención de dirigirse hacia esa dirección: las áreas montañosas estarían demasiado alejadas y entre ellas y la ciudad se situaba un núcleo urbano de cierta entidad, como Madrid, además del temprano progreso segoviano siguiendo el curso del río Guadarrama. El auténtico problema para la expansión territorial de Toledo no se localizaría en el exterior, sino en el interior de la propia ciudad. A falta de concejos competidores o de una nobleza sólidamente asentada en el término, el arzobispo aparece como la única instancia capaz de frenar el desarrollo toledano. Firmemente asentado en la zona norte del antiguo reino (señoríos de Alcalá o Talamanca), será el que controle asimismo, gracias a un intercambio con el monarca, la zona sur, que constituirá los denominados Montes de Toledo. El arzobispo se convertía por tanto en el obstáculo a la expansión concejo toledano hacia el Guadiana, donde se localizaba el *saltus* que la ciudad necesitaba. La respuesta de ésta fue similar a la que se hubiera dado a cualquier otro rival: continuos enfrentamientos y presiones que, según Molénat, finalmente resultaron decisivas para que el arzobispo renunciara a tan disputado espacio y aceptara intercambiarlo con el rey por territorios en Andalucía. El acto final de esta disputa tuvo lugar en 1246, cuando el concejo toledano compró a Fernando III los Montes de Toledo a cambio de 45.000 maravedís alfonsíes, configurándose así un auténtico señorío urbano que garantizó un control efectivo e incontestado de esta zona.<sup>58</sup>

En conclusión, el modelo de concejo de villa y tierra en la Transierra experimentó una significativa variación respecto a la Extremadura castellano leonesa: la superficie considerablemente menor de las tierras o alfores, resultado de la expansión territorial al sur del Sistema Central de las principales villas norteñas o de la posterior creación de nuevos

---

<sup>56</sup> El caso de Talavera está estudiado en SUAREZ ALVAREZ, M. J.- *La Villa de Talavera y su Tierra en la Edad Media*, Oviedo, 1983. La delimitación del término jurisdiccional en págs. 73-110 (la cita en págs. 74-75). Por su parte, la explotación económica de la zona sur de este término en págs. 374-405.

<sup>57</sup> MOLENAT, J. P.- *Campagnes et Monts de Tolède du XII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle*, Madrid, 1997. La delimitación del término del concejo en el territorio conocido como los Montes de Toledo en págs. 183-202; el poblamiento y organización en págs. 203-283.

<sup>58</sup> La compra de territorio y aldeas por un concejo al monarca para ampliar su *tierra* no es excepcional, aunque en este caso lo sea la extensión adquirida. Conocido es lo sucedido en Burgos, cuyo concejo decidió ampliar su limitado alfoz por medio de una deliberada política de compra de aldeas. BONACHIA, J. A.- *El señorío de*

señoríos. Sólo en los contados casos (Talavera o Toledo) que fue posible una ampliación de sus términos hacia el río Guadiana, pudieron alcanzar éstos una extensión considerable.

### 3- LA FORMACIÓN DE UN ESPACIO: LA VILLA Y TIERRA DE MADRID

Este modelo de organización territorial y social es el que se aplicó a Madrid, uno de los principales núcleos defensivos del Reino de Toledo desde la época musulmana. Analizaré en primer lugar el componente espacial del concejo, es decir, de la Tierra de Madrid, para centrarme a continuación en el componente institucional, el régimen concejil urbano y la materialización de la Tierra como entidad diferenciada de la Villa a cuyo dominio señorial está sometida.

#### 3.1.- DELIMITACION DE TERMINOS

La fijación de los límites de los concejos de la Transierra fue un proceso tardío, debido al carácter fronterizo que esta zona mantuvo durante buena parte del s. XII. Por ello en un primer momento el objetivo fue concentrar la población en los principales *oppida* que habían surgido en el período califal, en torno a los cuales se extendía una serie de castillos o torres que representaban los principales hitos de la ocupación del suelo. Las tareas repobladoras tuvieron que esperar. Los términos de estos concejos coincidirían por tanto con el área que controlaran militarmente de manera efectiva y en las que progresivamente se irían consolidando las aldeas, preexistentes o de nueva creación. Más tarde aparecerán los documentos legales (fueros, privilegios reales) en los que se detallen las líneas de demarcación, además de las inevitables disputas.

No hubo por tanto un documento que fijara con exactitud los límites del alfoz de Madrid en el momento de su conquista.<sup>59</sup> Ante esta inconcreción espacial, la amplitud del alfoz va a

---

Burgos. También Valladolid desarrolló una estrategia similar. RUCQUOI, A.- *Valladolid en la Edad Media. I- Génesis de un poder*, Valladolid, 1987, págs. 95-99.

depender en última instancia de la capacidad de ocupación y repoblación de la Villa y de los frenos que impongan los poderes vecinos. El proceso posterior para fijar el espacio jurisdiccional frente a los concejos vecinos se va a ver alterado por la concurrencia en las cercanías de Madrid del arzobispo de Toledo y la ciudad de Segovia. La progresiva presencia de ésta (primero el cabildo y más tarde el concejo) en el sur de la línea de cumbres provocó que Madrid pretendiera reservarse el espacio comprendido entre la ciudad y la serranía, obteniendo en tal sentido el conocido privilegio de Alfonso VII en 1152, que supone el primer intento para definir espacialmente la Tierra y que constituye un “característico Privilegio Fundacional Concejil”.<sup>60</sup> El resto de los límites concejiles no aparecen especificados, por lo que deben deducirse de la documentación posterior.<sup>61</sup>

Al norte de Madrid se encuentra Talamanca; la línea divisoria entre ambos aparece sólidamente asentada, sin disputas de relevancia, seguramente coincidan con las de la época musulmana, cuando ambos núcleos compartían una destacada responsabilidad defensiva en la Marca Media. Por el este, Alcalá de Henares: los límites en este caso se sitúan en torno al río Jarama, aunque sin una coincidencia exacta. Aldeas madrileñas como Cobeña, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio, además de sotos concejiles como El Porcal se localizan en la

---

<sup>59</sup> Para Julio González los límites iniciales del alfoz de Madrid coincidirían parcialmente con los exidos para abrevaderos del *Fuero* que, situados en torno a los ríos Jarama y Manzanares, definen un término de reducida extensión. GONZALEZ, *Repoblación de Castilla la Nueva, Tomo II*, p. 7

<sup>60</sup> El privilegio de 1152 está publicado en DOMINGO PALACIOS, T.- *Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, Tomo 1*, Madrid, 1888, págs. 13-15. Como archivero municipal de Madrid, Timoteo Domingo Palacios publicó entre 1888 y 1908 cuatro volúmenes donde daba a conocer un importante corpus documental centrado en el Madrid medieval: citaré en adelante como *Documentos* y el tomo y páginas correspondientes. La tarea fue continuada por MILLARES CARLO, A. y VARELA HERVIAS, E.- *Documentos del Archivo de Villa de Madrid. Segunda Serie*, Madrid, 1932, 2 vols; será citado como *Documentos, 2ª serie*. La expresión recogida es de MARTINEZ LLORENTE, F. J.- *Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval*, p. 154.

<sup>61</sup> La bibliografía sobre la Tierra o alfoz medieval de Madrid es muy amplia y desigual. Se puede prescindir de trabajos como MONTERO VALLEJO, M.- *El Madrid Medieval*, Madrid, 1987 y más aún de GARCIA DE ANDRES, I. y otros- *Madrid, Villa, Tierra y Fuero*, Madrid, 1989: además de no añadir información nueva, aparecen con errores y con planteamientos superados. También resulta confuso JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.- *Raíces medievales de la división provincial de Madrid*, Madrid, 1986. Visiones generales en MARTINEZ DIEZ, G.- “Estructura administrativa local”, págs. 86-92; VERA YAGÜE, C. M.- “Espacio, poblamiento y señorialización en el Madrid bajomedieval: La Comunidad de Villa y Tierra de Madrid, el sexmo de Valdemoro y las encomiendas de la orden de Santiago en la ribera del Tajo”, *Villa de Madrid*, nºs 105-106 (1991), págs. 62-77 y, sobre todo, MADRAZO MADRAZO, S.; BERNARDOS SANZ, J.; HERNANDO ORTEGO, F.J. y DE LA HOZ GARCÍA, C.- “La Tierra de Madrid”, en MADRAZO, S. y PINTO, V.- *Madrid en la época moderna: Espacio, sociedad y cultura*, Madrid, 1991, págs. 33-50. Por su parte, PANADERO ACEDO, C.- “Los límites del territorio de Madrid (siglos XI-XIII)”, en SEGURA GRAIÑO, C.- *Orígenes históricos de la actual Comunidad Autónoma de Madrid*, págs. 61-74, apenas relaciona la formación del espacio concejil madrileño con la organización social del espacio en el Reino de Toledo.



orilla izquierda del Jarama, mientras que no hay presencia complutense en la orilla derecha. Los principales problemas en esta zona se localizan en el río, con enfrentamientos acerca de alguna isla, sin duda provocados por la naturaleza cambiante de las riberas debido a la fuerte capacidad erosiva del río. Así, en 1327 Alfonso XI amparaba al concejo madrileño en la posesión y disfrute de una isla en dicho río que estaban obstaculizando los toledanos y complutenses.<sup>62</sup> Aunque hay referencias a otras pugnas en este mismo sentido en el período bajomedieval, en líneas generales no se trata de disputas de especial trascendencia, más allá de las continuas intrusiones de términos. El hecho de que Alcalá de Henares y Talamanca sean señoríos del arzobispo de Toledo no parece incidir en este carácter eminentemente pacífico de la vecindad, lo que parece indicar que se trataba de límites muy consolidados, anteriores a la conquista cristiana.

Entre estas tres localidades aparece Paracuellos, un antiguo castillo de la Marca Media. En 1195 Alfonso VIII otorgó a la orden de Santiago “catellum illud et uillam que dicitur Paracollos, sitam inter Maieritum et Alcala”.<sup>63</sup> No se puede determinar la pertenencia previa a alguno de los términos de estos concejos: tal vez su carácter de núcleo defensivo determinó una cierta autonomía, gobernado por algún representante del poder monárquico hasta el momento de su señorialización.

En cambio, la fijación espacial por el sur de la Tierra de Madrid resultó un proceso mucho más complejo, debido a que la organización territorial heredada de la época musulmana se vio pronto alterada por las circunstancias de la Reconquista. El asentamiento y las posibilidades de expansión de Madrid en esta zona quedaron frenados por la presencia de la ciudad arzobispal y de Segovia. Toledo controlaba hacia el norte la comarca de La Sagra: los límites con Madrid venían a coincidir con las actuales demarcaciones provinciales. Naturalmente suponía un eficaz obstáculo a cualquier pretensión madrileña; no parece que ésta haya tenido siquiera lugar.

En el entorno meridional madrileño la presencia del obispado segoviano se manifiesta ya en la primera mitad del s. XII, recibiendo la donación de términos como Illescas, Móstoles, Freguacedo o Calatalifa. Muy pronto el concejo tomó totalmente la iniciativa, siguiendo la lógica de la ampliación de sus bases ganaderas y contando con el decidido apoyo de la monarquía. Así,

---

<sup>62</sup> *Documentos*, t.I, págs. 237-239

<sup>63</sup> MARTINEZ DIEZ, G.- “Estructura administrativa local”, págs. 81-82.

en la segunda mitad del s. XII y principios del siguiente se fue consolidando el control de un amplio territorio que formaron los sexmos de Valdemoro y de Casarrubios. En el primer caso las aldeas que lo constituyen formaban parte de los arciprestazgos de Madrid y de Alcalá de Henares, lo que parece revelar una anterior dependencia en relación a estos núcleos, que dataría de la época musulmana.<sup>64</sup> Si el sexmo de Casarrubios quedaba unido con el resto del territorio segoviano, no sucedía lo mismo con el de Valdemoro, único espacio aislado entre los controlados por Segovia. La causa era la presencia de Madrid, que busca el control de un eje de vital importancia como es el camino de Toledo, que se asegurará hasta la localidad de Casarrubuelos, el punto más al sur de su Tierra. El choque de intereses era inevitable: esta cuña madrileña partía en dos el núcleo segoviano. Los consiguientes intentos de unificación territorial por parte de éstos motivaron duros enfrentamientos con los madrileños, hasta provocar la intervención directa de Fernando III en 1239 para "departir contienda e bataia grande que era entre ellos".<sup>65</sup> En el arbitraje se recoge un detallado amojonamiento entre los términos de ambas jurisdicciones: del lado madrileño quedaban las localidades de Palomero, Pozuela, Pinto, Covanubles, Torre de Avencrispín y Cuelgamuros, mientras que a Segovia pertenecían Seseña, Espartinas, Valdemoro, Gózquez, Santisteban y Albende. Con posterioridad los límites presentan un carácter más estable y menos conflictivo: no se debería sólo a esta hitación, sino asimismo a que poco después Madrid va a sufrir la señorialización de varias aldeas de esta zona, y ello va a catalizar todos los problemas territoriales.<sup>66</sup>

Con todo, el mayor y más complejo conflicto en la delimitación de la Tierra madrileña lo constituye el conocido caso del *Real de Manzanares*, el espacio comprendido entre la ciudad y la Sierra de Guadarrama. De nuevo es Segovia el oponente en una pugna que se enmarca en la mantenida por el control de las pasturas de verano en la vertiente sur del Sistema Central en un momento en que se amplían las bases de la trashumancia, organizándose un circuito de invierno

---

<sup>64</sup> La jurisdicción eclesiástica se articula rápidamente, sirviéndose para ello de referencias administrativas preexistentes, por lo que se puede utilizar como indicio (que no prueba) de la organización espacial anterior. Los arciprestazgos madrileños en GUADALUPE VERAZA, M. L.- *Diezmos de la sede toledana y rentas de la mesa arzobispal*, Salamanca, 1972, págs 100-110. Coincide el planteamiento sobre la vinculación de Madrid con estas aldeas con el análisis de EPALZA, M. de- "La dualidad campello-fahs en el espacio agrícola de Al-Andalus (Alicante, Castalla, Pedreguer, Madrid)", *Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes*, nº 4 (1987), págs. 159-173, quien mediante el estudio de la toponimia concluye que la vega del Jarama (campo de Arganda) configuraba una llanura agrícola-ganadera dependiente de Madrid en la época de dominación musulmana.

<sup>65</sup> *Documentos*, t.1, págs. 73-78.

<sup>66</sup> Datos sobre estos sexmos segovianos en MARTINEZ DIEZ, G.- *Las Comunidades de Villa y Tierra*, págs. 493-505 y MARTINEZ MORO, J.- *La Tierra en la Comunidad de Segovia. Un proyecto señorial urbano (1088-1500)*, Valladolid, 1985, págs. 16-22.

cada vez más largo conforme avanza el frente de la conquista.<sup>67</sup> Aunque resulte el conflicto más conocido y citado, en el epígrafe anterior he planteado ya que no es un caso único: forma parte de una dinámica de expansión territorial hacia el sur del Sistema Central por parte de los más destacados concejos extremaduranos. Lo que si parece ser excepcional es la resistencia que opuso el concejo madrileño, que aunque no consiguió el control efectivo del territorio, al menos evitó el de Segovia, lo que hubiera supuesto terminar prácticamente cercado por los sexmos de esta ciudad.<sup>68</sup>

Tal vez como respuesta al inicio de la presión segoviana, Madrid consiguió en 1152 un privilegio de términos de Alfonso VII que fijaba los límites concejiles en la zona serrana. Significativamente coincide con la fecha en que Talavera recibía un documento similar: era ya evidente para el poder real la necesidad de organizar administrativamente la Transierra de manera más precisa para evitar los conflictos territoriales, algo que no siempre se conseguiría. En este documento, tan importante para la historia madrileña, se hace en primer lugar una donación expresa de términos por parte del monarca:

“facio cartam donationis de montibus et serris qui sunt inter Maidrit villam vestram et Segobiam, qui sint vestri et de termino vestro ab hac die usque in perpetuum: hos montes et serras vobis dono ad pascua pecoribus vestris, et ad ligna edificiis et necessariis vestris: et concedo quod possideatis dictos montes jure hereditario et habeatis plenam potestatem vetandi et defendendi eos ab omnibus aliis conciliis qui contra voluntatem vestra, sive ad ligna sive ad pascua voluerint in eis sibi dominium vindicare”.

Hay por tanto un reconocimiento de que formaba ya parte del término de Madrid, pero que podían estar amenazados en un futuro próximo. Como tal donación y reconocimiento de posesión, será el documento (junto con sus confirmaciones posteriores) en el que el municipio

---

<sup>67</sup> La interpretación de este conflicto en relación al desarrollo ganadero de Segovia en los trabajos de PASTOR, R.- "La lana en Castilla y León antes de la organización de la Mesta"; "Apuntes para el estudio de los conflictos por el espacio ganadero del concejo de Madrid en el siglo XIII", *I Jornadas de estudios sobre la provincia de Madrid*, Madrid, 1980, págs. 678-684 y *Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de la formación feudal. Castilla y León, siglos X-XIII*, Madrid, 1980, págs. 206-209.

<sup>68</sup> La referencia ineludible es TORMO, E.- "El estrecho cerco del Madrid de la Edad media por la admirable colonización segoviana", *Boletín de la Real Academia de la Historia*, t. CXVIII (1946), págs. 47-205. El autor realizó una destacable tarea de recopilación y crítica de fuentes documentales; su interpretación en cambio debe ser actualizada, a pesar de lo cual se sigue recogiendo de manera habitual en buena parte de la bibliografía actual.

madrileño sustente posteriormente sus derechos a los términos comunales no sólo sobre el Real de Manzanares, sino sobre toda la Tierra de Madrid. A continuación, se establecen los límites de esta concesión: “a Portu del Berroco, qui dividit terminum Abule et Segobie, usque ad Portum de Lozoya cum ómnibus intermediis montibus, et serris et vallibus: ita quod sicut aqua descendit et decurrit versus villam vestram”. La divisoria se fijaba en la línea de cumbres con lo que se coincidía con la jurisdicción eclesiástica, ya que el Sistema Central señalaba la frontera del arzobispado de Toledo. El puerto del Berroco se ha identificado habitualmente con el actual puerto de Tablada, si bien Gregorio de Andrés ha propuesto desplazarlo ligeramente “más al oeste, hacia El Escorial, en la dehesa de Cuelgamuros”, lo cual no cambia excesivamente las cosas. Más problemático ha sido fijar el puerto de Lozoya: el mismo autor pretende situarlo en el alto de Cabanillas de la Sierra, frente a la opinión de Tormo que lo hacía coincidir con el actual puerto de Navafría.<sup>69</sup> Parece demasiado hacia el Este, si bien tiene la ventaja de excluir completamente de la concesión el valle alto del río Lozoya, que nunca entró en las reivindicaciones madrileñas, sino que constituyó otro sexmo de Segovia.<sup>70</sup> La Sierra era un límite geográfico que se pretendía hacer coincidir con el jurisdiccional; a partir de ahí se hace referencia (aqua descendit) al curso del río Manzanares, si bien se comprendía también el valle alto del río Guadarrama (el resto de su ribera fue pronto incorporada por Segovia en lo que sería el sexmo de Casarrubios).

El piedemonte serrano concedido a Madrid era un espacio muy escasamente poblado en el período musulmán. Las excavaciones arqueológicas han evidenciado la existencia en la zona de algunos reducidos núcleos, orientados básicamente hacia la actividad ganadera y que tal vez fueran objeto de ocupación estacional por parte de grupos de pastores itinerantes.<sup>71</sup> Pudiera haber tenido una cierta dependencia militar de Madrid: se conservan restos o referencias toponímicas de alguna atalaya, lo que revela su inserción en el entramado defensivo de la frontera toledana.

En este sentido la zona serrana aparece como el *saltus* natural de Madrid, una localidad que desde la época musulmana controlaba un área agrícola en sus alrededores. A

---

<sup>69</sup> TORMO, E.- “El estrecho cerco del Madrid”, p. 73.

<sup>70</sup> DE ANDRÉS, G.- *Las cacerías en la provincia de Madrid en el siglo XIV según el Libro de la Montería de Alfonso XI*, Madrid, 2000, p. 9 y p. 161 respectivamente.

<sup>71</sup> Es el caso del Cancho del Confesionario en Soto del Real y Navalvillar en Colmenar Viejo. ZOZAYA STABEL-HANSEN, J.- “La islamización en la provincia de Madrid”, *II Jornadas de Estudios sobre la provincia de Madrid*, Madrid, 1980, págs. 77-83.

las circunstancias geográficas tan favorables propias de los espacios montañosos, se unía la dotación de factores que tenían relación directa con el hombre: escasa densidad demográfica (que incluso sería en amplias zonas una despoblación en la práctica) e inestabilidad militar. El resultado: unas condiciones excepcionalmente favorables para la explotación ganadera. Lo reconocía el geógrafo musulmán El-Idrisi: “En la cadena montañosa que separa las dos Españas pacen un gran número de ganados. Su carne es excelente y están siempre gordos”.<sup>72</sup> También los recursos forestales serían particularmente abundantes: las condiciones naturales y la larga desocupación humana permitirían un paisaje de bosques casi continuos, sólo aclarados en ciertas áreas por el uso ganadero, prestos para la explotación humana; en suma un “pays du bois”.<sup>73</sup> Este carácter de saltus o territorio dedicados preferentemente a usos silvoganaderos es la clave para interpretar la conducta del concejo madrileño en el conflicto por el Real de Manzanares.

Un conflicto que empezó a manifestarse muy temprano. Alfonso VIII concedió en 1176 un nuevo privilegio a Madrid confirmando la donación de términos de su abuelo: “dono et concedo montes, pinares, pasqua, prata, extremos populatos et eremos, totos ex integro sicut in tempore Imperatoris avi mei eos unquam melius habuistis”.<sup>74</sup> Pero por lo demás su política resultó muy favorable a Segovia, cuya expansión por la Transierra apoyó decididamente a cambio de su ayuda militar: “la ofensiva almohade valorizó más que nunca el papel de sus milicias, y con ello las atenciones reales se prodigaron”.<sup>75</sup> Ya en 1208 recibió el concejo segoviano dos documentos regios referidos a términos en el sur: en primer lugar, la confirmación de la delimitación que llevó a cabo Minaya, alcalde real, entre Segovia y Madrid (en cuyo concejo se incluían los lugares de Boadilla, Zarzuela, Pozuelo, Fuencarral y Alcobendas). Otro documento ampliaba los límites de esta hitación hacia el sur y hacia el norte: de forma harto imprecisa en este caso, parece que llegaban hasta el concejo de Pedraza.

---

<sup>72</sup> Texto recogido en MARTINEZ SALVADOR, C.- “Fuentes escritas sobre el Madrid árabe”, en VALDES; F., ed.- *Mayrit. Estudios de arqueología medieval madrileña*, Madrid, 1992, p. 80

<sup>73</sup> De acuerdo con la terminología de CLÉMENT, V.- “Frontière, Reconquête et mutation des paysages végétaux entre Duero et Système Central du XI<sup>e</sup> au milieu du XV<sup>e</sup> siècle”, *Melanges de la Casa de Velázquez*, v. XXIX (1), (1993), págs. 87-126. Aunque el trabajo se centra en la vertiente norte del Sistema Central creo que sus conclusiones son totalmente aplicables en este caso.

<sup>74</sup> *Documentos*, t. I, págs.17-18

<sup>75</sup> MARTINEZ MORO, J.- *La Tierra en la Comunidad de Segovia*, p. 17.

Sin embargo, estas concesiones no servirán de base legal a las pretensiones posteriores sobre el Real.<sup>76</sup>

Fue en la primera mitad del s. XIII cuando la presencia de Segovia en el territorio serrano concedido a Madrid se manifestó en la constitución de varias pueblas, destacando las de Manzanares y Colmenar. La reacción del concejo madrileño no se hizo esperar. Contando con el apoyo de Fernando III gracias al papel destacado de las milicias madrileñas en sus campañas andaluzas, consiguió una real provisión de 24 de septiembre de 1248 en la que se ratificaban los términos concedidos por el privilegio de 1152.<sup>77</sup> En el documento se hace una vívida descripción de los avatares de la disputa por este espacio. Durante la campaña de Córdoba los caballeros madrileños informaron

“que el Conçejo de Segovia fizo pueblas en vuestros términos, señaladamente Manzanares y el Colmenar, et que me pidistes merced que yo lo mandasse desfacer. Yo embié á mandar por mi carta á los de Segovia desficiessen luego aquellas pueblas que avian fecho, Manzanares y el Colmenar, y todas otras que y avian fecho, y sino las quisiesen desfacer, que mandaua á vos los de Madrid que las derribasedes et las estragasedes, et dixistisme que los de Segovia no lo quisieron desfazeer, maguer yo gelo embié á mandar por mi carta; et sobresto que fuiste vos et quemastes et estragastes aquellas pueblas que ellos avían fechas en vuestro término. Et los de Segovia con gran fuerza comenzáronlas a poblar de cabo, et que vos que fuistes, et quemásteslas et estragásteslas otra vegada”.

Los enfrentamientos que aparecen en la documentación ponen claramente de manifiesto la trascendencia de la delimitación espacial para el concejo medieval, que lleva al choque armado como última ratio. Para complicar aún más la situación, los dos concejos buscaron alianzas formando hermandades con sus vecinos: los segovianos con los extremaduranos y los de Madrid con los del arzobispado de Toledo. Ante el cariz de los acontecimientos el rey decidió intervenir y, después de una información por parte de sus

---

<sup>76</sup> Tormo cree que el primer texto se refiere en realidad a la hitación entre Madrid y Segovia por el suroeste y que no afectaba al área serrana. En cuanto al segundo lo considera -con argumentos fundados- falso, algo que quedaría demostrado por el hecho de que los segovianos no lo utilizaran posteriormente en sus alegaciones. TORMO, E.- “El estrecho cerco del Madrid”, págs. 103-111.

<sup>77</sup> Publicado en AMADOR DE LOS RIOS, J.- *Historia de la Villa y Corte de Madrid, Tomo I*, Madrid, 1990 (edic. orig: 1861), págs. 206-207, n.1.

comisionados, ratificó la concesión que hizo Alfonso VII del área serrana a la Tierra madrileña.

La intervención del monarca se enmarcaba en un intento por estabilizar las disputas de límites entre diversos concejos: la expansión hacia el sur desde la Extremadura había chocado con las aspiraciones de los concejos del reino de Toledo que llevaban ya un siglo formados y estaban plenamente consolidados. Además de la ya citada delimitación entre la Tierra de Madrid y el sexmo segoviano de Valdemoro, lo demuestra el diploma concedido por el mismo monarca el 24 de agosto de 1249 por el que se pretende pacificar los “extremos” entre el Real de Manzanares (madrileño) y el sexmo segoviano de Casarrubios, prohibiendo a ambos concejos establecer pueblas, romper terrenos y crear dehesas; el área fronteriza debía quedar como un espacio comunal para los habitantes de ambos concejos.<sup>78</sup>

Una solución temporal de nuevo. La continuidad de los enfrentamientos motivó que Alfonso X decidiese reservarse la jurisdicción del espacio en disputa bajo el pretexto de hacerlo temporalmente hasta que resolviera el pleito. Reconociendo el derecho de madrileños y segovianos a usos comunales en el terreno (pacer sus ganados, cortar leña o madera, hacer carbón y cazar), nombró a su Justicia Pedro González para controlar el Real de Manzanares (así llamado desde entonces). Las quejas madrileñas sobre las dificultades que el delegado regio ponía en el ejercicio de estos derechos provocaron que entre 1268 y 1271 el rey dictara tres cartas reales para ampararles en sus derechos.<sup>79</sup>

Comenzó entonces un proceso que concluiría finalmente con un territorio seccionado de ambas ciudades, pues aunque una serie de contradictorias medidas de los sucesivos monarcas reconocían bien los derechos de Madrid bien la ocupación de Segovia en función del mayor o menor apoyo de sus milicias concejiles, la orientación más clara de la política regia era su conversión en señorío nobiliario. Así, el sucesor del rey Sabio, Sancho IV concedió dos documentos favorables a los intereses madrileños, a los que seguiría uno partidario de Segovia, para volver después a dictar otros dos que reconocían los derechos de la villa del Manzanares.

---

<sup>78</sup> *Documentos*, t. I, págs. 79-82. Tormo se da cuenta de que el documento no hace referencia estrictamente a lo que será el Real de Manzanares, sino al valle del Guadarrama, pero sin identificarlo con el área de extremos entre ambos concejos. TORMO. E.- “El estrecho cerco del Madrid”, págs. 138-149.

<sup>79</sup> *Documentos*, t. I, págs. 103-108.

Pero a comienzos del s. XIV el destino del Real como espacio señorializado estaba decidido: en 1304 lo recibió el infante don Alfonso de la Cerda. Aun cuando aparezcan frecuentes disposiciones reales en reconocimiento de los derechos de los dos concejos en disputa, asistimos desde entonces a la sucesión de titulares entre personajes muy cercanos a los soberanos y siempre con un curioso carácter de "provisionalidad", hasta que en 1383 vaya a parar a manos de Pedro González de Mendoza. Con todo, la consolidación de este señorío en manos de los Mendoza presentó dificultades derivadas de las disputas entre miembros de la familia y sus problemas sucesorios, que terminarán definitivamente cuando el 6 de julio de 1435 Juan II de plena posesión del señorío del Real de Manzanares a Íñigo López de Mendoza, futuro marqués de Santillana y que también añadirá a sus numerosos títulos nobiliarios el del condado del Real de Manzanares en 1445.<sup>80</sup>

La historia, pues, concluía con la frustración de los derechos legales que amparaban la inclusión del espacio serrano en la Tierra de Madrid, unos derechos que se remontan a la reconquista y que habían quedado explicitados en el privilegio de Alfonso VII. Con carácter habitual se ha explicado que fue la incapacidad repobladora del concejo madrileño en un área que estaba en el ámbito de expansión de uno de los concejos más potentes de la Extremadura castellana lo que explica tal desenlace. Ni siquiera cuando a lo largo de los siglos XIII y XIV se desarrollen asentamientos madrileños en dirección a la Sierra podrán superar el entorno de lo que constituiría el monte de El Pardo, que señala los límites en esta zona de la Tierra de Madrid.<sup>81</sup> Pero si, como he venido planteando, el objetivo de la villa era el de conservar el territorio montañoso como *saltus*, se puede interpretar esa falta de pueblas como una política más o menos consciente, en lugar del reconocimiento de una incapacidad. Una localidad como Madrid se había asentado institucionalmente, venía completando la organización de un hinterland agrario con aldeas cada vez más consolidadas: en esas circunstancias no hubiera resultado imposible que el concejo desarrollara una política de poblamiento, bien mediante la concesión de condiciones ventajosas para atraer nuevos pobladores, bien mediante la propia cesión de términos a caballeros

---

<sup>80</sup> La evolución entre los siglos XIV y mediados del XV de este señorío que culminará en el condado del Real de Manzanares en manos de la casa de Infantado, puede seguirse en LAYNA SERRANO, F.- *Castillos de Buitrago y Real de Manzanares*, Madrid, 1935, págs. 56-65; PEREZ BUSTAMANTE, R.- "El Real de Manzanares, el marqués de Santillana y el Honrado Concejo de la Mesta", en *Homenaje a Lucas Beltrán*, Madrid, 1982, págs. 503-531 y LOPEZ GONZALEZ, A. L.- *El Real de Manzanares y su castillo*, Madrid, 1987, págs. 21-51.

<sup>81</sup> Así lo revela la información que el concejo madrileño presentó a Alfonso XI en 1312, *Documentos*, t. I, págs. 213-229.



o entidades eclesiásticas residentes en la villa para que crearan aldeas o alquerías que garantizaran la ocupación del suelo. Que éste no era el objetivo de los concejos al sur del Sistema Central en los primeros siglos de la Edad Media queda evidenciado en el comportamiento de ciudades como Talavera o Toledo cuando consigan expansionarse hacia el sur y dotarse de amplios extremos, en los que retrasarán en la medida de lo posible el establecimiento de nuevas localidades.

Pero no todo estaba perdido para Madrid en el Real de Manzanares. Aun cuando el territorio fue excluido de su jurisdicción, obtuvo una cierta compensación regia en el reconocimiento del derecho de sus vecinos a los aprovechamientos comunales (pastos, leña, carbones, caza). Esta situación maquillaba en cierta forma los efectos de la pérdida espacial. Claro que poder ejercerlos de forma pacífica era otra cuestión, y a ello no estaban dispuestos ni los segovianos ni los distintos tenentes que fueron sucediéndose en la cesión del Real. Los conflictos generados por esta situación, así como las consecuencias económicas que tendría para Madrid y su Tierra y el propio Real de Manzanares, serán analizados en el siguiente capítulo.

CUADRO 1 – SUPERFICIE DE ALGUNOS CONCEJOS DE LA TRANSIERRA Y LA EXTREMADURA<sup>82</sup>

TERMINOS CONCEJILES	SUPERFICIE (KMS <sup>2</sup> )
<b>BUITRAGO</b>	622,38
<b>GUADALAJARA</b>	1.199,06
<b>TALAMANCA</b>	373,87
<b>ALCALA</b>	940,02
<b>TALavera</b>	4.237,60
<b>TOLEDO</b>	9.091,07
<b>MADRID (sin el Real de Manzanares)</b>	1.483,96
<b>MADRID(con el Real de Manzanares)</b>	2.687,31
<b>AVILA</b>	8.935,12
<b>SEGOVIA</b>	6.607,04
<b>SORIA</b>	2.998,21
<b>MEDINACELI</b>	2.640,06
<b>SEPÚLVEDA</b>	1.334,10

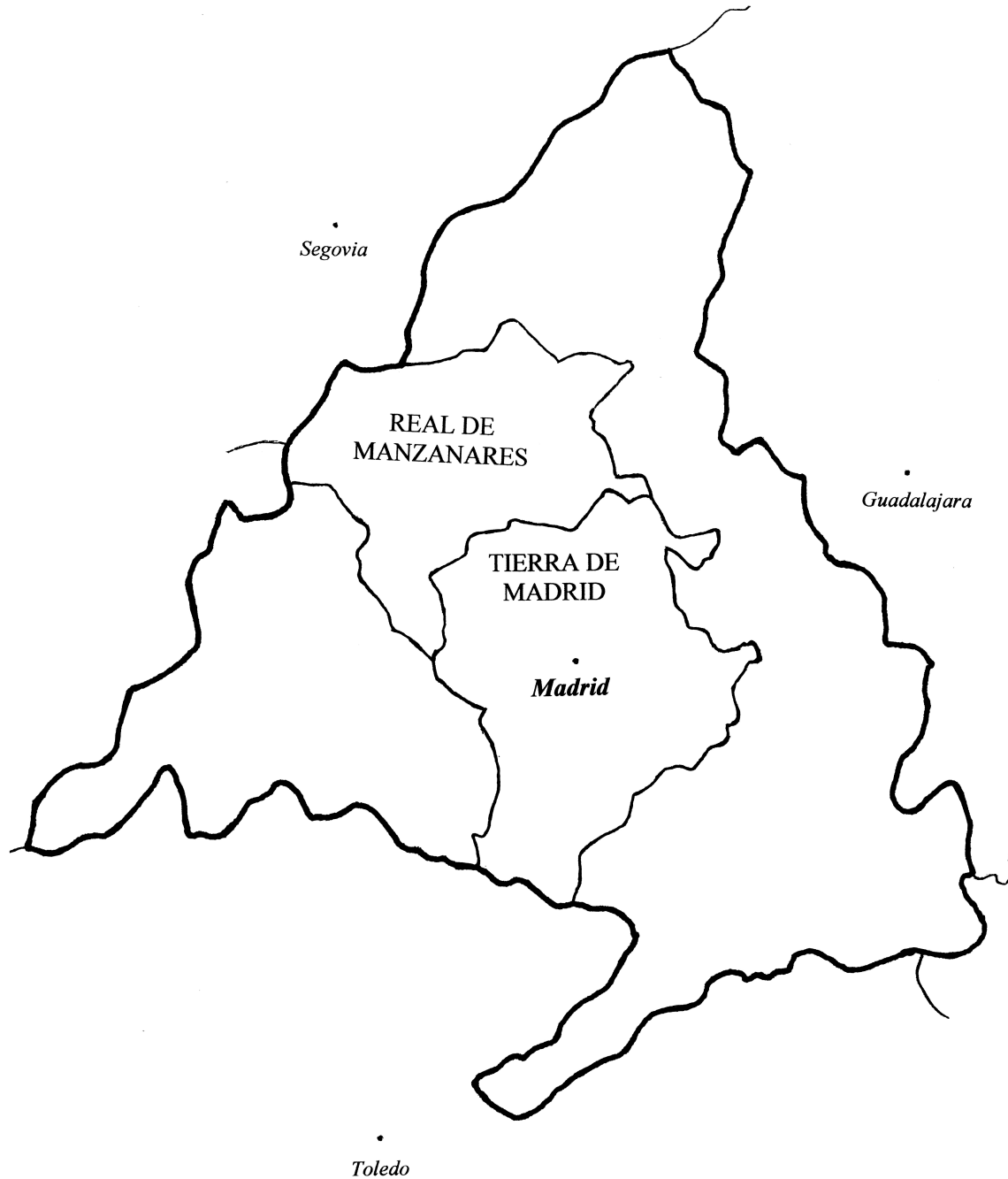
La Tierra de Madrid, así delimitada, constituía un término jurisdiccional de una extensión relativamente amplia, si lo comparamos con los concejos de la Transierra e incluso con los de la Extremadura, tal y como se recogen en el cuadro 1. Sus casi 1.500 kms<sup>2</sup> suponían la tercera mayor superficie concejil del Reino de Toledo, superada ampliamente por

<sup>82</sup> He utilizado los datos de MARTINEZ DIEZ, G.- *Las Comunidades de Villa y Tierra*, p. 678; la superficie del Real de Manzanares en p. 509; y el mismo- “Estructura administrativa local”, p. 159-160. En esta comparación queda al margen el caso de Cuenca.

los casos excepcionales de Talavera y Toledo, pero era mayor que la de ciudades tan importantes en la época musulmana como Guadalajara o Alcalá. Si extendemos la comparación al espacio extremadurano castellano, sólo era inferior al de los concejos de Ávila, Segovia, Soria, Medinaceli, Molina y Atienza. Incluyendo los 1.203,35 kms<sup>2</sup> que suponía el Real de Manzanares, sus casi 2.700 kms<sup>2</sup> únicamente resultaban menores que los de las tres primeras ciudades, que a su vez eran los mayores espacios del señorío urbano medieval castellano junto con Talavera y Toledo, que con la compra de los Montes de Toledo se convirtió en el mayor territorio concejil. Esta incidencia territorial se puede apreciar en el mapa 1, donde se observa la importancia que la Tierra de Madrid junto con el Real de Manzanares tenían en lo que actualmente constituye la Comunidad de Madrid.

## MAPA 1

### LA TIERRA DE MADRID CON EL REAL DE MANZANARES EN LA ACTUAL COMUNIDAD DE MADRID



### 3. 2.-EL PROCESO DE SEÑORIALIZACION

Aunque la concesión por parte de los monarcas a nuevos señores de aldeas de la Tierra de Madrid se documenta desde finales del s. XIII, fue a raíz de la crisis general en los siglos bajomedievales cuando alcanzó su máximo desarrollo.

Desde principios del s. XIV comenzó en el territorio castellano el desencadenamiento de una crisis que en líneas generales presenta rasgos similares a los del resto de la Europa feudal.<sup>83</sup> Las crisis de subsistencias provocadas por las malas cosechas se vieron agravadas por la llegada de la Peste Negra. La sangría demográfica que provocó agravó aún más la tradicional escasez de mano de obra (que la conquista y repoblación de parte de Andalucía venía exacerbando); los conflictos intraseñoriales y especialmente entre señores y campesinos se hicieron continuos. La caída de las rentas de la clase señorial es una de las consecuencias más destacadas. Para superar esta adversa situación la nobleza va a contar con el apoyo político de la monarquía, especialmente con la nueva dinastía de los Trastámaras, que tendrá en primer lugar que recompensar los apoyos recibidos en su asalto y conquista del poder estatal. En la recomposición de la renta señorial va a jugar un papel determinante la ampliación de sus bases territoriales y jurisdiccionales por medio de la formación de nuevos señoríos a costa del realengo. Los concejos castellanos se verán así sometidos a una continua desarticulación de sus alfores, no sin que por lo general ofrecieran una tenaz resistencia.

La Tierra de Madrid no quedó ni mucho menos al margen de este proceso. La reacción del concejo, esto es, de la oligarquía que lo controla, adoptó dos formas principales: por un lado reclamar la confirmación regia de los privilegios que garantizaran la integridad territorial (que con frecuencia estaban destinados a convertirse en “papel mojado” muy pronto ante el reiterado incumplimiento de las promesas reales); y la oposición política a las dádivas de los monarcas. Si bien ambas medidas demostraron muy escasa eficacia, la resistencia concejil al proceso enajenatorio no concluirá una vez asentados los nuevos señoríos en sus antiguas aldeas: se recrudecerá a finales de la Edad Media dentro de una estrategia de control y defensa de la Tierra que estudiaré en el próximo capítulo.

---

<sup>83</sup> Como se plantea en VACA LORENZO, A.- “Recesión económica y crisis social de Castilla en el siglo XIV”, en WICKHAM, Ch. y otros- *Las crisis en la Historia*, Salamanca, 1995, págs. 33-55.

En un principio la enajenación suele limitarse a las rentas reales, destacando las alcabalas, con la excepción de la moneda forera que se reservaba el monarca. No afectaba por tanto al ámbito jurisdiccional, que sigue en manos del concejo madrileño. Pronto, sin embargo, los nuevos señores van extendiendo su poder y, mediante una política de hechos consumados o bien por la propia concesión real, consiguen incorporar la jurisdicción, algo que resulta completamente habitual en la etapa bajomedieval.

El proceso de señorialización de la Tierra madrileña comenzó con la aldea de Torrejón de Sebastián Domingo, que recibirá más tarde el nombre de Torrejón de Velasco. En 1294 Sancho IV cedía a Gonzalo Ruiz de Toledo, alcalde mayor de Toledo y mayordomo mayor de la reina, las rentas reales sobre dicha aldea, "en término de Madrid", pero sin hacer mención a la jurisdicción.<sup>84</sup> La consecución de ésta fue el resultado de la estrategia desarrollada por el propio Gonzalo Ruiz, que comenzó consiguiendo que los vecinos, reunidos en concejo, decidieran "espontáneamente" conceder a su señor una serie de prestaciones en trabajo, rentas en dinero y en especie, así como el derecho de tanteo, prohibiéndose además la venta de cualquier heredad a alguien que no fuera campesino. Tan generosos presentes fueron confirmados por un privilegio de Fernando IV en 1305, avanzando así en la consecución de un señorío total de facto.<sup>85</sup>

Sin embargo, el concejo madrileño no cesó en su oposición. Aprovechando una actitud mucho más favorable a los intereses madrileños por parte de Alfonso XI, vio ratificada en 1327 su soberanía frente a la actuación que venía desarrollando el yerno de Gonzalo Ruiz, Lope de Velasco (de quien procede el actual nombre de Torrejón de Velasco). Se prohibía a éste nombrar oficiales (señal de jurisdicción) y usurpar cualquier otra atribución que perteneciera a la Villa, cuyos cogedores además eran los encargados de recaudar y distribuir las rentas que perteneciesen al titular del señorío.<sup>86</sup> De nuevo en 1348 el mismo rey volvía a reconocer y apoyar decididamente el señorío urbano al ordenar a los hijos del señor de Torrejón que se presentasen ante él para dar cuenta del levantamiento de una horca, símbolo de una jurisdicción que sólo pertenecía a Madrid.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> *Documentos, 2ª serie*, t.I, págs. 7-8.

<sup>85</sup> *Ibidem*, págs. 9-17.

<sup>86</sup> *Documentos*, t.I, págs. 233-234.

<sup>87</sup> *Ibidem*, págs. 317-319.

Este largo tira y afloja concluiría con Enrique II, un monarca que ,dentro de su política de recompensas a la nobleza que le había ayudado en su ascenso al trono, en 1366 cedió Torrejón a Fernando Alvarez de Toledo, notario mayor del reino de León, esta vez con "justiça alta e baxa e juridiçion çebil e criminal, mero misto imperio ... en tal manera que vos e los que de vos vinieren ayades la dicha juridiçion e justicia, segun dicho es, bien e conplidamente, segun que nos pertenezca e pertenecer en qualquier manera, e apartamos el dicho lugar de Torrejon e su termino de la juridiçion e justicia de Madrid",<sup>88</sup> lo que sería confirmado por Juan I en 1379.<sup>89</sup>

El reinado de Alfonso XI supuso un relativo paréntesis en la dinámica señorializadora en Madrid: no sólo apoyó a la villa en el caso de Torrejón, como hemos visto, sino que incluso devolvió la aldea de Pinto que había dado a Martín Fernández, notario mayor del reino.<sup>90</sup> Sin embargo, parece que la reintegración no tuvo mucho efecto práctico o se llevó a cabo una enajenación posterior, pues la aldea quedará al margen de Madrid. Por su parte, la vecina localidad de Parla pasó a manos del mariscal Pedro Barroso en 1338.<sup>91</sup>

Esta primera fase de desmembración del señorío urbano tiene un impacto limitado: se concreta en tres aldeas. Sin embargo, es de resaltar el que estas localidades se encuentren muy cercanas entre sí en el sur de la Tierra madrileña, y que todas ellas vayan a parar en un primer momento a la nobleza toledana. Sin duda ésta extiende su control territorial hacia una zona en la que no existe una nobleza tan asentada y poderosa como para frenar su expansión señorializadora.

Pero a mediados del s. XIV la nueva dinastía Trastámara inaugura una intensa etapa de enajenaciones, en las que ahora ya hay una mención explícita de la jurisdicción, con lo que los términos señorializados eran completamente independientes de la Villa.

Por su amplitud y cercanía a Madrid destaca la cesión por Enrique II en 1369 de los lugares de Alcobendas, Barajas y Cobeña a Pedro González de Mendoza. De esta forma el monarca saldaba una doble cuenta política, premiando la fidelidad de uno durante la guerra civil

---

<sup>88</sup> *Documentos, 2ª serie*, t. I, págs. 65-67.

<sup>89</sup> *Ibidem*, págs. 127-129.

<sup>90</sup> *Documentos*, t.I, págs. 387-390

<sup>91</sup> LOPEZ GARCIA, J. M., dir- *El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moderna*, Madrid, 1998, p. 25.

y compensándole por los daños sufridos en el término de Madrid, y castigando a un concejo que había apoyado al rey legítimo durante la guerra civil, pues en la concesión se recordaba "el tiempo que la dicha nuestra villa estaba en nuestro deservicio". Una donación que curiosamente se realiza sólo un año después de que el mismo rey hubiese devuelto a Madrid todas las aldeas que anteriormente le había separado.<sup>92</sup> De forma que ahora era el norte de la Tierra madrileña el área afectada, conformándose un importante estado señorial, que sin embargo terminaría fragmentado en diversas casas titulares.

Sus sucesores profundizaron esta política hasta el punto de que Juan I amplió la señorialización a todo "Madrid e su término" al cederla en 1383 a León V de Armenia, que andaba desterrado por estos lares. Las protestas del concejo arreciaron de tal modo que el monarca tuvo que prometer que la cesión al armenio había sido sólo durante su vida, y que una vez muerto regresaría a su condición de realengo. Los representantes madrileños prestaron homenaje a su nuevo señor feudal, que reconoció todos los privilegios y confirmó a los oficiales. Pero el señorío de León V apenas rebasó el terreno de lo anecdótico pues resultaría efímero, con lo que la Villa y Tierra volvieron a su habitual pertenencia al realengo.<sup>93</sup>

La resistencia del concejo no se limitaba a este intento de enajenación de todo el término concejil, sino que a comienzos del s. XV todavía seguía protestando y reclamando ante la autoridad real la mayor parte de las localidades que habían sido señorializadas en el pasado. Que no se reconocía la situación lo demuestra el que en 1405 la Villa obtuvo de Enrique III el envío del juez Juan González de Acevedo, oidor de la Audiencia Real, con el encargo de tratar los pleitos y reclamaciones que Madrid formulaba acerca de "que algunas personas poderosas, asi omnes commo mugeres le han entrado e tomado e tienen por fuerça e contra su voluntad çiertos lugares de la dicha Villa e su termino, conuiene a saber, Pinto e Torrejón de Sauastián Domingo e Parla e Baraxa e La Alameda e Alcouendas e Fuentedueña, e han cogido e leuado todos los frutos e rrentas e esquilmos dellos e vsado de la justicia, despojando a la dicha Villa de todo".<sup>94</sup> Conocemos el resultado de la pesquisa realizada en el caso de Pinto: el juez atendió la reclamación de Madrid ordenando a Juana Meléndez, viuda de Pedro Suárez de Toledo "que

---

<sup>92</sup> *Documentos*, t.I, págs. 387-390

<sup>93</sup> Véase MILLARES CARLO, A.- "León V de Armenia y el señorío de Madrid", en *Contribuciones documentales a la historia de Madrid*, Madrid, 1971, págs. 210-212

<sup>94</sup> *Documentos*, 2ª serie, t.I, págs. 381-382.



dexades e desenbargedes e entregedes luego libre e desenbargadamente al dicho Conçejo e regidores e ofiçiales de la dicha Villa de Madrid el dicho lugar de Pinto”, reconociéndole el derecho a reclamar esta decisión ante la Real Audiencia,<sup>95</sup> en la que tendrían más eco los argumentos de los señores, pues no hubo variaciones en la situación jurisdiccional de estas localidades.

A comienzos del s. XV estaban asimismo señorializados una serie de aldeas (algunas ya recogidas en el documento citado anteriormente) que andando el tiempo se convertirían en despoblados, con lo que perdieron ese carácter de señorío jurisdiccional. Era el caso de La Alameda (junto a la ya enajenada Barajas), Torrejón de la Ribera o Torrejoncillo (al norte de la misma localidad de Barajas), Fuentidueña (en las cercanías de otro núcleo señorial como Alcobendas), La Aldehuela (en el entorno de la desembocadura del Manzanares en el Jarama), Polvoranca (cerca de Leganés) y Romanillos (en la ribera del Guadarrama).<sup>96</sup> La mayoría se despobló a lo largo de este siglo: a comienzos del XVI, sólo La Alameda y Polvoranca seguían habitados, si bien pronto dejarían de estarlo.

A mediados del XV la villa madrileña va a sufrir otro fuerte embate desmembratorio, concentrado en el reinado de Juan II. Con sus antecesores el concejo madrileño recibía tradicionalmente un reconocimiento de sus privilegios y términos, así como la garantía de no proceder a nuevas cesiones de éstos, algo que no solía resultar muy efectivo. Con este monarca el panorama no podía presentarse más tranquilizador: en 1439 prometía no enajenar ninguna villa o ciudad de la corona, procurando acallar los rumores que habían circulado por todo el reino en tal sentido y que, a la luz de los acontecimientos posteriores, no iban nada desencaminados.<sup>97</sup> Poco después, en 1442 ampliaba las garantías reales en tal sentido al inscribir a la Villa y Tierra de

---

<sup>95</sup> *Ibidem*, págs. 383-387.

<sup>96</sup> Según datos de VERA YAGÜE, C. M.- *Territorio y población en Madrid y su Tierra en la Baja Edad Media. La señorialización del espacio madrileño y la repoblación concejil “antiseñorial” en los siglos XIV a XVI*, Madrid, 1999, p. 25. Utiliza fundamentalmente la información de las visitas al arcedianazgo de Madrid de 1427.

<sup>97</sup> Después de denunciar “que algunas personas mouidos con mal propósito al fin de escandalizar mis çibdades e villas de mis regnos e de sembrar zizania e discordia en ellas e poner toda indignación entre mi e ellos han diuulgado e dicho algunas cosas en mi deseruizio”, afirmaba: “por la presente çertifico e prometo por mi fe rreal que nunca por mi pensamiento lo tal passo, nin lo entiendo fazer, nin dar, nin apartar de mi corona rreal las tales çibdades e villas nin sus tierra e terminos”. *Documentos*, t. II, págs. 313-315.

Madrid en el mayorazgo de la Corona de Castilla lo que evitaría cualquier desmembramiento de sus términos.<sup>98</sup>

Pero ya 1439 había cedido a Pedro de Luján las aldeas madrileñas de Palomero y Pozuela, situadas cerca de Torrejón de Velasco y que más tarde se convertirán en despoblados. El procedimiento resultó un tanto vergonzante. En primer lugar fueron apartadas de la Villa: “por la presente vos esimo e aparto de la tierra e termino e juridicion e subjecion e sennorio de la dicha villa de cuya tierra e juredicion auedes seydo fasta aquí, e que ayades e tengades e podades auer e tener termino e juredicion apartada mente por vos otros e sobre vos otros”. Para pasar solamente tres días después a otorgarlas a Pedro de Luján: “con los vasallos que en los dichos lugares ay, e con la juredicion e justicia ceuil e criminal e mero e mixto imperio... e con sus terminos e prados e pastos e exidos e jurediciones e con el monte que llaman de los bunberos, que es de la dicha palomero”. Este caso nos ilustra sobre las disensiones en el interior del concejo pues el beneficiario de la enajenación territorial era regidor. Al ser convocado Madrid a recibirle como señor de Palomero y Pozuela la asistencia al cabildo fue mínima: tan sólo un alcalde (que sustituye a otro ausente de la ciudad) y dos regidores (siendo uno precisamente el propio beneficiario del señorío). En la notificación del pregonero quedaba constancia de haber avisado a otros dos regidores, uno de los cuales alegó estar comiendo y otro "dixo que non se encuentra bien e que estaua echado en vna cama".<sup>99</sup>

Especial significado tiene la enajenación durante este reinado de Cubas y Griñón a Luis de la Cerda en 1445. Ambos lugares, pertenecientes a la Tierra de Madrid, ya habían cedidos en el siglo anterior a Juan Ramírez de Guzmán, pero le fueron embargados finalmente por la hacienda real. Sacados a subasta, fue el propio concejo urbano quien realizó la compra, por un monto total de 8.000 doblas de oro castellanas en 1374.<sup>100</sup> Ni siquiera este título de compra pudo

---

<sup>98</sup> En la real cédula se recoge una fórmula totalmente garantista que no tendrá ningún efecto práctico: “que la dicha mi villa de Madrid e su tierra e aldeas e terminos e jurisdicción alta e baxa e justicia ceuil e criminal e mero misto imperio e rentas e pechos e derechos e penas e calonnas e otras cosas quales quier pertenecientes al sennorio de la dicha villa e su tierra para siempre jamas inmediate mente, sean e figuren e queden en mi dominio e de los Reyes e con los Reyes e para los Reyes que después de mi rregnaran en castilla e en leon, e de la corona e con la corona”. *Documentos*, t. III, págs. 21-35.

<sup>99</sup> *Documentos*, t.II, págs. 317-326.

<sup>100</sup> *Documentos*, 2ª serie, t. I, págs. 81-120. Esta política de adquisición de lugares por parte del concejo para ampliar su señorío adquirió una gran importancia en localidades como Burgos, Valladolid o Toledo, que compró los Montes de Toledo. Sin embargo, el caso de Madrid era diferente, pues se trataba de recuperar localidades que ya habían sido parte de su término.

evitar la cesión de Juan II. Las protestas de la ciudad arreciaron de tal modo que el rey concedió a Madrid dos ferias francas al año, en las que las transacciones realizadas no estarían sometidas al pago de alcabalas.<sup>101</sup> No parecía suficiente recompensa para los madrileños, que se negaron a otorgar el consentimiento a la cesión que se les pedía, por lo que el rey terminó por despojarles en 1449 de las dos ferias.<sup>102</sup>

A fines de la Edad Media, por tanto, la Tierra de Madrid había sufrido una considerable merma territorial: un total de dieciséis aldeas habían sido cedidas.<sup>103</sup> de las que seis ya no estaban habitadas al comenzar la época moderna. Es difícil precisar la superficie que alcanzaban, puesto que los términos de los despoblados se incluirán posteriormente dentro de los límites de otras localidades; además, algunos de estos señoríos, como analizaré en el próximo capítulo, no dispusieron de término propio más allá de los núcleos de población, lo cual reducirá la extensión del señorío en la territorio madrileño.<sup>104</sup> Más significativa resulta la distribución espacial, ya que presentan un alto grado de concentración en el nordeste y especialmente en el sur de la Tierra, suponiendo la separación casi total de esta zona, en la que quedaba aislada la madrileña aldea de Casarrubuelos y la puebla que desarrollará el concejo en Torrejón de la Calzada.

Como resultado del proceso señorializador se había constituido una nobleza territorial firmemente asentada en el entorno madrileño. A la casa del Infantado que controlaba el Real de Manzanares, se unía una pequeña y mediana nobleza cuya procedencia se había diversificado notablemente en el último siglo medieval. Si en un primer momento el origen de los nuevos señores era casi exclusivamente toledano, los avatares políticos y de las estrategias familiares determinaron la presencia de algunas familias madrileñas que formaban parte de la

---

<sup>101</sup> *Documentos*, t. III, págs. 63-67.

<sup>102</sup> La causa de la anulación quedaba claramente expresada: Madrid “nunca ha dado nin otorgado el dicho consentimiento a la dicha merced que fize de los dichos lugares al dicho Luis de la cerda en caso que ge lo he enviado mandar, por lo qual es mi merced de rreuocar e por la presente rreuoco... las dichas ferias de la dicha franqueza de las mis alcaualas”. *Ibidem*, págs. 79-81.

<sup>103</sup> A principios del XVI aparece Mejorada del Campo bajo el dominio jurisdiccional del obispo de Segovia. LOPEZ GARCIA, J. M., dir- *El impacto de la Corte en Castilla*, p. 45, n. 66.

<sup>104</sup> Sólo como una referencia muy aproximativa, se puede comparar este número de dieciséis localidades con los ochenta y un núcleos de población que permanecerían en el realengo madrileño en el s. XV, o los setenta y nueve de finales de esa centuria, según los recuentos de VERA YAGÜE, C. M.- *Territorio y población en Madrid*, págs. 22-25 y 47-51 respectivamente. Pero se trata de todas las entidades que se han documentado pobladas, independientemente de su categoría: aldeas, simples alquerías, despoblados sucesivos (en los que la población se desplaza a otro núcleo que también puede llegar a ser despoblado).

oligarquía local ocupando el cargo de regidor. Es el caso de los Zapata, titulares de las localidades de Barajas, La Alameda y Torrejón de la Ribera a fines del s. XV. La familia Mendoza también estaban presentes en Cobeña, bajo el título de condes de Coruña.

Por su parte, de origen segoviano es una familia llamada a tener una trascendental presencia en el entorno madrileño: los Arias Dávila.<sup>105</sup> Desde el puesto de regidor de la ciudad, Diego Arias protagonizó un meteórico ascenso social y político bajo la protección de Enrique IV, a quien sirvió como contador mayor del reino y secretario real. En medio del caos político reinante en Castilla, él y sus descendientes fueron afianzando un importante patrimonio inmueble así como numerosos cargos y prebendas políticas. Tendieron a concentrar sus dominios en los sexmos segovianos situados al sur del Sistema Central; una presencia que se extendió a la Tierra de Madrid al recibir, en recompensa por sus servicios políticos, el señorío de Alcobendas en 1457, al que se añadiría el de Torrejón de Velasco en 1465. Un estado señorial completado con la compra de Palomero y Pozuela a Pedro de Luján.<sup>106</sup> Precisamente el título de señor de Torrejón de Velasco fue uno de los más utilizados por la familia hasta su definitivo encumbramiento a la nobleza en 1529 con el título de conde de Puñonrrosto. Una preferencia que iba acompañada por un asentamiento cada vez más decidido en Madrid, nuevo epicentro de sus intereses económicos y políticos. Aquí protagonizarán una relación especialmente conflictiva con el concejo. Un concejo que no permaneció inmóvil ante la marea enajenatoria, sino que será capaz de presentar una auténtica ofensiva antiseñorial para asegurarse el control del territorio.

---

<sup>105</sup> Un estudio sobre el origen y evolución de este linaje en ASENJO GONZALEZ, M.- *Segovia. La Ciudad y su Tierra a fines del Medievo*, Segovia, 1986, págs. 356-374.

<sup>106</sup> AVM-S, 3-125-6.

## MAPA 2

### LA TIERRA DE MADRID EN LA EDAD MEDIA



#### 4- LA FORMACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN: EL CONCEJO DE VILLA Y TIERRA DE MADRID

La evolución institucional, social y económica de Madrid, con sus lógicas particularidades, se ajusta al modelo general del concejo de villa y tierra castellano planteado en el primer apartado. A grandes rasgos podemos sintetizarlo en el proceso de formación del concejo como órgano de gobierno y de su creciente control por parte de una oligarquía que tendrá su origen en la caballería villana; paralelamente este concejo fue configurando un señorío urbano sobre las aldeas y los habitantes de la tierra. El objetivo de este epígrafe es por ello doble: por un lado analizar la consolidación de la institución concejil urbana, y por otro determinar cómo el dominio señorial de la ciudad sobre el campo, junto con la creciente desigualdad entre privilegiados y pecheros, provoca un proceso de articulación de mecanismos de defensa de los intereses tanto del “común de vecinos” (urbanos y rurales) como de la Tierra madrileña.

##### 4.1 – CONCEJO, OLIGARQUÍA Y SEÑORIO URBANO

Desde el momento de la conquista cristiana de Madrid comenzó el proceso de encuadramiento en las estructuras institucionales y sociales del reino. La parquedad de la documentación conservada para este período puede ser parcialmente paliada por la comparación con otros casos mejor ilustrados. Así, en un primer momento las tareas de gobierno y defensa estarían en manos de un “señor” nombrado por el rey<sup>107</sup> que, junto con otros oficiales de similar designación, configurarían el *palatium*. A la vez comenzaría a funcionar el *concilium* o asamblea general de vecinos, caracterizado por una participación abierta en determinados asuntos de interés común, especialmente los referidos a la actividad económica. La normativa legal aplicable en un primer momento sería el Fuero Viejo de Toledo, que fue confirmado por varios representantes madrileños. Por su parte la organización social respondería al carácter fronterizo de este núcleo, en el que no hay una traslación de las estructuras jerárquicas que se han consolidado al norte del Duero. Sin ser una sociedad estrictamente igualitaria, no existiría todavía una división clara entre grupos dominantes y explotados; por el contrario la guerra supondría en

estos momentos un factor de movilidad social para un grupo de villanos en torno a la caballería popular, protagonista de unas milicias concejiles de tanta trascendencia militar.

A partir de mediados del s. XII asistimos en el caso madrileño a un proceso de consolidación del concejo al reconocérsele por parte del monarca entidad jurídica; de esta forma ya no opera sólo como asamblea de vecinos, sino como municipio o entidad político administrativa que organiza un territorio. Es precisamente en el acto de concesión de términos a Madrid cuando se reconoce la existencia de su concejo: el ya citado privilegio de Alfonso VII de 1152 se dirige a “vobis concilio de Maydrit et omnibus posteris vestris quicumque in Maidrit habitaverint”, fórmula mantenida por sus sucesores, como Alfonso VIII al confirmar la donación anterior en 1176: “vobis concilio de Madrit universo presenti atque futuro”.<sup>108</sup> Medida que se integra en la política de organización institucional de la Extremadura castellana y la Transierra por parte de Alfonso VII en torno al reconocimiento y consolidación de los concejos de villa y tierra.

A partir de este momento, al igual que sucede en otras muchas localidades, Madrid aprovecha su creciente autonomía para dotarse de un ordenamiento legal propio y privilegiado, el *Fuero* que se articulará en el año 1202. Clara manifestación del localismo jurídico medieval, el fuero madrileño es una recopilación de diversas normas elaborado por el propio concejo con el asentimiento del monarca.<sup>109</sup> El texto conservado se centra especialmente en la regulación de la convivencia dentro de su ámbito territorial, con disposiciones de carácter penal. En cambio son escasas y circunstanciales las referencias a temas tan importantes como la organización política del concejo, la hacienda municipal o la regulación de la actividad económica que sí aparecen en fueros extensos posteriores.

Lo que puede deducirse tanto del Fuero como de la todavía escasa documentación del período es la pervivencia del concejo abierto como mecanismo básico de toma de decisiones,

---

<sup>107</sup> Datos sobre estos “dominus villae” en el Madrid de los s. XI al XIII en GONZALEZ, J.- *Repoblación de Castilla la Nueva*, t. I, p. 123.

<sup>108</sup> *Documentos*, t. I, págs. 13-15 y 17-18 respectivamente.

<sup>109</sup> Galo Sánchez señala que el sentido del Fuero de Madrid “reside en marcar la transición, dentro de la serie de los fueros que se dan a sí mismos los Municipios, en primer lugar de los de tipo breve a los de tipo extenso y en segundo término de los que consignan explícitamente el asentimiento del monarca –acaso ya una mera fórmula- a los que ni siquiera hacen mención de tal formalidad”. SÁNCHEZ, G.- “El Fuero de Madrid y los derechos locales castellanos”, en *El Fuero de Madrid*, Madrid, 1963, págs. 11-33 (la cita en p. 26). Sobre este texto, además GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, R.- *El Concejo de Madrid. Su organización en los siglos XII a XV*, Madrid, 1949, págs. 15-20.

pero si bien se mantiene su carácter asambleario se van constituyendo cargos u oficiales del concejo que van adquiriendo cada vez más importancia y autonomía política y administrativa. Hasta el punto de que el fuero recoge la existencia de un denominado “conzeio maior” (rúbrica LXXV), seguramente constituido por la reunión de la asamblea vecinal con los cargos concejiles.

Por otro lado, resulta evidente una tendencia clara hacia la desigualdad social, configurándose estructuras jerárquicas de carácter vertical. El protagonismo en este sentido corresponde a la "caballería villana o popular", inicialmente no noble pero que durante este período irá consolidando su situación privilegiada (económica, legal y políticamente) hasta constituir en buena medida la nobleza urbana bajomedieval, proceso común en las ciudades castellanas situadas al sur del Duero en los siglos XII y XIII. Dirigentes de las milicias concejiles y perfectamente adaptados a las necesidades de ocupación y defensa militar de un territorio expuesto a razzias e invasiones, el propio avance triunfal de la conquista cristiana fue cercenando una de sus bases económicas fundamentales: el botín de guerra. Cada vez más lejanos los campos de batalla y las posibilidades de rápido enriquecimiento mediante la simple apropiación de bienes, estos guerreros se vuelcan al desarrollo ganadero (de carácter trashumante en amplias zonas), pero también a la acumulación de propiedades en los alrededores de las ciudades, escenario de su residencia. Un ejemplo de esta orientación económica en el caso madrileño es la titularidad por parte de los caballeros de numerosas alquerías, según se aprecia en la información presentada por el concejo al rey en 1312 para defender sus derechos sobre el Real de Manzanares.<sup>110</sup>

Desde comienzos del s. XIII la caballería villana fue recibiendo por parte de la monarquía una serie de privilegios (fiscales, económicos, jurídicos) que dieron lugar a su progresiva aristocratización. A la vez, y contando asimismo con el decidido apoyo regio, incrementa su control sobre los órganos de gobierno concejil, cuyos cargos conseguirá reservarse aprovechando el fortalecimiento de la autonomía municipal. Este hecho provocó la transformación del propio concejo, que incrementa los lazos de dominación y explotación sobre su término, configurándose así un auténtico señorío concejil.

Un proceso que se constata en la villa madrileña a partir del reinado de Fernando III, que concedió en 1222 ordenamientos forales a una serie de concejos de la Extremadura y la Transierra. Se conservan los de Avila, Uceda, Peñafiel y Madrid, cuyo texto se repite con muy

---

<sup>110</sup> *Documentos*, t. I, págs. 209-212



ligeras variantes, pero su ámbito de aplicación debió ser más extenso. Representa “una nueva política de ordenación general del reino”,<sup>111</sup> sin duda motivada por el excesivo localismo jurídico imperante. En estos Fueros se establecía que era el concejo el encargado del nombramiento de sus “aportellados et adelantados”, es decir, los oficiales responsables del funcionamiento municipal. Pero estos cargos quedaron reservados exclusivamente a los caballeros que fueran vecinos de las villas cabeceras: “Qui non tenerit domum populatum in uilla, et non habuerit equum et arma, non habeat portellum”. Un monopolio de cargos que aumentará el control del concejo que este grupo social ha comenzado a practicar con anterioridad.

También la situación de los términos concejiles era regulada por esta normativa legal. En primer lugar se especificaba un estatuto de dependencia de las aldeas respecto a los concejos urbanos, prohibiéndose la separación de la tierra en la que estaban integradas: “De aldeis taliter est statutum: uidilicet, quod aldee non sint separate a uilla uestra; immo sint cum uilla eo modo quo erant tempore regis Alfonsi, bone memorie, aui mei”.<sup>112</sup> Por otro lado se apuntaban las motivaciones fiscales de la intervención regia, pues se fijaba un mecanismo de recaudación de tributos dentro de cada término mediante la generalización de los sexmeros como agentes fiscales de la monarquía, aspecto que será desarrollado al tratar de la articulación de la Tierra madrileña.

Fue el reinado de Alfonso X el período decisivo en la consolidación de la caballería como grupo privilegiado. El programa del monarca buscará generar una élite dirigente en las ciudades encargada de la recaudación fiscal, quedando integrada así en la política de reforzamiento de la autoridad monárquica y equilibrio con otros poderes del reino.<sup>113</sup> Entre 1255 y 1265 los caballeros villanos de los principales concejos del reino recibieron por parte del rey importantes privilegios fiscales. En 1262 fue el turno de Madrid: a los caballeros “que touieren las mayores casas pobladas en la uilla de Madrit... e touieren cauallo e armas e el cauallo que

---

<sup>111</sup> MARTINEZ LLORENTE, F. J.- *Régimen jurídico de la Extremadura castellana*, págs. 218-225 (la cita, en p. 219). Este autor interpreta los Fueros de 1222 como un intento de intromisión real en la autonomía concejil. Creo, sin embargo, que se puede considerar este texto en un sentido contrario: al reconocer al concejo la capacidad de elección de sus oficiales, sancionaba de manera rotunda la decadencia del *palatium* y la definitiva imposición del *concilium* como forma de gobierno.

<sup>112</sup> Las citas proceden del ejemplar del Fuero de 1222 otorgado a Madrid, *Documentos*, t. 1, págs. 231-236

<sup>113</sup> Una visión general de este proceso en MONSALVO ANTÓN, J. M.- “Transformaciones sociales y relaciones de poder”, págs. 159-167, que concluye: “Alfonso X necesita apoyos políticos en las ciudades para su programa de reajuste estatal, del que desconfiaba la nobleza. Necesita también recursos, en gran medida para financiar este proyecto y para transferir dinero a una nobleza esquiva y reticente –al finalizar el ciclo expansivo de la conquista- mediante *honores* y “*tierras*”, es decir soldadas vasalláticas. El apoyo lo encuentra en unas sólidas capas dirigentes de las ciudades que aseguran ambas finalidades”, págs. 166-167.

uala de treynta morauedis a arriba” además de un equipo militar completo, se les otorgaba la exención fiscal: “que non pechen por los otros heredamientos que ouieren en las cibdades e en las uillas e en los otros logares de nuestros regnos”. A ello se unía la concesión de excusados: la exención fiscal se extendía a sus trabajadores dependientes, si bien su número venía fijado por la riqueza del caballero: “que escusen sus paniaguados, e sus pastores, e sus molineros, e sus amas que criaren sus ffijos, e sus ortolanos, e sus yugueros, e sus colmeneros, e sus mayordomos que ouieren”.<sup>114</sup> Por su parte, el infante don Sancho ampliaba en 1282 la franquicia al pago de la moneda forera a los "caballeros armados y equipados", que se hacía extensivo a sus viudas e hijos.<sup>115</sup>

Estas medidas suponen en primer término sancionar la división social entre un grupo privilegiado y el resto no privilegiado, los pecheros, que progresivamente desarrollarán mecanismos de protesta y defensa de sus intereses. Pero también diferencias económicas y jerarquización dentro de la misma caballería. Por otro lado, ponen claramente de manifiesto la importancia económica que estaba adquiriendo esta nueva oligarquía, asegurándoles además una mayor rentabilidad de sus explotaciones al disponer de una mano de obra con menor carga tributaria, lo que se traduciría tanto en el pago de mayores rentas como en la facilidad para disponer de una oferta abundante de trabajadores. Unos intereses económicos que se centran cada vez más en la explotación del territorio que rodea a la villa, la "Tierra".

A mediados del s. XIII, por tanto, la caballería se está asegurando un firme control del poder local madrileño. A ello se une la creciente autonomía municipal, como lo demuestra su capacidad para el nombramiento de sus oficiales, así como la ampliación de sus potestades jurisdiccionales.<sup>116</sup> Situación que coincide –sin ser contradictorio– con los intentos regios para imponer una creciente uniformidad de los códigos legales. Se crean así las condiciones para que la organización del término que el concejo viene desarrollando genere la consolidación de un auténtico señorío corporativo de la Villa sobre la Tierra. En efecto el territorio que Madrid

---

<sup>114</sup> *Documentos*, t. I, págs. 85-92.

<sup>115</sup> *Ibidem*, págs. 127-128.

<sup>116</sup> Una idea de la jurisdicción efectiva que llegaron a gozar los poderosos de la ciudad nos la da el privilegio de 1327 por el que Alfonso XI concedía "lo que me pediestes que todos los pleitos de madrit e de su termino que primera miente sean oydos e librados por los alcajldes de y de madrit por uuestro fuero, e que yo nin los mios alcajldes que non conoscamos de ninguno destos pleitos quelos alcajldes dende non pueden conocer dellos que son mios de librar". *Ibidem*, págs. 231-236 (cita en p. 232)

controla desde la repoblación va a estar cada vez más sometido a los intereses del concejo, es decir, de la oligarquía que lo dirige.

Este *señorío urbano* se constituye desde el punto de vista formal<sup>117</sup> con la *titularidad concejil* sobre las aldeas del término. La base de la jurisdicción de Madrid radica en la cesión del monarca. A partir de las concesiones territoriales fijadas en los privilegios de la segunda mitad del s. XII y de su repoblación efectiva, la Villa fue afirmando el control directo sobre las aldeas, recurriendo a la sanción regia de lo que parece ser una situación de hecho y que de esta forma adquiere un rango jurídico. En la ya citado Fuero otorgado por Fernando III en 1222 se hacía por primera vez referencia expresa al sometimiento de las localidades aldeanas. Medio siglo más tarde, Alfonso X completó y perfiló los lazos jurídicos de dependencia de la Tierra respecto al concejo urbano. En un primer momento (1272) lo hacía mediante la confirmación de los privilegios anteriores debido a los "muchos seruicios que de caualleros e el conceio de Madrit fizieron a nuestro linage e a nos". Los debates se centraban en tres temas que afectaban directamente a los intereses de la caballería: "en razon de los escusados que deuen tomar e de los Alardes que han de fazer, e de los pueblos que han de guardar que usen de cada una destas cosas segund dizen los priuilegios que les diemos que fablan en estas razones". En suma, los caballeros se garantizaban sus privilegios fiscales, el cierre frente a las pretensiones de ascenso social de otros grupos y el control de las aldeas de la Tierra.<sup>118</sup> Pero en 1275 el monarca precisaba mucho más este sometimiento al conceder a Madrid su término en concepto de juro de heredad y con plena libertad de disposición: "tengo por bien e mando que destos lugares dichos que son fasta Maydryt, que son uestros heredamientos e son ffuera del rreal que ussedes delllo e en ello uos los de Maydrit e de uestro termino a toda uuestra uoluntad commo de uestro propio. Et otorgo uos lo e confirmo uos lo por uestro que lo ayades daqui adelante, assi lo poblado commo lo non poblado por juro de heredad para siempre xamás".<sup>119</sup>

Una vez asegurado los derechos legales sobre la Tierra, el siguiente paso en la concreción del señorío corporativo urbano consiste en la *reserva de su explotación* por parte de

---

<sup>117</sup> No entro a desarrollar aquí –no es el objetivo de este trabajo– los componentes de este señorío: atribuciones jurisdiccionales, económicas y fiscales. Será en el próximo capítulo donde analizaré el componente señorial en la organización del régimen comunal de villa y tierra.

<sup>118</sup> *Documentos*, t. I, págs. 113-117 (cita en p. 114).

<sup>119</sup> *Ibidem*, págs. 123-126 (cita en p. 124). Este segundo documento se trata de una especie de “compensación” puesto que en él se recogen los límites con el Real de Manzanares, que este monarca había puesto bajo su tutela.

la oligarquía madrileña. De nuevo gracias a su posición privilegiada en los aparatos de poder local va a conseguir en un importante grado la exclusión de posibles competidores en la obtención de las rentas generadas por el campesinado. Para ello cuenta con la connivencia de la monarquía, interesada en ocasiones en limitar la enajenación de términos en grupos con fuero propio, como nobles, órdenes militares, así como judíos y musulmanes, debido a la disminución de ingresos fiscales que suponía. De nuevo es a comienzos del s. XIII, en 1238, cuando Fernando III concede al concejo madrileño un privilegio en este sentido.<sup>120</sup> Ratificado por su sucesor en 1261,<sup>121</sup> se convirtió a partir de entonces en componente habitual de las confirmaciones de privilegios madrileños que realizaron los sucesivos reyes.

Dentro del marco de crisis general y de recomposición del sistema feudal que caracteriza al período bajomedieval se producen significativos cambios que afectan al concejo madrileño y por ende a la relación entre Villa y Tierra. Destaca el lento pero irreversible avance de la afirmación del poder monárquico, con la consiguiente uniformización institucional y legal dentro del ámbito del realengo. Las convulsiones políticas en Castilla, reflejo de la inestabilidad económica y social, marcan un ritmo desigual de este proceso, que sólo encuentra su plena culminación en el reinado de los Reyes Católicos. Los dos principales hitos por lo que respecta al ámbito municipal se inician durante el reinado de Alfonso XI a mediados del s. XIV y resultan bien conocidos: la generalización del regimiento y la paulatina imposición de un delegado directo del poder real al frente del ayuntamiento, el corregidor, que se impondrá definitivamente en la centuria siguiente. Estas medidas, en realidad, no significaban un cambio radical por parte de este monarca en la política del poder central hacia los municipios, sino que se enmarcaban en una línea desarrollada por sus antecesores, sin desestimar por ello su trascendencia en la evolución posterior de los concejos castellanos.<sup>122</sup>

La interpretación de estos cambios como un avance claro hacia la centralización del poder a costa de la autonomía de los municipios, que perderían a partir de entonces importancia política, ha sido rebatida en recientes investigaciones, especialmente en lo que hace referencia al

---

<sup>120</sup> *Ibidem*, págs. 71-72.

<sup>121</sup> *Ibidem* págs. 83-84.

<sup>122</sup> “El desplazamiento de la organización ciudadana hacia modos oligárquicos fue, ciertamente, anterior a Alfonso XI, lo cual no disminuye la importancia de las medidas adoptadas por dicho rey, que modelaron los mecanismos institucionales que habían de servir para gobernar las ciudades castellanas hasta los años iniciales del siglo XIX: corregidores y regidores”. GONZALEZ ALONSO, B.- “Sociedad urbana y gobierno municipal en Castilla (1450-1600)” en *Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen. Las Comunidades de Castilla y otros estudios*, Madrid, 1981, p. 62.

nombramiento de regidores. En efecto, su designación reflejaría el poder que han alcanzado las oligarquías locales. Pero además permitirá afianzar a estos poderosos que van a ser los primeros interesados en mantener y ampliar la autonomía concejil, así como el señorío corporativo sobre la Tierra. Se trata, en definitiva, de una institucionalización de la toma del poder concejil por parte de una oligarquía urbana procedente de la caballería y cada vez más integrada en la baja nobleza, que va a constituir un referente sólido de apoyo y alianza con la monarquía. Por tanto, sólo la aparición de los corregidores, todavía no consolidados en el esquema gubernamental del municipio, nos remitiría a la intención centralizadora de la monarquía.<sup>123</sup>

En 1346 una real cédula procedía al nombramiento de los primeros doce regidores de Madrid. El funcionamiento del municipio sufrió una profunda modificación, pues se les designaba como sustitutos del concejo abierto, con un conjunto de atribuciones que se extendían por todos los ámbitos de la vida municipal: “que haya en Madrit omnes buenos dende que ayan poder para ver los fechos de la Villa e otrosy para fazer e ordenar todas las cosas que el concejo faría e ordenaría estando ayuntados, porque en los concejo vienen omnes a poner discordia e estorbo en la cosas que deben fazer y ordenar por nuestro servicio pro comun de la dicha villa e de su termino”.<sup>124</sup> El concejo limitado o cerrado será desde ese momento la instancia de gobierno local, si bien experimentará cambios en su composición en épocas posteriores: además de los regidores, se incorporarán el corregidor y representantes de otros estamentos, como caballeros y pecheros.<sup>125</sup>

Aun cuando inicialmente con esta medida se pretendiera asegurar una cierta representación del común de vecinos mediante la reserva a miembros de esta clase de algunos de los cargos, lo que serviría para frenar la conflictividad en el interior de los concejos, lo cierto es que no va a cambiar el carácter de clase del grupo rector del municipio. Pronto los regidores irán configurándose como un grupo cada vez más homogéneo, a lo que contribuirá el que, si bien el nombramiento tenía un carácter temporal en un principio, se terminará por transformar el cargo en vitalicio. El resultado es la patrimonialización de estos puestos por sus titulares, como lo demuestran la práctica de intercambios y de transmisiones hereditarias. En el s. XV el regimiento

---

<sup>123</sup> Una interpretación en este sentido en MONSALVO ANTÓN, J. M.- *El sistema político concejil*, págs. 148-151.

<sup>124</sup> *Documentos*, t. I, págs. 273-278

<sup>125</sup> La evolución del regimiento madrileño bajomedieval en GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, R.- *El Concejo de Madrid*, págs. 123-156. Estudio profundizado recientemente por LOSA CONTRERAS, C.- *El Concejo de Madrid en el tránsito*, págs. 279-345.

aparece firmemente controlado por un reducido grupo de linajes que integran una pequeña nobleza local (Luján, Zapata, Vargas), además de miembros de la caballería. Están ausentes representantes de la nobleza media, lo que sucedía en otras ciudades más importantes.<sup>126</sup>

El monopolio del poder que ejercen dentro del municipio terminará por provocar conflictos con los excluidos. Primeramente con el cuerpo de "caballeros y escuderos", los demás miembros de la clase privilegiada que han quedado excluidos de los aparatos de gobierno local, con los que se aliaron circunstancialmente los buenos hombres pecheros. Dos eran los principales motivos de discordia: la celebración de concejos más amplios en los que pudieran participar los representantes de otros sectores de la sociedad, y la provisión de los oficiales municipales, asunto que enfrentaba a los regidores con los caballeros. Para los primeros se trataba de mantener su control: "por quanto los dichos regidores dicen que a ellos pertenece solamente fazer conçejo e proueer en todas las cosas que a la villa pertenescen"; para los segundos de garantizar una significativa presencia que ya habían tenido anteriormente: "todos juntamente se deuen ayuntar en conçejo e proueer en ello". Tras diversos pleitos, fue resuelto a mediados del s. XV por la sentencia de un juez real, Alfonso Díaz de Montalvo, que en primer término sancionó la celebración de ayuntamientos restringidos, para seguidamente reservar a los regidores la facultad exclusiva del nombramiento de los oficiales, si bien debía recaer obligatoriamente en los caballeros y escuderos.<sup>127</sup> Más importante resultaría la oposición que va a protagonizar el estamento pechero, tanto los habitantes de la villa como los de las aldeas, en una relación que determina la articulación de mecanismos de articulación y participación política de este grupo.

---

<sup>126</sup> La composición social del Regimiento en CASTELLANOS OÑATE, J. M.- "El Regimiento madrileño (1464-1515)", *AIEM*, t. XVI (1991), págs. 45-63.

<sup>127</sup> AVM-S, libro mss. 112. Las comisiones dadas a Montalvo en *Documentos*, t. III, págs. 121-127 y 133-139.

## 4.2- LA ARTICULACION DE LA TIERRA

El dominio señorial del concejo urbano sobre la Tierra de Madrid, consolidado hacia el s. XIII, provocó que los habitantes de las aldeas fueran desarrollando mecanismos de oposición que intentan –y en parte consiguen- limitar esa explotación señorial. Durante la mayor parte del período medieval la participación de los habitantes del término rural se integra dentro de la de un grupo más amplio, el de los pecheros o común, definido por su carácter no privilegiado debido al hecho de ser contribuyentes, hecho que será determinante en la toma de conciencia de este grupo. Pero a fines del período la Tierra irá desarrollando fórmulas de articulación propias en función de sus intereses específicos.

El mundo rural madrileño aparece desde un principio en una clara situación de inferioridad y subordinación en relación al concejo urbano, reflejo de su misión repobladora y organizadora del espacio. La imagen idílica de una sociedad igualitaria que se transmite en ocasiones está desmentida desde las primeras referencias documentales, si bien persistirían posibilidades de movilidad social. La desigualdad jurídica entre los habitantes de la villa o aldeanos quedaba explicitada ya en el *Fuero de Madrid* (c. 1202), una situación común en numerosos ordenamientos forales.<sup>128</sup> Así, en ocasiones el código madrileño impone distintas penas legales según el origen del infractor, siendo más onerosas para los procedentes del mundo rural, aunque aparece también una diferenciación interna en éste al establecerse castigos diferentes en el caso de los aldeanos herederos (propietarios de casa, viñas u heredades propias) respecto a los que no tienen bienes raíces. Por otra parte, se hace referencia ya a la existencia de una fiscalidad diferenciada entre los residentes de la villa y los del campo : "Todo homine qui casa habuerit in uilla et non moraret ibi las duas partes del anno, pectet II pectas, una per aldeano, et otra con los de la uilla".<sup>129</sup> Este desigual reparto de la carga tributaria se fue ahondando al final de la Edad Media, cuando los pecheros de la Villa aumentaron sus exenciones. Precisamente será el tema fiscal, más en concreto las arbitrariedades y abusos de los oligarcas urbanos, lo que permite el inicio del lento proceso de configuración de la Tierra.

---

<sup>128</sup> Abundantes datos en GARCIA ULECIA, A.- *Los factores de diferenciación entre las personas en los Fueros de las Extremadura castellano-leonesa*, Sevilla, 1975.

<sup>129</sup> Entre los distintos apartados del Fuero que tratan de los habitantes de las aldeas madrileñas podemos destacar los epígrafes XVI, XVII y LXXXIX. *El Fuero de Madrid*, págs. 47,48 y 64

La primera célula organizativa del mundo campesino son los *concejos de aldea*, que nacieron con el establecimiento de un núcleo de población, cuando los vecinos se reunieran en asambleas para organizar distintos aspectos de la convivencia común. Estas asambleas vecinales tienen por tanto un carácter abierto y popular, con participación de todos los habitantes, llamados a “campana tañida”, lo que se mantendrá arraigadamente durante siglos. Se limitan inicialmente a ser reuniones integradoras que buscan establecer un acuerdo o consenso en temas privativos de los habitantes de la comunidad. Pero su ámbito competencial es restringido, por cuanto no tienen reconocimiento jurídico-público: no pueden establecer normativas u ordenanzas, ni nombrar cargos u oficios encargados de gestionar e imponer estos acuerdos. Su subordinación al concejo de la Villa resulta así total en un primer momento; en efecto es en el órgano de poder urbano donde radica la jurisdicción, en él se toman todas las decisiones de ámbito territorial superior a una sola localidad, mientras que tenía capacidad para imponer normas a cada comunidad aldeana o anular las que ésta aprobara.

El reconocimiento institucional de los concejos aldeanos en el entorno de Madrid se remonta a mediados del s. XIII, coincidiendo con la consolidación de los privilegios de la caballería. La iniciativa partió de los vecinos de ciertas aldeas, que protestaban por las injusticias fiscales (derivadas del aumento del número de excusados, lo que significaba que la carga tributaria se repartía entre una población pechera menor) y lo gravoso que resultaba a los habitantes de la Tierra tener que acudir a la Villa por cualquier asunto litigioso, dado que ésta disponía de toda la jurisdicción. El pleito planteado por los procuradores de dos aldeas, Pinto y Rabudo (más tarde despoblado), motivó que Alfonso X concediera una provisión en 1264 favorable a las demandas planteadas por los pecheros. En primer lugar, se concedía cierta participación a los lugares en el nombramiento de excusados (lo que no tendrá muchos efectos prácticos pues no impide su proliferación posterior), pero lo más trascendente de esta medida es que se procede al reconocimiento jurídico de los concejos aldeanos. Se encargaba a las justicias de la Villa que visitasen las aldeas e hiciesen ayuntar a todos sus habitantes con el fin de elegir dos *alcaldes* con capacidad para entender en pleitos de una cuantía reducida, que se fijaba en grado ascendente según la mayor lejanía de la ciudad.<sup>130</sup> Esta figura de los alcaldes aldeanos recibió una revalorización con Fernando el Católico, que en 1502 concedió que cada pueblo de la

---

<sup>130</sup> “Et an de judgar en esta manera, en las aldeas que fueren redradas de la uilla una legua e arriba fasta seys leguas, que judguen pleyto fasta un maravedí o dende ayuso, e non mas; e de diez leguas a arriba fasta XX leguas judguen fasta dos maravedis e dende ayuso; et de XX leguas a arriba que judguen fasta tres maravedis e dende ayuso. Et si el termino fuere mayor, que libren a esta razon”. *Documentos*, t.I, págs. 95-102 (cita en p.99).



Tierra madrileña eligiese uno o dos alcaldes que se encargaran de los pleitos inferiores a 60 mrs. "sin figura de juyzio, saluo la verdad sabida".<sup>131</sup> Competencias judiciales (por mínimas que fuesen) y oficiales propios determinan la consolidación institucional de los concejos aldeanos en la Tierra madrileña. Sus atribuciones se fueron ampliando progresivamente, si bien manteniendo siempre una clara subordinación al concejo capitalino: a mediados del s. XV se extienden a determinados aspectos del régimen comunal, como se analizará en el próximo capítulo. Por su parte, su estructura y organización también se hicieron más complejas, siguiendo en lo esencial el modelo organizativo del municipio madrileño.<sup>132</sup>

Un nivel superior de organización de la Tierra serían los *sexmos*, circunscripciones territoriales que comprenden un conjunto de concejos aldeanos.<sup>133</sup> Frente al ámbito de intervención estrictamente local de éstos, los sexmos representan un marco de encuadramiento más amplio, capaz por tanto de aglutinar, representar y defender intereses comunes a los habitantes de la Tierra. En su origen tienen un carácter eminentemente fiscal: el sexmero actúa como agente de recaudación tributaria dentro de cada distrito rural, siempre supeditado al concejo de la Villa. Este hecho hace que la institucionalización de este cargo aparezca prontamente recogida en la documentación del poder monárquico, deseoso de dotarse de más amplios y efectivos mecanismos para ampliar su base fiscal. El ya citado ordenamiento foral de Fernando III concedido a Madrid en 1222 y otros concejos establece que para recaudar los tributos reales el delegado real debía elegir "duos bonos homines de unoquoque sexmo uel

---

<sup>131</sup> *Ibidem*, t. IV, págs. 23-25 (cita en p. 24).

<sup>132</sup> Una visión general de la evolución de los concejos aldeanos en LOSA CONTRERAS, C.- *El Concejo de Madrid en el tránsito*, págs. 370-373. Ante la escasez de fuentes sobre este tema, la autora recurre a las *Relaciones Topográficas* de la segunda mitad del s. XVI. Queda pendiente, por tanto, precisar las transformaciones de estos concejos entre fines de la Edad Media y el s. XVI, para lo que hará falta análisis monográficos de los pueblos.

<sup>133</sup> Se trata en suma de distritos rurales o subdivisiones de los términos de los concejos de villa y tierra. Reciben distintas denominaciones: tercios, cuartos, sexmos, ochavos, rodas, campos; nombres que en origen harían referencia a su número, si bien esa relación se perdió con el tiempo. El término más habitual era el de sexmos, cuyo número oscilaba en el s. XVI entre dos y diez según los concejos. MANGAS NAVAS, J. M.- *El régimen comunal agrario*, págs. 48-50

quarto, uel de collacionibus".<sup>134</sup> Esta organización administrativa fiscal de la Tierra cuajó en los grandes concejos extremaduranos como Avila o Segovia a lo largo del s. XIII.<sup>135</sup>

En el caso de Madrid, la formación de los sexmos está recogida en dos documentos reales ya citados: el fuero de 1222 y la provisión de Alfonso X de 1264 sobre la participación fiscal y el establecimiento de alcaldes en los concejos aldeanos.<sup>136</sup> Pero no hay más datos que avalen documentalmente que hubieran funcionado realmente como distritos rurales en la Tierra de Madrid antes de comienzos del s. XV, momento en que serán creados de forma esta vez ya permanente. La única referencia a la posible existencia de sexmeros procede precisamente de 1418, cuando una real provisión de Juan II estableció el nombramiento de sexmeros, en respuesta a las denuncias presentadas por los procuradores de los pecheros de los abusos fiscales cometidos por los regidores. Ante la limitación de funciones y poder que este nuevo cargo significaba, los regidores madrileños se atrincheraron en sus posiciones de privilegio y se negaron a cumplir el mandamiento real "diçiendo que no fuera ganada nin presentada por parte sufiçiente, e que ya otro tienpo ouiera ende sesmeros, e el rey don Alfonso veyendo los inconvenientes que dello se seguían diera todo el poderío a vosotros [los regidores] para que fuésedes conçeio".<sup>137</sup> Se trata por tanto de una alegación interesada de la oligarquía municipal que no confirma claramente la existencia de los sexmeros: los regidores tuvieron que valerse de su acceso a documentos y privilegios, lo que les permitiría conocer las disposiciones reales en este sentido; habían transcurrido unos setenta años desde la creación de su cargo, demasiados para que pudieran basarse en el recuerdo transmitido del organigrama concejil anterior. Tampoco el argumento básico que aportaban era válido, pues la creación del regimiento no supuso en la mayoría de los municipios la anulación de los sexmeros.

En definitiva, será en el *período bajomedieval* cuando se produzca la configuración institucional de la Tierra de Madrid como entidad diferenciada de la Villa. Y lo hará dentro de un proceso más amplio como es el de la contestación de los pecheros al monopolio de poder por parte de la oligarquía en los concejos castellanos, que si bien se remonta a los siglos XII y

---

<sup>134</sup> *Documentos*, t. I, p. 67. La indeterminación terminológica (sexmos, cuartos o colaciones) revela que se trata de imponer un modelo organizativo en plena gestación.

<sup>135</sup> Respectivamente, BARRIOS GARCIA, A.- *Estructuras agrarias y de poder*, v. I, págs 171-173 y MARTINEZ MORO, J.- *La Tierra en la Comunidad de Segovia*, págs. 117-118

<sup>136</sup> *Documentos*, t. I, págs. 95-102.

<sup>137</sup> *Documentos*, 2ª serie, t. II, p. 58.

especialmente XIII, va a ser en los últimos siglos medievales cuando va a adquirir mayor trascendencia. La constitución del regimiento y la consiguiente tendencia al cierre oligárquico de este grupo así como su progresiva integración en la nobleza provoca un claro conflicto social y político en torno al concejo. En primer lugar con los grupos sociales intermedios, descontentos con el monopolio del poder y que ven frenadas sus expectativas de ascenso social: ya he hecho mención al debate institucional entre regidores y “caballeros y escuderos” en el caso madrileño a mediados del s. XV.<sup>138</sup> Pero ahora me interesa analizar el conflicto con el estamento pechero, que irá tomando conciencia de su situación de falta de privilegio, explotación fiscal y exclusión política, para ir articulando fórmulas asociativas de defensa de sus intereses que tendrán repercusión sobre el marco organizativo de los municipios bajomedievales.<sup>139</sup> En torno a dos problemas básicos, como son las arbitrariedades fiscales y la falta de participación en las instancias de poder municipal, se irá desarrollando un conflicto en el que la población no privilegiada se aglutina como un todo, creando en el caso madrileño dos instancias organizativas básicas, la *junta de pecheros* y el *procurador de pecheros*. Los habitantes de la Tierra comparten pues con los contribuyentes urbanos un núcleo común de intereses y fórmulas reivindicativas en un principio: todos constituyen el “común” o los “buenos homes pecheros” que recoge la documentación de la época. Pero a partir del último siglo medieval comienzan a aparecer mecanismos privativos para coordinar a la Tierra como colectivo a partir del nivel básico de organización del campesinado, el concejo aldeano: es el caso de los *sexmos*, cuya materialización previa no estaba confirmada, pero que adquiere relevancia en estos momentos. Y junto a fórmulas propias, intereses asimismo exclusivos de las aldeas: la desigualdad en la presión fiscal con los pecheros urbanos y los derivados de la problemática que adquirirá el régimen comunal.

La *junta de pecheros*, una asamblea o reunión del conjunto de la población pechera (o de sus representantes), sin que se haga distinción entre los habitantes de la Tierra y los de la Villa, es la primera instancia de participación con carácter netamente estamental. Presentes en numerosos municipios bajomedievales, representan una línea de continuidad o herencia de fórmulas asamblearias participativas propias de los concejos abiertos, que como tales seguían operativos dentro de las aldeas, si bien en el ámbito urbano habían sido ya habitualmente relegados. Los

---

<sup>138</sup> Una visión general de este proceso y sus repercusiones en el municipio de la Edad Moderna en GONZALEZ ALONSO, B.- “Sociedad urbana y gobierno municipal”

<sup>139</sup> La referencia fundamental acerca de este tema es MONSALVO ANTÓN, J. M.- “La participación política de los pecheros en los municipios castellanos de la Baja Edad Media. Aspectos organizativos”, *Studia Historica. Historia Medieval*, vol. VII (1989), págs. 37-93.

datos que en Madrid nos permite deducir la documentación conservada, producida y centrada en instancias concejiles más poderosas, son bastante escasos. Su existencia queda atestiguada en 1346, fecha en que Alfonso XI ordenó al municipio madrileño que realizase una información acerca del pago de la cantidad que reclamaba García Sánchez de Elche por haber servido como procurador a los pecheros, lo que supone la existencia de alguna forma de reunión de éstos como colectivo.<sup>140</sup> El nombramiento de procuradores constituye, en efecto, una de las vías más comunes en el origen de las asambleas de los contribuyentes: “en muchas partes, ya antes de la última centuria medieval, se habían institucionalizado o normalizado cuando menos, las juntas de pecheros en relación con la elección en su seno de los representantes personalizados”.<sup>141</sup>

Durante el s. XIV fueron ampliándose sus convocatorias y los asuntos tratados, adquiriendo así un carácter “cuasi institucional”, como lo demuestra una concordia de 1398 en la que participa la “yunta de los dichos omnes buenos pecheros llamados por los peones del dicho Conçeio, segunt que lo han de vso e de costunbre de luengo tienpo acá”.<sup>142</sup> Sin embargo, no están claros los aspectos formales de estas reuniones: no se dan noticias acerca de la periodicidad, de los componentes que asistían (si eran totalmente abiertas o se limitaba en ocasiones a los representantes), del grado de participación de los lugares de la Tierra, etc. Lo que sí puede deducirse es la motivación defensiva con que actúa este órgano: más que un cauce normalizado de intervención regular en los asuntos que afectan al “común de pecheros”, parece tratarse de un mecanismo para plantear reivindicaciones particularmente importantes en determinadas ocasiones. De ahí que se orienten sobre todo por la vía legal (o al menos es ésta la documentación que nos ha llegado), presentando sus quejas ante las instancias judiciales, en primer término el mismo concejo, para pasar después a reclamar ante los tribunales reales. Porque lo cierto es que la oligarquía urbana va a mostrar un particular empeño en neutralizar y anular estas instancias de tipo asambleario, en clara línea de continuidad con lo que había sucedido al sustituir el concejo abierto con la creación del regimiento. Una vía comúnmente utilizada para conseguir este objetivo fue la de suplir la participación de las juntas de pecheros por los representantes personales, más fáciles de integrar en las estructuras oligárquicas o al menos de atemperar una presión excesiva en sus reivindicaciones. El procurador de pecheros y

---

<sup>140</sup> *Documentos, 2ª serie*, t.I, págs. 45-48.

<sup>141</sup> MONSALVO ANTÓN, J. M.- “La participación política de los pecheros”, p. 82.

<sup>142</sup> *Documentos, 2ª serie*, t. I, págs. 305-312 (cita en p. 306).

los sexmeros serán así las figuras en las que se termine por institucionalizar la representación estamental y la de la propia Tierra de Madrid.

El *procurador de pecheros* va a ser el principal mecanismo de participación de los contribuyentes en el concejo urbano. Aparecen en un principio como representantes de la junta de pecheros en los pleitos o demandas con carácter todavía puntual, no permanente: ya se ha analizado la actividad de García Sánchez de Elche en 1346 y su reclamación de cantidades adeudadas por haber asistido a los pecheros como procurador, lo que pone de relieve que había actuado exclusivamente en una ocasión determinada. Con el tiempo se produce la institucionalización de esta figura (común a la mayoría de concejos castellanos), generalizando su permanencia y carácter representativo. En el s. XV aparece plenamente integrado en el funcionamiento cotidiano del concejo madrileño, asistiendo a los ayuntamientos en los que se tratan asuntos concernientes al estamento del que es el principal portavoz, como se comprueba en los Libros de Acuerdos.<sup>143</sup> Su elección seguía en manos de una asamblea general de pecheros de la Villa que se reunía exclusivamente con esta finalidad, tal y como se recoge en la sesión concejil de 3 de febrero de 1492: “Pareçio en el Regimiento ante los dichos señores Pedro Gonçalez de Guadalajara, seismero, e dio fe a los dichos señores pesquisidor e regidores que los buenos onbres pecheros desta Villa e sus arrabales estando ayuntados de todas las perrochas, que eligieron e nombraron por procurador de los dichos pecheros de la dicha Villa a Pedro de Pasqual Domingo”.<sup>144</sup> Se comprueba por tanto que si el procurador era el representante de todo el estamento no privilegiado (tanto vecinos urbanos como rurales), solamente los primeros tenían derecho a participar en su nombramiento, quedando relegados los segundos a elegir a sus representantes exclusivos, que serán los sexmeros.

El problema más acuciante para el común de vecinos que va a centrar la intervención de la junta y el procurador de pecheros es el de la limitación de los atropellos que en materia fiscal protagoniza la oligarquía rectora del concejo urbano: imposiciones excesivas, aumento continuo de sus excusados, paso de pecheros enriquecidos de la ciudad a la situación de exentos por medio del alarde, motivo todo ello de enfrentamiento desde el período anterior. Sin duda, la situación se fue agravando a lo largo del s. XIV hasta el punto de que en 1398 asistimos a un intento del común de vecinos de obtener el final de todos los privilegios fiscales. En la concordia que se

---

<sup>143</sup> Esta presencia habitual del procurador de pecheros junto con el carácter remunerado del cargo y su elección anual llevan a C. Losa Contreras a considerar que el procurador se había convertido en la 2ª mitad del s. XV en un oficial municipal. LOSA CONTRERAS, C.- *El Concejo de Madrid en el tránsito*, p. 352.

<sup>144</sup> LAC-II, p. 318.

celebró dicho año se reunieron por un lado el concejo, integrado por los oficiales municipales, un regidor y los caballeros con su procurador (la naturaleza de clase de la institución quedaba clara), y por otro "la yunta de los omnes buenos pecheros" con su procurador. La raíz del enfrentamiento se encontraba en una carta real ganada por los pecheros por la cual se permitía que los "caualleros que escusauan por caualllos e armas aquí en Madrit e las mugeres biudas e fijos destos atales" contribuyeran en un servicio real. Lógicamente, éstos no aceptaron esta excepción en sus valiosos privilegios fiscales y plantearon un pleito ante el concejo. En el transcurso del mismo el procurador de los pecheros amplió la escala de las reivindicaciones al solicitar que se pusiera fin a todos los privilegios fiscales que tenía la caballería tanto en las contribuciones reales como en las concejiles: "que los dichos caualleros e mugeres biudas e fijos destos atales caualleros que deuían pagar en los dichos préstamos e en todos otros pechos rreales e conçejales que acaesçiesen aquí en Madrit". Petición que fracasó en una "concordia" por la cual "los dichos omnes buenos pecheros dixieron que rrenunçiauau e rrenunçiaron el dicho pleito... e que querían e les plazía e consentían que fuese guardado e valiese a Madrit e a los dichos caualleros que están e estudiesen de aquí adelante guisados de caualllos e de armas, segunt que el dicho priuillejo manda, e a las mugeres biudas e fijos destos atales todas las franquezas e libertades que en el dicho priuillejo se contiene; e otrosi, todas las otras cartas e sentençias e otros rrecabdos que en esta rrazón tienen". Derrota, pues, en toda regla de la junta de pecheros y de sus planteamientos, que atacaban de raíz la misma estructura de la sociedad feudal. Como una mínima compensación el estamento pechero obtuvo la ratificación de su procurador, sin duda cuestionado por la clase que había salido tan claramente vencedora.

Si las instituciones que se han analizado hasta el momento son comunes a los contribuyentes de la villa y del campo, el cargo de los *sexmeros* va a representar un cauce de representación y organización que va a ser con el tiempo exclusivo de la Tierra. Son de nuevo motivaciones fiscales las que llevarán a la creación (o recuperación si se admite su existencia en Madrid antes de mediados del s. XIV) de estos cargos en torno a los cuales se irá estructurando la Tierra. Dos provisiones reales concedidas por Juan II en 1418 establecieron esta vez de forma definitiva los *sexmeros* madrileños.<sup>145</sup> En esta ocasión la iniciativa partió claramente de las aldeas, que nombraron su propio procurador legal para una reivindicación tributaria, lo que parece indicar que el cargo de procurador de pecheros se hubiera especializado en la defensa de los intereses de los habitantes de la villa y los del ámbito rural tuvieran que buscar sus propios cauces reivindicativos. Así, Sancho García de Leganés, procurador de Getafe, Leganés, Alcorcón

y Vallecas (algunas de las localidades más importantes del entorno rural madrileño), se querelló ante la justicia "diziendo que vosotros [los regidores de la Villa], cada que queredes e por cosas no neçesarias, que hazedes muchos repartimientos e derramas no devidamente por esa Villa e su Tierra", haciendo especial referencia a un repartimiento realizado el año anterior de 34.496 mrs. "no aviendo neçesidades para qué". Para limitar estos abusos, que provocaban el despoblamiento del término, solicitaba que se nombrasen 5 ó 6 labradores como seismeros que tuviesen la facultad de participar en la realización de los repartimientos. Cabe destacar en esta reivindicación la conciencia de entidad de la Tierra en la reclamación de un modelo, el de los sexmeros, que "se vsava e acostunbrava en Guadalajara e en Alcalá e en todas las más de las çibdades u villas de los mis rreynos donde ay aldeas e tierra de labradores". Se volvía, por tanto, a reclamar una instancia administrativa, la de los sexmos, que si bien servían para organizar la recaudación de los tributos reales y concejiles (lo que constituía el origen de los sexmeros en el s. XIII), también permitía garantizar un cauce participativo en la fijación y reparto de esta carga fiscal.

El rey así lo concedió el 7 de julio, encargando " a los labradores e pecheros, así desa dicha Villa, commo de la tierra, nonbrar e escoger entre sí seis omes buenos por sesmeros, el vno de la Villa e los otros çinco de la tierra" para tomar parte en la asignación de las contribuciones fiscales. Si bien la iniciativa reivindicadora había partido de las aldeas, el modelo se extendía al conjunto del concejo. El procedimiento para la elección de los cargos correspondía exclusivamente a los propios pecheros, y aunque no se determinaba el mecanismo para llevarlo a cabo parece que en la práctica se realizaría, al igual que en el caso del procurador, a través de juntas o reuniones de carácter abierto.

La reacción del regimiento ante el recorte de funciones y su capacidad de manipulación de la carga fiscal, así como la reactivación de fórmulas electivas de tipo asambleario, provocó una importante limitación en las atribuciones de los sexmeros. Su argumentación consistió en negar la legalidad de un cargo que habría desaparecido con la creación del regimiento, además de refutar las acusaciones sobre abusos en materia tributaria. El resultado fue favorable a sus intereses: una segunda provisión del rey, con fecha 6 de septiembre de 1418 ratificaba el establecimiento de los sexmeros, pero establecía importantes limitaciones en lo referente al proceso de nombramiento fijado en la norma antecedente. Para empezar, la elección, que el 7 de julio se había atribuido sin más a los "labradores e pecheros", se encomendaba ahora a una reunión entre los alcaldes (o alguno de ellos) de la Villa y los pecheros que se celebraría en el

---

<sup>145</sup> *Documentos, 2ª serie*, t. II, págs. 53-55 y 57-62.

mes de enero de cada año, para que "todos en vno" eligieran cuatro sexmeros, uno por la Villa y los otros tres por la Tierra; la ofensiva contra las formulas de participación abierta daba sus frutos. También en cuanto a los que podían ocupar el cargo se precisaba "que estos quatro omnes buenos sean omnes de buena fama e rricos e abonados e los más pertenecientes que pudieren auer", cuando anteriormente no se habían precisado limitaciones. Sus funciones no variaban: participar con los regidores en la realización de los repartimientos. De esta forma, el triunfo de los pecheros a instancia de los labradores de la Tierra quedaba convenientemente controlado por la oligarquía. En primer lugar porque la institución se convertía asimismo en un instrumento que aseguraba el monopolio de poder del regimiento, al prohibirse la realización de cualquier otro tipo de junta del común de vecinos que no fuese para elegir a los sexmeros: "mando e defiendo a los pecheros de la dicha Villa e su tierra que se non ayunten ni fagan ayuntamiento en la dicha Villa e su tierra en cada año más de vna vez, e para sacar e elegir de entre sy los dichos quatro omnes buenos, cómo e para lo que dicho es". Y a la vez se aseguraba un mecanismo de control interno pues sólo los "labradores" acomodados, con intereses más proclives y cercanos a los de la oligarquía, podrían ocupar el cargo.

El nombramiento de los sexmeros dio lugar a una división: la Villa por un lado y la Tierra por otro, que a su vez se organiza en tres distritos o circunscripciones rurales, los *sexmos*, que pronto tomaron el nombre de las aldeas cabeceras: Vallecas, Villaverde y Aravaca. Esta división territorial, modelo habitual de los concejos de Villa y Tierra, no aparece especificada en la normativa de 1418 pero se consolidó en el s. XV: en 1458 ya se recoge esta organización de los tres sexmos de la Tierra y un sexmero de la villa en una reunión del concejo.<sup>146</sup> En fechas posteriores está habitualmente presente en los Libros de Acuerdos municipales; valga como ejemplo la sesión de 19 de febrero de 1484: "Este dicho día, los dichos señores rresçibieron por seismeros de la tierra desta dicha villa, segund que por los onbres buenos pecheros della son señalados e nombrados, para en los tres seismos de la tierra de la dicha Villa, a los siguientes, cada vno para en el dicho seismo, en esta guisa: a Andrés de Peralta, vecino de Vallecas, por seismero del seismo del dicho lugar; e a Francisco ferrández de Majadahonda por seismero del seismo de Arauaca; e a Martín Alonso, vecino de Fuenlabrada, por seismero del seismo de Villaverde....Dieron los dichos señores licencia e facultad a mí, el dicho escriuano, para que, en

---

<sup>146</sup> En una reunión convocada para tratar una conveniencia con Alcobendas sobre términos (capítulo 2), se cita entre los presentes a los sexmeros de la Villa, del sexmo de Villaverde, de Aravaca y de Fuencarral. AVM-S, 3-40-21.



su nonbre, rresçiba por seismero a Pero González, cortidor, para en la Villa, para este año, segund questá nombrado por los pecheros”.<sup>147</sup>

Las atribuciones de este cargo fueron ampliándose en el último siglo medieval, consolidándose en materia fiscal, que era el motivo inicial de su creación, e incorporando funciones nuevas. El nuevo organigrama de los sexmeros quedó recogido en una concordia firmada entre los representantes pecheros y el regimiento de fecha indeterminada, pero anterior a 1485 (año en que se cierra el Libro de Actas concejiles en el que está recogida). En ella se acordaba que cada vez que el "conçejo, justiçia, rregidores, caualleros e escuderos" tuviera que solicitar la autorización real para realizar una derrama, figuraran los semeros en la petición, lo que les garantizaba un cierto grado de control sobre un mecanismo recaudatorio como es la derrama, que va adquiriendo cada vez más importancia y convirtiéndose en cauce destacado para aumentar la presión contributiva. Por otra parte se establecía "que para dar solares e dehesas e otras cosas, sea llamado el seysmero del seysmo do es la tal donaçión".<sup>148</sup> Esta concesión abriría las puertas para que a partir de la 2ª mitad del s. XV los sexmeros fueran participando en lo que constituiría su otro gran ámbito competencial: el patrimonio comunal. A lo largo de la Edad Moderna, la defensa del régimen comunal en la Villa y Tierra de Madrid, tan sometido a presiones y alteraciones constantes, fue uno de los ejes que articuló la actuación de los sexmeros como representantes de unos campesinos que pretenden limitar la erosión de los aprovechamientos colectivos y defender los intereses ganaderos.

A través de estos mecanismos institucionales se había llevado a cabo la articulación de los intereses de los pecheros como estamento en general y de los habitantes de la Tierra en particular. Destaca en primer término el hecho de que los cargos que se consoliden tengan un carácter representativo, y que esa representatividad se vaya especializando y diferenciándose cada vez más los pecheros urbanos y los de las aldeas. La contrapartida de la consolidación de estas figuras ya la conocemos: la desaparición o al menos limitación de las asambleas participativas, que quedarían relegadas a ser meramente electivas, encargadas del nombramiento de sus delegados. Estos representantes pecheros van a conseguir garantizarse una cierta presencia y capacidad de participación política en el concejo urbano. Algo para lo que en ocasiones van a contar con el apoyo de la monarquía, que pretende controlar el monopolio de los grupos oligárquicos, anular conflictos internos y asegurarse una mejor organización de su base fiscal. Así,

---

<sup>147</sup> LAC-I, p. 298.

las Cortes de Zamora de 1432 establecieron la presencia efectiva en el seno del concejo de los sexmeros, si bien tan sólo para tratar los asuntos de su competencia: "i mandamos que ansimismo puedan entrar en los dichos Concejos los sesmeros, dó los ai, para entender en aquello, que los tales sesmeros deven caber segun la Ordenanza de la tal Ciudad, Villa, ó Lugar, dó ai los tales sesmeros".<sup>149</sup> En el caso de Madrid se comprueba cómo efectivamente los sexmeros estuvieron presentes y participaron en los ayuntamientos que trataban asuntos de su competencia.

Por tanto se consolidó una presencia de los representantes de los "buenos hombres pecheros", procurador y sexmeros, en las reuniones del ayuntamiento madrileño, como también sucedió en el caso de los "caballeros e escuderos" (Sentencia de Montalvo). Una situación que muestra el grado de contestación social al monopolio del poder concejil por parte del regimiento. Pero los efectos de estas medidas fueron limitados, sin suponer una variación sustancial en la distribución de fuerzas en el seno de la institución. Así, los ayuntamientos ordinarios eran competencia exclusiva de los regidores y oficiales concejiles. Sólo en el caso de temas de particular importancia se ampliaba la convocatoria a los otros dos estamentos, caballeros y pecheros. También entre éstos existían diferencias: la participación pechera se limitaba a sus representantes y se reducía a los escasos asuntos en los que se les reconocía derecho a intervenir: derramas, concesión de solares y dehesas. Los caballeros tuvieron una presencia mucho más amplia, además de mostrar una colusión habitual de intereses con los regidores, siendo un elemento básico de acuerdo la exclusión del común de vecinos. Desde finales del s. XV la intervención de pecheros y caballeros en las reuniones concejiles, especialmente de los primeros, muestra una clara tendencia descendente, si bien el cierre oligárquico completo del concejo no se producirá hasta el s. XVI.<sup>150</sup>

A través de estos procesos la Tierra de Madrid se fue constituyendo como una entidad que aglutina a un grupo humano en razón de su adscripción territorial (habitantes de las aldeas) y social (labradores o campesinos y por tanto pecheros, es decir, no privilegiados). La institución propia que permite la articulación de la Tierra fue el sexmero como representante de cada uno de los tres distritos rurales en que se divide el término ante el concejo urbano, lo que en Madrid se

---

<sup>148</sup> La noticia sobre esta concordia figura en un resumen de la provisión de Juan II de 6 de septiembre de 1418. *LAC-I*, apéndice I, p. 427. Copia posterior en AVM-S, 5-445-3.

<sup>149</sup> Cit. en MANGAS NAVAS, J. M.- *El régimen comunal agrario*, p. 109

<sup>150</sup> MENDO CARMONA, C.- *El Concejo de Madrid en el tránsito*, págs. 613-628.

consolida en fecha relativamente tardía como es a comienzos del s. XV, cuando en otros municipios ya llevaba funcionando bastante tiempo.

Pero de este análisis del nacimiento y evolución de la Tierra madrileña se concluye que su materialización institucional resulta finalmente incompleta. En efecto, el sexmero actúa como representante individual de su propia circunscripción; sólo en contadas ocasiones (derramas, por ejemplo) se requiere la participación conjunta de todos los sexmeros. Este modelo de participación de los habitantes del territorio es habitual en los concejos de villa y tierra que se han constituido en el reino de Castilla.

Sin embargo, a finales del período medieval y comienzos de la Edad Moderna, en un territorio concreto, que coincide con los principales centros urbanos (o núcleos de población para ser más exactos) entre el Duero y el Sistema Central, con alguna ramificación hacia el Sur, se fue produciendo una evolución propia que dio como resultado la conversión de los concejos de villa y tierra en *Comunidades de Villa y Tierra*, lo que significa un marco institucional nuevo para organizar las relaciones entre ciudad y campo.<sup>151</sup> El criterio que permitiría comprobar la existencia de una Comunidad consistiría en una clara plasmación de la Tierra como una entidad separada del concejo urbano, lo que significa que dispone de órganos de gobierno o representación propios: los sexmeros o delegados de los distritos rurales constituyen una *Junta de la Tierra*, órgano colegiado de toma de decisiones y que asume la representación del colectivo de pobladores del campo o común de la Tierra frente a la ciudad. Sus competencias se regulan en las Ordenanzas generales de Villa y Tierra, en cuya elaboración participa e incluso puede tomar la iniciativa para su promulgación. Un reflejo simbólico de la entidad institucional de la Tierra sería la adquisición de edificios propios donde celebrar sus asambleas y reuniones, y que funcionan como centros de administración y gobierno (la “Casa de la Tierra”).<sup>152</sup> Esta Junta nombraría sus representantes que, junto al concejo urbano,

---

<sup>151</sup> Esta visión de la Comunidad de Villa/Ciudad y Tierra, bien diferente a la interpretación institucionalista tradicional, aparece expuesta en SANTAMARIA LANCHO, M.- “Del Concejo y su término a la Comunidad de Ciudad y Tierra: surgimiento y transformación del señorío urbano de Segovia (siglos XIII-XVI)”, *Studia Historica. Historia Medieval*, vol. III (1985), págs. 83-116: “Será precisamente la configuración de la Tierra como instancia institucional lo que posibilitó el tránsito del “Concejo y su tierra” a la “Comunidad de Ciudad y Tierra”, fórmulas bajo las cuales se oculta la transformación que experimentó el señorío urbano formado en el período medieval. Cuando la Tierra consiguió configurarse como algo diferente, no sometido e incluso enfrentado a la Ciudad, fue posible formar “Comunidad”. La idea de dualidad que implica tal expresión era completamente ajena a la relación de dominación que caracterizó el vínculo Ciudad-Tierra en el medievo”, p. 84. En la misma línea interpretativa, sin desarrollar, DIAGO HERNANDO, M.- “Los señoríos territoriales de las ciudades” y MONSALVO ANTÓN, J. M.- “La participación política de los pecheros”.

<sup>152</sup> MANGAS NAVAS, J. M.- *El régimen comunal agrario*, págs. 84-93.

configurarían así la Comunidad (o Universidad o Asocio, según los casos) de Villa y Tierra. Sería, por tanto, el resultado de la agregación de dos entidades institucionales diferentes, la Junta y el Concejo.

Nos encontramos en suma ante una culminación (entre otras posibles) de un proceso bajomedieval de “participación política de los pecheros en los concejos” (Monsalvo Antón). La Tierra que se formará será sin embargo diferente del “común” que generaba esa participación. El “común” comprendía tanto los pecheros urbanos como los habitantes de las aldeas en torno a intereses compartidos: el reparto de la carga fiscal, el régimen comunal, el reparto del poder en el seno de los concejos. En cambio la Tierra nace en torno a intereses privativos (o casi) de los aldeanos: fundamentalmente la articulación de los derechos y bienes comunales. Y que en última instancia va a suponer una contestación en los albores de la Edad Moderna al señorío concejil medieval.

A modo de hipótesis, precisando de una investigación rigurosa, se pueden apuntar las circunstancias que determinan la aparición de la Comunidad en lugar del Concejo. Dos principalmente: la existencia de un amplio terrazgo comunal cuya organización está todavía incompleta (montes, baldíos, grandes dehesas, “extremos” sin poblar), y la problemática derivada de la necesidad de compatibilizar unas actividades económicas que responden a intereses sociales distintos o incluso contrapuestos.

La primera de estas circunstancias se daba claramente en los grandes concejos urbanos de la Extremadura castellana, que todavía en los siglos XIV y XV disponían de amplios alfoces y territorios yermos. También en algunos de la Submeseta Sur, concretamente en los casos de Toledo y Talavera que habían podido extender sus términos hacia el sur después de la Reconquista.

La segunda parece más propia del norte del Duero. Los conflictos por los usos del espacio (agricultura versus ganadería, pero también ganadería trashumante versus estante o riberiega) responde ante todo a opciones distintas de los grupos sociales: concretamente de los “poderosos” que controlaban el concejo urbano, y los campesinos de las aldeas. Pero en este segundo grupo se va a producir un cambio trascendental, como es la consolidación desde fines del medievo de un grupo de campesinos acomodados (que la historiografía designa con el término “labradores”), con una decidida orientación productiva hacia la agricultura y la

ganadería estante/riberiega, que se van convirtiendo en un competidor claro por el espacio con los poderosos tradicionales. Este grupo es el que, con una clara toma de conciencia, está en condiciones de articularse en defensa de sus intereses, movilizandó la actuación del mundo rural en torno a un proyecto conjunto como es la Tierra.<sup>153</sup> La ausencia de un grupo social comparable en importancia económica y conciencia político-social al Sur del Sistema Central, junto con la menor extensión de los términos concejiles, serían las claves de la persistencia del concejo de villa y tierra que, en principio, supondría un mecanismo más claro de defensa e imposición de los intereses de la oligarquía, al no contar con la rivalidad de un grupo rural con tanta capacidad de organización como sucedería en las Comunidades de Villa y Tierra.

Volviendo al caso de Madrid, se puede concluir por todo ello que si la Tierra no llegó a culminar este proceso de encuadramiento institucional, se debía a la ausencia o escasa relevancia de un campesinado acomodado. A falta de estudios monográficos sobre el mundo rural madrileño en la Edad Media, todos los datos apuntan en la dirección de un rotundo dominio de la oligarquía urbana sobre el campo, basado sin duda en la acumulación de la propiedad de la tierra y la creación a partir de ella de redes personales de dependencia. Un ejemplo que ilustra esta situación de control que ejercen los regidores madrileños es una provisión de los Reyes Católicos en la que les prohíben tener clientelas, afirmando que "teneys por allegados los concejos dela tierra de la dicha villa, para que vos sirban e presenten commo si fuesen vuestros vasallos".<sup>154</sup> En estas circunstancias, resultaba tremendamente difícil la consolidación de la Tierra con entidad propia.

---

<sup>153</sup> El caso de Segovia en ASENJO GONZALEZ, M.- "Labradores ricos: nacimiento de una oligarquía rural en la Segovia del siglo XV", *En la España Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez*, T. I, Madrid, 1984, págs. 63-85.

<sup>154</sup> *Documentos*, t.III, págs. 347-351 (cita en p. 348).

## CAPITULO 2 – EL REGIMEN COMUNAL DE VILLA Y TIERRA EN LA EDAD MEDIA

### 1 – TÉRMINO CONCEJIL Y RÉGIMEN COMUNAL

#### 1.1 – VIGILANCIA Y RESERVA DEL TÉRMINO CONCEJIL

El régimen comunal tiene un claro componente espacial, ya que se extiende sobre el término del concejo, es decir, la Tierra. Esta constituye, en efecto, no sólo el territorio en el que el concejo urbano dispone de la jurisdicción, sino también el ámbito en el que los vecinos de la villa y de las aldeas pueden ejercer sus derechos comunales, así como disponer del terrazgo de común aprovechamiento. La extensión y características geográficas del término resultan por tanto determinantes para la organización del régimen comunal, en definitiva para la provisión de los recursos económicos básicos que éste supone. De ahí la necesidad de analizar el proceso de delimitación de la Tierra de Madrid. Pero una vez definido su territorio, el concejo debe articular mecanismos de defensa frente a competidores, con el objetivo último de garantizar el monopolio en el usufructo de los bienes comunes para sus vecinos, y destacadamente para la oligarquía que lo gobierna. La vigilancia del término es un primer paso en este sentido, pero necesita ser complementada con los pleitos, que enfrentarán a Madrid con los privilegios de otras instituciones y de forma preferente con los señoríos comarcanos que se van consolidando en el período bajomedieval.

La vigilancia del término concejil corresponde a los *caballeros de monte*, que tienen encomendada la defensa de los límites y la salvaguarda de los espacios públicos de la Tierra madrileña. En este sentido son herederos de las tareas que la caballería villana desempeñaba en los concejos de repoblación. Junto con los demás integrantes de las milicias concejiles, eran responsables de la integridad territorial, pero pronto se añadiría la función de proteger la

ganadería cuando comenzaran los desplazamientos de los rebaños en busca de pastizales cada vez más lejanos. El Fuero de Cuenca constituye la más detallada fuente de información de estos servicios de escolta armada (la esculca, en otras localidades denominada rafala) organizados por los caballeros villanos.<sup>155</sup> Aunque no hay referencias escritas de esta práctica en el caso de Madrid, cabe suponer que las tareas de los caballeros urbanos no fueran muy diferentes a las de los otros concejos, si acaso limitadas por el radio de desplazamiento de los ganados. El siguiente paso lógico (del que no se conservan testimonios documentales) consistiría en que estos caballeros, encargados de proteger a los rebaños de agresiones externas, conforme éstas desaparecieran progresivamente, pasarían a vigilar las intromisiones de los ganados en las labranzas o las usurpaciones de pastizales.<sup>156</sup> El desarrollo de la producción agrícola y la consiguiente necesidad de compatibilizarla con la ganadería crearía nuevas necesidades de vigilancia y regulación, que irían siendo desempeñadas por los caballeros encargados tradicionalmente de la protección pecuaria. El resultado de esta evolución fue la consolidación en el Madrid bajomedieval de los caballeros de monte como oficiales del concejo. Sus funciones, nombramiento y cambios están recogidos en los Libros de Acuerdos en la segunda mitad del s. XV.

Desde las primeras actas municipales se hace referencia a seis caballeros de montes de Madrid. El sistema de nombramiento inicialmente correspondía a los regidores (aunque a veces se mencione el sorteo), pero desde 1477 pasó a corresponder a las colaciones: cada año seis de éstas enviaban los nombres de los que servirían en el cargo.<sup>157</sup> Un mecanismo que se mantuvo hasta 1498, en que la creación del cargo de Guarda Mayor modificó el funcionamiento de este oficio.

El requisito imprescindible para poder ser elegido era pertenecer al estamento de “caballeros e escuderos”, entre los que se incluían los caballeros de alarde, que demostraban

---

<sup>155</sup> BISHKO, C. J.- “El castellano, hombre de llanura. La explotación ganadera en el área fronteriza de La Mancha y Extremadura durante la Edad Media”, en *Homenaje a Vicens Vives*, tomo I, Barcelona, 1965, págs. 201-218, se ha convertido en una exposición clásica. Sobre la esculca, págs. 211-212. Asimismo RIU, M.- “Agricultura y ganadería en el Fuero de Cuenca”, en *En la España Medieval III. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó, II*, Madrid, 1982, págs. 369-385.

<sup>156</sup> Tal y como apuntaba A. García Sanz : “Sería interesante conocer cómo los ‘caballeros villanos’ medievales, que realizaban funciones defensivas y militares, pasaron a desempeñar esta singular y nueva función, también de interés colectivo, de defender los montes y términos comunales”. GARCIA SANZ, A.- “Bienes y derechos comunales y el proceso de su privatización en Castilla durante los siglos XVI y XVII: El caso de Tierras de Segovia”, *Hispania*, t. XL (1980), p. 106.

<sup>157</sup> GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, R.- *El Concejo de Madrid*, págs. 248-249.

ante el municipio la posesión de un caballo y equipo militar completo para acceder a los privilegios de esta categoría: exención fiscal, nombramientos de cargos concejiles. Como mecanismo de ascenso social fue aprovechado por algunos sectores enriquecidos de los pecheros de la villa antes de que se produjera el cierre estamental a comienzos de la Edad Moderna.<sup>158</sup> Así, en 1481 el ayuntamiento procedía a destituir a un caballero de monte por ser “pechero e hijo de pechero”, lo que contradecía la ordenanza del cargo.<sup>159</sup> Pero podían serlo aquellos caballeros que formasen parte de las clientelas de los señores comarcanos, con los que el concejo madrileño mantenía constantes pleitos de términos; una contradicción que no impidió que un mayordomo de Diego Arias Dávila fuera elegido para un oficio en cuyo correcto desempeño se hubiera tenido que enfrentar necesariamente con los intereses de su señor.<sup>160</sup> A causa de su condición de caballeros, estaban obligados a prestar servicios en las campañas militares de los monarcas, por lo que debían nombrar un sustituto temporal.<sup>161</sup>

La vigilancia de los términos debía realizarse a caballo, aunque en ocasiones se relajaba su cumplimiento: en 1489 el ayuntamiento ordenaba “que las guardas e caballeros de monte de aquí a un mes sean tenudos de tener caballos, y que dende en adelante no monteén, salvo a caballo, so pena de caer en las penas en que caen los que usan de oficios que no tienen poder”.<sup>162</sup> De forma excepcional se admitió en 1503 que se usaran peones en lugar de los caballeros que estaban en ese momento en la guerra.<sup>163</sup> Era oficio no exento de peligros, pues

---

<sup>158</sup> MENESES GARCIA, E.- “Documentos sobre la caballería de alarde madrileña”, *Hispania*, t. XXI (1961), págs. 323-341. Pero falta un estudio detallado de este grupo social.

<sup>159</sup> En la sesión de 12 de enero de 1481 “los dichos señores dixeron que por quanto Francisco Preçiado, cauallero de monte, ellos ouieron información de Joan de Escalona e Alonso de Mata de cómo el dicho Francisco Preçiado era pechero e hijo de pechero, e segund la ordenança desta Villa él no lo podía ser por ser pechero, como dicho es, que mandauan al dicho Francisco Preçiado que le fuese notificado por mí el dicho escriuano que non usase del dicho ofiçio fasta tanto que los dichos señores lo viesén, e que en tanto, porque la dicho Villa non estouiese sin guarda, que nonbrauan e ponían en su lugar a Gonçalo de Madrid, hijo de Joan Garçia, montero, el qual es ábile para el dicho ofiçio”. *LAC-I*, p. 62.

<sup>160</sup> En 15 de enero de 1481 “Los dichos señores nombraron por cauallero de monte a Ferrando Serrano en lugar de Ferrando de Avila, vecino de Madrid, por quanto el dicho Ferrando Dávila pareçió antel dicho señor correxidor e dixo que por quanto él era mayordomo de Diego Arias e por sy no podía montar nin seguir el dicho ofiçio, que le pedía por merced que pusiese en su lugar al dicho Ferrando Serrano en quien él le traspasaua como dicho es, e era ábile e suficiente para el dicho ofiçio, e tenía cauallo e armas. E luego los dichos señores recibieron al dicho Ferrando Serrano al dicho ofiçio”. *LAC-I*, p. 63. La renuncia al cargo se producía por la incapacidad de desempeñarla, pero se aseguraba la elección de su sucesor.

<sup>161</sup> En 1482 hubo que sustituir a Martín de Bárzena hasta su regreso “por quanto es ydo a la vega de los moros en seruicio del Rey nuestro señor”. *LAC-I*, p. 164.

<sup>162</sup> *LAC-II*, p. 190.



los enfrentamientos con los señoríos comarcanos motivaron en ocasiones actos de violencia. En 1487 el corregidor ordenaba que actuaran juntos y armados, notificándole cualquier acto de resistencia que se les presentase “porque fue querellado que los de la Veguilla corrieron algunos dellos a lançadas, que son de tierra del marques de Moya”.<sup>164</sup> Particularmente graves resultaron los problemas con Juan Arias Dávila, señor de Torrejón de Velasco y Alcobendas: en 1498 el Guarda Mayor de los montes de Madrid, Juan de Sazedo prendó dentro de la jurisdicción madrileña algunos ganados con destino al mercado de Torrejón, siendo apresados Sazedo y otros guardas por los vasallos de Arias Dávila.<sup>165</sup>

Las tareas encomendadas a los caballeros de montes eran muy amplias: la vigilancia de los límites de la Tierra frente a las intrusiones de los concejos o señoríos vecinos, evitar que ganados ajenos a la Tierra disfrutaran de sus pastos, garantizar el cumplimiento de las ordenanzas de montes, vigilar que no hubiera intrusiones en los “panes e viñas” por parte de los ganados, e incluso se les encargaba hacer cumplir los vedamientos que el concejo establecía al prohibir comercializar determinados productos fuera de los términos de Madrid.<sup>166</sup> Eran trabajadores a comisión: en concepto de retribución recibían una parte de las caloñas fijadas por las ordenanzas correspondientes en cada caso, que solían oscilar entre una tercera parte y la mitad del total recaudado. En cuanto al desempeño de su labor, parece que cada sexmo era vigilado por uno de los caballeros.<sup>167</sup>

Pero unas funciones tan extensas limitaban en definitiva la capacidad real de ejercerlas de manera efectiva: un grupo de seis caballeros no podía tener un control sobre un territorio tan extenso como la Tierra de Madrid y sus límites, si consideramos además que los problemas relativos a intromisiones de términos se presentaban de manera cotidiana. Por ello se aprecia cómo el concejo fue estableciendo otras instancias de intervención sobre el terrazgo

---

<sup>163</sup> “Dieron licencia a Pedro de Caçeres para que pueda poner seis guardas, de las que tiene de poner a pie, porque los no halla de cavallo, a causa de ser idos a la guerra, con que venidos de la guerra quite los peones e los tenga todos de cavallo”. *LAC-V*, p. 125.

<sup>164</sup> *LAC-II*, p. 69.

<sup>165</sup> *LAC-IV*, págs.25-26.

<sup>166</sup> El 24 de enero de 1481 “Mandaron dar mandamiento para los caualleros de monte conforma a la ley para que tomen qualesquier cueros e sayales e otras cosas vedadas que se sacaren como lo ordenare el dotor de Madrid, conforme a la ley”. *LAC-I*, p. 67.

<sup>167</sup> Así parece indicarlo el acuerdo de 30 de mayo de 1485: “E dieron cargo los dichos señores a Ferrando Serrano e Gonzalo de Carvajal e Valera, caualleros de monte desta dicha Villa que trayan por relación los agrauios que ay en la tierra, cada uno por su seismo”. *LAC-I*, p. 397.

y los usos comunales, que complementaban o en ocasiones sustituían la actuación de los caballeros de montes. Desde mediados del s. XV los concejos aldeanos, como se analizará, tenían capacidad para nombrar, bajo supervisión y autorización del ayuntamiento de la villa, sus propios guardas encargados de la vigilancia de las tierras de labranza y de los viñedos dentro de sus respectivos términos.

Las ordenanzas que el concejo elaboraba sobre las viñas y los “panes” reflejan la necesidad de establecer mecanismos de control más efectivos, por lo que se buscaba ampliar el número de guardas que se sumaran a los caballeros de monte. La expansión agraria y la presión de los ganaderos que disponen de términos cada vez más reducidos crean tensiones permanentes para compaginar ambas actividades. Así, al aprobar en 1483 una nueva ordenanza de viñas que endurecía las penas a los pastores que introdujeran sus ganados en ellas, “por que aya mejor guarda y execuçión en lo suso dicho e aya más personas que miren por los heredamientos desta Villa e su tierra, ordenaron queste año, e de aquí adelante en cada año, sean nombrados los seis caualleros de monte que han de nombrar los regidores desta villa, segund quel dicho conçejo e regidores nombraren, demás de los suso dichos, para guardar las dichas viñas en la manera siguiente: que sean escuderos buenos que tengan armas e caualllos e presentados e nombrados en conçejo; que sean vecinos e moradores en esta dicha Villa e su tierra e sus arrauales”.<sup>168</sup> Sin embargo, esta intervención de nuevos caballeros de monte en la guarda de las viñas fue revisada en 1486: un informe del letrado del concejo recomendaba mantener las ordenanzas de viñas “salvo tan solamente en lo que toca a los caualleros de monte, que se debe mandar e pregonar que los dichos caballeros de monte no entiendan ni se entrometan en la guarda de las dicha viñas e majuelos, nin prenden nin lieven penas ni caloñas dellas, agora nin de aquí adelante”, lo que fue aprobado por el ayuntamiento.<sup>169</sup> También en lo que respecta a los terrenos labrantíos y su protección de los ganados se fueron estableciendo nuevos servicios de vigilancia que se agregaban a las que prestaban los caballeros de montes.<sup>170</sup> Este proceso culminaría con la creación de la “renta de las guardas de panes e viñas”, al menos desde 1492: en lo que constituye una política habitual,

---

<sup>168</sup> *LAC-I*, págs. 265-266.

<sup>169</sup> *LAC-II*, p.2.

<sup>170</sup> El 11 de abril de 1485 el concejo acordó “que aya guardas de los panes desta Villa e sus arrauales por quanto les fué pedido por algunos caualleros e escuderos desta Villa, e que se haga repartimiento sobre los dueños de los dicho panes”. *LAC-I*, p. 383. Lo cual representaba la aplicación al entorno de la Villa del mecanismo de vigilancia que venían aplicando los concejos de la Tierra hacía ya varias décadas.

el concejo procedía a arrendar a un particular la prestación de un servicio que venía regulado por una ordenanza municipal. El arrendador se encargaría de recaudar las sanciones impuestas, para lo cual en el caso de esta renta debía nombrar sus propios guardas.<sup>171</sup> Las noticias en los Libros de Acuerdos son escasas, pero testimonian la continuidad hasta comienzos del s. XVI: el 29 de abril de 1500 “Resçibiose una postura de las guardas de los panes e viñas desta Villa e diose cargo de asentallo e resçibir las fianças”.<sup>172</sup>

Otro proceso que supuso una nueva especialización dentro de las funciones de los caballeros de monte tiene que ver con la vigilancia del Real de Manzanares. La complejidad de los debates acerca del ejercicio de los derechos de los vecinos de Madrid y su tierra determinaron la creación de un nuevo grupo de caballeros de monte dedicados en exclusiva a esa zona, lo que suponía una enajenación de una de las tareas que venían desempeñando los oficiales tradicionales.<sup>173</sup> En 1493 una Provisión del Consejo Real ordenaba a la Villa que pagase el salario a los guardas que había puesto dentro del Real de Manzanares para defender sus derechos.<sup>174</sup> Las sesiones del ayuntamiento recogen el nombramiento por separado de estos guardas de los demás guardas madrileños.<sup>175</sup> Para actuar sobre el terreno, debían ser alojados por los propios concejos del Real.<sup>176</sup>

Pero la mayor transformación del sistema de vigilancia del término concejil en Madrid se produjo en 1498, cuando los caballeros de monte fueron sustituidos por un *Guarda Mayor*. El modelo medieval que encomendaba esta tarea a la caballería villana daba paso a un nuevo mecanismo en el que un particular elegido por el municipio se encargaba de estas funciones por medio de un contrato, si bien con el tiempo pasó a asimilarse a los demás oficiales

---

<sup>171</sup> En 1494 “Puso Diego Catalán la guarda de los panes e viñas del termino desta Villa con las condiciones que se arrendo agora dos años, por daqui a un año, en quatro mill maravedis, con que ha de poner sus guardas”. *LAC-III*, p.59.

<sup>172</sup> *LAV-IV*, p. 196.

<sup>173</sup> Sesión de 29 de noviembre de 1480. “Mandaron a los caualleros de monte que luego vayan a los términos que nueuamente los del real diz que tienen tomado”. *LAC-I*, p. 51.

<sup>174</sup> *AVM- Libro mss. 339*, fols. 170-171.

<sup>175</sup> 6 de octubre de 1503: “Acordose que, porque estavan nonbrados por guardas del Real, Alvaro Egas e Francisco de Madrid, e Francisco de Madrid no lo quiso azeptar, que lo sera Alvaro Egas, con que las penas sean para el, con que de dos meses en dos meses sea obligado a venir a dar cuenta e razon del recabdo que ay en la dicha guarda, e que ponga los guardas conforme a la executoria”. *LAC-V*, p. 126.

<sup>176</sup> Una Provisión de la Real Chancillería de 30 de enero de 1502 ordenaba al concejo de Manzanares dar posada a los guardas madrileños. *AVM-Libro mss. 339*, fols. 218-219.

concejiles. El 14 de febrero de 1498 se aprobó un asiento entre el concejo y Juan de Sazedo como Guarda Mayor “sobre la guarda de los montes e rayas de los términos desta Villa e sobre los panes e viñas e heredamientos de personas particulares”. Las obligaciones de Sazedo consistían en primer lugar en recorrer “los mojones e limites e rayas de los terminos”, informando cada dos meses. Debía asimismo hacer guardar y realizar las prendas correspondientes a los infractores de las ordenanzas concejiles sobre montes y sobre “panes e viñas”, si bien en este caso su ámbito de aplicación se limitaba a “los lugares de la tierra donde oviere heredamientos de señores porque donde non los oviere no sentienda el dicho cargo”. Para cumplir su misión contaría con guardas que eran “puestas por la dicha Villa a contentamiento del dicho Sazedo”. Las retribuciones del cargo y su personal consistían en el cobro de las prendas conforme a lo establecido en las ordenanzas correspondientes, además de gozar de un salario anual de 6.000 mrs.<sup>177</sup> Aunque el estatus de “caballero e escudero” seguía siendo imprescindible para desempeñar este cargo, la documentación habla ya de los “guardas” y del “guarda mayor”,<sup>178</sup> y no de los “caballeros de monte”. Todo un símbolo de que la vigilancia del término había dejado de ser responsabilidad corporativa de la antigua caballería villana para pasar a constituir un oficio municipal especializado y nombrado entre las personas de confianza del regimiento.

Entre los posibles competidores que el concejo de Madrid podía encontrar en el disfrute de pastos y otros recursos comunes dentro de la Tierra, el más temible por su organización y privilegios detentados era sin duda la *Mesta*. Desde comienzos del s. XIV Madrid y la Mesta van a protagonizar una serie de enconadas y largas disputas que se prolongan a lo largo de tres siglos; sólo a comienzos del XVII se estableció una tregua duradera, aunque no muy bien aceptada por los contendientes. Aunque para la Mesta estos debates no eran excepcionales, en el caso de la Villa adquirió una destacada gravedad. Durante todo este tiempo el municipio defendió a ultranza sus privilegios, con una intensidad que recuerda -porque en definitiva va a tratarse de un problema parecido- a la mantenida ante

---

<sup>177</sup> El asiento se recoge en *LAC-IV*, págs. 10-11.

<sup>178</sup> 4 de enero de 1501: “Mandaron los dichos señores llamar a Cristóbal de Vega d’Alcorcon e que jure e se reciba por guarda e por tal guarda le aya el guarda mayor”. *LAC-IV*, p. 268.

el Real de Manzanares, obligando con frecuencia a transigir a la supuestamente todopoderosa Mesta.<sup>179</sup>

El conflicto estalló poco después de la constitución formal de la Mesta, cuando los trashumantes serranos empezaron a introducirse en el término de Madrid durante sus desplazamientos. Pronto aparecieron los consabidos problemas que la presencia mesteña acarreaba, destacando la competencia por el uso de los pastos comunales con los ganaderos de la zona, junto con daños en cultivos y los derivados de la asignación de animales perdidos. El concejo se opuso firmemente a esta presencia, alegando que por su término no pasaba ninguna cañada, por lo que la recién creada Mesta no podría ejercer su jurisdicción: “en madrit nin en ssu termino non auia cannadas antiguas para passar ganados a estremennos. Et que muchos de los pastores de los ganados non queriendo passar por la cannada antigua que passauan por el rreal de manzanares e que metien sus ganados por termino de madrit e por la villa ffaziendo muchos dannos en ssus miesses e en ssus vinnas e en sus dehessas e en ssus sotos e en ssus prados”. Postura que recibió el apoyo de Fernando IV, que mediante dos sentencias dictadas en 1303 reconoció la inexistencia de cañada por el término madrileño, lo que suponía que los alcaldes entregadores de la Mesta no disponían de jurisdicción en la zona. Cualquier conflicto generado por el paso de los trashumantes quedaba reservado por tanto a las justicias locales: “Et ssi los pastores...quissieren entrar por madrit e por su termino e algunos dannos ffizieren o rrecibieren, que lo querellen a los jurados e a los alcaldes de la villa e que les cumplan de derecho e les judgen ssegund su ffuero e ssus priuilegios”.<sup>180</sup> El caso madrileño ilustra, pues, cómo las cañadas se iban creando, abriendo por el paso de los trashumantes, y no eran rutas que estaban perfectamente delimitadas desde tiempos inmemoriales.

---

<sup>179</sup> Los debates entre Madrid y la Mesta aparecen citados ya por Klein, que explica la concordia que se celebró como ejemplo de las que la institución mesteña tuvo que firmar con otros concejos o señores y que encontró recogidas en el Archivo de la Mesta. KLEIN, J.- *La Mesta. Estudio de la historia económica española, 1273-1836*, Madrid, 1979 (edic. orig. 1936), págs. 212-213, n. 80. Por su parte, GOMEZ IGLESIAS, A.- “Las arduas y espinosas relaciones entre la Mesta y Madrid. Una actividad desconocida dentro del Campo de la Tela (1273-1849)”, *Villa de Madrid*, n.º 41 (1973), págs. 75-86, recopiló (y con frecuencia transcribió) documentación sobre este tema de los siglos XIV a XVII procedente del Archivo de la Villa de Madrid, del que era director. Más reciente MARIN BARRIGUETE, F.- “Madrid y la Mesta: Privilegios locales y privilegios cabañiles (siglos XIV- XVI)”, *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, n.º 8 (1987), págs. 13-29. Por su parte, ROMERO FERNÁNDEZ-PACHECO, J. R.- “Madrid y la Mesta en la Edad Media”, en SEGURA GRAIÑO, C., ed.- *Caminos y caminantes por las tierras del Madrid medieval*, Madrid, 1994, págs. 107-115, no trata este tema.

<sup>180</sup> Las concesiones de Fernando IV en 1303 se incluyen en una sentencia de 1345, *Documentos*, t. I, págs. 257-269 (citas en págs. 261-2 y 263).

El problema se fue recrudeciendo a lo largo del s. XIV. La intensidad de la presión mesteña aumentaba, colisionando con el interés de la oligarquía urbana en impedir la competencia en el aprovechamiento de los pastos comunales. Madrid consiguió que las sentencias reales de 1303 fueran confirmadas por los monarcas sucesivos, convirtiéndose en una parte integrante de los privilegios de la Villa que eran ritualmente garantizados con la llegada de nuevos titulares al trono (si bien en este caso serán respetados, a diferencia de lo que sucederá con los privilegios de términos). Por su parte, las autoridades mesteñas intentaron reiteradamente intervenir y hacer valer su jurisdicción para atender las quejas y reclamaciones de los trashumantes, pero en todos los casos se vieron obligados a reconocer los privilegios aportados por Madrid o recibieron nuevas sentencias reales que los confirmaban: así sucedió en 1345, 1357, 1378, 1379 y 1398.<sup>181</sup> Todo ello suponía para la Mesta aceptar un incómodo precedente, por cuanto tenía que reconocer la validez superior de un privilegio local sobre sus propios privilegios que deberían tener aplicación en todo el territorio del Reino.

Una forma habitual en estos casos de crear una salida a un conflicto tan enraizado era el establecimiento de una *concordia* entre las partes afectadas. Para el Honrado Concejo significaba renunciar expresamente a una parte destacada de sus privilegios y, frecuentemente, realizar pagos de determinadas rentas, a cambio de asegurarse la disponibilidad de zonas de pasto y tránsito sin enfrentamientos tan constantes. Para Madrid, además de salvaguardar sus títulos, el control de los conflictos y un nuevo ingreso en sus arcas. En 1418 se firmaba el contrato entre los alcaldes de Mesta y el concejo madrileño por el que se autorizaba el paso de los trashumantes a los extremos, dándoles un plazo de cuatro días a cada rebaño para atravesar el término, sin derecho a entrar en tierras, viñas, sotos, dehesas ni ejidos, por lo que únicamente podrían disfrutar del pasto de los terrenos baldíos. Madrid, por su parte, se comprometía a conservar en buen estado los puentes que utilizasen los ganaderos, especialmente el de Viveros sobre el Jarama, teniendo como contraprestación el pago por los mesteños de la cantidad de 50 mrs por cada rebaño de un millar de cabezas que pasase por la Tierra de Madrid, estableciéndose el puesto de recaudación en la localidad de Las Rozas. El arrendamiento de su cobro dio origen a la *renta del paso de ganado*, uno de los principales componentes de los bienes de propios madrileños a fines del período medieval. La concordia funcionaba por tanto como un acuerdo que establecía obligaciones mutuas: si la Mesta renunciaba a exigir el paso libre de sus ganados y a ejercer la autoridad que sus leyes le

---

<sup>181</sup> La sentencia de 1345 es la citada en la nota precedente. Las demás se encuentran en: *Ibidem*, págs. 345-366 (1357); *Documentos*, 2ª serie, págs. 121-125 (1378), págs. 131-134 (1379) y págs. 297-300 (1398).

reconocían, lo hacía al menos con la garantía de disponer del puente de Viveros, paso destacado en el tránsito a los extremos.<sup>182</sup> Los privilegios jurisdiccionales de Madrid quedaron indemnes: en el documento se hace mención expresa de que este acuerdo no significaba reconocer que en Madrid y su término hubiera ninguna cañada; por su parte, todas las contiendas que se plantearan entre los pastores y los vecinos de la villa y tierra, así como los relacionados con la recaudación del tributo que los ganaderos mesteños debían pagar a Madrid, serían tratados con exclusividad por los alcaldes concejiles. Finalmente, la duración del acuerdo se establecía en diez años.<sup>183</sup>

En 1432 ambas parte aprobaban una nueva *concordia* que ratificaba lo sustancial del acuerdo anterior (mantenimiento de puentes, pago de tributos, inexistencia de cañadas, jurisdicción madrileña) y fijaba nuevas cláusulas destinadas a aclarar las nuevas circunstancias planteadas en las vías de tránsito y en la recaudación de la renta del paso de ganado. Así, se determinaba que los rebaños destinados al “mercado del Arrabal” de Madrid debían contribuir en la casa del portazgo; por su parte, los ganados que decidiesen invernar en la Tierra de Madrid estarían sometidos al pago del tributo. Además Madrid dio facilidades a los mesteños para abrir una nueva ruta (que no cañada por las implicaciones de jurisdicción privativa de los alcaldes entregadores que suponía) desde el norte, que iría paralela al río Jarama, se acercaría a Hortaleza, y al camino viejo de Chamartín, y dejando los viñedos a la derecha enlazaría con el camino de Alcalá a Madrid hasta el arrabal de la villa.<sup>184</sup> La causa era evitar a los trashumantes las exacciones de d. Iñigo López de Mendoza que, además de titular del Real de Manzanares, era señor de Alcobendas; en esta localidad había colocado guardas para cobrar un peaje a los mesteños sin derecho para ello. La “ayuda” madrileña tenía como contrapartida la de garantizarse una mayor recaudación. La duración de este convenio se limitaba a un año; su prórroga era una facultad exclusiva de la villa, aunque mantuvo su

---

<sup>182</sup> El mismo sentido de contraprestaciones aparece en la Concordia que la Mesta tuvo que firmar con el marqués de Santillana en 1436 para garantizarse el paso por el Real de Manzanares: a cambio de pagar la cantidad de 16 mrs por cada rebaño de mil cabezas (lo que supone prácticamente la tercera parte de lo que tenían que contribuir en Madrid), se le garantizaba la conservación de los puentes necesarios para atravesar el señorío. PEREZ BUSTAMANTE, R.- “El Real de Manzanares, el marqués de Santillana”, págs. 521-523. El cobro de tributos locales al tránsito de los ganados mesteños también estaba presente más al sur, en los términos de Toledo y Talavera. GARCIA MARTÍN, P. y SÁNCHEZ BENITO, J. M.- “Arbitrios locales sobre la propiedad semoviente en Castilla durante los siglos XIV y XV”, en GARCIA MARTÍN, P. y SÁNCHEZ BENITO, J. M.- *Contribución a la historia de la trashumancia*, págs. 285-299.

<sup>183</sup> AVM-S, 2-358-55. Copia del s. XVIII.

<sup>184</sup> Lo que viene a ratificar el carácter cambiante, de adaptación a las circunstancias del tránsito de los caminos mesteños. Algo que resalta GERBET, M. C.- *Un élevage original au Moyen Age*, págs. 135-136.

vigencia práctica los años posteriores.<sup>185</sup> De hecho, hasta el s. XVI no van a producirse nuevos conflictos -al menos de relevancia- entre el concejo y la Mesta, si bien en esa centuria el status quo mantenido va a ser cuestionado por las partes y obligará a buscar nuevos acuerdos.

Uno de los efectos más destacados de los pleitos mantenidos con los trashumantes fue la creación de una *Mesta local* en Madrid a finales del s. XV. Estas mestas o reuniones de pastores o propietarios de ganados operaron durante la Edad Media para solucionar toda la problemática derivada de la actividad pecuaria. A partir de la constitución del Honrado Concejo (del que constituyeron un precedente), la formación de mestas de ámbito concejil se va a concentrar, con muy escasas excepciones, en la mitad sur de la Península, Andalucía y en parte de Castilla la Nueva y Murcia.<sup>186</sup>

El primer intento para establecer una Mesta madrileña se llevó a cabo en la sesión del ayuntamiento celebrada el 8 de junio de 1492, con asistencia del teniente de corregidor, cuatro regidores, un nutrido grupo de trece “caballeros e escuderos” y tan sólo cuatro miembros del estamento pechero acompañados de un sexmero. Acordaron “Mesta en esta Villa e su tierra”, fijándose un total de tres reuniones anuales (que se celebrarían en junio, septiembre y marzo) para tratar todos los asuntos relativos a los ganados locales y conflictos con los trashumantes. Para regular el funcionamiento de esta mesta se nombró una comisión de cinco miembros que se encargaría de establecer ordenanzas así como de nombrar a los oficiales correspondientes. La comisión estaba integrada por un regidor, tres miembros del estamento de “caballeros e escuderos” y por otro que además de caballero era escribano y letrado de la Villa; significativa era la ausencia de pecheros o sus sexmeros representantes: quedaban así de manifiesto los intereses ganaderos de los poderosos locales.

Resulta sorprendente que un acuerdo tan importante fuese anulado tras la reunión del ayuntamiento esa misma tarde, esta vez con la presencia exclusiva de los regidores: se trataría por tanto de un concejo limitado. Más llamativo aún por los argumentos esgrimidos: habían recibido información por parte de “onbres antiguos” de “los previllejos, questa Villa tiene de

---

<sup>185</sup> COMEZ IGLESIAS, A.- “Las arduas y espinosas relaciones”, p. 79.

<sup>186</sup> Estudiadas por BISHKO, C. J.- “The andalusian municipal Mestas in the 14th-16th centuries: administrative and social aspects”, *Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval*, Tomo I, Córdoba, 1978, págs. 347-374, y “The municipal Mestas of New Castile and Murcia”, *Cuadernos de Historia de España*, t. LXXIV (1997), págs. 7-27. La Mesta de Madrid en págs. 25-27.



sus Altezas y de los reyes sus antepasados, en que se contiene que en la dicha Villa e su tierra no aya Mesta nin la pueda aver”, por lo que revocaron tanto el establecimiento de la mesta como el encargo de la comisión. Sin embargo, no existía en los documentos que los monarcas habían concedido a Madrid ninguna prohibición en este sentido.<sup>187</sup>

La Mesta aprobada en 1495<sup>188</sup> aparece como resultado de la iniciativa de los representantes de “los vecinos e moradores de la dicha villa e su tierra que son sennores de ganados”, que consiguieron la autorización real para constituir una Mesta local en Madrid y elaborar sus ordenanzas. En ellas se contempla la separación entre los señores de ganados, los propietarios, y sus trabajadores, los pastores y mayoresales. Precisamente uno de los objetivos de la ordenanza, presente en numerosos capítulos, era garantizar el control de los propietarios sobre sus dependientes: “para que sus pastores no les puedan fazer menos nengund ganado e para escusar muchos dannos que sobre esta cabsa reciben en la dicha villa e su tierra”. El otro propósito principal era regular la adjudicación de los ganados mostrencos, que se debían concentrar en un corral concejil (de acuerdo con lo establecido en la citada ordenanza de 24 de junio de 1493); en caso de no aparecer finalmente su propietario, pasarían a engrosar las arcas municipales. Precisamente este tema era uno de los más destacados en la intervención de los alcaldes mesteños en los distintos términos que atravesaban los trashumantes: al organizar su propia Mesta, Madrid reforzaba la exclusión de la jurisdicción del Honrado Concejo en su Tierra. Para cumplir esta funciones se debían realizar dos reuniones anuales (fines de junio y de octubre) a las que acudirían los pastores. Los oficiales concejiles encargados de controlar la Mesta eran dos alcaldes, elegidos por sorteo entre un grupo de seis “sennores de ganados de la villa e de sus arrabales” propuestos por los dos alcaldes salientes. Los nombrados elegían a su vez a dos acusadores encargados de presentar las denuncias. El contenido de las ordenanzas de la Mesta madrileña, por tanto, ratificaba el control de los ganaderos urbanos sobre sus pastores y la plena autonomía del concejo urbano en la regulación de los asuntos pecuarios dentro de su término, si bien esta autonomía sería cuestionada en la centuria siguiente.

---

<sup>187</sup> *LAC-II*, págs. 339-340. Ch. J. Bishko apunta como explicación que los vecinos antiguos consultados y los regidores pudieron sufrir la misma confusión entre Mestas municipales y la Mesta Real que han experimentado ciertos historiadores de nuestros días. Se refiere a los privilegios que tenía Madrid que negaban la actuación de la Mesta (Real) en su jurisdicción. BISHKO, C. J.- “The municipal Mestas of New Castile”, p. 26. Podría ser: poco después, el 21 de junio de 1493, el ayuntamiento aprobaba una ordenanza para que los ganados mostrencos se recogieran en un corral municipal, aclarando que era “sin perjuizio del previllejo questa Villa tiene sobre la mesta”. *LAC-III*, págs. 28-29.

<sup>188</sup> Las Ordenanzas de la Mesta de Madrid están publicadas en *Documentos*, t. III, págs. 395-408.

En un sentido similar cabe interpretar el pleito que mantendrá Madrid con el monasterio del Paular a fines del s. XV y comienzos del XVI.<sup>189</sup> Aunque el monasterio cartujo había recibido un privilegio del monarca Enrique III en 1406 que garantizaba el libre tránsito de sus ganados por todo el reino, pudiendo disfrutar de los pastos comunes y baldíos de los concejos y señoríos,<sup>190</sup> no parece que lo ejerciera dentro del término de Madrid hasta mediados de siglo. Pero una vez que la presencia de un competidor en los recursos comunes se hizo evidente, se produjo la reacción del concejo madrileño, que promovió un pleito a fines del s. XV que llegó hasta la Real Chancillería de Valladolid. En las declaraciones de los testigos presentados por el Paular se alegaba que sus ganados solían pastar habitualmente dentro de la Tierra de Madrid, al igual que lo venían haciendo en el Real de Manzanares, la Tierra de Talamanca, de Guadalajara o de Segovia, si bien la presencia en el entorno madrileño no se remontaba nunca más allá de mediados de siglo. Los testigos citaban preferentemente el ganado cabrío y lanar (uno precisaba que los rebaños de cabras pastaban hacía 20 años, mientras la presencia de las ovejas sólo se remontaba a 10 años); en menos ocasiones se citaban ganado vacuno (para manteca y leche de los frailes) y ganado de labor y tiro (yeguas, bueyes). La causa: “los términos de la dicha villa de Madrid e de los lugares de su tierra están çerca e son buenos e grandes e tienen muchos montes”, mencionándose preferentemente los que se localizaban en la zona del monte de El Pardo, donde los pastos mantenían su carácter comunal: Santa María del Tornero, Navavellida, Paparrillas, Navachescas..., topónimos localizados dentro de el Pardo, siendo mencionados asimismo localidades cercanas como las Rozas o Majadahonda. La imagen que desprenden los testimonios es que los pastores del monasterio utilizaban tradicionalmente el Real de Manzanares como zona de pasto, pero que con el tiempo se habían ido introduciendo en la Tierra madrileña, concretamente en las áreas más cercanas al Real, que eran las que concentraban una mayor dotación de pastizales comunales.

Las alegaciones madrileñas se centraban en el no ejercicio del privilegio durante tanto tiempo, por lo que habría caducado y en la escasez de pastos en su territorio. Invocaban asimismo los privilegios de términos de que disponían y la nula tolerancia que el concejo

---

<sup>189</sup> AVM-S, 2-215-42.

<sup>190</sup> Una política frecuente en la Castilla medieval que impulsó la vocación ganadera de las instituciones eclesiásticas. GERBET, M.-C.- “Des ‘Libertés de pâturage dans tout le royaume’ aux exemptions partielles de taxes sur la trashumance. Le roi de Castille et l’essor de l’élevage monastique medieval”, *En la España Medieval*, n.º 14 (1991), págs. 77-130.

ejercía con los ganados intrusos: si el Paular había introducido sus rebaños era porque se había considerado pertenecían a vecinos del Real de Manzanares. La sentencia de la Chancillería de 1514 rechazaba estas razones: “condenamos al dicho concejo, justicia, regidores de la dicha Villa de Madrid a que desen e consientan al dicho monasterio del Paular paçer con sus ganados en los términos de la dicha villa de Madrid” bajo pena de 50.000 mrs cada vez que la desobedeciesen. Más suerte tuvo la alegación del concejo: por sentencia de revista de la misma Chancillería de 16 de mayo de 1516 se reconocían de nuevo los derechos del Paular, pero esta vez se limitaba la extensión de los rebaños que podían disfrutar del privilegio dentro de la Tierra de Madrid: hasta un máximo de 500 ovejas o carneros y de 200 cabras, prohibiéndose la presencia de cualquier otro tipo de ganado. Una derrota (o victoria, según se mire) parcial del concejo madrileño, que de nuevo había defendido su control de los recursos de la Tierra y frenado la expansión de un competidor claramente privilegiado por la monarquía.

## 1.2 – LOS PLEITOS DE TERMINOS BAJOMEDIEVALES

Los pleitos y enfrentamientos por la delimitación de términos, tanto entre concejos como entre éstos y señoríos limítrofes, adquieren especial virulencia a fines de la Edad Media. Prácticamente ninguna de las monografías sobre concejos determinados pasa por alto este tema, que tan frecuentes huellas documentales ha dejado en los archivos locales. El objetivo de este apartado es analizar el caso madrileño para determinar la relación existente entre los conflictos de términos y la articulación del régimen comunal, todo ello relacionado con el propósito del señorío urbano madrileño de reservarse con exclusividad el aprovechamiento del término.

La oposición que el concejo manifestaba a la política de enajenación de sus aldeas para crear señoríos nobiliarios en su entorno (capítulo 1) dará un salto cualitativo a lo largo del siglo XV, terminando por generar pleitos y debates de larga duración, cada vez más enmarañados, que en ocasiones se prolongan bien entrada la Edad Moderna. La presión de la nobleza asentada en las cercanías de Madrid para acaparar más tierras y vasallos encontrará una firme respuesta por parte de la oligarquía concejil. La formación de bandos y relaciones clientelares dentro del señorío urbano y la intervención de la monarquía, deseosa de preservar

su base fiscal en el realengo, pero también de favorecer a ciertos títulos cuyo apoyo le es imprescindible, completan el marco en el que se van a desarrollar estos conflictos.

La formación de un nuevo señorío provoca la aparición de debates sobre unos términos tradicionalmente estables. Es lo que sucede en Madrid con sus nuevos “vecinos”, los marqueses de Moya. El destacado apoyo político de Andrés Cabrera al ascenso al trono de los Reyes Católicos se vio recompensado con su ascenso a la nobleza y la concesión en 1480 de 1.200 vasallos de los sexmos segovianos de Valdemoro y Casarrubios.<sup>191</sup> Unos límites que habían resultado poco conflictivos desde la hitación de Fernando III en 1239 (capítulo 1), empezaron a verse discutidos rápidamente. En 1487 ya se habían producido debates y prendas por intromisiones dentro de la Tierra madrileña.<sup>192</sup> Con posterioridad los jueces de términos sancionaron los derechos del concejo madrileño y ordenaron abandonar ciertos términos usurpados por los vasallos del mayordomo real, acerca de lo cual éste solicitaba una revisión, amenazando con recurrir ante los tribunales en caso contrario.<sup>193</sup> La importancia que los derechos de pasto en los terrenos comunales y baldíos tenían en los conflictos de términos, quedaba constatada en 1496 con la propuesta de los marqueses de Moya al ayuntamiento madrileño: aduciendo la cercanía de los lugares y el que siempre se habían penalizado las intromisiones de los ganados con la pena del quinto, proponía se consultara a los vecinos si deseaban mantener el quinto o bien una multa más moderada. Encargado el sexmero correspondiente de la consulta a las localidades fronterizas, informaba “que lo que quieren es que se guarde la costumbre antigua de quinto”.<sup>194</sup>

Sin embargo, el gran protagonismo en cuanto a relaciones conflictivas por cuestión de términos con la Villa madrileña, corresponde a los señoríos más antiguos, constituidos por aldeas que antaño pertenecieron a la Tierra madrileña. La férrea oposición mantenida por el concejo a la segregación de sus términos y habitantes tuvo sus frutos en una situación relativamente infrecuente en las relaciones entre el realengo y el señorío nobiliario en la Baja Edad Media: el reconocimiento de que la jurisdicción señorial en las localidades segregadas se limitaba a las “goteras”, es decir, estrictamente al espacio ocupado por las edificaciones de

---

<sup>191</sup> El entorno político de esta concesión y la reacción segoviana en PEREZ, J.- *Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos*, Madrid, 1988, págs. 176-178.

<sup>192</sup> *LAC-II*, p. 78.

<sup>193</sup> *LAC-III*, p. 202.

<sup>194</sup> *LAC-III*, p. 219.

cada localidad, mientras Madrid ejercía la jurisdicción en el resto del territorio; se trataba por tanto de localidades sin términos propios, insertas dentro de lo que seguía siendo la Tierra madrileña. Una situación que quedaba claramente descrita en una Cédula de los Reyes Católicos dada en Medina del Campo el 7 de marzo de 1504 que aprobaba las alegaciones del procurador madrileño: “las villas y lugares de señorío que fueron tierra e jurediçion desa dicha villa e fueron partadas della, las quales dichas villas e lugares son Parla e Pinto e Polvoranca e Torrejón de Velasco e Cubas e Griñón e Barajas e Alameda e Alcobendas e Coveña e diz que non tienen más término e jurediçión de las goteras”.<sup>195</sup> El que el señorío urbano se extienda por todas las localidades señorializadas muestra el relativo éxito de esa oposición a la marea enajenadora bajomedieval y parece ser un caso bastante excepcional.<sup>196</sup>

Los conflictos creados por esta situación resultaron particularmente virulentos y tortuosos con las localidades que formaban parte del señorío de los Arias Dávila. La presencia de esta familia segoviana en el entorno madrileño se produce paralelamente a su ascenso social bajo el reinado de Enrique IV (capítulo 1). La cesión de Alcobendas (1457) y Torrejón de Velasco (1465), junto con la compra de la jurisdicción de Palomero y Pozuela en 1465, configuran un importante núcleo nobiliario situado al noroeste y al sur de la Tierra madrileña. Al igual que el resto de las localidades que habían formado parte de la tierra madrileña y posteriormente señorializadas, tanto Alcobendas como Torrejón de Velasco no tienen término jurisdiccional propio, sino que el domino señorial se extiende tan sólo a las “goteras” o “canales” de las casas de estas localidades.<sup>197</sup> Pueden tener propiedades a título individual,

---

<sup>195</sup> Cédula que aparece recogida en otra Cédula de Carlos V de 30 de julio de 1522. El motivo de la reclamación en ambos casos fue la realización de prendas a los ganados de los madrileños y la pretensión de juzgarlos e imponer calañas por las justicias de los lugares de señorío. En las dos ocasiones se determinaba que los ganados prendados se trasladasen a la localidad madrileña más cercana para ser juzgadas. AVM-S, 3-101-41. En todo caso, en 1504 se recogía una situación muy anterior, sin que sea posible precisar su origen concreto.

<sup>196</sup> Aunque aparecen algunas situaciones semejantes, tienen por lo general un ámbito de aplicación mucho más limitado, con frecuencia una sola localidad. Por ejemplo, en la villa de Los Palacios, del marqués de Cádiz, sin término propio, situada dentro del de Sevilla. CARMONA RUIZ, M. A.- *Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su “tierra” durante el siglo XV*, Madrid, 1995, p. 176

<sup>197</sup> Tal y como lo expresa un Auto del Consejo de 1691 al reconocer a Madrid el derecho de “ejercer la jurisdicción ordinaria en todos sus términos hasta las canales de las últimas casas de la villa de Alcobendas, según y en la conformidad que hasta ahora la han exercido”. AVM-S, 3-176-39. Similar lo que sucedía con Torrejón de Velasco: en 1608 el teniente de corregidor decide hacer una audiencia “arrimado a las goteras de la dicha villa de Torrejón de Velasco jurediçion de la dicha villa de Madrid”. AVM-S, 3-181-52. El origen de esta situación quizás se remonte a las concesiones reales de la jurisdicción a Diego Arias Dávila, procedentes de antiguos señores caídos en desgracia. Se trataría por tanto de cesiones de vasallos pero no de términos jurisdiccionales. Lo cierto es que en el caso de las señorializaciones iniciales las fórmulas son las habituales,

pero se sitúan dentro del término jurisdiccional o Tierra de Madrid. Es fácil suponer las consecuencias que este hecho tenía para el régimen comunal: la falta de disponibilidad de zonas de pasto, como dehesas, baldíos, montes. Aunque tengan la apariencia de conflictos por los símbolos de la jurisdicción (horcas, varas de justicia), este componente de términos comunales tiene gran trascendencia en los frecuentes pleitos que realengo y señorío mantendrán en la Tierra madrileña.

Alcobendas, como aldea sin términos propios, optó desde comienzos del s. XV (bastante antes, por tanto, de la llegada de los Arias Dávila) por la vía de establecer *concordias o conveniencias* con el concejo de Madrid. La primera se firmaría antes de 1426: a ella se hace referencia en la que se firmó en 1456, afirmando que hacía 30 años que la aldea de Alcobendas no realizaba los pagos acordados. La concordia fue una iniciativa del concejo aldeano, completamente al margen del señor de la localidad: de hecho fue la oposición del marqués de Santillana la que impidió que “pagasen ni contribuyesen en cosa alguna de lo en la dicha conveniencia e pacto contenido”. Por ello Madrid les había vedado el uso de los términos. En 1456 (sólo un año antes de que la aldea pasara a los Arias Dávila) se fijaba un nuevo acuerdo entre el concejo madrileño y los representantes de Alcobendas, esa vez con la aprobación de su señor Diego Romero, alcalde mayor de Toledo. La razón de este apoyo: “sería causa si el dicho pacto no se guardase de gran despoblación de la dicha Alcobendas porque ellos no tenían otro término para en que paçiesen sus ganados ni en donde cortaren leña saluo en los términos de la dicha Madrid”. A cambio de poder utilizar los términos de la Tierra madrileña, los vecinos de Alcobendas se comprometían a pagar 800 mrs al año con carácter perpetuo, una cantidad que incluía “todos e cualesquier pechos e tributos que al dicho conçejo de la dicha Alcouendas pertenesçieren e ouieren a pagar en cualquier manera”. Por su parte, Madrid anulaba la demanda de todas las deudas pendientes del anterior acuerdo.

Un recién llegado Diego Arias Dávila al señorío de Alcobendas toleró este acuerdo, aprovechando la ocasión para empezar a estrechar lazos con el concejo de Madrid, como parte de su estrategia patrimonial, en la que la presencia y los intereses al sur del Sistema Central adquirirían cada vez más importancia. Así, en sesiones del concejo madrileño celebradas el 4 de agosto y el 4 de octubre de 1458 se acordaba, ante la necesidad de reparar el puente de Toledo sobre el Manzanares y el hecho de que “esta dicha Villa no tenía propios ni otros mrs. de que se socorrer”, vender el derecho de 800 mrs anuales por parte de Alcobendas a su nuevo señor,

---

con mención expresa de los términos de las aldeas. Por otro lado, las localidades de Palomero y Pozuela,

Arias Dávila. La cantidad que pagaba el contador real al concejo era muy escasa: 6.000 mrs (apenas siete años y medio de renta anual), recibiendo a cambio el derecho por “juro de heredad”. En la transacción se hacía referencia a que además Arias conseguiría para Madrid confirmar los privilegios de los reyes anteriores sin cobrar derechos, o a que había realizado muchos favores a la Villa. En suma se trataba no sólo de hacer un buen negocio a costa de las arcas municipales, sino también de establecer contactos y redes clientelares dentro de la oligarquía madrileña.<sup>198</sup> Ocasión aprovechada por una parte de ésta para acercarse a una familia ascendente dentro de la corte de Enrique IV.

Pronto, sin embargo, comenzaron las desavenencias entre los Arias Dávila y el concejo madrileño. La concentración de localidades señoriales cercanas a Madrid (además de Alcobendas, disponían de Torrejón de Velasco, Palomero y Pozuela) les convirtió en demasiado poderosos; junto con los Mendoza (Real de Manzanares, Cobeña) conformaban una tenaza señorial que amenazaba los intereses de miembros de la oligarquía madrileña.

Las circunstancias políticas por las que atravesó el reino de Castilla a la muerte de Enrique IV, con la guerra civil que consolidará a Fernando e Isabel en el trono, resultan determinantes en la configuración de bandos entre la nobleza con intereses en Madrid. Así, los Mendoza van a figurar entre los más destacados artífices de la victoria de la candidatura de Isabel; entre otros muchos partidarios nobiliarios de su causa figuran los Arias Dávila, caídos en desgracia los últimos años del reinado de Enrique IV. Pero Madrid y su Alcázar estaban controlados por partidarios del marqués de Villena, el más conspicuo defensor de la causa de doña Juana. Entre sus aliados se encontraban el alcaide de El Pardo y Juan Zapata, señor de Barajas y La Alameda, destacados prohombres de la oligarquía concejil madrileña. Desde la fortaleza de La Alameda realizaron incursiones contra las tierras de El Real.<sup>199</sup> Precisamente fueron Diego Hurtado de Mendoza, con apoyo de Pedro Arias Dávila, los encargados de la toma del Alcázar madrileño para el bando isabelino. Lo cierto es que a partir de este hecho las dos familias nobiliarias van a protagonizar constantes enfrentamientos y pleitos con el concejo

---

adquiridas por compra, no son mencionadas como tales señoríos de “tejas adentro”.

<sup>198</sup> La conveniencia de 1456 y la venta de 1458 en AVM-S, 3-40-21.

<sup>199</sup> “Durante estas luchas el alcaide del castillo de El Pardo y Juan Zapata (ambos partidarios del de Villena), hicieron, desde el cercano castillo de La Alameda, diversas incursiones en el condado del Real de Manzanares el año 1476, siendo combatidos por las gentes del duque”. LAYNA SERRANO, F.- *Castillos de Buitrago y Real de Manzanares*, p. 82. Las circunstancias de la guerra civil y los bandos nobiliarios, en las síntesis generales del período, PEREZ, J.- *Isabel y Fernando*, págs. 93-116 y EDWARDS, J.- *La España de los Reyes Católicos (1474-1520)*, Barcelona, 2001, págs. 32-47.

madrileño (al menos con una parte considerable de la oligarquía que lo controla), que van a desembocar finalmente en la guerra de las Comunidades.

El resultado de esta nueva relación de fuerzas se hizo evidente en la década de 1480. Un concejo que no había sido depurado, denunció la venta que había hecho del derecho de 800 mrs a Arias Dávila, aduciendo defecto de forma en la convocatoria de la reunión. Pronto se sumaron otros conflictos, provocados por los intentos del municipio de excluir totalmente a los vecinos de Alcobendas de la utilización de los términos comunales de la Tierra de Madrid: se denunció el uso de la dehesa de Valaño, término que había sido declarado comunal por las sentencias de los pesquisidores; se planteó la supresión de dos dehesas, denominadas Nueva y Vieja que los vecinos de la localidad tenían dentro de los términos de Madrid, así como roturaciones y plantaciones de viñas realizadas en los últimos años dentro de tierras comunales. Sobre todo ello se siguió pleito ante la Chancillería de Valladolid, que por sentencia de 21 de enero de 1483 reconoció el derecho de los vecinos de Alcobendas a “paçer e roçar e caçar e cortar e faser carvón” en el término de Valaño, ordenando asimismo guardar la conveniencia antigua entre las dos partes, pero evitaba pronunciarse sobre las demás reclamaciones.<sup>200</sup>

Como un intento de resolver esta acumulación de problemas, se estableció una nueva escritura de acuerdo o conveniencia en 1483 entre el concejo de Madrid por un lado y el de Alcobendas y Juan Arias Dávila por otro. La fórmula para conseguir el consenso fue la de una sentencia arbitral entre los representantes de las partes, que regularon los distintos motivos de conflicto. En primer lugar se declaraba la dehesa de Valaño por “pasto común”, prohibiendo la roturación por cualquiera de las partes. Se reconocía pertenecer la dehesa Vieja a la villa de Alcobendas: “e la tengan e guarden por suya, e como suya, e como dehesa vedada e dehesada para agora e para siempre jamas”, pudiendo nombrar sus propios guardas; sin embargo, dicha dehesa se encontraba dentro del “término e jurisdicción dela dicha villa de Madrid”, por lo que se debía regular por las ordenanzas de su concejo, además de que las “penas e cualesquier prendas que por las guardas de la dicha dehesa fueren fechas, haya de ser y sean juzgadas por la justicia ordinaria de la dicha villa de Madrid e por los dichos ordenamientos de ella”. Por su parte, la dehesa Nueva pertenecía a Madrid, siendo declarada como pasto “común” de la Villa y su Tierra, si bien los vecinos de Alcobendas disponían de los derechos de “pacer y rozar y

---

<sup>200</sup> AVM-S, 3-173-10.



cazar e amesnar e facer carbon”. Unos derechos que se extendían a todos los demás términos comunales de la Tierra madrileña, en igualdad de condiciones con los vecinos madrileños. A cambio se comprometían a pagar, de acuerdo con lo estipulado en la concordia de 1456, 800 mrs anuales, quedando anulada la venta que se hizo a Diego Arias.

Otros problemas tenían que ver con los cultivos que los vecinos de Alcobendas habían llevado a cabo dentro de los términos madrileños. En cuanto a las tierras de labranza se determinaba que debían pagar el derecho de *nihar*, de forma similar a como lo hacían otros concejos de la Tierra. Por lo que respecta a las viñas, se cedía la propiedad de todas las que se hubieren plantado hasta la fecha. Por esta cesión de viñedos y derecho de labranza en los términos roturados, se fijó un pago de 2.200 mrs anuales.

A cambio de todas las cesiones de derechos y tierras el concejo de Alcobendas se comprometía a pagar por tanto un total de 3.000 mrs anuales a Madrid. Esta cantidad lo era en concepto de “martiniega de la dicha villa de Madrid e su tierra”, debiendo repartirse junto con la de los demás pecheros madrileños; se trata, por tanto, de un reconocimiento expreso de jurisdicción sobre el término.<sup>201</sup> Se entregaría anualmente al mayordomo de propios de Madrid, por lo que desde el inicio pasó a convertirse en un ingreso de los propios.<sup>202</sup> Aprobado por los concejos respectivos, este acuerdo pronto será discutido, pero el pago de los 3.000 mrs y el disfrute de los derechos comunales y los términos cultivados por los vecinos de Alcobendas perdurarán durante toda la Edad Moderna.<sup>203</sup>

El acuerdo era favorable a los intereses de la villa señorial. De hecho, la primera reacción contra él procede del gobierno real, que en 1485 solicitó al ayuntamiento madrileño enviase representantes ante el Consejo Real para dar cuenta de la enajenación de términos a favor de Alcobendas que había llevado a cabo.<sup>204</sup> Madrid terminó por denunciar la

---

<sup>201</sup> La martiniega es una renta de origen señorial en reconocimiento de jurisdicción, que en la Baja Edad Media pasó a convertirse en un impuesto real. GARCIA DE VALDEAVELLANO, L. de- *Curso de Historia de las Instituciones*, págs. 251 y 600.

<sup>202</sup> A diferencia de lo que sucedía con el resto de la martiniega. En 1519 se informa que la martiniega ascendía a un total de 20.720 mrs, pero que “no se cargan por propios porque la Villa no lleva nada dellos que están situados al monasterio de Santo Domingo desta Villa y a Nuestra Señora de Tocha y a Santa Clara”. AVM-S, 3-6-8.

<sup>203</sup> El texto de la conveniencia en AVM-S, 3-173-10.

<sup>204</sup> *LAC-I*, págs 419-420. Los enviados fueron retenidos varios días en clara muestra de desaprobación a la actuación del concejo en este asunto.

conveniencia, volviendo a retomar los prendamientos por los caballeros de monte.<sup>205</sup> En 1494 el acuerdo seguía los trámites judiciales: cuando el procurador de Alcobendas se presentó ante el concejo para pagar los 3.000 mrs, éste se negó a cobrar dicha cantidad, alegando su nulidad “por ser fecha en mucho fraude desta dicha Villa y sobrello esta pleito pendiente ante sus Altezas”.<sup>206</sup>

El año de 1492 marca un hito en las relaciones de Madrid con los Arias Dávila y Alcobendas. La creación en esa fecha de la nueva localidad de San Sebastián, integrada dentro de la jurisdicción madrileña y bajo el patrocinio de su concejo, va a provocar una virulenta reacción señorial y, dentro de la típica lógica de acción y reacción, una firme defensa tanto del concejo como de la monarquía. La política repobladora de Madrid en San Sebastián y en la cercana Villanueva tiene un claro objetivo antiseñorial y supondrá, como veremos, la reestructuración de todo el patrimonio comunal en la zona.

Igualmente problemáticas resultaron las relaciones con esta casa nobiliaria en relación a Torrejón de Velasco. Además de los planteados por la falta de jurisdicción señorial fuera de los límites estrictos de la localidad, se añaden los enfrentamientos que se van a generar en torno a las cercanas localidades de Palomero y Pozuela, que terminarán despobladas, y el monte de Bumberos. Todo ello configura una zona de especial conflictividad, que continuará a lo largo de los siglos XVI y XVII.

La adquisición por Diego Arias de las aldeas de Palomero y Pozuela cuando está recibiendo el señorío de Torrejón de Velasco indica bien a las claras el deseo de configurar un gran entorno señorial. Cerca se encuentra Puñoenrrostro, localidad que obtiene en 1462 de la Orden de Calatrava y que terminará por dar nombre a su título nobiliario. Según Molénat, desde mediados del s. XV se encontraría despoblado; para 1530 consta que se había constituido como dehesa.<sup>207</sup> La conversión de despoblados (o aldeas cuyo despoblamiento es

---

<sup>205</sup> Razones alegadas por el ayuntamiento en 1489: “asi porque della fue reclamado por algunos regidores e procurador de la Villa e otras personas, commo porque aviendo sentencias de juezes de terminos pasadas en cosa juzgada, en que fue todo lo susodicho, que por virtud de la dicha conveniencia se les dio, dado e apropiado a la dicha villa, commo porque a noticia de sus Altezas fue venido de la dicha conveniencia y uvieron enojo dello y mandaron llamar algunos de los juezes a la villa d’Alcala, donde estavan, e mandaron detener alli por ciertos dias a los que fueron en ella, y las dichas sentencias viejas y la dicha conveniencia estan presentadas en el Consejo de sus Altezas”. *LAC-II*, p. 191.

<sup>206</sup> *LAC-III*, págs. 110-111.

<sup>207</sup> Cita un texto de 1530: “los dichos conçejos de Palomero e Puñoenrrostro obimos información de testigos y vista de ojos que estan despoblados y que el termino de Puñoenrrostro esta echo dehesa”. MOLENAT, J. P.- *Campagnes et Monts de Tolède*, p. 573, n. 167.

forzado por los señores) en *dehesas* es una estrategia habitual de los señores y nobles en el entorno toledano en el tardomedioevo. Las circunstancias de escasez de población del período son aprovechadas por los notables de la ciudad de Toledo para llevar a cabo la conversión de sus propiedades en terrenos cerrados (*dehesas*), dedicados a pastos en lugar del cultivo, que con frecuencia eran arrendados a ganaderos trashumantes.<sup>208</sup> Estas nuevas dehesas parecen exclusivas de Toledo, de acuerdo con Molénat, si bien un proceso parecido pero de menos intensidad tendría lugar en la zona de Talavera con las denominadas “heredades cerradas”.

El señorío de Torrejón de Velasco y localidades allegadas ilustra un intento de constitución de este modelo de *dehesa* alrededor de Torrejón, que va a verse frustrado en gran medida por la oposición del concejo madrileño. El interés por la conversión en pastizales de los términos despoblados por parte de los Arias Dávila procede de la consolidación de un pujante mercado ganadero en la villa de Torrejón de Velasco ya a fines de la Edad Media, cuya importancia será creciente en los siglos posteriores. Ubicado entre núcleos urbanos importantes como Madrid y Toledo y cerca de la cañada real soriana, será uno de los más destacados núcleos de abastecimiento de ganados para la zona centro.<sup>209</sup> De este hecho se desprende la trascendencia que tenía el control de los pastos cercanos, por los que los Arias Dávila mantendrán encarnizadas pugnas con la Villa y Tierra de Madrid.

Los conflictos comenzaron en fechas más tardías que en la zona noroeste de la Tierra de Madrid (casos de Alcobendas o Cobeña), pero tendrán una gran incidencia a lo largo del s. XVI. En 1485 el juez de términos Alfonso del Aguila realizó una pesquisa en torno a los términos de Pozuela, Palomero y el monte de Bumberos, un encinar situado cerca de ésta última localidad (lindando con los términos de Esquivias y Valdemoro). El resultado fue ratificar los derechos de los vecinos de la Villa y Tierra de Madrid a pastar sus ganados en los términos baldíos, mientras en el monte de Bumberos disponían de los aprovechamientos comunales de los pastos, cortar leña o cazar (citándose caza menor, como conejos, liebres y perdices). En las declaraciones de los testigos se daba cuenta de cómo recientemente habían comenzado las roturaciones de algunos vecinos de Torrejón en el monte y también

---

<sup>208</sup> Proceso estudiado con detalle por MOLENAT, J. P.- “Tolède et ses finages au temps des Rois Catholiques: contribution à l’histoire sociale et économique de la cité avant la révolte des Comunidades”, *Melanges de la Casa de Velázquez*, t.VIII (1972), págs. 327-377; y el mismo- *Campagnes et Monts de Tolède*, págs. 49 y ss.

<sup>209</sup> BERNARDOS SANZ, J. U.- *No sólo de pan. Ganadería, abastecimiento y consumo de carne en Madrid (1450-1805)*, Tesis doctoral inédita, Universidad Autónoma de Madrid, 1997, p. 165.

comenzaban a preñar a los ganados de los habitantes de la Tierra de Madrid que disfrutaban sus derechos comunales, una actitud que se reiterará con frecuencia.<sup>210</sup>

La estrategia de Arias Dávila consistió en iniciar conflictos y pleitos en torno a la jurisdicción del entorno de Torrejón de Velasco, sin duda por la trascendencia que el control jurisdiccional otorgaría para la organización económica del espacio, pudiendo así garantizarse la eliminación de un competidor como el concejo de Villa y Tierra madrileño. Este es el sentido de algo que en principio tenía un contenido simbólico (pero terrible): el levantamiento de horca como señal de jurisdicción en las afueras de sus localidades de Torrejón y Alcobendas, que de inmediato el corregidor de Madrid se encargó de derribar.<sup>211</sup> Durante los siglos posteriores estos enfrentamientos se repetirán, si bien con símbolos de poder menos tremendos, como el sacar varas de justicia por parte de las autoridades del concejo de Torrejón fuera de la línea de goteras. La finalidad última era acabar con el modelo de señorío concejil pero también de primacía del realengo, que se había consolidado en la Tierra de Madrid durante el reinado de los Reyes Católicos.

## 2 – EL REAL DE MANZANARES, ¿UN ESPACIO COMUNAL PARA MADRID Y SU TIERRA?

Hasta mediados del s. XIII, como ya se ha analizado, Madrid mantuvo una enconada disputa con el concejo de Segovia por la pertenencia del espacio situado al sur del Sistema Central que, al menos desde el privilegio de términos de Alfonso VII de 1152, había sido atribuido a Madrid. En el reinado de Alfonso X el conflicto cambió de orientación, pues el monarca decidió reservarse la jurisdicción del territorio en cuestión, convertido así en el “Real de Manzanares”, hasta la definitiva resolución del pleito, aunque en realidad terminaría, como es conocido, en su señorialización. La frustración de los derechos legales que amparaban la inclusión del espacio serrano en la Tierra madrileña, sin embargo, no supuso la exclusión definitiva del concejo de Madrid de este territorio: el propio Alfonso X reconoció la continuidad de los aprovechamientos comunales por los madrileños tras la apropiación del Real de Manzanares. Precisamente garantizar estos derechos se convertirá progresivamente en

---

<sup>210</sup> AVM-S, 3-125-6 y 2-215-18.

el principal objetivo del concejo, abandonado en última instancia la pretensión de recuperar la jurisdicción, una actitud que se va haciendo cada vez más evidente a comienzos del s. XIV, cuando la señorialización del término serrano parece ya definitivamente consolidada.

En principio esto significaba que el Real conservaría en buena medida su funcionalidad económica para los madrileños, la de constituir un área de abundantes pastos y montes, un *saltus* en definitiva. La especialización de este territorio en dichas funciones permitiría asegurarse abundantes pasturas de verano, lo que incluso hubiera podido permitir la práctica de la trashumancia<sup>212</sup> (como se estaba haciendo sobre todo en la vertiente norte de la misma cordillera), además de facilitar el abastecimiento de combustible abundante. La existencia de pastizales en los "extremos" del término permitiría entonces una intensificación de la dedicación a la agricultura en el área central (la Villa y sus aldeas cercanas), mientras que los territorios más distantes (la Sierra) se podrían especializar en usos más extensivos del suelo. De esta forma se continuaría con una organización espacial que en última instancia venía heredada de la época musulmana y que se había estructurado más completamente en el concejo de repoblación: cultivos agrícolas en el entorno urbano y zonas ganaderas y boscosas en el área de piedemonte. Sin embargo, la resistencia que tanto los señores del Real como sus propios habitantes van a plantear a la presencia madrileña, provocará que los costes en que debe incurrir para ejercer sus derechos sean cada vez más altos, lo que lógicamente supone que la rentabilidad de los beneficios obtenidos disminuya. Una situación que se va a prolongar durante siglos: sólo a fines del s. XVII y comienzos del s. XVIII Madrid se replanteará esta estrategia, optando finalmente por cesar en la reclamación y el ejercicio de sus derechos.

En efecto, la práctica de estos derechos de usufructo de pastizales y montes que Alfonso X había reconocido a Madrid se demostró problemática desde el inicio. Anticipando lo que sería tan frecuente con posterioridad, el concejo tuvo que reclamar en 1268 al monarca protección frente a Pedro González, Justicia Real, que impedía su ejercicio y prendaba a los que osaban intentarlo: “embio mandar por mi carta a Pedro Gonzales sobredicho que uos deje pazer, e cortar,

---

<sup>211</sup> En 1499 había pleito pendiente sobre este asunto ante la Chancillería. AVM-S, 2-306-10.

<sup>212</sup> La presencia de ganaderos trashumantes procedentes del Real de Manzanares está atestiguada en la zona oeste del término toledano a finales del s. XV. MOLENAT, J. P.- *Campagnes et Monts de Tolède*, págs. 511-512. Pero destacaba ante todo la gran cabaña de ganado trashumante en manos del propio marqués de Santillana, que a mediados del s. XV se cifraba ya en varios miles de cabezas. PEREZ BUSTAMANTE, R.- “El Real de Manzanares, el marqués de Santillana”, págs. 519-520. Por otro lado, las tierras del Real de Manzanares eran utilizadas como agostaderos por ganaderos trashumantes de Talavera a finales del s. XV. SUAREZ, M. J.- *La Villa de Talavera y su Tierra*, págs. 385-386.

e cazar e facer caruon en aquellos montes que solia des ffasta aquí, fasta que yo salga alla a la tierra e libre y lo que touiere por bien, e ssi alguna cosa uos tiene tomado e prendado por esta razón, mando que uos lo entregue luego todo”.<sup>213</sup> Tan sólo tres años después, Madrid tuvo que recibir de nuevo el amparo regio: “de lo que me embiastes decir en razón de la sierra, yo embio mi carta a aquel que yo agora puse en Mançanares que uos guarde uestros terminos e uestros montes, e uos dexe cortar lenna e madera en aquellos lugares que entendiere que seran mas a pro de uos e sin danno de amos los lugares fasta que lo yo librare”.<sup>214</sup> Pero la nula efectividad que en la práctica tenían estas solemnes declaraciones y mandamientos reales queda totalmente confirmada por su misma reiteración: entre el año inicial de 1268 y 1327 se conservan nada menos que trece confirmaciones por parte de los monarcas o personas de su entorno familiar (sobre todo infantes) en este sentido.<sup>215</sup>

Durante el s. XIV la consolidación del poblamiento en el Real de Manzanares va a introducir un nuevo factor en el desarrollo del conflicto, ya que obliga a una más precisa delimitación de los términos de uso público en los que tienen derecho los madrileños. Este hecho, unido a la propia fijación de los límites territoriales entre Madrid y las localidades del Real, centran los debates en este período. Se trata, en suma, de organizar los usos comunales (pasto, leña y caza) de la Villa y Tierra sobre un territorio más poblado. Para ello se recurrió a la vía del consenso, estableciendo a mediados del s. XIV una *concordia* que regulase estos derechos entre el concejo de Madrid de una parte y, por otro, no sólo las autoridades señoriales del Real, sino que también participan los representantes de los vecinos del señorío.<sup>216</sup> Por parte de Madrid se incluía una clara concesión: la autorización a los vecinos

---

<sup>213</sup> *Documentos*, t. I, págs 103-104. El texto de la misiva dirigida a Pedro González se incluye a continuación en *ibidem*, págs. 105-106

<sup>214</sup> *Ibidem*, págs. 107-108. Ese mismo año de 1271 también el infante don Fernando aprobaba con rotundidad las reclamaciones de los madrileños: “Loa caualleros e los pecheros de Madrit se me enviaron querellar e dicen que quando ellos o sus omnes uan a cortar o pazer sus ganados e por las otras cosas de que ellos se deuen acorrer, lenna o caruon del Real de manzanares que uos tenedes agora en guarda, que les prendades e les tomades calonna. Et so marauillado commo sodes osado de lo fazer sabiendo que non fue nin es uoluntad del Rey mio padre nin la mia si non que touiessedes la tenencia del dicho Real con los pechos que y montaren fasta que ellos ssean oydos sobrello. Onde mando que ellos ó qualquier dellos que corten e que pascan sus ganados en el Real dicho, e traygan ende lenna e fagan caruon e todas las cosas de que ellos se acorran commo los del mismo Real. Et uos ni otros ningunos non seades osados de los peyndrar nin de los contrallar por ende en ninguna manera”. *Ibidem*, págs. 109-110. La solemnidad de la declaración no serviría de mucho a la hora de imponer su cumplimiento.

<sup>215</sup> Publicados todos ellos en *Documentos y Documentos*, 2ª serie.

<sup>216</sup> Concordia aprobada el 23 de marzo de 1347, que se recoge parcialmente en una Real Provisión de 1404: “Que los ganados de los vecinos de la dicha villa de Madrid e de su término que paçiesen en todo el dicho Real. Otrosy, los vezinos de la dicha Villa e de su término que podiesen caçar e cortar madera para las dichas

del Real para poder utilizar los pastos del término madrileño en igualdad de condiciones que sus habitantes, siendo voluntad del concejo el prorrogar esta autorización o no. En realidad, aunque parezca una concesión casi simbólica, por cuanto los pastizales más valiosos se localizaban en el área serrana, sí podía tener valor para organizar una explotación ganadera transtermitente, aportando una zona más refugiada para la invernada, especialmente en las zonas riberiegas de la Tierra de Madrid.<sup>217</sup> Se trata del primer acuerdo del que tenemos noticia para intentar organizar el uso de este espacio, pero no será el único.

Medio siglo más tarde, ya asentados en el señorío del Real la familia de los Mendoza, se recurrió inicialmente a esta solución. En 1402 se firmaba otra concordia entre ambas partes; también en este caso la participación de los habitantes de las localidades del señorío es destacada, si bien con la autorización y respaldo de su señor Diego Hurtado de Mendoza. El resultado fue ratificar en todos sus apartados la concordia anterior, especificándose que el permiso para que los vecinos del Real introdujeran sus ganados dentro de la Tierra de Madrid se mantendría durante cuatro años.<sup>218</sup> Que su cumplimiento inicial no resultó muy satisfactorio para Madrid lo demuestra el que el concejo tuviera que recurrir rápidamente a la confirmación regia de sus derechos, recibiendo una provisión en tal sentido en 1404.<sup>219</sup>

De nuevo en 1440 se repite esta vía: ambas partes firmaban una “igual y pacto y conveniencia” por la cual se comprometían a poder ejercer derechos comunales (pastos, leña, caza) en sus términos respectivos. El plazo concedido a los vecinos del Real era de dos años. Firmada entre Madrid y los representantes señoriales, fue ratificada por las distintas localidades del Real reunidas en concejo. La escasa duración del acuerdo, dos años, indicaba

---

sus casas, e fazer carbón en todo el dicho Real, para syenpre jamás; e vos los del dicho Real que podiédeses paçer con vuestros ganados en el término de la dicha Villa de Madrid en quanto fuese voluntad del Conçejo de la dicha Villa”. *Documentos*, 2ª serie, t. I, págs. 365-366.

<sup>217</sup> Como pone de manifiesto la reclamación que el 23 de febrero de 1485 hace al concejo madrileño un vecino de Colmenar, presentando una carta de su concejo “que se quexauan que los vecinos de Coueña, herederos en Villanueva, les prenden e non consienten paçer en los términos de la dicha Villanueva e Valañón, términos desta Villa, non lo pudiendo fazer de derecho segund la vecindad questa Villa tiene con el condado e el condado con esta dicha Villa”. *LAC-I*, p. 375. Parece que el que el señor de Cobeña fuese el conde de Coruña - un Mendoza y por tanto familiar del señor del Real de Manzanares- no era suficiente garantía de protección a sus vasallos.

<sup>218</sup> *Documentos*, 2ª serie, t. I, págs. 343-353.

<sup>219</sup> Las causas de la reclamación madrileña: “que se recelan que vos los dichos ofiçiales e omnes buenos de los dichos pueblos del dicho Real, que les non queredes tener nin conplir nin guardar lo contenido en la dicha carta del dicho Rey Don Alfonso, e los dichos ynstrumentos de composiciones, nin los dexádares vsar de las dichas quatro cosas, paçer e cortar madera para las dichas sus casas, e caçar e fazer carbón commo solían”. *Ibidem*, págs. 363-368 (cita en págs. 366-367).

que no se consideraba una fórmula definitiva y que sin duda se auguraban nuevos problemas.<sup>220</sup>

A lo largo del s. XV la conflictividad en torno al Real de Manzanares va a conocer un crescendo continuo debido a la cada vez más clara definición de los intereses económicos en el uso del espacio por parte de los distintos protagonistas. Por un lado los señores, pertenecientes a una de las familias más poderosas del reino, los Mendoza, desarrollan tempranamente una clara orientación ganadera, en línea con las transformaciones que buena parte de la nobleza está realizando en sus señoríos durante la crisis bajomedieval, lo que además se produce sobre un territorio cuya vocación de uso ganadero y silvícola estaba reforzada no sólo por las condiciones geográficas, sino también por la tradición histórica. El resultado será la constitución de una de las mayores cabañas trashumantes, que en buena medida utilizarán los pastizales del Real de Manzanares durante la veranada. Comparten el término con sus vasallos, los vecinos de las distintas poblaciones. Durante el s. XV se fue produciendo un crecimiento demográfico, acompañado de una destacada concentración del hábitat en un número más reducido de localidades entre las que se fue estableciendo una creciente jerarquización.<sup>221</sup> Este proceso origina una economía más diversificada, es decir la expansión de la producción agraria por medio de las roturaciones, lo que afectaba a las áreas de uso comunal. Enfrente la Villa y la Tierra de Madrid, para quienes el uso silvopastoril del espacio es prioritario. El reconocimiento tradicional de las “cuatro cosas” (o derechos de cortar leña, carbonear, pastos y caza) significa en última instancia que los usos de los madrileños se ejercen sobre todo el territorio no dedicado al cultivo agrario: “en todas las tierras que no estaban empanadas”. Ante las dificultades para ejercer sus derechos, Madrid va a aumentar su presión y exigencias hasta el punto de reclamar el mantenimiento íntegro de los espacios comunales, fosilizar en definitiva el uso del espacio. Un planteamiento que limitaba de manera evidente las posibilidades de expansión agraria y diversificación de actividades productivas por parte de los habitantes del Real, a la vez que frena las posibilidades de incremento de rentas señoriales por parte de la casa de Infantado, con quien también compite

---

<sup>220</sup> AVM-S, Libro mss. 339, fol. 169.

<sup>221</sup> CARRASCO TEZANOS, A.- “Estructura y articulación social del poblamiento en la Sierra de Madrid en el siglo XV: el Real de Manzanares y los sexmos de Casarrubios y Lozoya”, en SEGURA GRAIÑO, C., ed.- *Orígenes históricos de la actual Comunidad autónoma de Madrid*, págs. 91-109.



por los aprovechamientos ganaderos del territorio. Se comprende así la virulencia y duración del conflicto planteado.

La fórmula de fijar acuerdos o conveniencias entre las partes para regular la explotación económica del Real fue perdiendo vigencia conforme se acrecentaban las contradicciones entre sus intereses respectivos. Las causas de los enfrentamientos inicialmente se centran en las dificultades que las autoridades del Real plantean al ejercicio de los derechos de los madrileños: las detenciones, multas y prendas se reiteran, en ocasiones con un carácter un tanto arbitrario.<sup>222</sup> A ello se suma los también tradicionales debates sobre la delimitación de los términos respectivos. Los intentos de solución por medio de negociaciones se demostraban efímeros.<sup>223</sup> Ante su inoperancia, Madrid recurre cada vez más a la vía judicial. Primero mediante la actuación de los jueces de términos o pesquisidores enviados por los monarcas, a los que el concejo solicitaba el reconocimiento de sus derechos y la anulación de los impedimentos a su ejercicio. Ya en 1435 el licenciado Per Alvarez de Córdoba había dictados diferentes sentencias a favor de Madrid, íntegramente ratificadas a mediados del s. XV por Alfonso Díaz de Montalvo, que en 1454 dictaba un emplazamiento a todos los concejos del Real de Manzanares para que comparecieran ante él y respondieran del incumplimiento de las anteriores sentencias.<sup>224</sup> Un nuevo intento de acuerdo en 1472: en un convenio -otro más- bajo la supervisión del prior de la Isla se regulaban los límites entre ambas jurisdicciones, los derechos de usufructo y la realización de reuniones para encauzar los problemas.<sup>225</sup> Y otra vez más, incumplido: en 1486 el pesquisidor Alfonso del Aguila, que actuaba en la Tierra de Madrid, debía reiterar los veredictos que reconocían los derechos madrileños.<sup>226</sup>

---

<sup>222</sup> Un ejemplo de unas denuncias reiteradamente recogidas en la documentación: en 1485 dos vecinos de Madrid plantean ante el ayuntamiento que “yendo por leña a los montes desta Villa, estándola cortando, vinieron a ellos e otros siete ó ocho vecinos desta Villa que salieron a ellos, fasta diez ó quince onbres del Colmenar Viejo, con lanças e espadas, e les tomaron las bestias e ge las lleuaron e tienen allá”. *LAC-I*, p. 418.

<sup>223</sup> En octubre de 1486 se había acordado un asiento entre el concejo madrileño y el duque del Infantado en el que, entre otras cosas, se establecía la restitución de las prendas respectivas de los últimos dos años. Pero en marzo del año siguiente el concejo seguía debatiendo cómo llevar a cabo esta restitución. *LAC- II*, págs. 34 y 54 respectivamente. Poco después las denuncias sobre nuevas prendas vuelven a reiterarse en los Libros de Acuerdos.

<sup>224</sup> AVM-S, 3-219-6.

<sup>225</sup> AVM-S, 3-219-7.

<sup>226</sup> El 6 de octubre de 1486 el ayuntamiento madrileño envió a dos representantes a Colmenar a notificar una sentencia del licenciado del Aguila contra dicho concejo. *LAC-II*, p.32

En la década de 1490 la vía judicial seguida por el concejo da un salto cualitativo: si hasta entonces se ha basado en la repetición de las actuaciones de diversos jueces de término y en la solicitud de provisiones o autos reales que ampararan sus derechos, ahora se busca una sentencia que se espera definitiva recurriendo a la remisión del pleito ante instancias judiciales superiores, primero el Consejo Real y finalmente la Chancillería de Valladolid. Y, acompañando a esta vía legal, la presión del poder, mediante el nombramiento de guardas o caballeros especializados en la vigilancia del Real (supra). El primer paso en este sentido se registra en la sesión del 14 de agosto de 1490,<sup>227</sup> consolidándose la figura de los guardas madrileños en el Real de Manzanares poco después.

Nuevos conflictos se plantean en los últimos años del s. XV. El monte y su forma de aprovechamiento es el primero: si constituía un recurso cuyo aprovechamiento era relativamente abierto en un principio, se hizo necesaria su regulación ante el peligro de deforestación provocado por la expansión ganadera y agraria. Por ello los derechos de corta de leña de encina y carboneo por los madrileños empezaron a ser restringidos por las autoridades del Real, lo que dará ocasión a nuevos enfrentamientos.

Ya en la concordia firmada en Guadalajara el 10 de octubre de 1472 se mencionaba la necesidad de guardar determinados términos, en los que se prohibiría la realización de esquilmos forestales. En un nuevo acuerdo de 1483, además de ratificar los capítulos del precedente, se regulaba de manera más precisa la utilización del monte. En primer lugar, se prohibía la corta por pie de encina o roble mayor, imponiéndose una multa de 60 mrs. y confiscación en cada infracción. Por otro lado, se reafirmaba la prohibición de destruir o cortar en los montes acotados bajo una caloña de 600 mrs. Se debían nombrar dos representantes de cada uno de los interesados encargados de señalar “çierta parte de los montes en que puedan cortar las dichas partes por el tiempo que a ellos fuera bien visto e que en lo restante no se corte fasta el dicho dia primero de mayo”. Para vigilar el cumplimiento de

---

<sup>227</sup> “Este día los dichos señores dixeron que porque para resistir los agravios, questa Villa recibe de prendas que hazen los vecinos del Real de Mançanares de cada dia a los vecinos desta Villa e su tierra, son necesaria gente de caballo e de pie para defender los terminos desta dicha Villa, e porque acordaron quera bien que un caballero desta dicha Villa tuviese cargo de se poner con quinze o veinte de caballo en la fortaleza del Pardo, para que desde alli se defendiesen los dichos terminos y hiziesen prendas para redemir las que alla tienen fechas e hizieren”. Incluso un regidor apuntó que según su información “sus Altezas avrian plazer dello”. El alcaide de El Pardo como vecino de Madrid se mostró dispuesto a colaborar a defender sus términos -aunque él mismo fuera uno de los principales usurpadores de bienes públicos)-pero no podía recibir gente armada en la fortaleza que gobernaba, sin expreso consentimiento real. *LAC-II*, p. 224.

estas normas se debían nombrar dos guardas que a su vez podían elegir otros más que les ayudasen “porque los montes son grandes”.<sup>228</sup>

En los años posteriores se evidencia intentos por ajustar las normas de usufructo del bosque, especialmente por medio del establecimiento de turnos de corta que garantizaran su regeneración. Así en octubre de 1485 Madrid enviaba una carta al duque del Infantado con motivo de ciertas prendas que los guardas señoriales habían hecho a vecinos de Madrid, en la que se proponía el nombramiento de comisionados para llegar a acuerdos sobre la realización de cortas y podas en el monte. Ante la respuesta afirmativa del señorío, el municipio acordó enviar sus representantes “para que, juntos con los que de allá vinieren, señalen el término de montes que se averiguaren e señalaren que se corte, para que se corte un año aquella que señalen e se guarde lo otro para que se corte otro año”.<sup>229</sup>

Quedaba pendiente regular las cortas por pie de los árboles que no fuesen “mayores”, algo que no había sido prohibido en el anterior acuerdo. A tal fin el licenciado Francisco de Vargas, que actuaba como instructor del pleito que culminará en 1500, estableció en 1493 “un marco por donde mandamos que se cortase la leña que se oviese de cortar por pie”.<sup>230</sup> Pero para esas fechas el problema del uso del monte por Madrid estaba ya inserto dentro del gran proceso judicial de finales de la centuria, anulando cualquier vía de entendimiento consensuado.

El segundo problema que adquiere particular virulencia en estos momentos, de una trascendencia aún mayor que la ordenación del aprovechamiento del monte, es el de las roturaciones y acotamientos de términos, lo que se traducía en una evidente reducción de los derechos comunales de Madrid. Conviene tener presente que éstos se ejercían sobre todas las “tierras que no estaban empanadas”, independientemente de su titularidad: los montes podían ser comunales (de los concejos del Real) o privados (especialmente del duque del Infantado). Lo mismo sucedía con los terrenos de pasto: el aprovechamiento de las dehesas, sotos o

---

<sup>228</sup> Capítulos acordados en Manzanares el 31 de octubre de 1483. AVM-S, Libro mss. 338, fols. 151-152.

<sup>229</sup> *LAC-I*, págs. 268, 269 y 271. En diciembre de 1485 la comisión había cumplido su tarea, pues se discute la forma de pagar los gastos “que hizieron el seismero de la Villa que fueron, él e otros, por mandado de la Villa, con Ferrand Garcia de Ocaña, regidor, e Garcia de Sazedo, que fueron a Marhojal, a entender con los del Real en el señalar de los montes”. *Ibidem*, p. 284..

<sup>230</sup> Se inserta en una Provisión del Consejo sobre el pago de los salarios a los guardas en el Real de Manzanares. AVM-S, Libro mss. 339, fols. 170-171.

prados debían ser compartidos con los vecinos de la Villa y Tierra madrileña, al margen de su propietario. De ello se deduce el enorme potencial de conflicto que un uso estricto de estos derechos podía suponer.

A partir de la década de 1480 el concejo de Madrid empieza a intervenir contra la formación de dehesas en las que se prohibía el ejercicio de los derechos de pastar o cortar leña a sus vecinos. Concretamente en 1481 se denunciaba que el alcaide de la fortaleza de Manzanares había constituido una gran dehesa que quedaba vedada a los madrileños.<sup>231</sup> La lucha contra esta práctica se convirtió en una constante para el municipio: en 1488 los reyes habían ordenado, a instancias de Madrid, deshacer una dehesa que el duque había acotado dentro del Real, por lo que el concejo ordenó el 1 de septiembre que “todos los vecinos de Madrid e su tierra vayan a cortar la dehesa que hizo el duque” para ratificar los derechos madrileños. En la práctica la cuestión no era tan sencilla si no se acompañaba de la protección necesaria, como demuestra la queja de un vecino de Ambroz: al ir a poner en ejecución el mandamiento “le prendaron las bestias e carretas por Pedro Clavijo, guarda de la dicha dehesa”.<sup>232</sup>

Los procesos de roturación acompañaban a la formación de dehesas. El aumento de población y la diversificación productiva se traducían en la ampliación de la superficie en cultivo a costa de espacios tradicionalmente dedicados a montes y pastos. Este hecho suscitaba nuevas necesidades de integración entre agricultura y ganadería, con la necesidad de delimitar mejor los derechos comunales, organizar la derrota de mieses, crear corrales para el ganado, construcción de cercados, etc. Un panorama que quedaba perfectamente dibujado en las palabras que el corregidor madrileño dirigía al concejo en 1485: “que los dichos vecinos del dicho Real tienen ocupados muchos de los dichos montes, faziendo çercas en ellos e dehesas e así mismo muchos prados y exidos fechos, labranças e rrepartídotas entre sí. E otrosí tienen entrado e rrompido de çierto tiempo acá dentro de los términos desta dicha Villa grand parte dellos, faziendo roturas en ellos y plantando viñas y haziendo colmenares y pajares y corrales de ganado e otras cosas”.<sup>233</sup>

---

<sup>231</sup> *LAC-I*, p.140.

<sup>232</sup> *LAC-II*, p.128.

<sup>233</sup> *LAC-I*, págs. 401-402. El texto tiene un cierto carácter exculpatorio, por cuanto se trata de un requerimiento al nuevo juez de términos o pesquisidor que se presentaba en la Villa. El corregidor reclamaba solución para estos problemas y garantizaba su apoyo a todas las actuaciones que se llevaran a cabo en tal sentido. Pero que

Acotamientos de pastizales (dehesas, ejidos, prados) y roturación de tierras de labranza comienzan a presentar a finales del s. XV una misma tipología formal: la construcción de cercados para delimitar estos espacios. En efecto, se trata de establecer un mecanismo de protección para garantizar el uso exclusivo por parte de su propietario. Una necesidad de defensa que comparten tanto los espacios ganaderos como los agrarios, habida cuenta de la complejidad de los derechos de aprovechamiento comunal que se ejercen sobre todo el Real de Manzanares: a los tradicionales del conjunto de vecinos del Real (que configuran en este sentido una típica “tierra” o jurisdicción con un régimen comunal propio), hay que añadir los rotundos derechos de usufructo de los vecinos de la Villa y Tierra madrileña, contra los que en gran medida se construían las cercas. Todavía podíamos agregar la jurisdicción mesteña, con importantes cañadas de tránsito y zonas donde se practicaba la veranada. El resultado es el inicio a finales del medievo de la presencia de los campos cerrados en la zona de la sierra, un proceso que no hará sino incrementarse en siglos posteriores, hasta convertirse en una clara seña de identidad paisajística. Un paisaje que se fue construyendo históricamente como resultado de la actuación de los propietarios individuales y su resistencia a los complejos derechos colectivos ejercidos en el Real, entre los cuales destacaban, por la oposición que suscitaban, los de la Villa y Tierra de Madrid.<sup>234</sup>

De lo dicho hasta ahora se concluye el potencial de conflicto acumulado a finales de la última centuria medieval. Para Madrid el ejercicio de sus derechos está sometido a una presión creciente. Tradicionalmente se ha visto cuestionado por los vecinos y autoridades señoriales del Real, obligando a recurrir periódicamente para su solución a tres mecanismos: el reconocimiento de la monarquía (privilegios de términos), la actuación de los jueces de términos para su restitución o el establecimiento de concordias para su regulación (que incluían importantes concesiones por el concejo madrileño, como la autorización a pastar sus términos para los habitantes del señorío serrano). Pero en este período resultan claramente insuficientes ante las nuevas amenazas a las que se ven sometidos los derechos de Madrid.

---

refleja la realidad de la situación tal y como la sentía el concejo madrileño queda evidenciado por las actuaciones judiciales que se van a desarrollar muy poco tiempo después.

<sup>234</sup> Un proceso que ya explicó Manuel Valenzuela en su estudio sobre la Sierra madrileña. Así, concluía que “la morfología de campos cerrados en la Sierra es el resultado, al menos en gran medida, de la necesidad de autoprotección por parte de la agricultura frente a unas fórmulas de colectivismo pastoril todo lo complejas que se quiera, pero unidas por una común orientación e incluso necesidad: disponer de todo el espacio serrano para este fin, más que por la bondad de sus pastos por su proximidad a una región muy deficitaria en ellos y a una ciudad (Madrid) con necesidades de abastecimiento en ascenso”. VALENZUELA RUBIO, M.- *Urbanización y Crisis Rural en la Sierra de Madrid*, Madrid, 1977, p. 156 (sobre los aprovechamientos ganaderos y los conflictos generados, págs. 148-156).

Dos destacadamente: la presión de nuevas alternativas productivas y la proveniente de la jurisdicción señorial. En primer lugar la económica: los aprovechamientos silvopastoriles que ejercen sus vecinos sufren una restricción, en parte por cuestiones ecológicas (amenaza de disminución del bosque), y sobre todo por la expansión agraria y roturadora que protagonizan los vecinos del Real. Con todo, no hay una incompatibilidad total en este aspecto. Era posible buscar fórmulas de consenso con normas que regulen de manera satisfactoria para ambos los distintos usos económicos del espacio: hemos visto que en parte estaba sucediendo ya con la explotación forestal, y lo mismo se puede suponer en el caso de los pastizales, sin duda todavía suficientes (con una reglamentación adecuada) para satisfacer las necesidades de los ganaderos madrileños dada su amplia disponibilidad. En una época donde la presión demográfica, aunque creciente, distaba de ser significativa, no aparece todavía una presión excluyente sobre los recursos ganaderos. No sería, pues, ésta la causa fundamental del estallido del conflicto.

A mi juicio, hay que buscarla en la presión jurisdiccional que la casa señorial ejerce sobre los derechos madrileños. No es ciertamente una amenaza nueva pues era practicada habitualmente, pero lo que resulta novedoso es la escala de su aplicación a fines del s. XV.<sup>235</sup> Las denuncias del concejo de Madrid por las prendas y limitaciones que se imponen a sus vecinos se disparan en estos momentos. En parte por los habitantes del señorío (que en todo caso contarían con la connivencia de su señor), pero sobre todo por sus autoridades, nombradas por el duque: las denuncias madrileñas aluden al señor como responsable directo de los abusos, no tanto porque sea el responsable último de la jurisdicción dentro del señorío, sino porque se identifica como una parte de la estrategia señorial.<sup>236</sup> Esta, en suma, plantea la anulación de un competidor en la captación de renta dentro del señorío. Cuenta para ello con el apoyo de los habitantes del Real, sus vasallos, que si no pueden liberarse de la renta y

---

<sup>235</sup> Proceso que se enmarcaría en lo que Stephen Haliczer ha denominado la “ofensiva de la aristocracia”, claramente perceptible desde finales de la década de 1460 y que configuraría una de las vías de conflicto que finalmente desembocaron en el estallido de una situación revolucionaria en la guerra de las Comunidades. HALICZER, S.- *Los Comuneros de Castilla. La forja de una revolución, (1475-1521)*, Valladolid, 1987, págs. 91-123. Entre los ejemplos que cita el enfrentamiento entre Madrid y los Mendoza por el Real de Manzanares tendría un claro acomodo.

<sup>236</sup> Las denuncias por prendas y abusos son constantes en los Libros de Acuerdos del Concejo madrileño, así como las reclamaciones de amparo ante el gobierno real. Algunas han sido recogidas anteriormente. Pero más que acumular ejemplos, me interesa la imagen de ser una práctica continuada que desprende la documentación. Así, el 28 de enero de 1487 el ayuntamiento decidía enviar una carta al duque del Infantado para solicitarle que mientras se producía la resolución de los reyes sobre este tema, ordenara mandar “que cesen las prendas e quejas que de cada día vienen de sus vasallos del dicho Real”. *LAC-II*, p. 102.

jurisdicción señorial, al menos pueden aspirar a evitar la concurrencia de Madrid por el uso del espacio y de recursos, algo que en buena medida determina su orientación económica y marca claros límites a sus posibilidades productivas. Fue esta circunstancia, en la que se intenta la exclusión de sus derechos, la que motiva una respuesta contundente por vía judicial del lado madrileño.

En 1492 comenzó un proceso judicial que concluiría en 1500 y que representa un significativo cambio en el desarrollo del conflicto por el Real de Manzanares. En medio de una situación en la que se recrudecen los enfrentamientos, realización de prendas, actuaciones de los corregidores y pesquisidores madrileños, reclamaciones ante el Consejo Real por ambas partes, nombramiento de guardas armados, etc, una Provisión de los Reyes Católicos nombraba el 3 de diciembre de 1487 a Fernando de Acuña como juez encargado de dirimir la contienda sobre términos entre Madrid y el Real de Manzanares.<sup>237</sup> Aunque su actuación no dejaría efectos prácticos, representa un antecedente directo de una vía judicial que superaba la intervención tradicional de los jueces de términos, además de ilustrar la toma de conciencia y decisión de intervención de la monarquía para solucionar un problema que afectaba a una de las principales casas nobiliarias del reino y a un concejo de menos alcurnia. pero realengo al fin y al cabo. En este sentido cabe destacar la medida del rey Fernando en 1490, cuando solicitó al municipio madrileño le enviase todos los antecedentes relativos al conflicto para buscar una solución.<sup>238</sup>

En abril de 1492 una Real Provisión dictada en Santa Fe nombraba al licenciado Francisco de Vargas, corregidor de Ciudad Rodrigo, encargado de tratar el pleito planteado entre la Villa y Tierra de Madrid por un lado y don Iñigo Hurtado de Mendoza, duque del Infantado y el Real de Manzanares por otra.<sup>239</sup> Las reclamaciones de Madrid se planteaban en primer lugar en la defensa de sus derechos tradicionales de “paçer con sus ganados mayores e menores e de cortar e de roçar e amesnar y hacer carbón en todos los montes e términos comunes y en todas las tierras que no estaban enpanadas de la dicha villa de Mançanares e de su Tierra e Condado e de todo lo que era dicho Real”. Pero su disfrute se había visto

---

<sup>237</sup> AVM-S, Libro mss. 338, fols. 248-249.

<sup>238</sup> Sesión de 4 de octubre de 1490: “Notificose en el dicho ayuntamiento una çedula del Rey, nuestro señor, por la qual su Alteza manda que enbien a su muy alto Consejo la capitulaçion de Çaragoça e los otros asientos que se an fecho sobre los del Real, y las sentencias y derecho que tiene, y el estado en questa, para que lo mande ver y se haga lo que fuere justicia”. *LAC-II*, p. 235.

dificultado crecientemente, con frecuentes prendas de bienes y animales a la hora de realizar cortas de leña o llevar sus ganados a pastar, con unos daños que se estimaban en un millón de mrs. Y por último se denunciaba que los vecinos del Real “habían fecho adehesar muchas dehesas e prados vedados e çercas e dehesas de çerrados de piedra e de leña e madera e colmenares e plantado viñas, lo cual todo habían fecho en lo que era propio e común del dicho Real”. Solicitaban en consecuencia se deshicieran todas las cercas hechas desde las sentencias que había dado el bachiller Pedro Alvarez, juez de la época de Juan II. Es decir, Madrid había ampliado sus exigencias de manera radical al reclamar la eliminación de los procesos de roturación y cercamiento de términos realizados en el último medio siglo.

Por su parte la respuesta del Real se dirige hacia el mismo objetivo, denunciar los nuevos cultivos que se extendían por la Tierra madrileña a costa de unos términos comunales a los que ellos, en virtud de los acuerdos establecidos, tenían asimismo derecho de aprovechamiento: “por lo cual eran obligados cumpliendo las igualas e conveniencias e transacciones entre las dichas partes fechas en lo público e común de la dicha Villa e su Tierra”.

En 1493 una Real Cédula apremiaba al licenciado Francisco de Vargas para que remitiera los autos del pleito al Consejo Real.<sup>240</sup> El proceso siguió su lenta dinámica judicial, siendo constantemente apelado, hasta que finalmente fue sentenciado por la Real Ejecutoria de la Chancillería de Valladolid, que resultó enteramente favorable a las pretensiones de Madrid. El triunfo judicial resultó completo: no sólo se ratificaban los derechos tradicionales, sino que se ordenaba el derribo de los cercamientos cuya construcción supusiera un menoscabo de aquellos por haberse levantado sobre terrenos de uso comunal. Pero quedaba por ejecutar tan rotunda sentencia, tarea que debían desempeñar los jueces ejecutores. Las complicaciones del proceso alargarán su actuación durante varios años, sin que sea suficiente para conseguir una aplicación plena. La resistencia a aplicar la sentencia por todos los medios será la primera respuesta de la casa de Infantado y de los habitantes del Real.

El problema inicial en la ejecución se refiere a la regulación del aprovechamiento forestal. El primer juez ejecutor, Pedro Bermúdez, autorizó a los vecinos de Madrid para “que se pudiese cortar por el pie todo lo nuevo que agora nasçe que fuese menos grueso que la

---

<sup>239</sup> El desarrollo de todo el proceso en la Real Ejecutoria de 1500, AVM-S, 3-211-2.

<sup>240</sup> AVM-Libro mss. 340, f. 123.



pierna de un hombre de la rodilla abaxo”. Se trataba de una reivindicación madrileña, que aducía que la prohibición de cortar por pie que les imponían los guardas del Real les era muy perjudicial porque “en mucha parte de los dichos montes no ay enzinas cabdales sino chaparros e montes baxos e delgados poco mas o menos los quales no tienen otra rama salvo el pie”. A ello protestaron enérgicamente los representantes de Infantado y el Real, aduciendo que tal marco, además de poco preciso, suponía al menos el doble de lo que los monarcas habían aprobado, lo que “sería causa que nunca nasçiese enzina de nuevo e que sería destruiçion para los montes porque aquélla tal nunca renace”. Quedó aprobado finalmente el patrón que había fijado el juez, que debía ser respetado por ambas partes. Unos debates que transmiten la imagen de un encinar en peligro de degradación hacia el chaparral ante las talas (y sin duda también el pastoreo) descontrolados, lo que obligaba ya a regular su utilización.<sup>241</sup>

Más problemática resultaría la orden de derribar los cercamientos levantados en los últimos años, como denunciaba el propio juez executor Pedro Bermúdez: “en cada lugar de los que hay en el dicho Real hay tanto número de çercas que casi todo el término tienen ocupado”. Afirmaba que aún cuando los dueños de los cercados eran conocidos y tenían información sobre las sentencias, se resistían a derribarlos sin juicio previo: “no lo consientes ni dan lugar a ello sin que sobre ello haya pleito e provança por amas partes por manera que ninguna çerca se derribe si que primero haya pleito e pendencia”, lo que significaba alargar los trabajos de su comisión.<sup>242</sup> No siempre se decidía el derribo de todo el tapial, sino que en ocasiones se obligaba a construir portillos que debían quedar abiertos tras la cosecha, para permitir la práctica de la tradicional derrota de mieses.<sup>243</sup> La resistencia a la ejecución de las sentencias por parte de los afectados se acompañaba con nuevas apelaciones y reclamaciones judiciales por parte del duque del Infantado.<sup>244</sup>

En un intento por restablecer la estabilidad y favorecer la viabilidad futura de la sentencia se tomaron medidas más favorables a los vecinos del Real. Destaca en este sentido

---

<sup>241</sup> AVM-Libro mss. 339, fols. 175-176.

<sup>242</sup> *Ibíd.*, fols. 181-182.

<sup>243</sup> Como ejemplifica el caso de Pedro Martín Alfonso, vecino de Colmenar, que “tenía fecha una çerca en término del dicho lugar en que metía çierto prado de mojón e unas tierras de pan llevar suyas propias”. El juez determinó “que entre tanto que la dicha çerca estuviese empanada la pudiese tener çerrada y gozar de ella y que después que el pan fuese alçado abriese en ella ciertos portillos”. *Ibíd.*, fols. 186-187.

<sup>244</sup> CAYETANO MARTÍN, C.- “El Concejo de Madrid y el Real de Manzanares: un modelo de conflicto territorial en la Castilla de los Reyes Católicos”, *AIEM*, t. XXXIV (1994), págs. 286-287. Pero el 30 de marzo

una Cédula de doña Isabel de 30 de marzo de 1503, en la que se respondía a la solicitud del duque de que se perdonasen las penas impuestas, ordenando al juez ejecutor condonar las deudas no pagadas hasta la fecha con la condición de que se respetasen las sentencias, ya que en caso contrario se exigirían las antiguas multas y las nuevamente impuestas, además de decidir la devolución de las prendas que se hubiesen realizado hasta la fecha.<sup>245</sup> Pero que no era suficiente para conseguir la ejecución sin obstáculos de la sentencia se comprueba en las Reales Provisiones de 24 de julio de 1504 por las que se encargaba al juez comisionado la imposición de penas para las infracciones cometidas con posterioridad al perdón del año anterior, así como la ejecución de las mismas.<sup>246</sup> Por esas mismas fechas el juez ejecutor recibía la misión de señalar ejidos a los distintos lugares del Real de Manzanares, “dejando a cada uno lo que fuere razonable”, para que sus habitantes dispusieran de términos de usufructo reservado, debiendo declarar el espacio restante de común aprovechamiento.<sup>247</sup>

A partir de 1505 el pleito entra en una situación de enquistamiento. Los mecanismos de resistencia del señorío (tanto por medio de reclamaciones legales como por el no cumplimiento de lo acordado) coinciden con una actitud más tibia de la monarquía en relación al concejo madrileño: desde esa fecha no se constatan el envío ni la actuación de nuevos jueces ejecutores hasta 1511. Según Carmen Cayetano, éste sería el momento escogido por Fernando el Católico para intentar intervenir directamente en la resolución del conflicto: el 15 de enero de 1515 proponía al ayuntamiento madrileño solucionar directamente el proceso “para atajar gastos, costas e dispensas”.<sup>248</sup> Pero buena parte de los regidores recelaron pronto de tan generoso ofrecimiento, sospechando que trataba de ganarse el apoyo de un noble tan poderoso como el duque del Infantado en el difícil momento político por el que atravesaba, sin olvidar la imprescindible ayuda que la familia Mendoza había prestado en el ascenso al trono. Los nuevos problemas internos que se plantearon en torno a la regencia y sucesión al trono darían al traste con esta iniciativa.

---

de 1504 una Real Cédula ordenaba suspender la tramitación en la Chancillería de Valladolid de las reclamaciones del duque del Infantado contra la Villa de Madrid. AVM-Libro mss. 339, f. 212.

<sup>245</sup> *Ibídem*, f. 190.

<sup>246</sup> *Ibídem*, fols. 199-200.

<sup>247</sup> *Ibídem*, fols. 195-196.

<sup>248</sup> CAYETANO MARTÍN, C.- “El Concejo de Madrid y el Real de Manzanares”, págs. 287-291. Utiliza un documento en el que se recogen las reuniones “reservadas” entre el corregidor y los regidores para tratar este asunto y que no se inscribían en los Libros de Acuerdos oficiales.

En conclusión, en los inicios de la Edad Moderna el concejo madrileño había ratificado plenamente sus derechos tradicionales en el Real de Manzanares. Pero este éxito judicial tenía un importante coste: la reclamación de Madrid había afectado al proceso de roturaciones y cercamientos que se venía generalizando a fines del s. XV, lo que repercutía sobre las actividades económicas de sus habitantes. La causa fundamental de la intransigencia madrileña no era sino la presión y coacción violenta que el duque venía ejerciendo sobre el ejercicio de tales derechos, lo cual no resulta extraño tratándose de un señor feudal.<sup>249</sup> Pero el profundo impacto que la afirmación de los derechos comunales de Madrid tenía sobre la organización del territorio terminó provocando una clara alianza de intereses entre la casa señorial y los vecinos del Real, para quienes los habitantes de la villa y tierra madrileña se convertían ahora en rivales y competidores de gran magnitud por el uso del espacio. Una alianza que explica la escala y continuidad de la resistencia frente a Madrid, que se prolongará a lo largo de los siglos XVI y XVII, y que terminará por suponer unos costes que el municipio madrileño no esté dispuesto a asumir.

### 3 – LA ARTICULACIÓN DEL REGIMEN COMUNAL DE VILLA Y TIERRA

Desde la Introducción he insistido en la naturaleza cambiante, evolutiva del patrimonio concejil. Los bienes públicos distan de tener una estructura y funcionalidad inmutables; antes bien presentan como característica fundamental la de ir experimentando procesos adaptativos como resultado de diversas influencias. Por ello más que hablar de un patrimonio municipal o de un régimen comunal concreto, es preciso determinar su funcionamiento como mecanismo de asignación de recursos fundamentales para los habitantes de la Tierra y de la Villa de Madrid, siempre en un período concreto.

Numerosos estudios coinciden en plantear que es al final del período medieval cuando se produce una articulación completa de los patrimonios concejiles; a partir de los siglos XIV

---

<sup>249</sup> Los propios representantes del noble definían a la perfección las cualidades intelectuales de su señor: “el duque, su parte, era caballero e de armada caballería e no era tenido de saber las sotilezas en terminos de los derechos”. Una frase que sin duda ayuda a comprender el conflicto por el Real. Citada en *ibídem*, p. 286.

y XV es posible analizar la estructura de los bienes comunales, así como señalar las principales líneas de transformación que van a experimentar.

Para épocas anteriores la escasez de referencias documentales dificulta la posibilidad de reconstrucciones más o menos sistemáticas. Por ello los planteamientos generales deben hacerse mediante la agregación de datos procedentes de concejos diversos, la proyección hacia el pasado de situaciones posteriores o incluso la comparación con situaciones relativamente similares en otros momentos. No es el caso de Madrid una excepción. Con anterioridad al s. XV la información disponible es sumamente fragmentaria, insuficiente para afrontar con mínimas garantías un estudio fidedigno del patrimonio municipal. Esta es la causa de que en los siguientes apartados me centre básicamente en el final del Medievo, si bien haré referencia en determinados casos a los datos disponibles para períodos anteriores.

Con todo, es posible plantear una cierta aproximación a la realidad comunal en los primeros siglos tras la conquista y reorganización del espacio. La escasez de población, junto con la amenaza militar, tanto tiempo persistente, determinarían un limitado grado de ocupación del suelo con fines agrarios. La propiedad privada sería desde el principio la fórmula predominante de asignación de estos recursos. Con un carácter complementario, los términos públicos, cuya extensión debía ser muy considerable, claramente mayoritaria. Los usos ganaderos en los terrenos baldíos y montuosos, la obtención de combustible en los montes serían las formas predominantes de utilización de estos recursos, sin olvidar la disponibilidad de tierras roturables para los momentos de expansión demográfica. Así resume J. L. Martín este paisaje resultado de esta organización espacial hacia los siglos XI y XII: “Lo más convincente, al menos para el territorio de la Transierra, es la imagen de un cinturón de cercados de propiedad privada –huertas, herrenales, prados-, que ocupan en torno al poblado un corto radio de trazado irregular como consecuencia de las características y configuración del suelo. En zonas más alejadas y dispersas existen también heredades de propiedad privada, e incluso de dehesas acotadas que pertenecen a particulares, pero son simples enclaves situados en lo comunal, que llega a extenderse, en los concejos más notables, por un radio próximo a los 50 kilómetros. E incluso en esos casos de heredades particulares quedan abiertos a una utilización conjunta con la práctica de la derrota de mieses, uso comunal tras la recolección del fruto”.<sup>250</sup>

---

<sup>250</sup> MARTÍN MARTÍN, J. L.- “Evolución de los bienes comunales en el siglo XV”, *Studia Historica*,. *Historia Medieval*, v. VIII (1990), págs. 14-15

A continuación analizo la funcionalidad y evolución de los más destacados componentes del patrimonio concejil en el Madrid medieval. Los aprovechamientos ganaderos y forestales se desarrollaban sobre distintos predios que el concejo regulaba con normativa (ordenanzas) específicas. En primer lugar los “exidos y carrascales”, más tarde convertidos en sotos de los propios madrileños, donde se desarrollaban usos ganaderos, forestales, junto con la caza y pesca. En segundo lugar los espacios acotados expresamente para usos ganaderos, las dehesas. Y por último, el monte, recurso energético fundamental. El Pardo constituirá desde la Baja Edad Media la principal área montuosa de Madrid y su Tierra, por lo que será objeto de atención especial tanto en este período como en posteriores. Queda, por último, un ausente: los baldíos; la falta de referencias documentales expresas sobre su funcionalidad limita su estudio, por lo que serán analizados en el próximo apartado, en el que se reseñará su papel trascendental en la expansión de cultivos en esta época.

### 3.1 – PASTOS Y MONTES: LOS “EXIDOS Y CARRASCALES”

“La voz ejido... aparece bajo la forma sustantiva en los textos bajomedievales para designar, en ocasiones, a las puertas de la ciudad que dan acceso al campo (“exida” = salida, en general) y, también, por extensión, al propio campo circundante o a determinado paraje próximo a aquella”.<sup>251</sup>

Una particularidad del Madrid medieval es que el término *ejido* (o exido como aparece en la documentación de esta época) no se aplica a los terrenos cercanos o contiguos a la ciudad, sino a zonas situadas en las riberas de los ríos Jarama y Manzanares, a una distancia considerable del casco de la Villa (hasta una veintena de kilómetros). Destinados, eso sí, a usos comunales, como pastizales o montes. En cambio, se emplearon con su uso habitual en las aldeas de la Tierra, donde el ejido designaba un terreno de carácter comunal situado en las inmediaciones de la localidad, hasta el punto de que serviría para la concesión de solares edificables a sus vecinos en los momentos en que el crecimiento demográfico obligaba a extender los límites de las construcciones, como sucedía a finales del s. XV y comienzos del siguiente.

---

<sup>251</sup> MANGAS NAVAS, J. M.- *El régimen comunal agrario*, p. 155

Dentro de la regulación que el concejo medieval lleva a cabo del terrazgo y de los derechos comunales en su término jurisdiccional se fueron acotando determinados espacios, a la vez que reglamentaban su uso mediante ordenanzas. Se iniciaría de esta forma un proceso por el que buena parte de estos terrenos vieron limitados los aprovechamientos comunales, lo que culminaría finalmente en su conversión en tierras de propios. Pero tal proceso no siguió una única dirección y así, hubo casos en los que la patrimonialización se limitaba a determinados aprovechamientos, mientras otros mantendrían durante un largo período su carácter público. El caso de los “exidos y carrascales” de la villa de Madrid constituye un buen ejemplo de estos largos y no siempre lineales mecanismos de transformación del patrimonio municipal.

El acotamiento en la vega del Jarama de términos comunales con el fin de regular su utilización fue muy temprano. Ya el *Fuero de Madrid* de 1202 presentaba una detallada relación de los *ejidos* y *abrevaderos* declarados por las justicias de la villa, que comenzaba en la orilla del Jarama, a la altura de la actual localidad de San Sebastián de los Reyes y que seguía la orilla del río por ambas márgenes hacia el sur, hasta llegar a la confluencia con el Manzanares, continuando desde allí por su ribera. Se formaba así un arco en torno a Madrid con abundantes lugares en los que los ganados de los vecinos de la villa y la tierra tenían asegurado el acceso al agua, pero donde estaba prohibido permanecieran pastando: "Todo omne qui touieret in los exidos e in las entradas de las aguas, pectet II morabetinos a los fiadores".<sup>252</sup> Nada se dice sobre otros aprovechamientos como las leñas, que mantenían su carácter comunal, estando sujetas a la regulación por parte del municipio mediante ordenanzas aplicables a todos los terrenos forestales.

Durante la Baja Edad Media el concejo madrileño dio un paso más en esta dirección al establecer la "*renta de los exidos y carrascales*" como uno más de sus bienes de propios. Aparecida en el siglo XIV,<sup>253</sup> constituye la forma de regular estos términos que se mantendrá vigente hasta que a mediados del siglo XVI se produzca una profunda modificación de los esquilmos forestales. De la evolución de esta renta de propios de Madrid se tratará en el capítulo 4, presentado ahora alguna de sus características para comprender la regulación de aprovechamientos silvopastoriles así como la caza y pesca en estos predios.

---

<sup>252</sup> *El Fuero de Madrid*, rúbrica LVIII. La relación en rúbrica XL y datos sobre su localización en págs. 122-125.

<sup>253</sup> MENDO CARMONA, C.- "Dehesas y ejidos en la villa y tierra de Madrid a fines del silo XV", *Anuario de Estudios Medievales*, nº 20 (1990), págs. 359-374. Afirma que debieron existir unas ordenanzas hacia 1380, pero no se han conservado. Sin embargo, dice erróneamente que el arrendador "disfrutaba del derecho de caza, pasto, pesca y recogida de leña" (p. 363)

Consistía en el arrendamiento por el ayuntamiento de los derechos de caza y pesca. Ambas actividades presentaban una destacada importancia económica, como se refleja en los valores alcanzados por esta renta, que a comienzos del siglo XVI constituía el ingreso más cuantioso de los propios madrileños (Capítulo 4). La caza se centraba en los conejos, muy abundantes, para lo que se recurría a los hurones, mientras la pesca se realizaba en el río Jarama. En cambio, los demás aprovechamientos no variaban su naturaleza: los pastos siguieron siendo comunales, razón por la que la documentación mantiene la denominación de "ejidos"; por su parte, la limitación en el uso de las leñas la analizaremos más adelante. Ambos disfrutes estaban regulados por las ordenanzas concejiles, en las que estipulaban las multas impuestas a los que las contravenían, correspondiendo la recaudación de tales penas a los arrendatarios, que nombraban guardas encargados de su vigilancia.

A cambio de estos ingresos, los arrendatarios se encargaban de proteger la integridad de los ejidos frente a las avenidas del río. Para ello debían fijar estacadas en la orilla y otras construcciones, siguiendo las instrucciones de las autoridades municipales. Las crecidas y variaciones en el cauce del río eran frecuentes, como muestra la presencia del topónimo "madres viejas" y las numerosas reparaciones que tuvo que afrontar el ayuntamiento madrileño.

En la práctica el asunto más espinoso en la relación entre la Villa y los arrendatarios fue el de los aprovechamientos silvícolas, tal como recogen los *Libros de Acuerdos del Concejo*. Aun cuando las cortas de leña no estaban permitidas, existían en la práctica ciertas excepciones que se prestaban a la aparición de numerosos abusos: los renteros podían recoger la leña caída para su uso o conceder ciertas licencias de saca, lo que fue causa de reclamaciones del municipio.<sup>254</sup> Por otro lado, los pastores podían construir dentro de los términos comunales corrales o parideras, para lo cual podían utilizar la leña de los ejidos o hacerlos con redes. En ambos casos estaban obligados a pagar a los arrendatarios ciertas cantidades bien en especie (corderos o carneros) o en dinero. Dichas sumas debían ser importantes: en 1484 el ayuntamiento prohibió hacer corrales con leña de los ejidos, si bien los pastores podían construirlos utilizando otro tipo de materiales o leña del exterior sin pagar ningún derecho, lo que provocó una considerable caída de los ingresos percibidos por el ayuntamiento.<sup>255</sup>

---

<sup>254</sup> "Pidieron los dichos señores al señor corregidor que porque los exidos se talan e destruyen, a causa que los arrendadores venden la leña, que mande hazer pesquisa sobrello y los mande castigar, y para adelante nombraron por guarda para ello y para que çesen los fraudes, que los arrendadores hazen, a Morales, enpedrador, el qual juro en forma". *LAC-V*, p. 378

<sup>255</sup> *LAC-I*, p. 290

Los pastos mantenían su carácter público o comunal para todos los vecinos de Madrid y su tierra. Su ubicación junto a las riberas y la existencia de un amplio arbolado garantizaban la riqueza de estos pastizales. Desde el s. XV el concejo intentó mediante diversas maniobras acotar los pastos de algunos de estos ejidos y carrascales para arrendar su aprovechamiento. Las tentativas se centraron en el Porcal, situado en la ribera del Jarama, en el actual término municipal de Arganda. La previsible resistencia campesina hizo que la pretensión de vedamiento de los pastos se arrojara con su carácter transitorio y por necesidades excepciones de las arcas municipales. Ni siquiera esta “explicación” evitó que los sexmeros de la Tierra protestaran enérgicamente y que evitaran así el pretendido acotamiento.<sup>256</sup> Unos intentos que de hecho tendrían que esperar a mediados del s. XVIII en el caso del Porcal y el Negralejo, los principales sotos del ayuntamiento madrileño en la ribera del Jarama.

A lo largo del siglo XV el crecimiento de la población y las reiteradas usurpaciones de términos comunales (montes y pastos) por parte de los señores y los "poderosos" de la Villa provocaron que la presión sobre los recursos silvo-pastoriles fuera cada vez mayor. Por ello tuvo que intervenir directamente el concejo madrileño, cuyo interés en controlar este problema era doble: por un lado estaba dirigido por una oligarquía que había ocupado y usurpado numerosos terrenos para usos ganaderos; por otro, la salvaguarda de los ingresos que generaba la renta de los ejidos y carrascales, tan importante para el buen funcionamiento de la hacienda local. El resultado fue la recopilación de la normativa municipal en dos bloques de *Ordenanzas* en 1380 y 1500.<sup>257</sup> Los capítulos correspondientes a estos espacios arbolados y ganaderos en la Ordenanza de 1500 tenía su origen en la situación siguiente: “los que tienen sotos y dehesas en esta villa y su tierra y los rrenteros que tienen a rrenta los exidos desta dicha villa se quexan diziendo que los dichos sotos y dehesas y exidos talan y destruyen los que cortan leña y caçan e pescan e meten sus ganados en ellos”.

En las Ordenanzas de 1380 la regulación de los aprovechamientos comunales en los ejidos y sotos era escasa, tal vez por no existir todavía una presión excesiva sobre estos recursos, que resultarían compatibles con el nivel de población y las prácticas agrarias y ganaderas tradicionales. Así, tan sólo se especificaban las penas por la corta de leña sin permiso del concejo

---

<sup>256</sup> “Los dichos señores dixeron, que respondiendo al requerimiento a ellos fecho por parte del seismo del seismo de Villaverde e Martín Marcos e los otros vecinos de Xetafe sobre que mandasen alçar el vedamiento que tiene fecho de la yerva del Porcal, que ellos tienen mandado llamar los seismos desta dicha Villa e su tierra para con ellos consultar e acordar lo que se deva hazer”. *LAC- II*, p. 177

<sup>257</sup> *Documentos*, tomo III, págs. 517-571



en el epígrafe 46: el infractor era castigado con 6 mrs si se realizaba durante el día, mientras la sanción se duplicaba si se llevaba a cabo por la noche. En el caso de que no fuera vecino de la Tierra y Villa madrileña las penas eran considerablemente superiores: se le prendaba la bestia de carga en la primera infracción, en la segunda además se le castigaba con 60 mrs, que se duplicaban en el caso de una tercera falta. Más detalladas eran las sanciones impuestas en el caso de las dehesas y prados tanto concejiles como privados, en los que se imponían multas por la intromisión de ganados, pero no era éste el caso de los exidos municipales, cuyos pastos seguían siendo “comunes de villa y tierra”.

La situación que se desprende del análisis de las Ordenanzas de 1500 es sustancialmente distinta. En efecto, no sólo se especifican con mucho más detalle las infracciones en el caso de los sotos y dehesas, sino que éstas son castigadas con penas muy superiores, lo que refleja un indudable aumento de la presión sobre los recursos sivopastoriles en el entorno urbano en pleno proceso de expansión agraria y del mercado madrileño. En el caso de las leñas el cortar una carga de leña (tanto verde como seca) se castigaba con una multa de 60 mrs durante el día, que se doblaba en el caso de que la corta se realizara durante la noche. Se especificaba la sanción por corta de taray, un arbusto muy abundante entonces en la ribera del Jarama y que, como veremos, será objeto de una importante explotación forestal durante la Edad Moderna: 50 mrs y expropiación de la herramienta. En el caso de que la corta se hiciera con carretas (algo no detallado en las Ordenanzas anteriores) se sancionaba con 400 mrs (300 mrs si era de taray), que se duplicaba si la infracción era nocturna. Todas estas sanciones se duplicaban a su vez en el caso de que el responsable no fuera vecino madrileño. Un detalle interesante de las Ordenanzas es el enunciado de las especies presentes en estos terrenos: fresno, espino, saúco, chopo, povo (álamo blanco), saz (sauce) y encina, mientras que entre los arbustos se citaba el taray, la retama y las tovas (cardos borriqueros). En suma, se describe un típico bosque de ribera mediterránea en el que la alteración antrópica no sería todavía muy considerable, algo que cambiaría con la explotación forestal (y otros usos industriales) de estos terrenos en los siglos posteriores.

### 3.2 – LOS PASTIZALES: LAS DEHESAS

“La diferenciación de términos en los concejos tiene lugar, pues, mediante un proceso de acotamiento de sus términos a partir de las porciones más singularizadas y concretas de los

mismos, proceso que interesa desde un principio a la gran "universitas" municipal -Concejo de Villa/Ciudad y Aldeas- y, sobre todo a la colectividad capitalina y a las diferentes colectividades aldeanas, individualmente consideradas... Mediante el sistema de acotamiento, y la subsiguiente incorporación predial, se aprovechan colectivamente las ventajas que proporcionan la proximidad o la cualidad de ciertos parajes; si predomina la primera finalidad suele hablarse de los ejidos, y de las dehesas si se trata de la segunda".<sup>258</sup>

La primera referencia a términos así acotados en Madrid la encontramos en el *Fuero de 1202*. En él se mencionan una serie de tierras cuyo libre aprovechamiento había sido restringido por el concejo, que impone penas pecuniarias por el incumplimiento de tales restricciones. Es el caso del prado de Toia (Atocha): "El prado de Toia sedeat defesado desde la fonte del mazano... usque ad fondon de los ortos, quod estermnarón los fabidores del conzeio, e sedeat semper per foro per a la obra del adarue. Et el ganado otro qui ibi entrare, tectet I quarta a la cabeza", así como del "carascal de Balecas quomodo lo defeso el conzeio".<sup>259</sup> Se trata de dos entornos distintos, unidos por su carácter de estar cerrados a los usos comunales. En el caso de Atocha es un predio situado en las cercanías del núcleo urbano, mientras el carrascal se situaba en una aldea próxima a Madrid.

La siguiente mención a un terreno reservado de Madrid aparece en un interesante caso, la *dehesa de Tejada*, situada en el entorno del monte de El Pardo. El rey Enrique II, tan dado a repartir mercedes entre los fieles que le habían llevado al trono, concedió a su montero Ximén López la dehesa de Tejada "e la caza e la corta e la yerua della", a lo que el concejo de Madrid alegó diciendo "que esta dehesa que es *propio desa villa* e mantenimiento della de que sacades madera para labrar por pan e para fazer caruon e otras cosas que uos cumplen para vvuestro mantenimiento. Et por ende que recibades grand danno e grand despoblacion desa villa e non seria nuestro seruicio, e que nos pediades por merced que lo mandasemos desfazer". Ante esta protesta, el rey decidió en 1368 restituir la dehesa de Tejada al concejo madrileño.<sup>260</sup> Se trata de la primera vez que en el caso madrileño se explicita el término "*propio*" para hacer referencia a un bien del municipio, además de describir todos los aprovechamientos a que estaba dedicada la dehesa.

---

<sup>258</sup> MANGAS NAVAS- *El régimen comunal agrario*, págs. 152-153

<sup>259</sup> *Fuero de Madrid de 1202*, r. LXX y LXXI, respectivamente (p. 60 de la ed. de 1962)

<sup>260</sup> *Documentos*, t. I, págs. 384-385

Es de nuevo en el s. XV cuando disponemos de una documentación más rica sobre las dehesas, con el valor añadido de que se empieza ya a hacer referencia a dos tipos de dehesa: las de la Villa, situadas en el entorno de la ciudad, y las de las aldeas, que son concedidas por la capital de acuerdo al esquema de Villa y Tierra. Todas ellas comparten su carácter de pastizales reservados, de terrenos acotados en los que se excluye el cultivo. Cabe pensar que estas dehesas intenten aprovechar las más favorables condiciones del terreno para la obtención de pastizales, como la disponibilidad de agua, las características del suelo. Con todo, lo que define a la dehesa es el acotamiento, la reserva del uso. Y esto se podía producir en cualquier momento y en numerosas (que no todas) zonas. Las dehesas no tienen por tanto un carácter atemporal, permanente, nacidas con las aldeas y acompañando secularmente el asentamiento humano. Por el contrario, la delimitación de dehesas es un proceso histórico: su nacimiento viene vinculado a las necesidades de reservar pasturas para los ganados de labor, reflejando así una extensión de las áreas roturadas que supone limitaciones a la disponibilidad de pastos abiertos.

Recordar, por último, el carácter de auténtica “reserva energética” de las dehesas para las economías agrarias. En efecto, en una economía de base orgánica, como la historia medioambiental nos recalca, el potencial productivo deriva en gran medida de la capacidad de generar energía, que a su vez depende de la utilización del suelo (dada la práctica ausencia de utilización de las reservas del subsuelo o energía fósil). En este sentido las dehesas proveen de “combustible” al ganado de labor, cuya disponibilidad determina la capacidad de cultivar el terreno, base finalmente del producto agrario obtenido. De ahí la necesidad de delimitar dehesas con el aumento del ganado de labor y la disminución paralela de pastizales naturales. Con la configuración de las dehesas se establecían además unas normas institucionales o reglas de juego que pretendían garantizar la preservación de su naturaleza, esto es, su potencial energético. Una vez más la “tragedia de los comunales” deja su lugar a la regulación institucional de los bienes comunales. Todo ello es aplicable mientras los bueyes constituyan la fuerza de tiro principal en la producción agraria; su sustitución por la mula y la posibilidad de alimentarla con cebada influirá posteriormente en la evolución de las dehesas.

Dos son las dehesas la Villa madrileña acotó en sus alrededores a lo largo del s. XV: *la dehesa de Amanuel o de la Villa* y la de Arganzuela. Ambas se destinan en un principio al ganado de labor de sus vecinos, si bien terminarán convertidas en “dehesas carniceras” para los hatos destinados al abastecimiento de la ciudad.

De la dehesa de Amanuel, situada al norte de la ciudad, se conserva documentación desde mediados del último siglo medieval que la define como una dehesa "para los bueyes e bestias de labranza de los vecinos desta Villa e sus arrabales".<sup>261</sup> Los vecinos de la villa, tanto intramuros como de los distintos arrabales, tenían el derecho exclusivo de aprovechar esta dehesa concejil para sus animales de labranza. En sus orígenes era un espacio montuoso: el monte de Amanuel se cita hasta comienzos del s. XVI en las cercanías de otras zonas de monte, configurando una importante área forestal al norte y noroeste de la Villa. Pero su destino como dehesa de labor fue breve: en 1485 el ayuntamiento decidía convertirla en dehesa carnicera, obligando a los vecinos que tuvieran sus ganados pastando los retiraran bajo la amenaza de caer en las penas de la ordenanza y ser prendados por los caballeros de monte y guardas de campo de la Villa.<sup>262</sup>

La *dehesa de Arganzuela* es más tardía. Se constituyó como tal a partir de 1492, fecha en la que el concejo solicitó licencia real para constituir una nueva dehesa en las cercanías de la localidad "porques mucha utilidad y provecho a la dicha Villa". Una provisión de los Reyes Católicos dictada en tal año concedía la autorización solicitada para que el concejo de Madrid formara una dehesa ex novo, aprovechando para ello unos terrenos comunales, que debían ser ampliados mediante la expropiación de tierras de propiedad privada en las inmediaciones "para que de allí adelante quedase el término que se señalaba por dehesa adehesada para los ganados de trabajo y labor y otras bestias de los vecinos de esta Villa y sus arrabales, y los que viniesen a las ferias de ella; mandando que los dueños de las dichas viñas y tierras las vendiesen a justa tasación; y permitiendo que para su pago se pudiesen vender, o dar en cambio algunas otras tierras propias de la Villa".<sup>263</sup> El proceso expropiatorio fue lento, concluyendo en 1497. Se negoció con los herederos de Arganzuela en numerosas ocasiones ante los desacuerdos en la tasación efectuada.<sup>264</sup> Para afrontar el coste de las adquisiciones se

---

<sup>261</sup> Se trata de la minuta de una sesión del concejo madrileño celebrada en mayo de 1457 y publicada por GOMEZ IGLESIAS, A.- "La dehesa de Amanuel o de la Villa", *AIEM*, t.II (1967), p. 39

<sup>262</sup> Sesión municipal de 18 de marzo de 1485: "Otrosí, mandaron que ninguna persona nin algunas personas desta dicha Villa e sus arrauales e tierra non sean osados de echar ganados algunos a paçer en la dehesa de Hamaniel de oy en adelante; e que los que los tuuieren en la dicha dehesa los saquen fuera de aquí a mañana en todo el dia, so pena que, pasado el dicho dia, los puedan quitar los dichos ganados qualquier vecino desta dicha villa e sus arrauales que los tomare; e mandaron que los caualleros de monte e los guardas del campo desta dicha Villa que lo guarden e penen por la forma susodicha; e mandaronlo pregonar públicamente". *LAC-I*, p. 379

<sup>263</sup> La Real Provisión está publicada en *Documentos*, t. III págs. 341-346 (la cita, en p. 345)

<sup>264</sup> *LAC-III*, págs. 182-3

recurrió al trueque con otros terrenos o bien a la realización de derramas y sisas entre los pecheros.<sup>265</sup>

Situada al sur de la ciudad, abarcaba una zona comprendida entre el margen superior del río Manzanares y la cerca urbana, emplazamiento que garantizaba la provisión de pastos. Junto con la dehesa de Amanuel completaba el panorama de las dehesas sitas en la proximidad de la Villa, cada una en un extremo opuesto. En un primer momento la intención del ayuntamiento fue proceder a su arrendamiento, convirtiéndolas así en un propio desde su constitución. Arreciaron las protestas encabezadas por los sexmeros, lo que motivó un acuerdo en sentido contrario por el municipio: el 27 de diciembre de 1497 se decidía “que la dehesa questava acordado que se arrendase d’Arganzuela, que no se arriende porque non viene conforme todo el pueblo en ello”.<sup>266</sup>

En 1500 se elaboraron unas ordenanzas específicas para la nueva dehesa de Arganzuela.<sup>267</sup> En resumen, se trataba de una dehesa boyal, destinada al pasto de los ganados de labor de los labradores que habitaban en la ciudad, en lo que coincide con la de Amanuel, si bien en la de Arganzuela -a diferencia de aquella- se empieza a dar cabida a otros ganados sin especificar, así como a los ganados que se trajeran a vender a las ferias urbanas. En cualquier caso se prohibía “que los ganados vacunos e ovejunos e cabrunos e puercos no entren, para siempre jamás, en la dicha dehesa”. Por su parte, también se limitaba la presencia del ganado equino en general, pues se exigía un permiso previo del concejo.

Las infracciones a estas normas se sancionaban con una serie de multas, señalándose “que las penas de suso contenidas de la dicha dehesa se arrienden a la persona o personas que más dieren por ellas”. Se trata, como se verá, de un mecanismo muy habitual en el proceso de conversión de comunales en propios, al arrendarse en un particular la recaudación de las infracciones cometidas. Es un primer paso para el cambio de destino de la dehesa (que afectó también a Amanuel) que tendrá lugar a comienzos del s. XVI, cuando pase a ser *dehesa carnícera*, terrenos reservados al pasto de los ganados de los obligados al abastecimiento de

---

<sup>265</sup> AVM-S, 3-297-6

<sup>266</sup> LAC-IV, p. 1

<sup>267</sup> AVM-S, 3-68-79

carne a la ciudad, resultado de las necesidades creadas por el aumento de la demanda de alimentos que crea la expansión urbana.

Además de las dehesas en las cercanías de la villa capital de un término, nos encontramos con otro tipo de adhesionamientos, los que afectan a los lugares de su jurisdicción, esto es, a las *dehesas de las aldeas de la Tierra*. En los inicios del régimen foral de Villa y Tierra, corresponde a aquella proceder al señalamiento de términos en las distintas aldeas para que pueda ser aprovechado por los ganados de sus labradores. En cualquier caso, la disponibilidad de pastos (el factor abundante) en estos primeros momentos no crea ninguna problemática especial, por lo que estas concesiones no han dejado huella documental. Sin embargo, con el transcurso del tiempo el crecimiento demográfico de las aldeas creaba nuevas necesidades, por lo que las comunidades campesinas fueron desarrollando una muy activa política para conseguir el reconocimiento real de sus dehesas, cuyo aprovechamiento quedaba reservado con carácter exclusivo a los habitantes de estas localidades.

Este proceso es claramente perceptible en la Tierra de Madrid entre finales del s. XV y comienzos del s. XVI, cuando las aldeas se "lancen" a solicitar la concesión de nuevas dehesas (sólo en contadas ocasiones se trata de la primera dehesa en el término). La imagen de una agricultura expansiva que traslucen es clara: más hombres, más tierras en cultivo, y por tanto mayor número de ganado de labor que a su vez exige la reserva de pastos exclusivos en forma de dehesas. Imagen mucho más nítida si la relacionamos con otro proceso paralelo en el tiempo y estrechamente correlacionado, como es la petición de términos comunes para aumentar las labranzas por parte de los concejos aldeanos (infra).

El período álgido de peticiones y cesiones de dehesas abarca la segunda mitad del s. XV y el primer tercio del XVI. Las modalidades de concesión son variadas. Así, en 1461 el concejo de Madrid decidió acceder a la petición del concejo de una de sus aldeas, Hortaleza: "muchas veces nos es pedido e demandado que les diese una dehesa para sus bueys e bestias de labrança porque mejor se pudiesen sostener sus ganados e labrar mejor, ca por mengua de no tener pasto cesauan la lauor del pan e viñas". De acuerdo con la información realizada, el concejo de la villa capital concedió "una dehesa para que sea para los bueys e bestias de labrança de los vesinos e moradores de la dicha Hortalesa e de los que ende tienen e houieren heredad". Vecinos del lugar y herederos (propietarios que no habitaban en el lugar) eran los únicos que podían aprovechar esta dehesa, que estaba reservada para el ganado de

labor, prohibiéndose que "entren en ella ganados ouejunos ni porcunos ni cabrunos de los vesinos de la dicha Hortalesa".<sup>268</sup>

En otras ocasiones las aldeas recurren directamente a los monarcas, destacando en este sentido la clara actitud favorable que se aprecia en el reinado de los Reyes Católicos, que tendrá su continuidad en los primeros años de los reinados siguientes. En 1498 dictaron una Real Cédula ordenando al concejo de Madrid para que designase a Carabanchel de Abajo un terreno que pudiera servir de dehesa a sus ganados y bestias de labor, comentando que los vecinos les habían manifestado "quel dicho lugar tenía necesidad de una dehesa para sus ganados e bestias de lauor e nos suplicaron e pidieron por merçed que la mandasemos dar e sennalar en un lugar conuiniente segund e commo la tenían otros concejos comarcanos".<sup>269</sup>

Un proceso muy similar es el que siguió el lugar de Ambroz<sup>270</sup> para conseguir una dehesa. Obtuvo una carta real para que el corregidor de la Villa de Madrid, Sancho Pérez Machuca, realizara una información sobre la dehesa que dicho concejo tenía y su petición de una nueva. En sus conclusiones, el corregidor afirmaba que la dehesa que poseía dicho lugar "es muy pequeña y en que no pueden caber ni terçia parte del ganado de labor que tienen.... e que algunos venden sus ganados de labranças por no tener donde apaçentallo", por lo que se mostraba partidario de que se concediese permiso para que Ambroz pudiese formar una nueva dehesa.<sup>271</sup> Localidades como Vicálvaro, Chamartín, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas, Getafe o Alcorcón fueron por estas fechas también protagonistas en la solicitud y concesión de dehesas para sus ganados de labor.

### 3.3 – EL MONTE. EL CASO DEL MONTE DE EL PARDO

Es significativa la escasez de noticias acerca del monte en el entorno madrileño durante los primeros siglos medievales. Tan sólo algunas referidas a ciertos adehesamientos o

---

<sup>268</sup> AVM-Secr, 3-170-26

<sup>269</sup> *Documentoss*, t.III, págs. 481-485

<sup>270</sup> Se trata de una aldea, más tarde despoblado, que estaba situada entre Vicálvaro (hoy día barrio de Madrid) y Coslada

<sup>271</sup> AVM-Secr, 3-172-21

reserva de su uso por parte del concejo, como es el caso de Tejada en el entorno de El Pardo o el carrascal de Vallecas, acotado ya desde el Fuero. Pero por los demás las limitadas referencias al monte parecen reflejar una ausencia de problemática en torno a este recurso tan básico. La disponibilidad forestal en el entorno madrileño sería alta, habida cuenta además que se incluirían los derechos comunales sobre el Real de Manzanares. En consecuencia los derechos de uso del monte son bastante amplios: es el caso de la práctica de las cortas pero también del descepe en los montes de propiedad privada para roturar los terrenos. Las limitaciones y prohibiciones que se establecen en el s. XV parecen poner de manifiesto esta situación previa.

Ya en las citadas Ordenanzas de 1380 se comenzaron a establecer sanciones por las cortas de leña en el caso de los exidos, sotos y dehesas, tanto si eran términos concejiles como privados. La constitución de una dehesa con la capacidad de exclusión de uso que suponía era, por tanto, la fórmula para regular los aprovechamientos silvícolas. Pero todavía no aparecía el monte como espacio regulado, con normativa específica. Algo que sucede claramente a fines del s. XV, cuando el municipio vaya estableciendo ordenanzas para organizar los disfrutes de leña y, sobre todo, para proteger y salvaguardar la misma existencia del monte, acosado por prácticas esquiladoras y el proceso de roturación.

Desde la década de 1480 el concejo comienza a tomar medidas reguladoras del bosque en forma de ordenanzas. Se trata todavía de normas con carácter puntual, que responden a los problemas según se van planteando o son tomados en consideración por los miembros del ayuntamiento; nada todavía de una ordenanza articulada que establezca un conjunto de reglas precisar para definir y organizar la explotación y uso sistemático del monte, que sólo se llevará a cabo a comienzos del s. XVI, en 1512.

La primera medida reguladora conservada es una ordenanza de 21 de febrero de 1480 en la que se establecía la prohibición de sacar leña con carretas de los términos forestales bajo la sanción de perder la leña y además una multa de 150 mrs. A continuación se prohibía completamente la práctica de descepar, de arrancar árboles de cuajo, estableciéndose la misma pena que en la infracción anterior.<sup>272</sup>

---

<sup>272</sup> “ordenaron que ninguno non sea osado de deçepar çepas en la dicha villa de Madrid e su tierra, que sean çepas de montes, so la dicha pena”. *LAC-I*, p. 299. Ordenanza confirmada el 3 de septiembre de 1484. *Ibíd.*, p. 355.



La práctica del fuego para aclarar el monte y abrir espacios para el cultivo ha sido tradicional en los procesos expansivos. Por ello se estableció otra ordenanza en la que se prohibía esta actuación tanto dentro del mismo monte como en los rastrojos colindantes: “non sean osados de poner fuego en los dichos montes nin en ningunos rastrojos cercanos a ellos de manera que pueda rrecreçer daño a los dichos montes”. Para evitar la tentación de “recalificar” los montes quemados para el cultivo se establecía la prohibición de roturar estos terrenos, exigiendo además a los que los estuvieran cultivando en el pasado se presentaran ante el concejo para cesar con dicha práctica. Los roturadores de las áreas quemadas eran considerados culpables del incendio, asimilándose sus penas a las de los responsables convictos.<sup>273</sup> Dicha normativa era aplicable a los montes de la villa, que no se especificaban, pero se ordenaba notificar a los sexmeros “para que lo hagan saber en sus conçejos que confinan con los dichos montes”.

La regulación se extendió a la práctica de descortezar las encinas, utilizándose su corteza para el curtido del cuero, que fue prohibida en 1494.<sup>274</sup> Pero sin duda el principal problema planteado en el ámbito forestal seguía siendo el de la presión roturadora, por lo que en 1496 se reformaba la ordenanza que prohibía el descepar árboles, aumentándose las penas impuestas. En esta ocasión, sin embargo, se reconocía la magnitud de las roturaciones y especialmente el hecho de que el propio concejo urbano había concedido términos con cubierta forestal para la labranza a diversos concejos aldeanos, por lo que en estos casos se autorizaba el desmonte. Lo mismo se hacía con los propietarios particulares de montes, que podían roturarlos si contaban con autorización previa del concejo.<sup>275</sup> La prohibición de

---

<sup>273</sup> “mandaron que ningunas personas de qualquier estado o condiçion que sean non sean osados de rronper nin sembrar en las dichas quemas que de oy en adelante fueran fechas nin en las que antes de agora se fizieron, so pena que si contra este vedamiento sembraren o rompieren en los dichos quemados, que por el mismo fecho sean avidos por efectores de las dichas quemas e cayan e incurran en las dichas penas en que caen los que pusieren los dichos fuegos”. Sesión de 10 de diciembre de 1484. *LAC-I*, p. 366.

<sup>274</sup> “Mandaron que se pregone la ordenança questa Villa tiene sobrel descortezar de los montes y dieron poder a Fernando de Madrid, alcaide del Pardo, para que sin escandalo alguno pueda prender a los que hallare descortezando”. *LAC-III*, p. 89. Poco después se establecía una sanción de 600 mrs para los que incumplieran esta norma. *Ibíd.*, p. 91.

<sup>275</sup> “Otro si questo se entienda salvo si las tales çepas fueren de las tierras questan dadas para labrança a los lugares de la tierra desta Villa e asimismo que los señores de qualquier tierra la puedan deçepar para senbrar pan, con tanto que primero venga el tal heredero al Ayuntamiento desta Villa a declarar que heredamiento o tierras son las que así quiere deçepar o desmontar, para que en el dicho Ayuntamiento sea visto e determinado e amojonado lo ques suyo e quiere deçepar”. *LAC-III*, p. 266.

descepar se extendió también a la retama, protegiéndose así el matorral arbustivo bajo las mismas penas que en el caso del monte.<sup>276</sup>

Dentro del territorio de la Villa y Tierra de Madrid, el entorno de El Pardo va a constituir la principal zona boscosa desde la Edad Media, lo que va a continuar durante la Edad Moderna e incluso en la actualidad. Se trata de un gran encinar situado al noroeste de la ciudad, que mantendrá su carácter comunal. Todas las ordenanzas del concejo para regular los usos y aprovechamientos silvícolas hacen referencia a este gran monte. Además de El Pardo, aparecen determinados encinares en localidades como Vallecas o Coslada, pero las referencias son escasas, además de terminar siendo roturados para labor en el s. XVII; junto a ellos las dehesas de ciertas aldeas que mantenían, pero con carácter secundario, una cierta masa forestal. La imagen que la documentación transmite es por tanto de un claro predominio desde el período medieval de las zonas de cultivo (cereal y vid), con escasos restos de montes (encinares) en zonas acotadas (dehesas), complementados con las zonas baldías, dedicadas preferentemente a pastos, con cubierta vegetal de matorral mediterráneo.

Otra gran área forestal en la Tierra madrileña estaba constituida por los bosques de ribera (vegetación ripícola, como álamos, sauces, fresnos y taray) en torno al río Manzanares, y especialmente en el Jarama. Constituían los exidos, más tarde denominados sotos que pertenecían al ayuntamiento madrileño y que han sido estudiados en el epígrafe anterior.

Las características geográficas son las primeras responsables del carácter boscoso del entorno de El Pardo, pero la intervención humana tendrá un papel decisivo. El relieve montañoso de la Sierra deja paso en El Pardo a uno más suave y alomado, con apenas algunas quebradas en los márgenes de los arroyos. Sus suelos, arcosos de buena permeabilidad, no se empantanar tras las lluvias de otoño, permitiendo la circulación de la caza y sus perseguidores. Se pueden añadir la benignidad del clima o la abundancia de cauces fluviales y fuentes, pero el factor fundamental es la vegetación, un encinar que, sucesivamente aclarado por el hombre, se ha convertido en muchas zonas en monte adehesado, aunque sin dejar de cobijar a una rica y variada fauna. Ya a mediados del siglo XIV, en el *Libro de la Montería* de Alfonso XI se hace alusión a su riqueza cinegética: "es muy real monte de puerco en invierno", describiendo como terreno de montería el comprendido entre el río Manzanares y la actual carretera de Fuencarral a Colmenar Viejo.

---

<sup>276</sup> "Acordaron que se pregone que ninguna persona deçepe retama en esta Villa e su tierra so las penas puestas en el deçepe de los montes". *LAC-III*, p. 338

Tras la repoblación el entorno de El Pardo se integra en la Tierra de Madrid, el territorio que depende jurisdiccionalmente de la villa y que por tanto va a ser organizado por el concejo urbano. La consolidación por el norte de esta Tierra madrileña va a resultar tremendamente problemática, como he tenido ocasión de plantear: si los límites iniciales fueron fijados en la línea de cumbres del Sistema Central por un privilegio real de 1152, pronto fueron contestados por la expansión territorial del concejo de Segovia al sur del Guadarrama. Se inició así la lucha por el control de este espacio, detalladamente estudiada ya en este trabajo, que se prolongó hasta que Alfonso X se reservó la jurisdicción del territorio en disputa, que desde entonces recibiría el nombre del Real de Manzanares.

El monte de El Pardo va a constituir finalmente el límite norte de la Tierra de Madrid. La conservación de su carácter forestal se debe en un primer momento a la lógica de la organización del espacio por parte de los concejos de repoblación castellanos. En efecto, los amplios términos de que éstos disponían posibilitaba la especialización territorial entre áreas de cultivo (*ager*) y el *saltus*, donde se realizaban actividades de pastoreo, aprovechamiento de leñas, caza, apicultura....El control de toda la rampa serrana garantizaba a Madrid un extenso *saltus* en el que predominaría un paisaje con escasa intervención humana, donde se mantienen pastizales naturales, manchas de bosque noble o montes adehesados. Condición imprescindible para salvaguardar estos usos silvopastoriles era el control del poblamiento, lo que explica la ausencia de voluntad repobladora por parte de Madrid.<sup>277</sup> Aun cuando el concejo madrileño perdiera finalmente la jurisdicción en el s. XIII, consiguió el reconocimiento de los derechos de sus vecinos a los aprovechamientos de pastos, leñas, carboneo y caza en los términos comunales del Real, unos derechos para cuyo ejercicio el concejo madrileño tuvo que incurrir a finales del medievo en unos costes crecientes, concretados en el establecimiento de guardas y sobre todo en los largos y onerosos pleitos.

Fue así como El Pardo se convirtió en el *saltus* de Madrid (o al menos en algo muy parecido). El espacioso encinar que se extendía a ambos márgenes del río Manzanares entre los límites del Real y la villa adquirió una creciente importancia para la disponibilidad de leña y pastizales. Pero hacia el s. XIV ya existía en el monte una significativa presencia humana, como queda atestiguado en una información del año 1312 que se elaboró precisamente para justificar los derechos de la villa a este territorio que habían reclamado los segovianos. En ella

---

<sup>277</sup> MOLENAT, J-P.- "L'organisation du territoire entre Cordillère", págs. 77-78.

se mencionan como “poblados e aldeas” una serie de topónimos que se incluyen dentro del monte de El Pardo y que pertenecían a caballeros o instituciones eclesiásticas de Madrid.<sup>278</sup> Serían pequeños caseríos dedicados a la ganadería y que desarrollarían la explotación agraria de un pequeño ruedo circundante. Se trata por tanto de una inicial ocupación del territorio no muy diferente a otras zonas cercanas a Madrid. Al igual que sucedió en éstas, cabe suponer que la consolidación de tales aldeas hubiera supuesto el desarrollo de una vocación de producción agraria que hubiera creado importantes tensiones con el uso ganadero y silvícola, dando lugar a la reducción de la masa forestal.

Si éste no fue el destino de El Pardo se debe inicialmente al papel del concejo de la villa, que reguló los aprovechamientos comunales de pastos y leñas mediante el acotamiento de una *dehesa* (entendida en su sentido jurídico, como espacio protegido) en dicho término, atestiguada ya en la primera mitad del s. XIV. Así, en el *Libro de la Montería de Alfonso XI* este espacio es presentado como: “La Dehesa de Madrit es muy real monte de puerco en invierno”.<sup>279</sup> En 1345 se precisa mucho más el carácter de este entorno en una provisión real sobre la dehesa de Tejada (arroyo afluente del Manzanares en el monte de El Pardo): el rey se había reservado esta “uestra dehesa” durante diez años, prohibiendo el corte de leña, si bien autorizaba a “entrar ganados a pascen en ella en quanto nos non fuesemos en madrit”.<sup>280</sup> Por tanto, casi paralelamente a la organización del espacio como un ámbito de aprovechamientos comunales regulados por el concejo madrileño (como demuestra la mención de las estas dos áreas acotadas), aparece la presencia de la monarquía reservándose el control del mismo territorio.

El objetivo de los monarcas en El Pardo fue exclusivamente la práctica de la caza, que constituía una de las principales actividades de un estilo de vida noble y a la que los monarcas dedicaban una buena parte de su tiempo y energía.<sup>281</sup> Aun cuando las cacerías se realizaban

---

<sup>278</sup> Publicado en *Documentos*, t. I, págs. 213-229.

<sup>279</sup> *Libro de la Montería del Rey D. Alfonso XI*. Edic. de José Gutiérrez de la Vega, Madrid, 1983 (edic. orig. 1877), p. 224. Gregorio de Andrés ha demostrado cómo es este texto el que hace referencia al monte de El Pardo, así como que la montería en que se menciona “El Pardo”, y que tradicionalmente se identificaba con el actual monte, se refiere en realidad a la localidad de Villanueva del Pardillo. DE ANDRES, G.- *Las cacerías en la provincia de Madrid en el siglo XIV según el Libro de la Montería de Alfonso XI*, Madrid, 2000, págs. 140-142.

<sup>280</sup> *Documentos*, t. I págs. 271-272.

<sup>281</sup> Un análisis de la caza de los monarcas castellanos en la Edad Media en MORAN TURINA, J. M. y CHECA CREMADES, F.- *Las Casas del Rey. Casas de Campo, Cazaderos y Jardines. Siglos XVI y XVII*, Madrid, 1988, págs. 10-31.

por todo el reino, en la Baja Edad Media el entorno de la Sierra de Guadarrama fue convirtiéndose en el escenario protagonista de las andanzas cinegéticas de los monarcas castellanos. Para mejor organizar su práctica y crear entornos favorables al descanso mandaron construir pabellones y palacios destinados a tal fin, el más antiguo de los cuales sería el de Alfonso X en las cercanías de Sotosalbos.<sup>282</sup>

El Pardo se fue configurando como un cazadero real a lo largo de los dos últimos siglos de la Edad Media. El proceso para ello consistió en la *patrimonialización*, en primer lugar de los usos del espacio y más adelante de un territorio que se consolidará como propiedad plena. Tal situación se concretará cuando Enrique III construya la primera residencia o casa real en El Pardo destinada a la práctica venatoria. Enrique IV, gran aficionado a la caza, mejoró la edificación que se convierte en una auténtica fortaleza en la que se alojaría con frecuencia.<sup>283</sup> Al frente se colocará un alcaide y un creciente personal administrativo. En torno a esta residencia se configuró un espacio cuyo uso quedó reservado en exclusiva a los monarcas por medio de sucesivos *amojonamientos* que fijan sus límites desde mediados del s. XV. Valga como ejemplo de este “derecho de propiedad” que el poder real se ha atribuido la Provisión del rey Fernando el Católico de 22 de enero de 1484 por la que prohíbe “caçar nin matar nin caçen nin maten venados ni puercos ni osos ni conejos ni perdises nin otras animalias nin caça alguna nin cortar nin corten leña verde nin seca nin paçer nin pascan con sus ganados en la dicha dehesa de suso declarada e deslindada por cuanto mi merçed e voluntad es que en quanto a lo susodicho esto sea guardado por quanto para quando yo o la serenísima reina quisiéremos allí aver placer”.<sup>284</sup>

El término delimitado como espacio real recibió desde mediados del s. XV la denominación de Dehesa Vieja (lo que parece indicar que coincidiría con la antigua dehesa de Madrid), siendo conocido más tarde con el significativo nombre de Monte Hueco. Se había ido formando un *paisaje adehesado*, donde el encinar original se había ido aclarando para formar pastizales, que en un principio estarían destinados a los ganados de Madrid y su Tierra y que a partir de entonces servirían de sustento a la caza destinada a los monarcas. En este proceso de control del espacio jugó un papel importante la creciente preferencia por las

---

<sup>282</sup> *Ibidem*, págs. 33-35.

<sup>283</sup> CALANDRE, L.- *El Palacio del Pardo (Enrique III-Carlos III)*, Madrid, 1953.

<sup>284</sup> AVM, libro mss. n° 15, fols. 86-87.

monterías de venados. A su alrededor se encuentran los términos de aprovechamiento comunal por parte de los vecinos de Madrid y su Tierra, cuyo disfrute debería ser regulado por las ordenanzas del concejo de la villa capital. En este espacio el paisaje muestra una clara pervivencia del monte o matorral original (también denominado “mancha”) que se deriva de la clara vocación silvopastoril impuesta al territorio. La evolución previsible hubiera sido similar al espacio real: el progresivo adehesamiento del encinar como consecuencia de la creciente intervención humana para organizar la convivencia de cortas periódicas de leña con los pastos e incluso el cultivo cerealícola de ciclo largo. Pero en el entorno de El Pardo esta evolución no culminará totalmente, como tendremos ocasión de comprobar.

Durante la Baja Edad Media los dos usos del espacio no aparecen como incompatibles, sino que mantienen por lo general un carácter complementario en el territorio. Hay que tener en cuenta que el tamaño de la Dehesa Vieja no resulta demasiado grande, como tampoco parece que la densidad de las especies cinegéticas sea excesiva como para ejercer una gran presión sobre el entorno. El cazadero real parece adaptado a las necesidades de unos monarcas que mantienen una corte itinerante que sólo en determinadas temporadas se asienta en Madrid (en buena medida precisamente por el atractivo de El Pardo). Un equilibrio que no deja de ser delicado; basta una intensificación de uno de los usos para que se planteen conflictos por el control del espacio. Dadas las relaciones de poder entre la monarquía y el municipio cabe esperar que sea la primera la que desequilibre la balanza en la utilización del espacio.

El primer paso en este sentido aparece a fines del s. XV y es protagonizado por el alcaide de la fortaleza real, Pedro de Córdoba. Curiosamente se trata de un destacado miembro de la oligarquía que se había hecho con el control del poder municipal. Regidor, fue nombrado procurador en Cortes en representación de Madrid, además de ser encargado de la recaudación del servicio de 1500-1502. Su patrimonio era muy considerable: estaba constituido por juros, casas en Madrid y, lo que resulta más interesante ahora, los heredamientos de Zarzuela y Aravaca, ambos situados en las cercanías de El Pardo.<sup>285</sup> Buena parte de sus intereses patrimoniales se centraban en la ganadería, seguramente de carácter ovino y vacuno, pues aprovechó su cargo de alcaide para introducir sus ganados en la Dehesa Vieja. Su actuación provocó constantes quejas del concejo madrileño (en cuyas instancias

---

<sup>285</sup> Los datos sobre el alcaide aparecen en los Libros de Acuerdos del Concejo y en CARRETERO ZAMORA, J. M.- *Cortes, monarquía, ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515)*, Madrid, 1988, p. 275.

directivas él mismo participaba) que se concretan en tres grandes acusaciones: había ampliado los límites del espacio real a costa de los términos concejiles, prohibía el paso por el camino de El Pardo a los madrileños y sus ganados para abreviar en el río y, sobre todo, que al introducir sus rebaños en la Dehesa Vieja ahuyentaba a los venados y a los jabalíes que causaban importantes destrozos en las zonas de cultivo circundantes, lo que parece indicar que en ese momento las especies venatorias estaban concentradas en el área boscosa, sin presionar excesivamente los espacios agrícolas y ganaderos. Las reclamaciones madrileñas provocaron la actuación de los monarcas, que ordenaron al corregidor realizase una pesquisa sobre estas denuncias. En ella puede apreciarse cómo todavía se consideraba posible la vuelta al status quo territorial y la compatibilidad de aprovechamientos. Consideraba el corregidor en 1493 que “de esto nuevamente acrecentado y vedado, los ganados bravos de la dehesa del Pardo no tienen de ello necesidad, porque en lo antiguo y viejo de lo amojonado de la dehesa del Pardo tienen los dichos ganados bravos asaz tierra por donde anden y se estiendan y tengan mantenimiento”.<sup>286</sup>

El primer gran conflicto por el uso del espacio en el monte de El Pardo tuvo un carácter más personal que institucional, algo que no sucedería en la Edad Moderna cuando la afición cinegética de los monarcas les lleve a controlar cada vez más el territorio. Lo cierto es que hasta fines del s. XV la presencia real no se ha asentado definitivamente, como lo demuestran las “tentaciones” de señorialización. La más antigua correspondió a Enrique II que cedió –como ya hemos analizado– la Dehesa de Tejada “e la caza e la corta e la yerua della” a su montero mayor Ximén Lopez. Las protestas de la villa de Madrid le llevaron a anular la concesión en 1368, reconociendo “que es propio desa villa e mantenimiento della de que sacades madera para labrar por pan e para fazer caruon e otras cosas que uso cumplen para vuestro mantenimiento”.<sup>287</sup> Pero incluso los Reyes Católicos estuvieron cerca de enajenar la posesión real. En 1487 pedían autorización a Madrid para hipotecar la fortaleza de El Pardo a favor de don Pedro de Castilla, a quien los monarcas debían todavía cuatro millones de maravedís por la compra de la villa de Mondéjar. En caso de que no se abonara esta deuda, “la dicha fortaleza del Pardo con su tierra e termino” pasaría a ser propiedad de Pedro de Castilla. El consentimiento madrileño era preciso por cuanto se hacía al concejo corresponsable del

---

<sup>286</sup> Publicada en CALANDRE, L.- *El Palacio del Pardo*, págs. 136-138.

<sup>287</sup> *Documentos*, t.I, págs. 383-386.

pago. De nuevo se reprodujeron las protestas del municipio ante una operación que hubiera podido provocar una trascendental modificación de la propiedad y por consiguiente de la naturaleza del paisaje.<sup>288</sup>

#### 4 – PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

El origen del patrimonio municipal debe buscarse en el proceso de repoblación y, más concretamente para el caso de Madrid, en el *concejo de Villa y Tierra* que he estudiado en el capítulo precedente. Dotado de jurisdicción sobre un conjunto de aldeas, el concejo madrileño organiza el aprovechamiento del terrazgo comunal, todo ello como resultado del pacto foral que tiene su origen en las necesidades militares.

Los términos concejiles forman así un núcleo común del que paulatinamente se desgajarán bienes con distinta naturaleza jurídica: *comunes y/o baldíos* (que mantienen el libre aprovechamiento por parte de los vecinos) y aquellos cuya explotación produce una renta al concejo, a quien corresponde su titularidad, y que, a partir del s. XIV, reciben el nombre de *propios*.<sup>289</sup>

Tal proceso de diferenciación es temprano y, así, ya en el *Fuero de Madrid* de 1.202 aparecen disposiciones sobre bienes y derechos comunales y otras referidas a un conjunto patrimonial que genera unos ingresos para las arcas municipales y cuyo destino es el mantenimiento y reparación de la muralla. Es el caso del prado de Tocha, en las proximidades de la Villa y de otros términos más alejados: "el carascal de Balecas quomodo lo defeso el conzeio, et los molinos e el canal et toda la renta de Ribas que habet ibi el conzeio", cuyo destino es idéntico: "sedeat semper per foro de la obra del adarue de Madrid".<sup>290</sup> Aparece por tanto un hecho que va a ser característico en los siglos posteriores: la posesión por el concejo de la Villa de

---

<sup>288</sup> *Documentos*, t. III, págs. 295-297. La negativa del concejo está publicada en CALANDRE, L.- *El Palacio del Pardo*, págs. 145-146.

<sup>289</sup> BERMUDEZ AZNAR, A.- "Bienes concejiles de propios en la Castilla bajomedieval", en *Actas del III Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1974, págs. 836 y sigs.

<sup>290</sup> *Fuero de Madrid*, rúbricas LXX y LXXI (p. 60 de la ed. de 1962).



bienes raíces en los términos de sus aldeas, fruto de su papel rector del espacio asignado. En el mismo documento se mencionan otras fuentes de rentas como las caloñas o ciertos derechos que constituyen el embrión originario de la hacienda municipal.

Durante el período bajomedieval el régimen comunal experimenta una profunda transformación, resultado de dos procesos estrechamente relacionados: la presión sobre los términos concejiles y la progresiva patrimonialización de los aprovechamientos vecinales por el municipio, dando lugar a la conversión de los bienes comunales en propios, lo que continuará ininterrumpidamente en siglos posteriores. Como factores que determinan esta evolución cabe señalar el aumento de las necesidades financieras de la ciudad, la intervención de la oligarquía local y las necesidades de tierras de las comunidades campesinas para ampliar sus explotaciones. El resultado de estos procesos será que en el período de tránsito a la Edad Moderna aparezca un patrimonio concejil plenamente consolidado y estructurado en sus componentes esenciales: baldíos comunes de Villa y Tierra, dehesas, ejidos y montes concejiles y, finalmente, las tierras de propios. Claro está que estos componentes no van a permanecer estáticos a lo largo del tiempo, sino que continuarán experimentando profundas variaciones.

#### 4.1 – USURPACIONES Y DEFENSA DEL REGIMEN COMUNAL

La práctica de *usurpaciones de términos públicos* tiene lugar a lo largo de toda la Edad Media, si bien es durante el s. XV cuando el problema se generaliza y adquiere unas proporciones que muevan a la reacción tanto de los concejos como de la propia autoridad monárquica. Es un fenómeno bien documentado en numerosas localidades castellanas y andaluzas.<sup>291</sup> Madrid no es ninguna excepción. El principal protagonista según concluyen todos los estudios realizados es el grupo de "*poderosos*": los caballeros y, sobre todo, el

---

<sup>291</sup> Entre la bibliografía sobre este tema, cabe destacar: MOLENAT, J.-P.- "Tolède et ses finages au temps des Rois Catholiques: contribution à l'histoire sociale et économique de la cité avant la révolte des Comunidades", *Melanges de la Casa de Velázquez*, t.VIII (1972), págs. 327-277; CABRERA MUÑOZ, E.- "Usurpación de tierras y abusos señoriales en la Sierra cordobesa durante los siglos XIV y XV", *Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval*, tomo II, Córdoba, 1978, págs. 33-83; LOPEZ BENITO, C. I.- "Usurpaciones de bienes concejiles en Salamanca durante el reinado de los Reyes Católicos", *Studia Historica, Historia Moderna*, vol. I, nº 3 (1983), págs. 169-183 y "La devolución de las tierras usurpadas al concejo de Salamanca en los comienzos de la Edad Moderna. Aproximación a su estudio", *ibídem*, vol I, nº 3 (1984), págs. 95-111. CARMONA RUIZ, M. A.- *Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su "tierra" durante el siglo XV*, Madrid, 1995

cuerpo de regidores que con el tiempo ha ido asentando firmemente su control de los mecanismos del poder local.<sup>292</sup> La magnitud de la rapiña fue tal que obligó a la monarquía a intervenir, y desde comienzos del s. XV asistimos al envío de numerosos *pesquisidores o jueces de términos*, encargados de proceder judicialmente al reintegro del espacio apropiado.<sup>293</sup> Han dejado tras de sí un amplio conjunto de sentencias que muestra cómo los ejidos, pastizales, abrevaderos y montes de los alrededores de la Villa eran reiteradamente ocupados por los vecinos más influyentes y cómo esta limitación de los disfrutes comunales afectaba negativamente al "común de vecinos".

Detengámonos en algunos ejemplos. En la información recopilada por el bachiller Luis Rodríguez de Valladolid en 1434 aparece el siguiente testimonio de un testigo sobre el término de El Pardo: "dixo que oyera dezir a Juan Alfonso de Romanillos e a Juan Alfonso su fijo e al dicho Domingo Martínez, seyendo moradores en El Pardo aldea de la dicho Madrit, que seyendo della un monte que esta en termino de la dicha aldea del Pardo, que lo tienen entrado e tomado e apropiado a sy Pero de Vargas e Gutierrez Ferrandez e el dicho Ruy Vasquez, anbos regidores de la dicha Villa, prendando sus omes de los sobre dichos a los vezinos e moradores de la dicha Villa que fallaron cortando leña e pasçiendo con sus ganados en el dicho monte, e non dexando fazer lo a otros vezinos de la dicha Villa, salvo a los que se avenian con ellos de les dar çierto preçio porque pasçiesen en el sus ganados e cortasen ende leña; e que tanpoco consentian caçar en el dicho monte nin pescar en el dicho rio sin la dicha avenençia .... e que dixo que ante paçíficamente usaran los vezinos e moradores de la dicha Madrit e su tierra". La naturaleza de la ocupación es clara: se trata de términos comunales que mantienen su destino como pastizales y monte para provisión de leña, además de la caza y la pesca, si bien el usurpador impuso por la fuerza el cobro de derechos por su práctica.

En otras ocasiones la reserva de los producciones por parte del poderoso que ha ocupado el terreno (y que generalmente cuenta con heredades propios en las inmediaciones) es total, como podemos apreciar en el mismo documento en un testimonio referido a la ribera

---

<sup>292</sup> Las conclusiones de M. A. Carmona en el caso sevillano son extrapolables a las demás localidades: "Todos los sectores de la sociedad sevillana participaron en estos abusos, pero fue sin duda el patriciado urbano el más implicado. Su control de las instancias municipales les hizo apropiarse impunemente de los espacios comunales. Además, segregaron sus propiedades de los usos comunales mediante el cierre de los campos, logrando así aumentar el dominio sobre sus posesiones, y aprovecharse de todos sus productos mediante la venta de rastrojos". CARMONA RUIZ, M. A.- *Usurpaciones de tierras*, p. 190

<sup>293</sup> Para esta figura de los jueces de términos bajomedievales en Madrid, vid. el capítulo 8 sobre la administración del patrimonio municipal de este trabajo.

del río Manzanares: "Otro si dixo que sabe e vio que Diego Ferrandez de Boloña regidor que fuera de la decha Villa en su vida que defendeo las yslas e pastos que estan desde el vado que dizen de los Santos de don Fernando e la presa de la Pangia, e que agora que los defiende Alfonso Garcia su yerno vezino de la dicha Villa, prendando los ganados de los dichos vezinos e moradores de Madrit que en ello fallavan paçiendo o a los que dellos ende fallan cortando leña o segando yerba deziendo que son pastos de su hereditat" .<sup>294</sup> En este caso lo que se desarrolla es un intento de privatización plena de un terreno comunal.

La tercera modalidad de usurpación es la que se aplica a la derrota de mieses, la posibilidad de introducir los ganados en los términos de labranza después de la cosecha. En el caso de grandes heredades los propietarios intentaron "adehesar" estas tierras de cereal, prohibiendo la presencia de ganados ajenos, lo que contradecía un derecho comunal sólidamente asentado y reglamentado para los vecinos de la Villa y tierra de Madrid. Un ejemplo es la sentencia del licenciado Alfonso García de Guadalajara en 1427 sobre los términos de Trofa y Carbonero, en el noroeste de la Tierra madrileña, en el entorno del monte de El Pardo. Después de reconocer su derecho de propiedad a determinados herederos sobre estas tierras, se determinaba "que non pueden dehesar nin facer dehesa las dichas tierras de pan levar e livares<sup>295</sup> de la dicha su hereditat, e que en tanto que las dichas tierras non estovieren sembradas nin enpanadas, que todos los vecinos e moradores de la dicha Madrit e su tierra que pueden e deven ende paçer e segar la yerva con sus ganados sin pena y sin caloña alguna".<sup>296</sup>

La principal reacción del poder real ante la gravedad de los problemas se manifestó en las Cortes de Toledo de 1480, donde se planteó un programa de restauración de la estabilidad política y el poder monárquico por parte de los Reyes católicos. Dentro del cuerpo legislativo salido de dichas cortes se encuentra una ley sobre las usurpaciones de términos públicos. Denominada en la documentación como la "Ley de Toledo" constituye la principal medida

---

<sup>294</sup> Este documento fue publicado por GOMEZ IGLESIAS, A.- "Algunos términos del alfoz madrileño", *Rev. BAM*, nº 56, t. XVII (1948), págs. 181-238, quien asimismo había editado "Las sentencias del licenciado Guadalajara", *ibídem*, nº 55, t. XVI (1947), págs. 333-391

<sup>295</sup> Sic, seguramente por linares

<sup>296</sup> GOMEZ IGLESIAS, A.- "Las sentencias del licenciado Guadalajara", págs. 389-390

legal para intentar la recuperación de los patrimonios concejiles durante los siglos XV y XVI.<sup>297</sup>

El mecanismo para la recuperación de las tierras era la intervención de los funcionarios reales: corregidores, representantes de la justicia real y funcionarios investigadores, que debían aceptar las reclamaciones de las municipalidades. Actuaban como jueces extraordinarios: por un lado conminaban a la parte culpable (denunciada) a que probara legalmente su propiedad en el plazo de 30 días; paralelamente el juez iniciaba una investigación con declaraciones de testigos. Transcurrido el plazo, se dictaba la sentencia, que si era favorable al municipio suponía la orden de la inmediata restitución. Si los culpables se resistían, perdían todos sus derechos a la propiedad y eran despojados de todo cargo público o de una tercera parte de sus bienes si no ostentaban ningún cargo. Si la investigación probaba que el usurpador no tenía ningún derecho legal a la propiedad en cuestión le sería impuesta una multa equivalente al doble de su valor. Para evitar una excesiva prolongación del litigio, se designaba al Consejo de Hacienda Real como única corte de apelación (Novísima Recopilación, libro VII, título XXI, leyes II, V).

El carácter expeditivo del procedimiento legal se debe a la importante resistencia que se había planteado a los intentos previos de recuperación legal de los términos usurpados. En efecto, eran los regidores y señores comarcanos los principales responsables de la rapiña, y su control de los mecanismos de poder legal así como su capacidad para dilatar en el tiempo los procedimientos legales tradicionales impedían en la práctica la restitución de lo ocupado.

Pronto el plazo concedido por la Ley de Toledo se demostró inaplicable, por lo que se llevaron a cabo diversas reformas en el s. XVI.<sup>298</sup> Por otra parte, los pleitos pendientes suponían un problema: se ordenaba suspender la actuación y remitirla al tribunal donde estuviera en trámite, lo que fue utilizado por los usurpadores para alargar los procesos. Una nueva ley de 1542 intentó evitarlo ordenando la restitución de la propiedad, pese a las apelaciones que pudieran hacerse.

Para llevar a cabo el proceso judicial planteado en la Ley de Toledo los concejos podían solicitar el envío de un magistrado especial, los “*jueces de términos*” o pesquisidores. Presentes desde comienzos del s. XV, fue a finales de este siglo y comienzos del siguiente cuando su

---

<sup>297</sup> Una detallada descripción de esta ley en CARMONA RUIZ, M. A.- *Usurpaciones de tierras*, págs. 91-96

<sup>298</sup> Resumidas por VASSBERG, D. E.- *Tierra y sociedad en Castilla. Señores, poderosos y campesinos en la España del siglo XVI*, Barcelona, 1986, págs. 109-111

actuación se generalizó en los principales concejos. Ayudados por su propio escribano, su salario procedería de las multas impuestas o de las arcas concejiles en caso de que resultaran insuficientes.

El mecanismo legal y judicial establecido en Toledo ha sido objeto de interpretaciones divergentes. Así, para Haliczzer estas medidas legales fracasarían en última instancia y las expectativas de recuperación de términos se vieron finalmente defraudadas.<sup>299</sup> En cambio, para Vassberg constituyó durante el s. XVI “un instrumento legal fundamental de protección real de las propiedades comunales”, si bien reconoce que “a pesar de todos sus esfuerzos los jueces de términos enviados por la corona no podían impedir permanentemente la usurpación de la propiedad comunal”.<sup>300</sup> Por su parte, M. A. Carmona reconoce que si bien la mayor parte de las sentencias que dictaron los jueces de términos resultaron favorables al concejo sevillano, en la práctica su ejecución vio dificultada por el hecho de que los usurpadores detentaban cargos de responsabilidad y poder dentro del concejo.<sup>301</sup>

En el caso de Madrid la actuación de estos jueces de términos encontró en ocasiones la resistencia clara de los miembros del regimiento, sin duda los principales protagonistas de las usurpaciones que se trataba de evitar. Un ejemplo significativa en el bachiller Yanguas, enviado a la Villa en 1495 para que “conozca todas las causas e pleitos que sobre estos términos están pendientes”.<sup>302</sup> Pronto se encontró con el escaso entusiasmo de los regidores para enviarle encargos concretos, por lo que el juez se vio obligado a recordar “que ya el por tres vezes e mas tenia ya requerido e protestado a los dichos regidores e contra ellos que pusiesen antel las demandas que entendían que les cumplen y pidiesen la execucion de las sentencias que no estavan executadas por su procurador e procuradores, porque aunque alguna cosa se hazia en este negoçio de los terminos a el cometidos, poniendo la diligencia quellos como regidores devien de poner e eran obligados se podria hazer muchos mas y despacharse e executarse mas negocios”.<sup>303</sup>

---

<sup>299</sup> Apunta tres razones para este fracaso. Las propias deficiencias de la ley, la intervención real a favor de la nobleza y la decisión de las aldeas señoriales de no respetar las sentencias que les fuesen desfavorables. HALICZGER, S.- *Los Comuneros de Castilla*, págs. 110 y sigs.

<sup>300</sup> VASSBERG, D. E.- *Tierra y sociedad en Castilla*, págs. 109-111

<sup>301</sup> CARMONA RUIZ, M. A.- *Usurpaciones de tierras*, págs. 105-111

<sup>302</sup> *LAC-III*, p. 142

<sup>303</sup> *LAC-III*, p. 148

La reiteración de sentencias de los pesquisidores enviados a Madrid sobre los mismos términos desvela lo problemático que resultaba su cumplimiento. Un análisis detallado de la amplísima documentación generada permitirá deducciones más precisas sobre su efectividad última. Sin duda parte de lo usurpado (especialmente de las más antiguas) se perdió definitivamente para el régimen comunal, pero también la actuación de los jueces de términos serviría de freno a las apropiaciones, además de permitir la restitución de numerosos términos públicos.

#### 4.2 – LA CONVERSIÓN DE COMUNALES EN PROPIOS. EL PAPEL DE LOS BALDIOS.

El rasgo más sobresaliente que presentan las tierras concejiles durante la Baja Edad Media es el inicio de la limitación de los aprovechamientos colectivos y la subsiguiente patrimonialización por parte de los municipios, esto es, la conversión de tierras comunales en tierras de propios. Se trata de un proceso complejo y gradual, todavía lejos de concluir, y que afecta tanto a terrenos labrantíos como a aquellos destinados a pastos y montes, bien que con un ritmo desigual.

El resultado de dicho proceso es que en el período que marca el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna (c. 1450 - 1520) nos encontramos un patrimonio rústico definido ya en sus componentes principales, los bienes de propios y los comunales. Pero considero importante no dar una visión “finalista” de este proceso, como un objetivo preciso y bien delimitado que se iría consiguiendo de manera sistemática. Por el contrario, constituye un mecanismo de adaptación del patrimonio municipal a los intereses y necesidades de las instituciones y grupos sociales que lo gestionan. En este sentido cabe destacar dos presiones que confluyen en este resultado de conversión de comunales en propios: los deseos de incrementar los ingresos por parte del concejo de la Villa y la necesidad de tierra de cultivo por parte de las comunidades campesinas de la tierra madrileña a fines del s. XV.

Para atender las crecientes necesidades provocadas por el desarrollo urbano, el concejo madrileño procede en primer término a intensificar la explotación rentística de su patrimonio, considerado la fuente primordial de los recursos ordinarios. Asistimos por ello a un continuo incremento en el número de propios, que además van aumentando sus valores de arrendamiento.

El resultado final es la estructuración de un patrimonio destinado a proveer ingresos a la hacienda local, cuyos componentes básicos (propiedades rústicas, urbanas, rentas y censos), aunque sometidos a una evolución constante, persistirán en siglos posteriores.

Por su parte, las comunidades campesinas también se ven impulsadas a la transformación de la propiedad municipal. El aumento demográfico y la dinámica roturadora empuja ya en el cuatrocientos a los concejos aldeanos a la ampliación del terrazgo. La superficie de éste es, en efecto, básicamente función del tamaño de la población campesina y de la demanda, dado que los cambios tecnológicos no están presentes. Corresponde al concejo de Villa y Tierra, el marco institucional establecido desde la Edad Media, señalar las nuevas tierras para labranza, lo que se hace a costa de los términos de común aprovechamiento que no han sido adjudicados con anterioridad. Se trata, en suma, de los *baldíos*, si bien en estos momentos no se utiliza este término, sino que se hace referencia a lo “público y común”. Esta es la funcionalidad básica del baldío a fines del s. XV: proveer tierras de cultivo a las comunidades campesinas de la Tierra de Madrid. De esta forma se ampliaría la oferta de alimentos para una población en expansión, se garantizaba un mejor abastecimiento a la villa y, también, se consolidaría el poblamiento de la Tierra frente a la posible competencia de los señoríos circundantes.

Tal cesión no es gratuita, sino que se impone el pago de un canon en especie a sus cultivadores, dando origen a la "*renta de los nihares*", que se integra dentro de los bienes de propios de Madrid, constituyendo el origen de buena parte de las tierras de labranza que son arrendadas por el ayuntamiento madrileño. Las características y evolución de esta renta serán estudiadas en el capítulo 4.

Es en la zona oeste de la Comunidad donde se produjo la mayor demanda de nuevas labranzas, sin duda por ser de poblamiento más tardío dada su cercanía al disputado Real de Manzanares: concejos como Aravaca, Pozuelo y, sobre todo, Las Rozas y Majadahonda vieron así ampliados sus ruidos, aunque también se concedieron *nihares* al resto de la Tierra madrileña. Cuando en la Edad Moderna estos términos se vayan arrendando libremente por el municipio –primero a los concejos aldeanos y más tarde a los campesinos– se habrá concluido la conversión del antiguo espacio comunal en propio.

Otro proceso que incide en esta transformación del patrimonio concejil es la campaña de usurpaciones y recuperaciones legales de los términos públicos. A partir de 1480 la

actuación de los jueces de términos fue más efectiva que en épocas anteriores, aunque algunas usurpaciones, sin duda las de los regidores y otros conspicuos, se perdieron definitivamente. Coincidiendo con el desarrollo de los mayores rescates se producirá un cambio en la actitud del concejo, que decide aprovechar el terrazgo recuperado para forzar su conversión en propios: se impone ahora el arrendamiento de dichos términos, que han sido roturados y que van a mantener su destino cerealícola. Así lo aprobó la sesión del ayuntamiento de 14 de julio de 1489, que solicitó permiso real “para que de los terminos e tierras y casas adjudicadas a esta villa por los jueces de terminos, que hasta aquí han sido, lo mas sin daño de la villa e tierra se pueda por la dicha Villa arrendar o dar a çenso para el bien o pro comun de la dicha villa, e porque aya mas propios y se de dueño a lo que asi esta apropiado, porque no se torne a ocupar, y porque, aviendo propios, se viten y çesen los repartimientos que de cada dia sechan sobre la pecheria”.<sup>304</sup>

Estos procesos no suscitaron un rechazo de los campesinos, que antes bien resultaron beneficiados por la mayor disponibilidad de tierras de labor que se ofertaba y que se gestionaban en el seno de los concejos aldeanos. Tampoco los usos ganaderos se verían muy afectados por el derecho de la derrota de mieses que posibilitaría compatibilizar ambos aprovechamientos. Pero precisamente fue la resistencia del común de vecinos, lo que hizo que el proceso de patrimonialización de *los pastizales* fuera más lento. La importancia de los aprovechamientos de pastos en los terrenos acotados y reservados para tal fin (ejidos y dehesas) y de los recursos forestales para las economías campesinas explica su firme oposición encarnada en los sexmeros, representantes de los distritos de la Tierra, que desarrolla una incesante actividad contra la limitación de los disfrutes vecinales, tal y como queda recogido en los *Libros de Acuerdos del Concejo*. Es por ello que la explotación de este patrimonio se limitó en esta fase a la imposición de sanciones monetarias por los aprovechamientos abusivos que contravenían las ordenanzas concejiles. Destaca en este sentido la "renta de los ejidos y carrascales", el arrendamiento de la recaudación de las penas impuestas en los ejidos de la Villa y de los montes.

En conclusión, en las primeras décadas del s. XVI nos encontramos ante un patrimonio municipal sometido a presiones que van transformando su composición y en parte su naturaleza. Por un lado la Tierra como espacio señorial urbano se reserva para la explotación comunitaria de los habitantes de la Villa y de la Tierra, con las lógicas desigualdades en el acceso a recursos derivadas de su posición económica. Pero ese patrimonio comunal es sometido a crecientes presiones, especialmente por parte de la

---

<sup>304</sup> LAC-II, p. 152



oligarquía concejil, en mucho menor grado por las comunidades campesinas. El resultado, el inicio de una profunda transformación de su naturaleza, en la que el patrimonio municipal se va consolidado como fuente de recursos para la hacienda local. En buena medida ello se ha logrado mediante la conversión de bienes comunales en propios, proceso que presenta variados caminos y ritmos de evolución. Los grandes protagonistas y beneficiados son aquellos que controlan la vida concejil: el grupo de los regidores y la clase social de la que mayoritariamente proceden, la pequeña nobleza urbana (los "caballeros y escuderos" de la Villa). Su interés se centra en la posesión de la tierra y se lanzarán a la tenaz ocupación de los términos públicos en las cercanías de la ciudad. La intervención de la monarquía irá limitando estos abusos. Por su parte, los campesinos, articulados en torno a los concejos de aldea, se resistieron a la variación de disfrutes en montes y pasturas, mientras ampliaban sus cultivos a costa de los baldíos en sus poblaciones.

MODERNA: DEL ESPLENDOR A LA DECADENCIA

Después de analizar la configuración del régimen comunal de la Villa y Tierra de Madrid durante el período medieval, el estudio del patrimonio municipal madrileño en la Edad Moderna va a mostrarnos una evolución continua. En este proceso de transformación se va a producir un auténtico cambio en la naturaleza del patrimonio concejil, que progresivamente irá dejando de ser un patrimonio comunal para pasar a incluirse dentro de los bienes de propios del municipio madrileño. Y, en el caso de Madrid, en una situación nueva, como es la creada por el establecimiento de la Corte en 1561. La capitalidad supuso una modificación en la escala del número de habitantes y de sus problemas. El espectacular desarrollo de la población va acompañado del incremento de las actividades y cuestiones que debe afrontar el municipio. Pero además va a tener un impacto directo sobre el patrimonio municipal madrileño. El deseo de los monarcas de adquirir extensas propiedades en el entorno urbano va a colisionar en ocasiones con el municipio, siendo sin duda el caso del monte de El Pardo el más destacado por su impacto paisajístico, pero también por las profundas consecuencias que va a acarrear para la estructura del patrimonio municipal.

Numerosos estudios han mostrado como la evolución que los patrimonios concejiles presentan entre los siglos XVI y XVIII es el resultado de la actuación de dos agentes distintos: uno externo a la ciudad, el Estado y otro interno, la oligarquía urbana.<sup>305</sup> Ambos confluyen, por diversas vías, en un único resultado: el desmembramiento del patrimonio comunal y su transformación en propios o su enajenación, proceso que hemos visto ya iniciado pero que esta fase adquirirá una mayor trascendencia.

La actuación del Estado tiene su origen en las exigencias de una Hacienda en continuo déficit por la política exterior de hegemonía de la dinastía austriaca. La estrategia de la

---

<sup>305</sup> RUIZ MARTÍN, F.- “Procedimientos crediticios para la recaudación de los tributos fiscales en las ciudades castellanas durante los siglos XVI y XVII”, en OTAZU, A.- *Dinero y crédito*, Madrid, 1978, págs. 37-48; BERNAL, A. M.- “Haciendas locales y tierras de propios”; GARCIA SANZ, A.- “Bienes y derechos comunales y el proceso de su privatización”.

presión fiscal, importante sobre todo a partir del s. XVII, incidirá directa o indirectamente sobre los bienes del municipio, traduciéndose fundamentalmente en la enajenación y venta de baldíos por parte de la Hacienda real.

La intervención de la oligarquía urbana tuvo, como hemos visto, una clara -y negativa- influencia en el período bajomedieval. Con la nueva dinastía, aunque se advierten ya claros precedentes en el reinado de los Reyes Católicos, esta intervención no desaparece totalmente, pero se vuelve más indirecta, menos “ostentosa” y por ello más difícilmente detectable. Por un lado, la progresiva intervención del Estado pone cortapisas a sus manejos; considérese además la estrecha vinculación que la inmediatez de la Corte supone. Por otro lado, los cambios en la composición de los poderosos debido a la continuada práctica de las ventas de oficios de regidor, gracias a las cuales nuevos nobles, comerciantes enriquecidos... se incorporan al regimiento de la Villa. Se trata de una nueva oligarquía que se adapta a la situación creada por la capitalidad. Sin que desaparezca su antigua conexión con la tierra, ahora también se encuentra estrechamente vinculada a las oportunidades de negocio y enriquecimiento que el desarrollo urbano permite: el endeudamiento municipal y la política de abastecimiento.

Estado y oligarquía, pues, determinan la evolución del patrimonio municipal de Madrid y consiguientemente su papel dentro de la hacienda local. Se trata de un proceso general, como han señalado Ruiz Martín, García Sanz o Bernal, pero que en cada caso tiene un ritmo y unos resultados diferentes. Veamos su desarrollo en el caso madrileño.

El s. XVI presenta inicialmente una clara continuidad con el período anterior. La política de la oligarquía orientada a la limitación de los aprovechamientos comunales y la dinámica roturadora característica de la expansión agraria marcan las principales transformaciones experimentadas en el terrazgo concejil. A partir del establecimiento de la Corte el ritmo se acelera: la subida en los valores de las rentas de propios vinculadas al tráfico comercial es automática y la articulación del patrimonio real en las cercanías afecta a la propia composición de los bienes municipales. Será en el siglo siguiente cuando tengan lugar los cambios más significativos. El Estado es la primera fuerza dinamizadora del proceso. La necesidad de aumentar las recaudaciones de la Hacienda repercute sobre los baldíos. A esta situación se amolda el regimiento madrileño, dando como resultado una profunda mutación en la composición del patrimonio comunal en Madrid.

### MAPA 3 LA TIERRA DE MADRID EN LA EDAD MODERNA



## 1 – EXPANSION AGRARIA, ROTURACIONES Y PASTIZALES EN EL S. XVI

Las tierras de labor concejiles fueron un factor decisivo de la expansión agraria que se produjo de manera generalizada en la Castilla del s. XVI, si bien hundía claramente sus raíces en el siglo precedente, cuando la población vaya recuperándose de la crisis bajomedieval e inicie una dinámica expansiva a largo plazo. Los datos sobre población en la Tierra de Madrid ilustran con rotundidad esta imagen de crecimiento: entre 1530 y 1591 los habitantes de las aldeas que componían la Tierra de Madrid se habían duplicado, acercándose a la cifra de 39.000 pobladores, mientras los núcleos señorializados daban muestra de una menor vitalidad demográfica, con un aumento cifrado en el 73'92%.<sup>306</sup> A lo que hay que añadir la demanda capitalina, disparada desde 1561. Un aumento de población que fue posible gracias en primer término al incremento productivo agrario fruto de una solución típicamente extensiva. Las nuevas roturaciones para atender el aumento de la demanda provocada se realizaron en gran medida recurriendo a términos públicos, los comunales y baldíos.<sup>307</sup> Proceso que hemos visto a fines del cuatrocientos, pero que ahora adquiere una dimensión nueva, afectando de manera decisiva a la organización del terrazgo.<sup>308</sup>

El protagonismo corresponde a los campesinos, más concretamente al sector del campesinado acomodado, los “labradores”, que van consolidándose a fines del período medieval y que a lo largo de la Edad Moderna se convierten en grandes beneficiarios del crecimiento agrario. Su peso dentro del mundo rural viene reforzado por su importancia dentro de los concejos aldeanos, así como por su labor de intermediación con los propietarios rentistas que viven en la ciudad. El acceso a más tierras de cultivo y la ampliación de sus bases ganaderas refuerzan su peso económico.<sup>309</sup> Para garantizarse la explotación de las tierras

---

<sup>306</sup> Todas estas cifras proceden de LOPEZ GARCIA, J. M., dir- *El impacto de la Corte en Castilla*, págs. 113-115

<sup>307</sup> B. Yun plantea la importancia de las tierras baldías y comunales como sustento de la expansión agraria del XVI en Tierra de Campos. YUN CASALILLA, B.- *Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos, 1500-1830*, Salamanca, 1987, págs. 109-123

<sup>308</sup> VASSBERG, D. E.- *Tierra y sociedad en Castilla. Señores, poderosos y campesinos en la España del siglo XVI*, Barcelona, 1986.

<sup>309</sup> Una visión de este proceso en el caso de Madrid, LOPEZ GARCIA, J. M., dir- *El impacto de la Corte en Castilla*, págs. 116-118

municipales utilizan los concejos aldeanos, que se convierten en los mecanismos institucionales que organizan la asignación de las nuevas roturas dentro de la comunidad campesina. Y lo hará garantizando la primacía del sector acomodado de la sociedad rural, que refuerza su hegemonía, pero creando paralelamente medios que garanticen la supervivencia y continuidad del sector más desfavorecido, los pequeños campesinos que debían recurrir a una pluriactividad con ingresos salariales, ya que posibilita para este sector social cierta oferta de tierras. De este modo la comunidad campesina se convierte en un medio de estabilidad interna, minimizando los conflictos que en torno al reparto de tierras se pudieran plantear, y a la vez se refuerza el papel y prestigio de las comunidades al asumir el importante papel de gestionar la explotación de esta oferta de tierras.

Por su parte, para el concejo urbano y la oligarquía que lo controla, el proceso de expansión agraria mediante la roturación de tierras comunales presenta ante todo ventajas hacendísticas, ya que es una fuente de engrosar las arcas municipales. Hasta tal punto es importante este objetivo que el municipio irá centrando sus esfuerzos en la progresiva incorporación a los propios de estas superficies antaño comunales o baldíos.

El proceso de roturaciones se remonta al s. XIV. Los mecanismos para ofertar tierras comunales fueron dos. El principal consistió en la cesión por parte del concejo de la Villa de determinados términos a los concejos de algunas aldeas de la Tierra para desarrollar el cultivo, a cambio del pago del derecho de “*nihar*”, que se convertía en un ingreso de los propios de Madrid. Las zonas así cedidas eran estrictamente baldíos: terrenos sin atribución dominical expresa que se utilizaban para pastos o estaban ocupadas por el monte. Su aprovechamiento era por tanto comunal para los vecinos de la villa y tierra de Madrid, no estaba reservado para los habitantes de la aldea más próxima: se trataba de “comunes de Villa y Tierra” cuya capacidad de disposición por el concejo se remontaba a los privilegios de términos desde la Repoblación; la intervención de la Corona para reclamar su titularidad todavía estaba lejana.

El segundo medio por el que se puso en cultivo términos comunales fue la recuperación de términos concejiles usurpados. Especialmente desde la Ley de Toledo de 1480 la actuación de los jueces de términos en la Tierra de Madrid permitió que una parte (difícil de precisar, pero en todo caso considerable) del terrazgo comunal que había sido ocupado volviera al control del concejo. No todos los bienes restituidos, sin embargo, volverán a ser comunales, ya que el ayuntamiento madrileño aprovechó la ocasión para dar

continuidad a las explotaciones de cereal a cambio del pago de un canon para los bienes de propios. Es el caso sobre todo de las tierras que habían sido ocupadas por los concejos de las aldeas con el fin de extender sus labranzas a costa de tierras que eran claramente baldíos; las roturaciones de montes por esta vía parecen menos abundantes dado que este recurso se encontraba más vigilado. Sin duda, las usurpaciones de los “poderosos”, la oligarquía municipal y caballeros urbanos, disponían de más medios de defensa para garantizar la continuidad de la usurpación.

Nos encontramos, por tanto, ante un medio más de expansión de cultivos a costa de términos comunales, de nuevo con la anuencia del concejo de la Villa, la institución básica en la regulación del régimen comunal en la Tierra madrileña. Es otra vía de esa larga y compleja reconversión del patrimonio municipal hacia la explotación rentística. Para ello el ayuntamiento madrileño cobraba a las aldeas que se hacían con la explotación de éstos términos el tradicional derecho de “*nihar*”, con lo que se asimilaban a aquellas situaciones en las que la cesión de terrazgo para labranza había obtenido licencia previa de la Villa. El ejemplo de la sesión municipal de 23 de septiembre de 1485 ilustra a la perfección este proceso. El pesquisidor licenciado del Aguila había “adjudicado e apropiado para la dicha villa” numerosas tierras que “avian rronpido e entrado” los concejos de Fuencarral (en Valdelamasa y Navalcarnero) y los de Las Rozas y Majadahonda. Sin embargo, “porque los dichos lugares no podrían beuir sin los dichos términos nin se podrían sostener nin ternían en que labrar segund la información çerca desto auida, que ordenauan e ordenaron... que todas e qualesquier personas de los dichos lugares que entraren a labrar en los barbechos que oy ay fechos en los dichos términos que así se apropiaron los dichos lugares a la dicha Villa, quel derechos que se acostumbra pagar de los nihares antiguos, y questa forma se tenga con los vecinos de los dichos lugares que labraren de aquí adelante en los dichos términos en tanto que fuere voluntad de la dicha Villa, tanto que les mandan e defienden que no rompan más de lo que fasta oy está rronpido so las penas contenidas en las sentencias quel dicho juez sobrello tiene dadas, e questos dichos términos hazían e hizieron nihares nuevos para que se arriende por su parte para propios de la dicha villa para siempre jamás por propio nueuo de la dicha Villa”.<sup>310</sup> Esta larga cita nos revela todas las claves del proceso: la usurpación y reintegro de comunales por el juez de términos; la necesidad de labranzas por parte de los campesinos; el papel directivo de los concejos aldeanos en la dinámica roturadora, para los que la usurpación

---

<sup>310</sup> LAC-I, págs. 409-410

es un medio más de poder acceder a la explotación de la tierra; la reivindicación del ayuntamiento madrileño a su control sobre los términos públicos, y, por último, la creación de un propio, los “*nihares nuevos*” que proceden claramente de la transformación de tierras baldías.

Los términos de nihares (que comprendían por tanto tierras cedidas por el municipio madrileño) podían ser labrados por cualquier vecino de las aldeas madrileñas, sin pedir permiso previo ni suscribir ningún tipo de contrato ante el ayuntamiento capitalino. Se comprende la necesidad de intermediación y regulación por parte de los concejos aldeanos dado el potencial de conflictos y enfrentamiento que esta situación de relativo “acceso libre” - aunque oneroso- a un recurso tan fundamental como la tierra podía generar.<sup>311</sup> Para el ayuntamiento madrileño era un medio de reafirmar su dominio sobre estas tierras, ya que no había ninguna obligación contractual o legal en su cesión; todo dependía de la voluntad municipal, que podía en consecuencia revocar libremente la cesión.

El cobro de los derechos era arrendado por el ayuntamiento de Madrid a particulares, constituyendo la renta de nihares, que pertenecía a los bienes de propios. Su gestión y evolución serán estudiadas en consecuencia en el próximo capítulo sobre la hacienda municipal en este período. Pero me interesa resaltar ahora cómo desde el primer tercio del s. XVI el ayuntamiento madrileño empezó a recurrir a los concejos aldeanos para gestionar el cobro de los nihares dentro de sus términos, como alternativa al arrendamiento a un particular. En el remate de la renta en 1538 se aclaraba que “reciben esta postura si se ha de arrendar esta renta y hase de pregonar si no hubiere conçierto con los lugares”. Poco después el postor se dirigió al ayuntamiento aclarando que se había recibido su solicitud “con que si los pueblos quisiesen las tierras que entran en esta renta la postura no hubiese lugar; e vras. mercedes lo han hecho saber a los dichos pueblos e no han respondido si lo quieren”.<sup>312</sup> Una situación que refleja la progresiva asunción en el s. XVI por parte de los concejos aldeanos de la gestión de las tierras que se rompieron en el proceso expansivo y que se convierten en las tierras de los

---

<sup>311</sup> Como ejemplifica el caso de Pozuelo. Así explicaba su concejo la situación de las tierras de nihares dentro de su término en 1484: “algunas veçes acaece que por fazer mal un vecino a otro procura de le yr y entra y toma su labranza, donde él suele labrar”. Por ello reunido el concejo de la aldea decidió “que ningund vecino deste lugar non pueda entrar nin tomar ninguna tierra que otro labrare, sin que primero le requiera, delante dos o tres testigos, que si quiere labrar sus restrojos o alçallos para baruechar e, si el tal vecino dixere que los quiere, que ninguno non sea osado a entrar en las tales tierras nin restrojos”. *LAC-I*, p. 294. El ayuntamiento madrileño decidió estudiar la propuesta

<sup>312</sup> AVM-S, 3-226-4



propios madrileños. Situación una vez más que va a reforzar el papel institucional de los concejos en la Tierra de Madrid.

Resulta difícil determinar la situación exacta de las tierras de nihares por tratarse de una renta, no gestionada directamente por el ayuntamiento. En la documentación se distinguen los “nihares viejos”, que aparecen durante el s. XV; se situarían en localidades del sur de la Tierra y en menor medida en el oeste: se encuentran menciones a Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe,<sup>313</sup> Carabanchel de Abajo,<sup>314</sup> Pozuelo, Leganés y Alcorcón.<sup>315</sup> A finales del Cuatrocientos aparecieron los “nihares nuevos” en las localidades del oeste y norte de la Tierra madrileña: especialmente Las Rozas y Majadahonda, pero también en Pozuelo, Boadilla, Fuencarral y Chamartín.<sup>316</sup>

En otras ocasiones se recurrió al arrendamiento directo de un terreno baldío a un concejo aldeano para ser roturado. Es lo que sucedió en 1528 con Aravaca: en este caso no se alegaba la falta de tierras por el incremento demográfico, sino necesidades fiscales para pagar el servicio aprobado en Cortes. La negativa del ayuntamiento de la Villa motivó el recurso ante el Consejo Real, que ordenó hacer una inspección. Como resultado se decidió el arrendamiento del término de Valcastellano, con una extensión de 4 yuntas y 14 fgs por un precio total de 40 ducados durante los seis años que duraba el contrato.<sup>317</sup> El diferente origen y proceso de esta cesión de términos baldíos a un concejo aldeano explicaría que fuese considerado por el ayuntamiento madrileño distinto a los demás, y en consecuencia se llevara a cabo mediante un arrendamiento y no con la fórmula habitual del nihar.

Las roturaciones no afectaron tan sólo a las localidades de la Tierra, sino también a las cercanías de la Villa. En 1530 los labradores de Madrid, por medio del procurador de pecheros y el sexmero de la Villa, reclamaron ante el Consejo la concesión de tierras para labranza alegando su escasez y la abundancia de montes y baldíos “mas que en otro pueblo alguno”. En la información realizada los labradores solicitaron roturar el término de Amanuel

---

<sup>313</sup> AVM-S, 2-158-162

<sup>314</sup> LAC-I, p. 71

<sup>315</sup> AVM-S, Libro mss. 341, fols. 150v.-151 r.

<sup>316</sup> AVM-S, 3-226-5

<sup>317</sup> AVM-S, 3-171-24. El término de Valcastellano se describe como “un pedazo de tierra baldío en que no hay monte y está entremedias de las labranzas de Trofa y Alejandre e en ello no hay monte ninguno ni ninguna persona se aprovecha de ello”.

hasta enlazar con las tierras que el municipio madrileño acabada de dar a los vecinos de Fuencarral. El ayuntamiento se opuso, alegando el perjuicio para los pastos que supondría al estar junto a la dehesa carnicera de Madrid y la deforestación que provocaría: la actitud favorable a las roturaciones en las aldeas cambiaba totalmente en el entorno de la Villa. El Consejo aprobó finalmente la cesión en arrendamiento de 30 yuntas de tierras, “repartiéndose por los labradores de la Villa, que suelen e acostumbran labrar por pan e no por otra persona alguna”, con la condición de respetar la derrota de mieses: “con que cogido e alzado el fruto de ellas, queden e sean pasto común, según e como agora es”.<sup>318</sup>

El ritmo de las roturaciones avanzaba con el siglo. El crecimiento agrario del XVI, en efecto, fue extensivo. La ampliación del cultivo a términos cada vez más marginales daba como resultado una caída de los rendimientos por unidad de superficie. Así lo refleja la evolución de los diezmos en el Arciprestazgo madrileño: alcanzan su máximo entre 1570 y 1576, con un fuerte descenso a partir de 1585-90.<sup>319</sup> Además, la expansión de las labranzas podía afectar al equilibrio entre agricultura y ganadería al disminuir las pasturas. Esta es la situación que refleja la documentación en Madrid en el cambio de siglo. En términos como Alcorcón, Fuenlabrada o Getafe las tierras de nihares, ya agotadas, no se arrendaban.<sup>320</sup> Por otra parte, los rompimientos habían afectado a los montes, como en el caso de la llamada “dehesa de Valenoso”, “que había sido monte alto de encinas y habiendo quedado sin cosa alguna” era arrendada por los concejos de Boadilla y Alcorcón.<sup>321</sup> Los ganaderos se veían asimismo privados de los terrenos de pasto, según denunciaba el sexmero de Vallecas, que en 1589 afirmaba que muchos vecinos “desmontaban y rompían las dehesas, sotos, prados y ejidos públicos y comunes de la dicha Villa y su Tierra, cuyo pasto era para los ganados mayores y menores de ella y su Tierra”.<sup>322</sup>

Por todo ello, la pugna entre ganaderos y labradores adquiere gran intensidad a fines del s. XVI. Los primeros actuaron a través de la figura de los sexmeros, claros defensores de

---

<sup>318</sup> AVM-S, 3-127-6

<sup>319</sup> Los datos proceden de LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. y MARTÍN GALAN, M.- “La producción cerealística del Arzobispado de Toledo, 1463-1699”, *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, v. II (1981), págs. 42-43

<sup>320</sup> AVM-S, 2-158-162

<sup>321</sup> AVM-S, 3-6-7

<sup>322</sup> AVM-S, 2-158-195

sus tesis. Las reiteradas reclamaciones que presentaron ante la justicia obtuvieron el amparo legal. Una Real Provisión de 6 de diciembre de 1589 recogía la queja antes citada y ordenaba se restituyesen a pasto común los términos ocupados en los últimos diez años.<sup>323</sup> Pero un proceso de tal intensidad difícilmente podía ser parado por una simple ley: las roturaciones continuaron. Estas se hacen muchas veces escapando al control de las autoridades municipales. Más tarde los labradores intentan regularizar su situación, como cuando reclaman en 1606 a Madrid términos que les permitan salvar la trampa de los rendimientos decrecientes, solicitando “permisión para que en los baldíos, ejidos y cañadas de esta villa y su jurisdicción que han sido rompidos, que por ser tierras holgadas y nuevas con menos beneficio que las viejas darán el fruto con más fertilidad y pujanza” pudieran sembrar uno o más años, lo que fue denegado inicialmente por el ayuntamiento <sup>324</sup>.

## 2 – LA VENTA DE BALDIOS EN EL S. XVII

Así las cosas, en el s. XVII el motor decisivo de las transformaciones en el patrimonio municipal es el Estado debido a razones fiscales, y el mecanismo es el arrendamiento de baldíos en primera instancia y a continuación su venta. En este contexto, la oligarquía profundizará el proceso de patrimonialización del terrazgo concejil.

Los baldíos toman auténtica carta de naturaleza en la Villa y Tierra de Madrid en 1608. Lógicamente, han estado presentes antes; de hecho muchas de las tierras de aprovechamiento comunal que se fueron convirtiendo en propios en el XVI pueden ser equiparados a baldíos al ser previamente términos sin atribución dominical expresa. Pero en tanto en cuanto no ha aparecido la Corona para intentar hacer valer sus supuestos derechos de propiedad, han funcionado como otros bienes comunales más y la Villa ha hecho un uso y regulación frecuente, disponiendo libremente de ellos.

---

<sup>323</sup> Ibídem

<sup>324</sup> AVM-S, 2-159-12

Como es conocido, fue Felipe II quien, impulsado por sus apuros hacendísticos, recurrió a la reivindicación de los baldíos como una regalía de la Corona, lo que le permitió proceder a su venta mediante la perpetuación de los ocupantes que antes habían roturado estas tierras.<sup>325</sup> No fue éste el único embate contra los baldíos, pues numerosos concejos procedieron a arrendar -previa licencia real y con el fin de obtener recursos extraordinarios- su cultivo, siendo denominados por ello “baldíos arbitrados”, mientras que las ventas continuaron en el XVII, bien que con un ámbito más local. Si Madrid se había librado del primero de los procesos, no escapó a ninguno de los otros dos.

En 1608 un regimiento que estaba recuperándose del susto experimentado por el efímero traslado de la Corte a Valladolid aprobaba un servicio de 250.000 ducados para las obras en el Real Alcazar destinadas a labrar un nuevo cuarto para la reina Margarita de Austria. El servicio había sido un generoso ofrecimiento de los oligarcas madrileños para que el rey retornase a la ciudad. Entre los arbitrios para recaudar el dinero, el municipio propuso romper y arrendar hasta 12.000 fgs de tierras baldías durante un plazo de seis años. La Real Cédula de 21 de octubre de ese año concedía la autorización.<sup>326</sup>

Se pretendía de esta forma responder a la demanda de nuevos términos de cultivo ante la caída de los rendimientos y la subida de la renta: “muchos [labradores] dejan de arrendar tierras y labrarlas por estar las labrantías muy cansadas y los arrendamientos muy subidos y ser las tierras de esta villa y su comarca muy corta de labor por haber tantos baldíos”. Para minimizar su efecto sobre los pastizales se regulaba el que se ajustasen al sistema de año y vez, manteniéndolo la derrota de mieses, pues una de las quejas más frecuentes de los ganaderos era que las nuevas roturaciones se cercaban, impidiéndose toda posibilidad de uso pecuario.<sup>327</sup>

---

<sup>325</sup> La investigación pionera fue la de GOMEZ MENDOZA, J.- “La venta de baldíos y comunales en el siglo XVI. Estudio de su proceso en Guadalajara”, *Estudios Geográficos*, nº 109 (1967), págs. 499-559. Con posterioridad, VASSBERG, D. E.- *La venta de tierras baldías. El comunitarismo agrario en la Corona de Castilla durante el s. XVI*, Madrid, 1983; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.- “La comisión de D. Luis Gudiel para la venta de baldíos en Andalucía”, en *Congreso de Historia rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1984, págs. 511-522; FERNANDEZ CARRION, R.- “Funcionalidad económica de los baldíos. El problema de su venta en la Andalucía del siglo XVII”, *Revista de Historia Económica*, v. 2, nº 3 (1984), págs. 163-182. La venta en la actual provincia de Madrid (que no en la Tierra), en ALVAR EZQUERRA, A.- *Hacienda Real y mundo campesino con Felipe II*, Madrid, 1990. Una reciente síntesis en MARCOS MARTÍN, S.- “Evolución de la propiedad pública municipal en Castilla la Vieja durante la Edad Moderna”, *Studia Historica. Historia Moderna*, v. 16 (1997), págs. 75 y ss.

<sup>326</sup> AVM-S, 3-297-20

<sup>327</sup> AVM-S, 1-160-57

En realidad, parte de los términos señalados para el arrendamiento habían sido ya ocupados, pero su puesta en cultivo era bastante reciente, mientras que otra parte fue labrada tras esta operación, como lo indica la denominación global de “tierras de roturas” que se les dio. Pero los resultados obtenidos no fueron los previstos, ya que según los informes de la Contaduría municipal en el primer plazo sólo se habían arrendado 8.871 fgs, mientras que en los posteriores la superficie contratada fue en decadencia: en el que cumplía en 1633 había descendido a 7.446 fgs.<sup>328</sup> Tal caída no se debía a la falta de demanda de tierras, sino al carácter muy marginal de parte de los términos y, sobre todo, a la falta de control de las autoridades locales. La extensión sin duda desbordaba la capacidad de vigilancia de la burocracia municipal, acostumbrada a quitarse de en medio los problemas mediante el arrendamiento en bloque de las tierras de propios a los concejos aldeanos. Pero esta vez son los campesinos los principales arrendatarios, que en ocasiones tienen que unirse entre varios para acceder a esta oportunidad de ampliar sus explotaciones. Todavía nos movemos dentro del esquema del campesinado parcelario.

Con todo, las nuevas roturaciones que posibilitó la operación del Cuarto de Palacio contribuyeron a un aumento productivo, de nuevo reflejadas en la evolución del diezmo. La vuelta de la Corte a Madrid tras el paréntesis vallisoletano supuso un rápido crecimiento de la población y sus consiguientes efectos sobre la demanda. Gracias en parte al cultivo de baldíos, la producción de cereal aumentó entre 1607 y 1625, manteniéndose, a pesar de determinadas crisis, una tendencia alcista durante la mayor parte del XVII.<sup>329</sup>

La oligarquía madrileña tomó buena cuenta de este procedimiento que permitía desviar una parte de la carga fiscal a un régimen comunal cada vez más atacado. En 1626 la Villa intentaba frenar el acelerado proceso de señorialización de su entorno ofreciendo al monarca un servicio particular para evitar la venta jurisdiccional de Leganés. Entre los medios para aportar dinero a las arcas reales figuraban los baldíos: “por ello servirá a V.M. con lo que pareciere justo, sirviéndose V.M. de darle licencia para romper en sus baldíos en la parte que pareciera más conveniente 4.000 fanegas de tierra y arrendarlas por seis años, o vender en propiedad 1.500 dellas”.<sup>330</sup> En esta propuesta se daba un paso más allá con respecto al

---

<sup>328</sup> AVM-S, 3-6-30 y 3-6-48

<sup>329</sup> LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. y MARTÍN GALAN, M.- “La producción cerealística”, págs. 42-43

<sup>330</sup> Citado en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.- “Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV”, en *Instituciones y sociedad en la España de los Austrias*, Barcelona, 1985, p. 91.

terrazgo público, planteándose la posibilidad de su enajenación. Pero no serían los regidores los que la llevarán a cabo, sino la Real Hacienda.

En la década de 1640, uno de los períodos más negros de la monarquía de los Austrias, comenzó la venta de baldíos en Madrid. Indudablemente, estuvo relacionada con el servicio de enajenación de baldíos por un valor total de 150.000 ducados que aprobaron las Cortes en 1645 tras la derrota sufrida en Balaguer y que tuvo clara incidencia en Andalucía.<sup>331</sup> Sin duda lo desesperado del contexto en que se hicieron las ventas explica lo desorganizado de la documentación.

Las tierras señaladas procedían de las arrendadas para el Cuarto de Palacio. No eran, por tanto, perpetuaciones de baldíos, sino de una venta a mejor postor, sin contemplar ningún posible derecho del anterior ocupante, lo que explica el interés que determinados vecinos poderosos de la capital tendrán por la operación.

Según un informe de Juan Dorado, medidor de tierras de Madrid a fines del S. XVII, las ventas tuvieron lugar entre 1640 y 1652, pero la máxima intensidad se alcanzó a partir de 1644. Fue en esta fecha cuando los labradores de Vallecas compraron de mancomún 2.500 fgs con el fin de destinarlas a viñedo, si bien en el reconocimiento llevado a cabo en 1647 se midió un exceso de 1.099 fgs, que también pagaron. Se trataba del antiguo monte o carrascal de Vallecas, citado ya en el Fuero y que completaba así su destrucción forestal. Entre 1646 y 1649 se vendieron 4.246 fgs, concentradas sobre todo en localidades como Vicálvaro (732 fgs), Vallecas y Getafe (1.460,5 fgs), Las Rozas (977,5 fgs) o Majadahonda (728 fgs).<sup>332</sup>

---

<sup>331</sup> DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.- “La comisión de D. Luis Gudiel”, p. 517.

<sup>332</sup> AVM-S, 3-6-54, 3-6-59, 3-41-46, 2-211-87, 3-6-49. Datos sobre Vicálvaro, en VV AA.- *Historia de Vicálvaro*, Madrid, 1987, págs. 67-72.

## CUADRO 2 –VENTA DE BALDIOS DEL CUARTO DE PALACIO, 1646-49

	<b>SUPERFICIE</b>
<b>VICALVARO</b>	
Francisco Vizcaíno (Vicálvaro)	65'5
Felipe Gómez y Andrés de Aravaca (Vicálvaro)	50
Andrés Perucho, Esteban de Herencia y otros (Vicálvaro)	147
Duarte Fernández de Acosta	367'5
<b>TOTAL</b>	<b>630</b>
<b>VALLECAS Y GETAFE</b>	
D. Gaspar de Vargas, Gonzalo de Salinas y Bernardo Casado (Vallecas)	93'5
Lic. Juan Raposo del Alamo y otros (Getafe)	450'5
Duarte Fenández de Acosta	826'5
Pedro Pingarrón y otros (Getafe)	32
D. Melchor Nieto	58
<b>TOTAL</b>	<b>1460'5</b>
<b>FUENLABRADA</b>	
Concejo de Leganés	16
Gonzalo Fernández Tercero (Leganés)	10
Juan Galeote y Lucas Montero (Fuenlabrada)	29
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>
<b>BARAJAS</b>	
Juan Bautista de Benavente (Madrid)	88

<b>TOTAL</b>	<b>88</b>
<b>FUENCARRAL</b>	
Bartolomé Texedor, Gabriel Gonzalo y Gabriel Texedor (Fuencarral)	74
Los mismos con Juan de Santa Ana y Alosnso Fernández	59
Juan de Santa Ana (Madrid)	62
El rey, para bocas de conejos de El Pardo	30
Idem	50
<b>TOTAL</b>	<b>275</b>
<b>HORTALEZA</b>	
Andrés Sevilla y Pascual Pérez (Hortaleza)	32
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>
<b>LAS ROZAS</b>	
Joan Herranz, escribano (Las Rozas)	148'5
Joan Herranz, escribano (Las Rozas)	162
Joan Herranz, escribano y Tomás Vicente (Las Rozas)	61
Blas Cerro	90
Blas Cerro	45
Juan Labrandero y Juan Ramos (Las Rozas)	40
Bartolomé Barrio (Las Rozas)	60
Eugenio Vaquero y Juan Martín	42
Pedro Bravo	40
Gregorio Benito y Alonso Pascual	40
Juan Muñiz el mozo y Juan Lázaro	36
Juan García	68



Joseph Parro	34
Pedro Tirado, Bernabé López y Juan Ramos	42
Joan Mingo y Andrés Benito	69
<b>TOTAL</b>	<b>977'5</b>
<b>MAJADAHONDA</b>	
Marcos de Rozas	309
Marcos de Rozas	100
Nicolás de Rozas	170
Bartolomé Santiago y Manuel Martín	35
Juan Barrio, Cebrián Tello, Miguel López y Joseph Corral	44
Gregorio de Morales	30
Juan Bravo	20
Ana de Morales	20
<b>TOTAL</b>	<b>728</b>
<b>VENTAS TOTALES</b>	<b>4246</b>

FUENTE: AVM-S, 3-6-54

Entre los beneficiados encontramos a algunos pequeños campesinos que se unen para ampliar sus posesiones, siguiendo el proceso visto durante el arrendamiento, lo que sucede en Vallecas, Getafe o Vicálvaro. Sin embargo no es el sistema mayoritario, pues aparece una fuerte tendencia a la concentración, cuyos protagonistas son, por un lado labradores acomodados y notables del lugar, y por otro, personajes afincados -y relacionados- con la Corte. Entre los primeros se aprecia la actuación del escribano de Las Rozas, que adquirió 310,5 fgs individualmente más otras 61 fgs en unión de Tomás Vicente, lo que supone casi el 40% del total vendido en la localidad. En la vecina Majadahonda los hermanos de Rozas se

hicieron con casi el 80% de los baldíos que se compraron en dicho pueblo, sumando entre ambos 579 fgs. En Las Rozas predomina este tipo de comprador, con ausencia de foráneos entre los que adquirieron tierras; el tamaño medio de las compras fue bastante respetable para tratarse de campesinos, unas 65 fgs, que, por otro lado, se encontraban bastante repartidas si lo comparamos con las demás localidades.

Los grandes protagonistas residían en la Villa y Corte. Son altos cargos de la burocracia, como Juan Bautista Benavente, Bartolomé de Legasa o Francisco Antonio de Alarcón, y destacados hombres de negocios como Duarte Fernández de Acosta. El primero, Juan Bautista Benavente es citado en la documentación como tesorero de la Cámara de Castilla y compró tierras de extensión imprecisa en los términos de Vicálvaro y en la ribera del Jarama. Por su parte Bartolomé de Legasa, miembro del Consejo de Hacienda y secretario de Estado de la negociación de Italia, adquirió unas 400 fgs en Vicálvaro, mientras que Francisco Antonio de Alarcón, que era presidente del Consejo de Hacienda, se hizo con una superficie similar en dicho término. Para completar el negocio, estos dos últimos se apresuraron a poner sus nuevas posesiones bajo el manto protector del mayorazgo.<sup>333</sup>

Queda, por último, Duarte Fernández de Acosta, el comprador más importante. Agregando los datos de las distintas fuentes, sus adquisiciones superarían las 3.200 fgs, cifra que hay que considerar meramente indicativa. Este conspicuo acaparador de tierras en las cercanías de Madrid era uno de los judíos conversos portugueses que actuaron como asentistas de la Corona.<sup>334</sup> Precisamente por estas mismas fechas andaba comprando la jurisdicción de Sonseca,<sup>335</sup> lo que demuestra su firme voluntad de asentarse en la sociedad madrileña.

Todo este proceso de venta de baldíos significaba un duro golpe al tradicional régimen de organización del terrazgo por cuanto era la culminación de fuerzas profundas que venían socavando sus bases con anterioridad. El protagonismo que en otras localidades habían tenido las oligarquías municipales aquí lo tiene un grupo social en claro ascenso, burócratas y algún negociante, que se incorporan al estamento privilegiado mediante la adquisición del principal medio de producción, la tierra, y de la jurisdicción sobre otros hombres. Cuando después del episodio vallisoletano adquieran constancia del firme establecimiento de la Corte

---

<sup>333</sup> Datos biográficos en *ibídem*, págs. 68-69.

<sup>334</sup> DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.- *Política y Hacienda de Felipe IV*, Madrid, 1960, págs. 1229 y sigs.

<sup>335</sup> El dato aparece citado en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.- “Ventas y exenciones de lugares”, p. 70.

en Madrid se lanzarán a una denodada compra de tierras y vasallos en las cercanías de la ciudad, para lo cual contarán con la complicidad y ayuda de la Corona que, a cambio de dinero, puso todos los medios disponibles a su favor.

Una transferencia de tierras públicas a manos privadas que tuvo dos grandes consecuencias negativas: en primer lugar fomentó la concentración de la propiedad de la tierra, destacadamente en manos de los sectores más privilegiados de la sociedad, algo que no produciría avances técnicos u organizativos que garantizaran el progreso agrario. Se acentúa así el proceso de polarización de la sociedad madrileña, especialmente intenso en un período de crisis y reconversiones como es el s. XVII.<sup>336</sup> Una segunda consecuencia negativa: contribuye a la creciente limitación de los términos públicos, que pierden su carácter de aprovechamiento comunal para ser sustituido por la explotación rentística.

Pero por otro lado las enajenaciones de las tierras del Cuarto de Palacio marcan el punto de inflexión en la cuestión de los baldíos en Madrid, ya que desde entonces el regimiento madrileño retoma el firme control del patrimonio concejil. En el debate en torno a los baldíos nos encontramos en definitiva ante un pulso de poder entre monarquía y ciudades, esto es, entre Real Hacienda y oligarquías municipales. En el último tercio del s. XVII éstas parecen hacerse de nuevo con el dominio de la situación, como lo demuestra el caso de Madrid durante la comisión de d. Juan Antonio de Oviedo en 1669. Este abogado de los Reales Consejos recibía el encargo por parte de la Cámara de Castilla de proceder a la averiguación en la “provincia de la villa de Madrid” de los excesos y nuevas roturaciones llevados a cabo por los compradores de tierras baldías. Tras el reconocimiento de los títulos de compra y las mediciones de los términos debía ajustar las demasías con los titulares, lo que en la práctica equivalía a una nueva perpetuación de baldíos con que nutrir a las arcas reales. A tal fin el comisionado practicó unas detalladas diligencias en los lugares más próximos a Madrid. Sin embargo, la Villa pronto recurrió ante el Consejo de Castilla, por medio de su procurador general y del Reino -las quejas contra las ventas de baldíos habían sido constantes en las Cortes del XVII-, consiguiendo que este organismo pusiese fin al intento. Lo mismo sucedió poco después, en 1.685, cuando se continuó la comisión de Oviedo en d. Feliciano

---

<sup>336</sup> Proceso estudiado en LOPEZ GARCIA, J. M., dir- *El impacto de la Corte en Castilla*, págs. 242-266

Cerdán.<sup>337</sup> En la segunda mitad del XVII, el regimiento madrileño quedó como única institución que controlaba el patrimonio público.

La operación de arrendamiento y venta de baldíos incidió, como no podía ser menos, en la dinámica y composición de las tierras de propios. Hasta aproximadamente 1640 se mantienen dentro el esquema anterior. Están constituidos básicamente por los antiguos términos de “*nihares*” y los nuevos terrenos que se habían roturado a lo largo del s. XVI. Sin duda, buena parte se encontraban ya agotados en el tránsito al s. XVII, pero las nuevas labranzas que se agruparon en la operación del Cuarto de Palacio permitieron un respiro. Su coincidencia dentro de los términos municipales posibilitó que los campesinos regularan su explotación en función de los cambios en su capacidad productiva para atender a una demanda urbana en rápido y constante ascenso. Y ello se hizo dentro del marco de los concejos aldeanos, que siguieron siendo los principales arrendatarios.

Hacia 1640 con la venta de baldíos la situación de las tierras de propios se desbarata totalmente. La confusión es total entre los responsables del ayuntamiento y sus ingresos caen en picado hasta desaparecer totalmente. Inmediatamente comenzó la reorganización del patrimonio rústico con el fin de asegurar los derechos de propiedad y recuperar unos ingresos que aliviaran, siquiera de forma mínima, a la endeudada hacienda local. Diversas comisiones de regidores y otros encargados revisaron la documentación sobre antiguos arrendamientos, llamaron a informar a representantes de los lugares afectados y en ciertos casos inspeccionaron directamente el terreno,<sup>338</sup> pero no realizaron un apeo o deslinde jurídico de carácter general con el que clarificar los derechos sobre el terrazgo municipal. Tal vez porque no interesara demasiado todavía.

De nuevo nos encontramos a los concejos aldeanos dirigiendo los arrendamientos dentro de sus términos, pero su importancia empieza a declinar. En algunos casos desaparecen, mientras que en general se aprecia un notable incremento de arrendatarios particulares.

Una consecuencia en la ordenación del terrazgo fue la disminución de las pasturas, agravada por las licencias para cercar los términos vendidos. A las quejas de los ganaderos se

---

<sup>337</sup> AVM-S, 3-6-75

<sup>338</sup> AVM-S, 2-362-102

unen las de los obligados de abastecimiento de carne a Madrid, que en 1672 siguieron un pleito con los vecinos de Vallecas por impedir éstos que pastaran la pámpana de las viñas plantadas en las tierras que habían adquirido procedentes de la venta de baldíos,<sup>339</sup> situación que se agravaría en el s.XVIII.

La recuperación patrimonial tras la venta de baldíos aparece guiada por la intención de los dirigentes municipales de reforzar su aprovechamiento rentístico. Cuando los arrendamientos y la ocupación ilegal han alcanzado un nivel suficiente, las autoridades madrileñas deciden intervenir. Cuentan con el terreno acotado: se han reservado el control sobre los bienes públicos, con la inhibición tácita de los representantes reales. El encargado de culminar finalmente el conjunto de transformaciones experimentadas por el terrazgo concejil es el regidor José de Noriega que, a partir de 1692 dirige un *apeo general* de las tierras de la Villa de Madrid. La causa alegada es la usurpación protagonizada por los campesinos; tras el apeo se regula la situación del ocupante, que ha obtenido por esta vía el acceso al cultivo de la tierra. El apeo de Noriega no se va a ceñir a las tierras de propios anteriores, sino también a las rentas del Cuarto de Palacio y a ciertos terrenos comunales cultivados.<sup>340</sup> Todos ellos pasan ahora a ser propiedad exclusiva del ayuntamiento madrileño, a costa de los derechos del “común de vecinos de Villa y Tierra”, que recibirían en el s. XVIII el golpe definitivo.

### 3 – DE EJIDOS A SOTOS, O DE COMUNALES A PROPIOS

Desde la Edad Media los ejidos en torno a los ríos habían sido importantes espacios comunales, en los que se desarrollaron una variada vegetación riberiega,<sup>341</sup> además de constituir pastizales apreciados. A lo largo del s. XVI tuvo lugar un proceso de patrimonialización por parte de Madrid de estos terrenos comunales. Así, en 1524 desapareció

---

<sup>339</sup> AVM-S, 2-211-87

<sup>340</sup> *Libro Becerro* de 1695

<sup>341</sup> “Tal vez ninguno de los tipos de bosques naturales existentes en nuestro país haya sido más castigado, destruido y modificado por el hombre que los bosques de ribera”. FERRERAS, C. y AROZENA, M. E.- *Guía Física de España. 2- Los bosques*. Madrid, 1987, p.159

la “renta de los exidos y carrascales” y se procedió a arrendar cada ejido por separado, manteniendo las mismas características en cuanto a aprovechamientos.<sup>342</sup> De hecho, a partir de este momento la documentación empieza a utilizar el término “soto” para designar algunos términos, lo que pronto se terminará imponiendo. Entre los trece ejidos que se arrendaban destacaba el Porcal, seguido por Negralejo, el Berrueco y Sotil de Lobos, todos ellos en la vega del Jarama.

El nuevo tipo de arrendamiento por separado parece que amenazó su integridad forestal: si en 1524 todavía se autorizaba al arrendatario del Porcal a hacer tres corrales para el ganado y a retirar para su uso personal la leña caída, en 1536 se fijaron unas condiciones mucho más restrictivas que impedía terminantemente los usos anteriores.<sup>343</sup>

Pero el auténtico cambio en la naturaleza de los esquilmos forestales de los sotos de Madrid se produce como consecuencia del establecimiento de la Corte en la ciudad a partir de 1561. Las nuevas actuaciones constructivas aumentaron la demanda de madera, lo que el ayuntamiento aprovechó para convertir los aprovechamientos forestales en uno más de los ingresos de propios. Felipe II realizó obras de acondicionamiento en el Alcázar. Para conseguir la leña menuda necesaria para los hornos que fabricaban la cal, ordenó al municipio que autorizase la corta en los sotos concejiles. Entre 1561 y 1562 se procedió a hacerlo en Sotil de Lobos, Soto Redondo y Mata de Calabazas, lo que fue considerado un servicio de Madrid, que no cobró por la leña extraída.

Este episodio sirvió para centrar el interés del municipio en los esquilmos silvícolas, hasta entonces tan limitados en las ordenanzas. Para ello el procurador general hizo una información con el fin de averiguar “como le es util y provechoso arrendar la leña de los sotos que la dicha Villa tiene”. Los testigos aportaron datos sobre la situación forestal y las prácticas de explotación en el área riberiega. Los informantes aseguraron que otros propietarios de sotos, tanto institucionales como herederos de Madrid, procedían a arrendar las cortas de leña, lo que les resultaba muy rentable y no perjudicaba este aprovechamiento, si bien en algunos casos esta práctica era muy reciente.<sup>344</sup>

---

<sup>342</sup> AVM-S, 3-226-3

<sup>343</sup> AVM-S, 3-226-4

<sup>344</sup> Pocos años después, varios pueblos reconocían en las *Relaciones Topográficas* que se abastecían de leñas procedentes de los sotos: Arganda, Loeches, Rivas, Torrejón de Ardoz y Velilla. Aparecen extractados en BAUER MANDERSCHIED, E.-*Los montes de España en la Historia*. Madrid, 1980. Las págs. respectivas: 368, 387, 396,

Acerca de la riqueza forestal se les solicitaba declarasen si existían “fresnos, espinos y tarayes y sazes y chopos, tobas, cardos, ollea, yniesta, çarças, retamas, juncos, espadana y más siega y otros árboles”. Muchos testigos coincidían en que todas estas plantas estaban presentes, pero desigualmente, especificando uno de ellos que estaban “muy poblados de fresnos e taray, sazes e algunos de ellos chopos e zarzas”. Se trataba por tanto de una típica formación ripícola, con predominio de sauces y fresnos, siendo secundarios de momento los chopos o álamos. Sin embargo, el verdadero interés de la pregunta y de las respuestas radicaba en las “leñas menudas” procedentes de especies arbustivas: el protagonista absoluto era el *taray* (*tamarix gallica*), teniendo una menor importancia el tomillo, la retama o los cardizales. La no utilización de estas leñas, afirmaban, había supuesto un perjuicio para las arcas madrileñas y para la misma conservación de los sotos, pues eran constantes los disfrutes ilegales por los vecinos de los pueblos comarcanos. En cuanto a la forma de beneficio la unanimidad era total en que “el taray que está en mata si lo cortan por pie dentro de tres o cuatro años, guardándolo, está mejor que antes que se cortase, y que el taray grande e viejo cortado por pie, nunca más echa, sino que se le secan las raíces”. Por su parte, la corta por rama era la forma de aprovechamiento más adecuada de los fresnos.

Antes de que esta investigación se reflejase en medidas concretas, volvió a aparecer en 1563 y 1564 la interferencia de la monarquía, que solicitó a Madrid que aportase la leña menuda necesaria para fabricar 1.500 cahíces de cal (equivalentes a 1.035 Tms), de nuevo para la reforma del Alcázar. Pero esta vez encontró la resistencia de algunos regidores, tal vez molestos porque se impedía así el arrendamiento de este disfrute, por lo que alegaron la escasez de leña menuda. Argumento que no resultó nada convincente para el rey, que ordenó una nueva investigación. Las declaraciones del guarda mayor de los términos y del arrendatario del Porcal ratificaron la abundancia de fustas en los sotos, suficientes para fabricar la cantidad de cal requerida.<sup>345</sup>

Era el momento propicio para que el municipio solicitara una contrapartida a cambio de la cesión: el permiso real para poder arrendar en el futuro la leña menuda de los sotos. De

---

401 y 403-4.

<sup>345</sup> Se estimaba que para cada cahíz era suficiente con una carretada de leña de taray

esta forma, un servicio “en especie” posibilitó que los usos forestales se integrasen en los bienes de propios madrileños.<sup>346</sup>

La intervención regia apareció de nuevo en 1579, provocando que Madrid experimentara una importante modificación patrimonial en el entorno del Jarama, como consecuencia del deseo del monarca de configurar en la ribera una gran posesión para el nuevo monasterio de El Escorial. Entre el real soto del Palomarejo y el del Piul, pertenecientes al monasterio, se encontraban dos sotos madrileños, el Berrueco y Sotil de Lobos, además de dos lotes de tierra denominados Madres Viejas. La incorporación de estos cuatro predios permitió a Felipe II cerrar una gran posesión. Se trató de una permuta: los sotos de Madrid, tasados en casi dos millones de mrs, fueron compensados con la mitad de la renta producida por la barca de Arganda (la otra mitad pertenecía a esta villa), junto con dos pequeños terrenos para entrar en el apeadero e incorporar al Porcal.<sup>347</sup>

Con esta operación quedaba básicamente configurado el patrimonio municipal de Madrid en la ribera del Jarama hasta el proceso desamortizador. Consistía en primer lugar en el soto del Porcal, el más sobresaliente por su extensión (1.325 fgs) y rentabilidad. En el término de Rivas se encontraba el soto del Negralejo, de 766 fgs y con características muy similares al anterior. En cambio, en Velilla de San Antonio aparece el soto de Cuevas y Orillas (155 fgs) en el que apenas existían aprovechamientos silvícolas. No mantuvieron su naturaleza varios de los antiguos sotos y ejidos de la zona: se trataba de espacios de menor superficie que por sobreexplotación y falta de vigilancia, a lo largo del XVII fueron convirtiéndose en baldíos, destinados a pasto común o roturados para labranza.

En cuanto a los aprovechamientos, Madrid había ido limitando los usos comunales, sustituido por el arrendamiento de la leña, caza y pesca. Subsistía sin embargo el carácter público de las pasturas: los pastos seguían siendo “públicos y comunes para los ganados de los vecinos de Madrid y su Tierra”. No precisamente por deseo del ayuntamiento, si bien sus intentos por acotar los pastos de Porcal y Negralejo en el s. XVII fracasaron ante la oposición de los ganaderos de la Tierra de Madrid.<sup>348</sup>

---

<sup>346</sup> Todo este proceso está recogido en AVM-S, 3-14-16 y 2-395-25

<sup>347</sup> La escritura de permuta en AVM-S, libro mss. 155. No aparece la extensión de los sotos, que debía ser considerable.

<sup>348</sup> Más detalles de este proceso y del aprovechamiento de los pastos en HERNANDO ORTEGO, F. J.- "La gestión de las tierras de propios de Madrid en el siglo XVIII", en FERNANDEZ PRIETO, L. y BALBOA LOPEZ, X.-*La*



Las oligarquías municipales supieron aprovechar a su favor las exigencias recaudatorias de la Real Hacienda, obteniendo compensaciones por la concesión de los continuos servicios. Es lo que hicieron los regidores madrileños para acabar con el último y más valioso aprovechamiento de los sotos que conservaba su carácter comunal: los pastos. Un acuerdo del ayuntamiento de 31 de marzo de 1644 solicitó el acotamiento de los sotos del Porcal y del Negralejo como condición especial del servicio de 200.000 ducados que Madrid haría para el apresto de la Armada. En la petición se argumentaba la escasez de los ingresos de los propios para atender sus crecidos gastos y el que “en el tiempo que dichos pastos se hicieron públicos y comunes había muchos ganaderos en esta Tierra y ya no los hay”. Una Real Cédula de 9 de abril de ese año concedía la solicitud de los oligarcas madrileños, que se apresuraron a ponerla en práctica. Pero frente a sus intereses se encontraban los de los ganaderos de la comarca, principales beneficiarios de unos preciados pastizales. Los sexmeros de la Tierra recurrieron el acotamiento de los sotos ante el Consejo de Castilla, alegando los perjuicios que se les causaba, negando la disminución de ganados, ya que según ellos “de algunos años a esta parte se había aumentado en la dicha Tierra el ganado y que respecto de no tener todos los pastos necesarios para su sustento les era preciso y forzoso a los dueños buscarlos fuera de ella”. El Consejo dio la razón a los sexmeros, ordenando en 1667 que se desacotaran los pastos, restituyendo su condición de comunes. Los regidores sólo conseguirían el vedamiento definitivo a mediados del s. XVIII.<sup>349</sup>

La evolución de estos sotos y de sus aprovechamientos en el s. XVIII será estudiada, como bienes de propios, en el capítulo 7.

#### 4 – EL MONTE EN LA EDAD MODERNA. EL PARDO, DE COMUNAL A PROPIEDAD REAL

El monte en el término madrileño fue objeto de una creciente regulación por parte de la institución municipal desde finales del medievo, crecientemente acrecentada a lo largo de la Edad Moderna. Paralelamente, se procedió a una progresiva delimitación de las zonas

---

*sociedad rural en la España contemporánea. Mercado y patrimonio.* A Coruña, 1986, págs. 258-269

<sup>349</sup> Todo el proceso en AVM-S, 3-15-26, 3-15-27, 3-168-12 y 3-71-42.

forestales, a las que se aplicaría dicha normativa y en las que se aumentaría el control por parte de las autoridades concejiles. Sin embargo, estos mecanismos de intervención no impidieron que el término madrileño fuera sufriendo un rotundo proceso de deforestación. La presencia de la monarquía desde 1561 (si bien en el ámbito forestal esta presencia era muy anterior en el entorno madrileño, especialmente en lo que se refiere a la práctica cinegética) será decisiva en la evolución del monte madrileño. La creación de un inmenso patrimonio real en las cercanías de la Corte (que con el tiempo constituirán los Sitios Reales) se realizará en gran medida a costa del patrimonio municipal madrileño, los montes comunales, pastos y tierras de propios. El caso de El Pardo es el mejor ejemplo de esta situación, por lo que será detalladamente analizado.

#### 4.1 – REGULACIÓN Y USO DEL MONTE EN EL MADRID DE LA EDAD MODERNA

El proceso de expansión agraria que se manifiesta desde finales del XV y durante el Quinientos provocó, como ya se ha señalado, conflictos y enfrentamientos al afectar a los terrenos comunes o baldíos que se aprovechaban como pastizales, pero también al monte. La cesión de espacios arbolados para el cultivo por parte del concejo madrileño con el permiso para llevar a cabo la extracción de las cepas existentes<sup>350</sup> motivó una vigorosa reacción por parte del gobierno monárquico. Una Provisión del Consejo de 1496 recogía las denuncias presentadas acerca de que en Madrid “han arrendado e arriendan para labrar por pan çierta parte de los montes desa villa e de los lugares della que comarcan con los montes desa dicha villa... de que esa villa e vecinos della reciben mucho agravio e daño porque se deshazen los dichos montes e se destruyen e pierden e se encareçe la leña e los ganados non pueden paçer en los dicho montes”. La apropiación de tales términos por parte de particulares y concejos aldeanos “seyendo de los propios e baldíos desa villa”, y los pleitos consiguientes eran otro de los problemas denunciados. Por ello el Consejo decidía “que los dichos montes se guarden e nos se den a renta nin se deçepen ni saquen de cuajo ni entren en ellos ningunos conçejos ni personas a las labrar por renta ni pagando nihares”.<sup>351</sup> No parece haberse cumplido con mucho rigor, pues a comienzos del s. XVI se continuaron roturando términos boscosos pagando el

---

<sup>350</sup> Las ordenanzas concejiles de 1496 se analizan en el capítulo 2.

<sup>351</sup> AVM-S, 2-394-71

derecho de nihares. Así, en 1528, Las Rozas recibió un área en que no había encinas, pero sí “chaparros de monte, jara menuda y romero, que empieza desde la dehesa del citado lugar yendo por el valle abajo hasta el arroyo de los Perales y ombría de Nabasluengas, pagando el derecho de nihar”, mientras Aravaca obtenía en arrendamiento un término para labrar que estaba baldío, ya completamente deforestado, situado “entre las labranzas de Trofa y Alejandre y en que no había monte alguno ni nadie se aprovechaba de él”.<sup>352</sup>

A comienzos del s. XVI el paisaje forestal en Madrid mostraba una fuerte tendencia a la concentración en la zona noroeste y en menor medida al norte de la Villa. En un informe de 1526 preparado por orden del corregidor se presentaba una relación de los montes y dehesas de leña existentes en la Tierra madrileña. En primer lugar se hacía referencia a los montes del Real de Manzanares en los que sus vecinos tenían derecho de aprovechamiento. Por otro lado, las dehesas concejiles de Las Rozas, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Fuencarral y Fuentelfresno conservaban una cubierta forestal que servía para abrigo de los ganados, estando vedadas y guardadas conforme a las ordenanzas de la Villa y Tierra de Madrid. Finalmente, “los otros montes que esta Villa tiene son Valdoromasa e el Quexigar e Hamaniel que están vedados de cortar por virtud de las órdenes que sobre ello hay fecho, los cuales se guardan y executan para que los dichos montes crezcan e se conserven, e el dicho término del Quexigar de ocho años a esta parte se da vedado; e otros montes que tiene la dicha villa que son en Majadahonda, Las Roças e Bovadilla e Aravaca e Fuencarral”.<sup>353</sup>

Los montes identificados como tales se localizan todos en el norte y noroeste de Madrid: el extenso término de Valdelomasa se encuentra entre las localidades de Fuencarral, Alcobendas y San Sebastián; desde el s. XVII las denuncias sobre roturaciones son continuas y finalmente fue denunciado por la Real Hacienda como baldío en el siglo siguiente. Por su parte, el monte de Amanuel se sitúa junto a la dehesa carnicera de la Villa. El Quejigal, por último, corresponde a la zona oeste de lo que será El Pardo (mapa 5) y como tal será estudiado a continuación. El resto de localidades citadas en las que existen zonas forestales, con la excepción de Bovadilla, se localizan asimismo en el entorno de El Pardo. Nada se dice, sin embargo, de los “exidos y carrascales”, terrenos silvícolas también, que se extienden al sur y este de Madrid.

---

<sup>352</sup> AGP, leg. 1251, exp. 7.

<sup>353</sup> AVM-S, 2-395-17

Los montes madrileños son citados en la documentación frecuentemente como “*montes codrios*”,<sup>354</sup> lo que revela su dedicación ganadera. Se trata, en efecto, de una zona donde predomina el encinar como formación climática. La corta y aclareo de encinas crean unas formaciones adehesadas (en el sentido paisajístico, no como áreas acotadas) que permiten el pasto y refugio de los ganados. Por su parte, la bellota era de aprovechamiento comunal, lo que permitía la cría de piaras de cerdos.<sup>355</sup> Otro de los esquilmos practicados era descortezar encinas y alcornoques para curtir el cuero. Sus efectos eran con frecuencia muy perjudiciales para la supervivencia del árbol, por lo que estaba prohibida rigurosamente en Madrid desde 1494 (capítulo 2), a pesar de lo cual debía seguir practicándose.<sup>356</sup>

Desde comienzos del XVI comienza a producirse un trascendental cambio en los mecanismos institucionales de regulación del sector forestal. Si hasta entonces la iniciativa era del concejo, que elaboraba las ordenanzas correspondientes o tomaba acuerdos en los plenos municipales, a partir de 1512 va a ser el poder central el que juegue un papel cada vez más destacado en la articulación del monte en Madrid. En esa fecha una Provisión Real ordenaba al ayuntamiento madrileño que “en los terminos desta Villa, se planten montes e pinares e en las riberas de la dicha Villa, salzes e alamos e otros arboles, e otrosi que se de orden commo los montes que agora ay no se corten ni deçepen ni talen ni se saquen de quajo, e que pongan guardas, a costa de los propios desta dicha Villa, e de los lugares de su tierra e que sobre todo ello se hagan ordenanças”. Lo que el concejo cumplió el 14 de mayo de dicho año. Se trata de una recopilación de las normas anteriores, con cambios en las multas impuestos a los infractores, pero ya con un criterio algo más sistemático que las normativas anteriores. Se establecía la prohibición de “descortezar ni hazer carbón, salvo en la cumbre de la sierra, commo esta mandado por la esecutoria dada en lo que toca a los montes del Real”.<sup>357</sup>

---

<sup>354</sup> “Codrio: Monte herboso destinado al pasto...Es de muy poco uso esta voz”. JORDANA Y MORERA, J.- *Algunas voces forestales y otras que guardan relación con las mismas*, Madrid, 1900 (reed.: 1992), p. 183

<sup>355</sup> Así lo reconocía una Ordenanza posterior de 1563: “en las dehesas de esta villa ay y suele aver pocilgas donde se crían [puercos]”. AVM-S, libro mss. 112

<sup>356</sup> Todavía en 1550 una Provisión del Consejo a petición de los procuradores madrileños en Cortes, ordenaba al ayuntamiento llevar a cabo una información sobre su prohibición y la utilización de otros productos alternativos. AVM-S, 2-158-119. Lo cierto es que el sector de las curtidurías tenía gran importancia en Madrid.

<sup>357</sup> LAC-V, p. 177. No aparece recogido el texto de la Provisión Real, que constituye un claro antecedente de la Pragmática de Zaragoza de 21 de mayo de 1518 sobre plantío de montes por parte de los concejos y que fue incluida tanto en la Nueva como en la Novísima Recopilación. En Madrid aparece inserta en las Ordenanzas de 1563. Un análisis detallado de la Pragmática de 1518 en GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, R.- “Ordenanzas Reales de Montes en Castilla 81496-1803”, *Actas del II Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1971, págs. 312-317

Tras el establecimiento de la Corte en 1561 la preocupación por el estado de los montes se agudizó en el ayuntamiento madrileño, sin duda conscientes de que se trataba de un elemento clave para atraer la residencia del monarca, además de que las roturaciones de términos en el entorno rural estaban amenazando a la integridad de los montes. Pero de nuevo la iniciativa partió del poder real, que en 1562 determinó que se realizasen nuevos plantíos por parte de los municipios, además de cuidarse el patrimonio forestal, tomando como base la Pragmática de Zaragoza de 21 de mayo de 1518. El concejo respondió con las Ordenanzas de 1563,<sup>358</sup> que marcan un cambio destacado con las aprobadas anteriormente. Son normas más detalladas y sistemáticas: si bien presentan un componente sustancialmente punitivo, especificando las sanciones en que incurrían los infractores,<sup>359</sup> incorporan asimismo la regulación de determinados derechos comunales, tanto en lo que hace referencia a cortas de leña como al aprovechamiento de los pastizales, especificando los plazos y condiciones en que se pueden ejercer. Se trata, por tanto, de una normativa que da una visión más variada, más rica del monte, un espacio donde se practica tanto la ganadería como la obtención de combustible. Pronto, sin embargo, quedarían desfasadas sus sanciones, por lo que en 1568 se procedió a actualizar al alza las multas que se imponían, además de mejorar los mecanismos de vigilancia del monte.<sup>360</sup>

La presencia de la Corte en Madrid tendría, sin embargo, efectos muchos más profundos en lo que hace referencia a la regulación del monte en el territorio cercano a la ciudad. En efecto, la pretensión del poder real de intervenir en el entorno cortesano se une, en una característica imbricación de intereses, a la acumulación de propiedades por parte de la Casa Real en las cercanías de su residencia. Todo ello provoca que en la segunda mitad del XVI y en el siglo siguiente los órganos de gobierno central y de la monarquía terminen por regular el uso y aprovechamiento del monte en torno a Madrid, tanto mediante la imposición de ordenanzas reales y otras medidas legislativas (normativa sobre caza), como a través de la

---

<sup>358</sup> AVM-S, Libro mss. 112

<sup>359</sup> Algo característico de las Ordenanzas concejiles sobre montes en el Antiguo Régimen, como observa MANUEL VALDES, C. M.- “Características y transformaciones de la gestión forestal en España (siglos XVI-XIX)”, en MARIN PAGEO, F.; DOMINGO SANTOS, J.; CALZADO CARRETERO, A. (Eds.)- *Los montes y su historia*, Huelva, 2000, p. 39

<sup>360</sup> AVM-S, 2-308-24

creación de órganos de administración y gobierno encargados de tomar medidas sobre la situación de los montes y el establecimiento de nuevos plantíos en torno a Madrid. Así, a finales del s. XVII el consejero de Castilla d. Antonio de Riaño y Salamanca detentaba el cargo de “juez particular y privativo de la comisión de los montes y nuevos plantíos de Madrid y su Tierra veinte leguas en contorno”.<sup>361</sup> Se trata, en suma, de un capítulo más de la pérdida de jurisdicción y poder efectivo por parte del concejo madrileño en lo que fuera la Tierra de Madrid ante la superposición (o mejor dicho, imposición) de nuevos ámbitos jurisdiccionales procedentes del poder central sobre un espacio que ya no definía sus límites por el señorío urbano bajomedieval. Un señorío que en este ámbito de la regulación del monte comunal se iba disolviendo, como sucedía paralelamente en el ámbito del abastecimiento o la fiscalidad. El monte de El Pardo constituye el mejor ejemplo de esta enajenación de competencias al concejo, que en este caso culminará con la completa expropiación del patrimonio municipal de Madrid.

Por lo que respecta a la conservación de los montes concejiles, la Ordenanza de 1563 había establecido que el ayuntamiento nombrara un “regidor diputado” que se encargara de realizar una visita anual a los montes de la villa y llevar un libro donde asentara la denuncias practicadas por los guardas de montes, oficiales municipales que a fines del medievo habían sustituido a los caballeros de montes.<sup>362</sup> En 1568 los mecanismos de vigilancia de las zonas forestales fueron reformados para conseguir una mayor eficiencia. En primer lugar, además del regidor diputado de montes, el ayuntamiento nombraría un procurador “que solicite las denunciaciones hasta que se sentencien y execute y las cobre y reparta”. Por otro lado, también se elegirían anualmente “las guardas que les pareciere de a caballo y de a pie, con salario o sin él, como más convenga”. La principal novedad era el que se encargaba que “cada concejo y alcaldes e regidores de la Tierra nombren también guardas cada año para su territorio y dezmerías donde estuviern sus heredades”. Los ingresos obtenidos por la recaudación de las “denunciaciones” se repartían en cuatro partes: dos se las distribuían el propietario (el ayuntamiento en el caso de los términos municipales) y el denunciante (los guardas en la mayoría de los casos), y la otra mitad se repartía entre el juez que dictase sentencia, el procurador de la Villa para reclamar sentencias y el “regidor diputado”.<sup>363</sup>

---

<sup>361</sup> AVM-S, 1-122-19

<sup>362</sup> AVM-S, Libro mss. 112

<sup>363</sup> AVM-S, 2-308-24

Por otro lado, el municipio nombraba guardas encargados del control de los principales términos acotados o dehesados, que perdían su carácter comunal en alguno de los aprovechamientos o durante una parte del año, como se refleja en el cuadro adjunto. El encargo de vigilar determinados montes a los concejos de las aldeas más cercanas a cambio de un pago por el ayuntamiento de Madrid se practicaba desde comienzos del s. XVI.<sup>364</sup>

### CUADRO 3 - GUARDAS DE MONTES Y DEHESAS DE MADRID, 1629

TERMINO	GUARDAS	SALARIO (MRS/AÑO)
TIERRA DE MADRID	TENIENTE DE GUARDA MAYOR	40.000
PRADO DE SAN JERONIMO	2	40.000
DEHESA NUEVA DEL QUEXIGAR	7 (VECINOS DE LAS ROZAS)	60.000
DEHESA DE NAVALACARRERA	1	17.000
SOTO DEL PORCAL	1	10.000 + 6 FGS TRIGO
DEHESA DE CANTOBLANCO	CONCEJO DE FUENCARRAL	20.000
DEHESA DE VALDELOMASA	CONCEJO DE SAN SEBASTIAN	45.000

FUENTE: AVM-C, 1-157-10

---

<sup>364</sup> En 1530 Madrid encargó al concejo de Fuencarral la guarda de la dehesa de Cantoblanco pues en un reconocimiento por parte del corregidor y un regidor “les pareció que estaba muy cortada e talada, e que si hobiese buena guarda en ella, tiene buena disposición para hacerse muy buen monte, y los dichos vecinos de Fuencarral les dixeron que si esta Villa mandase al concejo del dicho lugar de Fuencarral, se encargarían de poner guardas... porque la dicha dehesa está junto e alinda con la dehesa de Valdelatas que es del dicho lugar de Fuencarral, la cual dicha dehesa de Valdelatas por estar bien guardada tiene gran monte de encinas, e guardándose la dicha dehesa de Cantoblanco se haría buen monte e mejor que el dicho Valdelatas”. AVM-S, 3-152-30

## 4.2 – EL PARDO, ESPACIO COMUNAL Y CAZADERO REAL

Desde comienzos del s. XVI, coincidiendo con la llegada de una nueva dinastía, la historia del monte de El Pardo va a experimentar una transformación radical. No es sólo una cuestión de cambio en los gustos cinegéticos de los monarcas, por más que buena parte de ellos prefieran recrearse en la caza que dedicarse a las mucho más arduas tareas de gobierno. Las claves básicas que explican la nueva capacidad de control del territorio de que va a disponer la monarquía radican en el asentamiento definitivo de la capitalidad en Madrid y la progresiva consolidación de su poder absoluto. El resultado será el desarrollo de El Pardo como un sobresaliente cazadero real y más tarde “Sitio Real”, lo cual se llevará a cabo a costa de los aprovechamientos comunales que los vecinos de Madrid y su Tierra venían realizando tradicionalmente en los términos circundantes. Caza real y usos silvopastoriles irán perdiendo con el tiempo el carácter complementario que antaño tuvieron y se irán convirtiendo en usos antagónicos de un mismo espacio, lo que provocará la eliminación de uno (aprovechamientos comunales) y la imposición de otro (caza real), un proceso que resultaría largo pero con un resultado claro. Todo ello con un reflejo en la evolución paisajística que tendremos ocasión de comprobar.

Lo cierto es que la gran preferencia que la nueva casa real va a demostrar por este territorio no se va a traducir durante mucho tiempo en una modificación sensible de las estructuras de propiedad, plenamente consolidadas desde la Baja Edad Media. El mecanismo para consolidar y ampliar el cazadero regio será la *jurisdicción*, el recurso a la imposición legal y penal de la voluntad de los monarcas a costa de sus súbditos. Sólo cuando el impacto espacial y social de esta fórmula resulte excesivamente costoso se recurrirá a la *propiedad* para asegurar definitivamente la exclusividad del término, allá a mediados del s. XVIII.

Antes de pasar a analizar el proceso de exclusión de los aprovechamientos concejiles, una aclaración previa. El objetivo de la monarquía (especialmente desde Felipe II) va a ser el de ampliar el uso cinegético del espacio, no el de conservar la naturaleza si no en cuanto permita el mantenimiento de determinados animales. De hecho, el cazadero real supone un importante grado de intervención directa sobre el territorio que va incrementando la humanización del paisaje. Así lo pone de manifiesto el que la Dehesa Vieja se vaya



convirtiéndose en el Monte Hueco, además de otras prácticas como el cultivo de determinadas áreas dentro y alrededor del monte para que sirvan de cebaderos de los venados, o la persecución de especies dañinas a las puramente cinegéticas, provocando alteraciones de la cadena trófica.

Pero aún hay más. La utilidad del cazadero real no consiste únicamente en el ocio o “recreación” de los monarcas, que también, sino que incluye a toda la “sociedad cortesana” que podía disfrutar del territorio por expresa invitación del soberano. Para entender la lógica del desarrollo de El Pardo hay que considerar la naturaleza de esta Corte como ámbito en el que se concentran, redistribuyen y, por supuesto, se disfrutan los privilegios y la renta feudal que les sirve de sustento. El monte real que supone El Pardo se integra así con los palacios y jardines reales (los “Reales Sitios”), componiendo todos ellos un espacio donde la élite cortesana se reúne, se relaciona entre sí y, claro está, se separa físicamente de la multitud.<sup>365</sup> Nos encontramos en suma ante un espacio para el poder, en el que se excluye a los excluidos y privilegia a los privilegiados. La historia de El Pardo no va a ser sólo la de una segregación territorial, sino a la vez la de una segregación social.

Veamos los hitos más significativos del progresivo control espacial por parte de los monarcas. No es mi intención hacer aquí una detallada historia de la legislación sobre caza, y mucho menos la de las técnicas cinegéticas; el objetivo principal es el de analizar cómo esta práctica ha contribuido a la evolución del paisaje.

Carlos V comenzó a intensificar la presencia en El Pardo al ordenar al arquitecto Luis de Vega la construcción de un palacio en sustitución de la fortaleza existente, un proyecto que continuaría con entusiasmo su hijo Felipe II.<sup>366</sup> Igualmente decisiva resultó la profunda modificación aprobada por el emperador en la legislación sobre la actividad venatoria en Madrid. Desde la Baja Edad Media la caza dentro de los términos municipales era regulada por las ordenanzas locales, que por lo general tendían a garantizar el derecho a su práctica por

---

<sup>365</sup> Existe una abundante bibliografía sobre los Sitios Reales, si bien suele centrarse en los aspectos puramente artísticos. Por su relación con el tema objeto de estudio, destaco a MORAN TURINA, J. M. y CHECA CREMADES, F.- *Casas de Campo, Cazaderos y Jardines*, Madrid, 1988.

<sup>366</sup> Sobre la evolución arquitectónica, además de los trabajos de L. Calandre y de J. M. Morán Turina y F. Checa Cremades citados anteriormente, SANCHO, J. L.- *La Arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo Histórico de los Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional*, Madrid, 1995, págs. 190-273.

parte de los vecinos y a excluir a los extraños.<sup>367</sup> La importancia de El Pardo determinó que los monarcas nombraran un guarda mayor en Madrid, con jurisdicción sobre toda la Tierra, una figura que complementaba la vigilancia que ejercía el alcaide dentro de la posesión real. En tiempos de Fernando el Católico el concejo de Majadahonda reclamó que el guarda mayor vedaba totalmente la caza dentro del término madrileño, a lo que el rey ordenó que se guardase tan sólo dos leguas alrededor de Madrid hacia el Real de Manzanares (lo que incluía lógicamente El Pardo), pero que en el resto “todos los vesinos de la dicha Villa e su Tierra que puedan caçar como quisieren guardando las leyes e ordenanças de la dicha Villa”.<sup>368</sup>

Muy distinta fue la respuesta que se dio bajo el reinado de Carlos V a las quejas de los vecinos de todos los lugares de realengo que rodeaban a El Pardo por los impedimentos que les ponían los guardas reales en la caza dentro de su término: desde 1516 se prohibió terminantemente la caza mayor dentro de la Tierra de Madrid, así como la menor en la Dehesa Vieja y una legua alrededor de la ciudad, permitiéndose ésta fuera de dichos límites.<sup>369</sup> En suma, se producía el total vedamiento de la caza mayor no sólo en El Pardo, sino también en todo el término madrileño. La oportunidad de crecimiento y expansión territorial de estas especies que suponía la eliminación de los depredadores humanos, fue pronto aprovechada. Desde entonces las quejas de las localidades cercanas al cazadero por los perjuicios que se les ocasionaba se convertirán en permanentes. Valga un testimonio temprano como ejemplo de algo que se repetirá hasta la saciedad. En 1551 el concejo de Fuencarral solicitaba a los procuradores de Madrid planteasen en las Cortes el problema “en lo que toca a venados y caça del Pardo, porque es çierto que es tan grandísimo el número de ellos y tan grande el daño que hazen y lo que cada día crecen y se multiplican que ya no se pueden valer las gentes si no se pone remedio en ello, porque todo el pan y vino que siembran y labran en el dicho lugar y aun en esta Villa y Tierra es para ellos y aun no les basta”.<sup>370</sup>

Cuando Felipe II establezca la capitalidad en Madrid articulará todo un conjunto de posesiones reales que sirvan tanto al ocio como a visualizar el poder de su monarquía. El

---

<sup>367</sup> LADERO QUESADA, M. A.- “La caza en la legislación municipal castellana. Siglos XIII a XVIII”, *En la España Medieval. Estudios dedicados al profesor D. Julio González González*, Madrid, 1980. págs. 193-221.

<sup>368</sup> AVM, Libro mss. nº 16, fols. 59-60.

<sup>369</sup> *Cédulas y Provisiones de Carlos I rey de España conservadas en el Archivo General de la Villa de Madrid. Tomo I-años 1516-1526*, Madrid, 1985, págs. 21-23.

<sup>370</sup> AVM-S, 3-152-18.

Pardo se convirtió en uno de los centros más destacados, lo que contribuiría a aumentar su problemática tanto territorial como social.

Las continuas quejas por la situación de los habitantes cercanos obligó al monarca a tomar una solución: indemnizar a los propietarios afectados por el paso y destrozos de la caza. Sin embargo, la tasación de estos daños corría a cargo de las justicias locales, lo que unido a la enorme cantidad de partidas que sumaban, movió al rey a encargar en 1563 al licenciado Jerónimo Ortega, Juez de los Bosques Reales, que estudiara nuevas fórmulas para el pago. Sus propuestas iban encaminadas a que los representantes reales participaran en el nombramiento de un perito tasador (que había que elegir entre los propietarios acomodados, creando así una red clientelar), mientras otro los designarían los representantes de los concejos respectivos.<sup>371</sup> Finalmente una Real Cédula de 16 de febrero de 1565 recogió estos planteamientos, estableciendo que la declaración de los daños no se debía hacer ante los alcaldes de los pueblos ni ninguna otra jurisdicción, sino solamente ante el licenciado Ortega o la persona que por comisión real entendiera en el tema.<sup>372</sup>

La solución no resultó permanente. Durante el s. XVII los apuros de la Real Hacienda y la complejidad burocrática que suponía, obligaron a que distintas medidas legales dieran autorización a los propietarios de las fincas afectadas para que pudiesen cazar los animales. Pero esta apertura provocó un alarmante crecimiento de las denuncias por furtivismo. Por ello a mediados del s. XVIII se había vuelto a las indemnizaciones, si bien con una cantidad fija de 53.832 reales que se repartían entre catorce localidades. Claro que la distribución no era socialmente muy justa, pues de esa cantidad las iglesias recibían 21.732 rs.<sup>373</sup>

Junto a la compensación, la consolidación del cazadero regio. Para ello los distintos monarcas usaron los medios jurisdiccionales que les permitieron ir ampliando de manera creciente el espacio del vedamiento de la caza mayor y menor (con la excepción que se acaba de mencionar). Para ver un ejemplo de la extensa superficie que se llegó a abarcar, mencionar la Real Cédula de 1561 que vedaba el territorio comprendido entre Getafe, Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, Valdemorillo, La Herrería, la línea de cumbres de la Sierra hasta el

---

<sup>371</sup> AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 247-1.

<sup>372</sup> AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 287.

<sup>373</sup> Todo este proceso lo detalló Feliciano de la Vega, alcaide de El Pardo en 1748. Se publica un amplio extracto en ALMAZAN, duque de- *Historia de la Montería en España*, Madrid, 1934, págs. 459-462.

río Guadalix, el puente de Viveros, Coslada, Vallecas, Villaverde y Getafe.<sup>374</sup> Paralelamente se fue perfeccionando el aparato administrativo encargado de su control: la Junta de Obras y Bosques (creada en 1545) además del ya tradicional alcaide de El Pardo y los guardas para su vigilancia.

Precisamente en el control efectivo del territorio del monte de El Pardo se produjo en el s. XVI una novedad muy significativa: la división del término en cuarteles, cada uno de los cuales estaba vigilado por un guarda que habitaba una casa dentro del cuartel, lo que amplió la capacidad de control espacial notablemente. Si inicialmente se fijaron cuatro, su número se fue aumentando, convirtiéndose en una referencia topográfica habitual. Es significativo que desde el inicio se establecieran más allá de la Dehesa Vieja, concretamente dentro de los términos concejiles madrileños (Mapa 4).

Pero además del cazadero real que se irá articulando progresivamente, la presencia en la zona del concejo de Villa y Tierra desde el período medieval. *Las tierras madrileñas en El Pardo son comunes de Villa y Tierra*. Así lo ratifican los sucesivos amojonamientos del asentamiento real: “monte público y concejil de Madrid y sus lugares”, con “pastos públicos y comunes de Villa y Tierra”, al igual que numerosas sentencias dictadas en los siglos XV y XVI ante los intentos de variar la naturaleza del terrazgo. Su aprovechamiento, pues, es libre para todos los vecinos de Madrid y lugares de su jurisdicción, quedando excluidos los forasteros.

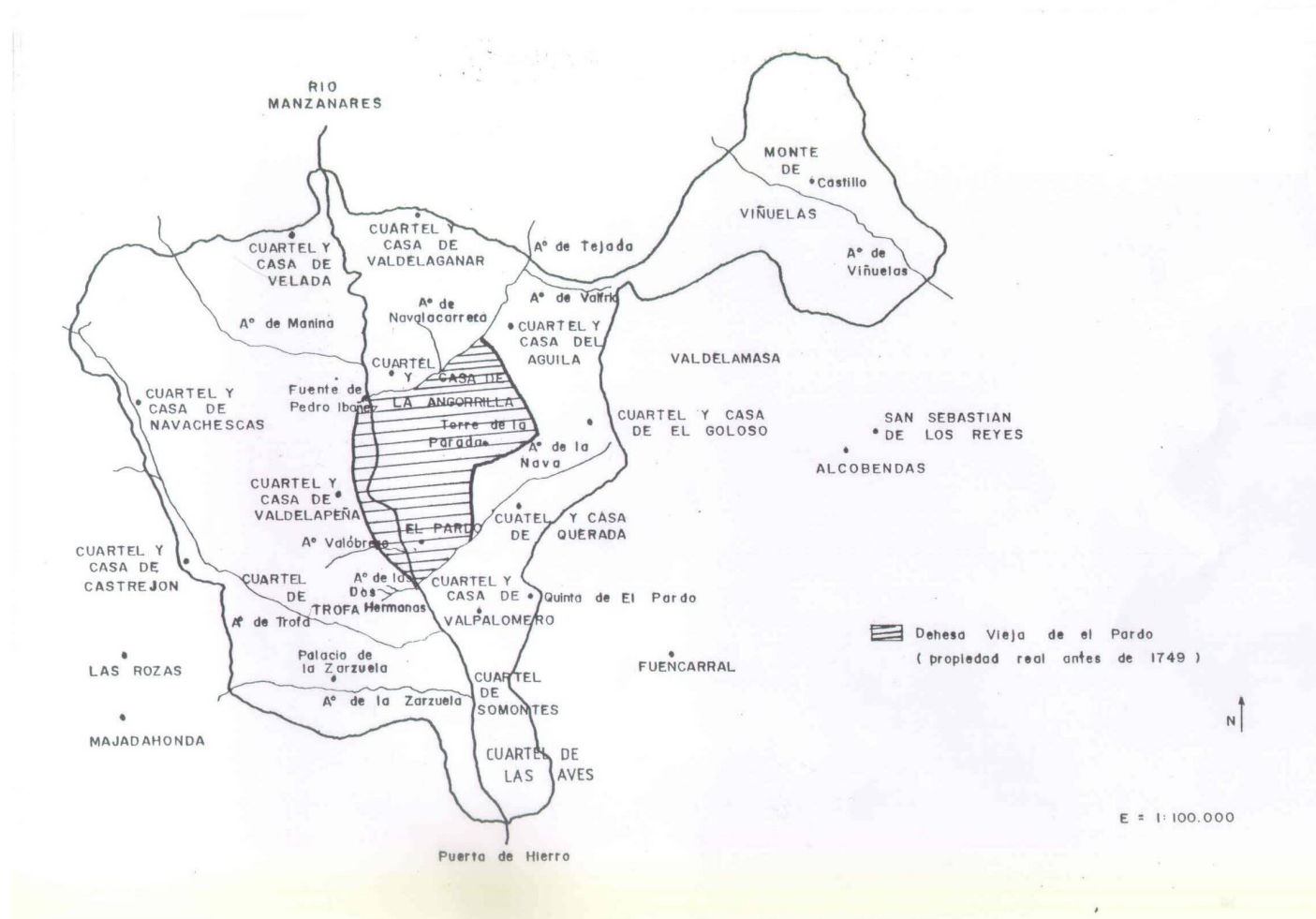
Los patrimonios y derechos comunales son un elemento fundamental en la organización del espacio impuesta en el proceso repoblador. Su finalidad es proveer a los vecinos de una comunidad o concejo de los aprovechamientos que complementen sus explotaciones particulares. En este sentido destacan los montes y pastizales, pero también proporcionan tierras de labranza tanto a los concejos aldeanos como a sus habitantes en los momentos de expansión roturadora. En el Antiguo Régimen, como hemos venido analizando, estos bienes sufren una profunda modificación de su naturaleza, restringiéndose progresivamente su destino originario. Si la conversión de comunes en propios desde el mismo periodo medieval tuvo gran desarrollo en el área madrileña, el sector que centra nuestra atención presenta una dinámica peculiar, mediatizada por la presencia del cazadero real. El impacto de la caza regia sobre el paisaje madrileño fue determinante. El Pardo era el

---

<sup>374</sup> AGP, Reales Cédulas, tomo II, fol. 133.

cazadero más antiguo e importante. Veamos cómo afectó a los aprovechamientos de pastos, leñas y cultivos de las tierras municipales.

**MAPA 4**  
**EL MONTE DE EL PARDO HASTA 1749**



Tanto los vecinos de la Villa como los de las aldeas de su reducida jurisdicción pueden disfrutar el “pasto de Madrid y su tierra” que, según Cristóbal de Toro, rodeaba los mojones de la Dehesa Vieja de El Pardo. Existía, pues, una comunidad de pastos que se complementa con los derechos que poseen los madrileños en los aprovechamientos comunes del Real de Manzanares, dando así una clara orientación ganadera al espacio comprendido entre la ciudad y la Sierra de Guadarrama.

Para proteger los terrenos de uso común de la apropiación y explotaciones abusivas, el concejo procede a su acotamiento, esto es, a marcar unos límites que le dan un carácter de predio individualizado: las dehesas. Según la funcionalidad que se otorgue al término acotado aparecen diversos tipos de dehesas, si bien es frecuente que las que conservan su primitivo carácter comunal vayan convirtiéndose en dehesas de propios, arrendadas por el municipio.

Aunque el *Libro de la Montería* se refiere a este espacio como la “Dehesa de Madrit”, no da más precisiones sobre su extensión o aprovechamiento. Por su parte, la dehesa de Tejada es reconocida ya en 1368 como “propio desa villa”, a la que correspondían los derechos de caza, leña y pasto. Pero es la de Querada, situada en el cuartel del mismo nombre, la que presenta una patrimonialización clara por parte del municipio madrileño. Así, cuando éste pretendió proceder a su arrendamiento, una Real Cédula de 1515 tomó dicho arrendamiento a cargo de la Casa Real, pagándose a Madrid 6.000 rs.<sup>375</sup>

El adehesamiento de un terreno supone que sus aprovechamientos son regulados por el concejo, que puede mantener en algunos usos el carácter comunal y vedar otros. Es lo que sucede con la dehesa del *Quexigar*, el acotamiento más importante desde comienzos del s. XVI, pues se extendía entre La Zarzuela y las cercanías del término de Torreloz. El disfrute común se mantenía tan sólo en los pastos: “tiene aprouechamiento Villa y Tierra quanto el pasto de la yerba y bellota quando Madrid lo desveda y no otro ninguno ni entra otra ninguna persona”.<sup>376</sup>

---

<sup>375</sup> AVM-S, 3-161-40

<sup>376</sup> *Libro Becerro 1645*. El topónimo Quexigar se perdió más tarde. El escribano Martínez de Salazar lo identificó correctamente con el cuartel de Castrejón durante el proceso de expropiación de los términos concejiles y su incorporación al Cordón de El Pardo.

En ocasiones era la vecindad regia la causa de los cerramientos. En 1637 una Real Cédula solicitó a Madrid se concediera el acotamiento de los valles de Valdelapena y Valdenovillo para el pasto de las vacas y cabras que el rey tenía en el Buen Retiro. El ayuntamiento accedió, si bien en 1676 abrió una investigación sobre estos terrenos. Según declararon tres vecinos de Las Rozas, ambos valles habían sido con anterioridad pasto común de Villa y Tierra, y aunque los ganados reales para los que se habían acotado hacía ya algunos años que habían desaparecido, eran disfrutados únicamente por los guardas de El Pardo, que labraban diversos predios y cobraban derechos por permitir la entrada de las reses. Madrid solicitó entonces que se les restituyera su carácter comunal.<sup>377</sup>

Esta actuación municipal se enmarca dentro de una política que busca prioritariamente asegurar pastos para el abastecimiento de carne a la ciudad. Porque hablar de pastos comunes en el Madrid de la Edad Moderna es hablar del abasto de carnes. Al incremento espectacular de la población tras el establecimiento de la capitalidad se une la preocupación del gobierno por tener bien abastecida una ciudad que, ante una crisis de subsistencias, puede convertirse en peligrosa caja de resonancias del descontento social. El municipio, que desde la época medieval facilita a los encargados del abastecimiento instalaciones como el matadero o carnicerías así como dehesas carniceras, pretende ahora controlar más estrictamente los pastizales situados en los alrededores de la ciudad. Se incrementa por tanto el patrimonio concejil a disposición de los ganados que alimentarán a los madrileños, lo que abarataría considerablemente los costes de la carne o aumentaría los márgenes de beneficios de los obligados.<sup>378</sup> El resultado es, lógicamente, una disminución de los disfrutes comunales que suscitará la oposición de las localidades afectadas.

Este origen tiene en El Pardo el adehesamiento en 1678 de los términos de Valfrío, Navalacarrera y las Dehesillas (denominados en el s. XVIII cuarteles del Águila, la Angorrilla y Valdelaganar), situados al N. y limítrofes con Colmenar Viejo. Con anterioridad, los hatos de la obligación de carnes pastaban en los chaparrales de Velada y Manina. La pretensión de Madrid era cercar estos términos para el uso exclusivo del abasto, si bien se desaconsejó por estar muy afectados por la caza real: “toda hozada de jabalís y comida de conejos”. Los

---

<sup>377</sup> AVM-S, 3-162-18

<sup>378</sup> Proceso estudiado por BERNARDOS SANZ, J. U.- *No sólo de pan. Ganadería, abastecimiento y consumo de carne en Madrid (1450-1805)*, Tesis doctoral inédita, Universidad Autónoma de Madrid, 1997

peritos recomendaron para tal propósito el espacio comprendido entre la dehesa de Valdelapeña y el arroyo de Trofa, sugerencia que no logró el consentimiento del monarca<sup>379</sup> (Mapa 4).

Con la misma finalidad se solía arrendar por los obligados del abasto de la carne el monte de Viñuelas. El intento en 1672 de romper este tipo de contrato por parte del marqués de Malagón, su propietario, puso de manifiesto la necesidad de terrenos concejiles para el abastecimiento. El Consejo de Castilla tomó cartas en el asunto y, aunque prorrogó temporalmente la vigencia del arrendamiento, ordenó a la Villa dispusiese pastizales que sustituyeran a Viñuelas. Con ello se conseguiría, además, el destacado ahorro de los 45.000 rs anuales que se pagaban por dichos pastos.

En un primer momento la atención de Madrid se centró en las dehesas de Valdelamasa y Cantoblanco, que se extendían junto a Viñuelas por los términos de Fuencarral, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. La extensión de Valdelamasa ascendía, según la medición de 1672, a 5.500 fgs y a 492 fgs la de Cantoblanco. Ambas eran consideradas “propios” de la dudad por cuanto estaban hipotecadas a diversas deudas municipales, aunque los pastos eran “públicos y comunes de Villa y Tierra”. Los lugares de la jurisdicción, a concejo abierto, dieron su consentimiento para que se acotara su uso, a excepción de Fuencarral, San Sebastián de los Reyes y Fuente del Fresno, los más afectados por el cerramiento por su proximidad geográfica. Con el apoyo de la Mesta y la Cabaña Real de Carreteros y amparándose en la comunidad de pastos, solicitaron el mantenimiento de su carácter público. En ello influyeron las roturaciones que habían llevado a cabo sus vecinos, puesto que, según afirmaban los representantes madrileños, “el Cantoblanco se halla todo arado y sembrado y la maior parte de Valdelamasa y las Jarillas está en la misma forma”.

En contrapartida, aconsejaron el cerramiento de Valfrío, Navalacarrera y las Dehesillas, también pastos comunes y que se extendían entre el río Manzanares, el camino de la capital a Colmenar, la Dehesa Vieja y el límite del Real (Mapa 5). El comisionado de Madrid en el reconocimiento de la zona señaló las ventajas de la propuesta, pues aunque “el suelo y pasto de los términos no es tan bueno ni igual como el de Valdelamasa..., ninguno está roto ni arado y tiene mucho monte en que V.S. puede hacer grandes encinares

---

<sup>379</sup> GOMEZ IGLESIAS, A.- “La dehesa de Amanuel o de la Villa”, p. 58.



guardándolo, y haciendo el monte hueco y majadeando los ganados será sin comparación maior esta dehesa y más útil de pasto y leña”.

No tenía en cuenta el comisionado la vecindad real, lo que sí haría en cambio el ayuntamiento que, para llevar a cabo el acotamiento, consultó con el alcaide. El resultado fue una considerable limitación de la dehesa proyectada. Por una Real Cédula de 23 de abril el monarca aprovechaba la ocasión para ampliar sus posesiones en El Pardo, incorporando una parte de la nueva dehesa, las Barrancas de Carbonero, que constituían un valioso refugio para los jabalís. Además, el cerramiento que se concedía sólo afectaba a los vecinos de Madrid y su Tierra, pero no a los intereses reales, pues se destinaban “los pastos descubiertos para el ganado y el monte para el de mi caza”. De esta forma, se ratificaba la prioridad de la función cinegética.<sup>380</sup>

La nueva dehesa, que acabó con los aprovechamientos de pastos que realizaban los vecinos lugares del Real de Manzanares,<sup>381</sup> no tuvo empero el alcance previsto. No se hicieron con regularidad las podas de las encinas, necesarias para acabar con el matorral, lo que supuso un empobrecimiento de la dehesa.<sup>382</sup>

Pese a ello, El Pardo fue objeto de un destacado uso por el abasto de carne madrileño, según recordaba uno de sus mayores en 1755. La zona situada al NE del río Manzanares era aprovechada como pastizales para el ganado que se trasladaba del Real de Manzanares a la dehesa de Amanuel. Además, guardaba diversos hatos de carneros: cuatro durante el invierno en El Goloso, cinco en el valle de Cerrada y tres en la Rinconada de Valpalomero. La margen opuesta del río no era terreno de paso, pero en ella pastaban numerosas cabezas de reses vacunas al S del arroyo de Trofa. En el cuartel del mismo nombre se localizaban hasta doce rebaños de cameros y cuatro de vacuno. Hasta llegar a Navachescas existían algunos valles en los que se mantenían cuatro de carneros y uno de vacas y terneras. Finalmente, en

---

<sup>380</sup> La escritura de concordia se firmó en 1678 entre el municipio y el marqués de la Guardia como alcaide del Real Sitio. AVM-S, 3-162-17 y 3-162-22.

<sup>381</sup> Así se deduce de la queja de dichas localidades, que afirmaban necesitar estos terrenos para transportar mercancías a la capital. El ayuntamiento madrileño replicó que su única intención era disfrutar gratuitamente los pastos comunes de la Villa y Tierra madrileña, algo a lo que no tenían derecho. AVM-S, 2-395-53.

<sup>382</sup> En 1693 se afirmaba que, de haberse acabado haciendo monte bajo, “hoy sería mayor y mejor dehesa que la de El Pardo y cupiera en ella todo el ganado de la Obligación de las carnicerías de Madrid, sin necesitar de comprar ni pagar pastos de otras dehesas”. AVM-S, 1-122-24.

Navachescas pastaban cinco hatos lanares y dos vacunos.<sup>383</sup> La progresiva expansión de los venados reales terminaría con esta abundante presencia del ganado destinado al abastecimiento urbano.

Un ejemplo de las dificultades que tenía el disfrute pecuario queda reflejado en los hechos de 1736, cuando el teniente de alcaide de El Pardo apresó a un vaquero del abasto madrileño por encontrarse dos hatos vacunos pastando en Valdelapeña. Lo significativo es que el alcaide justifica su actuación alegando que “no puede permitirse la entrada de las vacas en Valdelapeña por el perjuicio que resultaría de ello a la real diversión de Sus Majestades en la que disfrutan en dicho cuartel por la inmediatez al Pardo, durante las jornadas en aquel Sitio”.<sup>384</sup>

Para evitar estas situaciones, los obligados de la carne recurrieron a dar “con motivo de aguinaldo al teniente y guardas de aquel Real Sitio un agasajo y con él se lograba que los ganados en tiempo de invierno y especialmente en los de nieves se arrimasen y acogiesen allí, disfrutando sus yerbas”. Tal soborno, necesario para que Madrid pudiese aprovechar sus propios pastos, cumplió su cometido hasta 1744, fecha en que la Junta de Abastos decidió retirarse de El Pardo.<sup>385</sup> Se culminaba así un proceso de desplazamiento de las reses no venatorias, proceso que resulta contradictorio con la protección que el mismo poder central comienza a otorgar a los pastos en los alrededores de la capital ante su escasez en una coyuntura de roturaciones agrarias, y que se recogen en la *Novísima Recopilación* (ley III, título X, libro III).

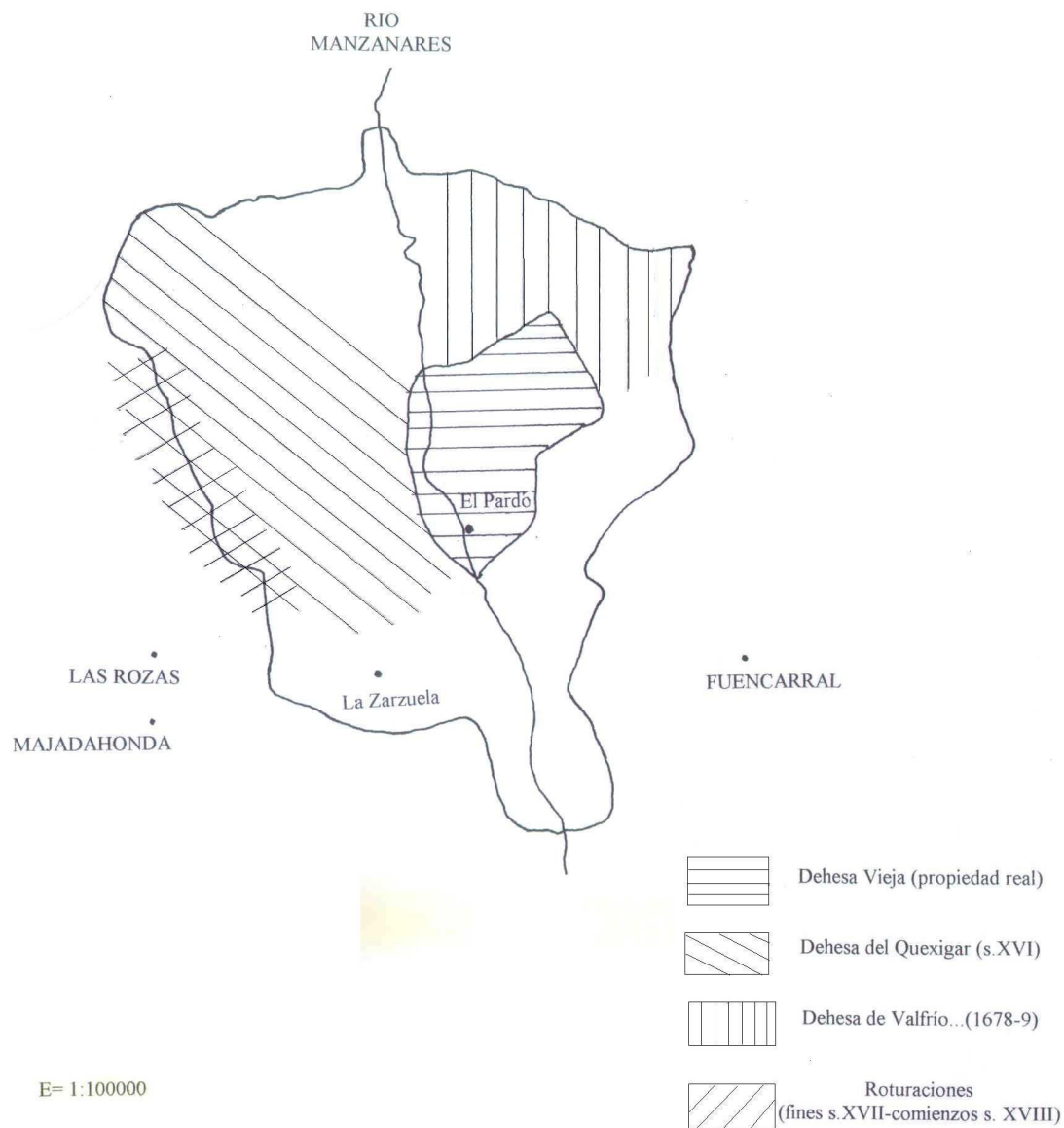
---

<sup>383</sup> AHN, Consejos, leg. 4123.

<sup>384</sup> AVM-S, 3-163-13.

## MAPA 5

### EL MONTE DE EL PARDO EN LA EDAD MODERNA: USOS DEL ESPACIO



<sup>385</sup> AVM-S, 3-163-38.

#### 4.4 – USOS FORESTALES: LEÑAS Y CARBONEO

Todavía en 1676 el procurador general de Madrid podía afirmar que “son los montes públicos y comunes desta Villa y su Tierra en toda su jurisdicción cinco leguas en contorno, y como tales tienen aprovechamiento en ellos y en todos los del Real de Manzanares todos los vecinos de Madrid y lugares de su Tierra”.<sup>386</sup>

La utilización integrada del monte de El Pardo (excluyendo la Dehesa Vieja) es la característica del monte mediterráneo en el Antiguo Régimen. La corta de leña, en ocasiones el carboneo, se combinan con la práctica de la ganadería que aprovecha los pastizales que la cobertura forestal protege. Por otro lado, el predominio casi absoluto de la encina permite el disfrute de la montanera por las piaras de cerdos. Progresivamente la mancha de bosque natural se iría así aclarando hasta convertirse en monte hueco. Pero esta evolución, tan habitual en el encinar mediterráneo, no culminó claramente en los términos públicos de El Pardo, por lo que en el s. XVIII aparecen preservados restos importantes de la mancha boscosa original.

La regulación de los aprovechamientos forestales, como se ha señalado, se llevaba a cabo mediante las ordenanzas municipales a las que, con el establecimiento de la corte en Madrid, se fueron superponiendo las ordenanzas reales. Pero además de estas normas legales, cambiantes en el tiempo para adaptarse a nuevas circunstancias, el municipio de Madrid decidió acotar determinados terrenos de el Pardo para formar dehesas, lo que suponía limitar el carácter público de todos o alguno de los aprovechamientos, y por otro lado garantizaba una mejor protección del terreno. La medida más importante en este sentido durante el siglo XVI fue la formación de la *Dehesa del Quexigar o Quejigal* (Mapa 5). Se trata de una gran superficie acotada situada en la zona este del actual monte de El Pardo, y cuyos límites se extendían “desde la dehesa de la Zarzuela y alinda con el camino que va a Valladolid por el lugar de Las Rozas y también alinda con el Bosque del Pardo y corre hasta cerca de Torrelodones”.<sup>387</sup> El topónimo del Quejigal parece mostrar la presencia del quejigo (*Quercus*

---

<sup>386</sup> AVM-S, 2-395-32.

<sup>387</sup> AVM-S, 3-165-4.

faginea), que en todo caso, dada la exigencia de humedad de esta especie, se limitaría a los barrancos, mientras el predominio casi absoluto correspondería al encinar.<sup>388</sup>

Realizado en los primeros años del s. XVI, el objetivo de este acotamiento consistía en fomentar el desarrollo y la conservación de la cobertura forestal, como se declaraba en el ya citado “Informe sobre los montes de Madrid y su Tierra” de 1526: “Los otros montes que esta Villa tiene son Valdoromasa e el Quexigal e Hamaniel, que están vedados de cortar por virtud de las órdenes que sobre ello hay fecho, las cuales se guardan y executan para que los dichos montes crezcan e se conserven e el dicho término del Quexigar de ocho años a esta parte se ha vedado”.<sup>389</sup> La prohibición de cortar leña se extendió hasta bien entrado el s. XVII, dando como resultado la conservación de un “monte alto de encinas”.<sup>390</sup> En cambio se mantuvo el carácter comunal de aprovechamiento de pastizales y montanera: “en esta dehesa tiene aprovechamiento Villa y Tierra cuanto al pasto de la yerba y bellota cuando Madrid lo desveda y no otro ninguno ni entra otra ninguna persona”.<sup>391</sup>

La amplitud y duración del acotamiento de los aprovechamientos silvícolas afectó a los pueblos madrileños de las cercanías, que se vieron privados así de la posibilidad de abastecerse de leña y carbón del cercano monte, por lo que tuvieron que recurrir a utilizar sus derechos comunales en los montes del Real de Manzanares. A partir de entonces, el curso del Manzanares marca dos grandes zonas en lo referente a los aprovechamientos forestales: en su orilla derecha las restricciones a los aprovechamientos comunales era completa, mientras estos derechos se mantenían en la orilla izquierda. Así lo certificaban las declaraciones de las distintas localidades en las *Relaciones Topográficas*, donde se observa la naturaleza silvícola del territorio. Las Rozas: “se proveen de leña de la tierra del Real de Manzanares, porque aunque junto al dicho lugar hay una gran dehesa, dicen que es de la villa de Madrid y esta

---

<sup>388</sup> RIVAS-MARTINEZ, S. y otros- “La vegetación de El Pardo y la cuenca alta del río Manzanares”, en DA CRUZ MORA, H. y otros- *El Monte de El Pardo*, Madrid, 1992, pág. 60.

<sup>389</sup> AVM-S, 2-395-17.

<sup>390</sup> Carlos M. Manuel Valdés señala que no sabemos si hay correspondencia entre los conceptos actuales de “monte alto” (obtenido por semilla) y “monte bajo” (por brotes de cepas o troncos) y los que se aplicaban en el Antiguo Régimen. Parece que se utilizaría según el sentido común de formaciones aéreas en el primer caso o arbustivas. MANUEL VALDES, C. M.- *Tierras y montes públicos en la sierra de Madrid (Sectores central y meridional)*, Madrid, 1996, p. 115. En todo caso, un monte alto de encinas implica una intervención humana encaminada a favorecer el crecimiento aéreo de este árbol.

<sup>391</sup> Libro Becerro de 1645. En el Libro Becerro de 1695 se añade: “no consta que de muchos años a esta parte la haia Madrid arrendado ni tenido aprovechamiento ninguno”.

vedada, e de ella antiguamente se solian proveer de leña.... e que la falta que hay en este dicho lugar es de no poderse criar ganados cabrunos, por razon de que los montes de la villa de Madrid los tienen vedados para cabras, e los tienen hechos dehesas”. Respuestas similares se encuentran en otros pueblos cercanos como Majadahonda, Aravaca o Pozuelo. Así, Pozuelo de Aravaca afirma que “está cerca de un monte de encina, que se dice la dehesa del Quexigar, dehesa vedada, y que es de la villa de Madrid e su tierra, pero que de los montes que el dicho lugar se provee de leña es del Real de Manzanares”.

Por el contrario, la zona este del monte mantuvo durante este período los aprovechamientos comunales de leña, lo que benefició a los pueblos comarcanos. Lo reconocían los vecinos de Fuencarral en las mencionadas *Relaciones Topográficas*: “el dicho lugar de Fuencarral tiene leña la que ha menester, y que se proveen de los montes de la villa de Madrid, que esta a una legua del dicho lugar de Fuencarral, y que ansimismo se proveen del real de Manzanares”. En el mismo sentido declaran localidades como Hortaleza, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, que complementaban su abastecimiento con el disfrute de los montes del Real de Manzanares.

Las restricciones a estos usos comunes procedieron del cazadero real, concretamente de los guardas reales que se habían ido convirtiendo en la práctica en los únicos vigilantes del término madrileño (a pesar de la existencia de guardas de montes de Madrid, inoperantes). Diversas denuncias de los vecinos que intentaban cortar leña en estos montes ponían de manifiesto los abusos que practicaban, consistentes en impedir (recurriendo a la violencia si era preciso) las cortas de los vecinos, e incluso vender ilegalmente a particulares el derecho a cortas y talas con total desprecio de las ordenanzas reguladoras.<sup>392</sup>

La presión que sobre los montes del Real ejercen estas localidades es ínfima comparada con la de la Villa, especialmente desde el momento de la capitalidad. El resultado es una deforestación de los alrededores de Madrid que a su vez origina dificultades en el abastecimiento de leña y carbón vegetal. “Ahora bien, si la capitalidad intensificó la explotación forestal de la Sierra, por otra parte trajo consigo en unos casos la conservación y

---

<sup>392</sup> Así lo denunciaba el procurador general de Madrid en 1676: “siendo como son los montes públicos y comunes desta Villa y su Tierra en toda su jurisdicción...de mucho tiempo a esta parte siempre que envían o van a cortar leña guardando la ordenanza, sin cortar pies, aunque sea coger tomillos o leña seca, los molestan los guardas del Pardo y hacen malos tratamientos de obra y palabra, quitándoles la leña y las cabalgaduras, y al mismo tiempo venden los montes públicos y comunes de Madrid, permitiendo los corten y talen por el pie y arranquen de raíz a los que les pagan la leña que traen”. AVM-S, 2-395-32.

en otros la creación de masas arbóreas en aras de la afición cinegética, del esparcimiento o del prestigio”.<sup>393</sup> La preservación de la riqueza forestal de El Pardo se dio en mayor medida en la zona norte y determinadas áreas del sur, que se vieron escasamente afectadas por roturaciones o prácticas abusivas. En un informe del mayordomo de propios madrileño en 1707 se calificaba al cuartel de Castrejón como “monte bajo de chaparras”. En cambio, el cuartel de Navachescas era “monte de chaparras altas muy poblado”, mientras los de Velada, Valdelagana, la Angorrilla y el Águila formaban un “monte alto de chaparras”.<sup>394</sup>

Los aprovechamientos comunes continuaron en la parte superior de El Pardo hasta el último cuarto del s. XVII. Vecinos de Vicálvaro y Vallecas acudían allí para abastecerse de leña seca de chaparros, tomillos, hornijas que necesitaban para una industria en la que se habían especializado: el abasto de pan a Madrid. También allí sufrían los abusos de los guardas del Real Sitio, que les exigían el pago de derechos por cada carga que llevaran, según protestaban ante las autoridades municipales.<sup>395</sup>

Es tras el adhesamiento de Valfrío, Navalacarrera y las Dehesillas en 1678 cuando se completa la patrimonialización de los montes. Desde esa fecha las leñas de todas las tierras de Madrid son aprovechadas por el municipio como uno más de sus propios. En la escritura de concordia se fijaba la forma de realizar las cortas en la dehesa carnícera: “si esta Villa quisiese chapodar los dichos términos para hacer encinares, lo ha de poder hacer, repartiendo el distrito en seis cuarteles y ha de chapodar cada año un solo cuartel y sacar las rozadizas... y que no se haia de poder entrar a volver a podar el cuartel hasta haber dado vuelta alternativamente a los demás cuarteles”. Este sistema de rotación, que ya hemos visto que no llegó a completarse en la dehesa, era el empleado en los demás montes de Madrid.

La obtención de leña o, más frecuentemente, carbón vegetal, se podía hacer de diversas maneras. Para las leñas, el ayuntamiento procedía o bien a subastar a tanto alzado todo el monte o bien a ejecutar la poda por su cuenta y encargarse de la venta de la leña. También en el caso del carbón podía el municipio efectuar la fábrica y venta posterior por medio del sobrestante, pero la fórmula utilizada normalmente era el ajuste del precio por

---

<sup>393</sup> VALENZUELA, M.- *Urbanización y crisis*, págs. 208 y sigs., para la problemática forestal del NO de Madrid. La cita, en p. 210.

<sup>394</sup> AGP, leg. 1251, exp. 12.

<sup>395</sup> AVM- S, 2-395-32.

arroba de carbón obtenida, pues consideraban los oficiales concejiles era el medio más seguro y cómodo.<sup>396</sup>

Aunque eran los regidores comisarios de montes o el mayordomo de propios los encargados de decidir tras un reconocimiento del terreno la fecha y zona donde proceder a las cortas, Madrid debía contar con su poderoso vecino, siendo imprescindible la licencia del alcaide del Real Sitio o de su teniente. Mediante este mecanismo, el aprovechamiento que el municipio puede realizar del vuelo de sus numerosos montes se ve totalmente supeditado a la función cinegética: el permiso regio sólo se concedía si no interfería la caza de los soberanos. Los guardianes reales se mostrarán muy celosos de sus deberes y si, por ejemplo, la poda de leña o fabricación de carbón vegetal y su transporte no habían terminado cuando comenzaba el periodo de la brama de los venados (principios del otoño) se interrumpía hasta el año siguiente. Es lo que sucedió en 1744, cuando la llegada de las lluvias hizo que el ganado que transportaba la leña se utilizara en la labranza, por lo que no fue posible terminar el acarreo. El alcaide, marqués de San Juan, autorizó únicamente que Madrid sacara la leña que estuviera fuera de las Barrancas de Carbonero, prohibiéndolo de forma tajante para la situada en el interior, “pues siendo inevitable el bullicio preciso para esta maniobra aunque la ejecutase una comunidad de monjas, es consiguiente el perjuicio para la brama, por ser tan contrario a la quietud que se necesita procurar en su tiempo”.<sup>397</sup> Lo mismo sucedió en 1748, cuando la Villa solicitó al teniente de alcaide permiso para carbonear en los cuarteles de Navachescas y Querada, recibéndolo exclusivamente para Navachescas. La entresaca debió suspenderse al llegar la brama, reanudándose en 1749, año en que también se comenzó en el cuartel de Castrejón, donde, de nuevo por igual causa, se paró hasta 1750.<sup>398</sup>

No era ésta la única limitación que la presencia del cazadero real suponía para los madrileños, pues los ingresos que producía el monte se veían cercenados por las exigencias de los monarcas o sus mismos representantes. El erario real obtuvo la concesión de permiso para cortar en los montes municipales en 1707, continuando tales aprovechamientos hasta 1717. Los ingresos conseguidos se calcularon en unos 220.000 rs, aproximadamente lo que producía todo el patrimonio municipal en un año.<sup>399</sup> Por su parte, la licencia que el alcaide otorgó a

---

<sup>396</sup> AHN, Consejos, leg. 71, exp. 10.

<sup>397</sup> AVM-S, 3-8-21.

<sup>398</sup> AGP, caja 9454, exp. 13.

<sup>399</sup> AVM-S, 3-8-21.



Madrid en 1738 costó a la hacienda municipal 36.000 rs., que se concedieron como contraprestación y que estaban destinados a reparaciones en las casas de los guardias reales; tal cantidad representa la mayor parte de lo que produjo la corta de aquel año, 42.372 rs. Tan a merced del rey estaba la Villa, que el alcaide comunicaba a su superior ser “de parecer que, respecto de que en adelante pude producir iguales efectos, se la insinúe en nombre de V.M. lo grato que le ha sido este servicio”.<sup>400</sup>

El resultado son unos ingresos para las arcas concejiles totalmente irregulares, como se aprecia en el cuadro adjunto. Si en algunos años el producto de la leña y carbón en los montes de El Pardo superó los 60.000 rs, en otros muchos no fue posible obtener ningún rendimiento. La dependencia de la licencia era tan fuerte que el mismo municipio reconocía resignada y sumisamente que “sólo se puede considerar producto de aquel propio el que la piedad del rey... ha concedido”.<sup>401</sup> Nada hay más lejano de la teoría de un patrimonio generador de unas rentas para los gastos ciudadanos.

---

<sup>400</sup> AVM-S, 3-163-38 y AGP, caja 9416, exp. 12.

<sup>401</sup> AVM-S, 3-8-19.

**CUADRO 4 - PRODUCTO DE LAS CORTAS EN LOS MONTES DE EL PARDO,  
1707-1750**

<b>AÑO</b>	<b>CANTIDAD (ARROBAS)</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>NOTAS</b>
1707			9.000	Se ajustó con el convento de San Francisco
1708-19			220.000	Estimación. Cedidas a la Hacienda Real
1718			28.424	
1719			53.270	
1720			64.443	
1721			50.731	
1724			5.200	Cedido al convento de San Francisco
1731	13.396	CARBON	16.154	Arrendamiento
1732	23.144	CARBON	27.708	Arrendamiento
1733	48.510	CARBON	57.647	Arrendamiento
1735	29.104	CARBON	32.323	Administración municipal
1736	48.529,5	CARBON	58.280	Administración municipal
1737	17.750	LEÑA	6.786	Administración municipal
1738	77.064	LEÑA	42.372	Cedidos 36.000 rs a la Casa Real
1740	96.136	LEÑA	62.206	
1744			67.078	
1748			61.445	

1749			48.084	
1750			26.814	Desde 1751 se suspenden las cortas de Madrid, recibiendo el “equivalente”

FUENTE: AVM-S, 3-8-21 y 3-83-1. Los datos de 1731 a 1740 en AVM-S, 3-8-6

#### 4.5 – LA PRESION DE LOS CULTIVOS

Son los aprovechamientos agrícolas los más directamente afectados por los privilegios de la caza. Numerosas cédulas reales marcaron los amplios límites del vedamiento de una montería que, así protegida, constituyó una constante amenaza para la agricultura del entorno de El Pardo.<sup>402</sup>

De la gravedad de la situación en la segunda mitad del s. XVI dan buena cuenta las *Relaciones Topográficas*. Las especies procedentes de El Pardo se extendía por diversos términos, como recogen las declaraciones de Comenar Viejo, Fuencarral, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Villanueva de Fuente del Fresno, Chamartín, Húmera o Pozuelo de Aravaca. Además, se explicitaba el perjuicio que se causaba a la producción agraria en pueblos como Majadahonda: “dicho pueblo no es rico a causa de los daños que la caza del bosque de El Pardo de Su Majestad les ha hecho”, o Las Rozas: “que aun les hacen harto daño las dichas cazas.

El problema se fue agudizando con el tiempo y, por ejemplo, ni siquiera el que los vecinos de Fuencarral cercaran todas sus heredades con más de dos mil tapias para protegerlas de las acometidas del patrimonio cinegético de los reyes pudo impedir que en 1684 sufrieran danos que se tasaron en casi 15.000 rs.<sup>403</sup> La Real Hacienda se vio obligada al pago de compensaciones a los propietarios perjudicados, lo que suponía una curiosa “redistribución”

<sup>402</sup> Por ejemplo, el territorio vedado por la real Cédula de 26 de junio de 1561 era el comprendido entre: Getafe, Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, Valdemorillo, La Herrería, la línea de cumbres de la Sierra hasta el río Guadalix, el puente de Viveros, Coslada, Vallecas, Villaverde y, de nuevo, Getafe. AGP, Reales Cédulas, tomo II, f. 133 y 133 vº.

<sup>403</sup> Citado en ORTIZ DE PINEDO, A.- *Los cazaderos de Madrid*. Madrid, 1898, p. 311.

de las cargas de la caza, que los pueblos del contorno comparten así con los demás contribuyentes de la monarquía.

Lógicamente, también los predios madrileños se vieron afectados por los desplazamientos de las reses venatorias. La roturación de diversos términos en la zona no es sino continuación de un más antiguo aprovechamiento agrícola que deja ya patente la información hecha por el concejo de Madrid en 1312. Su origen se encuentra en la adjudicación de comunales para labranzas por parte de la Villa a sus aldeas debido al crecimiento de su población o una coyuntura expansiva. Tal concesión tenía como contrapartida el pago de unos derechos que en Madrid reciben el nombre de “nihares”. Otros términos son puestos en cultivo gracias a concesiones y privilegios reales o a la ocupación ilegal, finalmente reconocida por el municipio.

Determinar las zonas labrantías resulta difícil por cuanto desaparecieron como tales una vez constituido el Cordón de El Pardo a mediados del s. XVIII. Son, por otra parte, explotaciones que en muchos casos no tienen continuidad temporal. Aprovechando el escaso valor de la renta exigida, muchos labradores o concejos de los contornos desafían el peligro que supone la caza y ponen en cultivo tierras durante el corto periodo que son rentables, abandonándolas a continuación o roturando otras nuevas. Con todo, se pueden señalar dos áreas principales de uso agrícola. Al oeste, lindando con el término municipal de Las Rozas, los arrendamientos de tierras se distribuyen a lo largo del arroyo de Trofa (cuarteles de Castrejón y Trofa), extendiéndose a través del barranco de la Jara por Valóbreco y el arroyo de las Dos Hermanas, ya dentro del cuartel de Valdelapeña, donde aparece otro núcleo importante en Peribáñez, junto a la desembocadura del arroyo de Manina en el Manzanares. Al este hay continuidad en el aprovechamiento de los alrededores de la casa del Goloso, en el cuartel del mismo nombre, mientras que más al norte, en los cuarteles del Águila y Valdelaganar nos encontramos con algunos arrendamientos hasta mediados del s. XVII, desapareciendo tras la formación de la dehesa carnicera. De esta forma, en las tierras madrileñas de El Pardo, aparece un norte donde el uso forestal y pastoril era predominante; en cambio, al este y oeste del enclave real, sin que estos aprovechamientos desaparecieran, se desarrolló una explotación agraria de cierta entidad (Mapa 5).

Los arrendatarios proceden de las aldeas cercanas. En Trofa los principales son los concejos de Las Rozas y Majadahonda, que toman amplias extensiones de terreno para repartir entre sus vecinos. Aunque los concejos de Húmera y Pozuelo arriendan a comienzos

del s. XVII pequeñas parcelas, desaparecen pronto, cediendo su lugar a los particulares, entre los que destacan los de los ya citados Las Rozas y Majadahonda, apareciendo también labradores procedentes de los Carabancheles o Madrid. Por su parte, los habitantes de Fuencarral prácticamente monopolizan el disfrute de los terrazgos situados al este.

Existió un proyecto de cultivar una parte de lo que después se integrará en el monte de El Pardo por parte del concejo de Las Rozas con el beneplácito de Madrid. A finales del s. XVII los vecinos de esta localidad solicitaban a la capital nuevos terrenos para ampliar unas posesiones que se veían permanentemente asoladas por las cazas reales. Un “hambre de tierras” que se intentó aliviar mediante el arrendamiento de todas las tierras de Madrid (lo que incluía tierras de propios y baldíos convertidos así en propios) dentro del término de Las Rozas. El concejo del lugar figuraba como arrendatario, repartiéndolas a continuación entre los vecinos. Las roturaciones llegaron hasta los límites del monte que estaban vedados (mapa 2), alcanzando la zona del arroyo de Trofa (Mapa 5). No se desceparon encinas pues los términos labrados estaban eriales. En la enumeración de linderos aparece algún chaparro aislado, que puede deberse a la propia expansión por regeneración natural o, más probablemente, a la degradación por pastoreo de las cercanías del monte protegido.<sup>404</sup>

Los arrendatarios de predios madrileños se ven continuamente acosados por un uso excluyente del suelo, el cinegético. Así, hubo numerosos periodos en que no se registró ningún arrendamiento: 1615-27, 1635-45, 1662-70, 1686-92, 1711-17 y 1732-44. Debe también tenerse en cuenta que en los años que sí se realizaron no abarcaban todas las tierras disponibles. Pero son las rentas las que reflejan de una forma incuestionable la absoluta incompatibilidad entre aprovechamientos agrícolas y caza real. Una práctica frecuente del municipio madrileño para compensar los destrozos que causaban las monterías era descontar una parte del terreno comprendido del precio total del contrato. Por ejemplo, en 1628 el concejo de Majadahonda arrendó 4.854 fgs, de las cuales se rebajaron 350 en la renta global. En 1696 la proporción descontada aumentó a casi la mitad de las 2.300 fgs que tomó el de Las Rozas. Pero ni estas medidas consiguieron evitar la caída de la renta: si entre 1608 y 1614-15 se pagaron 18 rs/fg, en 1628, además de deducirse del precio la décima parte de la extensión arrendada, sólo se dieron 5,5 rs/fg, cantidad que había disminuido por debajo de los 4 rs en 1696. A lo largo de la primera mitad del s. XVIII siguió el hundimiento del precio: 2,5 rs/fg en el arrendamiento de casi 1.500 fgs por Majadahonda en 1744, mientras ese mismo año el

---

<sup>404</sup> Los arrendamientos comienzan en 1696 y se extienden hasta 1748. AVM-S, 3-165.

lugar de Las Rozas pagó 4.000 rs por 5.089 fgs, menos de 1 real/fg. Era evidente que la situación había tocado fondo.<sup>405</sup>

Así lo habían visto ya en 1717 los oficiales municipales que, tras reconocer los alrededores de La Zarzuela, informaban: “se hallan perdidas más de 868 fanegas, sin haber habido (aunque son de la mejor calidad) quien las haia querido arrendar ni a medio real por fanega”. La causa estaba clara: el aumento de la presión que para los sembrados suponía el patrimonio cinegético real, lo que tendría efectos negativos en la estructura agraria de toda la comarca: “dentro de poco tiempo perderá V.S. el todo o la maior parte de las tierras, y perecerán los labradores por impedirles labren aun las propias, con sólo el motivo de que haia una y otra boca que haia causado la introducción de la caza, que se va estendiendo cada día con exceso en las tierras vecinas a los Sitios. Que todo necesita pronto y eficaz remedio”.<sup>406</sup>

Remedio imprescindible para las tierras comunales y de propios de Madrid en El Pardo, que en el s. XVIII aparecen como una realidad inoperante: labranzas arrasadas por los venados del monarca, montes escasamente aprovechados por su subordinación a las necesidades de la montería, pastos que apenas sí podían ser disfrutados por los rebaños de los madrileños. Usos y derechos comunales de los vecinos de la Villa y Tierra, en fin, agonizantes ante la progresiva pujanza del destino cinegético del espacio.

#### 4.6 – LA EXPROPIACIÓN DE EL PARDO EN EL S. XVIII.

Toda esta problemática que el cazadero de El Pardo causaba en los aprovechamientos de pastos, leñas y cultivos de los terrenos limítrofes obligó a los reyes a hacer diversas concesiones, como la de permitir la caza de algunas especies o dar compensaciones económicas a las localidades afectadas. Pero el objetivo último de los soberanos era, como ha quedado reflejado en las páginas precedentes, la de afianzar su control del espacio en detrimento de cualquier otra presencia en la zona. El mejor medio para ello era conseguir la propiedad plena, lo que se realizará mediante donaciones, compras o expropiaciones que irán

---

<sup>405</sup> AVM-S, 3-163-38.

<sup>406</sup> AVM-S, 3-41-46.

incrementando paulatinamente el patrimonio real: La Zarzuela, Quinta del duque del Arco (la actual Quinta de El Pardo)... Sin embargo, todas estas ampliaciones son de escasa entidad al lado del Cordón de El Pardo, el gran coto redondo que formó Fernando VI en 1749. Una cerca de casi 100 kms de longitud formaba el perímetro de tan extenso Sitio Real, protegiendo la riqueza venatoria exclusiva de los monarcas, que han pasado así de disfrutar del vedamiento del espacio necesario para la caza a disponer de la plena propiedad del mismo.

A continuación voy a centrarme en la forma en que el ensanche real afectó al municipio madrileño, del que ya conocemos su notable asentamiento en El Pardo, concretado en la variedad y amplitud de unos usos agrarios que se vieron continuamente obstaculizados por la función venatoria. Por tanto, toda extensión del patrimonio regio tenía que afectar a Madrid. Y lo hará en tal grado que la Villa será finalmente desalojada de este espacio.

Al núcleo que los reyes habían acotado como cazadero privado a mediados del s. XV se agregaron los terrenos circundantes estimados necesarios para el mantenimiento de la caza, siguiendo los límites que en 1748 había trazado el alcaide Feliciano de la Vega.<sup>407</sup> Se añadió además una importante propiedad, el monte de Viñuelas, perteneciente a la marquesa de Mejorada. Sus casi 10.000 fgs, que hemos visto cómo fueron arrendadas para el abasto de carne a Madrid en el s. XVII, presentaban gran interés cinegético, y ya desde 1638 se regulaba por las mismas ordenanzas de caza que la posesión real.<sup>408</sup> Situada fuera del término de El Pardo, se unió a él mediante un estrecho corredor que atravesaba el camino de Madrid a Colmenar Viejo.

Ciñéndonos a El Pardo, las propiedades agregadas presentan gran variedad de tamaños y aprovechamientos. Junto a dehesas como Las Batuecas, perteneciente al duque de Huéscar, aparecen huertas, viñedos y explotaciones de regular extensión, como las de Barcia, Medina o Casanova, mientras que un centenar de pequeñas propiedades se destinaban a diversos usos agrarios, como labranzas, viñas, colmenares, etc. Pero el gran protagonista fue el municipio madrileño, puesto que la mayor parte de la ampliación de El Pardo se hizo a costa de sus propiedades circundantes, como se aprecia en los mapas 2 y 3. Veamos algunos datos comparativos: *el total de las tierras de propios y comunes de Madrid incorporadas al Cordón superó las 28.000 fgs (casi 10.000 Has)*, una extensión tres veces superior al monte de

---

<sup>407</sup> CALANDRE, L. - *El Palacio del Pardo*, p. 115. El texto del alcaide en págs. 173-174.

<sup>408</sup> ORTIZ DE PINEDO- *Los cazaderos de Madrid*, p. 179.

Viñuelas. Dejando al margen esta propiedad, las tierras municipales supusieron las dos terceras partes de todo el terreno cercado por Fernando VI, incluida la Dehesa Vieja o propiedad real antes de 1749. En términos económicos, la compensación que recibió la Villa fue la mitad de todo lo pagado por el ensanche real, proporción que valoraremos mejor si consideramos que varios terrazgos particulares se destinaban a huertas, viñas u olivos y, por tanto, recibieron una tasación por unidad de superficie mucho más elevada. Un ejemplo ilustrativo: si las citadas 28.000 fgs reportaron finalmente a Madrid una indemnización de casi seis millones de rs, el propietario de las 264 fgs de Barcia recibió por el mismo concepto más de un millón de rs, un precio por fanega unas 17 veces superior al de las tierras madrileñas.<sup>409</sup>

En definitiva, el ensanche del Cordón de El Pardo abarcó principalmente las tierras municipales que rodeaban el cazadero real, completándose con otras propiedades particulares desperdigadas por toda la zona, ubicadas muchas de ellas dentro de los términos madrileños, lo que complica el panorama de la distribución de la propiedad. Sin embargo, no era la primera vez que el municipio sufría la expansión del patrimonio real en la comarca. Hay un precedente que esclarece los propósitos de los reyes y los medios a los que iban a recurrir en posteriores ampliaciones.

La expropiación de la Zarzuela representa un claro antecedente de la operación que culminará con el Cordón de El Pardo. La Zarzuela, una finca al SO de El Pardo, fue creada por el alcaide Pedro de Córdoba a finales del s. XV por medio de la adquisición de diversas propiedades y de la usurpación de términos públicos. Incorporada por Felipe IV a su patrimonio, formaba un núcleo independiente del antiguo cazadero regio hasta 1749, aunque también cumpla funciones de montería para la familia del monarca.

Felipe V decidió ampliar los límites de la posesión con el fin de conseguir el desarrollo de la caza real, procediendo a expropiar las tierras que rodeaban a la finca, entre ellas algunas pertenecientes a Madrid. La forma en que se desarrolló el proceso clarifica las relaciones que existían entre el primer Borbón y el ayuntamiento que gobernaba la capital de su reino. El 19 de julio de 1714 José de Grimaldi, Secretario del Despacho Universal, envió una misiva al corregidor madrileño que bien merece la transcripción:

---

<sup>409</sup> VALENZUELA, M. - “Segregación y cambio funcional en un espacio forestal suburbano: El Pardo”, *AIEM*. t. XI (1975), págs. 31-33, especialmente el cuadro de la p. 31.



"Deseando el rey dilatar algo más el sitio de La Zarzuela para la mayor diversión de la caza y estándose poniendo en ejecución, se han encontrado en aquel paraje unas tierras que son de Madrid y se dice las arrienda en una corta cantidad y aunque se ha propuesto a S.M. las pida a Madrid, no ha entrado en ello, pero ha querido que yo reservadamente lo prevenga a V.S. para que por sí eche esta especie en el Ayuntamiento, manifestándole este deseo de S.M. para que teniendo libertad y no necesitando de estas tierras y no habiendo perjuicio de tercero pueda hacer al rey el servicio de ellas, en cuyo caso y dejando Madrid su acción libre, pasará S.M. a manifestarle su gratitud".

Hay insinuaciones que valen más que un Real Decreto, como evidencia Felipe V. Coherente actitud la de un monarca absoluto al negarse al trato institucional con la ciudad donde reside su Corte, recurriendo a la vía del favor y el servicio personal.

Podía ser que el ayuntamiento considerara el caso como un mero intercambio económico y exigiera una contraprestación por sus propiedades. Esta parece ser la primera actitud del consistorio que, en la misma sesión de 23 de julio de 1714 en que el corregidor notificó la demanda de Grimaldi, acordó solicitar información tanto sobre las tierras afectadas como sobre la contribución de los edificios concejiles por la regalía de aposento, con vistas a liberarse de esta carga. Un único regidor discrepó, el marqués de Palacio, que pidió que "se sirva desde luego a S.M. con las tierras que se necesitaren y después se trate de lo que sea". Pero también podía suceder que los gobernantes madrileños cambiaran de opinión, sobre todo en un tema en el que el poder real andaba por medio, y así sucedió a la semana siguiente, cuando la mayoría de los regidores coincidieron con el parecer de Palacio: *servir al rey con el patrimonio rústico que deseaba sin solicitar su pago directamente*. Sólo tres regidores "osaron" oponerse, con el pretexto de que las tierras de La Zarzuela, al igual que todas las de Madrid, se hallaban hipotecadas a los censos constituidos sobre los propios y sisas de la capital, y por tanto el concejo había perdido su condición de propietario, no pudiendo disponer libremente de ellas. Además de estas protestas por el endeudamiento municipal que habían causado las peticiones fiscales de la Corona, otros dos regidores exigieron que se dieran garantías sobre el pago de los terrenos cedidos.

En suma, la finca real se amplió en 2.310 fgs (unas 800 Has), comprendidas entre el camino real de Castilla y el arroyo de Trofa. De ellas, 835,5 fgs eran de Madrid; el resto pertenecía al concejo y vecinos de Aravaca (1.114 fgs), la iglesia y vecinos de Majadahonda

(209 fgs) y el mayorazgo de Gudiel de Vargas (147,5 fgs). El mecanismo de pago resultó aun más perjudicial para Madrid, pues no sólo se vio afectado por la pérdida de sus tierras anexionadas, sino que las 1.070,5 fgs restantes se indemnizaron con una superficie equivalente del patrimonio municipal madrileño. En efecto, el rey había decidido compensar a los propietarios expropiados con nuevas fincas rústicas y no con dinero, para lo cual se recurrió a las propiedades de un concejo cuyos capitulares habían dado tan generosa luz verde al monarca.

El resultado de la operación fue que el municipio disponía de 2.329 fgs menos en la comarca. Los afectados recibieron la misma extensión en tierras hasta entonces pertenecientes a la Villa; las de los concejos de Aravaca y Majadahonda estaban situadas dentro de sus respectivos términos, mientras las del mayorazgo de Gudiel de Vargas se localizaban junto al arroyo de Trofa.<sup>410</sup> El patrimonio municipal madrileño en los lugares mencionados quedó prácticamente desarticulado, con la consiguiente pérdida de la capacidad de influencia económica y política en un territorio de su jurisdicción.

No aprovecharon los regidores la oportunidad que se les presentaba para obtener una compensación significativa de la Real Hacienda. La misma lasitud política que demostraron en la concesión de los terrenos se aprecia en la modestia de sus peticiones. Estimando que los bienes rústicos perdidos aportaban a las arcas municipales unos 5 ó 6.000 rs anuales -una renta muy baja debido a la ya explicada cercanía a la caza real-, solicitaron a cambio la exención de la regalía de aposento de los inmuebles concejiles, una de las múltiples servidumbres contraídas con las finanzas reales, que importaba anualmente 4.754 rs. La Real Cédula de 23 de julio de 1715 aprobó esta transacción, concediéndose diversos censos que completaran los 6.000 rs de renta anual en que finalmente se tasaron las tierras madrileñas.<sup>411</sup>

Concluía así una acción que no había sido rentable ni técnica ni financieramente para un municipio cuyos regidores fueron incapaces de plantear una negociación con la monarquía, cediendo no ya a sus órdenes, sino incluso a sus meras insinuaciones. Pero si por estas características políticas resulta un caso muy interesante, por la extensión afectada apenas si es un modesto precedente de la gran ampliación de El Pardo, que veremos a continuación.

---

<sup>410</sup> Hay un exceso de 19,5 fgs. que son las tierras que se descontaron en Majadahonda por improductivas.

<sup>411</sup> AVM - S, 3-164-3.

*El cordón de El Pardo* representa la solución definitiva al largo contencioso que venía desarrollándose entre rey y municipio por este espacio. La idea de cercar un amplio terreno cinegético había aparecido con anterioridad como medio para evitar los problemas que los venados de El Pardo creaban en los predios circundantes, así como para suprimir la actividad de los cazadores furtivos, pero su elevado coste disuadió siempre a los reyes. Será en 1749 cuando Fernando VI tome la decisión política de proceder al cerramiento, una decisión que no ofrece ninguna duda sobre su objetivo, claramente manifestado en el deseo real de que:

"haya de quedar y quede de su real cuenta en propiedad todo el continente que abraza y encierra el citado nuevo Cordón con su territorio, vuelo, pastos y leñas que han de agregarse desde luego al bosque del Pardo, cesando en el uso y aprovechamiento que hasta aquí hayan tenido de ellos..., todo a fin de que dándose este recinto para extensión, uso y resguardo de la caza logre ésta en él la quietud que se desea sin que por motivo ni razón alguna haya quien pretenda entrar al disfrute y aprovechamiento de dichos pastos o leñas a perjuicio del real recreo".<sup>412</sup>

En definitiva nos encontramos ante una auténtica expropiación: todas las propiedades incluidas en los nuevos límites pasaron al patrimonio real, pagándose un precio fijado por los peritos tasadores. Los afectados no podían tener ninguna duda, ya que *el cerco se construye antes de que finalice la expropiación*. Se conseguía así la propiedad plena, lo que permitió suprimir las reservas y vedamientos que en materia de caza se aplicaban en las propiedades ajenas. Por su parte, la jurisdicción privativa del alcaide del Real Sitio se limitó al territorio tapiado.<sup>413</sup>

Ya sabemos cómo el ensanche se hizo a costa del patrimonio municipal madrileño. Ahora bien, si el proceso de expropiación comenzó en 1749 y las obras de construcción del cerco en 1751 y terminaron en 1753, el ayuntamiento no recibiría el pago de sus bienes hasta 1763. En un primer momento nada hacía prever esta situación. El ayuntamiento de Madrid se encontraba ante hechos consumados cuando el 3 de junio de 1749 el marqués de la Ensenada le notificaba la decisión real de cercar el Cordón de El Pardo. Como principal afectado por la expropiación de las tierras comprendidas dentro de los nuevos límites, el municipio debía nombrar comisionados que negociaran la indemnización correspondiente con el representante

---

<sup>412</sup> AVM-S, 3-163-4.

<sup>413</sup> COS-GAYON, F.- *Historia jurídica del Patrimonio Real*, p. 95.

real, Vicente del Campo. La respuesta administrativa del consistorio no se hizo esperar, si bien la gradual complejidad del proceso revelará la imprecisión funcional de los aparatos de gobierno municipal. Si tres días después del aviso se designaba a los dos regidores comisarios de propios, José de Pinedo y Antonio Moreno de Negrete, un año más tarde se nombraba una Junta integrada por el corregidor, procurador general y seis regidores. El retraso de la incorporación motivó una nueva concentración de funciones en los comisarios de propios. En suma, una respuesta institucional vacilante que demuestra la falta de planteamientos políticos que permitieran afrontar la negociación.

Una negociación que se desarrolló, sin embargo, inicialmente por buen camino. En la primera reunión con los representantes madrileños, la parte real demostró una actitud comedida, proponiendo la continuidad en el aprovechamiento de las leñas. Respecto a la indemnización de las tierras, era el propio ayuntamiento el que debía decidir entre el pago del valor global ó una renta anual equivalente a la producida por el capital en que se tasaran, o bien recibir otras fincas rústicas.

El siguiente paso era proceder al deslinde y valuación del patrimonio madrileño, lo que realizó el municipio independientemente, presentando en febrero de 1750 una liquidación detallada de su precio. El importe total se tasó en casi ocho millones de rs, de los que 2.190.284 rs correspondían a las tierras de labranza, 2.027.140 rs a los pastos de los propios de Madrid con su monte y los 3.654.401 rs restantes a los pastos comunales con el monte correspondiente. Esta tasa fue recusada por Vicente del Campo, alegando que Madrid había valorado al alza al ser sus peritos vecinos de Fuencarral y otros lugares limítrofes a El Pardo. Según el comisionado, los peritos estaban interesados en fijar precios elevados por cuanto que con posterioridad tendrían que ajustar con el rey tierras de sus propios concejos y vecinos que habían quedado incluidas dentro del Cordón.<sup>414</sup> Las diferencias obligaron a realizar un nuevo apeo y tasación de estos términos, ahora ya con representantes de la parte real. Terminado en 1752, no se formalizó en papel sellado y por tanto careció de valor legal.

Paralelamente, Madrid solicitaba en 1751 permiso para, según lo acordado, poder continuar con el disfrute de la leña, tal y como había venido haciendo en los dos años precedentes. Caso que no se concediese autorización, se pedía un pago de 48 ó 50.000 rs., cantidad que habían producido algunas cortas realizadas antes del ensanche real, mientras que

---

<sup>414</sup> AVM - S, 3-163-35,3-163-39, 4-61-125 y AGP, caja 9437, exp. 25.

otros años los rendimientos habían sido mucho más escasos e incluso inexistentes al haber negado la licencia el alcaide. El rey no había decidido cercar tan amplio territorio para tolerar ahora que el municipio efectuase una actividad que molestaría a sus venados, por lo que el 3 de noviembre de 1751 decretó que la Tesorería Mayor de la Guerra pagara al mayordomo de propios 50.000 rs en concepto de "equivalente" por estos aprovechamientos forestales. El procedimiento, repetido en los años siguientes, permitió que los ingresos de propios por este concepto mantuvieran una línea constante frente a las grandes variaciones anteriores, como se aprecia en el cuadro 3 con la serie de ingresos por cortas de leña en los montes de El Pardo.<sup>415</sup>

Una vez acotados y tasados los predios madrileños, sólo quedaba la presentación de los títulos de propiedad por parte del municipio y el visto bueno de la comisión real. En este punto se paralizó el proceso, pues la discusión de los títulos se convertirá en un juicio de propiedad que se prolongará hasta que la intervención personal del monarca permita solucionar el problema.

El retraso fue en un principio administrativo. La Junta acordó el 14 de mayo de 1750 sacar del archivo todos los documentos concernientes a El Pardo que pudieran ser utilizados para defender los derechos de la Villa. No debieron darse mucha prisa los encargados, ya que dos años después el comisionado real exigía a Madrid la presentación inmediata de unos títulos cuya ausencia estaba demorando el proceso. La documentación que finalmente se alegó se remontaba a la concesión de términos por Alfonso VII en 1152 y continuaba con los privilegios que favorecían los derechos de Madrid sobre la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama, con el fin de demostrar la inclusión de El Pardo dentro de los límites municipales. Aparecían también varias sentencias de pleitos y arrendamientos de tierras que habían sido incluidas en el nuevo cerco.

El fiscal de la comisión real, Jerónimo Vicente Carrasco, era el encargado de dictaminar los títulos presentados por Madrid, a los que negará desde un principio toda validez jurídica e incluso histórica. Firme partidario del absolutismo regio, defenderá a ultranza las regalías de la Corona frente a los derechos del municipio. Los argumentos que desarrolla en 1755, fecha de su primera respuesta a la Villa, son un ejercicio de crítica histórica: además de considerar falso el privilegio de 1152 pretendía la pertenencia de El Pardo al Real de Manzanares, con lo que se trataría de un espacio enajenado de la jurisdicción

---

<sup>415</sup> AGP, caja 9437, exp. 25.

de la capital; por todo ello ordenó se suspendiese la formalización de la escritura de venta y exigió a la Villa presentase nuevos títulos de propiedad.<sup>416</sup>

Con posterioridad, una vez aclarada la situación de El Pardo dentro del término madrileño, el alegato del fiscal se enriqueció con un tema mucho más interesante desde un punto de vista político y jurídico, los derechos de propiedad sobre las tierras anexionadas. Consideraba que, como terrazgos de aprovechamiento común eran baldíos o realengos y por tanto su propiedad en última instancia correspondía a la Corona. Así, el 4 de abril de 1763 exponía que

"son tierras comunes, realengas o baldías y de aprovechamiento común de los vecinos de Madrid y los demás pueblos de su Tierra y de todos los ganaderos de Mesta y Carretería Real aunque carezcan de la cualidad de vecinos de Madrid, por lo que teniendo el rey Nuestro Señor por disposiciones de derecho y observancia general del reino el formal y verdadero dominio de dichas tierras comunes, sus frutos y rentas, y los vecinos de Madrid y demás partícipes sólo un mero uso y aprovechamiento precario, se sigue que no debe pagar la Real Hacienda a Madrid, sus vecinos y demás partícipes el valor de sus tierras, frutos y rentas que son del dominio del rey".

Es decir, lo que se discutía entre Madrid y el fiscal de la comisión real era la titularidad de los baldíos y los bienes comunales. En lo que había acuerdo era en el aprovechamiento comunal de los pastos y el carácter de propios que habían adquirido los disfrutes forestales, exclusivamente a cargo del ayuntamiento madrileño. Así planteado, el problema no era nuevo: la adjudicación dominical había sido discutida en las ventas de baldíos y comunales que realizaron los monarcas en los siglos XVI y XVII y había vuelto a la actualidad en plena dinastía borbónica con la Junta de Baldíos, disuelta en 1747 tras diez años de actividad. En definitiva, el definir la propiedad de los bienes comunales y su consecuencia práctica -enajenaciones por parte de la Corona o, por contra, derechos concejiles confirmados- es a lo largo de toda la Edad Moderna una cuestión política, esto es, una relación de poder entre rey y municipio.

En esta situación, los argumentos utilizados por los representantes municipales para defender la propiedad de las tierras de El Pardo se centran en la serie de privilegios reales que habían delimitado el término del concejo, dentro del cual se incluye el espacio en conflicto.

---

<sup>416</sup> AVM-S, 3-163-33.

Por tanto, existe una expresa cesión real al municipio que, además, realiza la explotación del terreno. La documentación incidía en los usos ya conocidos de pastos, leñas y cultivos que habían desarrollado sus vecinos. Si Madrid, concluían, había recibido la cesión por parte de los monarcas y aprovechado agrícolamente las tierras, la pertenencia estaba clara. Sin embargo, la insistencia de los regidores en los privilegios reales de concesión y sus sucesivas confirmaciones pone de relieve su incapacidad para reivindicar un ámbito político del municipio autónomo del poder real. Y en este terreno el fiscal tenía la última palabra. En 1756 advertía a la ciudad que se encontraban bajo una monarquía absoluta -lo que a buen seguro los munícipes madrileños no habían olvidado nunca-, con capacidad para anular los derechos de cualquier otro poder: "Finalmente demos que los privilegios y títulos que tiene Madrid para el goce de estos montes y terrazgos fueran los más robustos del mundo, ¿negará Madrid que tiene el rey facultades suficientes para revocárselos?"<sup>417</sup>.

A un problema político le corresponde una solución política, que en el caso de El Pardo vendrá de la mano de un nuevo monarca, Carlos III.<sup>418</sup> El juicio sobre la adjudicación dominical de los comunales que se desarrollaba desde 1757 había llevado el proceso a una vía muerta, de la que sólo podría salir mediante una decisión real. El hermanastro del fundador del Cordón puso pronto de manifiesto su voluntad de liquidar lo antes posible el caso de unas tierras que llevaban ya doce años integradas en su patrimonio. El marqués de Esquilache comunicó a comienzos de 1761 una Real Orden que suspendía el juicio de propiedad, pasándose al reconocimiento de los títulos presentados por Madrid por una comisión compuesta por dos miembros del Consejo de Castilla y el escribano de dicho organismo, Antonio Martínez de Salazar. Fue la propia intervención personal del rey la que aceleró la solución final: el 10 de noviembre volvió a recordar a la Comisión la necesidad de proceder con urgencia a la compra.

Para ello era preciso un nuevo apeo y tasación de las tierras y montes que un día habían pertenecido a Madrid, lo que hizo Martínez de Salazar entre diciembre de 1762 y enero del año siguiente; en ambas actuaciones coincidió con lo ejecutado en 1751 y 1752. Paralelamente se fueron examinando en los diferentes predios los derechos que Madrid

---

<sup>417</sup> AGP, leg. 1251, exp.2.

<sup>418</sup> Sobre la intervención de Carlos III en el proceso expropiatorio de El Pardo, HERNANDO ORTEGO, F. J.- "Control del espacio y control del municipio. Carlos III y El Pardo", en EQUIPO MADRID – *Carlos III, Madrid y la Ilustración*, Madrid, 1988, págs. 49-76.

demostraba por medio de documentos como privilegios reales, sentencias de pleitos, adehesamientos, apeos y arrendamientos.

El 31 de enero de 1761 el secretario de la comisión podía presentar la liquidación del valor de las tierras municipales, recogida en el cuadro adjunto. En total se habían incluido en el coto regio 28327 fgs, 10,5 cels y 1-2/3 est pertenecientes a Madrid.<sup>419</sup> En lo que respecta a su distribución (Mapas 4 y 5), se concentraban sobre todo en el N y NO de El Pardo: en los cuarteles del Águila, Angorrilla y Valdelaganar (donde se había acotado la dehesa en 1678) se englobaban 5.239 fgs; 6.038 en el de Valdelapeña; 7.878 en los de Velada y Navachescas y 2.844 en el de Castrejón. La tasación fue muy minuciosa, ya que cada terreno se dividía en varias partidas de acuerdo con la calidad de la tierra. El valor total se estimó en 5.927.708 rs y 30-1/4 mrs.

La riqueza forestal fue valorada independientemente, ascendiendo su monto global a 1.552.439 rs. El carbón de encina era, claro está, el producto más importante, con más de un millón de arrobas, cada una de las cuales producía "libres y limpios" 46,5 mr al fabricante. Otros aprovechamientos provenían de un corto número de álamos y chopos (vegetación de ribera) así como de retama, jara y romero.

La documentación generada permite acercarnos al paisaje forestal que se había mantenido en las tierras madrileñas a mediados del s. XVIII. Para ello he recogido en el siguiente cuadro la estimación que los peritos hicieron de la cantidad de leña de encina existente (calculando las arrobas de carbón que se podrían obtener). En la última columna se recogen las arrobas de carbón por fanega, lo que se puede considerar revelador de la densidad que tendría el encinar en cada cuartel. Ciertamente es un cálculo aproximado y con fines ante todo comparativos: la cantidad potencial de carbón podía variar según el estado del arbolado (chaparras o "encinas altas"), pero la ausencia de un inventario del número de pies dificulta mayores precisiones.

---

<sup>419</sup> Se incluían 147 fgs.- 6 cels. del mayorazgo de Gudiel de Vargas y otras pequeñas propiedades, cuyo pago correspondería al municipio madrileño



**CUADRO 5 - TASACIÓN FORESTAL DE LAS TIERRAS DE MADRID EN EL PARDO, 1751-1752**

<b>CUARTELES</b>	<b>SUPERFICIE (FGS.)</b>	<b>LEÑA (@ DE CARBON DE ENCINA)</b>	<b>“DENSIDAD” FORESTAL</b>
CASA DE LAS AVES	150	1.930	12,9
SOMONTES	627	59.710	95,2
VALPALOMERO	568	33.450	58,9
QUERADA	1.629	52.660	32,3
EL GOLOSO	1.384		
ELAGUILA, VALDELAGANAR Y LA ANGORRILLA	5.239	287.895	55
VALDELAPEÑA	6.038	174.065	28,8
VELADA Y NAVACHESCAS	7.878	409.089	51,9
CASTREJON	2.844	12.515	4,4
TROFA	1.965	4.930	2,5
<b>TOTAL:</b>	<b>28.322</b>	<b>888.494</b>	<b>31,4</b>

FUENTE: AGP, leg. 1251, exp.7

El mapa forestal que se deduce de estos datos presenta importantes variaciones en la distribución del encinar. Así, comenzando por el sur (cuartel de Las Aves) se aprecia un

monte muy aclarado, tal vez por su mayor cercanía a las áreas pobladas y de cultivos. Siguiendo el desplazamiento hacia el norte, la situación cambia radicalmente en el cuartel de Somontes, donde se da la mayor densidad del encinar (tres veces superior a la media), lo que tiene una clara continuidad en Valpalomero. La zona este, sin embargo, presentaba un paisaje mucho menos frondoso, hasta el punto de que en el cuartel del Goloso no se llegó a tasar la leña dada su escasez. Pero en el norte (El Aguila, Valdelaganar y La Angorrilla; Velada y Navachescas) se mantenían encinares densos, más próximos al carácter de mancha boscosa: se trata de espacios que en siglos anteriores habían sido acotados por el concejo madrileño (Mapa 5), lo que en parte limitó el grado de intervención humana. Finalmente, el oeste era el territorio menos arbolado, destacando la situación de los cuarteles de Castrejón y Trofa, cercanos a las localidades de Las Rozas y Majadahonda: la presión roturadora habría provocado que el monte se fuera aclarando progresivamente.

En conjunto, pues, el precio total ascendía a 7.480.147 rs. A ellos se debía sumar la renta que este capital había supuesto durante el periodo 1749-1762 que, en el caso de las tierras, considerando un rédito del 3%, ascendía a 2.489.634 rs. Por su parte, los montes producían con un interés similar 46.537 rs anuales, descontándose en la liquidación los años 1749 y 1750, en los que Madrid había realizado cortas de leña para completar las ya iniciadas antes del Cordón. Se restaron las partidas que la Real Hacienda había adelantado al municipio: 50.000 rs que anualmente se pagaron en concepto de equivalente por los aprovechamientos forestales y 400.000 rs más que por una Real Orden de 10 de enero de 1763 se destinaron al pago de los asentistas del empedrado de la calle Segovia. En conclusión, la renta de las tierras y montes de Madrid se fijaba en 1.918.515 rs-12 mrs que, sumados a los 7.480.147 rs-30 1/4 mrs del capital de la venta, hacían un total de 9.398.663 rs-8 1/4 mrs que debían engrosar las arcas municipales.

El penúltimo paso fue el informe favorable que dieron los comisarios regios el 8 de noviembre a la liquidación presentada por Martínez de Salazar, considerando asimismo válidos los títulos posesorios de Madrid. Sus propuestas sobre minorar el capital que se pagaría a la Villa y la conveniencia de dirigir su destino conformaron definitivamente la solución del problema.

Finalmente, la Real Resolución de 29 de noviembre de 1763 clausuraba el proceso expropiador casi tres lustros después de su comienzo. Tras reconocer los derechos de propiedad de Madrid sobre estas tierras, se procedía a reorganizar la liquidación de su valor que había hecho Martínez de Salazar. Para ello se contaba con la anuencia del municipio, que

"continuando su antiguo celo y resignación en el servido de Vuestra Majestad se puso en su soberano arbitrio para que resolviese cuanto fuese de su real agrado, pues nada deseaba más que manifestar ahora, como lo había ejecutado siempre, su obsequiosa veneración a los preceptos de Vuestra Majestad". Con tales facilidades, no es extraño que se redujese una quinta parte del capital total de las tierras y montes de Madrid, que quedó así limitado a 5.984.176 rs. También se descontó la quinta parte del valor en renta, que además se consideraba al 2,5% y no al 3%. De su producto, así como de los gastos de las tasaciones y medidas se deducirían todos los adelantos que la Real Hacienda había hecho, realizándose una liquidación independiente. Por tanto, el importe definitivo ascendía a 5.984.176 rs. Casi 3,5 millones de rs se habían "esfumado" entre la liquidación de Salazar y la orden real. Por otra parte, la inversión de la cantidad pagada se fijaba estrictamente: dos millones de reales se destinarían a la compra de dehesas para el abastecimiento de carne a la capital, en compensación por los pastos incorporados en El Pardo; el resto se utilizaría en la redención de los censos y demás gravámenes sobre los propios madrileños, empleándose el sobrante en la adquisición de nuevas propiedades para el patrimonio municipal. El desembolso se realizó con los caudales procedentes de la desamortización de las dehesas pertenecientes a las Ordenes Militares, depositándose el 13 de marzo de 1764 los casi seis millones de reales en los Cinco Gremios Mayores.<sup>420</sup>

---

<sup>420</sup> AVM-S, 3-163-27, 28 y 35.

## SEGUNDA PARTE

### **BIENES DE PROPIOS Y HACIENDA MUNICIPAL**

### **EN EL MADRID DEL ANTIGUO REGIMEN**

## **CAPITULO 4 – EL NACIMIENTO DE UNA HACIENDA MUNICIPAL**

### **LOS BIENES DE PROPIOS DE MADRID ANTES DE LA CAPITALIDAD.**

Desde sus orígenes, los concejos medievales disponen de un patrimonio destinado a recaudar ingresos con los que satisfacer las necesidades locales: los *bienes de propios*, cuya titularidad jurídica corresponde expresamente al municipio. Junto a ellos se encuentran los *bienes comunales*, que mantienen su carácter de común aprovechamiento para el conjunto de vecinos.

Los *propios* comprenden un conjunto patrimonial muy variado. Junto a bienes inmuebles como predios rústicos, locales y edificios (propios en sentido restringido), aparecen también rentas, censos, juro y otro tipo de derechos. La gran diversidad que caracteriza al municipio del Antiguo Régimen se traduce en la pluralidad de situaciones que presentan sus bienes de propios. Centrémonos en el caso de Madrid.

Las *tierras* constituyen el elemento más conocido del patrimonio municipal. En gran medida proceden de antiguos términos comunales, siendo el resultado de un proceso de restricción de usos y derechos comunales por parte del concejo madrileño, una política que se desarrollará con carácter casi continuo desde fines del período medieval. Los aprovechamientos de los predios municipales son diversos. Las *tierras de labor* se sitúan generalmente en los pueblos integrantes de la Tierra de Madrid, el espacio jurisdiccional dependiente del concejo urbano. Otros términos se reservan para usos ganaderos y silvícolas. Son las *dehesas*, terrenos acotados para el pasto del ganado de labor o del destinado al abastecimiento urbano. Por su parte, los *sotos* son fincas arboladas y de fértiles pasturas que se localizan en las riberas de los ríos Jarama y Manzanares.

Los *edificios* municipales se utilizan prioritariamente como centros de servicios; su capacidad de generar ingresos mediante su arrendamiento aparece subordinada a dicha función. Hay dos procesos fundamentales de constitución de inmuebles patrimoniales urbanos en el Madrid del Antiguo Régimen. Por un lado, la construcción de sedes de gobierno y administración municipal, como el ayuntamiento o la cárcel. Por otro, y más importante desde un punto de vista hacendístico, los edificios destinados al mercado y abastecimiento urbano, como la Casa Panadería y la Casa Carnicería de la Plaza Mayor, otras carnicerías, el matadero y el rastro, hornos o mesones, repartidos por diversos puntos de la ciudad.

Las *rentas* de propios comprenden un variado conjunto de derechos que percibe el municipio por la prestación de determinados servicios. Su adscripción al patrimonio local es temprana, remontándose a la Baja Edad Media, momento en que se generaliza el cobro de una serie de derechos impositivos por los concejos como una parte más de sus ingresos patrimoniales. Su origen es diverso, si bien cabe destacar la procedencia de la actividad reguladora del mercado por el concejo, funciones que se constituyen como rentas cuando se cobra un arancel o derecho por su prestación. Su ámbito de aplicación es diverso: control de las condiciones de venta de las mercancías (peso real y correduría, peso de la harina, mojonería), vigilancia de los patrones de pesos y medidas (renta de almotacén y contraste marcador), derechos por el tránsito de mercancías (barcajes de Arganda y Mejorada). Junto a ellas, aparecen otras rentas como las derivadas del cobro de derechos señoriales por el ejercicio de la jurisdicción de Madrid en su término (martiniega).

Los *censos* constituyen el último de los capítulos integrantes del patrimonio madrileño, siendo su característica común la percepción de intereses por el préstamo de un capital o del traspaso de derechos sobre un bien rústico o urbano. Destacan los censos perpetuos, procedentes de la cesión por parte del ayuntamiento de suelo público para la edificación, proceso que tuvo particular trascendencia a fines del s. XV y comienzos del s. XVI.

Todos estos componentes de los bienes de propios no se consolidan en un momento determinado ni permanecen estáticos, sino que se ven sometidos a una continua evolución, con profundos cambios en su composición y naturaleza. Dicha evolución responde a la estrategia municipal, resultado por un lado de los intereses de la oligarquía que controla los aparatos de poder local, y por otro de la presión financiera de la monarquía sobre la hacienda madrileña.

## 1 – ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE PROPIOS

De los cuatro capítulos que desde la introducción he señalado componen los propios madrileños, voy a analizar el origen y la evolución de los edificios municipales, las rentas de propios y los censos (especialmente los censos perpetuos). El cuarto componente, tan fundamental, el patrimonio rústico, ha sido estudiado en los capítulos 2 y 3, donde he hecho referencia al proceso que lleva al ayuntamiento a convertir bienes comunales en propios, lo que constituye el origen mayoritario de estos bienes.

### 1.1 – EDIFICIOS

El proceso de consolidación del régimen municipal a partir del concejo abierto hace imprescindible la disponibilidad de una sede administrativa, en la que se lleven a cabo las reuniones del ayuntamiento para la toma de decisiones, además de otra serie de oficinas en las que pueda desarrollar sus tareas el personal burocrático. Sin duda, la lenta maduración institucional del municipio tiene uno de sus reflejos más evidentes en lo tardío de la disposición de estas sedes administrativas. Sólo en la Baja Edad Media comenzaron a existir estos edificios con carácter permanente, y en numerosos casos hay que esperar al s. XVI. Madrid va a constituir un caso particularmente tardío de esta situación.

Dentro de la edificación de centros de administración y gobierno municipal, destaca la construcción de las *casas de Ayuntamiento*. Durante el período medieval las reuniones concejiles se llevaban a cabo en la iglesia de San Salvador, normalmente en su atrio, en una situación parecida a tantos concejos rurales que utilizaban la iglesia (especialmente los pórticos) para celebrar sus asambleas vecinales. Un paso hacia la constitución del municipio administrativo fue la decisión a mediados del s. XV de construir una “cámara” o local especial dentro de dicha iglesia de San Salvador para realizar las reuniones de los ayuntamientos. En los Libros de Acuerdos se hace referencia a las sesiones celebradas en dicha cámara, a la que en ocasiones se retiraban a deliberar los miembros del concejo reducido, los regidores con el corregidor. El otro centro en el que se realizaban tareas de gobierno era la posada del

corregidor, el lugar de residencia de este enviado real, donde trabajaba junto con sus oficiales. No era una sede estable, sino que el municipio procedía a su arrendamiento, que corría a cargo de los bienes de propios.

Por tanto, la construcción en la plazuela de San Salvador (más tarde denominada plaza de la Villa, nombre que ostenta en nuestros días) de una *Casa Ayuntamiento* es un paso destacado en la maduración institucional del municipio madrileño. No voy a detenerme en la historia arquitectónica de este singular edificio,<sup>421</sup> sino tan sólo apuntar datos sobre los antecedentes de su construcción y financiación de las obras para comprender la complejidad de la constitución del patrimonio municipal inmueble. Madrid tendrá que esperar al s. XVII para disponer de una sede singular.

Fueron los Reyes Católicos quienes entre las medidas aprobadas en las Cortes de Toledo de 1480 ordenaron a los concejos construir sedes estables para la realización de los ayuntamientos: "a todas nuestras justicias, i Regidores de las Ciudades i Villas de nuestra Corona Real, i a cada una de ellas, que no tiene casa publica de Cabildo, ó Ayuntamiento para se ayuntar, de aqui adelante cada una de las dichas Ciudades, i Villas, fagan su Casa de Ayuntamiento, i Cabildo, donde se ayunten, so pena que en la Ciudad, ó Villa, donde no se hiciere, que dende en adelante, siendo por su culpa, los dichos Oficiales ayan perdido, i pierdan los oficios de Justicias, i Regimientos que tuvieren".<sup>422</sup> Hasta entonces el concejo madrileño se reunía en el recinto de la iglesia de San Salvador.<sup>423</sup> Con el fin de cumplir el mandato real se decidió construir una cámara encima del atrio de dicha iglesia, para lo cual se aprobó en sesión municipal una derrama de 50.000 mrs que afectaría a todos los habitantes de la Villa y Tierra de Madrid. Pese a la oposición de la población pechera a través de sus representantes, los sexmeros,<sup>424</sup> el concejo decidió cumplir dicho acuerdo, tal y como refleja la siguiente acta municipal de 16 de mayo de 1487: "Este día los dichos señores otorgaron derrama de cinquenta mill maravedís por la Villa e Tierra e por todos los cavalleros e escuderos della e su tierra, segund que se suele hazer para puentes e fuentes, para hazer la Cámara del Concejo...E mandaron que las pagas sean por tres tercios, el primero a veinte de

---

<sup>421</sup> Una historia del edificio acompañada por una selección documental en: NAVASCUES, P.- *La Casa Ayuntamiento de Madrid*, Madrid, 1987

<sup>422</sup> *N. Recopilación*, ley I, tít. I, lib. VII

<sup>423</sup> La iglesia de San Salvador estaba situada en la calle Mayor, enfrente de la actual plaza de la Villa

<sup>424</sup> *LAC- II*, págs. 55-56



abril e el segundo a veinte de mayo e el tercero a veinte de jullio el qual dicho repartimiento dixerón que mandavan e mandaron hazer porque, segund los pocos propios que esta Villa tiene e los salarios que ay de los dichos propios ni hay de que. Los dichos seismeros dixerón que non consentían en ello, los dichos señores [los regidores] mandaron lo que mandado avian, cunpliendo el mandamiento de sus Altezas".<sup>425</sup>

Mayor importancia presenta en estos momentos una segunda gran línea de actuación inmobiliaria, los *edificios destinados a mercado y abastecimiento* de los madrileños. A partir de 1490 se advierte en Madrid una clara actividad inversora por parte del concejo para construir instalaciones que supongan, además de centros de abastecimiento, una fuente de rentas para las arcas municipales.<sup>426</sup> Por su parte, Carande estudió cómo en el caso de Sevilla las tasas cobradas por la utilización de estos establecimientos del municipio, especialmente las carnicerías, evolucionan en el s.XIV hasta convertirse en auténticas exacciones de carácter tributario, esto es, impuestos sobre el consumo. La causa de este cambio de naturaleza radica en el incremento de las necesidades financieras de unos concejos que por aquel entonces armaban a sus propias milicias para participar en empresas guerreras.<sup>427</sup>

Sus antecedentes se encuentran en la construcción por el municipio de una casa portalada para venta de alimentos en la plaza del Arrabal (que se extendía por el lugar que hoy ocupa la Plaza Mayor), el lugar de celebración del mercado. Un acuerdo de 31 de julio de 1489 disponía levantar una casa "abierta de todas partes, de rango noble, alta, abierta y rejada, donde se acogan las personas que vendiesen algunas de las cosas sobredichas".<sup>428</sup> Se trataba, pues, de un edificio notable e importante desde su misma concepción, en la que se pretendía se constituyera en un elemento de referencia urbano. El objetivo era, siguiendo la lógica de intervenir y regular el mercado por parte de las autoridades concejiles, centralizar todos los puestos de venta de alimentos, creando así un gran "mercado central" que permitiera ofertar productos en condiciones dignas para el consumidor: en la exposición de motivos para aprobar su construcción se menciona los inconvenientes "en estar al sol e a las aguas o aires e

---

<sup>425</sup> AVM-S, Libro mss. 150

<sup>426</sup> MONTURIOL- "El ingreso en la Hacienda", p. 1.044

<sup>427</sup> CARANDE, R.- *Sevilla, fortaleza y mercado*, págs. 159-165. También ALVAREZ CIENFUEGOS- "Notas sobre el origen", págs. 10-11

<sup>428</sup> AVM-S, 3-31-50

nieves e granizos e otras tempestades e asimismo en los barros en tiempo del invierno, de que viene mucho daño, así a los tales vendedores como a todos los vecinos e moradores de la dicha Villa e su tierra e a los estrajeros e caminantes, en comer todas las dichas cosas asoleadas o mojadas o salpicadas de barro, o a las veces no se hallaban los tales mantenimientos, por lo non osar sacar los que los venden a causa de las dichas tempestades”. Para afrontar los gastos de construcción se cobraría un canon de un maravedí diario a cada vendedor.<sup>429</sup> No es posible determinar su situación exacta, a pesar de estar documentado su funcionamiento ya a comienzos del s. XVI.

Más importancia para los bienes de propios tuvo un conjunto de 8 tiendas que construyó el ayuntamiento en la misma plaza del Arrabal, centro neurálgico mercantil de la Villa desde fines del Cuatrocientos. Estaban terminadas en 1517 y se habían construido sobre los portales de otras tiendas antiguas. Se trataba de edificaciones sólidas, pues se aclaraba que se concederían “echados los suelos y fechas cada una una chimenea e sus puertas altas e baxas”. Tenían una curiosa denominación religiosa: una era designada como la casa de N<sup>a</sup> S<sup>a</sup> del Rosario y el resto con el nombre de un apóstol. El objetivo del concejo fue cederlas a censo, seguramente para favorecer el asentamiento y simplificar la gestión. No hubo postores, sin embargo, por lo que se decidió alquilar con carácter anual.<sup>430</sup>

En 1523, después de varios años de arrendamientos, se volvió a intentar su concesión a censo perpetuo. En el siguiente cuadro se recoge el resultado: un total de 8 de las 14 casas que arrendaban los propios de Madrid recibieron ofertas para ser acensuadas, mientras el resto continuaba con la fórmula del arrendamiento. Se trata de todos los locales comerciales de los propios: la mayoría (al menos las 10 primeras de la lista) se ubicaban en la plaza del Arrabal.

---

<sup>429</sup> *LAC-II*, págs. 162-163

<sup>430</sup> *AVM-S*, 3-225-11

## CUADRO 6 - ARRENDAMIENTOS DE LAS CASAS DE PROPIOS, 1523

	1523	
CASAS	FORMULA	RENTA (MRS)
C. DE N.S. DEL ROSARIO (DEL CORREDOR)	CENSO	2.500
C. DE SANTIAGO EL MAYOR	ARRENDAM.	2.450
C. DE SANTIAGO EL MENOR	CENSO	2.250
C. DE SAN PABLO	CENSO	2.250
C. DE SAN FELIPE	CENSO	2.250
C. DE SAN BERNABÉ	ARRENDAM.	1.687
C. DE SANTO TOME	CENSO	2.100
C. DEL PESO, JUNTO A LA CARNICERÍA	ARRENDAM.	800
C. DEL PASTELERO	CENSO	544
C. JUNTO A LA DEL PASTELERO	ARRENDAM.	600
C. QUE TENIA JUAN LOZANO	CENSO	500
C. DE LA ESQUINA QUE TENIA EL PREGONERO	CENSO	2.625
C. QUE FUE DE GREGORIO ROMAN	ARRENDAM.	2.000
C. DEL PESO DE SAN DIEGO	ARRENDAM.	400
<b>TOTAL</b>		<b>22.956</b>

FUENTE: AVM-S, 3-225-12

La construcción del *matadero* se enmarca en la política de abastecimiento urbano que incluye a la carne como uno de sus productos básicos,<sup>431</sup> y que en Madrid llevaría a constituir

<sup>431</sup> El abastecimiento de carne antes de la capitalidad es analizado con detalle por PUÑAL FERNÁNDEZ, T.- *El mercado de Madrid en la Baja Edad Media: Estructuras y sistemas de abastecimiento de un concejo*

las dehesas carniceras de Arganzuela y Amaniél. El matadero fue el primer edificio destacado del patrimonio municipal vinculado al abastecimiento de este producto, que en los ss. XVII y XVIII se completará con la construcción de una completa red de carnicerías. Los primeros pasos para la construcción de un edificio dedicado a la matanza de las reses comenzó en 1489, cuando el ayuntamiento abrió un proceso de subasta entre particulares. La primera oferta fue del alarife de la Villa, Abraen de San Salvador, que proponía construir un matadero y pagar un censo anual de 1.000 mrs a la Villa a cambio de la concesión del monopolio en el sacrificio de animales. Ya desde un principio el ayuntamiento se planteó el interés que este ingreso tendría para los propios, a lo que se añadía que la construcción se hacía sin coste para las arcas municipales.<sup>432</sup> Después de varias mejoras, fue rematado en Pedro de Heredia, uno de los obligados de las carnicerías, que ofreció pagar 1.500 mrs anuales en concepto de censo perpetuo a los propios madrileños.<sup>433</sup>

No duró mucho este edificio, pues en 1495 se trasladaría fuera de los límites de la ciudad para garantizar mejores condiciones higiénicas. En este caso la construcción correría a cargo del ayuntamiento, que tomó prestados 20.000 mrs para financiar las obras.<sup>434</sup> De nuevo se tuvo que trasladar el local para que Beatriz Galindo construyera un hospital en la misma zona. También en las afueras de la ciudad, en las espaldas de San Lázaro, se construyó el matadero que perdurará hasta finales del s. XVI.<sup>435</sup>

## 1.2 – RENTAS.

En realidad el término “*rentas de propios*” en la Edad Media incluye dos componentes bien diferenciados. Por un lado una serie de bienes (urbanos o rústicos) cuya regulación corresponde al concejo, tanto si se trata de bienes estrictamente comunales (pero reglamentados)

---

*medieval castellano (Siglo XV)*, Madrid, 1992, págs. 67-167 y por BERNARDOS SANZ, J. U.- *No sólo de pan. Ganadería, abastecimiento y consumo de carne en Madrid (1450-1805)*, págs. 15-63

<sup>432</sup> “Los dichos señores recibieron la postura, visto el provecho e utilidad que dello viene a la dicha Villa para el propio della, e mandaron que dende oy en adelante se ponga en pregon”. *LAC-II*, p. 148

<sup>433</sup> *LAC-II*, p. 197

<sup>434</sup> *LAC-II*, p. 135

<sup>435</sup> *LAC-V*, p. 79. En esta ocasión no se informa de los medios de financiación de la mudanza del matadero.

como si son ya bienes propios del municipio; de hecho ambos terminarán convertidos en propios finalmente. El ayuntamiento puede arrendar la recaudación bien de un canon o renta por su utilización, o bien el cobro de las sanciones por el incumplimiento de las ordenanzas municipales que regulan la utilización de ese bien. Pero en ambos casos el origen de la renta es el derecho de propiedad o dominio que el municipio se arroga sobre un bien inmueble. Dos ejemplos madrileños ya citados ilustran ambas situaciones: la “renta de los nihares” consiste en ceder el cobro del canon fijado por las tierras baldías o comunales concedidas por el ayuntamiento a las aldeas de la Tierra para su cultivo. Por su parte, en la “renta de los exidos y carrascales” se arrendaba el derecho a recaudar sanciones por el uso abusivo de estos predios concejiles (además de ciertos aprovechamientos, pero no todos, ya que los pastos o parte de la leña mntenían su carácter comunal). La renta en estos casos es, por tanto, un mecanismo o forma de explotación del patrimonio municipal, derivada ante todo de las limitaciones de la burocracia concejil, ya que la presencia de un intermediario como es el arrendatario simplificaba la recaudación. Con posterioridad el municipio prescindirá de este intermediario arrendando el bien (edificio, tierra) directamente, lo que permitirá mejorar sus márgenes de beneficio. Estas rentas serán por tanto estudiadas dentro del componente patrimonial del que deriven, especialmente los bienes rústicos.

En segundo lugar, las “rentas de propios” comprenden un conjunto de derechos que percibe el municipio por la prestación de determinados servicios a la población. Esta facultad impositiva del municipio deriva de su importancia en el proceso de Repoblación, al mostrarse como un organismo recaudatorio de la Hacienda real y como una fuente de ingresos propios. Para su percepción es necesaria una cierta infraestructura de bienes, como instrumentos de pesaje, barcas, etc, pero la recaudación no procede de su explotación, sino de la capacidad impositiva del municipio. Por ello se podrían equiparar a las actuales *tasas*. Son éstas las que constituyen las “rentas de propios” en éste y los períodos siguientes, y como tales serán analizadas en un epígrafe diferenciado.

Su adscripción al patrimonio concejil es muy temprana. Se remonta al siglo XIV, época en la que se generaliza el término propios para designar tanto a los bienes raíces propiedad del municipio como a un conjunto patrimonial compuesto, además, por una serie de derechos impositivos.<sup>436</sup> En un sentido amplio, afirma Carande, el nombre de "propios" abarca todos los

---

<sup>436</sup> BERMUDEZ AZNAR, A.- “Bienes concejiles de propios”, págs. 386-388.

ingresos del concejo, cualquiera sea su naturaleza.<sup>437</sup> La documentación madrileña demuestra tal dualidad de aplicaciones ya que aparecen simultáneamente las formulas "propios y rentas del concejo" y "propios del concejo" aplicadas al mismo objeto. Todavía al final del período estudiado no es infrecuente encontrarse con la expresión de "propios y rentas".

El origen de las rentas que se integran en el patrimonio municipal es muy diverso. Sin embargo, quiero resaltar una fuente común a buena parte de las rentas madrileñas y que además señala una interesante línea de actuación política del gobierno urbano. Me refiero a la procedencia de varias rentas de la actividad reguladora del concejo en el mercado. Se trata de una función básica del cabildo medieval, encargado de fijar tasas, establecer posturas, facilitar espacios de transacción, ajustar pesos y medidas, además de asegurar el abastecimiento y reglamentar las normas -precio, calidad- de la producción artesanal.

Dentro de este marco normativo determinadas funciones se constituyen en rentas al aplicarse un arancel o derecho de sus prestaciones. Tal sucede con el peso de los abastecimientos, que dará lugar a la aparición del *peso real*, derecho que se cobra sobre ciertos bienes traídos del exterior (así como puesto de venta al por mayor dentro de un mercado controlado) y el *peso de la harina*, percibido sobre este producto.

Por su parte, el control de los pesos y medidas utilizadas en las transacciones comerciales es atribución de un oficio público de vigilancia e inspección, el *almotacenazgo*, el cual deviene renta mediante los aranceles cobrados por la confrontación con el patrón oficial que posee el concejo. El mismo proceso tiene lugar con un oficio comercial, el corredor, intermediario que facilita las ventas de las mercancías. En este caso aparecen la renta de la *correduría* y la de la *mojonería*, que consistía en los ingresos producidos por el corredor de un producto concreto, el vino, renta ésta que desaparecerá en la segunda mitad del s. XVI.

A continuación paso a señalar el origen de las tres rentas que van a ser más importantes a lo largo del Antiguo Régimen, tanto por el valor que alcanzarán sus arrendamientos como por su participación en los mecanismos de control y regulación del mercado por parte del municipio.

El *peso real* y *correduría*. La esencia del peso real (renta generalmente presente en el panorama patrimonial del municipio castellano) consiste en la imposición de derechos por

---

<sup>437</sup> CARANDE, R. -*Sevilla, fortaleza y mercado*, p. 109

la utilización de pesos oficiales. El origen de esta renta aparece en el Madrid medieval en la denominada "*renta del peso y cuchares*". El cuchar es un tributo y derecho que se paga sobre los granos. Sobre tres tipos de imposiciones actuaba esta renta: los propios derechos de peso y cuchares, el pesaje en sí y las penas por su incumplimiento. Los derechos del peso y cuchares gravaban los alimentos y materias primas más necesarias para el mantenimiento de la Villa que eran traídos para su venta y comercialización tanto por vecinos de Madrid como por forasteros. Por otro lado, comprendía la obligación de pesar todos estos productos en el peso del concejo, pagando una cantidad por ello. El peso del concejo debía colocarse en un sitio público y frecuentado, preferentemente aparece en las áreas de intensa actividad mercantil, como es la plaza de San Salvador o la Puerta de Guadalajara. En caso de que el vendedor no presentara sus mercancías al peso, era sancionado con una multa de elevada cuantía (hasta seis veces superior al derecho que le hubiera correspondido al pesar).<sup>438</sup>

Su adscripción a los propios madrileños data de "tiempo inmemorial" según el *Libro Becerro* de 1.695. O como recoge una Provisión Real de 28 de marzo de 1433: "por parte del concejo e omnes buenos de la Villa de Madrit me es querellado que la dicha Villa de grandes tiempos pasados acá, tanto que memoria de omnes non es en contrario, tiene de propios vna renta que dizen del peso e cuchares, la qual diz que se arrienda de cada año para rreparo de los muros e puentes e fuentes de la dicha Villa".<sup>439</sup> Se comprueba por tanto que la renta del peso tiene la naturaleza de los bienes de propios: sus ingresos -obtenidos en este caso mediante el arrendamiento- sirven para satisfacer las necesidades colectivas. La real cédula pone de manifiesto asimismo que la renta del peso y cuchares era disputada por su importancia económica. Este documento, de hecho, pretendía acabar con los problemas que habían surgido cuando los alcaldes y alguaciles de Corte habían cuestionado la pertenencia a Madrid de esta renta. La medida real ratificó al concejo madrileño en sus derechos.

*Peso de la harina.* La mención más antigua de esta renta se remonta al mismo *Fuero* de 1202, en el que se dice: "Ivdeo uel christiano qui fariña pesaret, in alcoba peset, et si en alcoba non pesaret, pectet X morabetinos, si exierit de alcoba, a los fiadores. Et el aroba e la media e la quarta e la quinta e la tercia unas sedean, e non habuerit anadedura las pesas; et qui la cubería touiera o en talega la pesa, pectet X morabetinos per illa". Aparecen ya aquí lo que serán algunas de las características de esta renta en la Edad Moderna, como el que se señale la

---

<sup>438</sup> Esta descripción está basada en las frecuentes noticias de los *Libros de Acuerdos del Concejo*.

<sup>439</sup> *Documentos. 2ª serie*, t. II, págs. 163-165.

obligación de disponer de un local donde se deba realizar el pesaje de la harina con el fin de evitar los frecuentes abusos y engaños, así como el cuidado por controlar las pesas que deben tener la medida exacta.

Se trata de un mecanismo de control del alimento básico en todo el Antiguo Régimen. Dentro de su proceso de elaboración la molienda del trigo es un punto crucial, que despierta las suspicacias y reticencias de los campesinos y los transportistas. Para comprobarlo basta recurrir al tratamiento de la figura del molinero en el folklore de la época y, sobre todo, a su papel en los motines populares que siguen la lógica de la "economía moral de la multitud".

*Fiel almotacén y contraste marcador.* De origen árabe, el almotacén era el cargo fundamental en el control del mercado medieval. De modo muy especial sus funciones se centraban en la vigilancia de pesos y medidas, si bien abarcaban prácticamente todos los ramos de la policía urbana y de mercados.<sup>440</sup> No hace falta enfatizar la trascendencia de su misión. Toda medida, demuestra Kula, representa un atributo del poder, una institución en torno a la cual se ha desarrollado una enconada lucha social.<sup>441</sup>

Ya en el *Fuero de Madrid* aparece citado este cargo,<sup>442</sup> si bien sus competencias no se diferencian claramente de las del fiador, el oficial del concejo a quien también se encargan las infracciones de pesos y medidas.<sup>443</sup> Esta misión pasa a los fieles del siglo XV como parte de su atribución de controlar la vida económica y policía urbana del municipio. Así, estaban encargados de "vigilar los pesos, varas y medidas en el mercado, los molinos y las carnicerías y quemar las que resulten falsos. Al comenzar su gestión deben convocar a los mercaderes, regatones, carniceros para sellar, afirmar y concertar sus pesos, medidas y varas".<sup>444</sup>

El concejo elaboró unas ordenanzas de pesos y medidas el 16 de diciembre de 1499. En ellas se ordenaba que los vecinos debían revisar sus instrumentos de pesar y medir ante los

---

<sup>440</sup> La obra fundamental sobre este tema es CHALMETA GENDRON, P.-*El señor del zoco en España: Edades Media y Moderna. Contribución al estudio de la historia del mercado*, Madrid, 1973. Sobre el almotacén en los reinos cristianos, págs. 495-608

<sup>441</sup> KULA, W.- *Problemas y métodos de la historia económica*, Barcelona, 1977, págs. 481-519 y, sobre todo, *Las medidas y los hombres*, Madrid, 1980

<sup>442</sup> *Fuero de Madrid*, rúb. XCIII

<sup>443</sup> *Ibidem.* rúb. XCIII y CI

<sup>444</sup> GIBERT, R.- *El concejo de Madrid*, p. 246



fieles y el "marcador puesto por la Villa". No se prescribe todavía un arancel de derechos por esta acción, sino tan sólo multas para las deficiencias y desajustes en pesos y medidas.<sup>445</sup> Lo cierto es que a partir de la aparición de la renta se distingue entre la vigilancia que del mercado realizan los oficiales de municipio como los fieles ejecutores, y en la que se incluyen aspectos relacionados con las pesas y medidas, y el cobro de unos aranceles en la revisión de las mismas por parte del arrendatario.

### 1.3 – CENSOS.

El origen y naturaleza de los censos perpetuos a favor del Municipio madrileño se encuentra en la concesión de un solar para edificar, tal y como aclara un ejemplo procedente de los *Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño*: "En Madrid, lunes, XXIII días del mes de noviembre, año dicho de LXXVII. Este dicho día, estando ayuntados a concejo a campana repicada... dieron a censo censual, perpetuamente para syenpre jamás a Alonso Ximeón, vecino desta villa, vn solar para hedeficar casas, que es a las fuentes de las Hontanillas... lo cual le dieron por diez maravedís de censo en cada año. Lo qual le dieron desde el día de Sant Miguell del mes de setyenbre que primero pasó, en adelante, para syenpre jamás, que ha de pagar en cada año...".

La práctica de repartir solares entre los vecinos se remonta al concejo de repoblación, que se encarga de distribuir entre los pobladores los predios que han de cultivar, así como un terreno donde levantar su casa. En Madrid se documenta su cesión en el siglo XV, cuando la población rellena el espacio entre la villa amurallada y los arrabales agrupados en torno a las parroquias de Santa Cruz, San Ginés y San Martín. Las zonas deshabitadas contiguas a la muralla eran en su mayor parte ejidos de propiedad municipal, con aprovechamiento complejo: mercados, eras, estercoleros o muladares. La transferencia masiva de suelo concejil para edificación va a dar gran protagonismo al municipio madrileño en la primera expansión urbana de Madrid.<sup>446</sup> Sin embargo, esta cesión, en muchas ocasiones tan generosa, va a agotar

---

<sup>445</sup> LAC- IV. 16 de diciembre de 1499, págs. 173-174

<sup>446</sup> Como ha resaltado MARÍN PERELLON, F. J.- "El Madrid medieval, desde el siglo IX hasta 1535", en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX – XIX*, Barcelona, 1995, págs.18-31

el terrazgo público en el entorno de la ciudad, por lo que tal protagonismo desaparecerá progresivamente a lo largo del s. XIV, pasando entonces la iniciativa de generar suelo edificable a manos privadas o, por mejor decir, estamentales, pues van a ser la nobleza y clero los grandes acaparadores de solares en la ciudad. El patrimonio concejil en las cercanías urbanas servirá para la delimitación de dehesas carniceras (Amaniel, Arganzuela) o algún que otro local para el abasto de carne (matadero), pero dejará de jugar un papel decisivo en la estrategia de crecimiento urbano.

El proceso de ocupación se desarrolla en varias etapas. Comenzó con el establecimiento de población humilde de forma ilegal a principios del XV. A continuación se produce la donación gratuita por el concejo, con la fórmula "ficieron gracia e donación". Se limitaba a los que poseen la condición de vecinos, es decir, tienen ya una casa habitada en Madrid; si a ello se añade la necesidad de contar con el apoyo del Concejo -y por tanto de los regidores- para obtener la donación, se explica que los ocupantes sean miembros del nivel social superior -caballeros, letrados, etc.- y presenten una gran vinculación a los dirigentes del municipio. Por último, en una tercera fase, los solares se conceden gravados con un censo perpetuo.

La cesión gratuita de solares fue origen de numerosas disputas y reclamaciones que hay que enmarcar dentro del conflicto social que tiene lugar en Madrid a mediados del siglo XV. Su virulencia motivó la mediación real, que encargó al licenciado Alonso Díaz de Montalvo el arbitraje entre regidores y caballeros en el conflicto, así como la investigación de las usurpaciones de "términos, dehesas e solares e tierras de pan llevar abrevaderos e otras cosas". En este aspecto llevó a cabo un reconocimiento detallado de los solares cedidos, imponiendo en todos ellos censos perpetuos en función de su localización y extensión, lo que motivó también la revisión de los censos anteriores.

Aunque hasta 1512 no se reglamentaron las condiciones de aprovechamiento de los solares, se venían aplicando con anterioridad. El plazo para tapiar y cercar el solar era de un año y de dos para edificarlo. El propietario debía vivir en esta casa; de no hacerlo durante una temporada de diez años, pasaría al Concejo.<sup>447</sup>

---

<sup>447</sup> El origen de los censos perpetuos en el Madrid del siglo XV ha sido detalladamente estudiado por URGORRI CASADO, F.- " El ensanche de Madrid en tiempos de Enrique IV y Juan II. La urbanización de las cavas", *Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid*, t. XXIII, nº 67 (1.954), págs. 3-63.

El censo perpetuo define una *relación enfiteútica* por cuanto consiste en la concesión de un bien -generalmente tierras o solares urbanos- contra el pago de una renta o pensión, tanto en el censo enfiteútico como en el reservativo. A diferencia del censo consignativo, esta renta no es considerada en teoría como el interés devengado por el capital, ni siquiera entendido éste como el valor del bien raíz, sino como un reconocimiento de la transacción de un derecho de carácter real, aunque en realidad se aplicó la pensión como índice en la tasaciones de los solares. En esta transmisión el enfiteuta, el que paga la enfiteusis, recibe el *dominio útil* del solar, mientras el *dominio directo* permanece en el censalista o el que percibe el censo, en este caso la Villa de Madrid. En palabras de Campomanes, en su actuación como fiscal de Concejo, esta separación entre dominio útil y directo en los solares edificadas supone "que los dueños directos tienen la propiedad del suelo, o área superficial de las casas... Los dueños útiles, o Emphyteutas fundan el derecho en todo lo edificado, y construido sobre las respectivas áreas, porque todo se ha hecho a costa de sus caudales, y desembolsos".<sup>448</sup>

Se trata, en definitiva, de una auténtica transmisión de propiedad en la que el censalista, en virtud del mantenimiento del dominio directo, se reserva los derechos de *tanteo, licencia y laudemio*.<sup>449</sup> Por el primero se ejerce su preferencia en las ventas que del edificio realice el enfiteuta, pudiendo, en el plazo de dos meses, comprar dicho bien por el precio ajustado en la venta ya realizada (derecho de retracto). El derecho de licencia es aplicado cuando en el plazo de los dos meses estipulados el censalista no ejerce tanteo; entonces se entiende concedida la licencia para realizar la venta. La obtención de la licencia lleva aparejada la tasa de laudemio, consistente en una cuota o participación del censalista en el precio de la venta realizada por el enfiteuta. Esta participación era variable según los contratos, ya que, aunque las leyes fijaban una "cincuentena", en la práctica se estipulaban porcentajes mayores, llegando hasta la décima parte. En los contratos de censos perpetuos municipales el laudemio se fijaba en la "*veintena*", es decir, una vigésima parte del valor de la venta, pero no sólo del suelo, sino también -y esto es lo más importante- del valor del edificio

---

<sup>448</sup> Informe de Campomanes incluido en ALARCON Y OLMOS, A.- *Expediente causado en el Consejo a representación de la Sala de Provincia de él, sobre fomentar los edificios en la Corte, y reducir a la Ley, y equidad los Contratos enphyteuticos, o Censo perpetuos, con que están gravados los más de los solares públicos de Madrid y sobre la reducción de censos* Madrid, 1.767, fol. 56

<sup>449</sup> La diferencia entre censo enfiteútico y censo reservativo consiste en que en éste último se transmite el dominio directo y útil de la finca, sin que el censalista disponga de los derechos de tanteo, licencia y laudemio. Por lo demás, ambos definen una relación enfiteútica, con transmisión de la propiedad, pues el censatario ejerce en la práctica las funciones de propietario

construido por el enfiteuta. Directamente proporcional a la calidad del edificio (tanto o más que al valor del solar concedido), la veintena aparece como un mecanismo muy destacado de renovación del valor del censo, ya que el canon con el paso del tiempo perdía importancia económica. El laudemio era sancionado de tal manera por las leyes, que estaba prohibida la caída de un edificio con censo perpetuo en "manos muertas" por vinculación o venta a comunidades religiosas, ya que, al impedirse la posibilidad de nuevas ventas al retirarlo del mercado inmobiliario, el censalista dejaría de percibir nuevos derechos de laudemio.<sup>450</sup>

El proceso de expansión urbana sobre suelo municipal a través del mecanismo de censo perpetuo en la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI ha sido detenidamente analizado por Fernando Urgorri. Las áreas cedidas se encuentran en las cercanías de las murallas, rellenándose progresivamente el espacio vacío entre éstas y los arrabales. A mediados del siglo XV la ocupación de solares se realiza en diversas zonas, destacando: las cercanías de la cava o foso entre la Puerta de Guadalajara y la torre de Alzapierna (cerca de la puerta norte o Valnadú, en la actual plaza de la Opera), que después formaría la calle Mesón de Paños. Junto al arroyo del Arenal se levantan varias tenerías o curtidurías.

Entre 1449 y 1454 se cedió el terreno situado enfrente de la Cava de San Miguel; las casas tenían fachada a la Plaza Mayor, que se forma en esta época. En 1495 y por necesidades del Concejo, se permitió a sus propietarios extender los corrales hasta la misma cava. Junto a Puerta Cerrada se va ocupando el espacio hasta el Peso de la Harina, actual mesón de la Villa. También se forman hileras de casas en el camino que llevaba a Toledo, donde se fija la "Morería Nueva".<sup>451</sup>

El resultado de esta primera "expansión urbana" es la ocupación definitiva del espacio exterior a la muralla, creándose una continuidad del poblamiento hasta los antiguos arrabales, ya plenamente integrados dentro de la trama urbana. En los siglos posteriores, tras la llegada de la Corte a Madrid y el gran crecimiento demográfico subsiguiente, se producirá un claro aumento de la densidad de población, lo que va a tener gran repercusión sobre los censos

---

<sup>450</sup> Para los censos perpetuos, además del ya citado expediente promovido en el Consejo de Castilla y firmado por el relator Antonio ALARCON Y OLMOS, vid. CÁMARA, M. de la- *Tratado teórico práctico de Agrimensura y Arquitectura legal*, Valladolid, 2ª ed., 1.863, págs. 387-393

<sup>451</sup> URGORRI - "El ensanche de Madrid.", *passim*.

perpetuos municipales, ya que la división de los solares originales en un número creciente de casas creará grandes dificultades para controlar su recaudación.

## 2 – EVOLUCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS

### 2.1- LOS ANTECEDENTES MEDIEVALES

El proceso de diferenciación de los bienes concejiles entre los comunales y los que a partir del s. XIV recibirán el nombre de propios es temprano. Así, el *Fuero de Madrid* de 1202 recoge ya disposiciones referidas a un conjunto patrimonial que genera unos ingresos para las arcas locales. Comprende bienes, como el prado de Toia (Atocha) en las proximidades de la Villa,<sup>452</sup> "el carascal de Balecas quomodo lo defeso el conzeio, et los molinos e el canal et toda la renda de Ribas que habet ibi el conzeio", junto con derechos sobre las medidas de diversos bienes que el concejo sacaba a subasta.<sup>453</sup>

La hacienda municipal se completa con la percepción de otros ingresos procedentes del cobro de multas o penas pecuniarias, las denominadas *caloñas* o *cotos*, impuestas por el incumplimiento de la normativa foral o de las ordenanzas concejiles y en concepto de castigo por delitos penales (heridas, muertes). A ellas hay que añadir las prendas en especie que se hacen por determinadas faltas. El destino de estos ingresos es el mantenimiento y reparación de la muralla, trascendental para el papel militar de la Villa. Sólo al final del *Fuero* se apuntan nuevas necesidades concejiles, como la apertura de calles.<sup>454</sup>

Pero será en la Baja Edad Media cuando se vayan desarrollando progresivamente los propios madrileños debido a las nuevas necesidades de recursos como consecuencia del crecimiento urbano y la consolidación institucional del concejo tras la instauración del regi-

---

<sup>452</sup> *El Fuero de Madrid*, r. LXX.

<sup>453</sup> *Ibídem*, r. LXXI.

<sup>454</sup> *Ibídem*, r. CXV

miento, lo que supone la asunción de nuevas atribuciones y funciones. Así, la conservación de la muralla irá perdiendo paulatinamente importancia, mientras crecen nuevos capítulos de *gasto*.

Durante la 2ª mitad del s. XV, y especialmente a partir de 1480 la estructura de los bienes de propios madrileños sufre una importante transformación, que va a mantenerse durante una buena parte del s. XVI. Ha sido estudiada por M. A. Monturiol<sup>455</sup> a partir de las cuentas de los mayordomos y los libros de rentas. Sus datos son utilizados para la elaboración del siguiente cuadro, si bien he modificado la presentación de los distintos capítulos de ingreso con la finalidad de que se correspondan con la tipología planteada en este trabajo.

## CUADRO 7

### INGRESOS DE PROPIOS, 2ª MITAD DEL S. XV

#### MEDIA ANUAL, MRS

	1465-66	1480-81	1496-97
<b>1 - TIERRAS</b>			
RENTA DE LOS EXIDOS Y CARRASCALES	7.000	15.000	31.952
RENTA DE LOS NIHARES	9.000	8.000	16.000
CENSOS	365	185	2.413
ARRENDAMIENTOS	60	1.000	3.815
<b>TOTAL</b>	<b>16.425</b>	<b>24.185</b>	<b>54.180</b>
<b>2 - RENTAS</b>			
PESO Y CUCHARAS	11.865	21.550	11.250
CORREDURIA	1.075	8.000	5.300

<sup>455</sup> MONTURIOL GONZALEZ, M. A.- "El ingreso en la hacienda municipal de Madrid: su estructura y evolución (1464-1497)", en *La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI*, t. II, Madrid, 1985, págs. 1027-1057; "Estructura y evolución del gasto en la Hacienda Municipal de Madrid: último tercio del siglo XV", en *La España Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez*, t. I, Madrid, 1984, págs. 653-694 y "Madrid a fines del XV: crecimiento económico y transformación de la Hacienda municipal", ponencia presentada en el *IV Congreso de la Asociación de Historia Económica*, Universidad de Alicante, 18-19 de diciembre de 1989, ejemplar reprografiado.

MOJONERIA	325	1.105	1.760
AGUA	4.025	7.750	7.000
PASO DEL GANADO	10.500	6.031	9.750
<b>TOTAL</b>	<b>27.790</b>	<b>44.436</b>	<b>35.060</b>
<b>3 - CENSOS URBANOS</b>	<b>810</b>	<b>580</b>	<b>2.384</b>
<b>4 - NUEVOS INGRESOS</b>			
GRAVÁMENES SOBRE EL ABASTECIMIENTO		3.500	33.985
GRAVAMENES SOBRE EL COMERCIO		4.400	4.444
<b>TOTAL</b>		<b>7.900</b>	<b>38.429</b>
<b>5 - PENAS</b>		<b>1.200</b>	<b>4.202</b>
 <b>INGRESOS TOTALES</b>	 <b>45.025</b>	 <b>78.301</b>	 <b>134.255</b>

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de MONTURIOL GONZALEZ, M. A.- “El ingreso en la hacienda municipal de Madrid”, p. 1032

En él se constata el destacado aumento de los ingresos de los propios madrileños en el último tercio del s. XV, que prácticamente triplican sus valores. Por lo que respecta a su composición, destaca el peso de las rentas, que en su mayoría están vinculadas al mercado, que junto con las tierras constituyen el origen del patrimonio municipal. El incremento de los valores de las rentas, sin embargo, es inferior al de los demás componentes, por lo que pierden peso relativo: si en 1465-66 es del 61%, queda reducido a un 26% a finales de siglo.

Por su parte, las tierras conocen un claro aumento en valores absolutos, en incluso en términos relativos, ya que pasa de suponer el 36% de los ingresos patrimoniales a un 40 %. Destaca el crecimiento de los “exidos y carrascales”, que llegan a multiplicar su valor por 4,5, reflejando así la expansión agraria que se extiende a las áreas forestales y de pastos. Menos importante es el aumento de la renta de los nihares, que no llega a duplicar sus ingresos, pero que

en todo caso sigue reflejando la dinámica expansiva. Estos dos ingresos son rentas, pues el municipio arrienda el derecho de cobro de sus ingresos. En cambio, la casi inexistente cesión directa por medio del arrendamiento o censos del patrimonio rústico en un principio, va creciendo de forma significativa, hasta superar conjuntamente los 6.000 mrs en 1496-97. Un aumento vinculado a la recuperación de términos concejiles usurpados, que fueron reintegrados al municipio tras la intervención de los jueces de términos. Siguiendo una política poco coherente, el ayuntamiento procedía, en el caso de tierras recuperadas, a cederlas en forma de arrendamiento a corto plazo, o bien intentaba la cesión a censo, actitud que se compaginaba con el cobro de nihares a parte de estos términos así reintegrados.

Poco relevantes ya desde un principio aparecen los censos, además de una escasa presencia de patrimonio inmueble, al menos hasta la década de 1490, fecha a partir de la cual “el concejo emprende la construcción de varias instalaciones relacionadas con el abasto de la Villa para obtener ingresos a partir de su utilización. Podríamos hablar, por tanto, de una actividad de inversión por parte concejil para gravar el creciente sector comercial de aprovisionamiento y, con ello, el consumo de estos productos”.<sup>456</sup>

El ritmo de incremento de los capítulos “tradicionales” de los propios madrileños, tierras y rentas, resultaba insuficiente para cubrir la rápida expansión del gasto, auténtico motor de las transformaciones. Por ello el concejo va a desarrollar en los años finales del último siglo medieval una activa política para generar nuevas fuentes de ingresos. El mecanismo es la creación de nuevas “rentas”, derivadas de la capacidad del órgano de gobierno urbano para regular el mercado y abastecimiento urbano. Dos son las líneas principales que va a seguir esta incesante actividad recaudatoria. En primer lugar, la generación de ingresos en torno a los establecimientos que el concejo fija (sean o no de su propiedad) para la comercialización de productos básicos, como es el caso de la alhóndiga y las redes de carne y pescado. Por lo que respecta a la primera, Madrid tuvo que esperar a comienzos del s. XVI para tener una alhóndiga de pan en la que almacenar el pan procedente de las tierras de propios y nihares y centralizar la comercialización del pan. En cambio dispuso la construcción en 1489 de una alhóndiga o casa de la harina, si bien los pleitos con particulares que prestaban con anterioridad este servicio retrasaron considerablemente su edificación.<sup>457</sup> El objetivo concejil de recaudar derechos por la

---

<sup>456</sup> MONTURIOL GONZALEZ, M. A.- “El ingreso en la hacienda municipal de Madrid”, p. 1.044

<sup>457</sup> Para estas cuestiones, PUÑAL FERNÁNDEZ, T.- *El mercado de Madrid en la Baja Edad Media*, págs. 33-40



utilización de estos locales a los consumidores no consiguió continuidad por lo general, ya que al gravar el consumo producían importantes quejas. Sólo en el caso de la casa de la harina, los derechos cobrados por el pesaje de los costales (un servicio, por tanto) generaron la “renta del peso de la harina”, tan importante para los propios madrileños durante la Edad Moderna.

Una segunda dirección del afán por encontrar nuevas vetas de ingreso se orienta hacia la creación de rentas, consistentes en el arrendamiento de la recaudación de las penas o multas por incumplimiento de las ordenanzas concejiles. La capacidad de regulación por las autoridades municipales de amplias parcelas de la convivencia urbana<sup>458</sup> queda suficientemente reflejada en los Libros de Acuerdos de la época. La creación de una nueva ordenanza o la revisión de una antigua eran sistemáticamente aprovechadas para crear un nuevo propio: las penas que fijaban se arrendarían, apareciendo una nueva renta. Especialmente abundantes en lo relativo al abastecimiento (renta de las penas de los que meten vino y uva en la Villa, renta de las penas de los que sacan corambres de la Villa y su Tierra, renta de los que sacan quesos y lanas de la Villa), se extendían también a otros ámbitos de la policía urbana (renta de los que ensucien las calles, renta de las penas por embelesar el río, renta de las penas por curtir mal). Además de la enumeración precedente, un ejemplo nos ilustra el grado de regulación y la obsesiva búsqueda de nuevas fuentes de ingresos: la “renta de las navajadas que se dieran por los carniceros desta Villa”, en la que se recaudaba las sanciones a los carniceros que cortasen demasiado fina la piel de las reses sacrificadas, para que no se perjudicase la calidad delas corambres.<sup>459</sup>

Intentos para aumentar los ingresos de propios que tienen un origen claro: la expansión del gasto. La institucionalización del concejo (con la profesionalización de un personal administrativo propio) y el aumento de población son sus causas fundamentales. Los dos componentes principales del gasto ordinario de los propios serán por tanto el gasto salarial y la prestación de servicios (festividades, educación, abastecimiento).

En primer lugar, las retribuciones de personal, no sólo los regidores y oficiales locales, sino también los encargados de servicios como enseñanza ("bachiller que muestra gramática") y

---

<sup>458</sup> Tema estudiado por BERNARDO ARES, J. M. de- “Las ordenanzas municipales y la formación del Estado moderno”, *Axarquía. Revista de estudios cordobeses*, nº 6 (1983), págs. 63-83, y sobre todo por LADERO QUESADA, M. A. y GALAN PARRA, I.- “Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII)”, *Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval*, nº 1 (1982), págs. 221-243, y LADERO QUESADA, M. A.- “Las ordenanzas locales. Siglos XIII-XVIII”, *En la España Medieval*, nº 21 (1998), págs. 293-337

<sup>459</sup> *LAC-II*, págs. 159 y 165

sanidad (físicos y cirujanos). Representa la partida más cuantiosa, a la que debía añadirse el porcentaje de las penas que por infracciones cobraban un conjunto de oficiales, como caballeros de monte, fieles, veedores y guardas de campo, que suponían auténticos salarios indirectos, de cuantía variable.<sup>460</sup>

A finales del s. XV el salario del corregidor y sus oficiales a cargo de la hacienda concejil ascendía por término medio a unos 73.000 mrs anuales, que se conseguían bien de los propios o ingresos ordinarios, si bien en ocasiones se procedía a repartir por medio de derramas entre los pecheros.<sup>461</sup> Por su parte, los regidores tenían una retribución modesta, en torno a unos 1000 mrs anuales, que se elevaban en caso de tener que cubrir alguna de las múltiples comisiones. Una constante desde entonces y a lo largo de la Edad Moderna: la escasa retribución del cargo no justificaba ni remotamente la aspiración a este puesto; en clave de poder obtenido es como debe interpretarse la demanda –creciente– de estos cargos.

Señalar, por último, como a fines del período medieval se produce un aumento destacado de los salarios pagados a los oficiales directamente relacionados con la hacienda municipal. Se trataría así de compensar la creciente complejidad de este ramo y la mayor dedicación a que obligaría en consecuencia, además de compensar el riesgo financiero que el manejo de fondos municipales entrañaba: debían conceder fianzas al ser nombrados para el cargo con las que responder en caso de la aparición de “alcances” en su contra durante su gestión.<sup>462</sup> De esta forma, el aumento que la retribución del mayordomo experimentó a lo largo del s. XV fue de un 500%, al pasar de recibir 1.500 mrs a un total de 5.000 mrs.<sup>463</sup> Hasta el punto de que el Consejo Real negó en 1497 un nuevo intento municipal para aumentar el salario de este oficial.<sup>464</sup>

Destacan también los gastos en festividades, especialmente religiosas, tan importantes para reforzar la cohesión social. Entre estas partidas aparecen, por ejemplo, los 3.000 mrs que cada año se pagaban para los sermones y prédicas de los frailes del monasterio de San Francisco en la Cuaresma.<sup>465</sup> Más lúdicos resultaban otros gastos, como los que tenían que ver con festejos

---

<sup>460</sup> En ocasiones estos ingresos podían ser elevados. *LAC-II*, p. 245.

<sup>461</sup> MONTURIOL, M. A.- “Estructura y evolución del gasto”, págs. 668-670

<sup>462</sup> Aspectos analizados en el capítulo 8 sobre la administración del patrimonio municipal.

<sup>463</sup> MONTURIOL, M. A.- “Estructura y evolución del gasto”, págs. 669

<sup>464</sup> *LAC-III*, p. 326.

<sup>465</sup> *LAC-I*, p. 349.

taurinos, o los juegos y la colación que se ofrecía a las autoridades concejiles en la procesión del Corpus.<sup>466</sup>

Todo ello, junto con el mantenimiento y conservación del mismo patrimonio municipal y la deuda (censos sobre los propios) constituyen los capítulos fundamentales de los *gastos ordinarios*, cuya cobertura es asignada en primer término a los bienes de propios. Sólo en caso de insuficiencia de éstos se recurrirá a nuevas fuentes de ingresos. La estructura de este apartado del gasto permanecerá prácticamente inalterada en siglos posteriores.

Los ingresos de propios, en suma, apenas sí resultaban suficientes para afrontar los gastos ordinarios, consistentes ante todo en el pago de los salarios y las festividades. Sin embargo, desde fines de la Edad Media el concejo madrileño tenía que hacerse cargo de nuevos desembolsos que no tenían un carácter regular, sino extraordinario. Los más importantes y gravosos para las arcas concejiles resultaron los sempiternos pleitos para la defensa de términos frente a sus voraces vecinos (capítulo 2) y las obras públicas, destacadamente el costoso mantenimiento de los puentes sobre el río Manzanares, continuamente afectados por crecidas e inundaciones. Para cubrir estos gastos se recurrió a ingresos que tenían el mismo carácter extraordinario, ya que se establecían con el único fin de recaudar la cantidad necesaria; una vez cubierto este objetivo desaparecerían, al menos en teoría. Es el caso en primer lugar de las *derramas*, en las que se distribuía la cantidad en cuestión entre los vecinos de la Villa y Tierra en proporción a su riqueza. Por su parte, las *sisas* consistían en impuestos sobre el consumo de determinados productos, fundamentalmente carne y pescado. Estos ingresos gravaban muy desigualmente a la población. Si por un lado su peso recaía especialmente sobre los pecheros más modestos (incluso en ocasiones los caballeros y escuderos estaban exentos), también existía desigualdad en su distribución espacial, pues los vecinos de la Villa soportaban una carga proporcionalmente menor que los de la Tierra. Su recaudación llegó a oscilar entre el 50 y el 67% de los ingresos ordinarios. De esta manera, el concejo bajomedieval avanzaba ya la configuración de una hacienda “tributaria” que, de momento, complementaba la hacienda “patrimonial”. Cabe destacar, por último, que en estos momentos el recurso a ingresos extraordinarios responde a necesidades propiamente municipales y no a presiones de la hacienda real, lo que cambiará radicalmente en fechas posteriores.

---

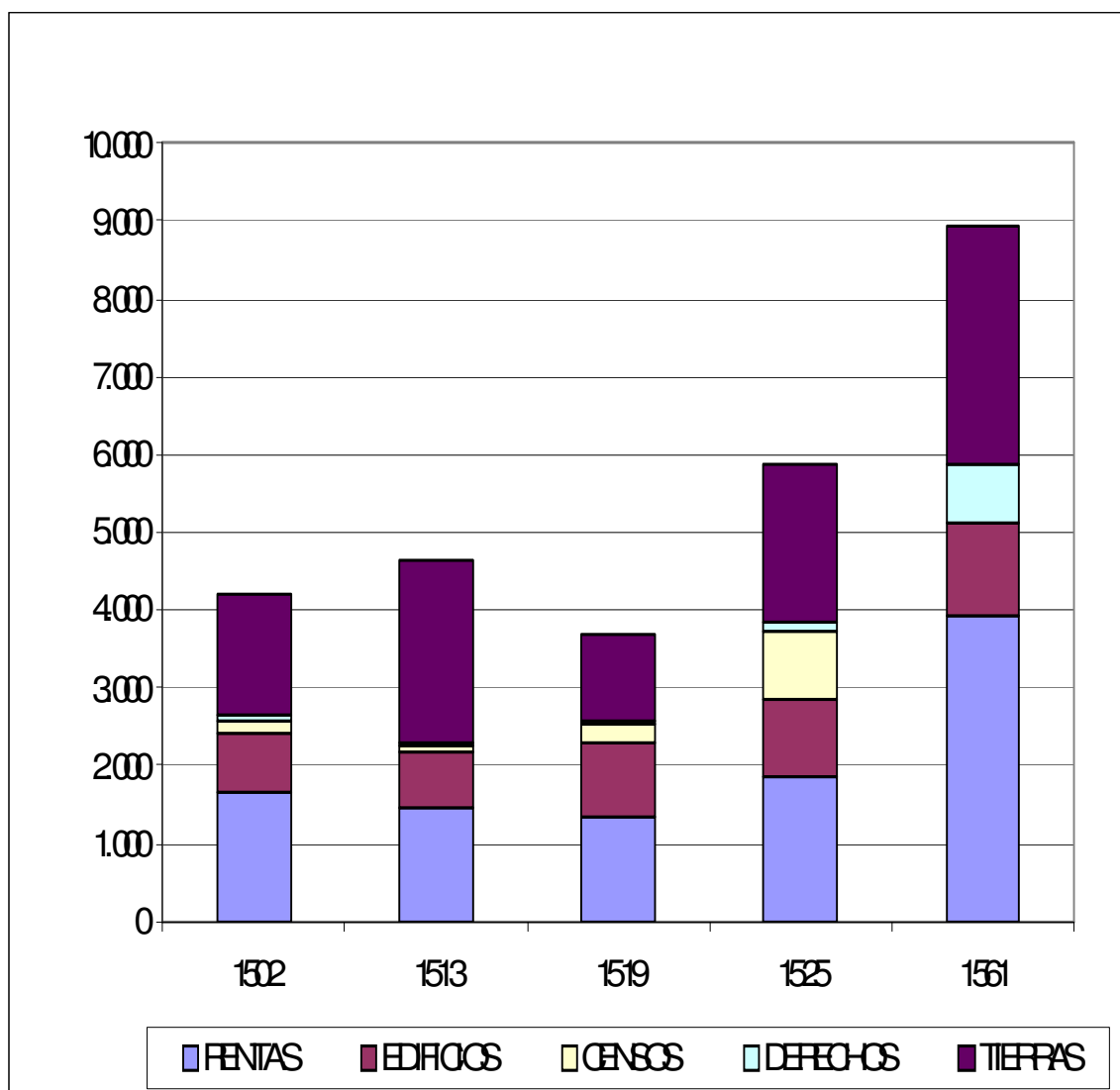
<sup>466</sup> LAC-III, p. 322 y LAC-I, p. 152, respectivamente.

## 2.2 - LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL (1480-1561)

La evolución de los ingresos de propios hasta el establecimiento de la Corte en Madrid queda recogida en los dos gráficos siguientes.

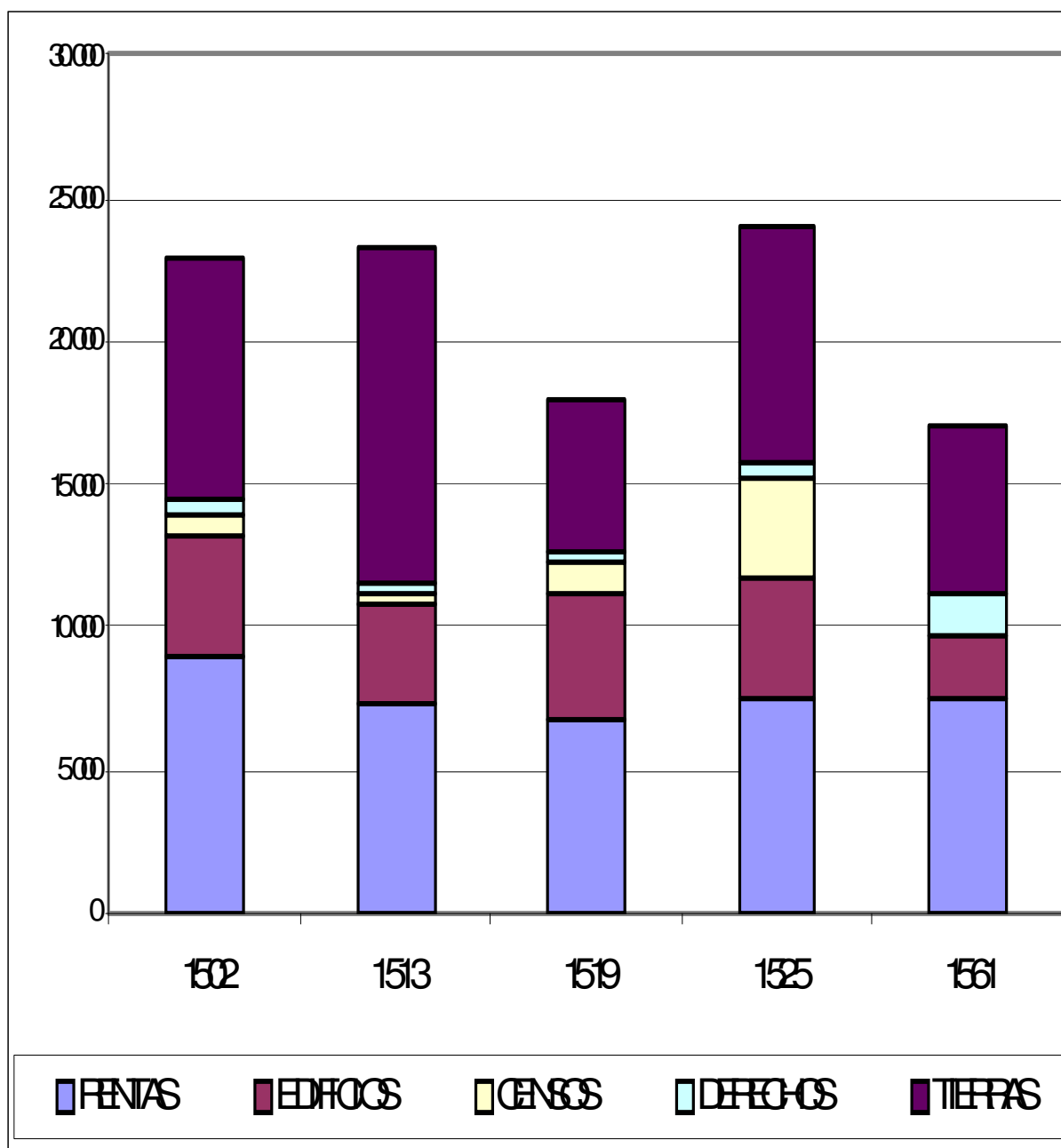
### GRAFICO 1- INGRESOS DE PROPIOS, 1ª MITAD S. XVI.

Valores nominales, en rs.



## GRAFICO 2 – INGRESOS DE PROPIOS 1ª MITAD S. XVI

Valores reales (Base del indice de precios=1590-99)

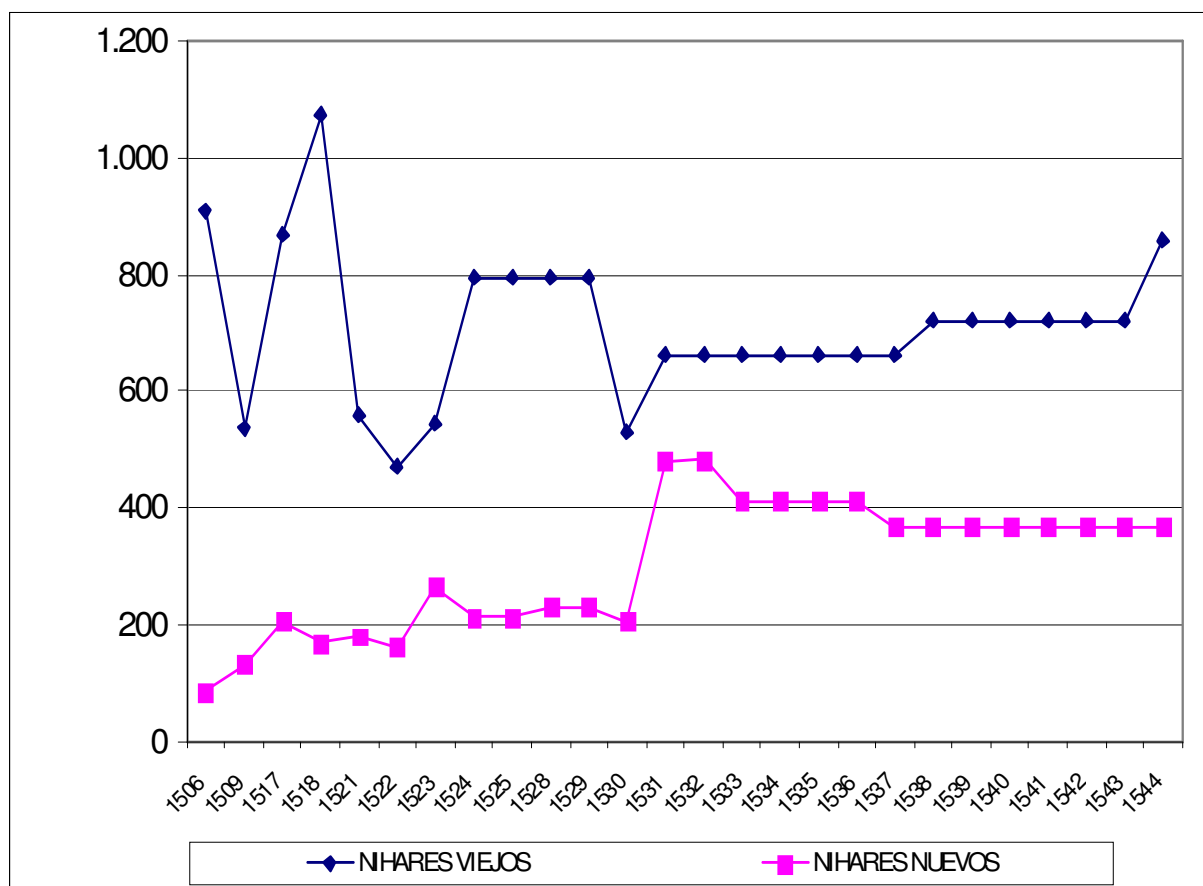


FUENTE: APÉNDICE 3

De ellos se desprende un patrimonio que, si bien conoce un destacado aumento en sus ingresos durante la 1ª mitad del s. XVI, en realidad fue un crecimiento inferior al del nivel de precios. Resulta muy significativo por cuanto los dos principales títulos de ingreso, las rentas y las tierras, que juntos aportan entre el 66 y el 81% del total, según los años, son ingresos muy sensibles a las variaciones en los precios. Así las rentas están muy vinculadas al mercado, mientras la renta de las tierras se cobraba en especie, lo que permitiría actualizar las oscilaciones inflacionistas, a diferencia de otras fórmulas de explotación como los censos. El resultado de esta evolución es que el nivel de los ingresos en 1561 es escaso, pues aunque duplican los valores de los primeros años, en la práctica suponen un descenso de en torno a un tercio en relación a 1525. Un dato a tener en cuenta es la ausencia del capítulo de censos en la documentación referida a 1561, pero su volumen no parece suficiente para ser causa exclusiva de esta situación.

Por lo que respecta a las *tierras de labor*, nos encontramos, como ya se ha analizado en el capítulo anterior, ante una dinámica expansiva, que se traduce en la subida de la tierra. La renta de nihares era el mecanismo para recaudar los derechos en especie que se imponían a cada campesino que labraba estas tierras. Sus valores crecieron rápidamente: los 529 rs cobrados en 1497 se convertían en casi 700 apenas cinco años después. El incremento, sin embargo no fue continuado, como refleja el gráfico 4.3. Tras una serie de años iniciales con fuertes fluctuaciones, los nihares viejos se estabilizaron a partir de la década de 1530, mientras los nuevos (cobrados fundamentalmente en las Rozas y Majadahonda) tendieron claramente al alza hasta esa misma fecha, estabilizándose después. Esta situación no se debe a una escasez de la demanda ni, todavía, a un agotamiento de la fertilidad de la tierra, de la que en cambio sí existen testimonios a finales del siglo.

**GRAFICO 3 – EVOLUCION DE LAS RENTAS DE NIHARES, 1506-1544. VALORES ANUALES, EN RS.**



FUENTE: APÉNDICE 2

Parece estar relacionada con la extensión de los arrendamientos directos en especie, controlados mayoritariamente por los propios concejos de las aldeas de la Tierra de Madrid, hecho que se mantuvo durante todo el siglo y parte del XVII. Así, en 1542 las tierras de los propios de Madrid eran ya mayoritariamente arrendadas por los concejos de Las Rozas, Aravaca, Majadahonda, Pozuelo de Aravaca (Alarcón todavía no había aparecido), Getafe, Vallecas, Fuencarral o San Sebastián de los Reyes.<sup>467</sup> El hecho de que un concejo aldeano sea el arrendatario único en su término posiblemente pudo evitar el funcionamiento de la competencia, comportándose el concejo como un monopolista que puede negociar la renta de la tierra a la baja. En efecto, mientras los concejos mantengan su potencial coactivo, están en condiciones de evitar

<sup>467</sup> AVM-S, 3-145-232.

la competencia entre los campesinos, con los problemas generados de conflicto dentro de la comunidad y aumento de la desigualdad.<sup>468</sup> De esta forma, el concejo aldeano puede facilitar el reparto de esta tierra y el acceso de una parte considerable de sus miembros a las tierras de nihares, factor de cohesión y estabilidad de la comunidad campesina.

En el resto de las aldeas madrileñas aparecen ya arrendatarios individuales. Tanto en el caso de los concejos como en el de particulares el pago de la renta es en especie. Si los ingresos procedentes de los nihares muestran tendencia al estancamiento, los pagos en especie presentan una tendencia más clara al aumento, si descontamos el valor excepcionalmente alto de 1519. En todo caso, lo que se desprende es que el ritmo de las roturaciones, con el consiguiente cambio de naturaleza de las tierras comunales o baldías a tierras de propios, es más rápido en el primer cuarto del s. XVI, ralentizándose después, lo que tiene su reflejo en la renta de la tierra de labor.

Por su parte, los *términos de pasto* se vieron ampliados con la formación desde 1492 de una nueva dehesa al sur de la ciudad, la de Arganzuela, que se unía a la más antigua de Amanuel como términos acotados para los ganados de labor de los vecinos de la Villa. El destino de ambas pronto cambiaría, convirtiéndose en dehesas carniceras reservadas para que pastasen los ganados de los obligados al abastecimiento de carne a la ciudad.

Los ingresos procedentes de la renta de los *exidos* y *carrascales* es uno de los capítulos que experimentan mayor subida, tal y como se observa en el cuadro y gráficos siguientes. La serie es muy representativa de la tendencia alcista de estos términos en la primera mitad del XVI. Si nos centramos en los datos hasta la década de 1540, los ingresos por este concepto se multiplicaron en total por tres; algo menos si descontamos la inflación, pero en todo caso una subida considerable. Algunos de estos términos experimentaron subidas mayores. Es el caso del Negrалеjo, un exido (más tarde soto) que multiplicó por 8 los ingresos de arrendamiento, convirtiéndose, junto con el soto del Berrueco, en la más destacada posesión de los propios madrileños detrás del Porcal.

---

<sup>468</sup> Un análisis de los problemas que pueden generar las disidencias internas para la estabilidad del sistema, en IZQUIERDO MARTIN, J.- *El rostro de la comunidad. La identidad del campesino en la Castilla del Antiguo Régimen*, Madrid, 2000, págs. 291-300

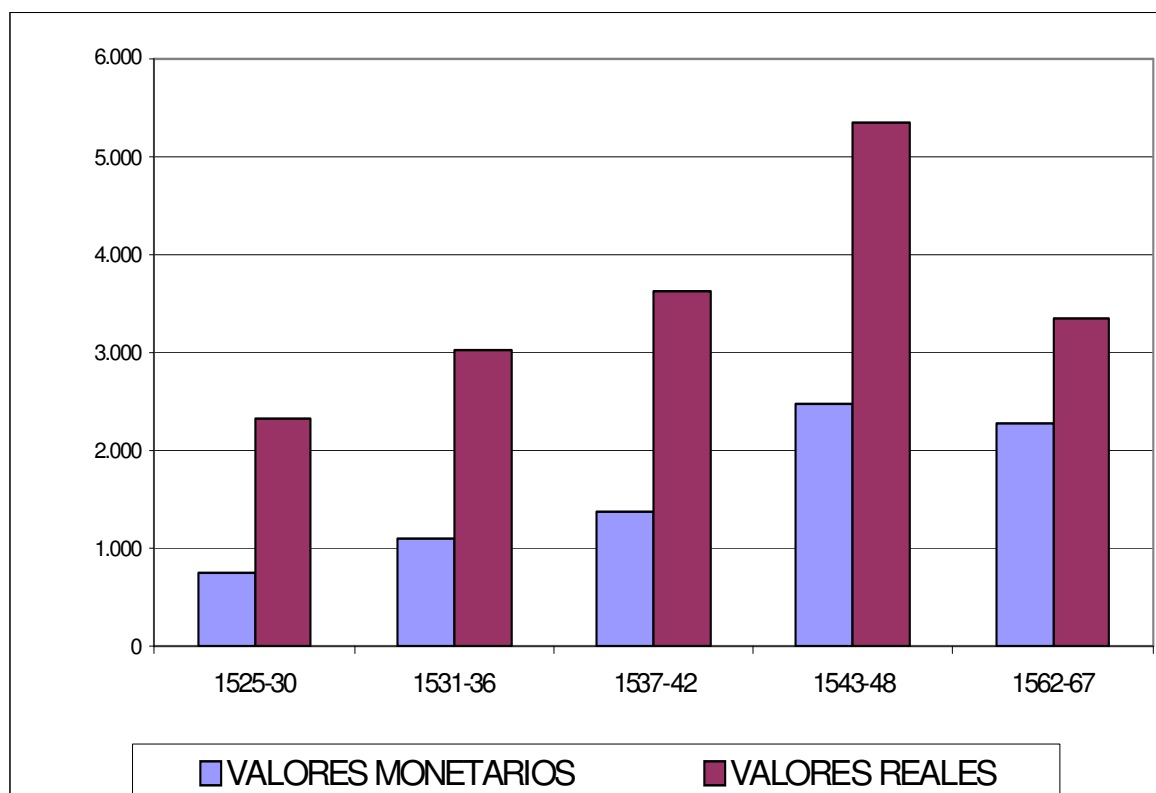


**CUADRO 8****ARRENDAMIENTO DE LOS EXIDOS Y CARRASCALES, 1524-1567***Valores medio anuales, en rs.*

	1525-30	1531-36	1537-42	1543-48	1562-67
<b>PORCAL Y MATILLA DE ALVENDE</b>	385	410	602	882	1.000
<b>NEGRALEJO</b>	44	44	77	345	819
<b>BERRUECO Y SOTIL DE LOBOS</b>	132	235	230	368	
<b>MATILLA DE SOPEÑA</b>	21		10	18	
<b>SOTO REDONDO</b>		15	35	26	
<b>MADRE VIEJA</b>	9	35	43	34	
<b>MATILLA DE VELILLA</b>		34	42	108	
<b>MONTECILLO DEL PIUL</b>	10	54	10	55	52
<b>CONGOSTO</b>	49	49	71	28	15
<b>MATA ROMANA</b>	81	0	56	55	37
<b>MATILLA DEL BATAN</b>		89	81	241	
<b>HENAR DE VALLECAS</b>	24	24	9	44	227
<b>LA CUEVA (VELILLA)</b>		122	124	265	119
<b>TOTAL</b>	<b>755</b>	<b>1.111</b>	<b>1.388</b>	<b>2.469</b>	<b>2.270</b>

#### GRAFICO 4- RENTA DE LOS EXIDOS Y CARRASCALES, 1525-1567.

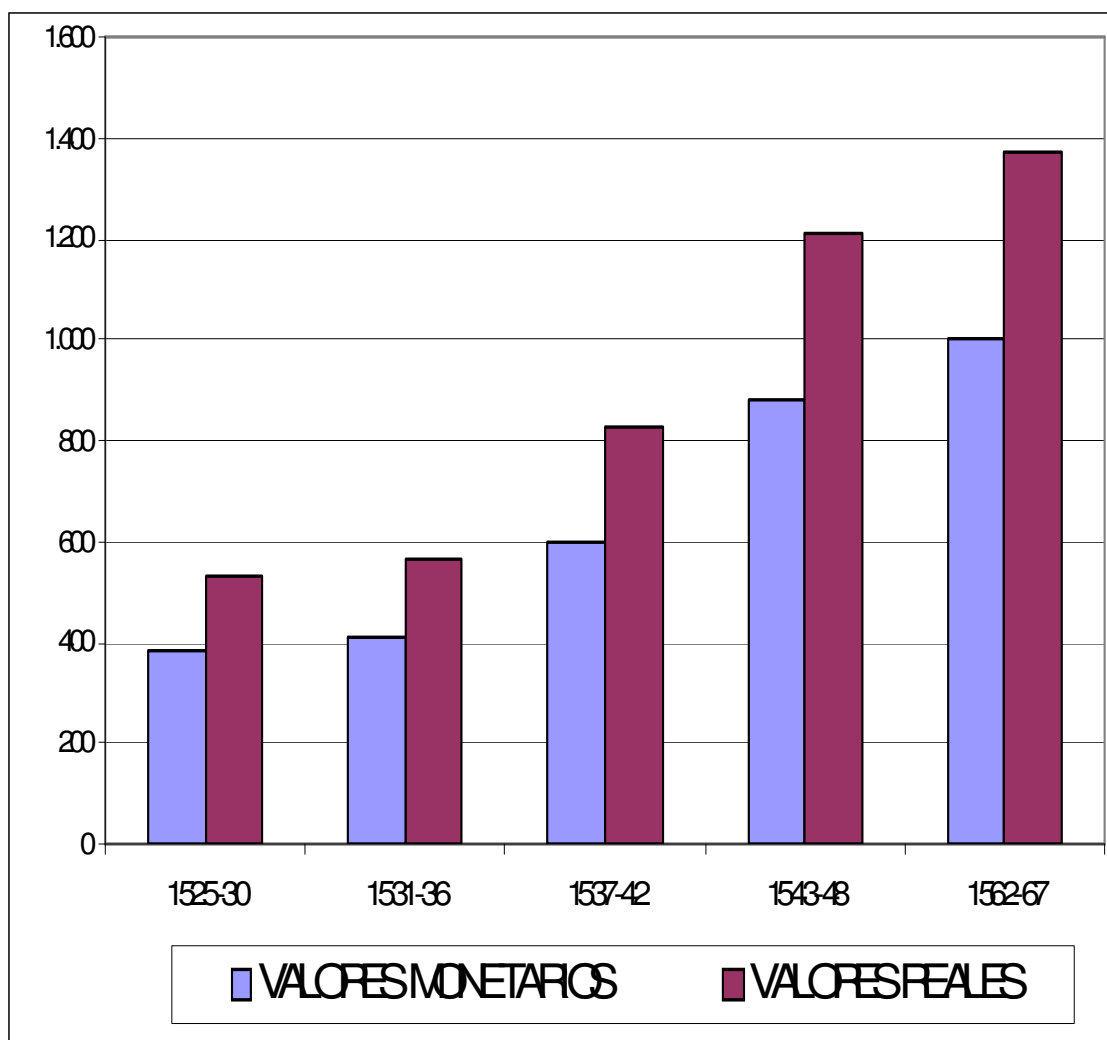
Valores medios anuales, en rs.



La tendencia alcista parece quebrarse con los datos de la década de 1560, cuando hay un descenso en los ingresos en torno a un 10%. Pero este hecho se explica por la importante variación de este patrimonio tras la capitalidad, cuando parte de los ejidos madrileños sea incorporado por el rey a la dotación del monasterio de El Escorial (capítulo 5). En efecto, en esos años han desaparecido los sotos que aportaban prácticamente el 30% de este propio en 1543-48. Que la subida de ingresos seguía en esas fechas lo demuestran la evolución individualizada de las rentas de los dos sotos más destacados que le quedarán, tras la separación de El Berrueco, a Madrid en el entorno del Jarama, el soto de El Porcal (gráfico 4.5) y el soto de El Negralejo (gráfico 4.6).

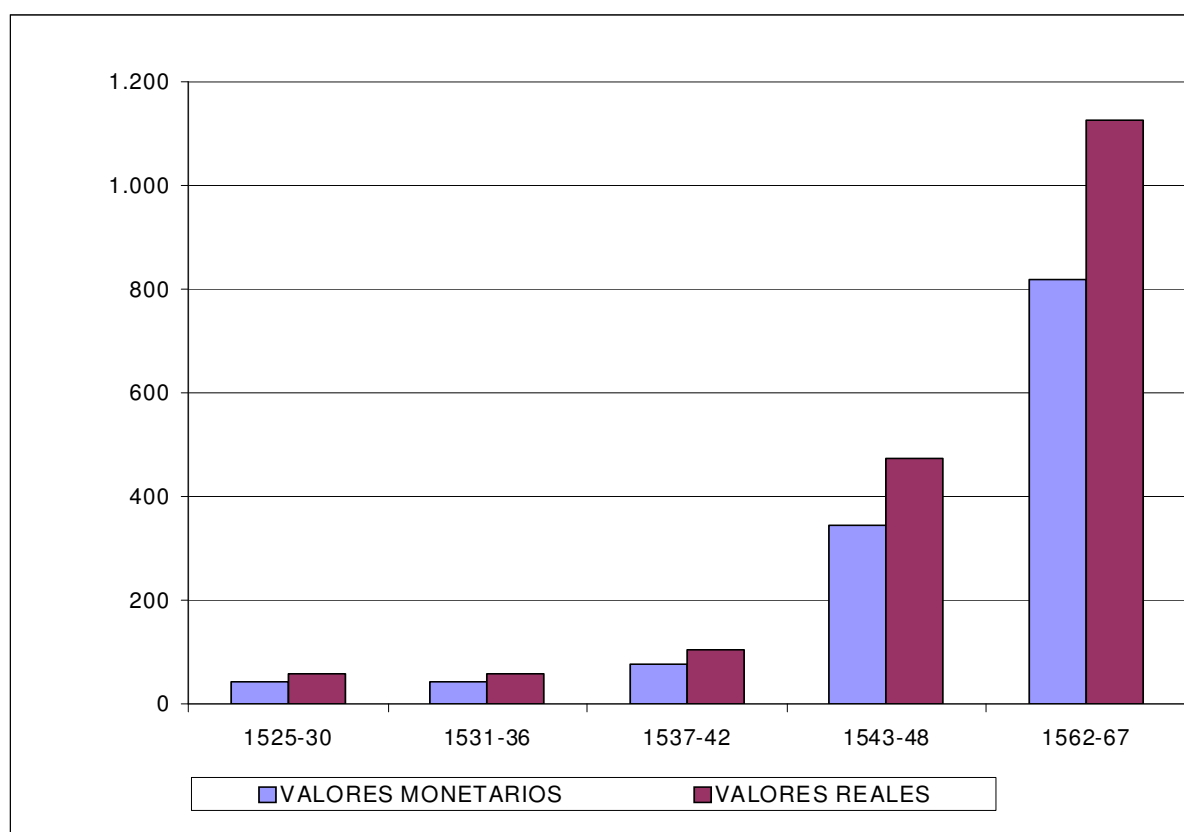
## GRAFICO 5 – RENTA DEL SOTO DE EL PORCAL, 1525-1567.

Valores monetarios y reales. Media anual, en rs.



## GRAFICO 6 – RENTA DEL SOTO DE EL NEGRALEJO, 1525-1567

Valores monetarios y reales. Media anual, en rs.



El capítulo de *rentas*, por su parte, experimenta en este período importantes transformaciones. Todo un conjunto de rentas creadas durante los últimos años del s. XV en función del arrendamiento de penas por incumplimiento de las ordenanzas municipales se estancaban o iban desapareciendo como consecuencia de cambios en la reglamentación municipal o de la ausencia de actualización de los derechos cobrados. El resultado es que progresivamente el panorama de las rentas de propios se va “aclarando”, eliminándose un conjunto de rentas de carácter coyuntural (reglamentación municipal según necesidades de un momento dado, de naturaleza cambiante), para permanecer las que representan mejor la intervención mercantil del concejo en el mercado y la regulación de éste, lo que sucederá definitivamente tras la capitalidad. Son este tipo de rentas de tipo comercial, como el peso real y la correduría las que experimentaron las alzas más significativas.

Una circunstancia que empezó a plantearse en el Madrid de la primera mitad del XVI fue la cada vez más frecuente presencia de la Corte en la ciudad. Si el Madrid bajomedieval había

conocido la estancia a veces prolongada de algunos monarcas castellanos, como Enrique IV o en menor medida los Reyes Católicos, desde comienzos de la Edad Moderna este hecho tenía efectos cada vez más destacados en la vida urbana. La creciente complejidad burocrática del Estado moderno en su última etapa itinerante suponía una gran movilización de medios humanos y materiales para garantizar su funcionamiento. Las ciudades que, como Madrid, experimentaban la llegada de la Corte veían como se disparaba la población, de gran poder adquisitivo en muchos casos, y con ello los precios. Para aprovechar esta circunstancia el concejo acordó en 1529 que “si la Corte de Su Majestad o su Consejo viniere a la dicha Villa, en cualquier tiempo del año después de arrendadas las dichas rentas [de los propios] susodichas, la Villa las pueda tomar para sí si quisiere e que los arrendadores paguen por rata el tiempo que las tuvieren.”<sup>469</sup> La renta del peso fue la más afectada. Con la llegada de población forastera se multiplicaba la demanda de bienes que tenían que pasar por las pesas del arrendatario, lo que multiplicaba sus ingresos. De la importancia de esa subida da cuenta el cuadro 4.4 en el que he recogido los precios que se pagaban en los años en que se daba la circunstancia de venida de la Corte (o que se esperaba) cuando ya se había arrendado. Se aprecia cómo era frecuente que se multiplicara por cuatro el valor de la renta, reflejando así cómo la demanda de mercancías del exterior se disparaba en función de la renta disponible de la población cortesana.

**CUADRO 9- LA RENTA DEL PESO, CON Y SIN CORTE EN MADRID (RS).**

AÑOS	CON CORTE	SIN CORTE
1528	1.441	574
1530	2.059	529
1532	1.471	467
1534	1.588	368
1536	1.794	382
1542	1.912	544

---

<sup>469</sup> AVM-S, 3-226-2

Por último, el *patrimonio inmueble urbano* experimentó un crecimiento importante como consecuencia de la política inversora del concejo desde finales del XV. Especialmente destacado es el establecimiento a comienzos del s. XVI de un conjunto de tiendas concejiles en la Plaza del Arrabal, centro mercantil de la ciudad (cuadro 6), si bien desaparecerán posteriormente debido a las transformaciones urbanísticas de este singular espacio, que recuperará protagonismo para el patrimonio madrileño a partir del s. XVII.

A mediados del s. XVI, en vísperas de la gran transformación urbana, los bienes de propios madrileños van configurándose a partir de la herencia medieval. Fruto de la expansión económica, protagonizarán una subida de ingresos que, con el tiempo será superada por el alza de los precios. Los cambios en su composición junto con las limitaciones en su capacidad de gestionar al alza la coyuntura (especialmente en el caso de las tierras) explican esta situación. La consecuencia más evidente es la incapacidad de absorber unos gastos extraordinarios que experimentan una subida mayor que los ingresos patrimoniales, continuando así el recurso a las fuentes de ingreso por vía fiscal. En consecuencia, en vísperas del establecimiento de la Corte, los bienes de propios madrileños planteaban limitaciones importantes para afrontar los nuevos desafíos de gasto que se plantearían.

## **CAPITULO 5 – LOS BIENES DE PROPIOS DE UNA CAPITAL, 1561-1700**

### **1 - ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE PROPIOS**

#### **1. 1 – LAS TIERRAS.**

La composición y transformaciones de las tierras de los propios madrileños han sido prácticamente analizadas ya en el capítulo 3. En efecto, una de las líneas directrices de este trabajo es determinar el proceso histórico de patrimonialización del terrazgo comunal, que desde finales del s. XV, pero con especial incidencia durante los siglos XVI y XVII, fue objeto de su conversión en propios del ayuntamiento madrileño. Paralelamente el régimen comunal de Villa y Tierra se transformaba, perdía componentes destacados de su organización, como una parte considerable de los baldíos o del monte, pero sin desaparecer. En efecto, la persistencia de ciertos términos baldíos amplios, la continuidad de aprovechamientos comunales como la derrota de mieses y, por supuesto, la disponibilidad de comunales pertenecientes a cada concejo (dehesas, montes), garantizó su continuidad, bien que con una trascendencia menor para las economías campesinas, cada vez más desiguales en su capacidad productiva y acceso a la tierra, algo en lo que la transformación del régimen comunal tuvo unos efectos ciertos.

Centrándonos en las *tierras de labranza*, cabe destacar como durante la segunda mitad del s. XVI, la fórmula tradicional de la “*renta de los nihares*” experimentó una progresiva decadencia de sus valores. Así, se remataron en 1538 en 802 rs., mientras que en 1561 apenas lo hicieron en 234 rs. Este rápido descenso refleja la cesión de parte de las tierras en régimen de arrendamiento y el que al tratarse de terrenos labrados desde antiguo experimentaban una

caída de sus rendimientos, por lo que en parte habían sido abandonados por los campesinos, con lo que la renta terminó por desaparecer.<sup>470</sup>

El sistema de nihares (arrendamiento de la recaudación de los derechos en especie que los campesinos pagaban por el cultivo) fue progresivamente sustituido a lo largo del s. XVI por el arrendamiento directo en especie. Los principales arrendatarios de los términos puestos en cultivo fueron, como ya he mencionado, los propios concejos de los lugares de la Tierra de Madrid, hecho que se mantuvo durante todo el s. XVI y la mayor parte del XVII. Incluso los encontramos en las primeras décadas del setecientos, aunque ya son residuales y desaparecen hacia 1740. En la lenta disolución del régimen comunal de Villa y Tierra los concejos aldeanos juegan un papel ambivalente derivado de su propia estructura interna. Por un lado, en un período de clara extensión de cultivos facilitan la reserva del terrazgo que la Villa madrileña cede, evitando así una competencia interna que se traduzca en subida de las rentas. Pero el reparto no se realiza de forma igualitaria, sino que se lleva a cabo en función de la capacidad de explotar las tierras, medida a través de la propiedad de animales de tiro, recibiendo cada campesino una superficie proporcional a las yuntas de que dispone. En el capítulo 7 analizaré con más detalle los mecanismos de la distribución de las tierras de propios madrileñas por el concejo de Las Rozas en el s. XVIII, así como las consecuencias económicas y sociales que para la comunidad campesina tenía.

Por otro lado, aparecen también arrendatarios individuales. Se trata en general de campesinos acomodados que pueden aprovechar la coyuntura alcista y se hacen con la explotación de tierras complementarias. Sin embargo, su número es escaso y la proporción de tierras de propios en sus manos es ínfima durante todo el s.XVI.

La dinámica alcista de las tierras de labor madrileñas se refleja en las rentas que producen. Percibidas en especie, constituyen lo que la documentación denomina “*pan de propios*”, que el mayordomo vende al pósito de la Villa. En el año de la capitalidad su montante ascendió a 404 fgs de trigo y 413 de cebada, que en apenas 40 años se habían más que duplicado: 840 fgs de trigo y otras tantas de cebada.

Como ya se ha mencionado en el capítulo 3, la composición y transformaciones de las tierras de propios en el s. XVII se vieron ciertamente determinados por el arrendamiento y venta posterior de baldíos que se extienden durante la primera mitad de la centuria. En efecto,

---

<sup>470</sup> AVM-S, 3-85-37



el arrendamiento de los baldíos del Cuarto de Palacio a partir de 1608 supuso la roturación de tierras que pasaban a estar gestionadas directamente por ayuntamiento madrileño. La clara senda que se abría hacia la patrimonialización de este terrazgo, su conversión en propios (algo, por otro lado, habitual en el caso de baldíos arbitrados en muchas otras localidades), se vio ciertamente influido por las operaciones (que fueron varias) de venta de baldíos llevada a cabo por la Corona hasta mediados de siglo.

La consecuencia de la superposición de estos procesos fue la total confusión sobre la organización y disposición de las tierras municipales. Buena parte de los baldíos arrendados en la operación del Cuarto de Palacio fueron vendidos, pero otra quedó a disposición del ayuntamiento madrileño. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los antiguos términos de nihares que ya se arrendaban directamente tenían asimismo su origen en el terrazgo comunal, y por tanto podían ser objeto de revisión sobre su propiedad. En suma, la transformación de las tierras concejiles (de comunales a propios) distaba a mediados del s. XVII de haber cristalizado en fórmulas precisas que garantizaran el derecho de exclusión por parte del ayuntamiento madrileño. El mayordomo de propios al presentar su cuenta de los años 1650 a 1652 sólo podía dar estas noticias: “Las tierras de propios arrendadas a dinero: no se me ha dado recados para su cobranza, y aunque le cobré algunas partidas con relación que me dieron en la secretaría de d. José Martínez, no tuvo efecto por estar vendidas, y algunas partidas que cobré parecieron ser del Cuarto de Palacio y las entregué a su receptor. Las tierras de roturas: no se me ha dado recado para su cobranza y se entiende están vendidas por Su Majestad y así no me cargo”.<sup>471</sup> Un texto que pone de relieve el total confucionismo existente sobre la disposición de las tierras municipales (además de desvelar lo poco que se contó con el ayuntamiento de la capital para proceder a la enajenación de los baldíos). Medio siglo después esa situación se habrá clarificado por completo.

Los arrendamientos se fueron recuperando con posterioridad, como se aprecia en las cuentas del mayordomo de propios, y que serán analizados al estudiar la evolución de los ingresos y gastos. Por otra parte la labranza de términos públicos terminará por pasar su factura, con rendimientos cada vez menores. En la segunda mitad del s. XVII ello da lugar a una reconversión de los cultivos. Algunos pueblos se quejan de que no pueden arrendar ciertas tierras de los propios de Madrid por su ínfima productividad y solicitan se les concedan para

---

<sup>471</sup> AVM-C, 1-109-1

plantar viñas, lo que lleva implícito un nuevo tipo de contrato: el censo perpetuo. El ayuntamiento aprueba la cesión de tierras “que no fuesen a propósito para llevar pan”, lo que se llevó a efectos en localidades del sur y este de la ciudad: Getafe, Vallecas, Vicálvaro, Vaciamadrid, Velilla, Paracuellos.<sup>472</sup>

Una vez recuperada la ocupación y control administrativo de las tierras municipales, era el momento de asegurarse su control legal. Fue la misión, como ya hemos visto, del apeo general que se encomendó al regidor José de Noriega a partir de 1692<sup>473</sup> y que se complementó con la actuación de otros comisionados. En estos apeos se incluyeron las tierras del Cuarto de Palacio que no habían sido vendidas, que se incorporaron, esta vez definitivamente, a los propios de Madrid. Desde entonces la designación “Cuarto de Palacio” que aparece con frecuencia en los deslindes y visitas del s. XVIII se refiere a un simple topónimo en varios términos de la Tierra, no a una categoría jurídica. Por tanto, a finales del XVII el ayuntamiento madrileño, con el apoyo (puesto que sancionó legalmente su control exclusivo de estas tierras), y a la vez competencia (ya que vendió una parte) del poder central ha culminado en la práctica la reconversión de buena parte del terrazgo comunal en bienes de propios.

Las transformaciones que por su parte experimentaron los *sotos* (antiguos exidos) de Madrid, orientadas por el mismo principio de limitación de usufructos comunales y su sustitución por la explotación rentística, han sido seguidas con detalle en el capítulo 3.

## 1. 2 - EDIFICIOS

Hasta el siglo XVII el ayuntamiento madrileño, pese a ser la sede de la Corte y la mayor concentración urbana de la España de la época, continuó celebrando sus sesiones en la Cámara de la iglesia de San Salvador. La situación cambió en 1619, cuando a la hora de otorgar el Reino el servicio de 18 millones, el concejo de Madrid puso como condición particular para aceptarlo el permiso para construir su propia Casa Ayuntamiento junto con la cárcel municipal, con el fin de disponer de un edificio propio y suficiente para el

---

<sup>472</sup> AVM-S, 3-6-35 y 3-6-53

<sup>473</sup> AVM-S, 3-226-3

gobierno local. Aprobada esta condición, el municipio madrileño propuso como fondo inicial para sufragar las obras la cantidad de 27.875 ducados que pertenecían a sus bienes de propios. Dicha cantidad era la cifra en que se habían ajustado tras largo pleito las multas impuestas a los lugares del Real de Manzanares por los excesos y roturaciones de términos comunales que habían llevado a cabo. Dado que la Villa y Tierra de Madrid tenía el derecho de aprovechamiento de los bienes comunes del Real, recibió las multas en compensación por los perjuicios sufridos. El reparto de los 27.875 ducados entre los lugares del Real de Manzanares que sirvieron para financiar la construcción de la Casa Ayuntamiento de Madrid está recogido en el siguiente cuadro. El resto de la obra se financió mediante efectos sobre sisas hasta mediados del s. XVII, en que se detuvo su construcción. Finalmente, con motivo de la entrada en la Villa de la reina Mariana de Neoburgo se concluyó la obra en el año 1690, financiada además con las adehalas de las obligaciones de abastos.<sup>474</sup>

---

<sup>474</sup> AVM-S, Libro mss. 150

**CUADRO 10- MULTAS AL REAL DE MANZANARES (DUCADOS )**

<b>LOCALIDAD</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
COLMENAR VIEJO	14.000	50,2
GUADALIX	2.000	7,1
MIRAFLORES	3.000	10,7
NAVACERRADA	480	1,7
CERCEDA	180	0,6
MATAELPINO	80	0,2
EL HOYO	200	0,7
MAZANARES	3.000	10,7
GALAPAGAR	2.700	9,6
GUADARRAMA	1.000	3,5
BECERRIL	300	1
CERCEDILLA	475	1,7
COLLADO MEDIANO	380	1,3
EL BOALO	80	0,2

Por otro lado, los *edificios destinados a mercado y abastecimiento* de los madrileños van a adquirir un peso cada vez más relevante en el patrimonio municipal. En el Madrid de la Edad Moderna los problemas de abastecimiento eran prioritarios debido al peligro que para el orden social suponía un pueblo hambriento en la mayor concentración humana de España. Por lo tanto, resulta lógica la subordinación a esta finalidad de los edificios municipales.

*El enclave de la Plaza Mayor.* Por su funcionalidad, privilegiada situación en el entramado urbano e importancia artística, las Casas de la Panadería y Carnicería de la Plaza Mayor son los edificios más sobresalientes del patrimonio destinado a la producción de rentas, esto es, de los bienes de propios.<sup>475</sup> La política concejil de construcción de locales para el abastecimiento urbano en esta zona continúa en 1530,<sup>476</sup> fecha en la que se compran los solares para establecer carnicería y panadería, aunque su edificación se demora hasta 1590. Cuando Juan Gómez de Mora construye la Plaza Mayor en los terrenos ocupados por la del Arrabal, añade a la función mercantil anterior la de lugar de celebración de festejos, acorde con la estructura tradicional de la Plaza Mayor española.<sup>477</sup> La residencia de la Corte en Madrid permite la presencia física de los monarcas en los espectáculos con los que divierten y aleccionan a su pueblo: fiestas de toros, autos de fe, etc. Para ello han de contar con un espacio concreto, encargándose tal misión al municipio.

*Casa Panadería.* Un decreto del Consejo de Castilla de 3 de marzo de 1611 ordenaba realizar en este edificio un cuarto para que los reyes pudiesen presenciar las funciones que tenían lugar en la nueva plaza. Desde entonces el cuarto principal de este edificio, que contaba con un amplio mirador sobre la plaza, se convierte en *mirador real*,<sup>478</sup> un espacio de poder que Gómez de Mora resalta arquitectónicamente: "Le da por tanto a la Casa panadería un tono diferenciado, como balcón regio y telón de fondo de espectáculos".<sup>479</sup> El edificio estaba

---

<sup>475</sup> Hay una amplia bibliografía sobre la Casa Panadería, centrada fundamentalmente en su construcción y aspectos artísticos. Entre la que aporta información sobre los aspectos de que voy a tratar, destaco: GUERRA SÁNCHEZ-MORENO, E.- "La Casa de la Panadería", *Rev. BAM*, t. VIII, nº 32 (1931), págs. 363-391; INIGUEZ ALMECH, F.- "La Casa Real de la Panadería", *Rev. BAM*, t. XVII, nº 56 (1940), págs. 400-413; GÓMEZ IGLESIAS, A.- "La Casa Panadería, las Actas del Concejo y otras casas", *Villa de Madrid*, nº 31 (1971), págs. 119-127; el mismo- "El Alcaide de la Casa Panadería y la mudanza del Peso Real", *Rev. BAM*, t. XIII, nº 49 (1944), págs. 193-215; el mismo- "Una orden de Carlos III sobre los balcones de la Casa Panadería" *Rev. BAM*, t. XIII, nº 49 (1944), págs. 225-228.

<sup>476</sup> GÓMEZ IGLESIAS- "Quisquilla", *AIEM*, t. 1118(1968), págs. 569-577; el mismo- "Comentario histórico" al LAC-II. págs. XXÍ-XXII y LXXXIX-LXXX; MONTURIOL- "El ingreso en la hacienda...", p. 1044

<sup>477</sup> La bibliografía sobre la Plaza Mayor es inmensa, entre la que sin duda destacan los dos Congresos que se celebraron en la Casa de Velázquez: VV.AA.- *Forum et .Plaza Mavor dans le monde hispanique*, París, 1978 y VV AA.- "*Plazas" et sociabilite en Espagne et Amérique Latine*, París, 1982. Referida a América Latina, pero con interesantes sugerencias para España: ROJAS-MIX, M.- *La Plaza Mavor. El urbanismo, instrumento de dominio colonial*, Barcelona, 1978. Por lo que respecta al caso madrileño, selecciono un trabajo que, a falta de análisis, tiene abundante información: CORRAL, J. del- *La Plaza Mayor de Madrid*, Madrid, 1987.

<sup>478</sup> El mirador regio o concejil en la Plaza Mayor española, en LAMPEREZ Y ROMEA, V.- *Las ciudades españolas y su arquitectura municipal al finalizar la Edad Media*. Madrid, 1917, págs. 28-29

<sup>479</sup> TOVAR MARTÍN, V.- *Arquitectura madrileña del siglo XVII*, Madrid, 1983, p. 409

terminado en 1619, pero quedó totalmente destruido en el incendio del 20 de agosto de 1672. La reconstrucción se llevó a cabo con rapidez, ascendiendo el importe global de las obras a 2.420.000 rs, pagados en sus dos terceras partes por las sisas municipales y el tercio restante por las reales.<sup>480</sup>

La administración y gobierno de la Casa estaba a cargo de un regidor, elegido anualmente por sorteo, mientras el cuidado del local se encargó en 1674 a un portero del ayuntamiento a quien se le retribuía con un real diario del fondo de propios.<sup>481</sup> No es éste el lugar para hacer un historial de cada uno de los rincones de este inmueble, pero sí me interesa resaltar la evolución del llamado *Cuarto real*. Como acabo de señalar, la Hacienda habla contribuido con un tercio a la reconstrucción de la Casa de la Panadería, utilizando tal aportación como título de propiedad del Cuarto regio, aunque tampoco olvida apuntalar su derecho con referencias a la ocupación anterior y a la razón de hospedaje. Tres argumentos, por tanto, para justificar que dicho espacio era "independiente de la jurisdicción de la Villa".<sup>482</sup> Ello no tiene que ver para que el régimen de tal dependencia registrara cambios importantes.

Carlos II concede el 16 de enero de 1685 la merced vitalicia del establecimiento de la alcaidía del Cuarto real de la Panadería a Diego Pérez de Orejón, escribano mayor del ayuntamiento. El alcaide podía vivir en el cuarto, dejando desocupada la estancia en la que el monarca asistía a los espectáculos de la Plaza. Se encargaba de su cuidado y reparaciones, así como de toda la planta baja con sus postes y portales, que desde la reconstrucción se habían dejado sin ocupar para prevenir incendios. Madrid accedió a esta entrega, pues aliviaba a los propios de los gastos de mantenimiento que, entre el salario del portero y reparaciones, se estimaban en unos 1.000 rs anuales, todo ello en un local que no producía renta alguna. La merced vitalicia se convirtió en perpetua en 1690, siendo evaluada, junto con una tabla de carnicería franca de imposiciones, en 110.000 rs. La alcaidía se incluyó en el mayorazgo fundado en Diego Manuel Orejón, hijo del primer alcaide, que como regidor seguía vinculado a los órganos de poder municipales. Claro que una vez conseguido el ascenso social de la saga

---

<sup>480</sup> GÓMEZ IGLESIAS, A.- "El Alcaide de la Casa Panadería...", p. 207

<sup>481</sup> *Ibidem.* págs. 193-196 y AVM-S, 4-127-1. Sin embargo, a comienzos del s. XVIII la comisión de la Casa Panadería estaba integrada por dos regidores. AVM-S, libro mss. 150. Sobre el significado de las comisiones de regidores, vid. infra, capítulo 9 sobre la administración del patrimonio municipal

<sup>482</sup> GÓMEZ IGLESIAS, A.- "Una orden de Carlos III...", págs.226-227

de los Orejón (el paso de escribano a alcaide real y de éste a regidor, o, lo que es lo mismo, de lo vitalicio a lo perpetuo y finalmente al mayorazgo, a la seguridad del privilegio), no opusieran más que una protesta formal -en realidad conservaban lo más importante: la titularidad, y por tanto el honor- a que en 1745 se destinara el Cuarto en cuestión a alojamiento de la Real Academia de San Fernando y más tarde a la de la Historia.<sup>483</sup>

Pero no es la de aposento real la única utilidad de esta Casa, aunque sí la más llamativa. Un Auto del Consejo de 28 de junio de 1674 ordenaba que "por ahora la Junta de la Panadería divida los cuartos segundos y terceros y los arrienden perficionando esta obra". La entrada a estos pisos se realizaba por dos escaleras, una junto al callejón o pasadizo del Infierno (actual calle del Arco de Triunfo) y la otra en el lado opuesto, junto a las caballerizas. Los alojamientos se distribuyen en torno a estas escaleras. Lo más frecuente es que aparezcan dos cuartos por piso y escalera, si bien determinadas alteraciones en los ocupantes que concentran varios cuartos y las obras realizadas variaron esta disposición. El complejo de habitaciones se completa con la de la casa del pasadizo del Infierno, unida a la de la Panadería y que se arrienda entera o por pisos (principal, segundo y tercero).

Además de las habitaciones alquiladas, existen los llamados "alojamientos de función" o viviendas reservadas a los empleados municipales que no pagan nada por ellas. Es el caso de las buhardillas del último piso, ocupadas por los porteros del ayuntamiento. Después de su fallecimiento pasaban sin más a sus viudas o familiares. El piso segundo de la escalera inmediata a las caballerizas por su parte, era concedido gratuitamente o alquilado a un precio muy inferior a su valor real al alguacil mayor de Madrid<sup>484</sup>. En 1802 el mayordomo estimó en 3.000 rs el precio de este piso, cuando el alguacil pagaba solamente 600 rs anuales. La Junta desestimó la pretendida subida con el argumento de que el "déficit o diferencia es parte del sueldo de que goza y estar obligado a vivir en dicho cuarto para el cabal desempeño de las obligaciones de su empleo".<sup>485</sup>

Las caballerizas del edificio servían para alojar caballerías y enseres de los arrieros y tratantes que llevaban sus géneros a la Plaza Mayor, espacio destinado -entre otras cosas- al

---

<sup>483</sup> GÓMEZ IGLESIAS, A.- "El Alcaide de la Casa Panadería...", págs. 197-215

<sup>484</sup> Acuerdo de 12 de diciembre de 1740, aprobado por el Consejo de Castilla el 10 de marzo de 1741. AVM-S, 3-8-7.

<sup>485</sup> AVM-C, 3-294-4

mercado desde sus inicios. En 1744, por ejemplo, se componía, además de sus ochenta pesebres, de nueve aposentos, cuatro de ellos ocupados por el administrador o el arrendatario y los otros cinco alquilados a diversos tratantes. Su utilización tenía más demanda en invierno, pues en verano los arrieros solían dejar sus bestias pastando por el campo.<sup>486</sup>

*La Casa Carnicería* completa el complejo municipal en la Plaza Mayor. En ella está establecida la carnicería mayor que el ayuntamiento concede a los obligados del abasto de dicho producto (o a sus administradores) y el repeso, que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa municipal sobre pesas y medidas y en general sobre cualesquier otras medidas de policía de mercados. El resto de sus dependencias se arriendan por los propios. Su estructura es compleja, ya que al local inicial se fueron añadiendo otras casas por compra. Así, los aposentos se hallan distribuidos en tres núcleos diferenciados: el que tiene su entrada por la misma Plaza Mayor, el que la tiene por la calle Imperial y la denominada Casa de Alberto de Avila. Son más de veinte los cuartos alquilados para la residencia, con una distribución que sufre varias alteraciones. Aparecen también tres tiendas arrendadas conjuntamente con los cuartos principales más cercanos.

La casa de Alberto de Avila, agregada a la carnicería y situada en la misma Plaza Mayor pertenecía a los propios madrileños por adjudicación de un concurso de sus acreedores. En 1620 el citado Alberto de Avila y su mujer convocaron dicho concurso en el que, entre otros bienes, se incluyeron unas casas en la Plaza Mayor. Destruídas en el incendio de 1631, Madrid compró el solar, donde se levantó la casa que se agregó a la Carnicería mayor por un importe de 71.000 rs. Se estableció un censo por esta cantidad a favor de los acreedores del concurso, cuyos réditos así como los bienes del concurso serían administrados por la Villa, según sentencias de graduación de los alcaldes de Casa y Corte.

Un último aprovechamiento de la Plaza Mayor, relacionado con su misión de centro de espectáculos, es el constituido por el aprovechamiento de los tablados contruidos para la contemplación de las funciones celebradas en ella. Los tablados de la Panadería se destinaban a los miembros de los Consejos y personal de la casa real, mientras los regidores se situaban justamente enfrente, en los correspondientes a la casa Carnicería. Ninguno de estos tablados producía renta a los propios. Sí lo hacían en cambio los balcones de la casa del concurso de Alberto de Avila, los del primer suelo de la Carnicería y diversos tablados que Madrid arrendaba en las bocacalles y sus cuchillos. La bocacalle de Toledo era especialmente

---

<sup>486</sup> AVM-S, 3-8-4



disputada según informaba el arquitecto Teodoro Ardemans: "Todas las fiestas de toros tienen gran litigio en la bocacalle de Toledo con los que arman los tablados medianeros, sobre quererse introducir en posesión que no es suya: y así, desde pilastra a pilastra de las casas de las esquinas, es del que arma la dicha bocacalles, que es la pertenencia de Madrid".<sup>487</sup> A estos ingresos se añadían los 7.700 rs que desde 1620 pagaron los dueños de las casas de la plaza en las fiestas extraordinarias como ayuda de costa para afrontar sus gastos.<sup>488</sup>

---

<sup>487</sup> ARDEMANS, T.- *Ordenanzas de Madrid, y otras diferentes que se practican en las ciudades de Toledo y Sevilla, con algunas advertencias a los alarifes y particulares*, Madrid 1756

<sup>488</sup> AVM-S, Libro mss. 150

**CUADRO 11 - INGRESOS DE LOS PROPIOS PROCEDENTES DE LAS FIESTAS  
DE TOROS EN LA PLAZA MAYOR, 1650-52**

LOCALIDADES	FIESTAS ORDINARIAS		
	1650	1651	1652
<b>CLAROS DE LA CARNICERIA</b>			
<b>(PARTE DE ALBERTO DE AVILA)</b>	4.500	3.150	3.150
<b>CLAROS DE LA PUERTA DE LA</b>			
<b>CARNICERIA Y ARRASTRADERO</b>	210	200	
<b>CUCHILLO DE LAS PUERTAS DE</b>			
<b>SANTA CRUZ Y GUADALAJARA</b>	2.152	2.280	1.800
<b>CUCHILLO DE LA CALLE DE LOS BOTEROS</b>	1.200	2.460	1.200
<b>CUCHILLO DE LA CALLE DE LA AMARGURA</b>	2.700	2.598	2.100
<b>CUCHILLO DE LA CALLE DE TOLEDO</b>	1.910	2.100	2.100
<b>BALCONES DE LA CASA CARNICERIA</b>	1.980	1.980	1.980
<b>BALCONES DE LA CASA CARNICERIA</b>			
<b>(PARTE DE ALBERTO DE AVILA)</b>	1.716	1.716	1.716
<b>TOTAL</b>	<b>16.368</b>	<b>16.484</b>	<b>14.046</b>

LOCALIDADES	FIESTAS EXTRAORDINARIAS		
	1650	1651	1652
CLAROS DE LA CARNICERIA			
(PARTE DE ALBERTO DE AVILA)	1.166	1.100	1.100
CLAROS DE LA PUERTA DE LA			
CARNICERIA Y ARRASTRADERO	70	100	
CUCHILLO DE LAS PUERTAS DE			
SANTA CRUZ Y GUADALAJARA	766	820	600
CUCHILLO DE LA CALLE DE LOS BOTEROS	360	1.000	400
CUCHILLO DE LA CALLE DE LA AMARGURA	900	886	600
CUCHILLO DE LA CALLE DE TOLEDO	630	750	700
BALCONES DE LA CASA CARNICERIA	660	660	660
BALCONES DE LA CASA CARNICERIA			
(PARTE DE ALBERTO DE AVILA)	572	572	572
<b>TOTAL</b>	<b>5.124</b>	<b>5.888</b>	<b>4.632</b>

FUENTE: AVM-C, 1-109-1

Los *hornos* has sido siempre objeto de un destacado interés por parte de los municipios, hasta el punto de convertirse en monopolio concejil en ciertos casos durante la Edad Media.<sup>489</sup> En Madrid el tema llegó a ser candente a mediados del s. XVII. Un decreto del Consejo de Castilla de 21 de octubre de 1647 ordenaba al ayuntamiento conceder solares

---

<sup>489</sup> Resulta muy sugerente el estudio del régimen jurídico de los hornos medievales en MARTÍNEZ GIJÓN et al.- "Bienes urbanos de aprovechamiento comunal en los derechos locales de Castilla y León. Notas para su estudio". *Actas del III Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1974, págs. 231-237.

gratuitos para la edificación de tahonas y hornos, liberándose además de la paga de la regalía de aposento, exención que fue ratificada en 1717.<sup>490</sup> Los mismos objetivos tiene Diego Mexía de las Higueras al proponer la fundación de 600 hornos municipales en 1647.<sup>491</sup>

La construcción de hornos municipales se llevó a cabo en el recinto del Pósito madrileño tras un traslado en 1664 a la Puerta de Alcalá. Ante las necesidades del abastecimiento de pan a la Corte y la manifiesta insuficiencia de los locales destinados a tal fin, el rey regaló al municipio los terrenos donde estaba instalada la Casa de la Moneda de molino.<sup>492</sup> En un amplio espacio -localizado entre la Puerta de Alcalá, plaza de Cibeles y paseo de Recoletos- se va desarrollando en la segunda mitad del s. XVII un vasto conjunto de edificios con sus correspondientes calles, patios y huertas. Además de la Alhóndiga aparecen hornos, el edificio del Peso de la harina (integrada dentro de las rentas de los propios de Madrid), mesón, etc.<sup>493</sup>

Si la edificación del Pósito se remonta a la cesión de terrenos por parte del rey en 1644, la aparición de los hornos es un poco más tardía y está vinculada a la intención de mejora en el abastecimiento de pan. Un auto del Consejo de Castilla de 1677 ordenaba a la Villa la fabricación de nuevos hornos "para ocurrir a las ocasiones de la falta de pan". Uno de los lugares que se estimaron más adecuados para su ubicación era el situado entre el convento de Recoletos y la calle de Alcalá. La cercanía del Pósito y del Peso de la harina determinará la elección de esa zona. Se lograba así formar una zona nuclear donde se alojaban las distintas fases del suministro de pan a Madrid: almacén, venta de trigo, peso de la harina, cocción y venta de pan.<sup>494</sup>

---

<sup>490</sup> AVM-S, 2-406-54 y 2-406-64.

<sup>491</sup> MEXIA DE LAS HIGUERAS, D.-*Discurso en que se propone la fundación de hornos municipales para la fabricación y venta de pan*, 25 de enero de 1647, B.N.-Mss. 6.734. Dichos hornos se costearían "en las rentas de la primera y segunda paga, si no fuere suficiente la primera, de los juros y censos y alquileres de casas que tienen y pe pagan en la Villa y casco de ella y lugares de su jurisdicción a conuentos, capellanes, cofradías y eclesiásticos sin reservar ni eceptuar ninguno". Una muestra más de la importancia de la propiedad inmobiliaria eclesiástica en Madrid y de las pretensiones "predesamortizadoras" que generaba.

<sup>492</sup> Sobre el abastecimiento de pan a Madrid y el Pósito de la ciudad el trabajo fundamental es el de CASTRO, C. de- *El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Réoimen*, Madrid, 1987

<sup>493</sup> *Ibidem*. p. 237 y sigs

<sup>494</sup> Datos sobre la construcción de los hornos en TOVAR MARTÍN, V.- *El Real Pósito de la Villa de Madrid. Historia de su construcción durante los siglos XVII y XVIII*. Madrid, 1982. págs. 34-37.

El mismo año de 1677 la Junta del Pósito propuso la construcción de 40 hornos que tendrían una vivienda incorporada. Entre los proyectos presentados fue elegida la traza del maestro de obras Juan de Lobera, que iba acompañada de una memoria explicativa de Manuel del Olmo y del arquitecto Marcos López en la que se describía su estructura en los siguientes términos: "cada fábrica de dichos hornos se compone de un zaguán común que haze entrada a dos viviendas, y cada vivienda tiene sala y alcoba y un aposento para echar la ornija para calentar el horno, una caballeriza de tres plazas y su patio corral para desahogo del uso de viviendas y su poyo de medianía para las dos viviendas".<sup>495</sup> Finalmente se construyeron un total de 42 casas-horno, que dada su ubicación en el barrio de Villanueva pasaron a denominarse los "hornos de Villanueva". Desde su origen fueron arrendadas como uno más de los bienes de propios de Madrid. Un acuerdo municipal de 23 de noviembre de 1696 estableció la administración del mayordomo de propios: en lugar de procederse a su arrendamiento global, el mayordomo era el encargado de ajustar el alquiler de cada edificio, cobrar sus rentas y pagar sus reparaciones, por todo lo cual percibía una cantidad aparte de su sueldo cifrada en 1.100 rs anuales.<sup>496</sup>

La *casa mesón de la Villa*, en la Cava Baja de San Francisco, tiene su origen como dependencias de una renta propia de Madrid, el peso de la harina. Esta renta ocupa un complejo de edificios situados en la Cava Baja: por un lado la "Casa de los costales del Peso de la harina", y enfrente el local principal sito "a la cera de las murallas, que la puerta trasera sale a la callexuela del Almendro",<sup>497</sup> y por tanto cerca del edificio ocupado por el Pósito desde 1542.<sup>498</sup> El traslado de la renta al nuevo complejo de la Puerta de Alcalá a partir de 1644 permitió que el ayuntamiento dedicase los locales de la renta del peso de la harina de la Cava Baja a construir dos mesones. El primero, en la "Casa de los costales", pasó a denominarse por su pertenencia municipal "mesón de la Villa", cuyos arrendamientos fueron percibidos por el mayordomo de propios. Por su parte, en el local principal se levantó el mesón del Dragón que, aunque la renta pertenecía a los bienes de propios de Madrid, los ingresos producidos por su arrendamiento los cobraba el mayordomo del Pósito. "En un principio se manda pregonar la venta de la casa delósito y la del mesón del Dragón. Pero en

---

<sup>495</sup> Citado en *ibidem*. p. 36

<sup>496</sup> AVM-S, 3-8-5

<sup>497</sup> AVM-C, 3-80-1

<sup>498</sup> *Libro Becerro* de 1695

1669 no se han vendido aún y se empiezan a arrendar, aplicando la renta al coste de las obras del pósito nuevo".<sup>499</sup>

### 1.3 - RENTAS

El 5 de octubre de 1576 una provisión real aprobó las ordenanzas del *peso real*, lo que significaba un reconocimiento del derecho de la villa en un momento en que de nuevo los alguaciles de Corte habían cuestionado este derecho. Su vigencia fue muy larga, de casi dos siglos, pues perduraron como norma de gobierno y administración hasta 1756.<sup>500</sup> Los derechos por la utilización del peso oficial se fijaban en 1 maravedí por arroba para un amplio conjunto de mercancías: hierro, acero, herraje, cobre, plomo, estaño, alambre, zumaque, pez, resina, queso, sebo, jabón, carbón, peras, manzanas, camuesas, duraznas, higos secos, aceite, miel, cera, trementina, pescado seco, sardinas, sábalo, congrio, atún y "otros cualesquier pescados frescos o salados e ansí otras cualesquier mercadurías". El arancel para los dátiles, azucar, azafrán, pimienta, canela u otra cualquier cosa de especiería era del 1% "ad valorem" hasta una cifra máxima de 20.000 mrs., a partir de la cual ya no pagaba nada.

Estos derechos eran obligatorios para todos los mercaderes o arrieros que abastecieran la ciudad. No así para los vecinos de la Villa, que estaban exentos en sus transacciones salvo si el comprador decidía verificar el peso, debiendo entonces el vendedor recurrir al peso real, pagando las tasas correspondientes. Las mercancías que se vendían "al pesillo por menudo" estaban exentas, lo que también sucedía en las ajustadas "por junto por arrobas". No obstante, en este último caso, si una de las partes, vendedor o comprador, estaban disconformes debían dirigirse al peso real. Esta renta se alojó en una casa propia del ayuntamiento madrileño situada en la calle de las Postas hasta que en 1715 fue trasladado a la planta baja de la Casa Panadería en la Plaza Mayor.

La renta de la *correduría* aparece íntimamente ligada al peso real. Sus ordenanzas se fijaron en la misma Provisión Real de 5 de octubre de 1576. En ellas se establecía el

---

<sup>499</sup> CASTRO- *El pan de Madrid*, p. 239

<sup>500</sup> Aparece recogida en los *Libros Becerro*

monopolio de corredor de las mercancías foráneas en el arrendador de la renta, el cual podía nombrar una o dos personas para ayudarle, que debían jurar previamente su cargo ante las autoridades municipales. Sus servicios no eran obligatorios en los intercambios. El recurrir a ellos suponía el pago de unos derechos del 0,5 % del precio de la venta, hasta un máximo de 20.000 mrs a partir del cual no se cobraría más. En lo que respecta a la venta de bienes raíces, el porcentaje que cobraba era más elevado, un 1%, manteniéndose la cifra máxima recaudada en 20.000 mrs. Con frecuencia aparece el arrendamiento conjunto de ambos propios, lo cual resulta lógico, ya que era en el peso real donde se podía ajustar mejor la venta de las mercancías traídas del exterior.<sup>501</sup>

La *renta del peso de la harina* supone un mecanismo de control del alimento básico en todo el Antiguo Régimen. La renta del peso de la harina se rige durante el s. XVI por las ordenanzas de 1530, que establecían que "todas e cualesquier personas que llevaren trigo desta Villa para lo moler en los molinos de la dicha Villa que lo lleven al peso de los costales questá a la Puerta cerrada así a la ida que lo llevan en trigo como a la vuelta cuando lo traigan hecho harina para que se lleve su justo peso a los dueños del trigo, y que esto sean obligados a conplir así los acarreadores que llevan costales a los dichos molinos como los dueños propios del trigo que lo llevaren o enviaren a moler so pena de seiscientos mrs a cada uno que no fuere al dicho peso, y que ansimismo está mandado que lleven de maquila los dichos molineros medio celemín por cada hanega de trigo...".<sup>502</sup>

Más detalladas son las ordenanzas de 1633,<sup>503</sup> que regulan "un peso para pesar el trigo e harina que huviere de moler en los molinos de esta Villa". Para controlar el pesaje se establece un encargado que "pese el trigo quando se lleve a moler e lo vuelva a pesar quando se traiga en fariña sacando de cada costal la maquila que se deviere sacar con tal que el costal de tres fanegas no lleve más de dos celemines e si fuere el costal de menos, lleve al respecto por manera que la maquila se lleve por igual de cada fanega tanto de uno como de otro, e que a este respecto se faga descuento del costal de trigo que se moliere e de su peso de fariña a cada costal según pesó el trigo, sacada la maquila, e si algo faltare para venir al peso que el molinero o acarreador tenga de fariña e cumpla lo que faltare, para que venga el peso según el

---

<sup>501</sup> Así sucede entre 1715 y 1716. AVM-S, 3-303-22

<sup>502</sup> AVM-S, 2-158-138

<sup>503</sup> AVM-S, 2-158-50

trigo por manera que cada uno que enviare su trigo a moler lleve la fariña que le perteneciere". Además fijaba una multa de 300 mrs para los molineros y acarreadores que incumplieran la norma de pesar el trigo antes y después de molerlo. Continúa una serie de medidas y penas que intentan prevenir toda la casuística del fraude: sellado de la harina ya pesada, prohibición de pesar la harina mojada... Por último, se señala un derecho de 2 mrs por cada costal que se pesare "e que no lleve más derecho salvo una vez quando se pesa para llevar al molino e que a la vuelta no lleve nada". Esta tarifa se eleva a 4 mrs por fanega de harina pesada según las condiciones de 1699 para el arrendamiento de la renta.

Esta renta aparece situada en la Cava Baja de San Francisco desde finales de la época bajomedieval hasta que con motivo de la construcción del nuevo Pósito Real se incorporó a su complejo de edificios en la zona comprendida entre la Puerta de Alcalá y el prado de Recoletos.<sup>504</sup>

Madrid va a disponer asimismo de los derechos sobre dos barcas en el río Jarama: la de Mejorada del Campo, también denominada de Arrebatacardos, y la de Arganda, compartida con el municipio de esta localidad. El *Libro Becerro* de 1.645 da la noticia de otra barca "que pone junto al lugar de Vacialmadrid; consumiósse porque el rio fue por otra parte".

El título de propiedad de la *barca de Arganda* es el resultado de una permuta de la Villa de Madrid con Felipe III en 1.579. El monarca disponía en la ribera del Jarama del soto de Palomarejo, mientras el monasterio de San Lorenzo del Escorial contaba con el soto del Piul. Entre ambas posesiones Madrid disponía de dos sotos, denominados del Barrueco y Sotil de los Lobos, además de los terrenos denominados Madres Viejas -topónimo que denota los continuos cambios del cauce del río- dentro del soto del Piul. El rey decidió "servirse con estos sotos y Madres Viejas para meterlo e incorporarlo y que estuviese junto cerrado como está con los dichos sotos y dehesas del Piul y Palomarejo", formando así un coto cerrado que pasaría al monasterio escurialense. Las fincas de Madrid agregadas fueron evaluadas en 57.353 rs.

A cambio la villa recibió la parte del rey en la propiedad de la barca de Arganda. Esta barca era compartida con dicho lugar, en cuyos terrenos estaba ubicado un apartadero, y el rey, ya que el otro apartadero se situaba en el soto de Palomarejo. Junto a él se concedía a Madrid una zona del soto que permitiera el tránsito por la barca. Esta transferencia se tasó en

---

<sup>504</sup> CASTRO, C. de- *El pan de Madrid*, p.208



36.764 rs y 24 mrs. Para completar el importe de las fincas se incorporó al soto del Porcal una parte de la dehesa de Pajares, propiedad real. Con una extensión de 93 fgs y 133 est según el asiento de la permuta, estaba situada entre la Matilla de Aluende y el Rincón de los Ciervos, zonas integrantes del Porcal.

De acuerdo con la propiedad compartida, la explotación de la barca se realizaba conjuntamente por Madrid y Arganda. Ambas se repartían los ingresos así como los gastos que para reparaciones y fabricación de barcas nuevas fuese necesario. Los arrendamientos se realizaban alternativamente en uno y otro ayuntamiento.

### 1.3 - CENSOS

Tres eran los principales componentes de este apartado de los propios madrileños: los censos perpetuos, los censos al quitar y los efectos de Villa. Si los primeros se remontan al último siglo medieval, los otros dos adquieren importancia en este período.

Los *censos perpetuos* jugaron todavía un cierto papel durante el s. XVI como fórmula de transmisión de solares edificables por el municipio, pero pronto se constata la disminución o desaparición de suelo público en los alrededores de la ciudad, traspasado mayoritariamente en el proceso de urbanización de las cavas o primera expansión urbana. De esta forma, el importante crecimiento del caserío urbano que llegará con la Corte no dispondrá de suelo municipal para desarrollarse, lo que tal vez hubiera permitido fórmulas más “sociales” de acceso a la propiedad o a la vivienda. Por el contrario, esta expansión estará en manos exclusivamente de la iniciativa privada y, más en concreto, de la nobleza y clero que con sus fórmulas privilegiadas de propiedad acapararán el control del solar madrileño. Las consecuencias se hacen bien patentes en la estructura de la propiedad del suelo que conocemos bien a mediados del s. XVIII: el 68’5% de todo el suelo urbano era propiedad de la Corona, la nobleza y el clero, si bien su participación en la propiedad de casas era menor. Al ayuntamiento correspondía por el contrario una participación exigua: apenas el 4% del suelo de la ciudad.<sup>505</sup>

---

<sup>505</sup> MARÍN PERELLON, F. J.- “Propiedad y precio del suelo en el Antiguo Régimen”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas*, págs. 112-117., especialmente p. 114.

A comienzos del siglo XVI se conceden nuevos solares que van completando la ocupación del espacio comprendido entre la muralla y los arrabales. En 1511 y 1512 se establecen censos perpetuos sobre los terrenos adosados a la muralla entre la Puerta Cerrada y la de Guadalajara. En 1526 se realiza la misma operación entre ésta y la Torre de Alzapierna. La muralla, pues, ha perdido todo valor defensivo.

El último proceso de urbanización de una área extensa mediante la transmisión del suelo por censos perpetuos tiene lugar entre 1531 y 1535. Abarca el trozo de muralla que se extiende entre el edificio del Peso de la Harina, Puerta de Moros, el lado occidental de la Plaza de la Cebada y la parte norte del oriental.

La evolución de los censos perpetuos a lo largo de los siglos XVI y XVII se puede seguir en los dos Libros Becerro. La recopilación que en ambos se hace de los censos no es exhaustiva y la frecuente ausencia de datos, como linderos o extensión, no permite su ubicación exacta. Sin embargo, resultan fuentes útiles para determinar las zonas donde continúa la concesión de solares municipales, así como para seguir la marcha de sus vicisitudes.

La característica más notable es la coincidencia de estas áreas de expansión con las señaladas por Urgorri para la segunda mitad del siglo XV. En efecto, la urbanización de las cavas estaba lejos de completarse y junto a solares para nuevas edificaciones, el municipio enajenó parcelas que se incorporaron a casas ya existentes para su ampliación. Además, cabe apuntar diversos solares aislados en otros puntos de la ciudad.

La zona de Puerta de Moros y Cava Baja de San Francisco fue ocupada en la década de 1530. Aunque no abundan las indicaciones, parece claro que se ocupó desde un primer momento la parte interna de la cava, es decir, se concedieron terrenos limítrofes a la muralla. En el censo perpetuo fundado por Juan de Santiago de 58 mrs anuales, se especifica que era por un solar "de cubo a cubo con un pedazo de sitio para igualar con el solar de Rodrigo de Valencia", y en el fundado por éste también se aclara que iba "de cubo a cubo". No obstante, aparece algún caso en que se cede más tardíamente el terreno contiguo al muro: en 1612 Diego de la Cuevas fundó censo "por nueve pies en cuadrado en un trozo de muro al que arrimaron sus casas".

Siguiendo el recorrido hacia el norte aparecen Puerta Cerrada y la cava de San Miguel. La mayor parte de los censos recogidos se remontan a la década de 1510 y suelen corresponder a la concesión de los solares adosados a la muralla, pues los terrenos situados enfrente habían sido urbanizados con anterioridad. Que la zona edificada no formaba un todo homogéneo lo demuestra la fundación de censos perpetuos posteriores: en 1572 Martín Manso, herrador del Rey, por permiso para "cargar el edificio de la dicha casa (en Puerta Cerrada) sobre el muro y cerca, lo que fuese necesario hasta igualar con el alto de dicho muro" o Juan Martínez García en 1576 por ocupar una callejuela sin salida en la calle del Almendro que iba a dar a la muralla y que estaba situada entre dos casas de su propiedad; el censo incluía el aprovechamiento de la muralla.

Entre la Puerta de Guadalajara y la de Valnadú se extendía una cava que la documentación denomina de las Fuentes por terminar cerca de las de los Caños del Peral. En 1526 se permitió la edificación a lo largo de la muralla, y de esta fecha son buena parte de los censos perpetuos aquí establecidos. Más tardíos, otros censos completan el proceso concediendo trozos de muralla o de las vías públicas para incorporar a las casas. Valgan algunos ejemplos: en 1566 Luis de la Barrera ocupó un rincón y un saliente junto a su vivienda en la calle de las Fuentes; en 1562 un solar de muralla, incluyendo un cubo, fue traspasado a Pedro de Prado en Mesón de Paños. Otras veces se unen las dos cesiones, muralla y calle: el platero Francisco de Rosales otorgó en 1567 dos censos, uno "impuesto sobre lo que carga sobre la cera y muro la casa que el susodicho tenía a la Puerta de Guadalupe y por lo que tenía labrado encima de dicha cera" y otro "para cargar sobre el muro y cerca que está en la Puerta de Guadalajara el edificio de sus casas y por el aprovechamiento de encima de dicha muralla".

Un último caso quiero resaltar: en 1553 dos tintoreros con casas colindantes fundaron sendos censos perpetuos por la construcción de soportales en la Plazuela de los Herradores. Es decir, los soportales tienen su origen en la incorporación de parte de la vía pública a casas particulares, manteniendo en su parte inferior su carácter primitivo de bien de común aprovechamiento.

Además de la muralla entre la Puerta de Moros y la de Valnadú, se dieron otros terrenos en diversos puntos de la ciudad. Su trascendencia en el proceso de urbanización resulta muy escasa. Con frecuencia aparecen aislados: a la salida del Puente de Segovia, donde se construyó un lavadero; en la Plazuela del Rastro, la Puerta de la Vega... En otros, las

concesiones abarcan varios terrenos agrupados pero de escasa extensión: en 1590 se fundaron censos sobre diversos solares en la calle de Atocha. Por su parte, el área de la Obrería Vieja (almacén de los utensilios de la Villa, especialmente de los objetos de culto y procesiones) se dividió en ocho solares que se dieron a Juan Sanz de Peñaranda en 1582 en recompensa de una huerta cedida para la construcción del Puente de Segovia. Abarcaba la manzana situada entre las calles del Humilladero, de las Tabernillas, Occidente y Mediodía, y cada uno estaba gravado con un censo de un real.

Si los censos perpetuos constituyen un indicador de innegable aplicación para estudiar las formas de ocupación del suelo urbano, su proceso de ventas, divisiones y ocultaciones lo dotan de un interés todavía mayor. Claro que estas mismas variaciones no siempre dejan ver con claridad la línea evolutiva de este patrimonio, ya que incluso resulta difícil precisar el número de tales censos perpetuos. Y si el año 1600 se recopilan 185 de estos censos, el Libro Becerro de 1695 los rebaja a 151, de los cuales la mitad corresponde a fundaciones originales y la otra mitad a sus divisiones.

Visto su origen y naturaleza, localización y número, continuemos por valorar aquello que se ha de administrar. En líneas generales puede afirmarse que para el concejo tenían un valor escaso. A través de la citada recopilación de 1600 se deduce que los 185 censos alcanzaban un valor medio de 15 rs, aunque este promedio no es demasiado significativo si se tiene en cuenta que oscilaban entre 10 mrs y 117 rs - 22mrs.<sup>506</sup> A estas insignificancias se refiere un acuerdo del Ayuntamiento de 11 de septiembre de 1733 al afirmar que “estos propios [los censos perpetuos] son los más inútiles de Madrid”.<sup>507</sup>

A sus escasos ingresos, los censos añadían una compleja problemática derivada de sus atrasos, ocultaciones, pleitos para su reconocimiento, variaciones, etc., que llevarán a las autoridades municipales a plantearse la sustitución de este patrimonio. Además van perdiendo progresivamente valor, pérdida que resulta evidente en toda relación enfiteútica, dando origen a una situación favorable al enfiteuta, que tiene asegurada la posesión del bien por una pensión que no se ajusta a la subida de precios. En el caso de los censos perpetuos municipales basta tener en cuenta el largo período transcurrido desde su constitución, en su mayoría a fines del siglo XV y comienzos del XVI.

---

<sup>506</sup> AVM-S, 3-8-10

<sup>507</sup> AVM-S, 3-115-28

El continuo proceso de división de los censos dio lugar al aumento de su número y a la disminución de su valor. En ciertas escrituras de fundación se agrupan dos o más solares en un mismo censo, algunos de los cuales eran edificados independientemente. También se realizaba la construcción de varias casas en un único solar y, lo que era más frecuente, el reparto de una casa entre diversos herederos o compradores. A ello hay que añadir las transformaciones en los solares (unión, modificaciones en sus linderos) y el abandono de ciertas casas en ruinas.

El derecho de laudemio, establecido en una "veintena", era el mecanismo de renovación del valor del censo y ascendía a un 5% del importe total de la venta del edificio, en la que se incluía el derecho al solar, excluidas las cargas. Su vigilancia estaba encargada a una comisión integrada por dos regidores elegidos por sorteo anual. Sin embargo, la veintena no se percibía en los numerosos censos de transmisión del edificio a herederos o en las donaciones, siendo misión de los comisarios conseguir que los nuevos propietarios reconocieran el censo. También se perdía al caer el local en "manos muertas", lo que obligaba a la Villa a entablar pleito para recobrar sus derechos (en el Libro Becerro de 1695 se recogen 18 pendientes para desvincular otros tantos censos perpetuos de Madrid). Otra posibilidad era que los comisarios ajustaran con la comunidad, capellanía o mayorazgo propietario del edificio, el pago de la veintena cada quindenio, solución muy favorable a los intereses de los propios, pero gravosa para los propietarios por ser un plazo excesivamente corto para la realidad del mercado inmobiliario de la época, por lo que aparece muy raramente.<sup>508</sup>

Los *censos al quitar* o censos consignativos consisten en la percepción de una renta devengada por un crédito; para garantizar su devolución se comprometía un bien inmueble, casa o finca. Al definir los censos consignativos se suele hacer hincapié en que suponen un préstamo de dinero efectivo. Sin embargo, el capital podía estar constituido por un bien inmueble que se transmite a cambio de la percepción de una renta. En el caso de los propios de Madrid se observa la concesión de varios solares para la construcción de un edificio mediante este tipo de contratos, abandonando el tradicional censo perpetuo. El 28 de marzo de 1582 Juan Manso y Juana de Compostela, su mujer, "otorgaron scriptura de censo de cien ducados de renta cada año al redimir y quitar, por mil y cuatrocientos ducados de principal en plata y oro, procedidos de un sitio que Madrid les dio para labrar en la puerta de Guadalajara a

---

<sup>508</sup> AVM-S, Libro mss. 150

los dichos Juan Manso y su mujer en la parrochia de San Miguel... y a la seguridad del dicho censo hipotecaron las dichas casas”.<sup>509</sup>

Son escasos los solares así cedidos en comparación al gran número de casos en los que se fundan censos enfiteúticos. Son también más tardíos, pues aparecen a finales del s. XVI y comienzos del XVII. Se localizan en la plaza de Santa Cruz, un lavadero en la ribera del Manzanares y, sobre todo, en la calle Mayor. Con motivo de ciertas reformas urbanísticas en esta calle, más concretamente en la zona de Platerías, se incorporaron varios espacios de la vía pública a las casas de varios plateros, que fundaron respectivamente censos redimibles por los solares.

Pero en general la Villa prefería los censos perpetuos para ceder sitios urbanizables: aunque su renta era inferior, disponía del mecanismo del laudemio para actualizar los ingresos; otra cosa distinta es que Madrid estuviera en condiciones de cobrarlo, unido al hecho de que se mantenía el dominio eminente del suelo, que en el caso del censo al quitar desaparecía al redimirse. Por ello exigía una indemnización a los particulares que deseaban convertir los censos perpetuos en redimibles. Lo hizo en 1621, cuando Sebastián Hurtado consiguió licencia del Consejo de Castilla para realizar tal transformación con motivo de incorporar un solar cedido a censo perpetuo en los Caños de Leganitos a otros de su propiedad, debiendo comprometerse a costear el alcantarillado que bajase de las calles del Pez y de San Bernardo.

Este tipo de cesión de un bien raíz supone en realidad una auténtica venta, ya que al redimir el capital se transmite la propiedad plena. El Libro Becerro de 1695 recogía la fundación de 35 censos al quitar, que con el tiempo se fueron redimiendo.<sup>510</sup>

Los *efectos de Villa* suponen que los bienes de propios perciben los intereses de varios de estos títulos impuestos sobre las sisas.<sup>511</sup> Su origen es diverso, si bien el pago de deudas es la fórmula predominante de su incorporación a los propios. Es el caso del censo redimible

---

<sup>509</sup> AVM-S, Libro mss. 155 bis

<sup>510</sup> AVM-S, Libro mss. 150 bis. De él proceden los ejemplos citados.

<sup>511</sup> Acerca de las sisas y los efectos de Villa, resultan imprescindibles los trabajos de Carlos de la Hoz García, especialmente su inminente Tesis Doctoral. Por seleccionar trabajos referidos a esta época, HOZ GARCIA, C. de la- “El sistema fiscal de Madrid en el Antiguo Régimen: Las sisas”, *AIEM*, t. XXV (1988), págs. 371-386 y “Hacienda, deuda municipal y poder urbano en el Madrid del siglo XVII”, Comunicación presentada al *IV Congreso de la Asociación de Historia Económica*, Alicante, 1989

fundado a favor de los propios de Madrid el 27 de agosto de 1591 por Cristóbal de Tovar y Gabriel de Garlanza por un capital de 5.368 rs, con una renta de 268 rs. El censo pasó al mayorazgo de Garlanza, y, un siglo después, en 1692 había acumulado unos atrasos en el pago de sus réditos de 7.719 rs. Para saldar las deudas con Madrid se cedieron parte de los intereses de dos efectos sobre sisas, uno sobre la de la sexta parte y otra sobre la primera blanca del carbón. Unas participaciones que, por otro lado, servían para pagar los intereses que fuese generando el censo. En suma, se ha intercambiado por un particular un censo al quitar por dos efectos sobre las sisas; no era mal negocio para el propietario inicial si tenemos en cuenta los atrasos con que se cobraban sus intereses.

Un grupo de efectos sobre la sisa de la sexta parte tenían su origen en la construcción de la Plaza Mayor. La necesidad de derribar ciertos edificios y dejar espacio libre, provocó la pérdida de algunos censos perpetuos que gravaban estos inmuebles a favor de los propios. Sucedió con las casas de María de Mendieta, Diego Pardo, Inés Ortiz, Bartolomé de Escobedo y Felipe de Cubas. Para compensar a los propios se constituyó un efecto de 19.618 rs de principal en la sisa de la sexta parte. El mismo origen tenían los dos efectos sobre la misma sisa que formaban parte de los bienes del concurso de acreedores de Alberto de Avila, del que la Villa era administradora.

Ejercía asimismo el ayuntamiento el patronato de las memorias que habían fundado en 1628 Isabel de Gálvez, mujer del regidor Pedro Alvarez de Henao. Dichas memorias estaban constituidas por dos efectos, uno en las sisas ordinarias y otro en la de la sexta parte, así como un censo redimible, con unos réditos globales de 1.543 rs.<sup>512</sup>

El hecho de que los bienes de propios percibieran una parte (por pequeña que fuera) de los ingresos de las sisas, muestra claramente la concepción de ambos ramos de la Hacienda Municipal como algo perfectamente separado. No hay una visión de una Hacienda Municipal integrada, con todos sus ingresos y gastos perfectamente unificados, dado que en última instancia forman parte de una única institución. De haber existido ésta, el cobro de los efectos por los propios no tendría sentido, pues no es más que un trasvase de fondos dentro del mismo organismo. Cada parte de la Hacienda madrileña se veía como algo independiente, estanco, que debía mantener su propia estructura y afrontar sus propios problemas, que eran muchos.

---

<sup>512</sup> La memoria de Isabel de Gálvez en AVM-S, Libro mss. 150. El resto de las noticias sobre los efectos de Villa en los dos *Libros Becerro*s citados.

## 2 – EVOLUCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS PROPIOS DE MADRID

La presencia de la Corte en Madrid influirá decisivamente en la estructura de la hacienda municipal. Por un lado, los continuos servicios de la ciudad a la Real Hacienda obligarán a un creciente endeudamiento y al peso progresivo de los ingresos impositivos, cada vez menos extraordinarios. Por otro, las nuevas necesidades de una población creciente y una sociedad que se va haciendo plenamente cortesana provocarán destacadas modificaciones en la estructura urbana y una profunda reorientación de los ingresos y gastos municipales.

### 2.1 - EL IMPACTO DE LA CORTE: UN PATRIMONIO HIPOTECADO, 1561-1600

La primera respuesta ante los desafíos generados por la capitalidad fue, una vez más, "tradicional", es decir, forzar al máximo la recaudación de fondos procedentes de los bienes de propios. Consecuencias: subida muy notable de los ingresos, acompañada de importantes modificaciones en su composición. Una aproximación a los cambios acaecidos la obtenemos de los datos del cuadro 12, en el que se comparan los ingresos de los propios en 1561 y 1600.



**CUADRO 12 – INGRESOS DE PROPIOS. 1561, 1600 (RS)**

	<b>1.561</b>	<b>1.600</b>
<b>RENTAS</b>	3.917	20.570
<b>EDIFICIOS</b>	1.190	24.775
<b>CENSOS</b>		54.109
<b>DERECHOS</b>	771	771
<b>TIERRAS (RENTA EN METALICO)</b>	3.044	12.230
<b>TIERRAS (RENTA EN ESPECIE)-FGS</b>	404-413	840-840
<b>TOTAL (RS-FGS)</b>	<b>8.922 rs - 817 fgs</b>	<b>112.455 rs – 1.680 fgs</b>

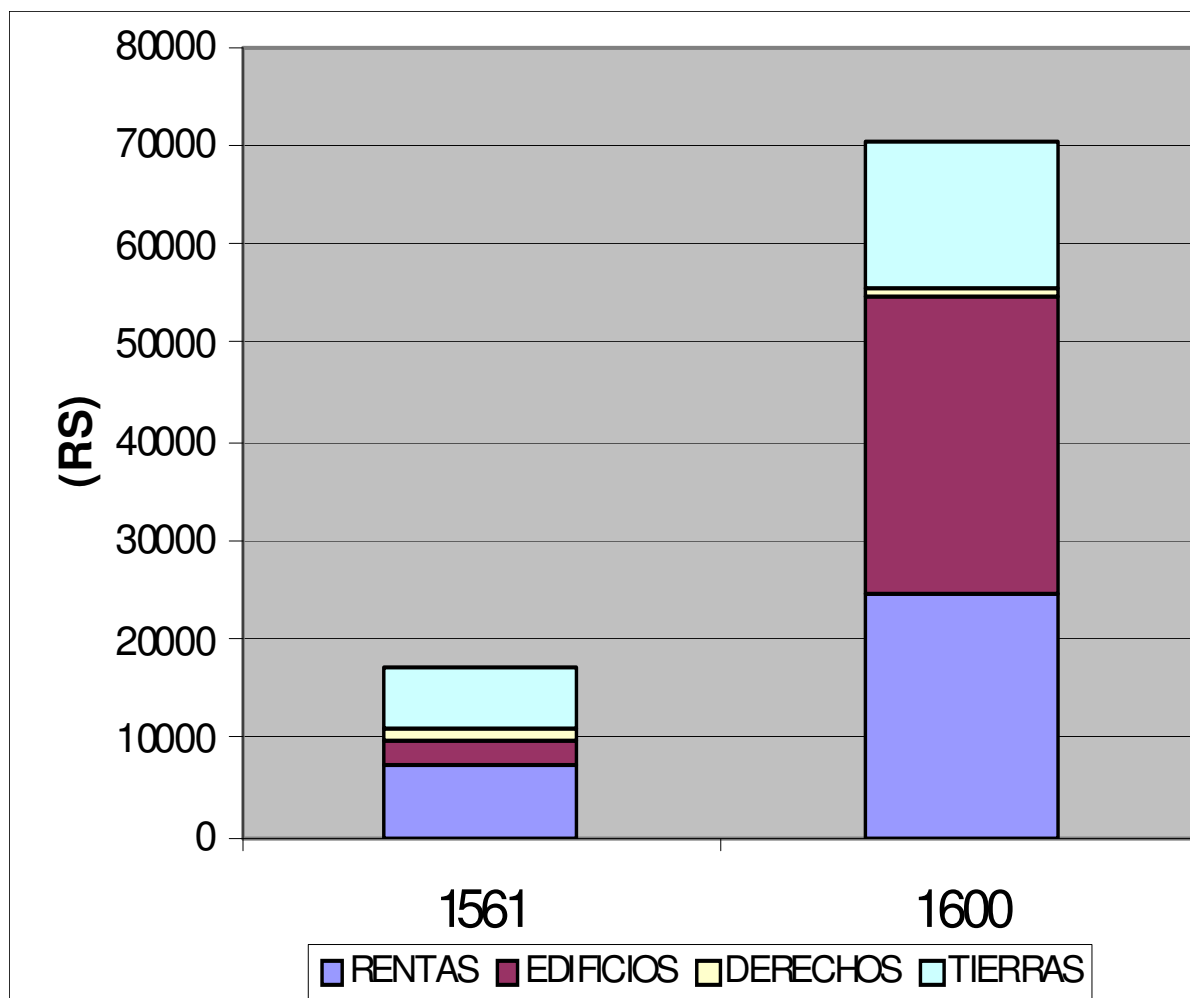
FUENTE: APENDICE 3

Nos encontramos, pues, ante un espectacular aumento superior al 1.200%. Si descontamos de la comparación el capítulo de los censos, que no aparece en 1561, se reduce prácticamente a la mitad, al todavía llamativo incremento del 650%. La renta en especie, por su parte, se duplica en este período de tiempo.

Con el fin de eliminar el efecto de una época inflacionista como es la 2ª mitad del siglo de la “revolución de los precios”, se ha elaborado el gráfico 7, resultado de deflactar los datos precedentes.

## GRAFICO 7 – INGRESOS DE PROPIOS – 1561, 1600.

### VALORES REALES



FUENTE: APÉNDICE 3

El capítulo de las *rentas* de propios fue uno de los más afectados. Así, fueron desapareciendo algunas antiguas rentas como consecuencia del cambio en las ordenanzas que regían ciertos sectores, lo que sucedió con la renta de la *mojonería* (derechos percibidos por la venta de vino por parte de los regatones) o la del *agua* (cobrada a los aguadores). Paralelamente se produce la consolidación de rentas vinculadas al tráfico comercial y al control del mercado por las autoridades concejiles. Este carácter mercantil y su estrecha conexión con el crecimiento de la población y de los intercambios que experimentará la nueva Corte, explican que sus valores en

términos reales se multiplicaran por tres a lo largo del período. Este será el caso del *peso real*, la más vinculada a la actividad mercantil, cuyos ingresos pasaron de 2.323 rs en 1561 a 12.170 rs en 1600; una dinámica de crecimiento que ya había adquirido en la primera mitad del XVI, cuando los años en que se asentaba la Corte en Madrid se multiplicaba su valor. También conectadas al comercio están los *barcajes*, que aparecen en esta fase. Destaca la barca de Arganda, cuyo origen radica en una permuta que hizo Felipe II con la Villa en 1579. La explotación de la barca corría a cargo de los concejos de Madrid y Arganda, que anualmente se repartían los ingresos así como los gastos de mantenimiento.

La expansión urbanística tuvo como consecuencia la formación de un importante *patrimonio inmueble* por parte del municipio, destacadamente la articulación de una red de abastecimiento para uno de los productos de consumo básico, la carne. Así, junto al matadero se construyeron las "escarpías" del Rastro, lugar de venta al por menor, además de la Carnicería mayor, sita en la Plaza Mayor. Asimismo encontramos nuevos edificios destinados al alojamiento de las rentas de los propios que eran alquilados. Por último, reseñar un conjunto de inmuebles contruidos por el municipio que ponen de relieve tanto la importancia urbana que estaba adquiriendo la Villa como la acuciante necesidad de aumentar los ingresos de sus arcas locales: escritorios en la Plaza de San Salvador (arrendados a los escribanos), lavaderos junto al río Manzanares o las Pilas de los Caños del Peral. Es ahora, con la fijación de la Corte cuando los inmuebles urbanos van adquiriendo peso específico en los ingresos de propios, peso que era muy limitado con anterioridad. Con todo, no se puede olvidar la subordinación de este patrimonio a la política de abastecimiento, cada vez más trascendental en una ciudad de crecimiento desorbitado.

Parcialmente vinculada al crecimiento de la ciudad se encuentra también la evolución del capítulo de censos. Lo más significativo es el cambio en la política municipal, que irá abandonando paulatinamente los censos perpetuos como medio de transmisión de suelo público. En su lugar, adquieren importancia los *censos al quitar*, créditos que devengan interés y que, a diferencia de los perpetuos, son redimibles por el censatario.

Las *tierras de propios* participaron en la solución extensiva que caracterizó a la agricultura castellana del quinientos. Así, puesto que muchos de los términos puestos en cultivo de antiguo experimentaban una caída de sus rendimientos, se roturaron nuevas tierras concejiles, lo que a su vez afectaba al equilibrio entre los intereses ganaderos y agrícolas. Por lo que respecta a la gestión, la tradicional fórmula de los "nihares" desapareció para ser sustituida por el arrendamiento directo en especie, cuyos ingresos se duplicaron durante el período. Los *sotos* concejiles,

por su parte, se vieron afectados directamente por el establecimiento de la Corte en la Villa, como ya se ha analizado. Cuando a partir de 1564 se arrienden las cortas de leña de estas posesiones, sus ingresos se multiplican: los 2.270 rs de 1561 se han convertido en 12.230 en 1600.

Pero la subida de ingresos de propios así conseguida estuvo, cada vez más, muy por debajo de la subida de los gastos del municipio. Unos gastos que tenían que ver en primer lugar con la mayor complejidad de la administración local: ante todo el abastecimiento, seguido por más personal y sueldos más altos, operaciones urbanísticas complejas, mayor boato en las festividades dirigidas a exaltar la grandeza de la Villa y Corte. Pero también, y de forma creciente, con las exigencias financieras de la Hacienda Real. Las ciudades castellanas, Madrid entre ellas, se vieron obligadas a prestar determinados servicios a las arcas reales.

El resultado será el *endeudamiento* municipal, que en un primer momento adquiere la forma de *censos sobre los propios*. El ayuntamiento recurría al crédito de particulares para afrontar los gastos extraordinarios, destacando los procedentes del abastecimiento de la ciudad, pagando unos intereses consignados sobre los propios. El peso de los censos sobre los ingresos ordinarios, que eran los procedentes de los propios, se fue convirtiendo en intolerable a lo largo de la segunda mitad del XVI. Así, hacia 1600 los pagos por este concepto ascendían a más de 70.000 rs anuales, una cifra considerable si tenemos en cuenta que equivale al 62 % del total de los ingresos del ramo de propios. Representa el gran capítulo del gasto, casi tres veces superior a lo que los propios destinaban a salarios. Este endeudamiento provocaba que se fueran acumulando los retrasos en las otras secciones del gasto, como los ya mencionados salarios o las festividades, que desde la Baja Edad Media eran el destino de los recursos generados por el patrimonio.<sup>513</sup>

Como garantía de los censos el municipio de la Villa procedía a hipotecar su patrimonio, principalmente las tierras. Una situación aprovechada por el ayuntamiento para continuar el largo proceso de patrimonialización del terrazgo concejil, ya que determinados términos comunales (o que lo habían sido anteriormente) fueron incluidos entre los que servían de garantía a los censos, lo que sería presentado desde entonces como un claro título de propiedad exclusiva, por tanto como un bien propio, especialmente cuando se producían pleitos y debates en torno a su utilización. Un ejemplo destacado es el de la dehesa de Valdelomasa, un término comunal que

---

<sup>513</sup> AVM-S, 3-8-10

Madrid había acotado como monte a comienzos del XVI, encargando su custodia al concejo de San Sebastián de los Reyes. En 1740 fue denunciado como baldío ante la Junta de Baldíos que intentaba restablecer la dinámica de ventas de términos realengos que tanta trascendencia tuvieron en los siglos XVI y XVII. La defensa legal de Madrid se basó esencialmente en el hecho de que se encontraba expresamente hipotecada a determinados censos, algunos de ellos todavía en vigor.<sup>514</sup>

## 2.2- CRISIS Y RECUPERACIÓN DE LOS PROPIOS EN EL S. XVII

La estructuración en una ciudad cada vez más consolidada como capital de la monarquía hispánica de una hacienda tributaria tuvo, como es lógico, importantes consecuencias para el patrimonio municipal. Para empezar, se fue ampliando la intervención directa de la administración real en su gestión, siempre con el objetivo prioritario de asegurar la transferencia de recursos a las arcas reales.

La primera y más decisiva actuación tuvo lugar en el terreno del *endeudamiento de los bienes de propios madrileños*. La situación había alcanzado límites insoportables a comienzos del s. XVII, momento en el que el principal de los censos cuyos intereses pagaban los propios superaba el millón de reales, una cantidad casi 10 veces superior a los ingresos anuales obtenidos de la explotación del patrimonio. Se había, pues, tocado techo en cuanto a la capacidad de endeudamiento de los propios madrileños, como atestiguaban los numerosos retrasos en el pago de los censos. Por otra parte, existía el riesgo real de que los titulares de la deuda decidieran actuar sobre los bienes que garantizaban su crédito, lo que hubiera supuesto la pérdida directa del patrimonio municipal. Para ampliar las posibilidades de obtener recursos financieros que se traspasaran a la cada vez más necesitada Hacienda Real era preciso recurrir a gran escala a la vía fiscal, mucho más elástica que la patrimonial.<sup>515</sup>

Tras el restablecimiento de la capitalidad el propio Consejo de Castilla se encargó de organizar una tarea que culminaría en 1612. Las medidas tomadas encargaban a las sisas el desempeño de unos propios cuyos censos se fueron redimiendo o se traspasaron directamente a

---

<sup>514</sup> AHN, Consejos, leg. 42.947

<sup>515</sup> Un tema estudiado, en una investigación paralela a ésta, por Carlos de la Hoz García

los efectos de Villa.<sup>516</sup> De esta forma, el peso de los censos sobre los propios se redujo drásticamente: hacia 1630 sus intereses suponían unos 9.600 rs anuales, lo que apenas representaba el 5% de sus gastos. Tan tranquila situación permitió que se fueran adscribiendo al patrimonio nuevas partidas de censos, pero siempre de forma moderada: a mediados del s. XVII los intereses habían ascendido a unos 26.000 rs anuales, lo que equivalía al 10% del total de los pagos.<sup>517</sup>

En este período, por tanto, cambió radicalmente el papel de los propios en el endeudamiento municipal. Con todo, no quedaron totalmente desvinculados puesto que legalmente el patrimonio siguió siendo garantía hipotecaria de los capitales de los efectos de Villa. Los bienes y rentas concejiles eran utilizados, por lo tanto, como cobertura de estas operaciones. Así, los propios madrileños estaban expresamente hipotecados a un capital de 4.976.614 rs, cuyos intereses pagaban las sisas ordinarias, que tenía su origen en los gastos de: la provisión del Pósito hasta 1598, el abastecimiento de carnes hasta 1586, la entrada en la Villa de la reina Margarita de Austria en 1599 y la compra de tierras para abrir el camino de Recoletos. Respondían asimismo de 988.546 rs de capital, con réditos consignados en la sisa del cuarto de palacio, y que provenían de 90.000 ducados tomados a censo por real facultad de 19 de abril de 1609 para comprar las casas del mayorazgo de Antonia Gutiérrez de Anaya en la plazuela de las Descalzas Reales, ofrecidas al rey por el traslado de la Corte. Por último, "por hipoteca general lo están también dichos propios a otros varios censos que se pagan de sisas y a los principales de los efectos cargados sobre todas".<sup>518</sup> En la práctica esta situación hubiera podido dar lugar al desmantelamiento total del patrimonio concejil debido a los importantes retrasos que acumularon estos títulos de deuda, aunque los recursos que algunos enfadados censualistas presentaron en distintas épocas fueron desatendidos, con lo que se salvaguardó la integridad de los propios.

De forma más limitada que anteriormente, los bienes municipales sirvieron en ocasiones para la obtención de ingresos extraordinarios destinados a la Real Hacienda cuando la disponibilidad de fondos lo permitía. Así sucedió en 1615 cuando el ayuntamiento tuvo que hacer un servicio al rey de 40.000 ducados por el título de concesión de las rentas de correduría,

---

<sup>516</sup> AVM-S, 3-6-18

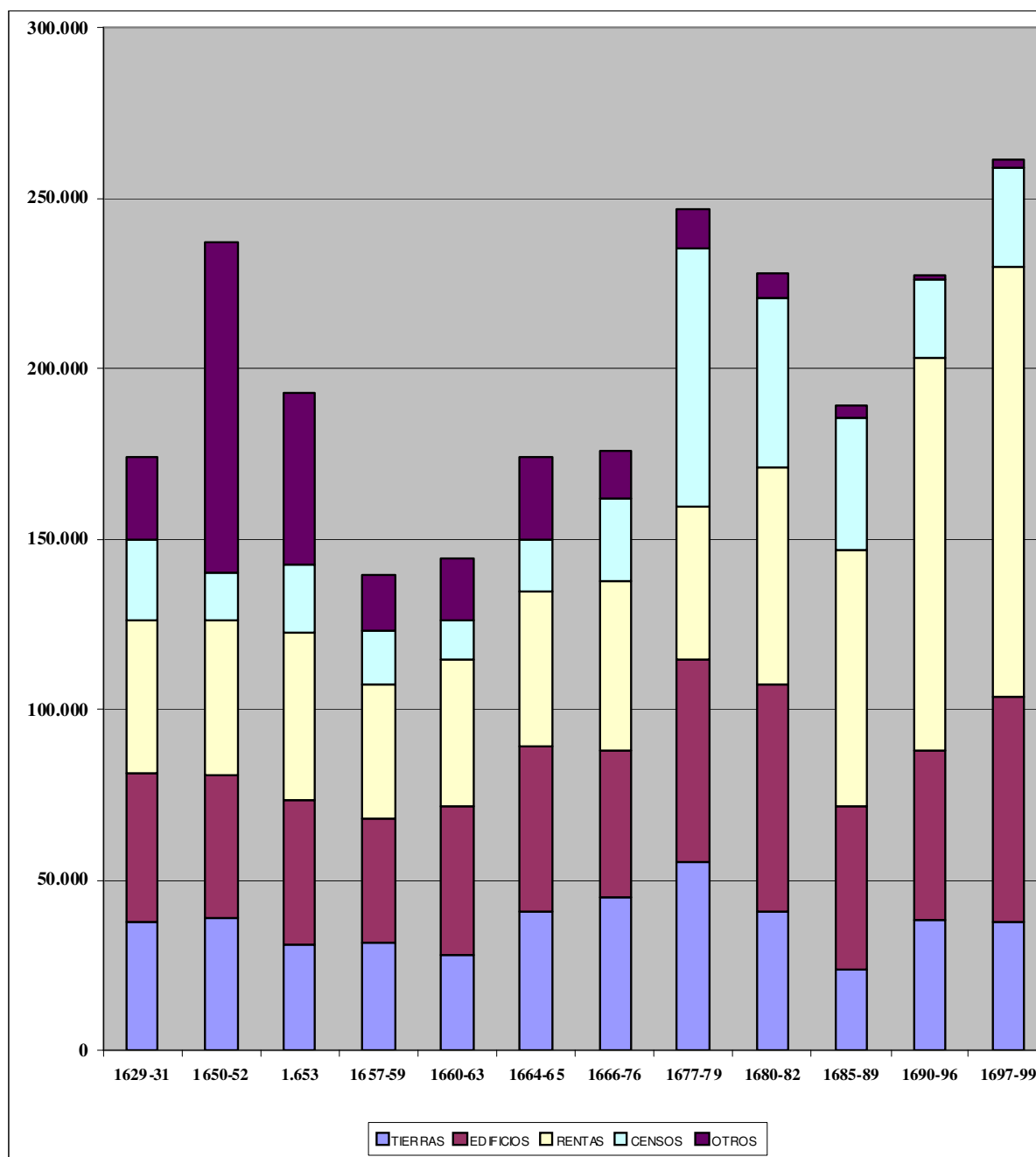
<sup>517</sup> La referencia de estos datos, en el Apéndice 3

<sup>518</sup> AVM-S, 3-56-45

peso real, peso de la harina y almotacén como *propios* de la Villa de Madrid, cuando en realidad estas rentas eran concejiles desde hacía varios siglos.<sup>519</sup>

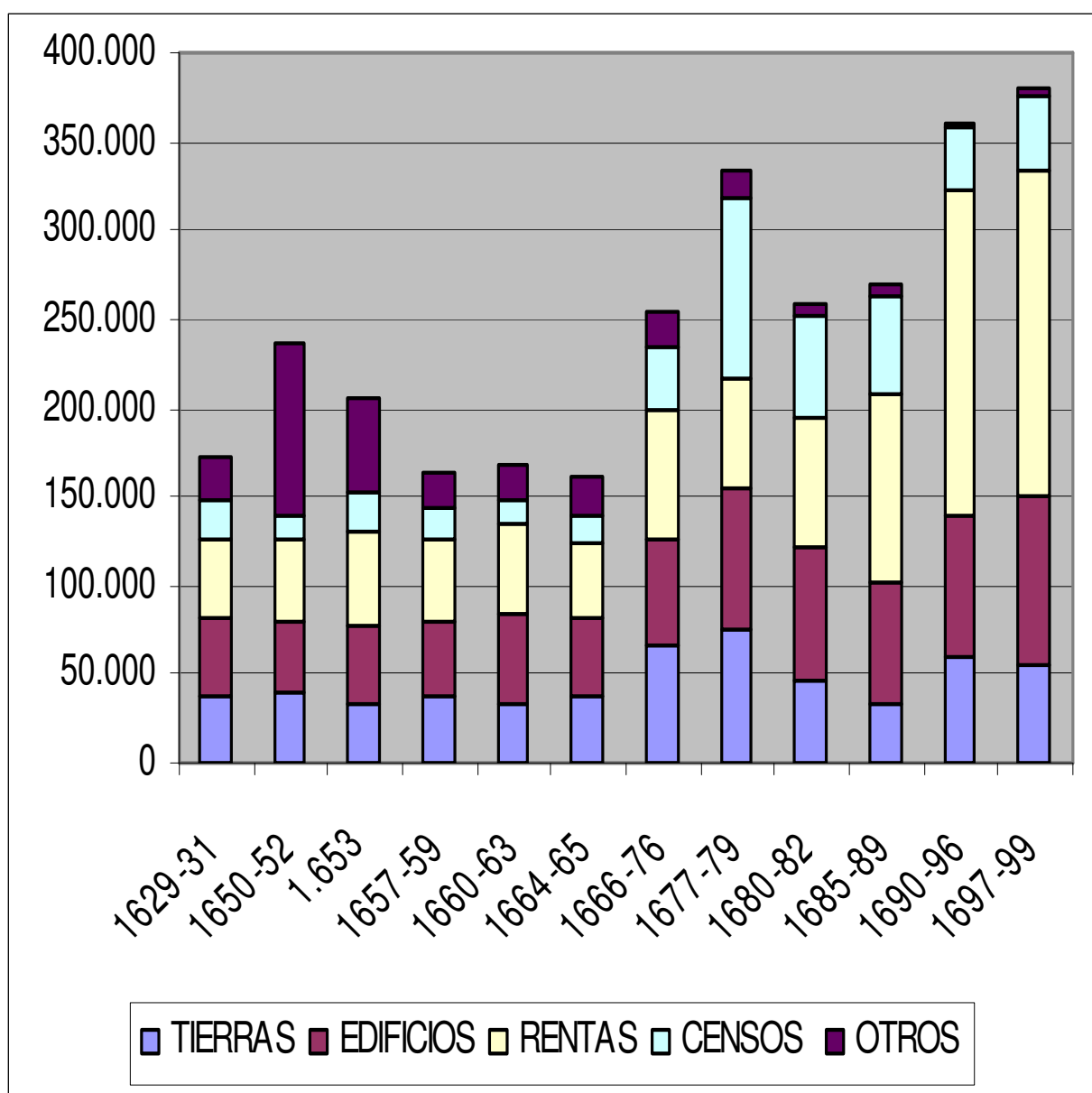
La evolución de los ingresos de propios se recoge en los gráficos 8 y 9, presentándose tanto en precios corrientes como constantes, lo que permite matizar la caída de los valores a mediados de siglo.

**GRAFICO 8- INGRESOS DE PROPIOS, 1629-79, VALORES NOMINALES (RS)**



<sup>519</sup> AVM-S, Libro mss. 150

**GRAFICO 9- INGRESOS DE PROPIOS, 1629-99, VALORES REALES**



FUENTE: APÉNDICE 4



Durante este siglo el patrimonio municipal experimenta importantes transformaciones, que en líneas generales se han presentado ya en el primer apartado de este capítulo. Tal situación era percibida claramente en el municipio, que quiso realizar un inventario que permitiera controlar y organizar la gestión de sus bienes. Para ello se elaboró en la década de 1640 un *Libro Becerro* que debería recoger todos los componentes del patrimonio concejil.<sup>520</sup> Tal propósito, sin embargo, distó mucho de alcanzarse. Sí se llevó a cabo una recopilación de los censos perpetuos y su evolución, aunque la depreciación de sus valores y la incapacidad de vigilancia (especialmente para cobrar las veintenass) determinaron que este capítulo tuviera un valor escaso para las arcas municipales. Pero la profunda transformación que experimentarían las tierras concejiles justo a continuación de su elaboración impediría que los objetivos del *Libro Becerro* se cumplieran.

La evolución de los *ingresos* se vio muy condicionada por las modificaciones del patrimonio. Así, los valores de los propios muestran una caída de un 40% entre 1650 y comienzos de la década de 1660, motivada por un lado por la desaparición de una partida de las "adehalas" de las fiestas de toros que se habían asignado a los propios (y que llegó a suponer casi el 20% de los ingresos), y por otro por la ausencia de los arrendamientos de las tierras de labor debido a la confusión jurídica que creaba la venta de baldíos.

A partir de 1660 comenzó una progresiva recuperación que hizo que a finales de siglo los propios alcanzaran valores entre 200 y 250.000 rs. Procedente en primer lugar de los arrendamientos de las tierras de labor. Recuperación asimismo de los censos, mejor controlados gracias al Libro Becerro. Pero la subida de los ingresos de propios se debe fundamentalmente al cambio de la política de abastecimiento de pan con la construcción del nuevo *Pósito*. Dentro de su recinto el ayuntamiento construyó un total de 42 hornos que pasaron a engrosar su patrimonio inmueble de forma considerable. Allí se trasladó también la sede de la renta del *peso de la harina*, los derechos que se pagaban por controlar el peso del trigo y la harina llevados a los molinos de la villa. En su nueva ubicación era posible un mejor control, lo que se tradujo en un aumento espectacular de sus valores, que se multiplicaron por 10 en este período, superando los

---

<sup>520</sup> La elaboración de un Becerro en el que se recopilaba la información de las propiedades era práctica común en muchas instituciones (eclesiásticas fundamentalmente). En ocasiones iba acompañada de todo un programa de reorganización y control del patrimonio, con medidas como ordenar el archivo o realizar apeos. Un ejemplo en LOPEZ GARCIA, J. M.- "Las economías monásticas ante la crisis del siglo XVII: Fray Hernando de Aedo y la reorganización de la abadía de la Santa Espina", en *Congreso de historia rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1983, págs. 663-4 y 667-668. En el caso de Madrid falta ese programa completo de reestructuración de la gestión que sí estaba presente en la Espina.

80.000 rs anuales a fines de la centuria, momento en que suponían más del 30% del total de los ingresos de los propios madrileños.

Esta nueva disponibilidad presupuestaria que suponía la subida de la renta del peso de la harina no se tradujo en una mejora de las partidas de gasto que atendían tradicionalmente los propios, sino que se destinó a cubrir parte de los gastos extraordinarios que ahogaban las arcas municipales. De esta forma, los ingresos del peso de la harina estuvieron empeñados constantemente al pago de determinadas celebraciones de la monarquía, como las entradas reales, desposorios, honras fúnebres, etc.

Un componente en el que también se produjo una reorganización fundamental fue el del patrimonio rústico, especialmente el de las tierras de labor. Si desaparecen de las cuentas de propios a mediados de siglo ante la confusión sobre su situación, iniciaron pronto un progresivo aumento de sus valores que se presenta en el siguiente cuadro.

## CUADRO 13-LAS TIERRAS DE PROPIOS EN LA 2ª MITAD DEL S. XVII

AÑOS	MEDIA ANUAL	INDICES	FORMA DE CESION	% DEL TOTAL
<b>1657-59</b>	7.753	100	METALICO	7,8
			ESPECIE	92,2
<b>1660-63</b>	5.862	75,6	METALICO	1,3
			ESPECIE	98,7
<b>1664-65</b>	9.746	125,7	METALICO	54,5
			ESPECIE	45,5
<b>1666-76</b>	13.756	177,4	METALICO	63,3
			ESPECIE	36,7
<b>1677-79</b>	19.919	256,9	METALICO	74,7
			ESPECIE	25,3
<b>1680-82</b>	16.060	207,1	METALICO	68,4
			ESPECIE	31,6
<b>1685-89</b>	10.344	133,4	METALICO	77,2
			ESPECIE	22,8
<b>1690-96</b>	18.977	244,7	METALICO	64,2
			ESPECIE	9,9
			CENSOS PERPETUOS	12,7

			OTROS	13,2
<b>1697-99</b>	17.926	231,2	METALICO	76,6
			CENSOS	18,3
			CENSOS METALICO EN	5,1

FUENTE: APÉNDICE 4

La subida de ingresos en concepto de tierras de labor fue rápida, alcanzando un máximo en 1677-79: en apenas dos décadas el producto recaudado de las tierras se multiplicó por 2,5. Fue acompañada de un cambio en la forma de la renta, pasando al cobro en metálico en sustitución de la renta en especie que predominaba desde la Edad Media. En la década de 1680 comenzó a descender, reflejando una situación de agotamiento de las parcelas. Para recuperar los ingresos se desarrolló la comisión de apeos de José de Noriega, fruto de la cual, además de renovar y aclarar los límites de las posesiones de Madrid, se decidió iniciar la cesión de términos ya agotados por el cultivo de cereal para la plantación de viñas, introduciéndose en consecuencia la modalidad de cesión a largo plazo por medio de los censos perpetuos, cuyo peso en los ingresos de tierras empezó a ser significativo rápidamente.

Finalmente, para completar estas medidas, el municipio decidió registrar sus bienes en un nuevo *Libro Becerro* que se elaboró en torno a 1695. Además de poner al día la evolución de los censos de propios, se recogieron los apeos de las posesiones rústicas, aunque éstos distaban de ser completos, lo que posibilitó que años más tarde volvieran a plantearse los problemas de ocupación ilegal.

## **CAPITULO 6 – ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LOS PROPIOS DE MADRID**

### **EN EL S. XVIII: EDIFICIOS, RENTAS Y CENSOS**

En la segunda mitad del s. XVIII los bienes de propios madrileños experimentan cambios importantes en su composición. Las variaciones patrimoniales, presentes constantemente, adquieren ahora una escala nueva, produciendo una renovación destacada de los bienes municipales. Como causa fundamental, la expropiación por la monarquía de los montes de El Pardo y la inversión de la importante cantidad que recibirá en pago el ayuntamiento. Por eso comienzo este capítulo con un análisis monográfico de este proceso, ya que muchos de los componentes de los propios que se mencionarán en epígrafes posteriores tienen aquí su origen. Para pasar acto seguido a estudiar los diversos componentes de los propios de acuerdo con la tipología establecida. Sin embargo, la importancia de las tierras de propios y la amplia documentación consultada, me han llevado a dedicar un capítulo específico a este componente; juntarlo con los demás bienes de propios en un único capítulo hubiera provocado una extensión excesiva y un esquema demasiado confuso.

#### **1 – TRANSFORMACIONES DE LOS BIENES DE PROPIOS MADRILEÑOS EN EL S. XVIII. EL “CAUDAL” DE EL PARDO.**

Como consecuencia de la expropiación de los montes de El Pardo por la monarquía (capítulo 3), los propios de Madrid van a experimentar su mayor transformación de todo el s. XVIII. En efecto, la cantidad en que finalmente se tasaron las propiedades madrileñas representa una suma muy considerable para las arcas municipales, y ello pese a las “rebajas” que llevó a cabo la Real Hacienda para abaratar la operación (y que no me consta se hiciera con los propietarios particulares). Siguiendo las directrices marcadas por sus comisionados y contando con la aquiescencia de los regidores, el rey decidió disminuir el precio total del

patrimonio madrileño, que quedó reducido a 5.984.176 rs. De los casi 9.400.000 rs a que ascendió la tasación, sólo se pagaban 6 millones de rs, evaporándose así casi 3'5 millones de rs. Ya he planteado que el motor último de la decisión final fue el deseo de conseguir la propiedad plena de un espacio cinegético, una propiedad que debía quedar totalmente garantizada y libre de todo gravamen, según se expresaba en la real resolución: "Que todas las referidas tierras queden libres a Su Magestad de todo gravamen, hipoteca, carga u otro cualquiera derecho aunque sea de tercero". Para conseguirlo, se ordenó a Madrid el empleo de parte de los caudales que cobrara en redimir todos los censos que pudiesen recaer sobre ellas, debiendo además adquirir nuevas propiedades que fuesen explícitamente responsables a cualquier acción o derecho existente sobre las de El Pardo. Por fin, el 13 de marzo de 1764 la Depositaria general de los Cinco Gremios recibía de la Real Hacienda los 5.984.176 rs. Una cantidad que se conocerá como el "caudal de El Pardo" y con cuya inversión cambiará sustancialmente la estructura de los propios madrileños.

La primera indicación sobre el destino que debía darse al caudal que recibiese Madrid por su patrimonio lo dio el fiscal de la comisión, Jerónimo Vicente el 4 de abril de 1763 cuando, tras denegar los derechos de la Villa sobre estas tierras, advertía: "y cuando por algún motivo que el fiscal no alcanza se procediera a la compra de estas tierras, convendrá para el resguardo de la Real Hacienda que el precio de ellas se emplee en comprar otras, a las cuales se trasladen los derechos que tengan sobre éstas el rey y los demás interesados, dejando a las de El Pardo libres de toda responsabilidad".

Las medidas posteriores desarrollarían esta idea inicial, que muestra con toda crudeza el objetivo de asegurar al máximo la propiedad real. En el dictamen de Colón y Figueroa se proponían los destinos concretos que se daría al dinero pagado a Madrid: dos millones de rs para la compra de pastos en las cercanías de la ciudad, "y que la restante cantidad del mismo capital se emplee en fincas fructíferas o en redimir censos, para que de uno y otro producto pueda sostener sus obligaciones Madrid, quedando siempre responsable a las cargas, hipotecas y acreedores que pudiesen resultar en lo futuro contra las tierras y montes que vende". Estas consideraciones fueron recogidas en la real resolución comunicada por el marqués de Esquilache el 29 de noviembre de 1763 que ponía el punto final al proceso expropiador. De los casi seis millones de reales a que ascendió la suma total pagada, dos millones se destinarían a la compra de una o más dehesas en los alrededores de Madrid para el pasto del ganado del abastecimiento de carne, disposición con la que se pretendía compensar el

perjuicio que había causado a este ramo el despojo de los pastizales de El Pardo. El resto se utilizaría en la redención de los censos y demás cargas sobre los bienes de propios madrileños y que por tanto habían estado gravando a las tierras incorporadas por el rey, lo que en un momento dado podía dar lugar a reclamaciones sobre ellas, empleándose la cantidad sobrante en la adquisición de nuevas propiedades por el ayuntamiento con las que se atenderían cualquier obligación que tuviese Madrid. Nada, pues, de autonomía municipal; fueron los mismos representantes reales los que dictaron el destino del caudal. Todo ello para salvaguardar los intereses del patrimonio real, a los que se subordinan los de un concejo tan desarticulado políticamente que se muestra incapaz de elevar su protesta por la amputación de su territorio y el cercenamiento de su gestión.

El control a que se somete el municipio no sólo se explicitaría en la falta de capacidad para decidir el empleo de su patrimonio, sino que incluso se llegó a la fiscalización minuciosa del cumplimiento de las órdenes reales sobre el particular.<sup>521</sup> El monarca no dejó ningún cabo sin atar, y en la citada resolución encargó a sus dos comisionados, Colón y Ventura, ejerciesen una estricta vigilancia: "es su real voluntad que V.S.Is. tengan *particular inspección y cuidado* para que Madrid emplee en una o más dehesas los dos millones de rs y los restantes en redimir los censos situados y consignados sobre los propios y en comprar fincas fructíferas" (la cursiva es mía). Para facilitar el control, el dinero no se depositaría en las arcas del municipio al que pertenecía, sino que se ingresaría en la Diputación de los Cinco Gremios mayores, siendo imprescindible el libramiento de los jueces reales para que Madrid percibiese alguna cantidad.

El análisis de las distintas áreas en las que se empleó el caudal de los montes de El Pardo va a permitir precisar el grado de fiscalización al que se sometió al poder municipal. Además de contar con el poder decisorio último que suponía el librar los cobros, los comisionados solicitaron continuamente información sobre las actuaciones concejiles y orientaron algunas compras. Con el tiempo -el proceso de inversión duraría más de veinte años- el control de los jueces reales se relajaría, limitándose a conceder la aprobación necesaria para los libramientos. Pero serían sustituidos como órganos de dirección de la inversión por el Consejo pleno -los dos comisionados eran miembros de él-, normalmente a

---

<sup>521</sup> Para seguir el grado de cumplimiento del proceso de inversión del caudal de El Pardo se realizaron numerosos informes tanto para consumo interno del ayuntamiento como para transmitirlos al Consejo de Castilla. Los más completos, AVM-S, 3-164-4, 3-228-49 y 3-95-1, son la fuente en la que se basa buena parte de la información siguiente.

través de la Contaduría general de propios y arbitrios. Un ejemplo: el 15 de julio de 1769 el contador general comunicaba una orden del Consejo por la que se pedía a Madrid relaciones detalladas de ciertas inversiones realizadas con el caudal de El Pardo y se daban otros mandatos sobre el mismo objeto, así hasta un total de nueve apartados distintos.

### 1.1 – DEHESAS CARNICERAS

De entre los diferentes destinos que la autoridad real fijó para el caudal de El Pardo, el de invertir dos millones de rs en la adquisición de dehesas carniceras en las proximidades de Madrid es el único que no aparece directamente ligado al prioritario objetivo de asegurar los derechos legales del patrimonio privado del monarca. Se intentaba por este medio compensar a los vecinos por el perjuicio que para el abastecimiento de carne suponía la expropiación de pastizales. Pero conviene no olvidar que el abastecimiento urbano era, en una ciudad que además era Corte, una auténtica cuestión de orden público. Dentro del esquema del abastecimiento la carne juega un papel fundamental, constituyendo el segundo abasto en importancia tras el pan y representando una cuarta parte del consumo de productos básicos (en el Antiguo Régimen no sólo se alimentaban de pan, aunque muchos murieran cuando les faltaba).<sup>522</sup>

El área de suministro era muy amplia, extendiéndose por regiones como Extremadura, La Mancha o el norte de la submeseta septentrional. Dado su carácter semoviente el ganado se desplazaba hasta la capital, donde era sacrificado. Pero una vez en las cercanías de Madrid necesitaba repasar para recuperar el peso que había perdido en tan largo camino, de ahí que fuera imprescindible contar con amplios terrenos de pastos en los alrededores de la capital. Un espacio se vio singularmente afectado por esta situación, el Real de Manzanares, donde el ganado que abastecía a Madrid disfrutaba tanto de sus términos comunes y baldíos a cuyo aprovechamiento tenía derecho, como a numerosas fincas particulares que arrendaban los obligados. Desde el Real los rebaños eran conducidos a la dehesa de Amanuel o de la Villa -destinada a acoger el ganado del abasto desde fines del s. XV- atravesando toda la zona de El Pardo situada al NO del río Manzanares. Pero además los

---

<sup>522</sup> Sobre este tema, BERNARDOS SANZ, J. U.- *No sólo de pan*



términos comunales de El Pardo recogían un importante número de hatos de ganado lanar y vacuno (siempre y cuando, claro está, lo permitiera la caza real).

Resulta, pues, comprensible que desde un primer momento los responsables municipales de la inversión del caudal se concentren en la compra de fincas en esta zona. En 1764 se iniciaban las gestiones para la adquisición del prado Herreros (término municipal de Soto del Real), dehesa de Santillana y prado de Navazurrones (en Manzanares el Real) y el soto de Migascalientes, en las proximidades de Madrid. Tan sólo la primera y la última de estas posesiones pasarían a la propiedad municipal, ya que las otras dos, pertenecientes a Joaquín de Porras, se vieron envueltas en un juicio sobre la legitimidad de su pertenencia que motivó el abandono de las pretensiones del ayuntamiento. El soto de Migascalientes, con una extensión de 83 fgs-10 ceIs, que costaron a Madrid 206.546 rs, fue utilizado por el abasto para el hato de reses de muerte y descanso de los ganados de tránsito. Por su parte, el prado Herreros permitía el pasto de 100 reses vacunas durante todo el año, ascendiendo su precio a 683.033 rs.

El proceso de compra se desarrolló bajo el estricto control de los comisionados reales. Ellos fueron los encargados de solicitar de los dueños la presentación de los títulos de propiedad, de ordenar la realización de los apeos y tasaciones correspondientes, de mediar en caso de diferencia de tasación entre los peritos de Madrid y los dueños (como sucedió en el soto de Migascalientes) y de librar las cantidades necesarias para pagar las diligencias efectuadas (apeos, reconocimiento de escrituras), puesto que los representantes municipales no tenían facultad para realizar ninguno de estos procedimientos.

Los problemas legales de la dehesa de Santillana y prado de Navazurrones paralizaron momentáneamente la compra de más terrenos de pasto. Sin embargo, la necesidad de nuevas adquisiciones se hizo bien patente a partir de 1770, cuando el abasto de carnes se encontró ante una grave escasez de pastos en los alrededores de la ciudad. Las causas que se apuntaban eran la ya conocida expropiación de los montes de El Pardo y de la dehesa de Viñuelas (tradicionalmente arrendada por el abasto), así como las roturaciones de comunales y baldíos con licencia del Consejo o sin ella, las restricciones de los usos comunales en varias localidades (como el derecho de pacer la pámpana, las hojas de las viñas tras la vendimia) o el aumento de la demanda de dehesas y pastizales de particulares y aldeas, aspectos todos ellos característicos de una situación de subida de la renta de la tierra. Durante más de una década los responsables municipales recurrieron ante el Consejo de Castilla para paliar la

insuficiencia de hierbas. El punto central de las reclamaciones consistía en ampliar la comunidad de pastos de que gozaba el abasto de carnes de un radio de 5 leguas en torno a Madrid hasta las 7 leguas (llegándose incluso a solicitar las 8 y 10 leguas). Pero ante esta petición el Consejo demostró reservas, concediéndose tan sólo de forma excepcional y con carácter temporal.

Fue en esta coyuntura en la que salió de nuevo a la luz el tema de la inversión en dehesas del caudal de El Pardo. El 20 de octubre de 1773 el Consejo autorizó por un período de un año la ampliación de comunidad de pastos hasta las 7 leguas, pero a la vez ordenaba a Madrid procediese a la adquisición de pastizales. Unos días más tarde el ayuntamiento mostraba su interés por la dehesa de la Cepeda, perteneciente a los lugares de Zarzalejo, Robledo de Chavela, Fresnedillas y Santa María de la Alameda. En ese momento se seguían autos judiciales por parte del monasterio del Escorial, que pretendía adquirir la citada dehesa como parte de la redención de un censo de 1.050.000 rs que había prestado a estas cuatro villas para el tanteo de su jurisdicción. El Consejo de Castilla en su Sala Primera apoyó la pretensión de Madrid de hacerse con la propiedad de la Cepeda, imponiendo a las cuatro villas la condición de emplear el dinero obtenido con la venta en redimir el censo que pertenecía al monasterio. Cuando el municipio madrileño y las villas propietarias ajustaban el precio y condiciones de la venta -ya que éstas pretendían incluir la jurisdicción junto a la propiedad, lo que no interesaba a Madrid- una resolución de la Sala Segunda del Consejo prohibía en 1777 la enajenación de la Cepeda y ordenaba a las localidades que la poseían tomasen un nuevo censo para redimir el del monasterio. El 6 de julio de 1778 el Consejo acabó con esta contradicción y permitió al fin que se llevara a cabo la venta a los propios de Madrid. No acabaría aquí el proceso, pues las cuatro villas persistieron en su actitud de enajenar la jurisdicción de la dehesa conjuntamente con la propiedad, lo que motivó un nuevo recurso ante el Consejo, que el 29 de octubre de 1782 desestimó esta pretensión. Pudo entonces Madrid proceder a la compra de la dehesa de la Cepeda, de una extensión total de 1.340 Has. Su ubicación en plena Sierra permitía el pasto de 1.000 cabezas de ganado vacuno, que durante el invierno debían buscar pastizales más cálidos.<sup>523</sup>

Se había culminado así el proceso de compras de dehesas carniceras. Su limitada extensión no pudo resolver los problemas que en una época de roturaciones y subidas de rentas padecía el abastecimiento de carne, pero se unían a otros prados y dehesas de los

---

<sup>523</sup> Todo el proceso en la escritura de compra, AVM-S, 3-130-70

propios madrileños que eran disfrutados por el abasto sin padecer problemas sobre su continuidad o precio.

## 1.2 – LA DEHESA DE LA SERENA

No fueron estas adquisiciones fundiarias las únicas realizadas con el caudal de El Pardo. La resolución real había fijado como destino de una parte la compra de fincas fructíferas que habían de quedar expresamente obligadas a cualquier derecho que pudiese afectar a las tierras expropiadas. La elección no recayó, como podía parecer lógico, en tierras situadas en las cercanías de la ciudad, más fácilmente controlables por las autoridades municipales, sino en una parte de la dehesa de la Serena en Extremadura, un terreno codiciado por los ganaderos trashumantes.

La dehesa de la Serena, una de las principales zonas de pastos invernales para los ganados mesteños, pertenecía a la Corona como administradora del maestrazgo de la orden de Alcántara. A partir de 1744 se procedió a la enajenación de la real dehesa, con una extensión total de más de 121.000 Has. La causa para tamaña movilización de tierras fue, como no podía ser menos, de orden fiscal, constituyendo uno de los más importantes recursos extraordinarios a los que se vio abocada una hacienda en situación de déficit crónico.

El interés de la capital por estos pastos se puso pronto de manifiesto. En 1764 consideró "el ayuntamiento que Madrid conseguiría visible utilidad y beneficio en que parte del referido caudal se invirtiese y emplease en la compra de yerbas de la real dehesa", por lo que el 11 de agosto presentaba postura a la denominada suerte de Cabeza del Buey, de 8.964'5 cabezas (casi 4.500 Has), ubicada en dicha localidad pacense. Se ofrecían 4'5 rs por cada cabeza en renta, cantidad que se consideraba equivalía al 2% del valor del capital en venta. Admitida la postura, se pregonó en Madrid, Soria, Segovia, Cuenca y Villanueva de la Serena y, al no existir mejora, se procedió al remate, que fue aprobado por una real orden de 24 de noviembre del mismo año.

El valor final de la dehesa ascendió a 2.017.012'5 rs. Para su pago, los apoderados madrileños solicitaron a los comisionados reales el permiso necesario para que la Diputación

de los Cinco Gremios librara tal cantidad a favor del propietario, la Real Hacienda, como así hicieron, otorgándose la carta de pago el 29 de marzo de 1765. Pero tal vez la participación de los dos ministros del Consejo no se limitara a esto, especialmente la de Manuel Ventura Figueroa que además era -¿sólo casualidad?- el juez comisionado para proceder a la enajenación de la real dehesa de la Serena.

Porque de esta forma la Real Hacienda había conseguido recuperar la tercera parte de lo que había abonado a la Villa de Madrid. Para ésta la operación reportaba un terreno de ricos pastos para los conspicuos ganaderos trashumantes avecindados en la Corte. La rentabilidad fue, pues, el criterio que guió a los dirigentes municipales a la hora de invertir en nuevas propiedades; otros criterios, como proporcionar tierras de labranza a los campesinos de los alrededores de Madrid o pastos y leñas al abastecimiento urbano, quedaron relegados. Los grandes beneficiados serían los grandes propietarios de rebaños trashumantes residentes en la ciudad de Madrid, como se comprobará en el análisis de la explotación de esta propiedad en el próximo capítulo.

## 1.2 – REDENCIÓN DE CENSOS SOBRE LOS PROPIOS.

Redimir los censos que gravaban el patrimonio municipal madrileño significaba, para el poder central, liberar las tierras incorporadas a El Pardo de cualquier obligación que pudiera recaer sobre ellas. Nada, pues, tenía que ver con la política de reducción de la deuda municipal, que constituía una de las principales líneas de actuación de la Contaduría general de propios y arbitrios.

En 1763 los propios madrileños estaban cargados con un total de 24 censos, cuyos réditos anuales suponían 14.015 rs, lo que apenas representaba un 6'3% del total de los ingresos patrimoniales. La causa de este reducido volumen de intereses se encuentra en el modelo de endeudamiento municipal seguido por Madrid a partir de la segunda mitad del s. XVI. Para hacer frente a las elevadas exigencias de la Hacienda Real, principal origen de la deuda, el ayuntamiento recurrió preferentemente a la imposición de arbitrios sobre el consumo, que recaudan el dinero adelantado por los efectistas o censualistas. En tales operaciones los bienes concejiles eran utilizados como prenda de cobertura hipotecaria de los

capitales recibidos. Se observa por ello la regresión del número de censos sobre los propios desde el s. XVII, hasta llegar a la ya comentada situación de mediados del s. XVIII.

Del total de estos censos, 13 aparecen como específicamente de propios. Constituidos a finales del s. XVI y durante la centuria siguiente, su origen es muy diverso: ampliación de la Plaza Mayor, gastos en honras fúnebres reales, tierras expropiadas para reformas urbanísticas (puente de Segovia) son algunas de las causas por las que el ayuntamiento grava sus propios. Los otros 11 censos son pagados por los ingresos patrimoniales al ser el municipio administrador de los bienes del concurso de Alberto de Avila. Madrid recibió en el primer tercio del s. XVII unas casas en la Plaza Mayor agregadas a la Casa Carnicería y diversos efectos sobre las sisas como principal acreedor de dicho concurso; a cambio debía satisfacer los réditos de los censos cargados sobre ellos.

#### CUADRO 14 - CENSOS SOBRE LOS PROPIOS DE MADRID (RS), S. XVIII

TITULAR	CAPITAL	REDITOS ANUALES	REDITOS ATRASADOS
ARCAS DE MEDIAS ANNATAS DE LA ORDEN DE SANTIAGO	23.147	694	4.404
MEMORIAS DE LOS HERMANOS DE BERNARDO DE BELLOTA	36.667	1.100	2.679
MEMORIAS Y MAYORAZGO DE FRANCISCO ENRIQUEZ DE VILLACORTA	23.162	695	8.273
COLEGIO DE SAN ILDEFONSO	23.529	706	7.496
MAYORAZGO DEL CAPITAN JUAN DE ECHEVARRIA	7.700	231	7.150
MEMORIAS DEL OBISPO DE CUENCA. IGLESIA DE SAN PEDRO, BARAJAS	41.176	1.235	6.940
MAYORAZGO DE JUAN DE SOLIS	37.802	1.134	17.029
MEMORIAS DE DIEGO DE VARGAS. CONVENTO DE S FRANCISCO	24.200	605	1.584
CAPELLANIA DE TERESA RUIZ. IGLESIA DE SANTA CRUZ	5.500	165	1.472

MEMORIAS DE FRANCISCA RUIZ. IGLESIA DE S GINES	2.200	66	
CAPELLANIA DE JUAN NÚÑEZ DE TOLEDO MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO	4.902	147	
MAYORAZGO DE ALONSO DEL MÁRMOL	3.965	119	
MAYORAZGO DE ANDRES CRIADO DE CASTILLA	15.400	462	
<b>TOTAL</b>	<b>249.350</b>	<b>7.359</b>	<b>57.027</b>
<b>CONCURSO DE ALBERTO DE AVILA</b>			
HOSPITAL GENERAL	22.000	660	3.298
PATRONATO DE DIEGO PAEZ, CONVENTO DE S FELIPE EL REAL	57.904	1.893	23.473
PATRONATO DE JUAN VALLEJO DE VILLEGAS TOLEDO	7.100	213	1.014
CONVENTO-HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS	11.029	331	2.396
CONVENTO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE CALZADOS	11.000	330	3.614
MEMORIAS DE JUAN DE HERRERA, IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI	14.103	423	1.903
MEMORIAS DE CATALINA DEL CASTILLO	11.000	330	10.600
PATRONATO DE FRANCISCO ORTEZ DE VELASCO	22.664	680	15.378
MEMORIAS DE LA MARQUESA DE BERLANGA DE DUERO	55.147	1.650	12.283
CONVENTO DE SAN JUAN DE LA PENITENCIARIA DE ALCALA	44.000		
MEMORIAS DE JERÓNIMO DE MIRANDA CONVENTO DE S. JULIAN, TOLEDO	110.294		
<b>TOTAL</b>	<b>355.241</b>	<b>6.510</b>	<b>73.957</b>

FUENTE: AVM-S, 3-164-4, 3-228-49 y 3-95-18

Rasgo común a los dos tipos de censos es su concentración en la propiedad amortizada. Tanto mayorazgos como conventos y, de forma aun más llamativa, memorias y otras fundaciones que suponen transferencia de rentas a la Iglesia acumulan los beneficios producidos por el préstamo censal.

El total pagado por las redenciones de censos con el caudal procedente de El Pardo entre 1764 y 1765 ascendió a 686.620 rs. De ellos, 272.937 rs se destinaron a liquidar ocho censos impuestos sobre los bienes de propios. Los capitales tuvieron un valor de 217.383 rs, correspondiendo el resto a los intereses adeudados, que anualmente ascendían a 6.400 rs, lo que supone que existía un retraso de casi 9 años en la satisfacción de sus réditos por término medio.

Dos censos no fueron redimidos, el de las memorias de Francisca Ruiz y el de la capellanía de Juan Núñez de Toledo, que serían reconocidos en 1771 como cargas sobre los propios para ser añadidos a las establecidas en el Reglamento de 1766. De otros dos censos, los vinculados a los mayorazgos de Alonso del Mármol y Andrés Criado de Castilla, no consta en la documentación se redimieran.

La liberación de los censos del concurso de Alberto de Avila supuso un desembolso de 413.683 rs, correspondiendo 250.627 rs al valor de los capitales y el resto a los intereses, que alcanzaban unos atrasos mayores que los censos sobre los propios. Incluso dos censos, pertenecientes al convento de San Juan de la Penitenciaría de Alcalá de Henares y a la casa de clérigos menores de San Julián de Toledo, con principales que ascendían a 44.000 rs y 110.294 rs respectivamente, no habían cobrado nunca sus intereses desde la constitución de Madrid como administrador del concurso. Todos los atrasos de estos dos censos fueron ajustados en la cantidad de 127.781 rs.

En suma, la redención de censos sobre los propios no tuvo apenas incidencia sobre el grave problema del endeudamiento municipal. Ni siquiera para el ramo del patrimonio concejil supuso un alivio considerable, ya que no representaba una carga gravosa. Con todo, no se puede hablar de fracaso de la operación. Su objetivo prioritario era liberar al nuevo patrimonio real de El Pardo de reclamaciones, y en este sentido si que cumplió sus fines.

Con esta acción concluían los tres grandes destinos que inicialmente la monarquía había marcado al caudal. Sin embargo, no se había agotado con ellas la suma, lo que permitía

su utilización en otras medidas que siguen aclarando perfectamente la intervención centralizadora del poder ilustrado en el patrimonio municipal madrileña.

### 1.3 - INVERSIÓN EN REFORMAS DE INMUEBLES Y URBANÍSTICAS.

Una parte del caudal de El Pardo se destinó a mejoras en bienes inmuebles y a financiar parcialmente reformas urbanas, lo que en determinados momentos llegará a constituir motivo de disensión entre el gobierno local y central.

La primera actuación en este sentido tuvo lugar un año antes de que concluyera definitivamente el proceso expropiador, cuando el marqués de Esquilache pretendió obligar a Madrid a que pagase de la cantidad que percibiría por los montes de El Pardo una parte de los 700.000 rs que se estaban debiendo a los asentistas del nuevo empedrado de la calle de Segovia. La reacción del ayuntamiento no se hizo esperar, y en su sesión de 22 de diciembre de 1762 se desatendieron de un gasto que la ciudad no había ordenado y que no correspondía a sus propios. Sin embargo, previendo sin duda quien iba a salirse con la suya, comisionaba a los regidores de propios y al procurador general para que si no hubiese más remedio que contribuir, lo hiciesen con la menor cantidad posible. Por real Orden de 10 de enero de 1763 se concedía a los asentistas del empedrado 400.000 rs a cuenta de lo que la Villa debía cobrar por las leñas de El Pardo. La medida provocó una virulenta reacción del ayuntamiento celebrado el 5 de marzo. En él se puso de manifiesto cómo los comisarios municipales habían llegado a un acuerdo verbal con Esquilache para que la contribución de Madrid fuese de 300.000 rs, cantidad que la parte real había elevado unilateralmente en otros 100.000 rs más. Por ello elevaron una representación en la que protestaban por la imposibilidad de los propios para hacer frente a estos pagos, afirmando que "parece violento, no regular y ajeno a la jurisdicción de Su Majestad el que siendo el referido gasto público y del beneficio del común y por consiguiente éste el responsable, lo sea Madrid con sus propios". Tal protesta no iba a servir de nada, descantándose los citados 400.000 rs del precio final que se liquidó a Madrid por El Pardo.

Por el contrario, los gastos que se realizaron en reformar la Casa Carnicería de la Plaza Mayor y el mesón de la Villa, sito en la Cava Baja, fueron iniciativa municipal,



contando, claro está, con la autorización de los dos comisionados reales. Ambos inmuebles pertenecían a los propios, y la disponibilidad del caudal permitía realizar obras de acondicionamiento, con un importe de 18.000 rs en el mesón de la Villa. Por su parte, en la Casa Carnicería se invirtieron 230.000 rs en labrar viviendas para alquiler, lo que incrementó notablemente el valor de sus alquileres.

Finalmente, uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de Carlos III, el paseo del Prado. La participación del caudal de El Pardo se remonta a sus orígenes. El conde de Aranda, como presidente del Consejo de Castilla comunicó a Madrid la idea de reformar el Prado Viejo de San Jerónimo y el deseo de que Madrid aportase el dinero necesario para comenzar las obras. Según el conde, los 500.000 rs necesarios podrían provenir del mencionado caudal. El municipio se mostró desde un principio partidario de la obra, pero se veía constreñido para disponer del capital solicitado, que estaba destinado a otros fines: la sesión capitular de 26 de mayo de 1773 "acordó hacer presente a Su Excelencia que Madrid no tendría reparo en dar dicha cantidad si tuviera arbitrio para ello, pues se lo imposibilitaban las órdenes que tenía del rey y del Consejo y el reglamento... que unas y otras le encargaban la inversión de estos caudales en mayor aumento de sus propios y beneficio de los acreedores de justicia que tuvieran". Ambos destinos quedaban supeditados a una obra tan del gusto del monarca: cuando al mes siguiente solicitó el ayuntamiento permiso del Consejo para librar los 500.000 rs solicitados del caudal de El Pardo, le fue concedido por un decreto de 22 de junio. Así, la iniciativa partió en todo momento de las autoridades reales, que decidieron no sólo la realización del Paseo del Prado, sino también la participación -financiera- del municipio y los fondos concretos que debía aplicar.

## 1.5 - ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS.

Como iniciativa del poder central fue también el que los propios madrileños adquirieran acciones del Banco de San Carlos. Tal medida se inserta dentro de la política de utilización de los fondos municipales para afrontar las necesidades de la Hacienda Real. Si en un primer momento la actuación del despotismo ilustrado se centra en el saneamiento de las

haciendas locales mediante el ejercicio de un estricto control, la crisis financiera provocada por los gastos militares de fines del s.XVIII conducirá a la absorción de recursos concejiles por los poderes centrales. Un claro ejemplo lo constituye la real cédula de 27 de agosto de 1782, que recomendaba a los pueblos que tuvieran sobrantes de sus propios y arbitrios los invirtieran en acciones del nuevo Banco de San Carlos. El caso madrileño nos va a ilustrar cómo el poder central no se limitó a la sugerencia.

A comienzos de 1783 el Consejo de Castilla decidía que Madrid tenía que dar ejemplo a las demás localidades del Estado, por lo que debía proceder a estudiar los medios para comprar acciones. Si la norma legal se concretaba a los sobrantes que tuviesen las arcas locales como fondo para la inversión, no sucedía lo mismo con la Villa y Corte que, caso de no disponer de sobrantes, tendría que idear arbitrios nuevos.

El informe de la contaduría de cuentas de 21 de marzo de 1783 dejaba bien a las claras que no existían tales sobrantes. Para el quinquenio 1777-1781 se regulaban unos ingresos medios anuales de 11.370.426 rs, mientras que los gastos ascendían a 11.718.107 rs. Quedaba claro que el municipio tendría que buscar otros medios. Las propuestas que estudió la Junta de propios sorprenden por lo contradictorias que resultaban con la política hacendística municipal: el establecimiento de un nuevo arbitrio, la venta de tierras de propios o la suspensión de gastos representan medidas desesperadas, únicamente explicables por la fuerte presión de las esferas superiores para que Madrid cumpliera el papel ejemplarizante encomendado. La contaduría demostró lo improcedente de estas medidas, a la vez que encontraba los medios para cumplir la orden del Consejo. El municipio disponía de ciertos fondos de propios que aun no se habían aplicado a ningún destino y que permitían reunir 268.000 rs con los que comprar 134 acciones. Entre las partidas, de índole muy heterogénea, destacan los 183.110 rs procedentes del caudal de El Pardo. De esta forma, los propios madrileños suscribieron 134 acciones del Banco, lo que suponía el 34% de las adquiridas por la provincia madrileña y prácticamente el 1% del total comprado por los municipios españoles. De nuevo la intervención del Consejo de Castilla había orientado la inversión del caudal. Pero todavía en estas fechas (1783) no se había olvidado el principio de la fiscalización: el por entonces comisionado de la intervención real en este fondo, el marqués de Contreras, solicitó del municipio un informe minucioso de todos los libramientos y gastos efectuados con el caudal.

Con todas estas inversiones y otras de índole menor, el caudal de los montes de El Pardo se iba extinguiendo. La última medida vino, como era de esperar, del Consejo de Castilla, que el 11 de agosto de 1788 ordenó imponer el remanente del caudal, 240.779 rs y 15 mrs, a censo en la misma Diputación de los Cinco Gremios donde estaban depositados. Los intereses, 7.223 rs anuales, serían percibidos por el mayordomo de propios (unos intereses que Madrid no había cobrado por el caudal tantos años depositado).

Acababa así un proceso de inversiones que había durado más de veinte años, al cabo del cual el municipio madrileño presentaba un patrimonio renovado. Las viejas tierras de El Pardo, sobre las que el concejo se había asentado desde la Edad Media, habían desaparecido, siendo sustituidas por nuevas dehesas, una gran explotación en Extremadura, la desaparición de los censos... Pero sobre todo había sido un proceso de control municipal, de imposición de directrices por parte de la autoridad real siguiendo una política centralizadora que la Revolución Liberal llevará a sus últimas consecuencias.

## 2 – EDIFICIOS

### 2.1- LA PLAZA MAYOR

Durante el s. XVIII sigue destacando el conjunto patrimonial de la Plaza Mayor, en el que se compaginan funciones tan diversas como las actividades mercantiles, la actuación de los arrendadores de rentas de propios (caso del peso real), el alquiler de viviendas y, por supuesto, la clásica función de mirador real de la Casa de la Panadería. Por lo que respecta a ésta, su planta baja no tuvo aprovechamiento hasta que en 1715 el ayuntamiento decidió trasladar el peso real desde el local que ocupaba en la calle de las Postas, también perteneciente a Madrid y que resultaba insuficiente para albergar esta renta. El traslado dio lugar a un prolongado pleito con el alcaide del Cuarto real, a quien hasta entonces había estado encargada dicha parte del edificio.<sup>524</sup> La Villa consiguió, pese a ello, destinar uno de sus locales a una de sus rentas más importantes, el peso real, que no sólo lograba así un

---

<sup>524</sup> Pleito narrado por GÓMEZ IGLESIAS- "El Alcaide de la Casa Panadería...", págs. 201-215

establecimiento más adecuado a sus necesidades, sino que de esta forma además conseguía integrarse en un área privilegiada de mercado, la Plaza Mayor, lo que repercutió en su más exacto y rentable funcionamiento.

La importancia de la Casa Panadería a partir de entonces en la estructura mercantil de la Plaza queda demostrada por el arrendamiento que se hizo desde esta misma fecha de las verjas y soportales del inmueble para establecer puestos comerciales. Los datos de un año como 1750 nos permiten comprender la extremada concentración de actividades mercantiles en su entorno, así como la complejidad de su distribución espacial, ya que se arrendaron los arrimos de los postes por una parte, los arrimos de las verjas y los huecos de los arcos por otra y finalmente los arrimos del pasadizo del Infierno, paso de la caballerizas y los de la parte de afuera de los postes.<sup>525</sup>

El aprovechamiento más destacado desde el punto de vista hacendístico de los edificios municipales en la Plaza Mayor era el alquiler de viviendas. Aunque tanto la Casa de la Panadería como la Casa Carnicería habían sido, como se ha visto, construidas con otras finalidades (abastecimiento o “balcón real”), el interés municipal se centró en rentabilizar el espacio disponible creando “cuartos” o viviendas destinadas al alquiler. A fines del XVII estaban ya utilizables las de la Casa de la Panadería, mientras que la Casa Carnicería (más amplia gracias a la incorporación de la casa de Alberto de Avila) fue reformada para construir nuevos cuartos y tiendas de alquiler con el caudal del monte de El Pardo. La estructura de estos arrendamientos queda recogida en el siguiente cuadro.

---

<sup>525</sup> AVM-C, 1-103-1

CUADRO 15 - ALQUILERES DE VIVIENDAS DE LOS PROPIOS EN LA PLAZA MAYOR, 1802

<b>CASA DE LA PANADERIA</b>		
	ALQUILERES ANTERIORES	ALQUILERES NUEVOS
<b><i>ESCALERA DE LAS CABALLERIZAS</i></b>		
CUARTO PRINCIPAL-REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO		
Cuarto 2°. Alguacil Mayor	600	600
Cuarto 3° exterior	1.600	2.000
Cuarto 3° interior	800	1.000
Cuarto de la Torre del reloj del Sol	480	480
<b><i>ESCALERA DEL CALLEJÓN DEL INFIERNO</i></b>		
Cuarto 2° exterior	2.000	2.000
Cuarto 3° exterior	1.400	1.600
Cuarto 3° exterior	1.800	1.980
Cuarto 3° interior	800	900
Cuarto de la Torre del reloj de Campaña	396	480
<b>TOTAL CASA DE LA PANADERIA</b>	<b>9.876</b>	<b>11.040</b>
<b>CASA CARNICERIA MAYOR</b>		
<b><i>ENTRADA POR LA PLAZA</i></b>		
Cuarto principal y 2 tiendas	7.700	8.800
Cuarto principal 2° y tienda	5.200	5.200
Cuarto 2° izquierda	928	1.328
Cuarto 2° derecha	1.240	1.800
Cuarto 3° derecha	600	700

Cuarto 3° izquierda	1.050	1.200
Cuarto a 4 altos	600	800
Cuarto a 4 altos	600	600
Cuarto a 5 altos	600	600
<b><i>ENTRADA POR LA CALLE IMPERIAL</i></b>		
Cuarto principal exterior	1.600	1.600
Cuarto principal interior-1	600	660
Cuarto principal interior-2	600	600
Cuarto 2° exterior	1.600	1.600
Cuarto 2° interior	700	700
Cuarto 2° interior	504	504
Cuarto 3° y Buhardilla 1ª	960	960
<b><i>CASA DE ALBERTO DE AVILA</i></b>		
Cuarto principal y tienda confitería	4.200	4.200
Claro 57	273	273
Cuarto 2°	1.044	1.044
Cuarto 3°	1.200	1.200
Cuarto a 4 altos	330	700
Cuarto a 5 altos	750	750
<b><i>TOTAL CASA CARNICERIA</i></b>	<b>32.879</b>	<b>35.819</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>42.755</b>	<b>46.859</b>

FUENTE: AVM-C, 3-147-17

## 2.2- CARNICERÍAS, HORNOS Y MESONES

Además de los establecimientos de la Plaza Mayor destinados al mercado y suministro madrileño existían otros con la misma finalidad: hornos, tahonas, pósitos... y más carnicerías. Algunos, que se analizarán a continuación, generaban ingresos para los propios. Pero no todos: como recordaba el mayordomo de propios en 1808 con motivo de la libertad de abastos a la ciudad, numerosas propiedades de Madrid habían sido cedidas temporalmente y de forma gratuita al abasto. Estos edificios eran: la casa matadero y sus oficinas en concepto de compensación por las obras de conservación, la casa aduana vieja en la plazuela de la Leña; la casa fábrica de velas de sebo en la calle de Embajadores, la casa almacén de aceite y pescado en la misma calle, la casa almacén de carbón en la calle de los Tudescos, la casa almacén de paja en la calle de San Juan, las carnicerías de la Plaza Mayor y las plazuelas, los 42 hornos denominados de Villanueva en el Pósito, las 4 casas registro de la Puerta de Alcalá, el mesón del Dragón en la Cava Baja y la casa saladero.<sup>526</sup> Como se ve, todo un conjunto de edificios que apenas produjeron rentas al ayuntamiento madrileño, pero que ponen de relieve una vez más la importancia que tuvo el patrimonio municipal (entendido en su sentido más amplio) en la vida del Madrid del Antiguo Régimen.

Comenzando con las carnicerías, además de la Carnicería mayor, el concejo llegó a disponer a principios del s. XVIII -tras un considerable esfuerzo inversor para su construcción- de seis, llamadas menores y cedidas a los obligados del abasto. Estaban situadas en las plazuelas de Santo Domingo, Antón Martín, de la red de San Luis, del Gato, San Ildefonso y en la calle de Alcalá. Las tres últimas se ubicaban en locales alquilados hasta que fueron compradas por el ayuntamiento madrileño de acuerdo con su política de control del abasto urbano.<sup>527</sup>

La *carnicería de la plaza de Santo Domingo* no tenía ningún otro aprovechamiento para la hacienda municipal. Una parte del edificio, los bodegones de la parte trasera habían sido enajenados a censo perpetuo a favor del secretario Andrés de Villalón, que había construido unas cocheras, si bien en las cuentas y relaciones de propios este concepto se

---

<sup>526</sup> AVM-S, 3-31-50

<sup>527</sup> La situada en la calle de Alcalá fue adquirida en septiembre de 1797 a la regalía de aposento de Corte, por la cantidad de 31.038 rs. AVM-C, 3-147-17

incluía junto con los demás locales con el título de "bodegoncillos de la plazuela de Santo Domingo". A mediados del s. XVIII ya se ha clarificado conceptualmente y forma parte del capítulo de censos, con unos réditos anuales fijos de 1.096 rs.

La *carnicería de Antón Martín* se construyó en dos casas compradas por Madrid en 1709. El importe de ambas adquisiciones ascendió a 36.047 rs que fueron pagados por el mayordomo de propios. Los fondos procedían de los 49.333 rs, importe de la redención que llevó a cabo el tribunal de la Inquisición de un censo sobre el estado y condado de Barajas que pertenecía a los propios madrileños. Las obras de construcción de la carnicería costaron 89.419 rs, lo que supuso un desembolso considerable para el fondo patrimonial. La Junta comisionada para la construcción integrada por el corregidor y dos regidores, propuso en 1714 aplicar los ingresos de la por entonces más saneada renta de los propios: la del peso de la harina, que se hallaba empeñada hasta junio de 1716, por lo que sólo a partir de esa fecha se pudieron pagar las obras concluidas el año anterior. Además del establecimiento de la carnicería se construyó un cuarto principal que era arrendado y cuyos ingresos percibía el mayordomo de propios.<sup>528</sup>

En la *red de San Luis* existía otra carnicería menor cuyos bodegones eran arrendados por los propios. El 7 de junio de 1717 el corregidor Francisco de Salcedo propuso reformar y ensanchar la plazoleta, por lo que se derribó la carnicería. Para establecer otra nueva se compró en la misma plaza un edificio, elevándose su coste y obras de adecuación del local a 106.956 rs. Además de la carnicería se construyó un cuarto principal y otros 27 aposentos de tamaño reducido destinados a vecinos pobres, cuyos alquileres cobraba el mayordomo.<sup>529</sup>

Vinculados asimismo al abastecimiento de carne, Madrid posee dos edificios generadores de ingresos. El *matadero* está situado a la salida de la Puerta de Toledo. Se destina al ganado que se consume en la Carnicería mayor, disponiendo de un corralón cerrado para el ganado vacuno, el "corralón de las vacas", situado un poco más al sur y que se aprecia claramente en el famoso plano de Texeira. Se encuentra unido a la dehesa de Arganzuela, por lo que ambos bienes son arrendados conjuntamente a los obligados. La cercanía de matadero y dehesa determina una mayor utilidad para sus usuarios, que disponen así de un espacio integrado para sus necesidades y tareas. El rendimiento de este local para la hacienda

---

<sup>528</sup> AVM-S, 3-32-89

<sup>529</sup> AVM-S, 4-127-1



madrileña quedó mermado por la frecuencia de obras y reparaciones que necesitaba y que eran pagadas por los propios. Las obras realizadas en 1740 y 1744 ascendieron a 16.077 rs, mientras el rendimiento anual del matadero y dehesa llegaban a tan sólo 1.647 rs. Ello determinó que desde 1749 se concediera el edificio a la Junta de Abastos gratuitamente con la condición de que se encargara de su mantenimiento.<sup>530</sup>

En el *Rastro*, situado en el cerrillo de igual nombre, los propios disfrutaban de un ingreso que no tiene en ninguna otra carnicería de la ciudad: puestos de venta de carne. En este edificio la hacienda municipal obtiene el arrendamiento de 44 tablas de venta y peso de carnero, las denominadas en la documentación "escarpías del Rastro". El Rastro constituye un mercado de la carne paralelo al de las carnicerías en manos de los obligados. En él los tratantes comercializaban libremente la carne de carnero, de demanda más amplia que la de vacuno.<sup>531</sup>

En la zona del Pósito el patrimonio municipal madrileño cuenta con 4 *casas de registro*. Dos de ellas se sitúan al lado de la Puerta de Alcalá y sirven para el registro de las sisas que se cobran al vino que llega a la ciudad. Las otras dos están colocadas junto al complejo del Pósito, a ambos lados de su puerta principal en la calle de Alcalá y se utilizan también para el control de los arbitrios. Pese a su escasa trascendencia rentística, su proceso de construcción ilustra claramente la complejidad de los mecanismos de constitución del patrimonio municipal. Los registros situados en la Puerta de Alcalá fueron costeados por Marcos de Peña, arrendador de las sisas del vino. Se reintegró su caudal desembolsado ahorrándose sus alquileres; a partir de entonces sus rentas fueron cobradas por el mayordomo de propios. Los registros de la Puerta del Pósito, por su parte, se construyeron en una casa comprada a Antonio Roldan, a quien previamente se había cedido el sitio a censo perpetuo y se pagarán -previa licencia del Consejo de Castilla- con los ingresos obtenidos de la redención de cuatro censos perpetuos pertenecientes a los propios. El objetivo de la compra era derribar las casas al sobresalir excesivamente en la calle tras la mudanza del Pósito a la Puerta de Alcalá. En el solar sobrante se edificaron los registros.<sup>532</sup>

---

<sup>530</sup> AVM-S, 3-8-19

<sup>531</sup> Un análisis del Rastro y de su importante papel en el abastecimiento de carne en Madrid, en BERNARDOS, J. U.- *No sólo de pan*, págs. 154-158

<sup>532</sup> AVM-C, 3-80-1

La *casa de la calle de las Postas* presenta su origen en el alojamiento de una renta de propios, en este caso el Peso real. Además de estas dependencias que ocupaban el piso bajo, el edificio se componía de una tienda y una vivienda en el piso superior. A comienzos del s. XVIII el local resultaba claramente insuficiente para las necesidades del Peso real, por lo que se trasladó en 1715 a los bajos de la Casa de la Panadería, como anteriormente he analizado. El espacio desocupado se unió a la tienda ya existente, siendo arrendada juntamente con la vivienda del piso superior.<sup>533</sup>

Pese a que los *corrales de comedias* madrileños formaban un ramo aparte dentro del conjunto patrimonial del ayuntamiento, en el del Príncipe poseían los propios dos locales, al haber sido pagados parcialmente con sus caudales. En 1705 se construyó una habitación encima de la alojería del corral. Su coste de fabricación ascendió a 14.140 rs, de los cuales 5.940 fueron aportados por los propios. La sala se unió a la alojería, pagando los arrendadores de este establecimiento la parte proporcional correspondiente a dicha sala a los mayordomos de propios. Lo mismo sucedía con otro cuarto fabricado en 1717 sobre la entrada y que había sido agregado a la lonja del corral.<sup>534</sup>

## 2.3 – TRANSFORMACIONES EN LOS INMUEBLES URBANOS

Así constituido, el patrimonio inmueble de la Villa de Madrid conoció una importante transformación en torno a mediados del s. XVIII como consecuencia fundamentalmente de su estrecha vinculación a la política de abastecimiento de la ciudad.

El establecimiento de una Junta de Abastos en 1743 es el resultado de los intentos de controlar un tema tan importante para la política urbana por parte del poder central, aunque contando con el municipal, que estaba representado en la Junta por el corregidor, procurador general y dos regidores. El objetivo es centralizar bajo una única institución los diversos ramos del abasto que hasta entonces han sido independientes. El resultado para el patrimonio inmueble madrileño es la separación de los edificios relacionados con el abastecimiento, a lo que habría que añadir un destino similar experimentado por las rentas de propios que tenían

---

<sup>533</sup> AVM-S, 3-24-34

<sup>534</sup> AVM-S, 3-32-89

incidencia en este tema. En 1744 la Junta se hizo cargo de la administración del Pósito y por tanto con todo lo relativo al abasto de pan. En consecuencia, los 42 hornos de Villanueva se agregaron al Pósito en los primeros meses del año de 1745. Por aquella fecha su estado era realmente ruinoso, pese a lo cual fueron tasados en 587.668 rs.<sup>535</sup> Por otra parte la funcionalidad primitiva de cocción de pan se había abandonado conforme se habían desarrollado las tahonas, siendo en buena parte simples viviendas. Esta fue la causa por la que en 1744 se había ordenado que "se reparen los hornos llamados de Villanueva, que se hallaban los más sin uso y amenazando ruina, a fin de que volviendo a tenerse, continuasen el destino que tuvieron con el trigo del Pósito". Sería la nueva Junta de Abastos la que se encargaría de materializar esta renovación, como explica Concepción de Castro: "se reparan los 42 hornos de Villanueva, con las viviendas correspondientes a los panaderos, transformándolos en 21 tahonas y viviendas que se arriendan como se hiciera antes con las panaderías. Los hornos ya no se usaban, debido al auge de las tahonas en Madrid, y se habían dejado derrumbar".<sup>536</sup> La reconstrucción afectó igualmente a los cuatro registros situados en las inmediaciones del complejo del Pósito. Tanto los situados en la Puerta como en la calle de Alcalá pasaron a depender de la Junta de abastos desde 1744.

Por lo que respecta al ramo de las carnes, se suspendió el arrendamiento de las únicas tablas que disfrutaban los propios, las escarpías del Rastro desde el 24 de junio de 1743. El titular de las carnicerías siguió siendo la Villa, sin percibir ningún derecho.<sup>537</sup>

En suma, el patrimonio municipal sufrió una importante pérdida de sus bienes inmuebles urbanos, a los que hay que añadir las rentas sin obtener compensación alguna, con lo que una vez más aparece claramente subordinado a la prestación de servicios a la ciudad, en este caso al abasto.

Frente a estos desgajes patrimoniales, en el s. XVIII se produjo una importante adquisición para el ayuntamiento madrileño que se convirtió en una destacada fuente de rentas, el *coliseo de los caños del Peral*. Contiguo a este edificio se hallaba un antiguo lavadero municipal que entró en una profunda decadencia al verse afectado por la

---

<sup>535</sup> TOVAR MARTÍN, V.- *El Real Pósito*, págs. 50-51

<sup>536</sup> CASTRO, C de- *El pan de Madrid*, p. 245

<sup>537</sup> Todas las transformaciones en el sector de abastecimiento y su impacto en el patrimonio municipal, en AVM-S, 3-8-17 Y 3-8-19

construcción del teatro de óperas italiano por el marqués de Scotti a comienzos del s.XVIII. Según informaba el ayuntamiento, "aunque se trató de comprar este sitio a Madrid por el rey, sin efectuar su compra se fabricó de orden de S. M. un nuevo coliseo en el todo de este sitio, sacando las pilas a la plazuela".<sup>538</sup> La decadencia de los lavaderos llevó al municipio a venderlos a particulares en 1740, dejando cuatro pilas al servicio del público. Por otro lado, la usurpación del solar concejil dio origen a un largo pleito en el que Madrid reclamó la titularidad del teatro. Finalmente, la Real Provisión del Consejo de Castilla de 22 de marzo de 1791 concedió el solar y el edificio del coliseo de los Caños del Peral a Madrid como uno de sus bienes de propios. El municipio debía indemnizar a los herederos del constructor, Francisco Palomares, con la cifra de 391.448 rs que había invertido en la edificación, cantidad que finalmente se redujo a 360.000 rs. El mayordomo de propios recibiría el alquiler del teatro de los Reales Hospitales General y de la Pasión de Madrid, que gozaban del privilegio privativo de la organización de óperas en la ciudad.<sup>539</sup>

### 3– RENTAS

La renta del *peso real* se convierte en la principal por sus ingresos tras la decadencia de la renta del peso de la harina a comienzos del s. XVIII. Esta renta se alojó en una casa propia del ayuntamiento madrileño situada en la calle de las Postas hasta que en 1715 fue trasladado a la planta baja de la Casa Panadería en la Plaza Mayor. La renta de la *correduría* aparece íntimamente ligada al peso real. Sus ordenanzas se fijaron en la misma Provisión Real de 5 de octubre de 1576. En ellas se establecía el monopolio de la función de corretaje de las mercancías foráneas en el arrendador de la renta, que podía nombrar una o dos personas para ayudarle, previo juramento de su cargo ante las autoridades municipales. Sus servicios no eran obligatorios en los intercambios. El recurrir a ellos suponía el pago de unos derechos del 0,5 % del precio de la venta, hasta un máximo de 20.000 mrs a partir del cual no se cobraría más. En lo que respecta a la venta de bienes raíces, el porcentaje que cobraba era más elevado, un 1% manteniéndose la cifra máxima en 20.000 mrs. La renta de la *correduría*, sin embargo,

---

<sup>538</sup> AVM-S, 3-32-89

<sup>539</sup> AVM-C, 3-86-4

experimentó una destacada evolución. Así, además de los derechos devengados en los intercambios en los que participaban los corredores, el arrendador o el administrador municipal de la renta cuando no se había rematado el arrendamiento, cobraban el 0,5% de los comestibles que se registraban en la Casa Aduana con destino al peso real.<sup>540</sup> La Sala de Alcalde de Casa y Corte suprimió esta percepción en 1744, limitando los ingresos correspondientes a esta renta a los marcados y recogidos en la ordenanza primitiva.<sup>541</sup>

Ese mismo año un Real Decreto de 20 de abril traspasaba el gobierno y administración del peso real a la recién establecida Junta de Abastos. Esta operación se enmarca dentro del intento de centralización y unificación de los abastos madrileños en torno a esa Junta y que ya hemos visto cómo para el municipio madrileño había supuesto la pérdida de otros componentes de su patrimonio, como las casas hornos de Villanueva. Sin embargo, se continuaba "dejando a Madrid la percepción de las utilidades que como a propios de la Villa lexítimamente le toquen", lo que no se hizo para otros bienes que también eran "propios de la villa".<sup>542</sup>

En 1756 la Junta de Abastos responsable del gobierno del peso real, procedió a establecer unas nuevas ordenanzas en las que se reformaba la administración de la renta, si bien se mantenía su naturaleza. Así, se señalaba todo el recinto de la Plaza Mayor para la colocación de las balanzas necesarias debido a la insuficiencia de los locales que disponía el arrendatario en la planta baja de la Casa Panadería, una medida que venía a reforzar el carácter de mercado de la Plaza Mayor. Asimismo se disponía que el peso debía nombrar un representante en cada una de las puertas de registro de entrada de mercancías con el fin de controlar el traslado de los bienes sujetos a la mediación del peso real a sus dependencias, evitando que algunas de estas mercancías se quedasen en el camino a la plaza en alguna casa particular o de mercader, lo que les libraría del pago de los derechos correspondientes. Estos derechos eran elevados momentáneamente a 2 mrs por arroba pesada, aunque pronto se dio marcha atrás en esta subida, ya que en los arrendamientos posteriores se observa que se volvió a cobrar la antigua tasa de 1 mr por arroba.

---

<sup>540</sup> Así sucede entre 1715 y 1716. AVM-S, 3-303-22

<sup>541</sup> AVM-S, 3-8-17 y 3-8-19

<sup>542</sup> AVM-S, 3-403-14

La actitud paternalista de las autoridades ante el mercado y el comercio se recoge en una práctica del peso real: los abastecedores deben exponer sus mercancías durante cuatro horas para su venta directa al público, sin intermediarios comerciales. Sólo al cabo de este tiempo pueden venderlas a los tenderos y comerciantes. Pero esta medida que tan negativamente afectaba a los vendedores de alimentos en la ciudad hace que el peso se convierta en el centro de los intentos de estos sectores por impedir y obstaculizar dicha venta directa, con prácticas de apaños y corrupción con los arrendatarios del peso real o los administradores, lo que provoca la continua intervención de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.

La correduría, por su parte, pasa a depender totalmente del peso real, perdiendo la categoría de renta independiente. A partir de esta fecha se procede al arrendamiento por el municipio madrileño de una renta única, la renta del peso real y correduría.<sup>543</sup>

La renta del *peso de la harina* desapareció como uno de los propios madrileños en 1744 al integrarse dentro del ámbito competencial de la Junta de Abastos.<sup>544</sup> En esta fecha se realizó un inventario de sus medios materiales: "Tiene dos rejas de hierro y las ventanas no tienen compuertas. Dos pesos grandes de cruz para pesar harina. Una pesa de seis arrobas, seis pesas de a quintal, cuatro de dos arrobas, una de ocho libras, otra de seis, de cuatro, de dos y de una. Una mesa de pino con su cajón, un banco de respaldo de pino".<sup>545</sup> Pero antes de que esto sucediera, el peso de la harina, que había constituido a fines del s. XVII y comienzos del XVIII el principal ingreso de los bienes de propios madrileños, había entrado en una profunda crisis que hizo que a partir de la década de 1720 fuera imposible encontrar a nadie dispuesto a arrendarlo y que incluso la administración por parte del municipio fuera tremendamente deficitaria. Como explica Concepción de Castro, esta "decadencia, con la que el ayuntamiento acabaría perdiendo la renta correspondiente, se debe básicamente a la transformación que se está produciendo durante esas décadas en el sector panadero de Madrid, desde el predominio de las panaderías a su progresiva sustitución por tahonas".<sup>546</sup>

---

<sup>543</sup> *Reales Cédulas...*, fols. 94 r.-97 v. Estas Ordenanzas recogen las propuestas que poco antes había hecho el procurador de la Villa de Madrid, Antonio Gaspar de Pinedo. AVM-S, 3-281-46

<sup>544</sup> AVM-S, 3-8-17 y 3-8-19

<sup>545</sup> AVM-S, 3-8-24

<sup>546</sup> CASTRO, C. de- *El pan de Madrid*, p. 208

Por su parte, dentro de las barcas, destacar que la barca de Arrebatcardos, situada en el término municipal de Mejorada del Campo, junto al soto de Rivas, se trasladó en 1.759 al soto de Negralejo, propio de Madrid, buscando una situación más segura, construyéndose para ello una casilla y un puentecillo.<sup>547</sup> Se indemnizó al Conde de Mejorada por los perjuicios que le supuso este cambio con 800 rs anuales.<sup>548</sup>

#### 4- CENSOS.

En el s. XVIII los *censos perpetuos* han perdido rentabilidad económica para las arcas municipales debido a la depreciación al cabo de los siglos de un ingreso fijo y a las dificultades para su cobro ante el escaso control y conocimiento de este patrimonio. Así las cosas, la política del ayuntamiento se orienta en dos direcciones: el descubrimiento de los censos ocultos y su enajenación.

La práctica de la averiguación periódica de los censos se había convertido en una necesidad ya durante el s. XVII, como lo evidencian las dos minuciosas recopilaciones que se recogieron en los Libros Becerro. Con todo, la ocultación y pérdida continuaba, por lo que hubo de recurrirse a nuevas recopilaciones,<sup>549</sup> hasta llegar a 1750, en que se planteó el establecimiento de una comisión dedicada al descubrimiento de los censos. Su origen se encuentra en un informe del Procurador General de 1746 por el que, tras señalar la decadencia de estos ingresos, recomendaba el nombramiento de un encargado que trabajaría a comisión, cobrando un porcentaje de los ingresos recaudados.<sup>550</sup> Tal propuesta fue incorporada en el reglamento del mayordomo de propios de 21 de marzo de 1748, disponiéndose que dos personas cobraran el 10 % de los réditos y veintenas de los censos que pusieran corrientes de pago.<sup>551</sup> Pero hay que esperar a 1750 para encontrarnos con un encargado, Francisco de Milla, oficial del archivo. Formaba una comisión con los dos regidores comisarios de propios y el

---

<sup>547</sup> AVM-S, 3-32-89

<sup>548</sup> AVM-C, 2-359-1

<sup>549</sup> AVM-C, 4-210-2 para 1716

<sup>550</sup> AVM-S, 3-8-8

<sup>551</sup> AVM-S, 3-29-88

procurador general.<sup>552</sup> Sin embargo, la escasa cuantía económica de los censos perpetuos no compensaba los gastos necesarios para renovarlos siquiera,<sup>553</sup> por lo que esta inversión en pesquisas debe entenderse relacionada con la segunda línea de actuación del municipio: la venta.

En realidad, los censos perpetuos funcionaban para el ayuntamiento como una especie de “fondo de reserva”: los responsables municipales recurrían a su enajenación, previa licencia del Consejo de Castilla, para satisfacer algunos gastos extraordinarios. El más destacado fue la aportación por este medio de 96.000 rs dedicados a sufragar los gastos de una comisión municipal, integrada por el corregidor, comisarios de alcabalas y cientos, procurador general, escribano municipal, mayordomo de propios y un numeroso personal de servicio, todos los cuales hicieron un viaje a Sevilla para realizar el encabezamiento de alcabalas, tercias y cientos de Sevilla en 1733, un encargo que correspondía íntegramente a la Hacienda Real pero que se encargó de financiar la Hacienda de los propios de Madrid.<sup>554</sup>

Las ventas eran esporádicas y siempre motivadas por necesidades coyunturales hasta 1761. En ese año una representación de los dos comisarios de propios, Antonio Moreno de Negrete y Félix de Yanguas, planteaba frontalmente el tema. Tras denunciar el estado de los censos perpetuos de Madrid, proponían solicitar del Consejo facultad para venderlos “dejándolos sobre las mismas posesiones en que hoy están a censo redimible, haciendo capital de las veintenas en que se ajuste su venta; y ... se emplee todo lo que esto rindiese en la redención de los censos que los propios tienen contra sí”. Destacaban asimismo el gravamen que suponía para los dueños de los solares en que estaban impuestos, pues no podían disponer de ellos libremente y al realizar alguna mejora en el edificio aumentaban el valor del derecho de laudemio a pagar en las ventas. El ayuntamiento madrileño pidió al Consejo de Castilla la concesión de dicha facultad, resaltando el efecto de imitación que podría tener en los demás dueños de censos perpetuos.<sup>555</sup>

El estado en que se encontraban los censos perpetuos madrileños queda recogido en el

---

<sup>552</sup> AVM-S, 3-141-51

<sup>553</sup> Lo resaltaba el procurador general en 1746: “de manera que a los gastos de su descubrimiento y justificación no podrán corresponder las utilidades de las que lleguen a verificarse”. AVM-S, 3-8-8

<sup>554</sup> AVM-S, 3-115-28 y 2-38-83; AHN, Consejos, leg. 71, exp. 9

<sup>555</sup> AVM-S, 3-143-11



siguiente cuadro, en el que aparecen las veintenas que cobraba el municipio en los años en que se debatía este tema. Toda su problemática queda recogida en estas cifras: para empezar, el escaso, ínfimo, valor de los réditos anuales de estos censos perpetuos al cabo de años, siglos de vida. La media de los 11 censos es de 3 rs-26 mrs, si bien alguno es de tan sólo medio real. A lo que se añadía la ocultación: ninguno de los censos estaba al corriente de pago, sino que acumulaban un retraso medio de 46 años, que en algún caso superaba el siglo. Pero, sin embargo, cuando se producía una venta y se generaba la veintena (el 5% del precio del inmueble) se producía una rápida actualización de los ingresos municipales: en efecto el valor de las veintenas es elevado, 2.431 rs de media, lo que significa multiplicar extraordinariamente el valor de los réditos anuales, 645 veces por término medio. En el caso, extremo, de la vivienda situada en la calle del Oriente, la veintena suponía multiplicar por más de 5.000 la renta del censo. A lo que se unía la actualización de los réditos pendientes, que debían liquidarse para proceder a la transmisión del inmueble libre de cargas, si bien su escaso valor hacía que ni siquiera con casi medio siglo de atraso se alcancen cifras muy elevadas. Se entiende así el interés municipal en controlar y cobrar las veintenas y la carga que para los compradores de vivienda podía suponer.

**CUADRO 16 – VEINTENAS COBRADAS POR LOS PROPIOS DE MADRID, 1754-1768**

<b>CALLE</b>	<b>CENSO ANUAL (RS-MRS)</b>	<b>VEINTENA (RS-MRS)</b>	<b>REDITOS ATRASADOS</b>	<b>AÑOS ATRASSO</b>
COSTANILLA DE SANTIAGO	2-7	810-22	66-6	30
CALLE DE LOS TINTOREROS	1-3	893-26	33-3	31
CALLE DE LA CRUZ DE SAN ROQUE	11	3.144	33	3
MISMA CASA- VEINTENA ANTIGUA		4.000		
CASA MESÓN EN C/ DE SEGOVIA	1-16	922	102	69
MISMA CASA-VEINTENA ANTIGUA		436		
CALLE DE LOS TINTES	10-10	3.234-19	393-26	38
TABERNILLAS DE SAN FRANCISCO	1	3.098	47-17	47,5
PUERTA CERRADA	3-18	8.649-30	71-16	20
PUERTA DE GUADALAJARA	3-11	882-17	209-13	63
CAVA BAJA DE SAN FRANCISCO	12	1.464	366	30,5
CAVA DE SAN MIGUEL	1-6	2.098	95-30	81,5
CALLE DE LAS TABERNILLAS DE PARLA	1	2.683	117	117
VISTILLAS DE SAN FRANCISCO	0-20	1.565-31	5-20	9,5
CALLE DEL ORIENTE	0-17	2.584-13	25	50
<b>VALORES MEDIOS</b>	<b>3-26</b>	<b>2.431</b>	<b>173</b>	<b>46</b>

FUENTE: AVM-C, 3-81

El resultado fue que la Sala de Provincia del Consejo de Castilla desarrolló un expediente sobre los contratos enfitéuticos que gravaban los solares en Madrid, no limitándose al caso exclusivo del municipio. Los fundamentos legales denunciaban las negativas consecuencias que los muy abundantes censos perpetuos habían producido en la edificación

de la Corte, constituyendo una de las causas más destacables de la mala calidad de las construcciones.<sup>556</sup> Los principales abusos señalados se centran en el derecho de laudemio que pagaba el vendedor, ya que si bien legalmente se limitaba a la “cincuentena” o 2%, en los contratos madrileños se practicaba la “veintena” o 5% (caso de los propios madrileños) e incluso la “décima” o 10%, del valor total de la venta del edificio. Además, se había extendido la práctica de sacar una segunda “veintena” que quedaba depositada en el comprador para cuando volviera a vender la casa.

Las propuestas se centraban en limitar el cobro del laudemio al valor del suelo, no de los edificios. Estos podrían vincularse libremente, siendo partidario el Consejo de la amortización eclesiástica de censos, pero de establecer litaciones en el caso de bienes raíces. Por último, se señalaba la escasa tasación que se hacía de los solares gravados con censo enfitéutico. En las ventas judiciales en que se necesitaba realizar la tasación de estos solares, se recurría a considerar el canon pagado como la renta del capital, que estaba constituido por el valor del solar; el rédito aplicado del 3’3%. Aunque en el pasado este tipo de interés era inferior al que se aplicaba al censo consignativo y, en consecuencia, era superior el capital obtenido al aplicarlo al canon enfitéutico, la reducción de los tipos de interés al 3% en 1705 (que se aplicaban a los censos al quitar), generó una situación que se consideraba injusta. Desde esa fecha la tasación de un solar que tenía sobre sí un censo enfitéutico era inferior a la que recibía el gravado con un censo al quitar, que añadía las ventajas de ser redimible y no estar sujeto al derecho de laudemio, licencia y tanteo. Por ello se proponía reducir los intereses del censo perpetuo para la tasación a un 1’5%, con lo que se conseguiría que el precio final fuera el doble que en los de censos redimibles con igual capital.<sup>557</sup>

Campomanes, en su informe como fiscal del Consejo, introdujo algunas modificaciones, que quedaron íntegramente recogidas en el Auto Acordado del Consejo de Castilla de 5 de abril de 1770 por el que se reglamentaban los censos perpetuos de Madrid.<sup>558</sup> El laudemio quedó fijado en un 5% del valor en venta del solar y edificio, siendo pagado por

---

<sup>556</sup> La estructura de la propiedad del suelo en Madrid, en MARÍN PERELLON, F. J.- “Propiedad y precio del suelo en el Antiguo Régimen”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico*, págs. 112-117

<sup>557</sup> ALARCON Y OLMOS, A.- *Expediente causado en el Consejo ....los Contratos enphytéuticos, o Censos perpetuos*, Madrid, 1.767.

<sup>558</sup> AVM-S, 2-161-17. Las propuestas de Campomanes aparecen resumidas en los fols. 63 v.-65 v. del expediente citado. En el Auto del Consejo únicamente se modifica el orden.

el vendedor. Los edificios sujetos a estos censos podrían vincularse en mayorazgos, indemnizando al censalista por no percibir más laudemios con el pago de tres cincuentenas, cuyo capital podía imponerse como censo al quitar sobre el mismo edificio. Los que estuviesen ya vinculados debían pagar una cincuenta para regularizar su situación. La incorporación a manos muertas quedaba rigurosamente prohibida, pudiendo el censalista obligar a las comunidades eclesiásticas a ponerlas de nuevo en el mercado. Se establecía asimismo la posibilidad de redención del censo perpetuo “entregando un duplicado capital a razón de treinta y tres y un tercio al millar, regulándose por el rédito o canon que se paga anualmente por el censo perpetuo”. Es decir, se fijaba un interés del 3% para aplicar a la renta en las redenciones. En cambio, el tipo de interés era del 1'5% para otras tasaciones, prohibiéndose además “que en lo sucesivo se pueda constituir censo perpetuo que no sea con doble capital que el redimible”. El capital necesario para la redención sería así la mitad que el tasado para cualquier otra causa. Las medidas, en conclusión, se orientaban a favor del enfiteuta, a quien se rebaja el laudemio, se le permite vincular el censo perpetuo y, sobre todo, se le abre la vía para redimirlo con una tasación no muy elevada.

Pese a que la Villa disponía del mecanismo necesario para solucionar buena parte de la problemática planteada por sus censos perpetuos, con una medida legal fruto de su iniciativa, los resultados fueron decepcionantes. Las dificultades para recuperar esos censos y la limitación administrativa hicieron que no se aplicara. Los censuistas preferirían mantener unos censos ocultos y que en la práctica eran impagables a desembolsar las cantidades necesarias para su redención por muchas facilidades que se les diera para ello. Por eso el mayordomo de propios podía repetir en 1808 la misma cantinela que sus antecesores durante tantos años: “pertenecen a Madrid muchos censos perpetuos sobre casas en esta Villa para cuya averiguación ha comisionado Madrid en distintas épocas algunos sujetos para el deslinde de los terrenos, y no se han encontrado los títulos, y los que se perciben por la mayordomía como corrientes importan al año 1.135 rs, y se deben muchos atrasos, los unos que por su cortedad no se perciben anualmente y otros porque hay expedientes sobre ellos y otros por estar las fincas arruinadas”.<sup>559</sup>

---

<sup>559</sup> AVM-S, 3-31-50

## **CAPITULO 7 - LAS TIERRAS DE PROPIOS DE MADRID EN EL S. XVIII.**

El objetivo de este capítulo es analizar las tierras pertenecientes a los bienes de propios madrileños, dada su importancia y la abundante documentación conservada. Para ello me he centrado en primer término en las formas de explotación, es decir en la manera en que el propietario aprovecha sus tierras. Estrechamente conectados con ellas están los usos agrarios de los distintos predios. Tanto las formas de explotación como de uso experimentan a lo largo del tiempo variaciones, en buena medida dependientes a su vez de la "actitud" e intereses de su propietario, un propietario de derecho público en este caso, un aparato de poder, en última instancia. Lo que nos lleva en definitiva a la política municipal hacia su patrimonio, que a grandes rasgos se caracteriza a lo largo del Antiguo Régimen por el desarrollo de la explotación rentística del terrazgo concejil a costa de los derechos y usos comunales.

Antes de comenzar el análisis, es preciso presentar y ubicar someramente las tierras de propios madrileñas. El patrimonio del municipio de Madrid se sitúa en torno a la ciudad y las localidades de su ámbito jurisdiccional, lo que un día constituyera la Tierra de Madrid, aunque veremos algunas destacadas excepciones. Este conjunto patrimonial es en gran medida el resultado del largo proceso de conversión de términos comunales en bienes de propios, que se remonta a finales de la Edad Media y que va a tener gran incidencia en los siglos XVI y XVII.

Es imposible dar cifras exactas sobre la extensión de estas tierras por la ausencia de inventarios detallados y los continuos cambios y transformaciones patrimoniales que experimentan. Una especial trascendencia presenta la expropiación de casi 30.000 fgs de tierras comunales y de propios en las cercanías del monte de El Pardo para ser incorporadas a la propiedad real. A cambio, tras enconada disputa, el municipio madrileño recibió una indemnización de casi 6 millones de rs, el "caudal de El Pardo", que en buena medida se invirtieron en la adquisición de nuevas propiedades fundiarias, como ya se ha analizado.

Con estos antecedentes, podemos presentar una aproximación a la cantidad y distribución de las tierras de propios de Madrid en la segunda mitad del s. XVIII. Para ello he

elaborado el cuadro 22 que se inserta al final de este capítulo, recopilando la información que aparece en las cuentas del mayordomo de propios de este período (en las que, juntamente con las tierras que están en ese momento arrendadas, se presentan las demás de que había constancia en la secretaría del ayuntamiento y de las que el mayordomo debía “cargarse” asimismo) y de la comisión de apeos que desarrollará su actividad a partir de 1768. Excuso decir que el resultado plantea numerosos problemas y limitaciones. En ningún momento dispuso el ayuntamiento madrileño de algo parecido a un inventario catastral de sus propiedades. Por otro lado, el carácter “escurridizo” de buena parte de estas tierras, que cambian su naturaleza de comunales o baldíos a propios, a veces de manera imperceptible, apareciendo ex novo en inventarios cuando antes no había noticias de arrendamientos previos. Y, por supuesto, las limitaciones técnicas de las mediciones de tierra de esta época, a pesar de la presencia del agrimensor madrileño; de hecho, muchas de las cifras de superficie estimadas eran corregidas en apeos o deslindes posteriores, bien por intrusiones, bien por deficiencias en la medida antecedente. De ahí el carácter aproximado de esta estimación que, sin embargo, permite obtener una visión general de la distribución de los propios madrileños.

Su extensión se acercaba en este período –segunda mitad del s. XVIII- a las 13.000 Has, de las que casi 7.000 se concentraban en la ciudad y lugares próximos. Concretamente en el término de Madrid los propios disponían de algo más de 400 Has, que en su mayor parte correspondían a las dehesas de Amanuel y Arganzuela. Por su parte, en la antigua Tierra de Madrid (incluidas las aldeas señorializadas) pertenecían a los propios más de 18.000 fgs (unas 6.300 Has) repartidas por una veintena de localidades. Destacan Vaciamadrid con más de 4.000 fgs, Las Rozas con unas 3.900 fgs, Los Carabancheles con casi 3.000 fgs o Fuencarral 1.500 fgs. No llegaban a 1.000 fgs en otros lugares como Getafe (835), Rivas (766), Vicálvaro (523), etc. Se trata en su mayor parte de tierras de labor, si bien en las riberas del Jarama y Manzanares aparecen terrenos de pastos y arbolado, como sotos y dehesas.

Fuera de Madrid y su Tierra los propios disponen de poco más de 6.000 Has que tienen un origen común: haber sido compradas con el caudal de El Pardo. Junto a las dehesas de Prado Herrero y Cepeda, que veremos más adelante, se encuentra una parte de la Dehesa de la Serena. Casi 4.500 Has de esta dehesa situadas en Cabeza de Buey (Badajoz) habían sido adquiridas por el ayuntamiento madrileño por unos 2 millones de rs. Sin duda, era la posesión más valiosa y extraña –por inusual- de los propios de Madrid.

Paso ya a analizar la gestión del patrimonio, distinguiendo entre los términos dedicados a labranza y los pastizales que, además, suelen presentar otros aprovechamientos.

## 1 - LAS TIERRAS DE LABOR

### 1.1 -LOS CENSOS PERPETUOS

La cesión de tierras de los propios madrileños a censo enfitéutico no es tan habitual como el arrendamiento a corto plazo, aunque tiene una presencia significativa. En general, los censos existentes en el s. XVIII presentan dos orígenes distintos: la concesión de tierras a concejos aldeanos por un lado y las plantaciones de vid desde finales del s. XVII por otro.

Desde 1564 *los concejos de San Sebastián de los Reyes y Fuente el Fresno*, ambos al norte de la ciudad, pagaban a Madrid un censo perpetuo. Es una herencia del antiguo sistema de "nihares", por el cual la Villa cedía términos comunales para labranza a los concejos de los lugares de su jurisdicción, que con el tiempo se convertirían en tierras de propios explotadas por arrendamiento. La excepción que representan San Sebastián y Fuente el Fresno se explica por la política de poblamiento de la ciudad dentro de su Tierra. La Villa, en efecto, apoyó la creación y desarrollo de ciertos núcleos en su término en oposición a las localidades de señorío circundantes, especialmente en la zona norte. Así, San Sebastián nacerá en 1492, cuando un grupo de vecinos de Alcobendas (señorío del conde de Puñoenrrostro) se traslade, por desavenencias con su señor, a la jurisdicción de Madrid.<sup>560</sup> Como testimonio de protección, recibieron términos comunales de la Villa para su explotación.

Los censos escriturados con los dos concejos, pues, son un mecanismo para consolidar el poblamiento en la Tierra de Madrid. Ambos lugares recibían "las tierras que la dicha villa de Madrid ha y tiene propias suyas" en los términos respectivos. A cambio debían pagar un canon en especie (" pan por mitad trigo y cebada") de 70 fgs San Sebastián y 5 menos el de Fuente el

---

<sup>560</sup> - MENESES GARCÍA, E.-"Origen de San Sebastián de los Reyes y Torrejón de la Calzada", *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, t. II (1987), págs. 99-123 y VERA YAGÜE, C. M.- *Territorio y población en Madrid y su Tierra en la Baja Edad Media. La señorialización del espacio madrileño y la repoblación concejil "antiseñorial" en los siglos XIV a XVI*, Madrid, 1999

Fresno. Las condiciones aclaran el carácter enfiteútico de la transmisión: se separa el dominio directo del útil y se recogen los derechos de licencia, tanteo y veintena correspondientes a la Villa en el caso de que los vecinos quisieran enajenar el conjunto de las tierras (que tendrían que hacer en todo caso a un vecino de la localidad no eclesiástico). Como condición especial figura el que no pudieran pedir rebaja de los pagos por los daños provocados por la caza real.<sup>561</sup>

La gestión de estos términos pasó entonces a los concejos de los lugares respectivos, sin intervención de la Villa, que no llevó a cabo ningún apeo ni reconocimiento posterior. Por un testimonio de 1625 sabemos las fórmulas de reparto: las tierras habían sido repartidas por los concejos en forma de quiñones, los cuales pagaban su parte proporcional en el censo. Su disfrute era hereditario por línea masculina; si se rompía, "se dan por el sr. corregidor de la villa de Madrid al primer vecino de este dicho lugar que le pide".<sup>562</sup>

Un segundo grupo de censos son los concedidos por Madrid para la *plantación de viñas*. Su origen se encuentra en una Real Cédula de 1 de noviembre de 1692, conseguida por el municipio ante el apeo que realizaría el regidor José Noriega, cuyo objetivo era reorganizar el terrazgo concejil tras las profundas transformaciones experimentadas durante el s. XVII. Para lograrlo se solicitó licencia real para ceder las tierras a censo perpetuo, lo que permitiría la estabilidad de su explotación. La autorización se refería a hacer "plantío de viñas las tierras que no fuesen a propósito para sembrar ni llevar pan", debiendo en todo caso informar previamente al Consejo.<sup>563</sup>

Tal vez fuera ésta última condición la que explicaría el escaso número de censos concedidos en esta ocasión. Destaca la localidad de Vicálvaro, donde curiosamente los términos dados a censo no se destinaron a viñedo, sino a pan llevar. Según el Libro Becerro, tan sólo 9 vecinos se repartieron 318 fgs distribuidas en 87 suertes, pagando 8 rs/fg al año; la extensión para cada censalista de casi 12 Has se acerca a la superficie de la propiedad media del campesinado en el entorno de Madrid según el Catastro de Ensenada.<sup>564</sup> También a cereal se destinaron las 97

---

<sup>561</sup> - AVM-S, 4-36-50 y 51

<sup>562</sup> - AVM-S, 3-174-24

<sup>563</sup> - *Libro Becerro de 1695*, en AVM, libro mss. 155 bis,

<sup>564</sup> MADRAZO MADRAZO, S. BERNARDOS SANZ, J. U.; HERNANDO ORTEGO, F. J. y DE LA HOZ GARCÍA, C.- "La Tierra de Madrid", p. 52



fgs de Humanejos. El panorama se completa con pequeñas extensiones dedicadas a viña, que en gran medida se oscurecerían posteriormente.

Resulta significativo que con la licencia de 1692 y llevándose a cabo un apeo, no se acensuara la principal superficie de viñedo en las tierras de los propios madrileños, situada en *Getafe*, en el paraje conocido como los Arenales. La plantación de vides se remonta a mediados del s.XVII, iniciada por varios vecinos ilegalmente. Su explotación se hará en un principio mediante el sistema de arrendamiento, alargando los plazos de las tierras de sembradura: 10, 20 ó, desde 1683, 12 años. La renta se fijó en 8 rs/aranzada bajo una serie de condiciones: "el reconocimiento de la propiedad de dichas viñas que pertenecía a Madrid, la paga prompta y efectiva de los dichos 8 rs... y la obligación de pedir a la citada villa de Madrid licencia para poder ceder y traspasar dichas viñas durante el tiempo de aquel arrendamiento". Condiciones muy similares a las fijadas en los censos pero dentro de la fórmula de arrendamiento.

Durante la primera mitad del s. XVIII no se renovó el contrato, ni se solicitó licencia para las ventas y traspaso de viñas, con lo que se produjo la caída de los ingresos para los propios. Para esclarecer esta propiedad, dos regidores madrileños dirigieron un apeo en 1751. La extensión de los viñedos ascendía a 665 fgs, que disfrutaban 104 renteros: 51 vecinos de Getafe, 19 de Vallecas, 25 de Madrid, 4 de los Carabancheles y 5 cuyos nombres se ignoraban. Tras la medición, comenzaron las negociaciones: los regidores propusieron ceder estas tierras a censo perpetuo bajo el mismo canon de 8 rs/fg que venían pagando. Los vecinos se negaron, alegando que el precio era muy alto y optando por mantener el arrendamiento y la necesidad de pedir licencia a Madrid. Finalmente, aceptaron el censo con la condición de anular el derecho de veintena que gravaba las transmisiones, lo cual admitió Madrid. Se otorgó por tanto "escritura de censo perpetuo en calidad de infiteusis" por la que se reconocía a los propios el dominio directo de los viñedos, así como el derecho de licencia, pero especificando que "queda libre el vendedor y nuevo poseedor de pagar ningún derecho de tanteo, veintena ni otro alguno mediante ir uno y otro considerado en el gravamen y renta anual que irá expresado han de pagar."<sup>565</sup>

---

<sup>565</sup> - AVN-S, 3-196-1, 3-195-11 y 13

## 1.2 - ARRENDAMIENTOS A CORTO PLAZO

Los arrendamientos a corto plazo son la forma predominante de explotación de las tierras de labranza pertenecientes a los propios madrileños. Los contratos no suelen dar muchos detalles sobre las condiciones que, pese a la dispersión y desigualdad de las tierras, no presentan grandes variaciones. Su duración normal se sitúa entre 4 y 7 años, llegando en contadas ocasiones hasta los 9 años. En el caso de los arrendamientos de más larga duración suele fijarse una paga menos: el último año se concede "de hueco", es decir, el arrendatario no lo pagaba para que la finca quedara en barbecho y pudiera ser arrendada al año siguiente. Todos los pagos se realizaban el día 15 de agosto, momento en que la finalización de la cosecha dotaba de liquidez a las economías campesinas. Desde la segunda mitad del s. XVII las rentas se pagaban en metálico. En caso de no haber presentado un fiador, era preciso adelantar una paga.

El procedimiento para la realización de los arrendamientos consistía, teóricamente, en que el ayuntamiento pregonaba las vacantes existentes en la ciudad y los lugares donde pudiera haber interesados. Las posturas recibidas debían ser informadas favorablemente por los regidores comisarios de propios, siendo entonces admitidas por la Junta de propios, que fijaba una fecha para la subasta. Tras el primer remate se celebraba el segundo y definitivo, pasando a continuación a otorgarse la escritura correspondiente.

En ocasiones, la administración municipal intentó agilizar un procedimiento tan largo e ineficaz. Así, en 1749, con motivo de un memorial de dos vecinos de Carabanchel de Abajo que solicitaban arrendar tierras de Madrid en dicho lugar con la condición de suprimir los pregones, el ayuntamiento acordó no sólo acceder a la petición, sino también ordenó "se fijasen cédulas en Carabanchel y en esta Villa y que a los que acudiesen dando pliegos en las de dicho lugar como en las que los propios tienen en otras se les admita sin dar cuenta para evitar la dilación y perjuicios que de ella resultaban".<sup>566</sup>

Una última cuestión es la de los beneficiarios del patrimonio municipal. Aun cuando es una cuestión muy compleja para entrar en detalle, la práctica de la usurpación y el amplio abanico de arrendatarios que se registra demuestran la participación de diversos sectores sociales. En general se trata de habitantes de las localidades donde se encuentran las tierras o lugares

---

<sup>566</sup> - AVM-S, 3-41-51

cercanos, que las utilizan con un carácter complementario a sus explotaciones. Cuando aparecen vecinos de Madrid cabe suponer que se trata de propietarios rentistas que las subarriendan. Como tendencia general es posible apuntar, por último, una cierta concentración en manos de los que sin duda constituyen la clase de los "labradores". La mejora del control municipal sobre las ocupaciones ilegales y el sistema de arrendamiento incidirá en esta concentración de los arrendamientos.

Para mejor concretar todas estas cuestiones relativas a las tierras de labranza, paso a continuación a analizar un caso concreto, las tierras situadas en Las Rozas.

### 1.3 – LAS TIERRAS DE LOS PROPIOS DE MADRID EN LAS ROZAS.

Las tierras de los propios de Madrid en Las Rozas se localizan en la parte NO de su término municipal, lindando con Majadahonda, Torreloredones y el territorio del Monte de El Pardo. A comienzos del siglo XVIII pertenecen a Madrid 5.089 fgs en Las Rozas. Claro que no sólo son tierras efectivamente arrendadas, se incluyen otras muchas eriales y de aprovechamiento comunal: "En el termino de Las Rozas, incluidas todas las que llegan a los Montes de El Pardo y los que dan contra el cerro de los Relojos hasta el Portillo, incluidas las de los términos de Sacadilla, Peña Rucia y el cerrillo del Cura hasta dar con tierra de los herederos de Aravaca, cinco mil y ochenta y nueve fanegas, sin incluir las del término de Valóbreco, que son término de Madrid y toca su término a la parrochia de Santa María, pero se incluye igualmente en ellas todos los calveros y cerros y parte de los que están con algunas chaparras y principio de monte".<sup>567</sup> Algunas se perdieron al incorporarse al recinto del Real Cordón de El Pardo, pues el apeo de 1.768 y 1.769, el más completo de los realizados hasta entonces, daba una extensión total de 3.911 fgs - 11 cels y 14 est., de los cuales 1.875 fgs - 4 cels se destinaban a labranzas (distribuidas en 173 suertes) y las 2.036 fgs - 7 cels y 14 est restantes eran terrenos eriales o dedicados a pastos.<sup>568</sup>

Esta amplia extensión de tierras pertenecientes al ayuntamiento madrileño presenta diversos aprovechamientos, como acabamos de ver: una parte está dedicada a labrantío, otra a

---

<sup>567</sup> AVM-S, 3-165-11 y 3-165-17

<sup>568</sup> AVM-S, 3-44-1

monte hueco o son terrenos incultos cuya vegetación herbácea es utilizada como pastizales. La evolución de estos aprovechamientos aparece reflejada tanto en los contratos de arrendamiento como en apeos, reconocimientos y pleitos e ilustra la dinámica del desarrollo agrario de una localidad cercana a Madrid en el siglo XVIII.

Durante la primera mitad del siglo XVIII la fórmula de explotación predominante es el arrendamiento de todas las tierras cultivables al concejo de Las Rozas, que se encarga de distribuir las entre sus vecinos. Se trata de una fórmula que deriva directamente del sistema de "nihares" medieval, mediante el cual la Villa concedía tierras para labranza a las aldeas de su jurisdicción, y que en el s. XVI fue siendo sustituida por arrendamientos a corto plazo por parte de los concejos beneficiarios, fórmula mucho más interesante para el propietario ya que puede así reactualizar periódicamente la renta en las coyunturas alcistas.

En 1.704 el concejo de Las Rozas arrendó las tierras de Madrid situadas dentro de su término, después de haber abandonado esta práctica durante algunos años. La causa era que algunas de estas tierras "se suelen... arar y arrendar a dicha villa por diferentes precios, por lo cual se ha seguido perjuicio algunos vecinos por si acaso aran más de aquello que arrendaban, y para que no se siga ningún perjuicio a dicha villa ni dichos vecinos", el concejo procedió al arrendamiento durante siete años a partir de 1.704. Se trataba, por tanto, de regular internamente la distribución de la tierra entre los vecinos que estaba resultando tan conflictiva. Se realizarían seis pagas (un año era de hueco) a razón de 4.100 rs cada una. Debido a los daños experimentados por Las Rozas durante la guerra de Sucesión las justicias de dicho lugar consiguieron del Consejo de Castilla una moratoria del pago de dichas rentas en 1.708.<sup>569</sup>

El arrendamiento por parte del concejo se repite entre 1.716 - 1.723, 1.723 - 1.728 y 1.744 - 1.748. El precio anual fue en las dos primeras ocasiones de 4.200 rs, mientras en el último período descendió a 4.000 rs.<sup>570</sup> De estos arrendamientos el más interesante es el efectuado en 1.723, pues junto a la escritura aparece el repartimiento de las tierras llevado a cabo por el concejo de Las Rozas entre sus vecinos.<sup>571</sup> En total se repartían 3.565 fgs, que

---

<sup>569</sup> AVM-S, 3-165-7

<sup>570</sup> Las escrituras respectivas, en AVM-S, 3-165-11, 13 y 17

<sup>571</sup> Un informe de la Secretaría de Ayuntamiento de 1795 da cumplida cuenta de cómo se hizo el ayuntamiento madrileño con un documento del concejo de Las Rozas: "le adquirió mañosamente el visitador de propios Rosado extrayéndole del archivo de dicho pueblo". AVM-S, 3-166-18. Como se aprecia, no tenían ningún escrúpulo los oficiales municipales ante lo ajeno a la hora de adquirir títulos de propiedad.

representa un porcentaje del 70% de tierras cultivadas sobre el total de las arrendadas. Los criterios de división no son igualitarios, ya que se basan en la capacidad de explotación del terrazgo de cada vecino, es decir, su disponibilidad de animales de labor. Así, por cada animal de labor se recibían 18 fgs de tierra hasta alcanzar las 108 fgs el que tuviese 3 pares. El repartimiento nos da una clara idea de la estructura social de la localidad. Predominan los pequeños campesinos, pues de los 97 vecinos afectados 37 poseen una pareja de labor, mientras 35 tienen un sólo animal o ninguno.

**CUADRO 17 – DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS DE PROPIOS ENTRE VECINOS DE LAS ROZAS, 1723-1728**

<b>ANIMALES DE LABRANZA</b>	<b>DENº VECINOS</b>	<b>% DE LA POBLACION</b>	<b>SUPERFICIE INDIVIDUAL</b>	<b>SUPERFICIE TOTAL</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
1 Ó NINGUNO	35	35,3	18	630	17,2
1 PAR	37	37,4	36	1.332	36,4
3 ANIMALES	18	18,2	54	972	26,6
2 PARES	7	7,1	72	504	13,8
3 PARES	2	2	108	216	5,9
<b>TOTAL</b>	<b>99</b>			<b>3.654</b>	

FUENTE: AVM-S, 3-165-13

Las tierras de los propios de Madrid juegan para estas economías campesinas un papel de complementariedad, permitiendo redondear sus explotaciones. De ahí que en el reparto se proceda a redistribuir las concesiones de tierra en función de los cambios en la cantidad de ganado disponible por cada campesino. Se sanciona así la estructura social existente, pues los labradores más acomodados son a la vez los más favorecidos, y ello con un precio ínfimo, de apenas 1 rl/fg.

Pero a la vez esta modalidad de reparto presenta ventajas evidentes para los campesinos menos favorecidos, aquellos que no disponen de fuerza de tiro propia para

desarrollar sus explotaciones de manera autónoma. Son, por tanto, campesinos jornaleros, sin que ello quiera decir que no puedan cultivar determinadas parcelas (propias o arrendadas) para garantizarse su subsistencia. De existir un “mercado libre” en las tierras de propios, con arrendamiento individuales, sus posibilidades de acceder a este medio de producción serían mucho más escasas. Disponen así de una oportunidad para complementar sus otras actividades económicas, como la ganadería, el trabajo a jornal en determinadas temporadas.<sup>572</sup> También para el campesino “mediano”, aquél que dispone de un equipo de labranza propio el sistema representa un medio de acceder a una explotación ya significativa en la agricultura de cereal del entorno madrileño. En efecto, las aproximadamente 12,5 Has de superficie que recibe se acercan a las poco más de 14 Has que son la propiedad media del campesinado en las localidades de realengo cercanas a Madrid (entre ellas Las Rozas) a mediados del s. XVIII, como se desprende de los datos del Catastro de Ensenada.<sup>573</sup> En conclusión, la intervención del concejo aldeano como intermediario sirve para sancionar una estructura productiva nada igualitaria, pero también para garantizar mecanismos de equilibrio que eviten conflictos internos que disgreguen aún más la comunidad campesina.

Volviendo a la realización de los arrendamientos, entre 1736 y 1744 se llevan a cabo individualmente. Un total de 13 escrituras a lo largo de estos años revela un grado de ocupación -al menos legal- de la tierra mucho menor, concentrándose sin duda en las mejores tierras, lo que permite la elevación de la renta a 3 rs/fg anualmente. La extensión de los arrendamientos es muy variable: desde 300 fgs hasta 18 fgs.<sup>574</sup>

A partir de 1748 los arrendamientos de tierras en Las Rozas serán realizados por los labradores de forma personal, desapareciendo el concejo como órgano mediador hasta finales de siglo. Para el período comprendido entre 1749 y 1763 se conservan 42 escrituras otorgados por vecinos de Las Rozas y, en mucho menor número, de la vecina localidad de Majadahonda.<sup>575</sup>

---

<sup>572</sup> Las 18 fgs que cada uno de estos campesinos recibiría equivale a unas 6 Has de superficie, que es la cantidad que se puede estimar representativa de una explotación minifundista. Véase la reconstrucción de una de estas economías campesinas, con precisamente 6 Has de cultivo, en tiempos de Felipe II en LOPEZ GARCIA, J. M., (dir)- *El impacto de la Corte*, págs. 127-130

<sup>573</sup> MADRAZO MADRAZO, S. y otros- “La Tierra de Madrid”, p. 52

<sup>574</sup> AVM-S, 3-165-16

<sup>575</sup> AVM-S, 3-165-18

En estas escrituras se aprecia una participación masiva de labradores a la hora de aprovecharse de las tierras de propios. El espectro de las explotaciones es muy amplio, desde 9 fgs hasta 180 fgs; la extensión media de los arrendamientos se sitúa en torno a las 45 fgs. Un hecho muy común y que se había producido en períodos anteriores es la unión de varios labradores "de mancomún" para el arrendamiento, y ello tanto para explotaciones grandes como pequeñas. Así, Tomás Cobos, Josef Cobos, Andrés Benito al menor, Pablo Benito y Bartolomé Iñigo, vecinos labradores de Las Rozas se unieron para arrendar 180 fgs; lo propio hicieron Dionisio del Hoyo, Joachin Labrandero y Manuel Magdaleno para disfrutar 52 fgs. Estas uniones de campesinos que ponen en común su trabajo y demás medios de producción nos indica un esfuerzo por acceder a un bien, la tierra, que eleva sus beneficios en el comienzo de una coyuntura alcista.

La duración de los contratos es de 4 ó 5 años (muy pocas llegan a 6), descontándose siempre una paga "por vía de hueco". El precio anual se sitúa en 3 ó 3'5 rs/fg, predominando ésta última cantidad. Esto suponía una elevación de la renta respecto a años anteriores, pero el hecho más llamativo es que permanecerá estable a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVIII. En efecto, en todos los contratos de arrendamiento posteriores el precio de la fanega es generalmente de 3,5 rs y sólo en contadísimas ocasiones asciende hasta 4 rs.<sup>576</sup>

¿Cómo es posible que en una situación de subida de la renta de la tierra los precios de arrendamiento de las tierras de propios madrileños en las Rozas permanezcan estables? Sólo limitándonos a los contratos de arrendamiento puede extrañarnos este hecho, perfectamente inteligible a la luz de las visitas y apeos realizados por las autoridades municipales, que, en efecto, ponen de manifiesto un elevado grado de ocupaciones y roturaciones ilegales por los labradores de los pueblos donde se ubican las tierras de propios. Aprovechando la ausencia de un control efectivo de la tierra por parte de los administradores madrileños (es decir, la ineficacia administrativa), se ocupan sus propiedades sin otorgar ninguna escritura. En el caso madrileño se constata el elevado índice de roturaciones ilegales y excesos de labranza en los arrendamientos, lo que nos pone de manifiesto un gran interés por la tierra. Así, en 1759 un empleado del Ayuntamiento, Ignacio Fernández Cacho, reconoció las propiedades madrileñas. Pues bien, en Las Rozas, con sólo 623 fgs arrendadas, los arrendatarios habían pasado a ocupar otras 210 fgs - 2 cels; además, se labraban otras 480 fgs - 3 cels sin otorgar escritura,

---

<sup>576</sup> Por regla general, las rentas de las tierras de propios solían ser inferiores a las de propiedad privada, como muestran BERNAL, A. M.- "Haciendas locales", págs. 294-295 y DONEZAR, J. M.- *Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el siglo XVIII*, Madrid, 1984, p. 320

lo que supone que la ocupación ilegal ponía en cultivo más tierras que por medio de contratos legales.<sup>577</sup>

Entre 1768 – 69, con motivo de un apeo general de todas las tierras de propios de Madrid, se procedió a apear las de Las Rozas. El resultado, ya mencionado, fue de 1.875 fgs - 4 cels de terrenos de pan llevar (distribuidos en 173 parcelas o suertes) y una superficie erial, denominado Dehesa de los Barrancos, de 2.036 fgs-7 cels-14 est de extensión.<sup>578</sup> Paralelamente, se procedió a liquidar las ocupaciones ilegales y a formalizar nuevas escrituras. El resultado fue el cobro de 3.118 rs por Madrid en concepto de roturaciones indebidas. Y ello pese a que el subdelegado que realizó el apeo informaba que "habiéndose encontrado (por lo general) a los más de los labradores en suma decadencia y pobreza se ha omitido formar causas sobre roturas en medio (que no concurrieron a delatarse de lo que labraban sin licencia, como se les amonestó en los edictos), ni tampoco se ha seguido los expedientes en el orden regular".<sup>579</sup>

Tras el apeo, el terrazgo quedaba organizado para una mejor explotación. Sin embargo, comenzaron a realizarse los arrendamientos en función de las peticiones de los labradores, con lo cual se hacían anualmente varias e incluso algunos arrendatarios disponían de parcelas con diferentes plazos. En general, estos contratos no añaden condiciones nuevas a los anteriores: su duración es mayoritariamente de 4 años (sin ningún año sin paga) y el precio suele ser 3,5 rs/fg.<sup>580</sup> Lo más destacable es un proceso de relativa concentración de arrendamientos que se aprecia a finales de siglo. Además de desaparecer los arrendatarios mancomunados, aparecen alguno que disfrutan cantidades importantes de tierra, como es el caso de Joaquín Bravo, con casi 350 fgs, Valentín Raso con 225 fgs, el cura Manuel Bravo disfruta 127 fgs, etc. Junto a ellos aparecen los arrendatarios de pequeñas y medianas cantidades de tierra, con una clara función de complementariedad de las explotaciones campesinas.<sup>581</sup>

---

<sup>577</sup> AVM-S, 2-414-15

<sup>578</sup> AVM-S, 3-44-1

<sup>579</sup> AVM-S, 3-165-35

<sup>580</sup> La serie de escrituras para el período de 1774 a 1793 en AVM-S, 3-166-4,5,7,8,12,13 y 17

<sup>581</sup> AVM-S, 3-166-23



Con el paso del tiempo se cierra el ciclo del aprovechamiento de estas tierras. Un reconocimiento efectuado en 1797 nos informa de que una gran parte de las parcelas se encontraban eriales desde hacía algunos años.<sup>582</sup> Y es que la solución de la agricultura española a la coyuntura alcista de la segunda mitad del siglo XVIII fue una solución extensiva. La mayor demanda producida por el incremento demográfico fue abastecida mediante la roturación de tierras marginales y no por la intensificación de rendimientos por unidad de explotación. Finalmente, el aumento de la renta diferencial de la tierra hacía su aparición. Esto es lo que sucedía en las Rozas.

La solución, pues, sólo podía ser extensiva. Es lo que comprendieron los labradores del lugar (afectados además por la construcción del Canal de Guadarrama) cuando solicitaron a Madrid la roturación de la Dehesa de los Barrancos, de terrenos incultos. Este hecho desató el conflicto en la localidad de Las Rozas entre los agricultores y los ganaderos estantes, amenazados aquí por la expansión de las roturaciones. Dado que además éstos controlaban el Ayuntamiento, interpusieron un pleito de propiedad a la Villa de Madrid por dicho terreno, que consideraban comunal. La sentencia del corregidor de 22 de enero de 1791 ratificaba el derecho de Madrid y ordenaba a los “vecinos y ganaderos de las Rozas a que no impidan en modo alguno su repartimiento en suertes para labrarlas o hacer lo demás que a Madrid convenga”.<sup>583</sup>

Tal reparto no se había llevado a cabo en 1795 pues las justicias de Las Rozas informaban “que los vecinos labradores de dicho lugar se han propasado a romper y raiar los eriales que llaman los Barrancos, ... entre los cuales dichos labradores se hallan bastantes discordios por querer unos apropiarse mucho terreno y otros sin ninguno”, por lo que solicitase se efectuase la medición y su división en suertes.<sup>584</sup> Esta se realizó en 1797, midiéndose 1.036 fgs-2 cels-6 est de tierras labrantías que se repartieron en 128 parcelas, con un precio de arrendamiento de 3,5 rs/fg.<sup>585</sup> Se completaba así el proceso extensivo.

---

<sup>582</sup> AVM-S, 3-166-24

<sup>583</sup> AVM-S, 3-166-15

<sup>584</sup> AVM-S, 3-166-18

<sup>585</sup> AVM-S, 3-166-24 y 25

## 2 - LAS TIERRAS DE PASTO: DEHESAS Y SOTOS

La gestión de los pastizales de los propios madrileños se caracteriza, como vengo insistiendo, por su total *subordinación a la política de abastecimiento de carne* a la ciudad. La explotación rentística de este patrimonio resulta así secundaria. La prioridad de las autoridades municipales se centra en facilitar en la medida de sus posibilidades el suministro de productos ganaderos, y para ello van a contar con las tierras de propios. Después del pan, la carne representa el segundo producto en el abasto madrileño, ascendiendo su consumo a una cuarta parte del total de alimentos básicos. Para satisfacer las necesidades de la población urbana, se estructuró una red de suministro muy amplia, que abarcaba a casi todo el territorio peninsular con especial incidencia en áreas como Extremadura o el norte de la submeseta septentrional.

Una vez en las cercanías de la ciudad, era preciso que el ganado descansara algún tiempo con el fin de recuperar el peso perdido en tan largos desplazamientos, de ahí la importancia de asegurarse suficientes terrenos de pastos. Un dato ilustrativo: según un informe sobre el abasto de carne, en 1775 existían 80.268 carneros y 3.368 reses vacunas pastando en las inmediaciones de Madrid, mientras se encontraban en camino otros 3.317 carneros y 735 reses.<sup>586</sup> Para atender sus necesidades de pastos, los responsables del abasto disponían en primer lugar de los términos comunales en la jurisdicción de la capital, así como del denominado Real de Manzanares, el espacio comprendido entre Madrid y la Cordillera Central,<sup>587</sup> donde además arrendaban numerosas dehesas y prados a particulares. Y, por supuesto, de las tierras de pasto de los propios.

Dentro de los predios del ayuntamiento madrileño, dehesas y sotos son los que presentan mayor aptitud para el aprovechamiento pecuario. En el caso de los sotos, terrenos riberiegos, hay que tener en cuenta otros usos complementarios, como el forestal, cinegético y la pesca, que analizaremos más adelante. La intervención municipal se completará con la política de adquisiciones patrimoniales con destino al abasto de carne en la segunda mitad del siglo XVIII.

---

<sup>586</sup> - AHN- Consejos, leg. 4123

<sup>587</sup> VALENZUELA RUBIO, M.-*Urbanización y crisis rural en la Sierra de Madrid*, Madrid, 1976, págs. 150-156

En 1809, al anularse el sistema de obligados para el abastecimiento de carne y permitirse la libertes de arrendamiento de los pastizales, el ayuntamiento madrileño realizó una tasación de su sotos y dehesas que hasta entonces habían estado cedidas a los obligados y administradores. En el cuadro adjunto se recoge esta tasación en la que se pone de manifiesto el potencial ganadero de estas posesiones.

#### CUADRO 18 - TASACIÓN DE LOS SOTOS Y DEHESAS DE MADRID, 1809

	SUPERF (FGS)	VACUNO	TEMPORADA	CARNEROS	TEMPORADA	TASACIÓN (RS/AÑO)
DEHESA DE LA CEPEDA	3.134	1.000	VERANO			26.496
PRADO HERREROS	342	100	VERANO INVIERNO			6.000
NEGRALEJO	766	250	INVIERNO	500	INVIERNO	10.950
PORCAL	1.325	300	INVIERNO			10.950
SALMEDINA	533			500	INVIERNO	3.000
PRADO DEL CORREGIDOR	37			250	VERANO INVIERNO	1.500
<b>TOTAL</b>	<b>6.137</b>	<b>1.650</b>		<b>750</b>		<b>58.896</b>
OTROS:						
SOTO VACIAMADRID	350					4.000
LA MATILLA Y CERROS						
ARGANZUELA	256					
AMANIEL	690					
<b>TOTAL</b>						<b>62.896</b>

FUENTE: AVM-S, 3-197-11

## 2.1 - DEHESAS.

Las dos dehesas concejiles situadas dentro del término de Madrid presentan un mismo origen y evolución, pasando de ser dehesas boyales a "carniceras".

La más antigua es la dehesa de Amanuel o de la Villa, situada al norte de la ciudad y cuya extensión en el s. XVIII abarcaba 698 fgs (después de haber sufrido importantes recortes territoriales). Desde el s. XV se documenta como dehesa boyal para los ganados de labor de los vecinos de Madrid y su Tierra, hasta que el concejo decidió 1485 reservarla exclusivamente a los destinados al abastecimiento urbano: "mandaron que ningunas nin algunas personas desta dicha Villa e sus arrauales e tierra non sean osados de echar ganados algunos a paçer en la dehesa de Hamaniel por quanto es para los ganados de los que se encargaren de las carneçerías desta Villa de oy en adelante".<sup>588</sup>

En Amanuel se concentraban los hatos procedentes del Real de Manzanares y los abundantes términos comunales del entorno de El Pardo y norte de la Tierra de Madrid, antes de ser sacrificados en la ciudad. Así lo reconocían los encargados del abasto en 1769: "la dehesa de Amanuel, llamada de la Villa, sirve ésta para el hato de carneros de muerte en todos tiempos y en primavera para el de reses, e igualmente para el descanso de todo el ganado de una y otra especie que viene a esta Corte de Castilla y Galicia"<sup>589</sup>. Sin embargo, su rendimiento para las arcas municipales era inexistente: los obligados no pagaban nada por el disfrute de esta posesión. Tan sólo a finales del siglo, las cuentas de propios registran el modestísimo pago de 200 rs anuales.

La dehesa de Arganzuela se encuentra en el extremo opuesto, al sur, junto al río Manzanares. Su origen se remonta a 1492, fecha de una Real Cédula de los Reyes Católicos que autorizaba al concejo madrileño a establecer una "dehesa adehesada para los ganados de trabajo y labor y otras bestias de los vecinos de esta Villa y sus arrabales, y los que viniesen a las ferias de ella".<sup>590</sup> Nació, pues, para sustituir a la de Amanuel después de las protestas de los vecinos ante la falta de un espacio acotado para sus ganados. Sin embargo, su destino será también el de "dehesa carnicera", reservada para el abasto urbano.

---

<sup>588</sup> Sesión de 18 de marzo de 1485. *LAC-I*, p. 379

<sup>589</sup> *AVM-S*, 3-42-3

<sup>590</sup> *Documentos*, t. III, p. 342

En el apeo efectuado en el s. XVIII se midieron 256 fgs, además de constatarse las numerosas intrusiones efectuadas por los propietarios colindantes, que provocaron pleitos que se alargaron durante varias décadas. Pese a su limitada extensión y a las ocupaciones ilegales, resultaba importante en el esquema de abastecimiento de carne porque dentro de ella se había construido el matadero, también perteneciente a los bienes de propios madrileños. Dehesa y matadero se arrendaban conjuntamente a los obligados del abasto, que pagaban un precio tasado: 1.647 rs anuales. En la década de 1740 se rebajó a 800 rs por encargarse los arrendatarios de los gastos de mantenimiento de la casa-matadero.

## 2.2 - SOTOS

Durante el XVIII el número de sotos pertenecientes a los propios de Madrid es limitado, si bien entre ellos destacan las dos fincas más rentables del ayuntamiento hasta la adquisición de una parte de la Dehesa de la Serena en 1.768: los sotos del Porcal (1.325 fgs en el término de Vaciamadrid) y del Negralejo (766 fgs situadas en el de Rivas), ambos a orillas del Jarama. Cerca de ellos aparecen los de Cuevas y Orillas en Velilla de San Antonio (155 fgs) y Salmedina (535 fgs), éste ya en la ribera del río Manzanares, en Vaciamadrid. Por su parte, dentro del término de la ciudad se localiza el prado del Corregidor (37 fgs), de características similares a los sotos.

La gestión de este patrimonio correspondía a la denominada "*comisión de sotos*", integrada por dos regidores elegidos anualmente por sorteo. Sus competencias teóricas eran muy amplias:

"informan a Madrid del estado de los sotos y, estando en administración, las cortas que en ellos se deben hacer del taray y demás leñas y aprovechamiento que tuvieren; dar cuenta de las denuncias que se hacen por razón de disfrutar sus pastos personas o ganados que en ellas se entrometen; nombran los guardas en caso de deberlos poner o remover por algún motivo; hacer vista de ojos acaesciendo rompimiento de tierras en los términos de sus cotos; y si hay o se hacen arrendamientos, cuidar el cumplimiento de ellos y de sus condiciones respecto de que éstas siempre están arregladas por Madrid

para el beneficio de unas y otras partes; y hacer presente al Ayuntamiento cuanto en esta razón ocurriese y les pareciere digno de remedio".<sup>591</sup>

Estas atribuciones eran compartidas en la práctica con el mayordomo de propios. La documentación muestra cómo buena parte de la administración cotidiana de estas propiedades pasaban por sus manos, y no por las de los capitulares madrileños, si bien éstos se reservaban la firma de las escrituras de arrendamiento y las decisiones e informes más destacados. La comisión compuesta por dos regidores encargados de los sotos desapareció con el Reglamento de Propios y Arbitrios elaborado por el Consejo de Castilla en 1.766. Sus funciones pasaron a la Junta que centralizó la gestión de la hacienda municipal, si bien en su seno se mantuvo la especialización de dos regidores en todo lo relacionado con el patrimonio municipal.<sup>592</sup>

La larga cita anterior sobre las competencias de los regidores nos ha presentado un panorama de los métodos de administración y aprovechamientos propios de los sotos. Estos son de dos grandes tipos: por un lado, los pastos; por otro, toda una gama de usos (leñas, caza y pesca) que se explotaban conjuntamente. Los analizaré por separado, centrándome en las dos propiedades más interesantes por su rentabilidad y variedad, los sotos de Porcal y Negralejo.

Los *pastos* representan la riqueza más preciada (al menos desde el punto de vista de las autoridades locales) de estos predios. Pese a ello, su aprovechamiento fue "público y común" hasta mediados del s. XVIII. La causa, analizada en el capítulo 3, radica en los diferentes ritmos del proceso de conversión de los bienes comunales en propios que se remonta a finales de la Edad Media. Se trata de una evolución que conoce distintas alternativas en función de los contrapuestos intereses sociales que giran en torno al patrimonio. En el caso de las tierras de pasto, se mantuvo una firme oposición de los pecheros a su patrimonialización por parte del municipio madrileño, lo que dio lugar a la aparición de situaciones complejas: ciertos aprovechamientos mantienen su carácter comunal, mientras otros se arriendan periódicamente como cualquier otro bien perteneciente a los propios. Es lo que sucedía con los sotos del Porcal y Negralejo desde mediados del s. XVI: se arrendaba la caza y la pesca, siendo la leña aprovechada por el ayuntamiento mediante contratas; por su parte, los pastos eran "públicos y comunes para los ganados de los vecinos de Madrid y su Tierra".

---

<sup>591</sup> - *Libro de comisiones y patronatos que Madrid sortea en cada un año, notados por don Martín Marcelino de Vergara, secretario de S.M. y escribano mayor de su Ayuntamiento*, realizado en torno a 1715. AVM-S, libro mss. 150

<sup>592</sup> - AVM-S, 2-353-43

Los intentos que la oligarquía municipal desarrolló en el s. XVII para acabar con el carácter comunal de los pastizales se saldó, como se ha visto, con la victoria de las tesis de los campesinos a través de sus representantes, los sexmeros, que consiguieron salvaguardar su disfrute abierto. Pese a esta “derrota”, el ayuntamiento nunca abandonó la pretensión de acotar las hierbas de Porcal y Negralejo. En la documentación sobre estas posesiones aparecen continuamente las quejas del mayordomo y los comisarios de sotos, que acusan al disfrute comunal de los pastos de ser responsable de la decadencia de los demás aprovechamientos.<sup>593</sup>

Paralelamente, el interés del abasto de carne por estas pasturas en las cercanías de Madrid iba creciendo, sobre todo a partir de la década de 1740, cuando este ramo, anteriormente en manos de obligados o contratistas particulares, pase a ser administrado directamente por el ayuntamiento. El administrador municipal dará el paso definitivo en 1752 al pedir que “se cierren dichos sotos en atención al presente mal estado de ellos por la multitud de ganados de todas partes que han ido cargando en sus pastos...por lo que es manifiesto que fuera más útil al abasto pagar aquellas yerbas a precios razonables, teniéndolas guardadas para socorrer oportunamente algunos hatos en esta inmediación, que no tenerlos en ellos destruidos y mal alimentados”. En esta ocasión, el proceso fue mucho más sencillo: bastó un auto del corregidor el 29 de mayo de dicho año para acotar los pastos de los dos sotos madrileños. No se registraron protestas: la oposición a la patrimonialización de los términos comunales había desaparecido totalmente a mediados del s. XVIII.<sup>594</sup>

Desde la fecha del vedamiento, los pastos fueron arrendados por los administradores del abasto de carne, que pagaban la cantidad de 9.000 rs anuales. Lo insuficiente de esta cifra hizo que el municipio subiera esta cantidad a 21.833 rs, que permaneció estable hasta comienzos de la siguiente centuria. La capacidad pecuaria fue evaluada por los mayores del abasto en 1809: eran pastos de invernada (1 de diciembre a 25 de abril), pudiendo mantenerse 500 carneros y 250 reses vacunas en el Negralejo y otras 300 vacunas en el Porcal (Cuadro 7.2).

---

<sup>593</sup> Así, el mayordomo afirmaba en 1719 que la caza en el Porcal “nunca puede ser mucha pues siendo el pasto común es correspondiente el daño que se origina de la mucha gente que continuamente hay en él con los ganados”. AVM-S, 3-15-13

<sup>594</sup> AVM-S, 3-15-30. En las diligencias de cerramiento, se encontraron pastando 1.250 cabezas de ganado lanar en el soto de Negralejo, mientras en el Porcal había 400 de lanar, 90 de vacuno y 125 de mular y caballar.

Una vez conseguida la reserva, el ayuntamiento madrileño llevó a cabo una constante política de protección de las pasturas que llegó a colisionar con otros usos de este espacio. Veamos éstos con más detalle.

El *arrendamiento* era el método habitual de gestión de los aprovechamientos *de leñas bajas, caza y pesca*. Quedaban excluidas de los contratos las *leñas altas*, que el municipio *administraba directamente* hasta los últimos años del siglo XVIII.

El proceso de arrendamiento se abría con la elaboración de un pliego de condiciones por los comisarios de sotos en el que se regulaban estrictamente las fórmulas de disfrute. A continuación se procedía a pregonar la apertura de la puja pública, recibándose las distintas posturas de los interesados, en las cuales no sólo se ofrecía un precio de arrendamiento, sino también cláusulas particulares que debían obtener un informe favorable de los comisarios madrileños. Ante ellos se realizaban dos remates, en los que se partía de la postura admitida más elevada. Finalmente, se procedía a firmar la escritura de arrendamiento ante el secretario del ayuntamiento, una vez que el arrendatario hubiera presentado las fianzas correspondientes. Si no lo hacía, el adjudicatario debía adelantar el importe de la renta anual "por vía de fianza".

El plazo de arrendamiento solía ser de 6 ó 9 años, pues se ajustaba a las cortas de leña, que se debían hacer cada tres años en cada uno de los tres cuarteles señalados. La fecha de inicio y fin de los arrendamientos era el día de San Miguel (29 de septiembre). Sin embargo, en contadas ocasiones aparecen pequeñas variaciones en este esquema temporal. Las frecuentes inundaciones del río y la ausencia de arrendatarios durante ciertos períodos provocan que haya algún contrato con una duración mínima de 4 años y máxima de 11, así como que su vigencia coincida con los años naturales.

El arrendatario estaba sometido a la fiscalización por parte de las autoridades municipales. En el momento de entregar el soto, se procedía a un reconocimiento de su estado en el que se realizaba un inventario de su riqueza forestal, que se volvía a comprobar al final. Tarea de los regidores comisarios, en la segunda mitad del siglo era desempeñada casi con exclusividad por el mayordomo. Lo mismo sucedía con la investigación de las denuncias sobre cualquier problema o abusos en los disfrutes. Por último, el esquema de control se completaba a comienzos de siglo con el nombramiento de un guarda por Madrid para vigilar que no se cometiesen abusos en la leña y caza del soto el último año del arrendamiento. Tras el acotamiento de los pastos, el



ayuntamiento se reservó la posibilidad de nombrar algún guarda que vigilaría de cerca el mantenimiento de los activos de estas propiedades.

La primera condición que se fijaba por parte del municipio era que el arrendatario no pudiese pedir ningún descuento "por ningún caso fortuito pensado o no pensado del cielo y de la tierra de agua, sequedad, nieve o yelo o otro cualquier temperamento que subceda en el dicho soto, caza, pesca y leña de él, porque aunque el dicho arrendador por cualquiera de estas causas intente o pretenda tener recurso no ha de ser oído en juicio ni fuera de él".<sup>595</sup>

El arrendatario de los sotos disponía en primer lugar del aprovechamiento de las "leñas bajas" o de arbustos, entre los que se cita casi con exclusividad el taray. Las cortas debían hacerse "a uso de ribera, conforme se corta en los sotos del Piul, Pajares, Santiesteban y islas de Arganda". El terreno se dividía en tres cuarteles, alternándose anualmente las podas en cada uno, que debían respetar una cierta distancia en el margen del río.

Las "leñas altas", por su parte, eran administradas directamente por el municipio. Se trata de árboles típicos de ribera, citándose los "álamos blancos, sauces, chopos, atalayas, espinos, sargas y moreras", que eran podados cada tres años, mientras los fresnos lo eran cada seis. El mayordomo de propios era el encargado de la gestión de las cortas, que generalmente se vendían "en pie", ajustándose con un contratista que llevaba a cabo todas las gestiones. En caso de que no se presentaran posturas, se hacían "a jornal", correspondiendo al mayordomo organizar todas las tareas: contratar a los leñadores, transportar y vender la leña. Sin embargo, a partir de 1.788 este disfrute se integró con los demás en los arrendamientos, desapareciendo así la gestión directa.<sup>596</sup>

Junto a las leñas bajas, en el arriendo de los sotos se incluía la caza y la pesca. La primera se refiere a los abundantes conejos que existían, cuya captura se debía hacer "a uso de ribera" entre los días de San Juan y San Miguel. Pero los arrendatarios no disfrutaban de un monopolio total de este aprovechamiento, pues entre las condiciones de la segunda mitad del siglo XVIII figura "que siempre y cuando que los señores correxidor y rexidores de esta Villa quisieren pasar al referido soto por vía de recreación, lo puedan ejecutar sin que se les embarace en manera alguna el uso de la escopeta para cazar el tiempo que allí estuvieren, no siendo en el prohibido ni dilatado", a lo que hay que añadir la facultad que tenían los comisarios de propios de

---

<sup>595</sup> AVM-S, 3-14-18. Se trata del arrendamiento del soto del Porcal en 1701. El texto citado, con pocas variantes, se repite en expedientes posteriores.

<sup>596</sup> AVM-S, 3-16-24

dar licencias para tal fin a doce "personas decentes".<sup>597</sup> La pesca, por su parte, se podía practicar en el trozo de ribera correspondiente a cada soto. La documentación muestra que habitualmente se subarrendaba a pescadores de Arganda. Como limitaciones figuran la obligación de pescar exclusivamente con caña el último año del arriendo y el hecho de que disfrutaban de "la misma regalía y facultad que para la caza los señores correxidor, rexidores y comisarios de propios".

Leña, caza y pesca, junto con los pastos, configuran el panorama de usos propio de estos predios. A ellos hay que añadir, en el caso del Porcal y Negralejo, la existencia de sendos hornos para fabricar ladrillos y otros materiales de construcción, instalados por los arrendatarios a comienzos del s. XVIII ante la abundancia de leña de taray, muy apreciada como combustible, y tierra adecuada.<sup>598</sup>

El análisis de los arrendamientos a lo largo del siglo muestra la progresiva hegemonía de la fabricación de materiales de construcción sobre los demás usos. Las autoridades municipales inicialmente adoptan una actitud tolerante, pero irán mostrándose cada vez más reticentes, hasta el punto de provocar un debate sobre la utilización de este espacio a finales del s. XVIII, como se demostrará en el análisis pormenorizado del soto del Porcal.

### 2.3 - EL SOTO DEL PORCAL EN EL S. XVIII

El método de explotación del soto del Porcal por parte de Madrid era el arrendamiento, la fórmula más habitual en el caso de los bienes de propios. Los aprovechamientos de leñas, caza y pesca eran arrendados conjuntamente, siendo la duración de seis o nueve años, período que se adaptaba a las necesidades de explotación forestal. Para llevarlo a cabo se convocaba a los interesados mediante pregón en la Villa y localidades cercanas, realizándose después el remate en subasta pública.

---

<sup>597</sup> AVM-S, 3-16-27

<sup>598</sup> "La leña de taray es bastante estimada como combustible para tejares y hornos de cal y yeso". MORO, R.- *Guía de los árboles de España*, Barcelona, 1988, p. 136

A comienzos del s. XVIII la fisonomía del soto del Porcal estaba dominado por dos especies, los fresnos y los tarayares, las mismas que a mediados del s. XVI se describían como las más abundantes. Se situaban junto al río, quedando el terreno llano más alejado de la orilla para pastizales.

Los métodos de aprovechamiento de la leña aparecen descritos en los pliegos de condiciones que las autoridades municipales elaboraban para entregar al arrendatario. Las leñas bajas de taray se cortaban cada tres años por pie. La zona poblada de tarayares se dividía en tres cuarteles, cortándose cada año uno, lo que aseguraba que al final del período quedase un cuartel preparado para el nuevo titular. El método de beneficio mantenía esta especie en estado arbustivo y permitía obtener abundantes fustas que resultaban muy apreciadas (habrá ocasión de comprobarlo) como combustible para los hornos de materiales de construcción (ladrillos, yesos, cal), un uso para el que ya habían sido reclamados por el monarca para las obras realizadas en los edificios reales en el s. XVI.<sup>599</sup> En cuanto a los fresnos se realizaba una poda cada seis años mediante "entresaca o limpia", por lo que solía practicarse una sola vez por arrendamiento. Un apreciado ramón para el ganado y leña de excelente calidad para el carboneo eran los destinos de estos esquilmos.<sup>600</sup>

Otros árboles característicos de ribera, como los álamos blancos, chopos (o álamos negros) y sauces aportaban las denominadas *leñas altas*, cuyo beneficio se realizaba de forma diferente a los anteriores, pues no se incluían en los arrendamientos, sino que los responsables municipales decidían cuando se hacían las podas, ajustadas "a tanto alzado" tras un peritaje. No se trata de un esquilmo muy destacado a comienzos de siglo, debido a la menor abundancia de estas especies en comparación a los fresnos. Sin embargo, su muy rápido crecimiento, su papel en el control de las avenidas del río y seguramente su valor ornamental<sup>601</sup> aumentaron el interés de Madrid en estas especies. Por ello se impuso a los arrendatarios desde comienzos de siglo la

---

<sup>599</sup> Para las características del arbolado he recurrido a MORO, R.- *Guía de los árboles*. En él se describen unos métodos de aprovechamiento que resultan muy similares a los practicados en el s. XVIII en los sotos de Madrid. Por su parte, FERRERAS, C. y AROZENA, M.E.- *Guía física*, al estudiar los tarayares mencionan que en la vega del Jarama quedan en la actualidad restos de *tamarix gallica* (p.174), sin duda residuos de su gran esplendor en el pasado

<sup>600</sup> MANUEL VALDES, C. M.- *Tierras y montes públicos en la sierra de Madrid (sectores central y meridional)*. Madrid, 1996, menciona la existencia en el área serrana de auténticos montes de fresno debido a la importancia de los aprovechamientos de esta especie.

<sup>601</sup> En las condiciones de arrendamiento de 1701 se aclaraba que los álamos y chopos debían quedar para Madrid, "para que tenga más población y recreo de dicho soto". AVM-S, 3-14-48

obligación de hacer un *plantío* anual de cien ejemplares de álamos blancos, chopos y sauces, condición que no existía en el caso de fresnos o taray.

Desde mediados de siglo este proceso se ampliará hasta cambiar decisivamente la fisonomía del soto, como se observa en los datos recogidos en el cuadro 7.4. Se trata de los recuentos de arbolado realizados en el inicio de cada arrendamiento. Aunque no se hacen con criterios homogéneos, si ilustran el claro proceso de reforestación del soto.

A partir del arrendamiento comenzado en 1750 se impuso la condición de realizar un plantío de 200 árboles al año, concretamente álamos blancos, negros y sauces, además de señalar un área de 5 fgs de superficie para que los arrendatarios realizaran los plantíos. También se aclaraba que no se podría utilizar los renuevos que se produjeran naturalmente. Tales medidas se debían al cumplimiento de la célebre "Real Ordenanza para el aumento y conservación de montes y plantíos" de 1748.<sup>602</sup> Desde este momento las autoridades municipales extremaron su vigilancia sobre la conservación del arbolado (especialmente a la hora de finiquitar los contratos). A ello se une el propio interés de los arrendatarios: el rápido crecimiento de estas especies en un entorno natural tan favorable les podía terminar beneficiando.

Se observa que la política de plantíos resultó especialmente exitosa en el caso del Porcal. Después de unos inicios lentos (entre 1750 y 1759 tan sólo se aumentó un 17% la masa forestal), el proceso se aceleró en los años 60 y 70: en 1777 el número de árboles casi se había triplicado en relación a un cuarto de siglo antes. Pero es en la última década cuando la realización de plantíos alcanza sus mayores cotas. El resultado resulta llamativo: en medio siglo se había multiplicado la masa forestal en el soto del Porcal. Un resultado que también pone de manifiesto la fertilidad del terreno para tales usos forestales.

Paralelamente se produjo un cambio en las especies predominantes, con una opción rotunda por las especies de crecimiento rápido, aunque fuera en detrimento de la calidad de su madera. Así, los fresnos perdieron claramente importancia relativa: si en 1750 suponían casi la mitad del arbolado, a finales del siglo habían quedado reducidos a la cuarta parte. Proceso inverso en el caso de álamos blancos: los 12.896 ejemplares de 1797 representan el 36% de todo el arbolado, cuando medio siglo antes sólo se contabilizaban 120 ejemplares. También chopos y

---

<sup>602</sup> Un análisis de esta normativa y la discusión sobre su efectividad en URTEAGA, L.- *La tierra esquilma. Las ideas sobre la conservación de la naturaleza en la cultura española del siglo XVIII*. Barcelona, 1987, págs. 130-131

saucos, aunque en menor medida, ampliaron notablemente su presencia en el soto. Estas tres especies suponían más de la mitad de toda la masa forestal a finales del XVIII.

La *gestión municipal* de estos esquilmos, a los que se unían la caza y la pesca, correspondía, al igual que en el resto de los sotos, a los dos regidores que integraban la "comisión de sotos", elegidos mediante sorteo anual. Su papel consistía en organizar el proceso de arrendamiento (fijar las condiciones, ordenar la subasta, firmar el contrato) y asegurar el mantenimiento del patrimonio concejil mediante reconocimientos del terreno. Pero en la práctica tendían con frecuencia a traspasar funciones al mayordomo de propios y, en los últimos años del siglo, al visitador de propios, cargo de nueva creación. En el último escalafón aparece el guarda, nombrado en el último año de arrendamiento para que vigilara el cumplimiento del contrato.

En caso de no conseguir el arrendamiento, el municipio recurría a la administración directa. El mayordomo era el encargado de organizar la explotación de las distintas utilidades del soto. De solución de emergencia pasará a ser método de gestión elegido a fines del s. XVIII.

Es difícil precisar la *rentabilidad* de los esquilmos forestales del soto. El hecho de que fueran arrendados conjuntamente y se produjeran cambios en su composición, impide aplicar automáticamente el muy destacado aumento de los ingresos del soto a lo largo del siglo, recogido en el cuadro 19.<sup>603</sup> Ciertamente las leñas representaban el activo más importante del soto. Podemos calcularlo con los datos de la administración directa de 1789: del total de 19.230 rs que produjo líquidos, 10.233 procedían de la corta de taray de un cuartel, mientras que la cacería de conejos supuso ingresos por valor de 7.547 rs. Hay que tener en cuenta que dicho año no se produjeron cortas de fresno y leñas altas, que se valoraron en 6.025 rs por año. De lo que se desprende que un 65% del total de ingresos del soto del Porcal procedían de los esquilmos forestales.<sup>604</sup>

Podría pensarse por tanto que la subida de la renta del soto (que llega a multiplicarse por seis a lo largo del siglo) se debería básicamente al aumento en los activos arbóreos que se fue produciendo. Pero sería una explicación parcial, que habría que completar con el análisis de los hornos para materiales de construcción, la clave fundamental del interés de los arrendatarios.

---

<sup>603</sup> Elaborado a partir de la siguiente documentación: AVM-S, 3-14-48, 3-15-11, 3-15-13 a 15, 3-15-28 y 29, 3-15-34, 3-15-39, 3-16-1, 3-16-10, 3-16-24, 3-16-27, 3-17-15, 3-17-30, 3-18-12 y AVM-C,1-464-1

<sup>604</sup> Una proporción muy similar se obtiene con los datos de la administración directa de 1796: de los 25.384 rs obtenidos, 15.909, el 62,6% procedían de las leñas. AVM-S, 3-16-27 y AVM-C,1-464-1

Desde comienzos del XVIII se documenta la existencia de una fábrica de ladrillo y teja que ocupaba una pequeña superficie, si bien se fue ampliando con la construcción de hornos de yeso a lo largo del siglo hasta alcanzar el número de cuatro. De esta forma la producción industrial se localizaba en función de la disponibilidad de recursos como combustible (especialmente leña de taray) y tierra, lo que suponía un considerable ahorro en los costes de transporte.<sup>605</sup> Los fabricantes de materiales de construcción terminaron por monopolizar los arrendamientos, que en muchas ocasiones realizaban a través de testaferros. Esta orientación productiva resultaba claramente compatible con los aprovechamientos forestales estudiados, como lo refleja el aumento de la masa forestal en la segunda mitad del siglo, momento de máximo auge de la actividad industrial.

Pero con lo que finalmente no resultará viable la proliferación de hornos para fabricar materiales constructivos es con el otro gran recurso renovable que aportaba esta zona silvo-pastoril: los pastos. Inicialmente no sucede así: las autoridades madrileñas consideran que ambas utilidades podían compartir el soto, habida cuenta del carácter comunal de los pastizales.<sup>606</sup> Precisamente cuando éste se pierda comenzará el debate sobre el uso del soto que finalmente concluirá con la desaparición de los hornos. Tal sucede a partir de 1752, momento en que se acotan Porcal y Negralejo, convertidos íntegramente en propios de la Villa. Inmediatamente pasaron a ser arrendados por el abasto de carne de la ciudad, administrado por regidores. Las quejas de los responsables del abasto fueron desde entonces continuas.<sup>607</sup>

La presión sobre los pastizales, un recurso especialmente escaso en los alrededores de Madrid, provocó que 1788 la Junta de propios madrileña decidiera "que se extingan los hornos y fábrica de ladrillo" a pesar de la lógica caída de ingresos. Sin embargo no se consiguió llegar a un

---

<sup>605</sup> Así lo expresaban los comisarios de sotos en 1738: "por medio de ellos logran consumir la leña que sacan del soto, escusando portes y desperdicios". AVM-S, 3-15-28

<sup>606</sup> El arrendamiento de 1721 lo refleja claramente: los comisarios de sotos informaron a favor de la postura presentada por un constructor y se mostraron contrarios a la solicitud de varios vecinos de Arganda, al considerar que éstos pretendían introducir sus ganados para aprovechar unos pastos a los que no tenían derecho por no pertenecer a la Tierra de Madrid. AVM-S, 3-15-14

<sup>607</sup> Como ejemplo un informe de 1776 en el que se denuncian los daños causados por las continuas "sueltas de bueyes de las carretas que van a conducir las crecientes porciones de ladrillo y teja que se fabrican en él, inutilizando las yerbas que se han construido y desmonte de tierras para dicha fábrica, causando gravísimo perjuicio con el paso de los ganados, rodadas y caminos con la rueda en ir y venir". AVM-S, 3-16-1

acuerdo con el abasto de carne (entonces a cargo de la Diputación de los Cinco Gremios) para que se encargaran del arrendamiento de todas las utilidades del soto.<sup>608</sup>

Será en 1796 cuando se tome la decisión definitiva de proceder a la *administración directa* del soto. En un primer momento (octubre de 1795) los regidores comisarios de propios insistieron en la necesidad de arrendar el soto sin los hornos "pues aunque sea cierto que cesando esta utilidad para los arrendadores bajarán los rendimientos de la finca principal, logrará por otra parte a su debido tiempo el reponerse de ellos en el mejor estado que recibirá en sí la propia heredad en sus producciones y pastos, en que tanto se interesa la causa pública y el abasto de carnes a el presente". Ni una palabra sobre los daños a la leña: toda la argumentación se apoyaba en los intereses del abasto de carnes.

La Junta de propios de enero de 1796 decidió "que por este año y por vía de ensayo, para adquirir un pleno conocimiento se administren por el mayordomo de propios los efectos que produzca dicha finca". Ahora sí se recurría a los "muchos perjuicios que han causado los arrendadores de esta Corte, haciendo las cortas de leña que no corresponde y sí excesivas, por cuya causa se halla el arbolado y demás monte en notable decadencia". Pero tal análisis se contradecía radicalmente con las cifras: en el recuento correspondiente a ese año aparece un aumento de un 191% en el número de árboles en relación a 1790, mientras los renuevos o "resalbos" se habían multiplicado por 11. Datos que no parecen mostrar ningún problema en cuanto a los esquilmos forestales.

El responsable directo de la administración era el mayordomo de propios. A él le correspondía ajustar las distintas utilidades, cobrar sus valores y realizar los pagos pertinentes. Para la corta de leña el mayordomo propuso venderla "a pie", encargándose el que la comprara de realizar la poda, pero se decidió hacerla "a jornal", con operarios contratados y vendiendo la leña obtenida. La cacería de conejos, por su parte, fue ajustada con un particular que se encargaría de todas las gestiones. El esquema de administración se completaba con el nombramiento de dos guardas que residirían en la casa construida en el soto y se encargarían de su vigilancia.<sup>609</sup>

---

<sup>608</sup> AVM-S, 3-16-24

<sup>609</sup> AVM-S, 3-18-12

La gestión directa comenzó obteniendo una buena rentabilidad: los ingresos totales ascendieron a 25.384 rs (correspondiendo 15.909 rs a los esquilmos forestales), mientras los gastos fueron 12.077 rs (5.383 rs de la corta de leña). El resultado eran unos ingresos netos para el municipio de 12.077 rs, de los que 10.526 rs (el 87%) procedía de la leña, lo que demuestra el interés económico que tenía su beneficio. En suma, la caída de ingresos respecto al último arrendamiento había sido tan sólo del 26%, modesta si consideramos la desaparición de los mentados hornos de materiales de construcción.<sup>610</sup>

La situación cambió al año siguiente: los ingresos netos se redujeron prácticamente a la mitad, 7.054 rs. La corta de leña no decayó tanto, produciendo un total de 12.538 rs, procedentes 10.403 del taray y el resto de los fresnos, no habiendo corta de leñas altas por no presentarse postores. Esta caída de la rentabilidad provocó que los administradores municipales presentaran varios informes en los que intentaban explicar sus causas. El visitador de propios recordaba los beneficios obtenidos por el abasto en los pastizales, además de la regeneración de la caza, agotada en los arrendamientos previos. Pero lo que más nos interesa es su detallada descripción de los abusos que se habían cometido en los esquilmos forestales: "las podas y cortas de leñas las hacían los arrendadores con una absoluta contravención de las Reales Ordenanzas: esto es, no dejaban lo que se llama horca o pendón, sí muchas uñas y estabones, los cortes picados, con lo que ocasionaban el reseo y pérdida de los árboles; no guiaban los renuevos o resalbos, antes sí los cortaban todos por sacar más porción de cargas u arrobas de leña, cortaban muchos árboles por el pie, no cumplían con la plantación de los que capitulaban".<sup>611</sup>

Tal explicación no resulta congruente con los datos conocidos sobre la evolución del arbolado, especialmente con el elevado número de renuevos recibidos, por lo que puede tratarse de una justificación sobrevenida ante la deficitaria gestión realizada. Concluía el informante con la conveniencia de establecer un horno de baldosa y ladrillo a la entrada de la finca que permitiera recuperar los ingresos.

Lo cierto es que a partir de esta fecha la gestión municipal se revelará absolutamente ineficaz. La caída de utilidades del Porcal fue total: en 1799 se produjo un déficit de 387 rs, que subieron a 5.756 en 1801. Ese año no se obtuvo ningún ingreso del soto, no realizándose corta de

---

<sup>610</sup> AVM-C, 1-464-1

<sup>611</sup> AVM-S, 3-17-15



leña ni caza o pesca.<sup>612</sup> Está claro que las posibles adversidades climatológicas no resultan suficientes para explicarlo, siendo necesario analizar los mecanismos de gestión, que resultan notablemente insuficientes para garantizar la explotación del predio.

Así, el gestor directo, el mayordomo, debía compatibilizar esta tarea con la recaudación y control del resto de los propios madrileños, por lo que muy pronto empieza a retrasarse en la organización del soto del Porcal, sin que ello motivara quejas o petición de ayuda por su parte. Por otro lado, se habían desglosado las distintas utilidades, cada una de las cuales estaba regulada por un lento proceso burocrático: el mayordomo informaba de la necesidad de actuar a la Junta de propios, que decidía poner en marcha el proceso de subasta. Si no se presentaban postores el proceso se alargaba en exceso.<sup>613</sup> Por último, los guardas del soto que permitían las actuaciones ilegales frecuentemente, según reiteradas denuncias que no conseguían atajarlas.

El resultado era una gestión ineficaz que provocaba una pérdida de activos forestales por la falta de conservación y renovación, como lo muestra el recuento de árboles efectuado en 1809: los 15.376 existentes suponían un descenso del 57% respecto a 1797, volviendo a los niveles de la década de 1780. Los fresnos quedaron reducidos a la mitad (4.556), mientras los álamos blancos sólo representaban una tercera parte (4.422), con un ligero aumento de los chopos, que pasaron a 4.168.<sup>614</sup> Ni desde el punto de vista de la rentabilidad ni del interés "conservacionista" la administración directa se justificaba, por lo que el nuevo ayuntamiento bajo el gobierno de José I decidió volver al sistema del arrendamiento conjunto de los aprovechamientos del soto.<sup>615</sup>

Todo ello se planteaba en el momento en que se preparaba el debate que llevaría a la oleada desamortizadora que barrería los patrimonios públicos. El destino del Porcal estaba alejado de Madrid y del uso forestal: tras pasar a propiedad privada se convirtió en colonia agrícola en la segunda mitad del s.XIX.

---

<sup>612</sup> El déficit era resultado de los gastos: pago de guardas, del capellán encargado del oratorio que allí había y gratificaciones por la muerte de 104 alimañas. AVM-S, 3-17-30

<sup>613</sup> Así sucedió en 1802, cuando se planteó la necesidad de hacer una corta de leña después de varios años sin hacerlo. Tras varios informes y peritajes, se decidió subastarla en 1804, momento en que se descubrió que varios operarios estaban cortando la leña por orden del superintendente de la presa de Pajares, de la Real Acequia del Jarama, para reparar los daños causados por el río en dicha presa, todo ello sin contar con la autorización municipal. Fue necesario ajustar el valor de la leña cortada. AVM-S, 3-17-38

<sup>614</sup> AVM-S, 3-18-22

<sup>615</sup> AVM-S, 3-18-22

## CUADRO 19 – EL SOTO DEL PORCAL EN EL S. XVIII- INGRESOS

PERIODO	FORMULA DE GESTIÓN	VALOR ANUAL (RS)
1701-1704	Administración	1.231
1705-1710	Arrendamiento	6.000
1711-1720	Arrendamiento	4.400
1721-1729	Arrendamiento	4.000
1730-1738	Arrendamiento	5.000
1739-1740	Arrendamiento	7.000
1741-1749	Arrendamiento	5.000
1750-1758	Arrendamiento	5.800
1759-1767	Arrendamiento	6.200
1768-1776	Arrendamiento	7.000
1777-1782	Arrendamiento	13.100
1783-1788	Arrendamiento	16.537
1789	Administración	13.260
1790-1795	Arrendamiento	18.000
1796	Administración	13.307
1797	Administración	7.155
1799	Administración	-387
1801	Administración	-5.756

**CUADRO 20 – EL SOTO DEL PORCAL EN EL S. XVIII. INVENTARIOS FORESTALES**

<b>1750</b>	
Fresnos	1.111
Alamos blancos	120
Chopos	1.188
Sauces	18
<b>TOTAL</b>	<b>2.437</b>

FUENTE: AVM-S, 3-15-29

1759		
Fresnos	Verdes	1.265
	Secos	46
Alamos y Chopos	Verdes	1.358
	Secos	15
Atalayas		177
TOTAL		2.861

AVM-S, 3-15-34

<b>1777</b>		
Fresnos	Viejos	1.280
	Nuevos	293
Alamos y Chopos	Viejos	747
	Nuevos	3.709
Sauces		649
Atalayas		223
Espinos		211
<b>TOTAL</b>		<b>7.040</b>

FUENTE: AVM-S, 3-16-1

<b>1783</b>		
Fresnos	Viejos	1.519
	Nuevos	1.378
	Secos	3
Alamos, Chopos y Sauces	Grandes	3.478
	Nuevos	3.819
	Secos	140
Atalayas	Viejos	186
	Renuevos	770
Espinos		131
<b>TOTAL</b>		<b>11.424</b>

AVM-S, 3-16-10

	<b>1790</b>		<b>1797</b>
Fresnos	Viejos	1.611	3.008
	Nuevos	3.488	5.648
	Guiados	576	
Alamos blancos	Viejos	4.633	7.328
	Nuevos	33.360	5.568
Chopos	Viejos	11.085	2.525
	Nuevos	481	1.320
Sargueros y sauces		130	2.401
Atalayas	Grandes	1.893	3.300
	Nuevas	92	3.296
	Chicas	494	-
Espinos	Nuevos	198	615
	Viejos		670
Bardagueras y			
Mimbreras		583	-
Moreras		3	3
Alisos		2	5
<b>TOTAL</b>	<b>18.629</b>		<b>35.655</b>
Renuevos (matas)	3.285		36.088

FUENTE: AVM-S, 3-16-27 AVM-S, 3-18-12

En la segunda mitad del s. XVIII, el abasto de carnes se enfrentó a la escasez y consiguiente carestía de pastizales en las cercanías de Madrid.<sup>616</sup> Las causas eran varias: las roturaciones llevadas a cabo en un dinámica expansiva<sup>617</sup> afectaron a numerosas cañadas, pasturas y abrevaderos en las inmediaciones de la ciudad;<sup>618</sup> villas y aldeas restringían los derechos comunales que disfrutaban los ganados del abasto, como el de pacer la pámpana de las viñas; terrenos baldíos destinados a nuevos plantíos de árboles. A todo ello hay que añadir los perjuicios experimentados con la pérdida de las tierras comunales y de propios en El Pardo, intensamente aprovechadas por el abasto, y la incorporación del monte de Viñuelas al patrimonio real. En este contexto se enmarca la inversión que en terrenos de pasto llevará a cabo el ayuntamiento con parte de los fondos del denominado "caudal de El Pardo". En realidad se trataba de una obligación recogida en la escritura de compra: Madrid debía destinar dos millones de reales a la adquisición de dehesas carniceras cercanas a la ciudad que pasarían a engrosar el patrimonio municipal, como ya he planteado en el capítulo anterior. Paso ahora a estudiar sus aprovechamientos en la 2ª mitad del s. XVIII.

El *soto de Migascalientes*, situado a orillas del río Manzanares, fue comprado en 1766. Su extensión era reducida: 83 fgs - 10 cels que se tasaron en 288.687 rs, de los cuales 145.500 correspondieron al valor de los pastos y 123.319 al del arbolado, mientras los 19.868 rs restantes procedían del edificio levantado en el soto. Por otra parte, se estimó que la renta anual procedente de los pastos equivaldría a 4.359 rs, casi un 3% del precio, y la de la leña en 1.650 rs, apenas un 1'3%, con lo que se obtendría una renta anual de 6.009 rs.<sup>619</sup> Aun cuando se adquirió para el abasto de carne a la ciudad, su destino fue distinto: desde 1772 pasó a estar arrendado por el asentista del abastecimiento de leche y manteca a la Casa Real por tan solo 1.500 rs anuales, cifra

---

<sup>616</sup> AHN, Consejos, legs. 4.123 y 11.463, así como numerosos expedientes del AVM.

<sup>617</sup> Un análisis general en SANCHEZ SALAZAR, F.- *Extensión de cultivos en España en el siglo XVIII*, Madrid, 1988

<sup>618</sup> Denuncias en este sentido en AVM-S, 3-8-24, 3-8-26 y 3-79-9

<sup>619</sup> AVM-S, 3-76-29. Del precio final hubo que descontar 82.140 rs del importe de dos censos impuestos sobre el soto.

que se subió a 2.500 rs en 1781, pero que ni siquiera entonces representaba un 1% de lo que había costado la propiedad.<sup>620</sup>

La posesión denominada *dehesa del prado Herrero* se localiza en el término municipal de Soto del Real y por tanto fuera de la jurisdicción de la Villa madrileña. Sus 342'5 fgs supusieron para el municipio un desembolso de 683.033 rs. La capacidad pecuaria se estimaba en 150 reses vacunas durante la invernada, a lo que había que añadir una "casa yerbera" y la riqueza forestal, todo ello rodeado por una doble pared de piedra. Se trataba por tanto de una "cerca", el mecanismo de defensa de la propiedad y reserva del usufructo que se practicaba en el Real de Manzanares desde la Baja Edad Media para preservar los terrenos de los derechos comunitarios, que en esta zona se extendían a todos los vecinos del Real y a los de la Villa y Tierra madrileña. El aprovechamiento de los pastos se arrendó al abasto de carne. El proceso de fijación de la renta revela la política municipal que priorizaba los intereses vinculados al abastecimiento urbano frente a la maximización de ingresos del patrimonio: aplicando una valoración del 3% sobre el precio total, ascendería a más de 18.000 rs; considerado excesivo, se decidió establecer el precio en 5.500 rs, menos de la tercera parte.<sup>621</sup>

En cuanto al uso de la leña, se recurrió a la administración directa. Las cortas no tenían una periodicidad fija, sino que el mayordomo se encargaba de informar del momento en que era conveniente llevarlas a cabo, aproximadamente cada diez años. Se trata de leña de robles y fresnos que se aprovechaba en régimen de monte hueco, utilizándose para la fabricación de carbón. La Junta de propios estableció el 11 de agosto "que la corta se hiciese no por ajuste alzado y sí por los cortadores fabriqueros a jornal, y la venta de leña por arrobas, pues no siendo así hay el grave perjuicio de que la persona en quien se verifique el ajuste como que sólo mira y atiende a su mayor lucro, arranca hasta las raíces de las plantas sin que sirva de obstáculo o impedimento para ello los visitantes de propios".<sup>622</sup>

La compra de la *dehesa de la Cepeda*, situada en plena zona serrana (actualmente un enclave madrileño), resultó mucho más problemática. La Villa mostró su interés por este terreno en 1773, pero sólo pudo completar su adquisición una década después, debido a las ya estudiadas complicaciones legales que experimentó el proceso. Según los mayores del abasto,

---

<sup>620</sup> AVM-S, 3-77-1

<sup>621</sup> AVM-S, 3-126-11

<sup>622</sup> AVM-S, 3-126-15 y 17

era capaz de mantener 1.000 cabezas de ganado vacuno durante la temporada de verano, pero no servía para la de invierno por ser extremadamente fría.<sup>623</sup> A la hora de fijar el precio del arrendamiento se produjeron desavenencias entre los responsables del abasto de carne y los regidores responsables del patrimonio, que estimaban que los 14.000 rs fijados en la escritura era una renta muy corta para el precio pagado por Madrid, por lo que proponían se realizara una nueva tasación de su valor. A pesar del acuerdo favorable de la Junta de propios en 28 de noviembre de 1785, no se llevó a cabo, por lo que la renta se mantuvo en los 14.000 rs anuales.<sup>624</sup>

### 3 – LA DEHESA DE LA SERENA

#### 3.1- LOS PROPIOS DE MADRID EN LA SERENA

La Dehesa de la Serena plantea claramente una problemática bien distinta a la del resto de las tierras de propios de Madrid. La abundante documentación conservada en su archivo municipal permite una minuciosa reconstrucción de los avatares por los que atravesó esta importante propiedad de más de 4.550 Has de extensión, auténtico microcosmos que refleja la evolución experimentada por las explotaciones trashumantes en un período en el que conocieron su mayor auge (2ª mitad del siglo XVIII), para pasar después de la Guerra de la Independencia a una profunda crisis. Por otra parte, encontramos una interesante información sobre los intereses ganaderos de las oligarquías locales extremeñas, que se vieron arrastradas por la propia crisis de las exportaciones laneras.

El gran conjunto de los pastizales de la comarca extremeña de la Serena pertenecía a la Corona como administradora del maestrazgo de la Orden de Alcántara, que se las había apropiado durante el período de reconquista medieval, formando así la "Real Dehesa de la Serena", con una extensión total superior a las 121.000 Has. Se trata de una de las principales zonas de pastos invernales para los ganados mesteños y que, junto con el Valle de Alcudia,

---

<sup>623</sup> AVM-S, 3- 197-11

<sup>624</sup> AVM-S, 3-131-4

situado en la Mancha, constituye el más destacado punto de destino de la red de cañadas que desde las serranías castellanas canalizaban el tránsito ganadero hacia los "extremos".

A pesar de que en su clásico trabajo Klein situara en el s. XVI la edad dorada de la Mesta, gracias a numerosos estudios ahora sabemos cómo la trashumancia española encontró su momento de mayor esplendor durante el s. XVIII, para entrar desde comienzos de la centuria siguiente en una profunda decadencia.<sup>625</sup> Esta fase de auge dieciochesco se enfrentó a nuevos y graves problemas: se dio de forma paralela a un incremento demográfico. Para cubrir el aumento de la demanda de alimentos que esto suponía, se recurrió a una solución típicamente extensiva, basada en el desarrollo de las roturaciones. Todo ello llevaba en última instancia a un enfrentamiento de intereses entre agricultores y ganaderos, particularmente grave en el caso de Extremadura, como demuestra el conocido expediente promovido por D. Vicente Paíno. Sin olvidar la nueva posición de los gobernantes reformistas e ilustrados de esta centuria, partidarios de fomentar el desarrollo de la agricultura a costa de los privilegios mesteños, posición en la que destacan Campomanes y Jovellanos.<sup>626</sup>

Sin embargo, esta visión global referida a Extremadura se ha enriquecido con la consideración de un nuevo grupo social: aquellos que saben aprovechar las oportunidades que brinda el predominio de los pastos sobre las tierras de labranza para desarrollar sus propias bases ganaderas. Son los propietarios de los rebaños "riberiegos" en oposición a los trashumantes y que pugnan con éstos por el uso del espacio pastoril desde una posición también privilegiada, ya que forman parte de las oligarquías locales que controlan los concejos. En torno a mediados del s. XVIII "los extremeños se han percatado de las posibilidades de la zona en pastos, cruzan su ovinos con los trashumantes, y de resultas aumenta el número de cabezas lanares".<sup>627</sup> Esta

---

<sup>625</sup> Entre los trabajos que han renovado nuestra visión sobre el apogeo y la crisis de la trashumancia en el s. XVIII y comienzos del XIX destacan: GARCIA SANZ, A.- "La agonía de la Mesta y el hundimiento de las exportaciones laneras: un capítulo de la crisis económica del Antiguo Régimen en España", *Agricultura y sociedad*, (enero-marzo 1978), págs. 283-316; LLOPIS AGELAN, E.- "Las explotaciones trashumantes en el siglo XVIII y primer tercio del XIX: la cabaña del monasterio de Guadalupe, 1709-1835", en ANES, G., ed.- *La economía española al final del Antiguo Régimen. I-Agricultura*, Madrid, 1982, págs. 1-101 y GARCIA MARTÍN, P.- *La Ganadería Mesteña en la España Borbónica (1.700-1.836)*, Madrid, 1.988. Asimismo algunos trabajos clásicos sobre el tema aparecen en la recopilación de GARCIA MARTIN, P. y SANCHEZ BENITO, J. M., comps.- *Contribución a la historia de la Trashumancia en España*, Madrid, 1.986

<sup>626</sup> LLOPIS AGELAN, E.- "El agro extremeño en el Setecientos: crecimiento demográfico, "invasión mesteña" y conflictos sociales", en V.V. A.A.- *Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la España del siglo XVIII*, Madrid, 1989, págs. 267-290

<sup>627</sup> GARCIA MARTÍN, P.- *La Ganadería Mesteña*, p. 66. Sobre la problemática general de la ganadería en Extremadura, el interesante trabajo de ZAPATA BLANCO, S.- "Contribución al análisis histórico de la ganadería extremeña", en *Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano*, Cáceres, 1979, págs. 825-851



situación es especialmente destacada en la comarca de la Serena, ya que estas oligarquías locales han conseguido de la Corona la reserva de la tercera parte de los pastos de la Real Dehesa, preferentemente los situados más cerca de los pueblos y los más aptos para labor, ya que pueden cultivar la décima parte de lo así asignado.

En 1744 comenzó un gran proceso de movilización de la propiedad de los pastizales de la Serena, al proceder la monarquía a la enajenación de la Real Dehesa, cuya extensión superaba las 121.000 Has. La causa para esta auténtica "pre-desamortización" fue, como no podía ser menos, de orden fiscal, constituyendo uno de los más importantes recursos extraordinarios a los que se vio abocada una hacienda en situación de déficit crónico, en esta ocasión agravado por la guerra que mantuvo con Inglaterra entre 1738 y 1746.<sup>628</sup>

Felipe V <sup>629</sup> debido a los "justos motivos con que se hallaba empeñado el honor de la corona y gloria de la nación en la guerra que sostuvo en los vastos dominios de la América contra los enemigos de la corona, sus armadas y fuerzas... todo a esfuerzo de costosos armamentos en que se habían consumido considerables porciones de las rentas de estos reinos, necesarios igualmente para su conservación y libertarlos de semejantes invasiones y para no abandonar los medios de defensa necesarios a tan importantes fines ni causar nuevo detrimento en las vasallos gravándoles con nuevas contribuciones, resolvió S.M. vender en propiedad la Real Dehesa de la Serena, que le pertenecía como administrador perpetuo de la Orden de Alcántara, con todos los frutos, derechos y aprovechamientos de bellota, agostaderos, diezmo, servicio y montazgo y demás ramos que se arrendaban con los de la Mesa Maestral y su Tesorería". Al ser consideradas las propiedades de las Ordenes Militares bienes eclesiásticos, era necesaria la autorización papal para proceder a su enajenación, concedida por el Breve pontificio de Benedicto XIV de 5 de marzo de 1744.

Por otra parte, para facilitar las condiciones de enajenación, la monarquía pactó con las localidades de la zona la cesión de sus derechos de pasto, y así el 13 de abril de 1744 se celebró escritura de concordia entre S.M. y los pueblos de la Dehesa de la Serena, "quienes hicieron

---

<sup>628</sup> DOMINGUEZ ORTIZ, A.- *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, Barcelona, 1.976, p.211 y 286, adelantó, con su característico conocimiento de los archivos, esta importante enajenación de propiedades reales, de tanta trascendencia en la historia extremeña. Recientemente ha sido objeto de estudio detallado: HERNÁNDEZ BENITEZ, M.- "El desembarco de los nuevos mesteños en Extremadura: la venta de la dehesa de la Serena y las transformaciones de la trashumancia, 1744-1770", *Historia Agraria*, nº 27 (2002), págs. 65-99

<sup>629</sup> Todo el proceso de enajenación de la Serena y la compra por el ayuntamiento madrileño aparece recogido en la escritura de compraventa. AVM-S, 3-35-1

cesión y traspaso a favor de S.M. y de la corona de la acción o posesión que tenían a pastar los ganados de los vecinos en los ciento y dos millares de ancho y baldío de la Real Dehesa de la Serena desde el expresado día quince de marzo hasta el día de San Miguel, 29 de septiembre, de cada un año libremente y desde este día hasta el de San Lucas, 18 de octubre, pagando sólo el derecho que llaman llantar y aguas de la Mesa Maestral del mismo partido, de forma que quedaron los invernaderos cerrados hasta el día 15 de abril de cada año".

Con todas las autorizaciones ya pactadas, un Real Decreto de 25 de abril de 1744 ordenaba se procediese a la venta de la Dehesa de la Serena, "liquidándose su valor anual por quinquenio, y por los demás medios que parecieran y aseguraran su legítimo precio, teniendo consideración en cuanto a los pastos por haberse de entender cerrados hasta el día quince de abril de cada un año, porque antes sólo lo era hasta quince de marzo y que con esta calidad debería arreglarse el capital de las ventas, haciéndose éstas en pública subastación".

El conjunto de esta enorme propiedad comprendía 243,5 millares de cuerda,<sup>630</sup> de los cuales 117 millares y un cuarto eran de agostadero abierto y los 126 millares y cuarto restantes de agostadero cerrado. Los pastos de invierno fueron tasados a un 2% ("50.000 el millar") del valor de la propiedad, y el resto de los aprovechamientos (agostadero, bellota, servicio y montazgo y diezmos) entre un 2,5 y un 2% ("40.000 y 50.000 el millar"). Con lo cual, "siendo el número de millares 243,5 de cuerda y el precio de las yerbas de invernadero cerrado hasta mediados de abril 4.500 rs de vn cada uno, anualmente importaba el todo 1.095.750 rs de renta, y el principal de ella al respecto de 50.000 el millar, 54.787.500 rs de vn, que corresponderían a cada millar 225.000 rs de capital, sobre cuyo pie se habían de hacer las postura y ventas... Y por lo respectivo a los agostaderos cerrados, según las relaciones de hacinamientos que se dieron por la Contaduría mayor de las Órdenes, se dio de valor a cada uno de los millares por razón de agostaderos 287.024 mrs de vn".

Por Chirógrafo de 25 de marzo de 1751 el Papa confirmó las anteriores facultades para la enajenación de la Dehesa de la Serna, ampliándolas a la venta de las demás dehesas pertenecientes a las tres Ordenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara.

---

<sup>630</sup> El origen de la medida denominada "millar" se encuentra en la superficie equivalente al terreno necesario para el pasto de 1.000 cabezas de ganado ovino, y por tanto su capacidad es variable según las condiciones del terreno. Sin embargo, en esta escritura los millares se refieren a "cabezas de medida de cuerda", equivaliendo entonces cada cabeza a una fanega (= 0,5 Has), por lo que 1 millar = 500 Has. Cfr. GARCIA MARTÍN, P. - *La Ganadería Mesteña*, p. 245

El interés de la Villa en estos pastos se manifiesta en 1764, fecha en que, cumplidas las instrucciones para la inversión de lo pagado por la expropiación de tierras en los Montes de El Pardo, quedaban líquidos en las arcas locales más de 3.000.000 de rs. Consideró "el Ayuntamiento que Madrid conseguiría visible utilidad y beneficio en que parte del citado caudal se invirtiese y emplease en la compra de yerbas de la Real Dehesa", por lo que el 11 de agosto de 1764 presentaba postura a los pastos de invernada de 8.964 cabezas y media de medida de cuerda sitas en la suerte de Cabeza de Buey (entre las localidades del mismo nombre y Castuera), ofreciendo 4,5 rs por cada cabeza de millar en renta, el 2% de capital en venta.

Las condiciones que se fijaban eran las mismas con que se habían realizado las demás enajenaciones de la Dehesa de la Serena. En concreto, se citan en la escritura las ventas a favor de la marquesa de Perales, la duquesa viuda del Arco, D. Miguel Herrero de Espeleta, D<sup>a</sup> Manuela Muñoz de Tovar y D. Ambrosio Josef de Negrete. Todos ellos habían conseguido que el traspaso de la Dehesa de la Serena se hiciera libre de cualquier tipo de carga y gravamen, fundamentalmente juros, condición fundamental en tierras procedentes del patrimonio de la corona: "habían de quedar absolutamente libres las referidas yerbas de todos los juros de recompensa e irredimibles y otros cualesquiera créditos y gravámenes mercenarios o de justicia a que pudieran estar afectos todas las dehesas de Maestrazgos y sus aprovechamientos, porque la Real Hacienda había de ser responsable". En suma, concluye Le Flem, unas condiciones "draconianas y casi exorbitantes para asegurarse la propiedad llana de las yerbas adquiridas, aprovechando en sus estrategias los apuros de un Estado hambriento de recursos financieros".<sup>631</sup> Admitida la postura, se pregonó en Madrid, Soria, Segovia, Cuenca y Villanueva de la Serena. Al no existir mejora, se procedió al remate, aprobado por Real Orden de 24 de noviembre de 1764.

La Contaduría de la enajenación liquidó el precio de las hierbas de invernada de las 8.964,5 cabezas "y resultó ser su renta anual al respecto de 153 mrs cada cabeza 1.371.568,5 mrs, y su capital en venta, regulado a 50.000 el millar, 688.578.425 mrs, que hacen 2.017.012 rs - 17 mrs de vn, cuya cantidad se allanó a satisfacer la parte de Madrid". Ésta, en efecto, otorgó carta de pago el 29 de marzo de 1765. Los nuevos pastizales de Madrid se extendían por los millares de El Cuervo, Ibañez (1011,5 cabezas) y Miguel Río (1016,6 cabezas); por los quintos (mitad de un millar) de Abrigosas, Hinojosa, Pizarra, Cabrito, Cerro Gordo, Tejoneras (505 cabezas) y Bachiller (500,5 cabezas), y por posesiones de distinta cabida como Tiesa la Cabra (840

---

<sup>631</sup> LE FLEM, J. P - "El valle de Alcudia en el siglo XVIII", en *Congreso de historia rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1.984, p 247.

cabezas), La Cabrilla (741 cabezas) y las 850 cabezas restantes, distribuidas por el quinto de Peñalobosa, majada del mismo nombre y millar de Villar Alto.

De esta forma, el Ayuntamiento de la capital se había hecho con un terreno de ricos pastos. Para la Real Hacienda la operación tuvo la virtualidad de ahorrarle el desembolso de 2.000.000 de rs a favor de la Villa de Madrid. Para ésta suponía la adquisición de una tierra de importante rentabilidad y muy codiciada por los conspicuos ganaderos trashumantes residentes en ella. Que esto no era cuestión baladí lo demostrarían los arrendamientos de la finca en la segunda mitad del siglo XVIII, cuestión que paso a estudiar a continuación.

### 3.2 - ARRENDAMIENTOS EN LA DEHESA DE LA SERENA, 2ª MITAD DEL S. XVIII

Si bien en la escritura de venta se tasaba la renta anual de cada cabeza de medida de cuerda en 4,5 rs, en los arrendamientos que comienzan a hacerse tras el traspaso de la propiedad a Madrid (y que no son mas que la continuación de los ya existentes), el precio anual oscila entre los 4,5 y los 6 rs que se pagaban por cada cabeza del quinto de Cerrogordo y la mitad del millar de Ibañez. En conjunto, las 8.964,5 cabezas tenían un precio de arrendamiento de 44.474,5 rs al año. Tal cantidad no se modificó a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, lo que en un período de fuerte subida de la renta de la tierra como éste supone una depreciación obvia. La causa se encuentra en los abundantes privilegios dictados a favor de los ganaderos mesteños, entre los que se encuentra la tasa máxima de 6 rs por cabeza en los pastos extremeños. Posteriormente, cuando el alza de la renta de los pastos venza los obstáculos legales acumulados durante siglos, tampoco las autoridades municipales sabrán -¿o querrán?- sacar provecho de la situación. En efecto, se limitan a prorrogar automáticamente los arrendamientos ya hechos, con idénticos precios y condiciones. De esta forma dejaron pasar una gran oportunidad para rentabilizar tan importante inversión.

El primer problema que se plantea a la nueva posesión de Madrid -común a todos los nuevos propietarios que han adquirido una parte de la Real Dehesa enajenada- es la fijación de la 3ª parte que quedaba reservada a los naturales de los lugares colindantes. La nueva parcelación a que daban lugar las ventas obligaba a nuevos repartos, lo que terminó provocando un pleito entre los habitantes de las 18 villas que componían el Partido de la Serena y los compradores

(trashumantes en su mayoría). Tal reparto tenía importancia para la explotación del territorio, pues la exclusión de los ganaderos trashumantes en este terreno era total, y ello por la compatibilidad entre el pasto continuado de los ganados riberiegos y la explotación agraria de parte de estas posesiones: "está mandado que los pastos de dicha tercera parte sólo los pueden aprovechar como ganado riberiegos, por ser los únicos que sirven a estercolar las tierras de labor a las primaveras y otoños".<sup>632</sup>

En la determinación de la 3ª parte de la propiedad madrileña para los vecinos de Cabeza de Buey se aprecia claramente la manipulación llevada a cabo por la oligarquía local, que gracias a su control de los aparatos de poder se asegura el disfrute de los pastos y labranzas en situación privilegiada. En este caso a través de la figura de D. Francisco Calvo de la Monja, diputado o apoderado de las villas del Partido de la Serena y a quien el gobernador de Villanueva de la Serena y subdelegado del Juez conservador denominaba "caviloso", al tiempo que advertía que "con supuestos falsos muy propios de su genio y travesura sindica mi conducta".

La actuación de Calvo de la Monja fue muy destacada en Cabeza de Buey, donde residía, consiguiendo reservarse para sí y su familia los pastos de 3ª parte de la propiedad de la Villa madrileña. Así lo denunciaron entre 1769 y 1770 Francisco Solana, Francisco Antonio Solana y Manuel Bravo de Medina, labradores y ganaderos de dicho lugar, que afirmaban que Calvo, asociado con otro ganadero, Martín Gómez Bravo, había fijado las posesiones de 3ª parte en función de sus propios intereses, reservándoselas "para sí, sus hijos y paniaguados": "D. Martín Gómez asociado con el apoderado D. Francisco Calvo Monja pasaron a Villanueva y maliciosamente excluyeron mi posesión y la de doña Matea de Salcedo de dicha 3ª parte y introdujeron posesiones que no tienen un palmo de labor por ser todas las que asignaron posesiones de ellos el dicho Monja, sus dos hijos y otros primos hermanos de sus mujeres, de forma que toda la asignación respectiva a la Villa ilustre se repartió entre ellos mismos".<sup>633</sup> Lo cierto es que el apellido Calvo va ser totalmente predominante en los arrendamientos de esta 3ª parte reservada a los vecinos de Cabeza del Buey, que además participan en un primer momento en el disfrute del resto de la finca madrileña.

La importancia de la ganadería en Cabeza de Buey aparece claramente recogida en esta descripción de la localidad en 1791: "Tiene 1.020 vecinos. De ellos 30 sacerdotes, 1 familiar de la Inquisición, 20 monjas, 70 granjeros labradores, 50 puros labradores y hortelanos, 200

---

<sup>632</sup>. - AHN - Consejos, leg. 568, exp. 6

fabricantes de paños y bayetas (bataneros, tundidores, tejedores prenseros), 400 pastores, 220 jornaleros, 38 artistas, 20 panaderos y 8 barberos y sangradores...Cabezas de ganado, por mejor prestarse el término a pastos que a labores, hay 86.000 lanares, 4.000 cabrío, 5.500 de cerda, 1.000 de vacuno y 150 del yeguar. Las lanas se venden a las potencias del norte y las demás para los abastos del Reino". <sup>634</sup>

Hasta 1772 hay una clara continuidad en el arrendamiento por parte de los ganaderos que los disfrutaban antes de la compra por parte de Madrid. Se aprecian ligeras variaciones en estos siete años, pero no se conserva una relación detallada de las escrituras de arrendamiento, que gestionaba directamente el administrador del propietario, residente en las cercanías. Lo que sí manifiestan diferentes relaciones es que los pastos están bastantes repartidos: en 1765 hay catorce arrendatarios, de los cuales sólo tres disponen de un millar de cabezas completo, siendo uno de ellos el duque del Infantado, que desaparece como arrendatario hacia 1770; el resto disponía normalmente de un quinto (250 Has). Destaca la importante presencia en los arriendos de vecinos de Cabeza del Buey, los riberiegos que no se limitan a esa 3ª parte que tienen reservada, sino que ocupan buena parte de la finca, mientras se observan algunos claros inequívocos trashumantes, como el conde de Lérida, vecino de Soria, o el marqués de Iturbieta, residente en Madrid.

A partir de 1770 se desata la pugna por el disfrute de estos pastos. El fondo que subyace es la gran demanda de pastos para ganados trashumantes en la Villa de Madrid, donde se concentraban los denominados "Señores Ganaderos Trashumantes de Madrid", la categoría más privilegiada de la Mesta durante el s. XVIII pues concentra a casi todos los más importantes de España, escasos en número pero ricos en disponibilidad de cabezas de ganado. La base legal que permitió esta lucha se encuentra en la Real Provisión sobre repartimientos de hierbas y bellotas de las dehesas de propios y arbitrios de los pueblos de Extremadura, de fecha 3 de noviembre de 1767. Por ella se ordenaba la tasación de los aprovechamientos de este tipo de dehesa, "y por el importe de ella se reparta entre los vecinos de cada pueblo atendiendo mucho a los labradores y a prorrata para que a todos llegue el beneficio hasta donde alcanzasen los pastos... prefiriendo por

---

<sup>633</sup> AHN - Consejos, leg. 50. 180

<sup>634</sup> AGUNDE FERNANDEZ, A.- *Viaje a la Serna en 1.791. Historia de una comarca extremeña escrita tras los pasos del magistrado Cunebles*. Cáceres, 1.955, p. 84

el tanto a los de los pueblos que fuesen comuneros o cercanos y en su defecto a los más inmediatos".<sup>635</sup>

Un ganadero trashumante vecino de Madrid, Juan Manuel Tentor, supo aprovechar la oportunidad que esta medida legal presentaba. Así, amparándose en que la dehesa de la Serena en Cabeza de Buey pertenecía a los propios de Madrid y como vecino de ésta tenía preferencia en su arrendamiento a los que no residieran en la Villa, pidió el desahucio de D. Martín Gómez Bravo, vecino de Cabeza del Buey, que tenía arrendados a Madrid 850 cabezas de medida de cuerda. No contento con esto, también procedió a solicitar el desahucio del conde de Lérida, vecino y regidor perpetuo de Soria y hermano del Honrado Concejo de la Mesta. A él se le unió D. Josef Pacheco y Verlade, vecino y regidor perpetuo de Madrid, también ganadero trashumante, demandando el desahucio del extremeño Juan López Redondo. Pacheco, a pesar de toda la legislación que desde la Edad Media venía prohibiendo el arrendamiento de los bienes de propios por los regidores de la localidad, se encontraba disfrutando ya dos quintos de la posesión madrileña.

Los afectados recurrieron estas peticiones, dirigiéndose en primer lugar a la Junta de Propios de Madrid, que pidió informe al procurador personero. Éste se mostró totalmente contrario a las pretensiones de Téntor, afirmando que no habían sido éstas las intenciones de los legisladores: "No era este desahucio conforme al verdadero espíritu de la Real Provisión sobre el repartimiento de hierbas y bellotas de las dehesas de propios y arbitrios de los pueblos de Extremadura, pues aunque en ella se mandaba que los pastos de hierba y bellota se repartiesen entre los vecinos de cada pueblo (atendiendo mucho a los labradores), era relativo a aquellos que viven en los respectivos donde existen los Propios, y no extensivo a los que no los habitasen, en competencia de aquellos o de los más convecinos aunque tuviese la cualidad de serlo del pueblo dueño de los propios".

En el desarrollo de este expediente se mostró interesado el mismo Vicente Paíno, diputado de Extremadura famoso por su tenaz oposición a los privilegios de la Mesta, ya que Tentor pretendía obtener la vecindad en la villa extremeña de Mestanza, lo que le daría una privilegiada situación a la hora de arrendar y disfrutar los pastizales. A esta pretensión se había opuesto Paíno, por lo que solicitó una copia de este expediente para sus trámites legales.

---

<sup>635</sup> AVM - S, 3-34-3

Finalmente fue el Consejo de Castilla el que resolvió definitivamente el asunto decretando el 20 de julio de 1772 "que Madrid puede arrendar libremente dichos quintos aunque estén en la jurisdicción de Cabeza de Buey respecto de los vecinos de esta Villa, pero en cuanto a los vecinos de Madrid debe preferirlos a otros cualesquiera, y éstos en calidad de dueños tienen derecho de poder desahuciar en tiempo y forma a cualesquier arrendadores extraños a fin de ocupar los pastos con sus ganados propios". Por su parte, a los vecinos del Partido de la Serena se les reservaba la tercera parte de los pastos enajenados.

Mientras se resolvían los trámites legales, en 1770 se procedía al desalojo de todos los ganaderos que pastaban en las dos terceras partes de libre disposición por Madrid y que no eran vecinos de la Villa. Entre los afectados aparecen dos ganaderos mesteños sorianos: el conde de Lérida, regidor perpetuo de la ciudad de Soria que tenía arrendados un millar (el quinto de Tejoneros y mitad del millar de Ibañez) y Antonio García, vecino de la Cuesta de Yanguas, pastor propietario del ganado trashumante que ocupaba el quinto del Cerrogordo. Pero lo más destacado era la importancia de los vecinos de Cabeza del Buey, que habían podido reservarse la mayor parte de los terrenos madrileños gracias sin duda a los "buenos oficios" desarrollados por Calvo de la Monja y demás poderosos de la localidad. En la lista de afectados encontramos a los siguientes vecinos de Cabeza del Buey: d. Juan López Redondo, presbítero y comisario del Santo Oficio de la Inquisición; d. Juan Antonio Morillo, familiar del Santo Oficio; d. Martín Gómez Bravo, regidor por el estado noble en el ayuntamiento de la localidad y los miembros de la familia Calvo Rayo (Juan Francisco el Mayor, Juan Lorenzo y Francisco el menor). La posición predominante de esta familia es clara, ya que prácticamente monopolizaban a su vez el disfrute de la 3ª parte de la posesión reservada. Con tales bases económicas no es de extrañar su posición privilegiada en los mecanismos de poder local, como se aprecia en la composición del Concejo de Cabeza de Buey en este mismo año de 1770: d. Francisco Antonio Calvo y Cabanillas era uno de los dos alcaldes ordinarios del pueblo, Juan Calvo Rayo era regidor por el estado noble, mientras que Manuel Calvo era procurador síndico y general del común de vecinos y Francisco Calvo ocupaba el cargo de síndico personero. El esquema de funcionamiento de poder económico-control del concejo característico de las oligarquías locales aparece de manifiesto con toda su crudeza en el caso de la familia Calvo y en Cabeza de Buey en la segunda mitad del s. XVIII.

En suma, los trashumantes madrileños se impusieron a los intereses ganaderos locales en la pugna por los pastos que cruza todo el s. XVIII, manteniendo la ocupación del suelo por los



ganados trashumantes frente a los rebaños riberiegos. Quedaba pendiente la cuestión de repartir estos pastos entre los ganaderos madrileños. A Tentor y Pacheco se les había unido como solicitantes el marqués de Iturbieta (arrendador de dos quintos) y d. Alejandro de Vallejo, caballero de la orden de Santiago, que expresaba hallarse "con más de tres mil cabezas de ganado y no tener pastos algunos míos propios ni aun arrendados". Todos ellos eran partidarios de su prioridad en el arrendamiento al haber sido los primeros en reclamarlo. Postura contraria adoptó la Junta de propios el 19 de septiembre al acordar la pública subasta. Tentor recurrió ante el Consejo, pidiendo "se haga el citado repartimiento entre los que hemos pedido pastos y que sea el precio de la tasa, y sólo en el caso de haber sobrantes se saquen a subasta", lo que dio como resultado un decreto del Consejo de Castilla el 6 de octubre de 1772 que ordenaba que el repartimiento se hiciese con arreglo a la Real Provisión de 26 de mayo de 1770, cuyos apartados 11 y 12 negaban la pública subasta para el ramo de pastos.<sup>636</sup>

El nuevo panorama de los arrendamientos de las dos terceras partes de la Dehesa de la Serena a partir de 1772 se presenta en el cuadro 21.

---

<sup>636</sup> Todo el proceso de reclamación de pastos y deshaucios en AVM-S, 3-34-5 y AHN- Consejos, leg.568-exp.6

**CUADRO 21- ARRENDAMIENTOS EN LA DEHESA DE LA SERENA, 1772**

POSESION (QUINTOS)	EXTENSION (CABEZAS)	ANTIGUO ARRENDATARIO	NUEVO ARRENDATARIO	RENTA RS/CAB
TEJONERAS	505'5	CONDE DE LERIDA	JOSE PACHECO	3'25
LA CABRILLA	741	JUAN FERNÁNDEZ ROMERO		4'75
BACHILLER	1005'5	JOSE PACHECO		5
CABRITO				
MIGUEL RIO	505'5	JUAN LOPEZ REDONDO	JUAN MANUEL TENTOR	5'25
PIZARRA	500	FRANCISCO CALVO RAYO		5'25
VILLARALTO	850	MARTÍN GOMEZ  BRAVO		5
MITAD IBAÑEZ	505'75	JUAN GONZALEZ MORILLO	ALEJANDRO VALLEJO	5'25
TIESA DE CABRA	357	FRANCISCO CALVO RAYO		4'5
CERROGORDO	500	MARQUES DE ITURBIETA	MARQUES DE ITURBIETA	6
MITAD IBAÑEZ	505'75			

FUENTE: AVM-S, 3-34-5

En él se aprecia que tan sólo cuatro trashumantes madrileños controlaron todos los arrendamientos: d. Josef Pacheco (regidor perpetuo de la Villa), con 2.252 cabezas; d. Juan Manuel Tentor en 1.855,5 cabezas; d. Alejandro Vallejo, con 862 3/4 cabezas y el marqués de Iturbietta con los restantes 1.005-3/4 cabezas. La renta permaneció estable con respecto al

arrendamiento anterior, oscilando entre los 4,5 rs/cabeza de la posesión de Tiesa de Cabra y los 6 rs/cabeza que pagaban por el quinto de Cerrogordo y la mitad del millar de Ibañez el marqués de Iturbia. El período de arrendamiento se extendía a 6 invernadas, comenzando a contar desde la siguiente a partir del 1 de octubre de 1773 hasta el 1 de abril de 1778. Entre las condiciones de arrendamiento que se recogen en las escrituras destaca la segunda: "si esta Villa de Madrid se hallase con ganados suyos propios en algún tiempo, ha de quedar a su arbitrio introducirlos en los referidos quintos para su pasto, cesando por consiguiente este arrendamiento desde el día mismo en que esta Villa avise al sr. d.-----, quien ha de renunciar desde luego al derecho y reclamo de la tasa respecto la justa regulación que se ha hecho de dichos quintos". Esto es, en la década de 1770, en plena coyuntura alcista de la trashumancia - y también de los intentos de frenar sus privilegios en Extremadura y entre los ilustrados - el ayuntamiento de la capital se planteaba la posibilidad de disponer de su propia ganadería trashumante –o vinculada al abastecimiento urbano-, reflejando así el gran interés que en Madrid existía por la propiedad de merinas, como también lo demuestra el hecho de que las más potente compañía mercantil de la Ciudad, los Cinco Gremios Mayores, intentaran comprar la cabaña del monasterio de Guadalupe.<sup>637</sup>

Gracias al control de la propiedad de Madrid, estos ganaderos consiguen evitar una de las principales amenazas para la rentabilidad de las explotaciones mesteñas, la escasez de pastos de invernada ante el aumento de la demanda de tierras en Extremadura procedentes de diversas fuentes: los propios trashumantes, los ganaderos riberiegos locales y los agricultores. Como afirma Enrique Llopis "el problema para los mesteños no residía en el encarecimiento de los pastos, sino que radicaba en las enormes dificultades para conseguir nuevas posesiones que les permitiesen sustentar un mayor número de rebaños. Sin duda, a medida que los beneficios de la actividad trashumante se incrementaban, cada vez eran más los ganaderos que pretendían ampliar su explotación".<sup>638</sup>

Estos propietarios de merinas forman un núcleo cerrado que defiende su posesión privilegiada de los pastos, con clara connivencia de las autoridades municipales (no hay que olvidar que uno de ellos es regidor). Así, las solicitudes de otros ganaderos madrileños para que se procediese a un nuevo reparto fueron desatendidas. Es el caso del conde de Villa Paterna en 1772 y 1791; D. Gaspar de Montoya, caballero de la orden de Alcántara en 1789 y de D. Juan

---

<sup>637</sup> AVM-C, 3-86-4

<sup>638</sup> LLOPIS AGELAN - "Las explotaciones trashumantes", p.51

Diego Duro y Solano, canónigo de Cuenca en 1791.<sup>639</sup> Quien sí consiguió incorporarse a este grupo fue el conde de Montarco, miembro del Consejo de Castilla, Fiscal del Consejo de Hacienda y de la Junta de Comercio y uno de los más destacados ganaderos trashumantes madrileños. En 1782 y 1783 exigió el disfrute de pastos para su cabaña, que cifraba en más de 22.000 cabezas. Un informe de 9 de abril de 1783 de los comisarios de propios y del personero del común, tras analizar la legislación sobre arrendamientos de propios, concluía: "entienden los informantes que este contrato fue nulo, de ningún valor ni efecto, que debe declararse así", debiendo procederse a un nuevo arrendamiento. Esto suponía acabar con los privilegios de los cuatro arrendatarios, que se apresuraron a llegar a un acuerdo con Montarco, cediéndole dos quintos y echando así tierra sobre el asunto. El conde consiguió otros dos quintos de estos pastos en 1790 al hacerse con los que tenía arrendados D. Juan Manuel Tentor, que vendió su cabaña a ganaderos no vecinos de Madrid. Con esto, el conde Montarco disfrutaba más de 2.500 cabezas de medida.<sup>640</sup>

Únicamente en 1792 se cuestionó la renovación automática de arrendamientos que se venía realizando hasta entonces. Fue el personero del común quien comunicó al ayuntamiento que "siendo notorio el aumento de precio que han tomado las yerbas y que las correspondientes a Madrid en dicha dehesa están arrendadas por el valor antiguo, no puede menos de manifestar a VSI debe hacerse el correspondiente recurso a la superioridad para que se tasen en forma y según lo que resulte de tasa se proceda a los arrendamientos, como que de otro modo se perjudican notablemente los propios". La Junta de propios inició el desahucio de los arrendamientos, solicitando todos los interesados su prórroga.<sup>641</sup> El asunto se detuvo, pues en 1797 el mayordomo de propios informaba que los pastos de la Dehesa de la Serena seguían siendo disfrutados sin que se hubiesen renovado las escrituras de arrendamiento correspondientes, con la excepción del conde de Montarco.<sup>642</sup>

Este status quo se mantuvo hasta los últimos años del s. XVIII, cuando entró en liza uno de los personajes más poderosos de la capital, el duque del Infantado. Esta casa nobiliaria destacaba como uno de los principales propietarios de ganado trashumante de toda España.

---

<sup>639</sup> AVM-S, 3-35-2, 8, 11 y 13

<sup>640</sup> AVM-S, 3-35-5 y 11

<sup>641</sup> AVM-S, 3-35-13

<sup>642</sup> AVM-S, 3-221-24

Según los datos del Catastro de Ensenada, a mediados del s. XVIII disponían de un total de 36.000 cabezas, la segunda cabaña en importancia de los propietarios residentes de la Villa.<sup>643</sup> En 1780-81 su riqueza pecuaria seguía siendo impresionante: 30.574 merinas, a lo que hay que añadir el ganado cabrío, vacuno, yeguar y mular, formando una cabaña que superaba las 33.000 cabezas.<sup>644</sup>

La iniciativa para controlar la Serena partió del propio duque en un momento en que las explotaciones mesteñas atravesaban graves problemas de rentabilidad -y aún de subsistencia- ante el descenso de la disponibilidad de pastizales debido a las roturaciones frente a una demanda en constante ascenso. Según exponían sus apoderados, el duque "se hallaba, como era notorio, con una crecida cabaña de ganado fino sumamente escasa de pastos por haberle desahuciado y roturado la mayor parte de posesiones que gozaba en la Extremadura". Ello le obligaría a buscar una solución de emergencia recurriendo a los terrenos de pasto de su propiedad (dehesas y cercas) situados en las provincias de Guadalajara y Madrid (en la comarca del Real Manzanares), lo que suponía que sus ganados abandonarían todo el circuito de la trashumancia y se estabularían.

Esta propuesta resultaba un formidable instrumento de presión sobre la Villa de Madrid -lo que a buen seguro sabían muy bien los apoderados ducales- pues afectaba a terrenos que eran arrendados por la administración del abasto de carne a la ciudad. Y este era un aspecto de gran importancia en el Madrid de fines del s. XVIII. Los responsables municipales de la administración de este ramo encontraban cada vez más dificultades en asegurarse las pasturas necesarias, por lo que la amenaza del Infantado surtió efecto. Se refería concretamente a cinco dehesas situadas en la Alcarria (Espinosa, Tejer, Heras, Majonar y Maluque) y dos cercas en el Real de Manzanares (Navalcaire y El Serrano), con una capacidad global de 4.000 carneros en invierno y 860 reses vacunas durante todo el año, que el abasto madrileño venía arrendando sucesivamente desde 1744. Para mantener a Madrid en el provechamiento, los apoderados del duque proponían que la Villa le arrendase los millares de libre disposición de la Dehesa de la Serena, aprovechando para denunciar el secretismo y manipulación con que se habían alquilado anteriormente, pues era disfrutada por "ganaderos trashumantes vecinos de Madrid sin que S.E

---

<sup>643</sup> MATILLA TASCON, A.- "El primer catastro de la Villa de Madrid", *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Tomo XIX, nº 20(1.961), p. 513

<sup>644</sup> GARCIA MARTÍN, P. - *La Ganadería Mesteña*, p. 413

(el duque) como él hubiese tenido disfrute alguno de ellos con sus ganados ni aun noticia de los arrendamientos que se hubiesen hecho o si se habían sacado como propios anualmente a pública subasta"

De esta forma el duque del Infantado se hizo con el arrendamiento de las 5.560 cabezas de la Dehesa de la Serena para su importante cabaña de merinas. El precio fijado fue de 6 rs/cabeza, "que es el establecido y corriente en Extremadura", con un importe global de 33.360 rs/año, lo que de hecho suponía una ligera mejoría con respecto a los arrendamientos antecedentes por cuanto que varios quintos estaban tasados por debajo de esa cifra. Lógicamente este contrato suponía el desahucio de los anteriores arrendatarios. Aún cuando su situación legal no era muy consistente (no renovación de los arrendamientos, que además se habían llevado a cabo sin salir a pública subasta, como correspondía a las fincas de los propios), el duque del Infantado se encargó de llevar a cabo y sufragar todas las medidas legales necesarias.<sup>645</sup>

En suma, durante casi medio siglo un reducido número de ganaderos trashumantes madrileños viven una situación doblemente privilegiada gracias a las tierras de propios de la Villa: por una parte aprovechan unos pastos cuyos precios de arrendamiento están estancados, por otra tienen asegurado su disfrute en un momento en que la solución agraria extensiva dada para responder a las necesidades de una población creciente sentaba las bases estructurales de la quiebra de la ganadería trashumante. Esta situación se agudizará durante la guerra de la Independencia para entrar en un proceso irreversible desde comienzos del s. XIX, que acabará con la disolución de la Mesta como institución privilegiada y con una profunda reconversión de la ganadería trashumante.

#### 4 – APEOS Y USURPACIONES: PROPIEDAD Y “ECONOMIA MORAL”

En 1744 la Junta de propios (integrada por el corregidor y dos regidores) enviaba la siguiente misiva a las localidades en las que había tierras municipales: “Mediante estar próxima la sementera y tenerse entendido que muchas personas se hallan intrusas en tierras de Madrid sin haber precedido arrendamiento ni pago de sus rentas, se acordó se escriban cartas generales a las justicias de los lugares en cuíos términos tiene Madrid tierras para que se fijen en éstos, a efecto

---

<sup>645</sup> AVM - S, 3 - 35 - 17 y 22

de que ninguna persona labre tierra alguna perteneciente a esta Villa sin haber precedido otorgar escritura de arrendamiento y pagado las cantidades que estuviese debiendo”.<sup>646</sup> Prueba de su nula efectividad es que 3 años después, en 1747 se manda otra carta en la que las amenazas han subido rotundamente de tono: “no lo ejecutando despacharé tropa que a costa de los deudores hagan la recaudación”.<sup>647</sup> Amenazas que no se cumplían pero que ponen de manifiesto el grave problema que tenía el ayuntamiento de Madrid para gestionar sus tierras de propios. En efecto, el arrendamiento sólo era una de las formas de aprovechamiento de las tierras de propios madrileñas: la *ocupación* era otra, en ocasiones tan importante o más que las fórmulas legales. Entre los factores que posibilitan su existencia y frecuencia podemos destacar la dispersión por un amplio número de términos municipales, la difícil determinación jurídica de muchas tierras (baldíos o comunales que son roturados y convertidos así en propios), junto con la ausencia de inventarios fiables y de vigilancia efectiva (escasa o nula presencia física sobre el terreno).

La actuación de las autoridades municipales irá encaminada a lo largo del s. XVIII a *asegurarse el control* de su patrimonio rústico, ya que en definitiva la propiedad no va a ser seriamente cuestionada. Para ello pondrán en juego toda una serie de medidas: legales para reivindicar las propiedades usurpadas, de conocimiento del territorio y reformas administrativas para asegurar una gestión más eficaz. Los medios más importantes para garantizar el control del patrimonio son las visitas o reconocimientos de términos por un lado, y los apeos por otro. El municipio intenta reafirmar con ellos tanto sus derechos de propiedad, amenazados por continuas intrusiones, como cobrar las rentas generadas sobre las tierras usurpadas.

Mediante las *visitas*, los regidores comisarios de propios o empleados municipales en los que habían delegado tal misión realizaban el reconocimiento de los términos en los que se enclavaban las tierras de los propios madrileños. Con frecuencia se procedía a su medida y deslinde, con asistencia de algún perito (campesino con experiencia) de la localidad en la que se encontraban, pero sin una proclamación solemne de los derechos de propiedad. Incluso se llegó a recurrir a que algún dependiente del ayuntamiento se desplazara a varios lugares “para averiguar secretamente quiénes eran los que tenían tierras pertenecientes a dichos propios labradas sin

---

<sup>646</sup> AVM-S, 3-8-1

<sup>647</sup> AVM-S, 3-115-11

arrendar”.<sup>648</sup> Fruto de las visitas era la regularización de las intrusiones, cobrando (si era posible) lo adeudado y firmándose nuevos contratos de arrendamiento.

El *apeo* de tierras es un acto administrativo y legal mucho más complejo. Nada mejor que dejar que lo defina el juez subdelegado del corregidor madrileño en la realización de un apeo general de los propios de la ciudad: “es aquel que con vista de documentos que califiquen su pertenencia o en su defecto de testigos que lo declarasen, con citación de partes y sin figura de juicio, sumariamente se controvierte y posesiona al de mejor derecho”.<sup>649</sup> Supone, por tanto, un acto jurídico para definir los derechos de propiedad. Se trata de una facultad que corresponde al corregidor de Madrid como “juez privativo de las rentas de propios de Madrid”, si bien lo habitual en el s. XVIII es que, debido a las múltiples ocupaciones de su cargo, proceda a subdelegar la tarea en regidores o empleados municipales.

La puesta en marcha del apeo comienza con la constitución de una comisión integrada por el juez subdelegado, un escribano, el agrimensor del concejo -que ha de realizar la medida de las tierras- y, dependiendo de su importancia, otros miembros como el asesor legal, representante de los derechos de la villa, el “tirador de cuerda”, etc. La comisión se establecía en la localidad donde se encontraban las tierras de propios, procediendo entonces a publicar los autos en los que se advertía la realización de un deslinde de las propiedades cuyos títulos habían sido localizados en el archivo. Se citaba asimismo a los titulares de las posesiones adyacentes para que estuvieran presentes y defendieran sus derechos. El juez nombraba los “prácticos apeadores” necesarios, normalmente vecinos del mismo pueblo y con frecuencia arrendatarios de tierras de propios, que se encargaban de señalar el emplazamiento de los terrenos y llevaban a cabo la fijación de los linderos. Una vez acotado el predio se procedía a señalar un plazo para que los afectados pudieran efectuar reclamaciones, al término del cual se aprobaba definitivamente el apeo. Las diligencias practicadas, los límites y medidas de las tierras y, en su caso, la división en parcelas, quedaban recogidos en el libro de apeo, que era formalizado por el escribano. Paralelamente se trataba con todos aquellos que hubiesen ocupado ilegalmente estas tierras, ajustándose el pago de los atrasos y la firma de escrituras de arrendamiento.

Los apeos realizados desde fines del XVIII ilustran, pues, la conflictividad social en torno a las tierras municipales. Junto con los apeos, los responsables de los propios fueron

---

<sup>648</sup> AVM-S, 3-84-9

<sup>649</sup> AVM-S, 3-42-7



perfeccionando los mecanismos de control, como determinadas reformas en los sistemas de gestión y administración o la creación de nuevos cargos que permitiesen un mejor conocimiento y vigilancia de los términos del ayuntamiento madrileño.

El primer apeo general fue el realizado por el regidor José de Noriega a finales del XVII. Su trascendencia ha sido ya analizada en el capítulo 3: el apeo se extendía tanto a las antiguas tierras de propios como a los baldíos arbitrados del Cuarto de Palacio (al menos a los que no habían sido enajenados previamente por la Corona), que a partir de entonces son considerados como una propiedad del ayuntamiento madrileño, sancionando así legalmente la conversión de antiguos baldíos o comunales en tierras de propios.

A comienzos del XVIII abundaban ya las denuncias por arrendamientos fraudulentos y roturaciones ilegales. La incorporación de tierras concejiles en el ensanche de la Zarzuela fue el detonante para investigar las ocupaciones en esta zona, encargándose de ello los comisarios de propios Juan de Bilbao y José Gómez de Pedrosa. Tras catorce meses de gestiones informaron en 1717 que en los términos de Majadahonda y Las Rozas “ha conseguido [el ayuntamiento] hallarse con 6.135 fgs de tierra más de las que antes tenía”.<sup>650</sup>

Hasta mediados del siglo hay un abandono de la vigilancia que se traduce en una amplia ocupación del terrazgo de propios.<sup>651</sup> Varios reconocimientos de este período muestran como al cabo de unos veinte años perdían vigencia los contratos conseguidos en las visitas, practicándose una usurpación de términos casi generalizada.<sup>652</sup> Para evitar tal estado de cosas, el corregidor Juan Francisco de Luján decidió realizar un apeo completo de las tierras de propios, subdelegando a tal fin en los regidores comisarios de propios y el procurador general.<sup>653</sup> No se llevó a cabo el apeo, sino tan sólo la visita de un empleado municipal a varias localidades, en la que se midieron 4.032 fgs, de las que casi la mitad (1.834 fgs) estaban sin arrendar.<sup>654</sup>

---

<sup>650</sup> AVM-S, 3-41-46

<sup>651</sup> En 1730, con motivo de un juicio de residencia se afirmaba que no constaba más reconocimiento ni visita de términos que la de 1716-17. AVM-S, 1-463-1. Sin embargo, hay testimonio de una visita del escribano Fernando de Llano en 1725 a las localidades de los Carabancheles, Alcorcón, Aravaca, Alcobendas, Fuencarral y Majadahonda, en la que descubrió un total de 5.851 fgs labradas ilegalmente. AVM-S, 3-41-51

<sup>652</sup> AVM-S, 3-41-52

<sup>653</sup> AVM-S, 3-75-22

<sup>654</sup> Las localidades visitadas fueron Vaciamadrid, los Carabancheles, Majadahonda, Las Rozas y Fuencarral. AVM-S, 2-414-15

En cambio, sí se hizo un apeo general a partir de 1768, gracias en buena medida al control que estableció la administración central. Ante las quejas del ayuntamiento sobre las continuas intrusiones en sus propiedades rústicas, una Real Provisión de 10 de septiembre de 1764 autorizaba al corregidor realizar un apeo de todas las posesiones municipales. Pero hubo que esperar otros 4 años para que el municipio madrileño se pusiera en marcha, comenzando la Junta de propios a debatir en 1768 las fórmulas para realizar el apeo. Ese mismo año el corregidor subdelegó la comisión contenida en la Real Provisión en Manuel Antonio Naranjo, oficial segundo de una de las Secretarías del Ayuntamiento. Con su nombramiento parece buscarse más una dedicación plena que garantice mayor efectividad. Junto al subdelegado, el escribano integró la “comisión de apeos”, a la que se incorporaría en marzo de 1771 el procurador personero como representante de Madrid, cargo al que renunciaría dos meses más tarde para ser sustituido por el mayordomo de propios. Por otro lado, el agrimensor, tirador de cuerda, azadonero para los mojones, peritos y demás personal necesario para la práctica de los deslindes serían contratados según las necesidades.

La comisión efectuó a lo largo de más de 20 años los apeos de todas las tierras de los propios de Madrid. Al tener que realizarse el reconocimiento de los títulos de propiedad, se plantearon numerosas complicaciones judiciales, pues algunas ocupaciones eran tan remotas y asentadas en el tiempo que las reclamaciones y discusiones legales se prolongaron durante años. Un ejemplo es el caso de la dehesa de Arganzuela: en 1792 persistían autos judiciales pendientes sobre la pertenencia de varios terrenos, cuando el apeo se había efectuado en 1770.

Es destacable el hecho de que el campo de actuación de la comisión se extendió también a las tierras comunales en los alrededores de Madrid, bien por su cercanía términos de propios, bien por estar disfrutadas por el abasto de carnes. Aunque esta actuación provocara reticencias del procurador personero en un principio, pronto desaparecerán ante las ventajas que reportaba al abastecimiento de carne.<sup>655</sup> En consecuencia, en 1782 se amplió la facultad al juez subdelegado para que procediese a realizar juicio de reintegración de las “tierras baldías y de común aprovechamiento” que se encontraban roturadas en el término del Congosto (Vaciamadrid).<sup>656</sup> Por otra parte, la comisión se hizo cargo de las numerosas denuncias que el abasto de carne hizo sobre roturaciones de términos públicos, cañadas y abrevaderos, aunque no consta resolviera este tema.

---

<sup>655</sup> AVM-S, 3-42-7

La comisión de apeos alargó sus trabajos entre 1768 y 1793. En un principio actuó diligentemente: en 1772 informaba haberse realizado los deslindes en los Carabancheles, Fuencarral, Las Rozas, Getafe, Humanejos, Fuenlabrada, Velilla de San Antonio, La Aldehuela, Vaciamadrid, Vicálvaro, los sotos de Salmedina, Porcal y Cuevas y Orillas, así como la dehesa de Arganzuela. Con anterioridad a la actuación de la comisión se conocían 6.039 fgs de labrantío y 1.807 de pastizales en estos términos, que se habían ampliado con otras 2.832 fgs de tierras de labranza (casi un 50% más) y 256 fgs del soto del Porcal. Añadíase el cobro de 161.484 rs en concepto de atrasos y la mejora en el precio de los nuevos arrendamientos.<sup>657</sup>

Pero la relajación de la vigilancia que venía ejerciendo el Consejo de Castilla (que recibía en un principio informes periódicos del trabajo de la comisión por medio del Contador General de Propios y Arbitrios), el oscurecimiento de los derechos de propiedad por la larga ocupación, junto con los “rendimientos decrecientes” que suponía pasar a apear numerosas propiedades pequeñas y diseminadas en las cercanías de Madrid, alargaron el trabajo de la comisión. Se unía el que los costes salariales eran elevados (unos 50.000 rs anuales) y el hecho de que ya se volvían a detectar intrusiones en las tierras apeadas. Por fin, los comisarios de propios decidieron reaccionar en 1790, presentando estos mismos argumentos para provocar una respuesta del ayuntamiento, mientras el procurador personero recurría a la ironía para afirmar del apeo que “al cabo de 24 años pudieran haberse hecho no sólo de los propios de Madrid, sino de la mitad del reino”.<sup>658</sup> Finalmente el Consejo decidió suspender sus trabajos el 23 de marzo de 1793.<sup>659</sup>

Durante la realización del apeo se tomaron medidas para mejorar el control de las tierras de propios madrileñas. En las localidades de Las Rozas y Carabanchel Bajo se nombraron guardas, que recibían como salario el disfrute de varias tierras.<sup>660</sup> Otra innovación administrativa fue la creación de la figura del visitador de propios, que se estudiará en el capítulo 9. Por último, también se reforzaron los mojones, que si en un principio eran de tierra o bien de tierra y piedras,

---

<sup>656</sup> AVM-S, 3-79-9

<sup>657</sup> AVM-S, 3-42-7. Sin embargo, varias de estas posesiones tuvieron que apearse de nuevo y las diligencias se alargaron.

<sup>658</sup> AVM-S, 3-44-15 y 3-44-11

<sup>659</sup> AVM-S, 3-8-28

<sup>660</sup> AVM-S, 3-42-3

a partir del apeo de Vaciamadrid, y debido a los constantes conflictos posesorios con el conde de Altamira -titular del señorío de dicha localidad- se hicieron de piedra, decisión ratificada por el Consejo en 1771.<sup>661</sup>

Frente a la política de control y ratificación de los derechos de propiedad del ayuntamiento madrileño, la *ocupación*, incesante, de los campesinos. La más mínima relajación del sistema de vigilancia municipal iba seguida de la generalización de las intrusiones: no mucho después de terminar un apeo que duró casi un cuarto de siglo, el visitador de propios informaba en 1807 que en los términos de Las Rozas y Majadahonda “labran diferentes vecinos... las tierras que les acomoda sin haber formalidad de escritura de arriendo”, una circunstancia que encontraba repetida por Vicálvaro, Velilla de San Antonio, Fuenlabrada...<sup>662</sup>

Para entender esta práctica de la usurpación, comencemos con los usurpadores. Son mayoritariamente campesinos, con frecuencia arrendatarios de las tierras de propios madrileños. La invasión del terrazgo limítrofe, cultivando una superficie mayor de la arrendada, es habitual. También ocupan tierras aquellos campesinos que no han arrendado previamente, pero que, una vez descubiertos, se suelen convertir en arrendatarios. Incluso aparecen casos de autodenuncia de los ocupantes para acceder a la categoría de rentero.<sup>663</sup> Esta situación de “asalto a los propios” no genera -en contra de lo que sería previsible- grandes conflictos internos: no se constatan denuncias de problemas o disputas entre los usurpadores por el disfrute de la tierra; tampoco la existencias de denuncias. El concejo aldeano debe, una vez más, regular este acceso al medio de subsistencia fundamental, imponiendo su capacidad coactiva.

La usurpación de los propios se revela por tanto como un *medio de acceso a la tierra*, facilitado por la ausencia de control administrativo. Un acceso que siempre existe la posibilidad de que resulte gratuito: entre los sucesivos reconocimientos del ayuntamiento, algunas intrusiones quedarían impunes. Por otra parte permite evitar la pública subasta, que podría provocar la concentración en un grupo reducido (los labradores acomodados) o una espiral de subida de la renta. La expansión de los cultivos sigue la lógica de la coyuntura, si bien hay que tener en cuenta la importante y continua demanda de bienes alimentarios que supone la cercanía de un mercado como Madrid. Se explica así que las intrusiones sean tan

---

<sup>661</sup> AVM-S, 3-42-6

<sup>662</sup> AVM-S, 3-17-25

<sup>663</sup> Por ejemplo, en 1791 los hermanos Jacinto y Nicolás Cantero se denunciaron voluntariamente para arrendar la tierra que estaban labrando en el arroyo de Atocha. AVM-S, 2-495-32

reiteradas y que su abandono se deba no sólo a factores coyunturales, que sin duda influyeron, también al agotamiento de unas tierras que en ocasiones son prácticamente marginales y en las que se intenta conseguir el máximo aprovechamiento.

En las ocupaciones ilegales de las tierras de propios se evidencia algo más que la búsqueda de la mayor rentabilidad posible (o de acceder a un medio de subsistencia); aparece una relación social. La intrusión en las tierras madrileñas la podemos interpretar como una forma de resistencia de clase del campesinado como grupo subordinado frente al grupo dominante, la oligarquía municipal que controla la tierra y, en consecuencia, se convierte en extractor de renta. Una resistencia que adopta la forma característica de las “armas de los débiles”, tal y como las ha analizado J. C. Scott: actos individuales o colectivos de resistencia cotidiana frente a los poderosos, en los que se evita una confrontación directa en la que hay mucho que perder, pero en los que se evidencian los límites de esta resistencia, por cuanto no se cuestiona la hegemonía de la clase dominante.<sup>664</sup>

La relación social entre campesinado y oligarquía va más allá de la resistencia que significa la ocupación, pues incluye toda una serie de obligaciones y formas de reciprocidad entre las partes que, recurriendo al célebre concepto de E. P. Thompson, definiré como “*economía moral*”.<sup>665</sup> Una economía moral en el sentido de que la interacción entre los grupos no se articula exclusivamente sobre la imposición de la hegemonía, sino también en una serie de concesiones mutuas, si bien de carácter asimétrico. De acuerdo con esta idea, podemos interpretar las actitudes y reacciones que muestran el campesinado y la oligarquía en torno a las tierras de propios madrileñas. Así, el primero no cuestiona en ningún momento la legitimidad de la propiedad madrileña, por más que en un tiempo más o menos remoto muchos términos tuvieran el carácter de comunales: apenas se recurre a pleitos o reclamaciones ante instancias gubernativas superiores; por el contrario se reconoce al ayuntamiento como interlocutor habitual; también lo pone de manifiesto la aceptación que hacen los campesinos de las deudas pendientes cuando se realizan apeos o reconocimientos, que se realiza sin resistencias. La desarticulación de la Tierra de Madrid y de su institución

---

<sup>664</sup> SCOTT, J. C.- *Weapons of the Weak. Everyday forms of peasant resistance*, New Haven, 1985

<sup>665</sup> Si Thompson centraba su influyente trabajo “La economía “moral” de la multitud de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII” en un modelo paternalista de abastecimiento de alimentos que chocaba con el nuevo modelo de “economía política” basado en el comercio libre, y en las actitudes y prácticas de las clases trabajadoras ante este problema, en “La economía moral revisada” amplía el campo de aplicación de este concepto. Véase su uso en un contexto ciertamente comparable al que yo hago, en la p. 387. Los dos textos aparecen recogidos en una obra imprescindible: THOMPSON, E. P.- *Costumbres en Común*, Barcelona, 1995

más representativa, los sexmeros, junto con el progreso de la desigualdad social interna, actuarían de factores que tendencialmente van erosionando a la comunidad campesina y por tanto su capacidad de articulación de la protesta y resistencia de sus integrantes. Por su parte, la oligarquía municipal, si bien con el objetivo de maximizar la explotación rentística de su patrimonio, practica también una actitud de concesión ante el campesinado, como lo evidencia su comportamiento en el caso de las usurpaciones: aunque obligue al reconocimiento de sus derechos y al ajuste de las cantidades pendientes, en la práctica muestran una actitud comprensiva en caso de dificultades campesinas por problemas coyunturales o situación de empobrecimiento, condonando deudas con frecuencia.<sup>666</sup> Actitud mantenida asimismo con campesinos en sus arrendamientos, renunciando habitualmente a reclamar por vía judicial las deudas campesinas (lo que no se hacía en el caso de otros bienes de propios) y optando por la negociación.

Algo estaba cambiando en esta relación a finales del XVIII. El énfasis del municipio madrileño en el apeo para actualizar sus derechos de propiedad, junto con la creciente intensidad en las ocupaciones campesinas, evidencian que este modelo de relación estaba cada vez más cuestionado. Por otro lado, la concentración de los arrendamientos en varias localidades en manos de los campesinos más acomodados situaba al municipio ante un nuevo interlocutor con el que negociar las condiciones de acceso a las tierras de los propios de Madrid.

---

<sup>666</sup> Un ejemplo entre otros muchos posibles: en 1749 los regidores comisarios de propios descubrieron una usurpación de tierras de propios en Velilla de San Antonio, constatando “haber sido bastantes los que desde el año 1729 acá han disfrutado parte de dichas tierras, y habernos informado no haber herederos ni bienes suyos, nos pareció no hacer diligencia alguna contra ellos”. AVM-S, 3-41-51

**CUADRO 22 - TIERRAS DE LOS PROPIOS DE MADRID A FINALES DEL S. XVIII**

<b>TERMINO DE MADRID</b>			<b>SUPERFICIE(FGS)</b>
DEHESA DE AMANIEL			698
DEHESA DE ARGANZUELA			256
PRADO DEL CORREGIDOR			37
SOTO DE MIGASCALIENTES			83
PUENTE DE TOLEDO			14
ERMITA DE SAN DAMASO			15
CAMINO DE GETAFE			11
ARROYO BAYONES			20
ARROYO ABROÑIGAL			23
VARIOS			21
<b>TOTAL TERMINO DE MADRID</b>			<b>1.178</b>
<b>TIERRA DE MADRID</b>	<b>TERMINO</b>		
FUENCARRAL	LAS JARILLAS	1.214	1.456
	VALFRÍO	186	
	OTROS	56	
FUENTE DEL FRESNO			700
PARACUELLOS	REGAJO	41	111
	ROMERAL	68	
	QUINTANA	2	
VICALVARO			523

RIVAS DEL JARAMA	SOTO DEL NEGRALEJO		766
VELILLA	SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS	155	524
	VEGA DEL SOTO	11	
	LOS TOMILLARES	358	
VACIAMADRID	SOTO DEL PORCAL	1.325	4.140
	CONGOSTO	104	
	PALOMAREJO	283	
	CALVARIO-CAMPILLO	1.893	
	SOTO DE SALMEDINA	535	
GETAFE	ARENALES	770	834
	LA ALDEHUELA	64	
TORREJON DE LA CALZADA	HUMANEJOS		137
FUENLABRADA	LORANCA		143
VILLAVERDE	PRADO LONGO		5
CARABANCHEL ALTO	LA CAÑADA	2.930	2.945
	ARROYO DE LAS PIQUEÑAS	15	
ALCORCON	ARROYO DE LA CANALEJA	105	116
	PRADO CARAQUE	11	
BOADILLA DEL MONTE			880
ARAVACA			676
MAJADAHONDA			239
LAS ROZAS	LABRANZA	1.875	3.912
	DEHESA DE LOS BARRANCOS	2.036	
<b>TOTAL TIERRA DE MADRID</b>			<b>18.106</b>



<b>FUERA DE TIERRA DE MADRID</b>			
SOTO DEL REAL	PRADO HERRERO		342
S. M. DE LA ALAMEDA	DEHESA DE LA CEPEDA		3.134
DEHESA DE LA SERENA			

FUENTES: CUENTAS DE PROPIOS (APÉNDICE 4) Y APEO GENERAL DE 1768 (AVM-S, 3-42-2 A 3-42-11)

### **INGRESOS Y GASTOS**

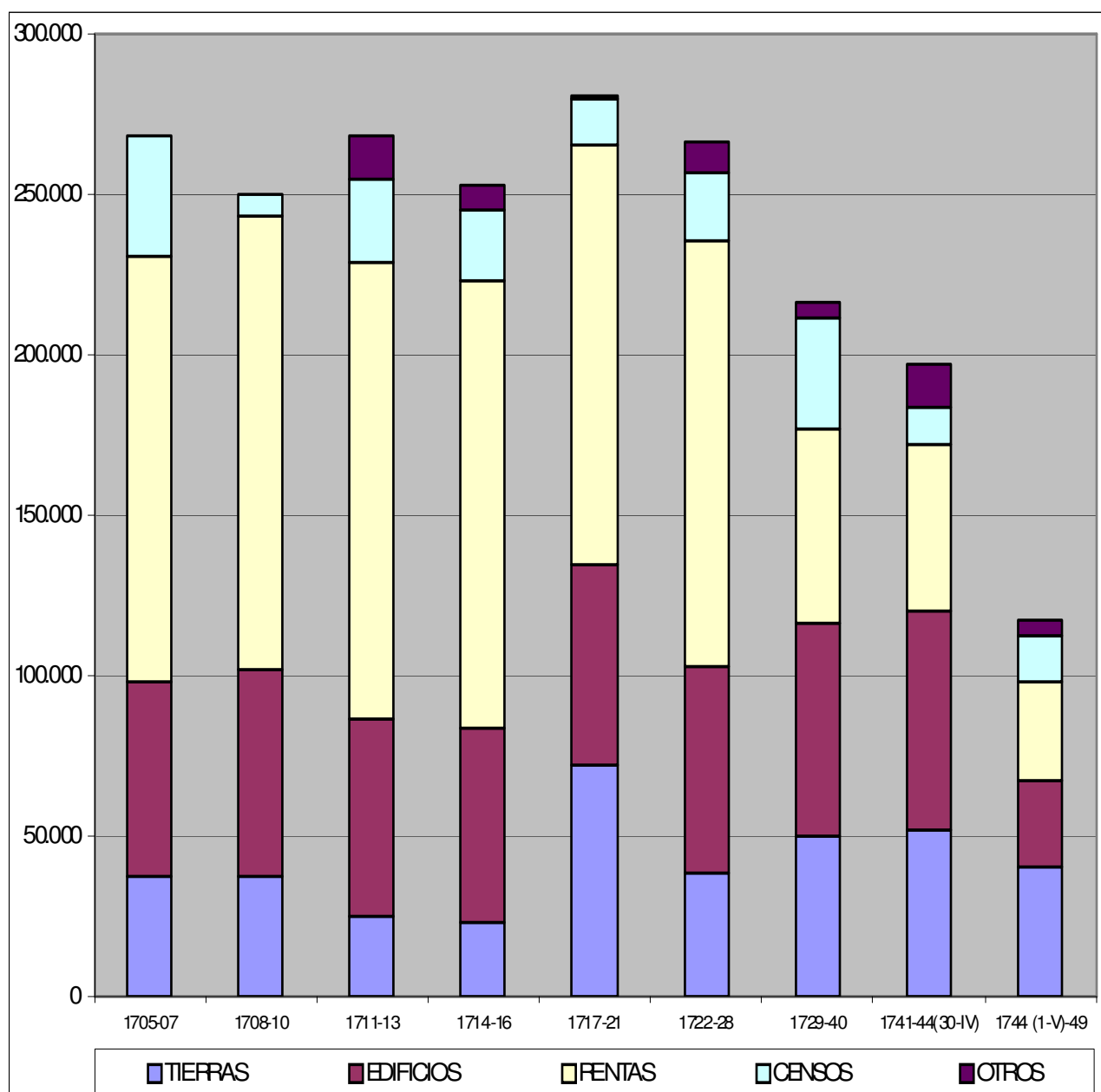
#### **1 - EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS**

Para seguir la evolución de los ingresos de propios durante el s. XVIII se presentan los gráficos 10 a 13. A grandes rasgos, los ingresos de propios evolucionan a la baja en las décadas centrales del siglo XVIII, experimentando una importante subida en los años finales. Si el importe medio anual de las rentas patrimoniales superaba el cuarto de millón de rs en los inicios de la centuria, hacia 1740-1760 se situaba por debajo de los 150.000 rs, iniciándose desde esta fecha una clara recuperación. Entre 1761-1765 se recuperan los valores de comienzos de siglo, continuamente incrementados hasta acercarse en la década de 1790 al medio millón de rs anuales. Si usamos precios constantes se observan las mismas tendencias, pero con importantes precisiones: por un lado se dispara en términos reales la subida de las primeras décadas del siglo al producirse en un período de descenso de precios, y por otro se matiza la caída de la década de 1740, menos dramática que en valores nominales, pues es el momento en que culmina el proceso de deflación para dar paso a una nueva época inflacionista en la segunda mitad del siglo.

Variaciones patrimoniales, cambios en los aprovechamientos de los distintos bienes, elevación de los arrendamientos por efecto de la subida de precios y de la coyuntura económica y, finalmente, el control que el poder central ejerce sobre las haciendas locales son las variables que podemos conjugar para explicar esta evolución de los ingresos de propios.

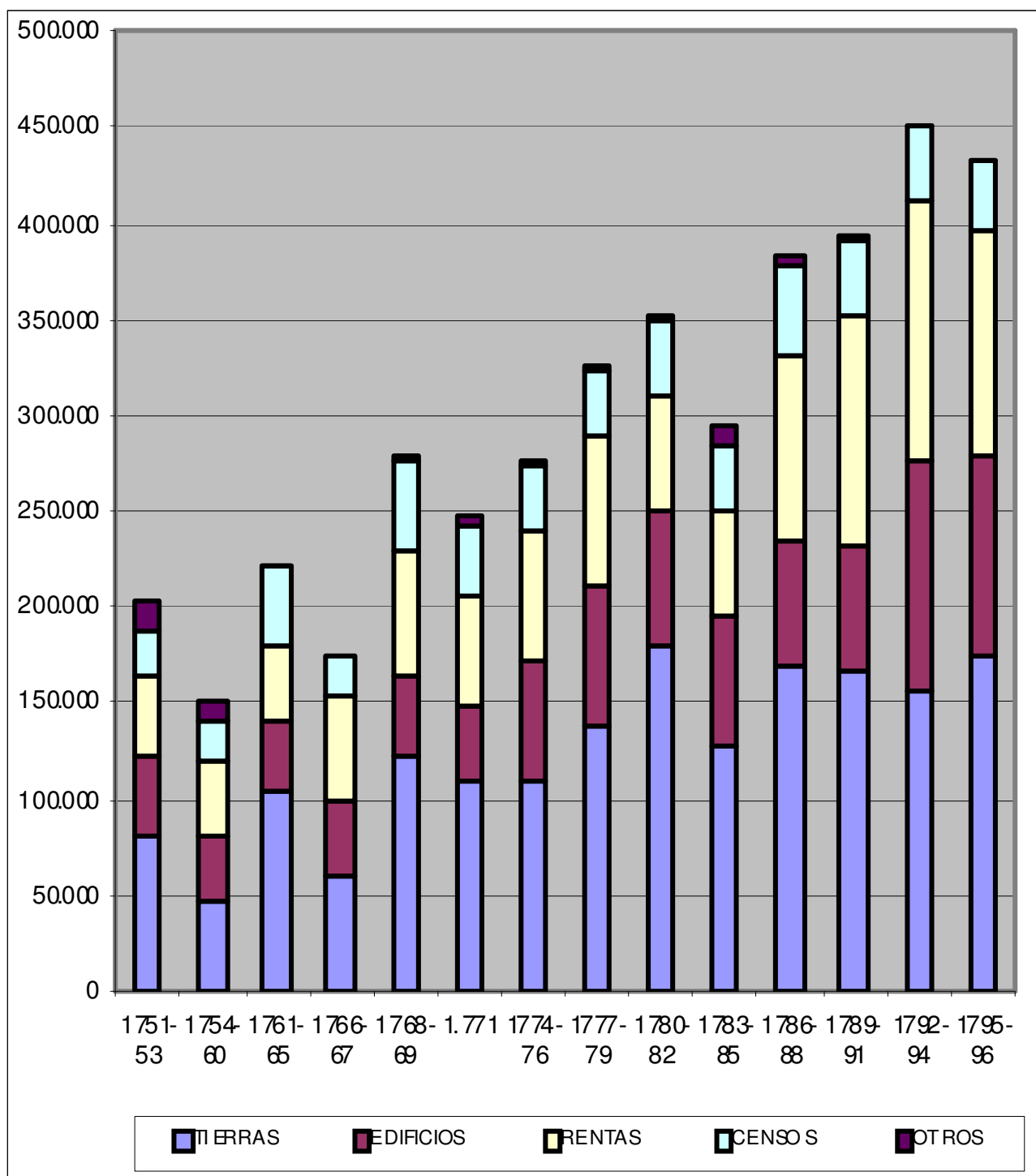
# **GRAFICO 10- INGRESOS DE PROPIOS, S. XVIII (RS) – I**

VALORES MEDIOS ANUALES



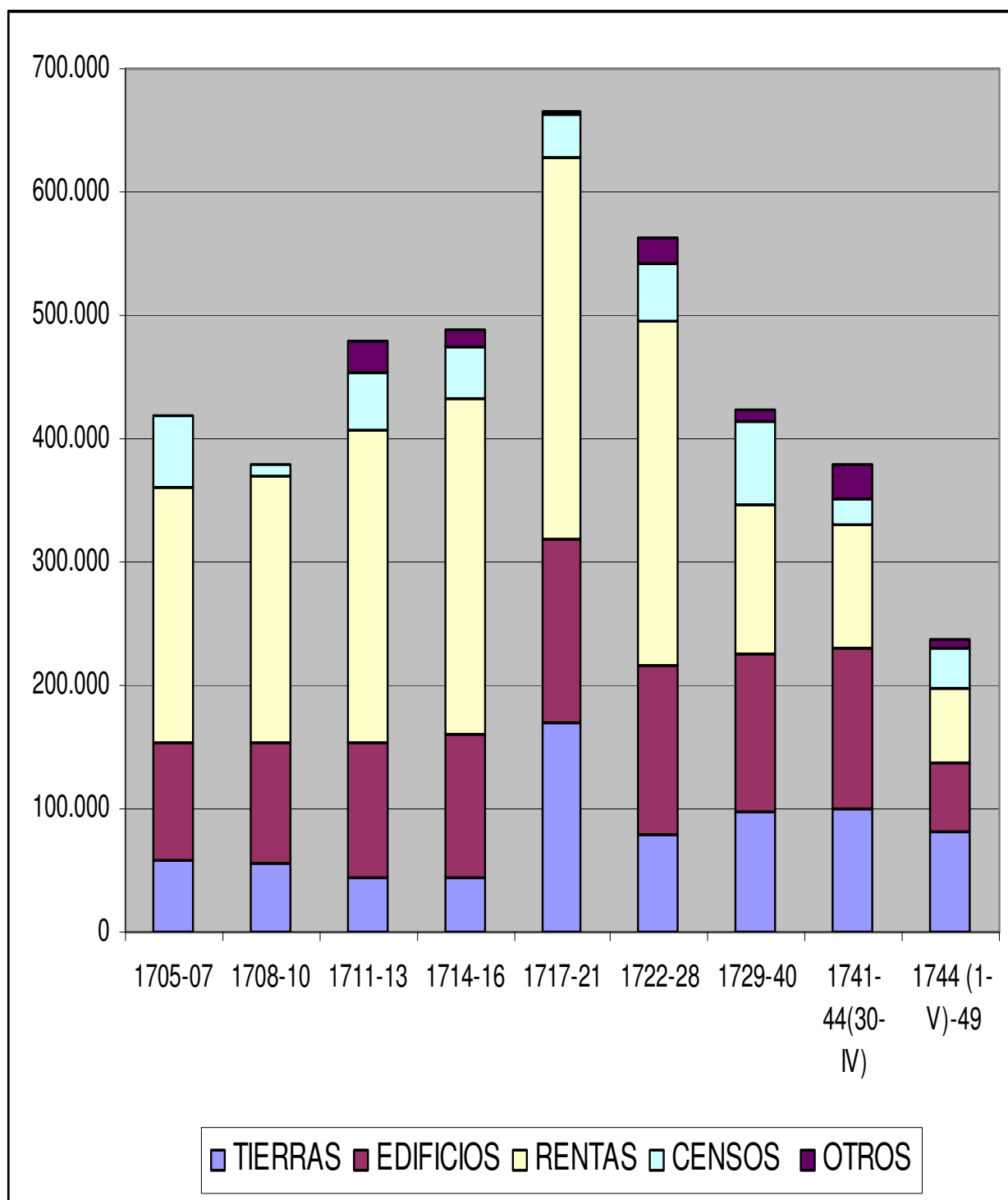
## GRÁFICO 11- INGRESOS DE PROPIOS, S. XVIII (RS) – II

VALORES MEDIOS ANUALES

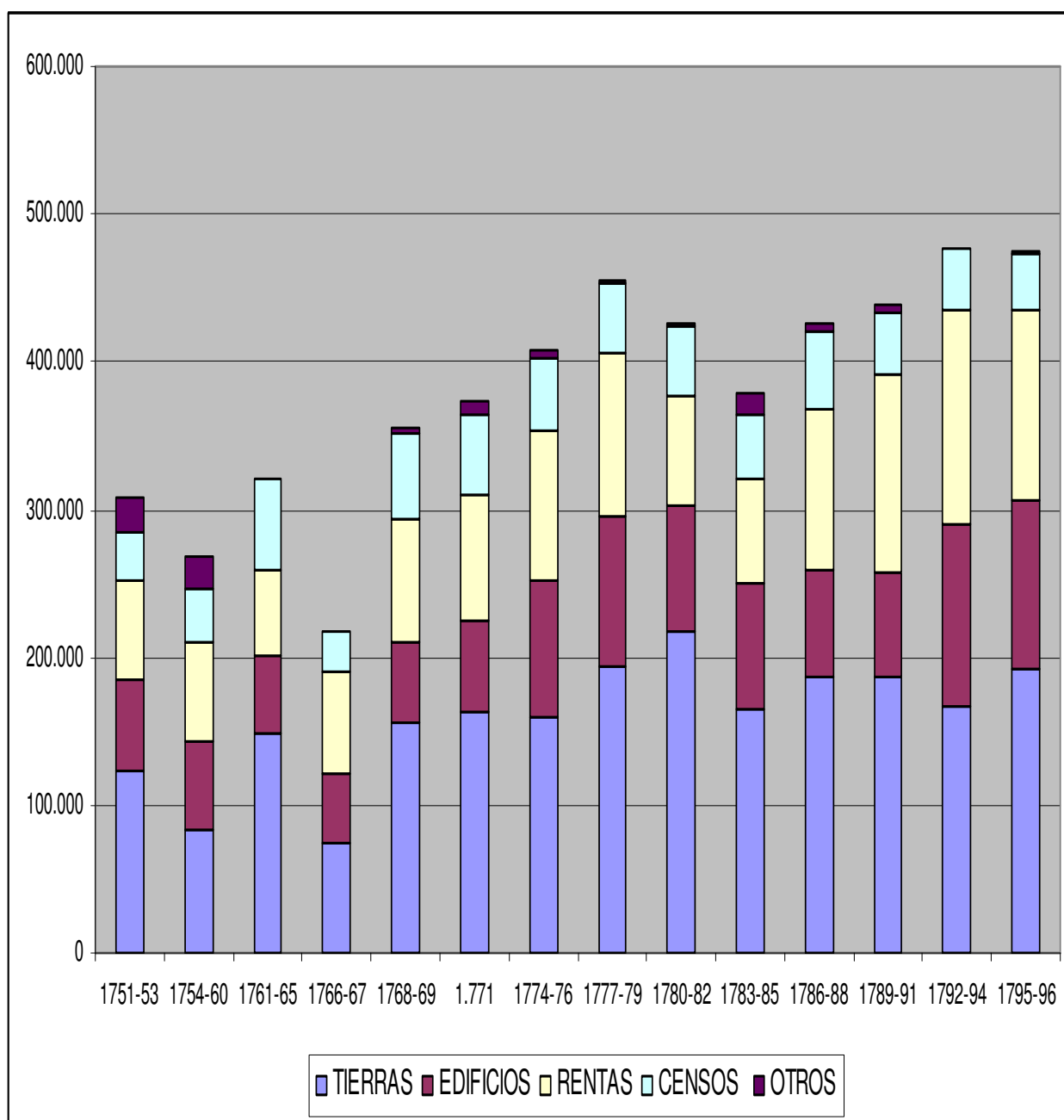


FUENTE: APÉNDICE 4

**GRÁFICO 12-INGRESOS DE PROPIOS, S. XVIII. VALORES REALES – I**



**GRÁFICO 13- INGRESOS DE PROPIOS, S. XVIII, VALORES REALES -II**



FUENTE: APÉNDICE 4

A comienzos del s. XVIII la mitad de los caudales del patrimonio madrileño proceden del capítulo de las rentas, destacando la del peso de la harina, que por sí sola aporta un tercio del total de los ingresos. Por su parte, las tierras muestran ciertas variaciones causadas por la realización de nuevos arrendamientos y usos como las cortas de leña. En las décadas de 1730 y 1740 se produce un importante descenso del valor de los propios debido principalmente a dos factores: en primer lugar la caída de la renta de la harina, provocada por la sustitución en Madrid de las panaderías (que se abastecen de harinas) por tahonas, que utilizan trigo directamente. Por otra parte, la reestructuración del abastecimiento urbano supone la transferencia de varios bienes inmuebles de los propios a la Junta de Abastos. A ellos hay que añadir una nefasta gestión administrativa durante estos años. Sólo a partir de 1760 los ingresos comienzan a recuperarse, iniciando una línea ascendente –tanto en términos nominales como reales- que continuará a lo largo de todo el siglo. El mayor incremento proporcional procede en un principio de las tierras, y ello por dos causas: los cambios patrimoniales y el aumento de la demanda. El pago recibido por Madrid por la expropiación que el rey hizo de sus tierras en el monte de El Pardo permitió la compra de nuevas fincas, lo que supuso que aumentaran los ingresos. Además, la coyuntura agraria favorable provoca un incremento de las roturaciones de tierras de propios y la subida de los arrendamientos, todo ello bien controlado por las autoridades concejiles en un primer momento gracias a la realización de apeos. Por lo que respecta a las rentas y casas de propios, la elevación de sus productos es más tardía y refleja tanto la subida general de precios como la mayor vigilancia que ejercen los responsables. Vigilancia que tiene que ver, claro está, con la actitud fiscalizadora del poder central a través de la Contaduría General de Propios y Arbitrios. La adquisición por el municipio del coliseo de los Caños del Peral a finales de siglo elevó notablemente los caudales aportados por los inmuebles urbanos.

### 1.1 - INGRESOS POR TIERRAS

Si las rentas de los bienes raíces concejiles suponían unos 40.000 rs anuales en la primera década del siglo XVIII, a finales del período superaban los 150.000 rs. En términos relativos, su participación en los ingresos de propios había ascendido del 10-15% al 40%. Explicar esto nos lleva a recurrir no sólo al incremento de la renta de la tierra a lo largo del

siglo, especialmente en su segunda mitad, sino también a las variaciones patrimoniales y a los intentos administrativos de control. Pero conviene señalar varias fases.

Hasta la década de 1740: los ingresos procedentes de las posesiones rústicas experimentaron inicialmente un descenso, cayendo los 42.200 rs obtenidos entre 1705-1707 por debajo de 25.000 rs a partir de 1711. La causa se encuentra en primer lugar en el descenso de los beneficios de las tierras labrantías arrendadas y dadas a censo: de más de 20.000 rs (el 60% del total del sector de tierras) a apenas 13.000 rs entre 1714-1716. La recuperación de predios, y consiguientemente de sus ingresos, conseguida en el apeo finisecular de José de Noriega se había disipado 20 años después. El incremento que se produce a partir de 1717 se debe a la actividad reivindicativa que el municipio desarrolla desde el momento que se incorporen tierras de propios en La Zarzuela, volviendo a decaer apenas una década más tarde. Por su parte, los arrendamientos de sotos y dehesas experimentan una ligera decadencia en los ingresos y en los precios de arrendamiento: el soto del Porcal fue arrendado por 9.000 rs anuales entre 1692-1699 y por 4.000 rs en 1721-1729; el soto de Salmedina descendió de 3.671 rs en 1695 a 2.700 rs entre 1710-1719.<sup>667</sup>

Incidencia especial presenta el aprovechamiento de la leña de los montes de El Pardo, cuya subordinación absoluta a la actividad cinegética real (además de la cesión de las cortas entre 1708 y 1717) están puestas de manifiesto en el apéndice correspondiente. El reinicio de estas prácticas por parte de la villa en 1718 aportó a sus arcas casi 200.000 rs hasta 1721, más de la mitad de lo que los bienes rústicos supusieron durante el mismo período. A partir de 1731 se reanudaron las cortas municipales y, aunque con un valor medio anual inferior (en torno a 20.000 rs) supusieron entre el 40 y el 50% del capítulo<sup>668</sup>. En suma, se aprecia como en las cuatro primeras décadas del siglo XVIII los ingresos procedentes de las tierras mantienen su valor a pesar de tener lugar un declive de los arrendamientos, tanto de los sotos y dehesas como de los terrenos labrantíos. La recuperación de las cortas del monte de El Pardo permite que estos ingresos se estabilicen en unos 40-50.000 rs, sobrepasándolos en el quinquenio de 1717 a 1721.

Entre 1.740 y 1.760: el fuerte descenso que experimentan los ingresos globales de propios no se refleja en el capítulo de predios rústicos, que mantuvieron sus valores hasta

---

<sup>667</sup> AVM-S, 3-22-89

<sup>668</sup> AVM-S, 3-8-21 Y 3-83-1



mediados de siglo, para experimentar posteriormente un cierto incremento. En la primera década se sigue el proceso de años anteriores, suponiendo la leña de El Pardo unos 20.000 rs anuales. El cerramiento en 1749 del espacio incorporado al patrimonio real, el Cordón de El Pardo, eliminó los tradicionales aprovechamientos de Madrid, si bien el municipio pudo cortar leña hasta 1750, prohibiéndosele a partir de entonces. El recurso que elevó al monarca solicitando permiso para llevarla a cabo o recibir a cambio una indemnización de 40-50.000 rs, que era la cantidad en que se tasaba su valor, dio origen al real decreto de 3 de noviembre de 1751 que ordenaba a la Tesorería Mayor de Guerra la entrega de 50.000 rs al mayordomo de propios. En los años siguientes se registra el mismo ritual: Madrid solicitaba permiso para practicar la poda o la recompensa correspondiente.<sup>669</sup> Esta cantidad elevó los ingresos de tierras considerablemente, situándose en unos 90.000 rs, casi la mitad del monto global de los bienes de propios. El apreciable descenso experimentado entre 1745-1760 no es más que la consecuencia de los retrasos en los pagos, que se liquidaron en los años posteriores.

También en las tierras arrendadas y dadas a censo se aprecia una cierta mejoría, atribuible a las visitas de los comisarios de propios tras recibir la subdelegación del corregidor. Su efecto fue muy notable en 1751: de los casi 19.000 rs percibidos de las tierras a censo, más de 14.000 procedían de los Arenales de Getafe tras el apeo realizado.<sup>670</sup> Hay que señalar asimismo el comienzo del arrendamiento de los pastos de los sotos del Porcal y Negralejo a partir de 1752, una vez se han suprimido los usos comunales, con un valor de 9.000 rs anuales, cantidad que casi iguala lo producido por el resto de sus aprovechamientos, como he analizado en el capítulo 7.

A partir de 1760 los ingresos de las propiedades rústicas contribuyen de forma muy destacada al incremento de los caudales del fondo de propios. Varios factores inciden en que los 103.501 rs que proporcionan estos bienes a la hacienda municipal en 1761-1765 se conviertan en más de 200.000 rs en 1796. En primer lugar, la incorporación de nuevos predios adquiridos con los caudales percibidos en concepto de indemnización por el cerramiento del Cordón de El Pardo. A ello se añade la mejoría en el control de los arrendamientos y un superior conocimiento del conjunto patrimonial rústico aportado por la comisión general de apeos tras 1769; además del lógico incremento que supone una época inflacionista y en la que la demanda y por tanto la renta de la tierra aumenta.

---

<sup>669</sup> AGP, caja 9454, exp. 13.

Sólo los ingresos procedentes de la dehesa de la Serena aportaron casi la mitad de los que tienen su origen en bienes raíces durante el bienio 1768-1769. Su renta experimentó notables variaciones debido a los retrasos y desfases en los pagos de los arrendamientos: los 57.792 rs de 1768-1769 se convirtieron en 27.596 rs en 1771, ascendiendo a continuación hasta superar los 60.000 rs en 1777. Los años siguientes mantienen valores de 40-50.000 rs, observándose descensos destacados en los últimos años del período: 20.818 rs en 1788, apenas 14.000 rs en 1792 y menos de 24.000 rs en 1794-95. Las deudas pendientes de los arrendamientos se enjugaban en fechas posteriores, pero aun así se acumulaban los débitos, que en 1808 ascendían a 111.720 rs, cifra que suponía más de dos años de renta.<sup>671</sup> Lógicamente, estas oscilaciones tuvieron una notable incidencia en los ingresos procedentes de las tierras de propios.

El resto de las posesiones adquiridas tras la enajenación de los montes de El Pardo muestra mayor regularidad en sus ingresos, dado que los pastos del Prado Herrero y de la dehesa de la Cepeda estuvieron arrendados por el abasto de carne. El aprovechamiento de la leña en determinados años hace que las cifras se disparen, como sucedió en el soto de Migascalientes en 1781: las leñas vendidas a la Real Fábrica de Salitre importaron 41.625 rs, de los cuales 36.383 procedían de leñas de chopos, fresnos y sauces (a razón de 1 rl/arroba) y el resto de 6.855 arrobas de zarzas y espinos (26 mrs/arroba). Por su parte, en el Prado Herrero, rico en fresnos y robles, se realizó una corta en 1781, produciendo 9.742 arrobas de carbón que importaron 12.034 rs. Más importante fue el siguiente aprovechamiento llevado a cabo 11 años después: 56.802 rs procedentes de 14.631 arrobas. En ambos casos se vendieron al abasto de carbón de Madrid.<sup>672</sup>

Los ingresos provenientes de pastos de los sotos de Porcal y Negralejo se fijaron en 1799 en 21.833 rs, lo que duplicaba la cifra de años anteriores. Al igual que las hierbas del Prado del Corregidor, Prado Herrero y dehesas de la Cepeda y Arganzuela se tasaron en un precio fijo, siendo disfrutadas por el abasto de carnes. Se trata, pues, de una aportación estancada, lo que en una coyuntura alcista como es la segunda mitad del s. XVIII significa una pérdida de ingresos reales. Una vez más aparecen los propios como un patrimonio en el que la

---

<sup>670</sup> AVM-S, 3-195-11 y 13.

<sup>671</sup> AVM-S, 3-31-50

<sup>672</sup> AVM-S, 3-126-15. Hasta 1804 no se registró otro corte de leña, AVM-S, 3-126-17.

explotación rentística no es su único objetivo, ya que la pérdida de ingresos se subordina en este caso a la política de abastecimiento de carne a la ciudad.

Los otros aprovechamientos muestran diversas fluctuaciones dentro de una línea general de subida de los arrendamientos. A finales de siglo la caza, pesca y leña del soto del Porcal aportan 20.000 rs anuales, cinco veces más que en 1721-29, mientras las del soto del Negrlejo superan los 10.000 rs, cifra tres veces superior a la de comienzos del siglo. Ya he analizado en detalle la evolución de la renta de estos sotos en el capítulo 7. Por su parte, el incremento de los ingresos de la dehesa de la Arganzuela se debe a que se contabilizan diversas tierras de labor y huertas incluidas en su interior y recuperadas tras numerosos litigios que siguieron al apeo general.<sup>673</sup> El soto de Salmedina, por contra, sufrirá un descenso en el precio de los arrendamientos al incorporarse una parte de sus terrenos al canal de Guadarrama.

Por lo que se refiere a las tierras de labranza también participan en el incremento de los ingresos. Es la actuación del apeo general que realiza la comisión encargada a partir de 1769 la que permite al municipio aprovecharse de las ocupaciones y roturaciones de tierras y controlar mejor los numerosos arrendamientos, que además suben de precio. Especial incidencia tiene la incorporación de huertas en los alrededores de la ciudad, mucho más rentables que los terrenos de cereal o viñedos, pues superan en algunos casos los 200 rs/fg/año.<sup>674</sup> En suma, Madrid obtiene un incremento notable de los ingresos procedentes de sus tierras a lo largo del siglo, lo cual no quiere decir que la explotación de las propiedades fuera óptima. Un informe que realizó el visitador de propios en 1807 denunciaba el estado en que se encontraban numerosos predios. Seleccione algunos ejemplos muy ilustrativos: el soto del Porcal: "se halla sin arrendar y bastante abandonado, por lo mucho que castigan a cazar y cortar leña, sin que se experimente castigo en ninguno de los contraventores"; en Velilla de San Antonio "han muerto la mayor parte de los arrendadores y labra el que quiere donde le acomoda"; en el mismo término poseían los propios 121 fg "cuyo terreno parece le disfrutaban los vecinos de dicho lugar sin que se utilice Madrid de nada".<sup>675</sup> La fragilidad del patrimonio rústico ante todas las presiones de diferentes sectores sociales era, pues, evidente.

---

<sup>673</sup> GOMEZ IGLESIAS, A.- "Dehesa de Arganzuela", *pássim*.

<sup>674</sup> Una huerta de 16 fgs -10 cels en el Paseo de las Delicias se arrendó entre 1.785 y 1.791 por 3.512 rs/año. AVM-S, 3-8-28.

<sup>675</sup> AVM-S, 3-17-25

## 1.2 - INGRESOS POR INMUEBLES URBANOS

Los alquileres de las casas y locales municipales presentan durante las cuatro primeras décadas del siglo XVIII unos valores muy similares, constituyendo una cuarta parte de los ingresos totales de los bienes de propios. Contrariamente a lo que sucede en otros capítulos como tierras o rentas no se observan excesivas alteraciones en el producto de cada uno de estos bienes.

Resalta la importancia de las cuarenta y dos casas-hornos del barrio de Villanueva, situadas dentro del Pósito. Cada una estaba arrendada en 600 rs anuales, lo que hace un producto total por este concepto de 25.200 rs, es decir, el 40% de todos los ingresos de los inmuebles urbanos. El mayordomo de propios era el encargado de percibir los alquileres, recibiendo por ello una comisión de 1.100 rs anuales. A continuación se sitúan los dos edificios más característicos de los propios madrileños, la Casa Panadería y la Casa Carnicería de la Plaza Mayor.<sup>676</sup> La primera ingresaba por el alquiler de sus cuartos unos 8.000 rs anuales, de los que casi 3.000 rs procedían de las caballerizas adjuntas. La Casa Carnicería comprendía diversos locales unidos, cuyos inquilinos pagaban más de 10.000 rs cada año. En conjunto, ambos edificios aportaban casi la tercera parte de este capítulo. El 30% restante se distribuía entre el resto de los edificios, destacando las 44 escarpías (puestos de venta de carne) situadas en la carnicería del Rastro. El alquiler anual era de 4.004 rs (88 rs cada una). El mesón de la Villa y la casa de la Red de San Luis suponían cada uno más de 3.000 rs al año.

En 1744 se produce una importante modificación del patrimonio inmobiliario urbano de Madrid que tiene su origen en la política de abastecimiento. Así, los hornos de Villanueva y las cuatro casas registro que pertenecían a los propios se agregan a la administración del Pósito, pasando a depender de la Junta de Abastos. También se suprimen los ingresos

---

<sup>676</sup> Teodoro Ardemans resalta la elevada renta que se percibe por las edificaciones situadas en la Plaza Mayor. Pese a afirmar que "vemos por la experiencia, que una casa de poco valor renta muy poco", señala: "Y haciendo centro de esta villa como va referido, la plaza mayor, en donde en su circunferencia cada pie superficial del sitio de las casas que la circundan, y algunos sitios que de ella descienden.... Todas estas porciones de sitio, parece que son a los que se debe dar mayor estimación, porque rentan mucho las casas, ocupando poco sitio" ARDEMANS, T.- *Ordenanzas de Madrid*, págs. 141-142.

procedentes de las escarpías del Rastro.<sup>677</sup> El resultado es el descenso de los caudales aportados por las casas y edificios municipales a menos de la mitad que en los años precedentes. Los 33.000 rs anuales de la década de los años cincuenta van elevándose progresivamente hasta alcanzar niveles superiores a los 60.000 rs a partir de 1744. La incidencia de la Casa Panadería y Carnicería es abrumadora, suponiendo su aportación en torno al 70% del total. Es la subida de los alquileres lo que explica esta tendencia al alza, existiendo pocas incorporaciones destacables. Y es precisamente la Carnicería Mayor la que experimenta el incremento más sobresaliente, superando los 30.000 rs anuales a partir de 1776. La causa radica en una serie de obras que se venían realizando en los años precedentes.<sup>678</sup> El arrendamiento de puestos de agua de cebada en las carnicerías madrileñas aportaba 6.200 rs; representaba el tercer ingreso en importancia tras los edificios de la Plaza Mayor, lo que resulta harto significativo de la escasa rentabilidad que el municipio obtenía por su patrimonio inmobiliario.

Hasta 1794 el incremento fue moderado. Pero ese mismo año el mayordomo percibió 135.000 rs, importe de seis años de arrendamiento del coliseo de los Caños del Peral, teatro que una real provisión de 22 de marzo de 1791 había concedido a Madrid como uno de sus propios al haberse construido sobre terrenos municipales.<sup>679</sup> Este aumento patrimonial elevó la participación de los inmuebles a casi la cuarta parte de los caudales de propios en 1796, cuando apenas había supuesto en torno al 17-18% en los años precedentes.

### 1.3- INGRESOS POR RENTAS

Los casi 150.000 rs anuales que suponen las rentas a comienzos del siglo XVIII se verán reducidos a la quinta parte cuarenta años más tarde debido a la caída de la renta del

---

<sup>677</sup> AVM-S, 3-32-89.

<sup>678</sup> AVM-S, 3-95-18. En un informe de los comisarios de propios sobre la madera utilizada en las obras de la Casa Carnicería se menciona "la mucha porción que de ella quemaron en la Plaza Mayor de la que se hallaba apilada en los días que duro el motín que hubo en el año de 1.766".

<sup>679</sup> AVM-C, 3-86-4

peso de la harina. La mitad de los ingresos de los bienes de propios en el período inicial proceden de sus rentas, con valores entre 130-150.000 rs durante 30 años. Es más, una única renta, la que cobraba los derechos por el pesaje de la harina, suponía más de la tercera parte de los caudales patrimoniales municipales.

En 1698 el peso de la harina se arrendó en 88.536 rs anuales, cantidad que se elevaría por encima de los 95.000 rs en algunas fechas posteriores: 95.544 rs en 1708-1716, 86.656 rs en 1717-1720 y, finalmente, 96.000 rs en 1721-1726.<sup>680</sup> Pero este último año "había llegado a descaecer tanto el tráfico y entrada de harinas por la excesiva introducción de tahonas que no pudo volverse a arrendar".<sup>681</sup> A comienzos del s. XVIII predomina en Madrid la venta de harina sobre la de trigo debido a la escasez de tahonas (locales donde se muele el pan) dentro de la ciudad. El peso de la harina centraliza este comercio, de ahí las elevadas rentas que produce. Sin embargo, comienzan a aparecer ventas fraudulentas para eludir el pago de los derechos del peso. "Hacia 1724 continúan esos tratos fuera del Peso de la Harina; los arrieros venden directamente harina a los panaderos y trigo a los tahoneros, sin que las amenazas del corregidor ni las reclamaciones del arrendatario del Peso logren detener el progresivo abandono del Peso municipal. Su decadencia, con la que el ayuntamiento acaba perdiendo la renta correspondiente, se debe básicamente a la transformación que se está produciendo durante esas décadas en el sector panadero de Madrid, desde el predominio de las panaderías a su progresiva sustitución por tahonas".<sup>682</sup>

Ante la imposibilidad de su arriendo se recurrió a la administración. La caída de sus valores hizo que la renta fuese deficitaria, sin que sus escasos ingresos alcanzasen a pagar los salarios de los fieles registradores y mozos, a los que en 1742 los propios debían 14.000 rs por atrasos.<sup>683</sup> Dos años después, la Junta de Abastos incorporó esta dependencia, lo que liberó a los bienes de propios de la carga que suponía la antaño tan pingüe renta.

El resto de las rentas muestran un evidente estancamiento, con valores globales por debajo de los 50.000 rs hasta 1740. Los ingresos procedentes del peso real y la correduría se

---

<sup>680</sup> AVM-S, 2-114-5 y 2-32-89.

<sup>681</sup> AVM-S, 3-8-17 y 19.

<sup>682</sup> CASTRO, C. de- *El pan de Madrid*, p. 208.

<sup>683</sup> AVM-S, 3-8-4

situían en unos 15.000 rs a comienzos de siglo. La mayor parte proviene del 0,5% que se cobraba en concepto de correduría sobre las mercancías del peso real: en 1.715 supuso 12.577 rs de los 15.373 rs que produjo la administración de ambas rentas; los derechos de pesaje proporcionaban menos de la quinta parte del total.<sup>684</sup> Una serie de informes denunciaban el pésimo estado de esta renta, derivado de la minúscula tasa de 1 mr por arroba que se había fijado en las ordenanzas del siglo XVI, sin que desde entonces se hubiera revisado, y de la multitud de productos que se desviaban a la Aduana: "los géneros de más entidad comprendidos en el privilegio son los que estos se supone que no ha cobrado, y se van introduciendo en la Aduana al pesar y percibir de ellos, defraudando en esto gran parte de la utilidad de este propio".<sup>685</sup>

Entre 1726-1729 el precio de arrendamiento se elevó a 23.000 rs anuales, manteniéndose a partir de entonces por encima de los 20.000 rs hasta 1744, en que se suprime el cobro del 0,5% en concepto de correduría.<sup>686</sup> Se inicia entonces un proceso de reorganización de estas rentas, que culmina con las reales ordenanzas de 27 de marzo de 1756. Hasta esa fecha los valores se fueron recuperando, si bien se registran años en que no se arrienda, llevándose en administración. A partir de las ordenanzas y tras unos años sin arrendarse, el peso real fue incrementando sus ingresos con importantes fluctuaciones, reflejo de la práctica de ciertos arrendamientos fraudulentos y cohechos entre su personal, algunos de los cuales terminarán en la cárcel.<sup>687</sup>

Las rentas de almotacén y contraste marcador presentan unos valores de 12-14.000 rs anuales hasta la década de los años sesenta. Entre 1768 y 1774 los precios se elevan a veces en más de un 100%, alcanzando su máximo precisamente en 1744, cuando los ingresos de ambas rentas superen los 32.000 rs. La causa radica en los arrendamientos especulativos que se llevan a cabo y que traen como consecuencia las quejas por los elevados derechos que percibía el arrendador para resarcirse, así como considerables retrasos en el pago de las rentas a los propios de Madrid.<sup>688</sup>

---

<sup>684</sup> AVM-S, 3-303-22

<sup>685</sup> Informe del procurador general de Madrid, AVM-S, 2-397-15

<sup>686</sup> AVM-S, 2-397-5

<sup>687</sup> AVM-S, 2-425-40

<sup>688</sup> AVM-S, 3-28-29 Y AHN, Consejos, leg. 636, exp. 9.

Tanto el peso real como el almotacén y contraste marcador experimentan un vigoroso crecimiento a partir de la década de 1780 como consecuencia de dos factores: el cobro de las elevadas deudas de arrendamientos anteriores y, sobre todo, la administración directa de estas rentas por parte del municipio, una actitud que provocó enfrentamientos con el poder central, como se analizará más adelante. En conjunto superan a fines del siglo XVIII los 100.000 rs anuales.

También los ingresos procedentes de las barcas en el río Jarama muestran un claro auge en la segunda mitad del siglo. Destaca la barca de Mejorada, que de 2-3.000 rs pasa a superar los 10-15.000 rs a partir de la década de 1760, coincidiendo con su traslado a terrenos propios de Madrid en el soto del Negralejo. Posteriormente sus valores decaen, pero aun así suponen un incremento del 300% respecto al inicio del siglo. Menos espectacular es el avance de la barca de Arganda, de la que Madrid sólo percibe la mitad de sus ingresos, que se ven sometidos a numerosas irregularidades por incidencias y reclamaciones de los arrendatarios, avenidas del río, etc. Los aproximadamente 10.000 rs iniciales apenas se convierten en 12-14.000 rs a finales del período, lo que representa la subida menos destacada de este apartado.

En líneas generales, las rentas muestran en su evolución la misma línea que los propios en general. Con un valor de 130-140.000 rs al inicio del siglo, es decir, casi la mitad del total, caen bruscamente por debajo de los 40.000 rs a mediados de la centuria, por lo que representan menos de la quinta parte del total de los ingresos. En los últimos años estudiados superan los 120.000 rs, constituyendo casi un 30% de los propios.

#### 1.4- INGRESOS POR CENSOS

Las fuertes oscilaciones que se observan en estos bienes patrimoniales derivan de su compleja problemática, ya analizada con anterioridad. Por lo que respecta a los censos perpetuos cobrados, su número varía constantemente según los "descubrimientos" realizados, pues puede afirmarse sin exageración que el ayuntamiento tenía tantos censos a su favor como fuese capaz de averiguar. Hay que considerar asimismo que las veintenas cobradas con motivo de la enajenación de un local gravado con censo perpetuo suponen el mayor ingreso de este apartado.

---



También es irregular la percepción de los derechos de la Depositaria general, al depender del movimiento de sus caudales y de los censos redimidos ingresados. Los efectos de Villa, pese al atraso con que satisfacen sus obligaciones las sisas, se consolidan como el ingreso más importante del capítulo, aportando casi 20.000 rs anuales a partir de la década de 1760, lo que supone casi la mitad del total de este apartado.

Los propios madrileños empezaron a recibir intereses de sus 134 acciones del Banco de San Carlos en 1784. Los 9.151 rs iniciales se fueron elevando en los años siguientes hasta 1790, fecha en que los dividendos de las acciones de los municipios se destinaron a la Caja de Consolidación de Vales Reales. En 1.791 se percibieron por última vez 13.400 rs por los intereses correspondientes al año anterior, desapareciendo con posterioridad al dirigirse al pago de las deudas que ocasionaba el abastecimiento a la capital.<sup>689</sup>

---

## 2 - FORMAS DE EXPLOTACIÓN: ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

“En lo que toca al manejo y gobierno de este patrimonio de los pueblos, será del cuidado del Ayuntamiento o Concejo, o que se arrienden, o en su defecto se administren, según se comprenda ser más útil y beneficioso a la república. No es preciso lo primero, pero es lo menos sospechoso hacia los regidores. En los arrendamientos de propios, así en cuanto a la solemnidad con que deben ejecutarse como en cuanto a las personas que pueden entrar en estos contratos, se observará lo mismo que queda dicho de los arriendos de los abastos públicos, para la administración se buscarán personas de toda confianza y abonadas. En un caso y otro nombrará el Ayuntamiento o Concejo depositario o mayordomo, a cuyo cargo haya de estar la cobranza de las rentas de este patrimonio, su custodia y el dar curso a los pleitos para su cobranza, si bien cumplirá con practicar las diligencias que sean bastantes; éste, antes de entrar al manejo de los caudales, ha de afianzarlos”.<sup>690</sup>

Este esquema de administración y explotación del patrimonio que nos presenta Lorenzo de Santayana en el s. XVIII tiene su origen en la Baja Edad Media, período en el que comienza a generalizarse la explotación rentística de estos bienes. Para evitar los manejos de

---

<sup>689</sup> AVM-S, 3-148-4

<sup>690</sup> SANTAYANA BUSTILLO, L. de- *Gobierno político*, págs. 81-82

la oligarquía concejil (unos regidores que han conseguido la perpetuidad de sus cargos y en muchos casos el ennoblecimiento personal), se dicta en esta época una serie de disposiciones que establecen la prioridad del arrendamiento sobre la gestión directa a cargo de los oficiales y dirigentes del concejo. Pero también los arrendamientos se prestaban a la mediación oligárquica, y ya las Cortes de León de 1.349 ordenaban que ni las justicias ni los regidores ni otros oficiales "que han de ver hacienda de Concejo" pudieran arrendar personalmente los propios concejiles.<sup>691</sup> Sin embargo, la conexión entre poder político y poder económico que representan las oligarquías municipales no desaparece a lo largo de la Edad Moderna y es una de las causas fundamentales de las pérdidas y expolios que sufren los patrimonios municipales. "La pugna entre señores y concejos por los propios y baldíos de las villas señoriales, la de los campesinos y ricos labradores en las de realengo, están en la base de los movimientos sociales del Antiguo Régimen".<sup>692</sup>

Cuando a mediados del s. XVIII la monarquía borbónica intentó controlar las haciendas locales a través de la Contaduría General de propios y arbitrios, la situación no había variado sustancialmente. Las disposiciones legales dibujan un panorama claro del problema y, así, el Real Decreto e Instrucción de 30 de julio de 1760 que establece dicha Contaduría afirma: "Será del cargo de los Intendentes hacer que todas las justicias de cada pueblo de los de su jurisdicción entiendan que los Propios los han de manejar con entera pureza, cortando todo monopolio y mala versación de sus productos, que los ramos arrendables se saquen anualmente a pública subastación y se rematen en el mayor postor, sin que en los arrendamientos tengan parte directa ni indirectamente las justicias ni sus parientes, y que los demás ramos que sea preciso administrarlos, se execute con la mayor legalidad y con la conveniente cuenta y razón".<sup>693</sup>

En 1760, pues, además de prevenirse contra la participación de regidores y oficiales municipales en los arrendamientos de propios, se regulaba la forma de llevarse a cabo éstos: sólo en el caso de que no hubiera postores podrían ser administrados directamente por las Juntas de propios. Por medio de diversas medidas se fueron estableciendo las condiciones en que se realizarían los contratos de arrendamiento, que debían ser anuales, siendo precisa la

---

<sup>691</sup> *Novísima Recopilación*, lib. VIII, tít. XXI

<sup>692</sup> BERNAL, A. M.- "Haciendas locales", p. 289.

<sup>693</sup> AVM-C, 4-223-2

autorización del Consejo de Castilla para prorrogar su duración. Este esquema teórico que define la normativa legal presenta, como suele suceder, numerosas variantes en el funcionamiento real de las haciendas concejiles.

En el capítulo correspondiente a las tierras de propios se trató con detalle las formas de explotación de este componente del patrimonio municipal. Es por ello que ahora me centro en otro componente fundamental de los bienes de propios: las rentas. Su interés no viene dado sólo por su importancia económica (como se aprecia en la destacada participación que tienen en el conjunto de ingresos patrimoniales), sino también porque ilustran muy claramente la diferencia y a veces oposición que existe entre las dos formas de gestión del patrimonio, el arrendamiento y la administración directa. Ambas fórmulas presentan un funcionamiento contrapuesto, con una rentabilidad muy diferente tanto en el plano económico como social, pues el mayor o menor grado de exacción de los derechos repercute en el funcionamiento del municipio y en las cargas que deben soportar los contribuyentes. Por otra parte, el caso de las rentas de propios pone de manifiesto el apoyo de los gobiernos ilustrados al arrendamiento, frente al cual aparece un claro interés de los dirigentes municipales por proceder a la administración directa, gestionando así por su cuenta su patrimonio (y el de todos los vecinos, auténticos excluidos en ambas fórmulas).

El proceso de arrendamiento de estas rentas no difiere sustancialmente del de otros bienes de propios. Tan sólo la mayor complejidad de funcionamiento de estos derechos obliga al municipio a una mayor clarificación de las condiciones de arrendamiento, que deben ajustarse a lo establecido en las ordenanzas. Así lo expresaba el procurador síndico personero de Madrid en 1776: "para oviar dudas y pleitos que se causan con motivo de los pliegos que dan las personas que toman en arrendamiento los ramos de propios, y los origina así las muchas condiciones que suelen pactar, como lo equívoco de ellas, que aunque se miren y reconozcan con el pulso y reflexión que corresponda no suele por entonces advertirse su verdadero espíritu y fin particular a que se dirigen, y así puestos en posesión los postores las transgiversan, e intentan se les dé diverso sentido, que originan disputas y gastos; tiene acordado la Junta que para su remedio se forme a cada ramo pliego de condiciones para su subasta".<sup>694</sup> A continuación detallo el proceso tomando como ejemplo al arrendamiento del peso real realizado entre 1777 y 1781.

---

<sup>694</sup> AHN, Consejos, leg. 1117, exp.sin numerar

El día 24 de julio de 1776 los regidores comisarios de propios y el procurador personero presentaban un pliego con las "Condiciones generales con que ha de arrendarse el Propio del Peso Real, perteneciente a esta Villa de Madrid, y el aprovechamiento de los Postes, Claros, y Soportales de él". Se detallaban en 25 apartados los derechos y aranceles que debía cobrar el arrendatario, tratando de prevenir la enorme casuística que presentaban los diversos productos, así como fijar las obligaciones del arrendatario y las normas que debían regir el gobierno del peso real, especificándose detalles como el horario de funcionamiento o las fórmulas para realizar las reparaciones del material. En septiembre de ese mismo año, d. Ramón Carlos Rodríguez presentaba un pliego para conseguir el arrendamiento, en el que en primer lugar protestaba por el hecho de haber sido rechazado un pliego de postura al peso real que había presentado en el mes de abril, del cual los comisarios de propios y el procurador personero se habían desatendido para elaborar unas nuevas condiciones. A continuación el postor procedía a ajustar sus propuestas a las condiciones generales de la subasta, de las que aceptaba literalmente diecinueve. Presentaba aclaraciones a seis apartados y otras tres condiciones nuevas. Este pliego pasaba a examen de los comisarios de propios y del procurador personero, siendo los primeros partidarios de la aceptación de casi todas las propuestas de Rodríguez, mientras el personero las rechazaba de plano. La Junta de propios de 3 de octubre de 1776 se conformaba con el informe de los regidores comisarios de propios, al que se allanó Rodríguez, con lo que su puja fue admitida. El proceso de arrendamiento concluía con los dos remates públicos de las pujas aceptadas por la Junta de propios. Una vez celebrado el segundo y definitivo quedaba un plazo de noventa días en el que cualquier interesado podía echar la puja del cuarto (un 25% de aumento sobre al precio del remate final).

Como se observa claramente por este ejemplo el proceso era complejo y bastante lento, y la enorme casuística de las condiciones de arrendamiento dejaba abiertas numerosas puertas para que los arrendatarios intentaran obtener el máximo lucro posible a la vez que procedían a obstaculizar o no realizar los pagos de su arrendamiento. La situación se hizo especialmente conflictiva a mediados del s. XVIII, cuando los arrendatarios encontraron en las rentas municipales un mecanismo para aumentar su participación en un mercado en crecimiento. Fruto de la competencia es la elevación de los precios de arrendamiento que, sin embargo, no se traduce directamente en una subida paralela de los ingresos de propios, pues los retrasos en los pagos y la presentación de recursos para obtener descuentos en los valores ajustados son constantes. Las autoridades municipales terminarán reaccionando, bien que

con cierta lentitud, y formularán un mecanismo alternativo de explotación del patrimonio: la gestión o administración directa.

La experiencia de la administración no era nueva. Al igual que en las fincas más productivas, también en el caso de las rentas que no encontraban arrendatario, se procedía a nombrar un encargado de la gestión por parte del concejo ya desde la Edad Media: el fiel, quedando la renta así en fieltad. Sin embargo, se trata siempre de soluciones de emergencia, que durarían tan sólo hasta el momento que se presentara algún arrendatario. A finales del s. XVIII el proyecto de las autoridades municipales es completamente distinto: se pretende ahora establecer una administración duradera de las tres rentas de los propios que presentan una mayor vinculación con el mercado madrileño, el peso real, el fiel almotacén y el contraste marcador. En definitiva, se plantea la administración como modelo alternativo al arrendamiento en la explotación del patrimonio municipal.<sup>695</sup>

Esta actitud nueva de los responsables de los propios madrileños se basaba en dos experiencias de administración de rentas: la del contraste marcador realizada en 1779, y del fiel almotacén en 1784-85. En el primer caso la administración produjo durante un período de siete meses y tres días un total de 31.927 rs, de los que quedaron líquidos, una vez descontados los gastos de intervención, 22.135 rs. Como el arrendamiento anterior había estado fijado en 16.000 rs anuales, parecía claro el beneficio económico para los propios que la gestión directa había reportado. También la administración del oficio de almotacén mejoró los ingresos patrimoniales madrileños: entre el 20 de diciembre de 1784 y el 31 de diciembre de 1785 produjo 15.661 rs líquidos, cuando el importe del arrendamiento anterior era de 10.980 rs anuales. En suma, los responsables del ayuntamiento conseguían con la gestión directa de las rentas incrementar en torno al 50% los ingresos netos.

Pero más importante aún que esta mejora de los ingresos era, según informaba la Junta de propios en 1786 el verse libres de las constantes pugnas y pleitos entre los arrendadores de estas rentas que había tenido lugar desde 1766 en adelante, y que impedían que se percibiese el precio íntegro de los arrendamientos: "aunque en los remates que precedían a las subastas se ofrecían crecidas utilidades a favor de Madrid por las excesivas pujas que hacían los contendores, no se ha verificado que esta Villa perciba intacto ni a los respectivos tiempos el precio en que se remataban, pues sólo empleaban sus esfuerzos en

---

<sup>695</sup> Ibídem, y AHN, Sala de Alcaldes, 1790.

posesionarse de los arrendamientos y logrando ésta, dilatar y eludir la paga de los precios pactados, ya con pretexto de que el arrendador que acababa aunque sólo había recibido de su antecesor enseres que importaban quince mil reales quería obligar a su sucesor admitiese y tomase otros muchos que había construido voluntariamente durante el tiempo del arriendo que importaban un duplo o más, subscitándose de aquí pleitos que como quiera que éstos forzosamente habían de seguirse por los trámites ordinarios duraban todos los cinco o seis años porque se había arrendado el propio y aún mucho más, teniendo en estos casos que salir Madrid al seguimiento de estos pleitos, promoviéndose otro por el nuevo arrendador sobre si su contrato debe entenderse no empezar a correr desde el día en que verdaderamente se les da la posesión o si ha de ser cuando se decida el punto de la entrega de enseres que se le ha hecho o debido hacer, sin que les obste estas disputas para ir percibiendo los productos que rinde la finca, pero si les obsta para hacer las pagas puntuales que estipulan; ya en otros casos tergiversan las condiciones con que se ha verificado la subasta, dándolas la inteligencia que les acomoda para suponer perjuicios".

Estas y otras estratagemas eran constantes por parte de los arrendatarios de rentas. El resultado había sido una merma considerable de los ingresos que debían percibir los propios, ingresos que se veían dilatados por una maraña de pleitos y recursos jurídicos. Uno de los casos más destacados era el del ya citado d. Ramón Carlos Rodríguez, conspicuo fabricante de pesas y medidas, que había arrendado estas tres rentas: almotacén (entre 1778 y 1784), el peso real (1777-1781) y el contraste marcador (del 23 de octubre de 1772 al 31 de julio de 1779). Pues bien, sobre cada una de estas tres rentas había establecido diversos litigios que retrasaban el pago de los arrendamientos. Finalmente se llegó a un acuerdo entre la Junta de propios y Rodríguez en el que, incluso disminuyendo los precios de arrendamiento fijados, se llegaba a reconocer una deuda final a favor de Madrid de 118.481 rs.

Debido a estos antecedentes la Junta de propios insistió ante el Consejo de Castilla para que se procediese a la administración municipal de las rentas. El Consejo en un primer momento se resistió al abandono de la fórmula tradicional de gestión del patrimonio, el arrendamiento. Así, el 15 de diciembre de 1786 dictaminaba: "Dése orden al corregidor y Junta de propios de Madrid para que saquen inmediatamente a pública subasta por término de nueve días el producto del peso real y de los oficios de contraste y fiel almotacén, formando antes y arreglando condiciones claras y sencillas que remuevan toda ambigüedad, disputas y perjuicios en su inteligencia y cumplimiento, y dando cuenta de ellas al Consejo cuando lo

executen de los remates para su aprobación; y se habilitan los días feriados para las diligencias de dicha subasta". Tan perentoria orden suponía un claro retroceso hacia algo que el municipio había intentado con anterioridad sin que, como hemos visto, tuviera ningún éxito: la fijación de las condiciones de arrendamiento. Por otra parte el Consejo mostraba un especial interés en controlar la ejecución de dicha orden.

Fue la insistencia de la Junta de propios la que a lo largo del año siguiente consiguió que el Consejo modificara su postura. Para ello presentaron múltiples certificaciones de las ventajas económicas que se derivaban de la administración y de la gran cantidad de pleitos que mantenían los arrendadores. Pero este cambio de actitud del Consejo no supuso que se dejaran las manos libres a los regidores madrileños en el manejo de las rentas de propios. La administración real, cada vez más intervencionista y centralizadora en el tema de las haciendas locales, intentó controlar estrictamente esta gestión directa, que en definitiva suponía abandonar el sistema propugnado por la Contaduría General de propios y arbitrios. Por ello, un Decreto del Consejo de Castilla ordenaba en mayo de 1787 que la Junta de propios de Madrid estableciera unas "instrucciones, reglas y aranceles" para proceder a la administración, que debían ser aprobadas por el propio Consejo, lo que tuvo lugar por Auto de 16 de diciembre de 1789.

El esquema de la administración de estas tres rentas era muy semejante, por lo que tomo el ejemplo del peso real.<sup>696</sup> La gestión corría a cargo de tres dependientes: un administrador y dos oficiales, uno de los cuales desempeñaba el cargo de interventor. Las funciones del administrador eran amplias: "El administrador debe ser responsable de todas las funciones de la administración, y de consiguiente ha de tener la correspondiente intervención y conocimiento en unas como ejecutor de ellas y de su particular ejercicio, y en otras como inspector y celador de la observancia de las respectivas a los demás dependientes en las propias suyas, cuidando de la exacción de todos los derechos que se deben cobrar a los arrieros, trajineros, vendedores y demás personas que introduzcan géneros y especies con arreglo a lo que se exigió en el último arrendamiento." Se le encargaba de los libros donde se asentarán las entradas y salidas de esta renta, libros que eran foliados y rubricados por el secretario del ayuntamiento. Los ingresos anotados debían guardarse diariamente en un arca de dos llaves, una en poder del interventor y otra en manos del administrador, siendo entregados a final de mes al mayordomo de propios. El administrador debía, además,

---

<sup>696</sup> AVM-S, 3-403-25, 2-489-16 y 3-29-4 para cada una de las tres rentas.

presentar a la Junta de propios un estado trimestral de los ingresos y gastos del peso real, así como una cuenta general a fin de año. La dirección del resto del personal a sus órdenes y, en general, asegurar el buen funcionamiento de la renta completaban sus atribuciones.

Por su parte el interventor, además de sus obligaciones como oficial del peso real, debía llevar un libro de todas las entradas y salidas paralelo al del administrador, con el que debía cotejarse diariamente. También intervenía los recibos de los pagos del administrador al mayordomo de propios y todos los demás recibos. Era de su cargo repasar todas las cuentas y relaciones presentadas por el administrador, en las que aparecía obligatoriamente su firma. Finalmente, los oficiales, que “deben estar prontos a las horas señaladas para abrir el peso y formar los asientos que el administrador debe llevar en los libros, entender y despachar las cédulas para que el administrador e interventor las rubriquen...”. Este “nuevo” mecanismo de gestión del patrimonio quedaba así minuciosamente detallado, con lo que el Consejo de Castilla se aseguraba unos estrictos medios de control de las autoridades municipales.

El resultado, como se puede apreciar en los cuadros de ingresos de los bienes de propios que aparecen en el Apéndice 4, es una subida importante de estas rentas, muy destacada en el caso del peso real, que entre 1.790 y 1.794 alcanzó unos valores anuales superiores a los 60.000 rs, lo que prácticamente duplicaba los ingresos de los años anteriores. Se produciría en este período el cobro de deudas pendientes de arrendamientos precedentes, pero lo que parece evidente es que el sistema de administración directa -rigurosamente controlada por el municipio y el Consejo de Castilla- tuvo en principio una clara rentabilidad económica.

---

### 3 – LOS GASTOS DE PROPIOS

#### 3.1 - LA EVOLUCIÓN DEL GASTO MUNICIPAL

La funcionalidad primitiva de los ingresos de propios era cubrir los gastos ordinarios de los municipios. Ya he señalado anteriormente cómo en el territorio castellano se

---



mantuvieron como fuente de financiación predominante hasta los siglos XVI-XVII, en los que el incremento de las necesidades del concejo, motivadas en buena medida por el acoso de la Hacienda central, provoca que los arbitrios sobre el consumo se vayan convirtiendo en el principal soporte económico de la hacienda local. En el siglo XVIII el predominio de los impuestos indirectos sobre los ingresos patrimoniales se encuentra ya firmemente consolidado.

Madrid constituye uno de los casos extremos de tal situación. Sin embargo, determinar la proporción exacta resulta complejo por la ausencia de presupuestos municipales en el sentido actual. Para el siglo XVIII el reglamento de 1766 nos sirve como punto de referencia. Del total de los ingresos de la Villa, estimados en 11.717.383 rs, los bienes de propios contribuían con 236.575 rs, apenas el 2,02%. La situación se modificó parcialmente en los años posteriores: entre 1777 y 1781 las cantidades anuales percibidas por Madrid fueron de 11.370.426 rs: con un valor de 324.808 rs, los propios supusieron el 2,9% del total. Dado que en los años finales de siglo la hacienda municipal apenas incrementó sus cifras mientras los propios duplicaban las suyas, el porcentaje hacia 1.800 se elevó a un 4% aproximadamente. La tendencia parece mantenerse en el siglo XIX. Así parecen indicarlo los datos de 1.833: de los 15.044.326 rs que la Contaduría general de Madrid estimaba que había ingresado el ayuntamiento, el ramo de propios aportaba casi 800.000 rs, el 5,2%, una cantidad muy parecida, por ejemplo, a la del ramo de alumbrado público.

Se comprende que con tan corta participación presupuestaria la funcionalidad de los propios en la cobertura de gastos sea limitada. Claro que no es legítimo considerar ésta como la única aportación del patrimonio al municipio. Recapitulemos algunas más que han ido apareciendo a lo largo del presente trabajo: proporciona edificios para el abastecimiento urbano; sus pastos en las inmediaciones de la ciudad son aprovechados por el abasto de carnes; mediante los censos perpetuos aportó suelo edificable para la “primera expansión urbana” en los siglos XV y XVI; sus montes, mientras los tuvo, proveían a los vecinos de leña, el combustible tan indispensable; sus tierras suministran el principal medio de producción en muy variados tipos de explotación a diversos sectores sociales, desde los jornaleros hasta nobles rentistas; el rey podía -y así lo hará- extender su importante patrimonio en las cercanías de la Corte a su costa ... Aspectos todos ellos no cuantificables, pero de incidencia destacada y que demuestran que la funcionalidad del patrimonio municipal supera la aportación de rentas que su explotación produce.

---

En las relaciones de gastos se aprecia cómo los caudales de propios se distribuían en una serie de partidas fijas. Los salarios, las festividades, el pago de las deudas municipales, las contribuciones a la Real Hacienda, la conservación del propio patrimonio y un conjunto de diversas coberturas -entre las que se incluyen los gastos extraordinarios y anticipos de fondos- constituyen la aplicación de los ingresos patrimoniales. La modificación más destacada en la cobertura de tales partidas hasta 1766, fecha del reglamento de la Contaduría General de propios y arbitrios, es la práctica desaparición de la deuda que gravaba los propios al redimirse los censos entre 1764 y 1766, con motivo de la expropiación de los montes de El Pardo por la monarquía, que destinó parte del "caudal de El Pardo" a esta finalidad. Además dejan de consignarse desembolsos extraordinarios conforme evolucionan a la baja sus ingresos y así, en 1766 los gastos que tienen esta denominación son en realidad de mantenimiento.

El reglamento de 1766 modifica la proporción de los pagos, pero no su naturaleza, que permanece inalterada, manteniendo los propios los capítulos de gasto en los que se habían especializado anteriormente. Siguiendo su política de reducir el endeudamiento municipal, el Consejo de Castilla fomentó la constitución de "sobrantes" con los que atender el desempeño. En el caso madrileño y por lo que respecta a los propios, se redujo el volumen de caudales aplicados a los gastos municipales a 147.276 rs, tan sólo el 62,2% de los ingresos de este fondo. El resto, 89.299 rs, se destinaron a los "sobrantes" que librarían (en teoría, claro está) a Madrid de sus cargas.

El mecanismo de la consignación de buen número de gastos fijos, cuando son retribuidos normalmente -como salarios, festividades ordinarias, contribuciones, etc- permite al municipio disponer de un pequeño fondo para atender gastos extraordinarios o anticipar cantidades que luego han de ser reintegradas. De esta manera no se producen importantes desequilibrios presupuestarios en el ramo de los Propios, situación que se modifica con la notable disminución de ingresos en los años 40. La rigidez de las asignaciones de las cargas provoca el retraso en los pagos, elevándose considerablemente las deudas. La recuperación de los ingresos permitió de nuevo el equilibrio en los gastos ordinarios desde mediados de siglo, pero con una clara diferencia en relación a la situación de las primeras décadas: la completa incapacidad ya para afrontar cualquier tipo de desembolso extraordinario. Los ingresos de propios quedaban así estrictamente asignados a una serie de pagos en los que se habían ido concentrando a lo largo de la Edad Moderna.

---

### 3.2 – LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

A) GASTOS DE PERSONAL. La nómina de personas que cobraban de los fondos municipales era numerosa y se llevaba una gran parte de los gastos municipales. Ya he mencionado que no hay presupuestos propiamente dichos, pero de los 10-12 millones de reales a que ascendían los ingresos de la hacienda local, los salarios se llevaban cuando menos la décima parte. Claro que esta suma se abonaba tanto por las sisas como por los propios, manteniendo cada una de estas dos ramas una total independencia. Sólo así se explica que numerosos cargos tuvieran una consignación doble, recibiendo parte en propios y parte en sisas. Esta división se mantenía a todos los efectos, incluso en el caso de existir atrasos, que podían producirse en un fondo y no en otro. La causa parece radicar en el hecho de que las innovaciones o los incrementos salariales se realizaran asignando cada partida a la fuente de ingresos que mostrara mejor disponibilidad en ese momento determinado.

Voy a referirme, lógicamente, a la parte que de los bienes de propios se dedicaba a retribución del personal dirigente, funcionarios y demás empleados. Esta partida experimentó variaciones. En términos absolutos, de los 40.000 rs en torno a 1700 se pasó a más de 115.000 rs en la última parte del siglo. En términos relativos, el 15% del total de gastos de propios dedicados a salarios fue elevándose hasta un 59,1% en que quedó reglamentado en 1.766. Otra cosa es que se cumpliera esta normativa, pero en cualquier caso muestra una clara especialización de estos ingresos en la retribución de cargos y empleados municipales. Voy a dar una serie de datos que para su mejor valoración separaré en tres tramos.

*Hasta 1715:* en estos primeros años del siglo, los valores medios que se dedican a salarios rondaron los 40-50.000 rs, lo que representa un 15-16% de todos los gastos de propios. En el desglose del capítulo destaca la partida de salarios ordinarios, con un importe medio anual de unos 30.000 rs. Se incluye aquí lo pagado por "salarios ordinarios de trigo y cebada", es decir, la partida que antiguamente habían recibido en especie ciertos cargos municipales y cuyo valor oscilaba entre 1.500-1.800 rs. El corregidor, por su parte, recibía 4.400 rs como compensación de los gastos que le causara la regalía de aposento. Estos

ingresos de personal se ven complementados con otros dos conceptos, los aguinaldos y ayudas de costa y la "demasía de conejos". Consiste este curioso pago en la provisión de esta carne por parte del corregidor y regidores según la postura anual que realiza la Sala de Alcaldes de Casa y Corte del valor de los conejos que los arrendatarios de los sotos de los propios madrileños aportan para el abastecimiento municipal. Entre las fechas de San Juan y de San Miguel de cada año los arrendatarios se comprometían a llevar un determinado número de conejos diarios a la Sala de Alcaldes para que las autoridades municipales pudieran abastecerse a un precio inferior al de mercado, recibiendo además el valor de la carne que no quisieran comprar según tasación de la misma Sala (la "demasía de conejos").<sup>697</sup> Suprimida en el reglamento de 1715, su valor superaba el 10% del total de gastos de personal.

Los aguinaldos que repartía el mayordomo de propios cada Navidad alcanzaban normalmente los 5.000 rs. En su distribución se aprecia la condición de Villa y Corte, ya que no sólo alcanza al personal municipal, sino también a subalternos de las oficinas estatales, como los trece porteros de las dependencias reales (cámara y saleta) y de los distintos Consejos y Secretarías de Despacho.

*Entre 1715 y 1768:* en 1715 un real decreto, leído en el ayuntamiento de 21 de marzo, estableció un reglamento de los salarios del personal municipal. Se trata, pues, de una intervención estatal para regular y controlar el manejo de los caudales concejiles. El reglamento fijaba un gasto total en personal de 426.308 rs anuales, de los cuales el ramo de propios aportaba el 11,3%.<sup>698</sup> El salario más elevado era, por supuesto, el de corregidor, 40.000 rs, de los cuales 9.204 eran pagados de los propios. El cargo de regidor no fue remunerado inicialmente, pero ya el rey Enrique II lo fijó en 500 mrs al año.<sup>699</sup> En 1715 cada uno percibía 2.873 rs, siendo una décima parte consignada en los propios. Se trata de una retribución exigua para el sobresaliente alcance del puesto; a su poder y a los beneficios que permitía su ejercicio hay que atribuir entonces el interés –y el elevado precio resultante– por la compra del oficio.

---

<sup>697</sup> AHN, Consejos, leg. 6772, exp. 14. Véase la siguiente cláusula del arrendamiento del soto de Negralejo en 1701: "Que la persona en quien rematare ha de tener obligación a dar seis conejos desde el día de San Juan hasta el día de San Miguel de cada año todos los días de carnal, en la forma que es costumbre para los señores corregidor y caballeros regidores a quien se han de dar a precio de dos reales y cuartillo. Y si quisieren dinero por ellos lo han de dar al respecto de la postura de la Sala de los señores Alcaldes". AVM-S, 3-75-5

<sup>698</sup> AVM-S, 2-311-5

<sup>699</sup> GIBERT, R.- *El Concejo de Madrid*, p. 134

Los propios aportaban además parte de los sueldos de otros destacados miembros del ayuntamiento: 319 rs de los 2.932 del alférez mayor, 2.466 rs de los 13.000 del procurador general, 1.760 rs de los 4.400 de su teniente o 1.533 rs a cada escribano mayor. La intervención es más reducida o nula en los empleados en las oficinas de contadurías y tesorerías. Los funcionarios encargados del manejo de los propios percibían sus honorarios exclusivamente de este fondo: el mayordomo 6.600 rs y el contador de propios 588 rs. Lo mismo sucedía con otros salarios de cuantía escasa y en los que en ocasiones se han integrado ingresos que antes percibían en concepto de aguinaldos, por lo que no es de extrañar que este fondo experimentara un descenso considerable, quedándose reducido a 1.746 rs anuales.

Las retribuciones más bajas correspondían a personal menos cualificado o con dedicación parcial: procurador del número de Madrid (442 rs), porteros del ayuntamiento (2.183 rs), el de la contaduría de cuentas (352 rs), alcaide de la carnicería mayor (588 rs), guardarropa (410 rs), portero del matadero (264 rs), obrero de Madrid (350 rs) y guardas de montes (2.819 rs). Caso curioso era el de los tres sacristanes de las iglesias de San Salvador, Santa Cruz y San Sebastián, que se repartían 300 rs anuales por avisar con las campanas cada vez que se produjera un incendio; el del relojero, con 1.100 rs por el cuidado de los relojes de la iglesia de San Salvador y de la Casa Panadería, o el del gremio de carpinteros matafuegos, que percibían de los propios 440 rs de un total de 1.940 rs que sustituían los anteriores tres toros muertos en cada fiesta que tenían adjudicados.

En conjunto, pues, tuvo lugar un aumento del gasto de salarios en el fondo de propios. A ello hay que añadir la elevación de determinados honorarios en los años siguientes. Los primeros en conseguirlo fueron los regidores, recibiendo cada uno, por resolución real de 12 de mayo de 1721, 4.400 rs anuales.<sup>700</sup> También el corregidor subió su sueldo en los propios a 10.002 rs desde el 10 de septiembre de 1735. El resto no experimentó más que algunas modificaciones poco destacadas. Así, en 1745 los gastos correspondientes a este capítulo se regulaban en 57.192 rs.<sup>701</sup>

Sin embargo, al analizar las cuentas de este período se observa una cuantía mayor: entre 1717-1721 y 1729-1740 el valor medio anual supera los 63.000 rs. La causa radica en el

---

<sup>700</sup> AVM-S, 1-463-1

<sup>701</sup> AVM-S, 3-8-7

elevado valor de las comisiones de regidores en asuntos de propios, especialmente la de montes. En el primer período considerado los gastos de la comisión de montes ascendieron a 72.011 rs y a 113.871 entre 1729-1740. Además, hay que tener en cuenta que a partir de 1722 desaparece de las cuentas el concepto de sueldos atrasados, pero no porque no los hubiera, sino porque se integran dentro de las demás retribuciones. Este incremento salarial tiene lugar en unos valores totales estancados hasta 1728 y en franca disminución a partir del período 1729-40, lo que supone que su participación porcentual en el total de los propios sea cada vez mayor: desde el 20% tras el reglamento de 1715 hasta constituir más de una tercera parte en los años cuarenta.

La crisis de ingresos de los propios a partir de la década de 1740 repercute en los pagos y en concreto en los salarios se observa cómo entre 1741-1744 el valor medio ha disminuido en una quinta parte con respecto al período anterior, situándose en 50.000 rs. En los años siguientes la situación es crítica, pues se añade el desconcierto administrativo que provoca la gestión de una Junta de Administración de propios, organismo que durante un breve lapso de tiempo sustituirá al mayordomo, tradicional encargado del patrimonio (y cuyas funciones se analizarán en el capítulo 8). En 1745 se pagó sólo tres cuartas partes de lo consignado, si bien son los empleados municipales los que salen peor parados al recibir la mitad de sus honorarios, mientras el "regimiento" mantiene sus ingresos, lo que no conseguirá lograr en 1746, cuando los propios sólo puedan abonar el 60% de los salarios consignados.

Los atrasos en las retribuciones de los propios no eran una novedad. En los primeros años del siglo XVIII se destinan ciertas cantidades al pago de estas deudas, con cantidades muy variables, ya que dependen del estado de los caudales: entre 1708 y 1710 se dedicaron más de 5.000 rs anuales a este fin, cifra que desciende por debajo de los 400 rs en el trienio siguiente. A partir de 1722 los atrasos dejan de señalarse independientemente en las cuentas, englobándose dentro del concepto general de salarios. Todo hace pensar que hasta la década de los 30 los propios pudieron afrontar con ligeras irregularidades el pago del personal municipal. Buena parte de las deudas existentes hasta entonces se deben a los retrasos de un año para otro, lógicos si tenemos en cuenta la escasa participación porcentual de los propios en algunos cargos.

---

En 1742 los retrasos salariales se estiman ya en 26.894 rs.<sup>702</sup> Los años siguientes supusieron un incremento, dado el desajuste entre lo consignado y lo pagado. Las peticiones de pago de deudas por parte del personal afectado son muy numerosas. Seleccione algunas: entre 1744 y 1746 los regidores dejaron de percibir más de 21.000 rs. Un acuerdo del ayuntamiento de 24 de enero de 1748 dio prioridad a estos atrasos, ordenando que se liquidara a los capitulares y abogados de Madrid con fondos procedentes del alcance que resultó contra el que fuera mayordomo de propios, Ensebio de Sabugal, y que en parte pagó su sobrino Marcos de Sabugal. Al maestro mayor de obras de Madrid, el arquitecto Juan Bautista Sachetti, se le debían en 1751 el importe de cuatro años de un salario anual de 2.353 rs.<sup>703</sup>

En la década de los años cincuenta se recupera el nivel de los gastos de sueldos (por encima de los 60.000 rs) conforme se van elevando los ingresos. Los propios volvieron a satisfacer su participación en la retribución del personal municipal. Persistieron, sin embargo, algunos atrasos. El 31 de diciembre de 1757 la contaduría de causa pública informaba de que los propios debían a los dependientes de Madrid 39.039 rs, aunque cabe suponer que buena parte serían pagos atrasados del mismo año y no exactamente deudas. Según la misma oficina, a finales de 1762 los atrasos ascendían a 23.181 rs, aunque más de la mitad correspondían a un solo cargo, el alférez mayor, con 12.343 rs, importe de 27 años de su asignación en propios.<sup>704</sup>

*A partir de 1766:* el reglamento aprobado por el Consejo de Castilla ese mismo año marcaba una rígida distribución de los caudales. En lo que se refiere a salarios se aprecia un incremento, lo que unido a la disminución del total destinado a gastos por la aplicación de buena parte de los fondos de propios a los sobrantes, explica su muy destacada participación porcentual, que ya se acerca al 60%. El Consejo de Castilla destinó 87.131 rs de los ingresos procedentes del patrimonio municipal al pago de salarios. El incremento con respecto a 1755 es de casi el 40%.

La distribución de los sueldos muestra las mismas líneas generales que en 1715. Al corregidor correspondían en propios 11.100 de los 77.100 que percibía, y al cuerpo capitular 16.326 de sus 180.400 rs. En conjunto se aprecia una muy importante participación de los

---

<sup>702</sup> AVM-S, 3-8-4

<sup>703</sup> AVM-C, 1-524-1

<sup>704</sup> AVM-C, 1-130-1

miembros más destacados del equipo de gobierno municipal en el conjunto de rentas salariales, ya que ambas partidas suponen la tercera parte del total. El resto afecta prácticamente al mismo personal que en las consignaciones anteriores, con pocos cambios que obedecen a la política municipal de mantener los esquemas de distribución de los distintos ramos que integran su hacienda. Como partidas más destacables se encuentran el aumento de la retribución de los porteros del ayuntamiento a 16.000 rs, todos ellos en propios, o los 8.000 rs que reciben los oficiales mayores y segundo de la Secretaría municipal no enajenada. Los puestos menos cualificados o con dedicación laboral parcial mantienen o elevan ligeramente sus ingresos: alcaide de la armería mayor, guardarropa, obrero de Madrid, relojero... Por su parte, los gastos de comisiones se reglamentaban en 6.600 rs de los 16.500 rs que percibían los miembros de la Junta municipal de propios y arbitrios, además de los 1.100 rs de la comisión de cera. Se suprimió la de montes, que recibía anualmente 3.400 rs al haber sido comprados por el erario real (expropiación de los montes de El Pardo).

La participación de los propios en los 970.495 rs que el reglamento atribuía para el pago del funcionariado municipal era del 9%, proporción ligeramente inferior a la de 1715. El aumento no muy elevado pero sostenido de los ingresos procedentes de los bienes concejiles en el último tercio del siglo XVIII va paralelo al de los gastos salariales, su principal destino presupuestario tras el reglamento. Así, en 1781 los propios aportaban la décima parte del total de 1.120.509 rs a que ascendían los haberes del personal. El incremento del gasto en esta partida de los propios se debía menos a los incrementos salariales que a la aparición de nuevas partidas que, en una situación más favorable de los propios, se consignaban sobre ellos. A los dependientes del archivo se destinaban 11.550 rs; 4.880 rs a los gastos de los dos repesos de Villa y Corte, y 1.430 rs al pregonero. Otros gastos, como los 1.825 rs pagados al guarda del Soto de Migascalientes o los 1.200 rs al administrador de la dehesa de la Serena, reflejaban las nuevas propiedades incorporadas por el ayuntamiento. Los 11 porteros aumentaron sus ingresos a 24.090 rs, mientras en el resto apenas hay alteraciones destacables con respecto al reglamento.<sup>705</sup>

B) GASTOS DE FESTIVIDADES. La celebración de festividades es un destacado servicio del municipio del Antiguo Régimen. En el caso madrileño su relieve es todavía mayor por la resonancia que tienen las actividades en la Corte. Además de las fiestas locales, la Villa celebra con fastuosidad las entradas y salidas de los reyes y familiares, sus bodas,

---

<sup>705</sup> AVM-C, 4-223-2



defunciones, dolencias y demás sucesos de la familia real. También determinados acontecimientos que afectan a la vida política de la monarquía española: victoria militares, tratados de paz, acuerdos diplomáticos.... El resultado es una importante detracción de ingresos municipales en gastos de festividades, cuya magnificencia repercute en sus arcas y por tanto en los bolsillos de sus ciudadanos.

Durante la primera mitad del siglo XVIII el aporte de los propios a las festividades religiosas y profanas oscilaba entre 40.000 y 50.000 rs anuales. Además de los gastos de celebración, esta cantidad incluía otras partidas. En primer lugar la asistencia del cabildo municipal a fiestas y procesiones, que resultaba cara ya que recibían como obsequio "boletas de dulces", cuyo origen se remonta a 1692, fecha en que se suprimieron por su excesivo importe los refrescos que recibían los regidores madrileños.<sup>706</sup> Su valor se situaba en unos 10-12.000 rs anuales. Otro tanto suponían los músicos y ministriles de las funciones, registrándose incluso danzas en varias procesiones, aunque se tendía a su supresión. En tercer lugar, no hay fiesta religiosa sin cera. Para este gasto se había consignado una cantidad anual en los arbitrios. El mayordomo de propios percibía de las arcas de sisas 11.746 rs que distribuía entre los cereros. Si la consignación no resultaba suficiente los propios aportaban la diferencia (el denominado "residuo de la cera"), cuyo coste se evaluaba en 1745 en 12.250 rs.<sup>707</sup>

Los gastos de toros que aparecen en las cuentas de los años 1704-1728 se refieren al reparto de tablados para el cuerpo de ayuntamiento en las tres fiestas de toros extraordinarias de cada año. Su importe ascendía anualmente a 7.506 rs, si bien hay irregularidades en el último periodo en que se registran expresamente como tal concepto.

Había otras fiestas no financiadas por los propios. La más importante era la del Corpus,<sup>708</sup> atendida con 54.400 rs que en 1715 se consignaron sobre los caudales de sisas, cantidad que una real orden de 29 de enero de 1755 amplió a 58.000 rs.<sup>709</sup> Con un valor que igualaba o superaba al resto de los actos religiosos a los que asistía el cabildo, sus pagos eran

---

<sup>706</sup> AVM-S, 3-84-7

<sup>707</sup> AVM-S, 3-8-7

<sup>708</sup> Sobre el significado institucional de esta procesión en Madrid, RIO BARREDO, M. J. del- *Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica*, Madrid, 2000, págs. 205-233.

<sup>709</sup> AVM-C, 3-80-1

realizados por el mayordomo de propios, que recibía 751 rs como comisión por su trabajo. El reglamento de 1766 impuso una drástica reducción en este capítulo. Todas las festividades, a excepción del Corpus y de la de Todos los Santos eran abonadas por los propios. Su importe total era de 21.204 rs, es decir, menos de la mitad que en los años anteriores. Las celebraciones más destacadas eran las de los patronos de la Villa, San Isidro (2.300 rs) y Santa María de la Cabeza, con mil rs menos. Se suprimieron los gastos de cera y música en algunas funciones y todas las "boletas de dulces". La consignación de los gastos de cera, por su parte, se fijaba en 21.466 rs, pagando los propios 9.701 rs. Otros gastos causados en estas fiestas, como recompensas a predicadores o esterado para actos públicos se recogen en el apartado de gastos menores.

---

**CUADRO 23 – GASTOS DEL CORPUS, AÑO 1735**

CAUDAL CONSIGNADO: 54.400 RS

<b>CONCEPTO</b>	<b>ASIGNADO</b>	<b>GASTADO</b>
CERA	17000	14338
MUSICA	2200	1850
DANZAS	2200	600
VESTUARIO DE NIÑOS	3300	3300
COLGADO DE TOLDOS	6000	4800
EMPERCHADOS	2500	2230
FIESTA DE SAN DAMASO	768	728
TARASCA	1400	2212
VESTIDOS DE DANZAS	3300	7662
COMPOSICION DE GIGANTES	600	1442
TAPICES	1000	844
PLATERO	460	150
MUSICA DE LA CAPILLA REAL	1100	1100
INDIVIDUOS DE LA CAPILLA	426	1798
COMISION	4400	4400
ALGUACIL MAYOR	400	400
MINISTROS	480	480
PORTEROS	350	350
PAJES	480	480
EXTRAORDINARIOS	6000	5234
<b>TOTAL</b>	<b>54364</b>	<b>54398</b>

FUENTE: AVM-C, 3-529-10

Ya se ha comentado anteriormente que el municipio tampoco era ajeno a las conmemoraciones reales -bodas, embarazos, bautizos, funerales- ya que en estos momentos es la dinastía la que legitima en última instancia la naturaleza del Estado. Y como la dinastía implica "pactos de familia" los madrileños debían contribuir para celebrar las honras fúnebres de sus reyes, pero también las defunciones de delfines y reyes franceses. Unos cuantos ejemplos: 28.304 rs con ocasión del fallecimiento de Carlos II, 81.542 rs por los delfines de Francia en 1711 y 1712, 17.910 rs por la reina María Luisa de Saboya, mientras los funerales de Luis XIV en 1715 costaron 20.602 rs. En 1715 se registra el pago por los propios de las honras fúnebres del rey de Portugal, con la escasa cuantía de 2.802 rs.<sup>710</sup>

El mayor desembolso tuvo lugar con motivo del doble enlace dinástico entre la infanta Mariana Victoria con Luis XV y Luis I con Luisa Isabel de Borbón en 1712. El rey mandó a Madrid propusiese fiestas en celebración de tan gloriosos matrimonios. Se realizaran, en efecto, con todo lujo, ascendiendo su coste a la elevada cantidad de 468.224 rs, cifra que prácticamente equivalía al total de gastos de propios en dos años. Para amortizarlo se recurrió a empeñar el producto del peso de la harina, la renta más saneada del patrimonio municipal por esas fechas.<sup>711</sup> Resultaba que todos los ingresos anuales procedentes de las fincas, casas, rentas y censos de la ciudad de Madrid no alcanzaban para agasajar un día a un rey.

C) DEUDA. Varios componentes integran este capítulo del gasto. Destacable es la particularidad que va a presentar el patrimonio municipal madrileño en lo que se refiere a su relativamente escaso endeudamiento por vía censal; es en el capítulo de las sisas municipales donde hay que buscar el extraordinario grado de endeudamiento madrileño.

*Censos sobre los propios.* En Madrid el endeudamiento municipal se produce desde el s. XVII preferentemente recurriendo a los arbitrios. Las elevadísimas exigencias de la hacienda real obligan a la imposición constante de sisas que recauden el dinero adelantado por los efectistas o censualistas. El abastecimiento de una población en rápido crecimiento y las reformas urbanas provocadas por el establecimiento de la Corte aumentan las necesidades de crédito. El papel de los propios se limitaba, como se ha visto en el capítulo 5, a servir de garantía hipotecaria de estos créditos. Pese a la incapacidad municipal de hacer frente al gran

---

<sup>710</sup> AVM- S, 3-32-89, 4-127-1 Y AVM-C, 2-449-2, respectivamente

<sup>711</sup> AVM-C, 3-626-3

volumen de deuda que suponen los efectos de sisas, que se manifiesta en constantes y prolongados atrasos en sus pagas, el patrimonio hipotecado no sufre desmembración, manteniéndose intacto. Los censualistas no suelen recurrir a los derechos que le correspondían sobre la prenda de cobertura del préstamo, y cuando lo hacen el municipio consigue el apoyo real para evitar la enajenación de los bienes patrimoniales. Así, aunque Manuel Ther de los Ríos, el marqués de Pozobueno y el marqués de San Miguel de Gros, censualistas en la sisa del cuarto de palacio, procedieron contra los propios, obteniendo sentencia a su favor, las reales resoluciones de 25 de agosto de 1755 y 9 de noviembre de 1760 paralizaron el proceso, ordenando se abstuvieran de reclamar el cobro de atrasos.<sup>712</sup>

Por lo que respecta a la deuda específica del patrimonio, los censos sobre los propios, fueron redimidos con el caudal procedente de la expropiación de El Pardo, operación que ha sido ya analizada (capítulo 6).

*El empeño del peso de la harina.* La pignoración de los ingresos producidos por el peso de la harina es un recurso utilizado frecuentemente por el municipio a comienzos del siglo XVIII para afrontar gastos extraordinarios y muy costosos, habitualmente relacionados con las exigencias reales, más que con la cobertura de servicios a la población. La Villa toma a préstamo las cantidades necesarias y empeña los ingresos de su renta de propios más importante hasta la extinción del capital con los intereses. Al decaer los ingresos del peso de la harina en la década de los años 1730 -hasta llegar a convertirse en una renta deficitaria-, desaparece un medio utilizado frecuentemente para afrontar desembolsos extraordinarios por los propios.

El peso de la harina estuvo pignorado a pagos como los 400.000 rs con que Madrid sirvió a Felipe V en 1706, los 82.210 rs que costaron las honras fúnebres de los delfines franceses en 1711 y 1712, los gastos de las bodas de Luis I con Luisa Isabel de Borbón y de la infanta María Ana Victoria con Luis XV en 1721. En definitiva, de esta manera se cercena la tercera parte de los ingresos de los propios que llegó a producir esta importante renta en el servicio a la monarquía.<sup>713</sup>

---

<sup>712</sup> AGP, leg. 1251, exp. 7

<sup>713</sup> AVM-S, 1-463-1, AVM-C, 3-626-3 y 4-256-5

D) CONTRIBUCIONES. Varios edificios municipales no destinados al gobierno o la administración estaban sujetos al pago de la regalía de aposento, contribución que oscilaba hasta 1715 entre 2-3.000 rs, suponiendo apenas el 1% de los gastos totales. Pese a ello el ayuntamiento no se mostró como un contribuyente modelo, pues en 1699 la Junta de Aposento procedió al embargo de diferentes propios por una deuda de 35.026 rs procedente de varios locales concejiles.<sup>714</sup>

Al incorporar tierras pertenecientes a los propios de Madrid en el ensanche de La Zarzuela, el Real Erario utilizará como medio de indemnización al municipio exonerar a sus edificios de la carga de aposento, una forma de pago con la que el fisco se evitaba tener que desembolsar dinero en efectivo. El Real Decreto de 22 de julio de 1715 subrogaba a los propios en el derecho de casa de aposento que pagaba por los 11 escritorios del número, casa matadero, mesón de la Villa, casa de la calle de las Postas y carnicería de la plazuela de Antón Martín, cuya cantidad ascendía a 2.872 rs anuales.

Se redimían asimismo los derechos que en tal concepto pagaban las sisas por el mesón del Gallo (incorporado a la casa Aduana), otros locales agregados al mismo edificio, corral de la Cruz, corral del Príncipe y el sitio donde se hallaba la fuente de la calle de Preciados, con un importe anual de 1.881 rs. Por último, los 1.245 rs que faltaban por completar los 6.000 en que se tasaron las tierras de Madrid, se librarían anualmente de los efectos de la regalía.<sup>715</sup> El pago de esta compensación fue muy irregular, motivando reclamaciones del ayuntamiento hasta que en 1791 se procedió a la liquidación definitiva.<sup>716</sup>

El oficio de contraste marcador pagaba 70 rs al gremio de cerrajeros madrileños por los derechos de alcabalas. Por su parte, las caballerizas de la Casa Panadería contribuirían al gremio de mesoneros por el mismo concepto con más de 150 rs anuales. Entre 1741 y 1744 se cita al mesón de Villa aunque al no aparecer en más ocasiones es de suponer que su pago fuera a cargo del arrendatario. También aparecen algunos valimientos a la Hacienda real. En 1733 y 1739 se reclamó a los propios el pago de 18.991 rs por los sotos y dehesas, lo que motivó la protesta municipal.<sup>717</sup>

---

<sup>714</sup> AGS, Secr. y Superintendencia de Hacienda, leg. 435

<sup>715</sup> AVM-S, 3-32-89

<sup>716</sup> AVM-S, 2-406-82

<sup>717</sup> AVM-S, 1-463-1

Por lo demás, los propios madrileños aparecen libres de otras contribuciones. La causa la supo explicar a la perfección la contaduría de cuentas el 6 de mayo de 1795 en un informe al corregidor: "hace presente la contaduría a V.S.I. que no resulta en ella hayan contribuido los propios de Madrid a los impuestos de millones, cientos, alcabalas, dotación de los señores ministros del Consejo, reedificación de la casa que ocupan, creación o dotación de la Contaduría general de propios del reino ni otras gabelas, y parece deberán ser ausentes de cualquier otra contribución, así porque sus productos escasamente alcanzarán o realmente no alcanzan a cubrir sus cargas, como porque éstas son y ceden en obsequio del soberano y adorno y policía de su Corte (como es público y notorio)".<sup>718</sup> Realmente, ¿podía pedir la Hacienda real más contribuciones a los propios madrileños?

E) GASTOS DE MANTENIMIENTO. El patrimonio municipal es costoso de mantener, llegando a suponer el 20% de todos los gastos de propios, aunque con grandes fluctuaciones: si a comienzos del XVIII se elevan a 45-60.000 rs, entre 1717 y 1721 el valor medio supera los 82.000 rs, de los que más de la cuarta parte se destinaban a reparaciones. Posteriormente vuelven a decaer, aunque resulten difícilmente creíbles los 10.000 rs que aparecen en 1745, tanto si lo comparamos con los valores anteriores como si tenemos en cuenta la estimación de 30.000 rs de 1766.

Las razones de este costoso mantenimiento se encuentran, en primer lugar, en la práctica del arrendamiento. Los arrendatarios se despreocupan de la conservación de los bienes de los que únicamente les interesa obtener el máximo rendimiento posible, como se reitera en los informes de los mayordomos de propios y otros gestores municipales. La dispersión espacial de los propios, por su parte, dificulta la tarea de vigilancia y control directo. Pero la causa más profunda de que al municipio le resulte dificultoso y caro preservar su patrimonio se encuentra en el conjunto de presiones a las que está sometido. Dejémoslo más claro: las tierras son el objeto de interés de varios sectores que convergen en un punto, la ocupación. Los labradores y pequeños propietarios practican las roturaciones de terrenos abandonados, los vecinos nobles pleitean sobre estos términos, los concejos aldeanos pugnan por aprovecharse de estos bienes.

---

<sup>718</sup> AVM-S, 2-366-19

Que la práctica del arrendamiento era perjudicial para la conservación de los propios lo demuestran multitud de quejas y, sobre todo, el volumen de los gastos de reparación de determinados bienes en comparación con los ingresos que producían. Un dato: los arreglos y construcción de nuevas barcas en Arganda, costeados a medias entre Madrid y dicha localidad, supusieron para los propios 7.230 rs anualmente entre 1729 y 1745,<sup>719</sup> mientras los ingresos por tal concepto eran de unos 10.700 rs.

El caso de los hornos de Villanueva en el Pósito permite precisar la elevada cuantía que los gastos de administración y las reparaciones suponían sobre el monto total de ingresos. Al tratarse de un edificio administrado directamente por el mayordomo, que tenía su correspondiente emolumento, los gastos que generaban las obras de mantenimiento y reforma eran pagados directamente por él, a diferencia de los que sucedía en otros bienes en que eran abonados por los arrendatarios, descontándose luego del precio final.

---

<sup>719</sup> AVM-S, 3-8-4



**CUADRO 24-INGRESOS Y GASTOS EN LOS 42 HORNO DE VILLANUEVA, 1682-1737 (RS)**

<b>AÑOS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>GASTOS</b>	<b>LIQUIDO</b>
1682	19.444	9.735	9.709
1683- 1 MAYO 1685	53.961	5.400	48.561
2 MAYO 1685-1689	86.342	17.470	68.872
1690-1696	124.200	82.028	42.172
1697-1699	75.600	59.079	16.521
1700- 28 SEPTIEMBRE 1704	119.700	86.897	32.803
29 SEPTIEMBRE 1704-1707	81.900	32.986	48.914
1708-1710	75.600	37.832	37.768
1711-1713	75.600	38.816	36.784
1714-1716	75.600	53.619	21.981
1717-1721	126.000	86.427	39.573
1722-1728	176.400	108.346	68.054
1729	19.550	11.873	
1730	17.150	11.793	5.357
1731	18.075	11.191	6.884
1732	18.900	10.288	8.612
1733	19.350	10.077	9.273
1734	18.840	21.563	-2.723
1735	24.025	11.999	12.026
1736	23.475	11.027	12.448
1737	23.725	11.379	12.346
	<b>1.273.437</b>	<b>729.825</b>	<b>543.612</b>
<b>MEDIA ANUAL</b>	<b>22.740</b>	<b>13.033</b>	<b>9.707</b>

FUENTE: AVM-C, 3-294-4

El alquiler de cada horno ascendía a 600 rs anuales, por lo que los ingresos teóricos anuales deberían ser de 25.200 rs; los ingresos medios reales eran sin embargo de 22.740 rs, apenas un 10 % inferior, debido a la ausencia de alquiler de ciertos hornos en algunos años. Por su parte, los gastos de administración suponían 1.100 rs que cobraba anualmente el mayordomo de propios por encargarse de su alquiler y demás trámites; el resto de los gastos corresponden a obras de reparación que se realizaron. En total, el 57 % de todos los ingresos se esfumaban por término medio en este tipo de gastos, que en algunos períodos todavía era mayor: entre 1700-1704 y 1714-1721 ascendieron nada menos que al 70% de lo producido por su arrendamiento, llegando en el año de 1734 a ser deficitarios por la reedificación de dos hornos. Pero todavía habría que descontar de los ingresos líquidos los 62.557 rs en concepto de deudas de los inquilinos se habían acumulado durante todo este período. En suma, las arcas de los propios ingresaron de este importante equipamiento urbano un total de 481.055 rs, lo que significa un 37'7% de los ingresos totales que generaron, y que se reducen todavía más a tan sólo el 34 % de los ingresos totales potenciales que hubieran podido obtenerse en caso de ser completamente arrendados.

Por otra parte hay que tener en cuenta la práctica muy extendida de que el arrendatario realizara por su cuenta las obras de reforma necesarias, previa licencia municipal, siendo su importe descontado del precio del arrendamiento, lo que hace que los registrados en las cuentas como gastos de conservación no sean todos los que en realidad se produjeron.

La defensa de las tierras de propios frente a las constantes ocupaciones dio lugar a las visitas y apeos del personal municipal, de elevado coste. La que tuvo lugar en 1717 en los términos de Las Rozas y Aravaca supuso un desembolso de 13.541 rs, siendo considerada poco costosa en comparación a otras.<sup>720</sup> Las visitas a los sotos son obligatorias antes y después de cada arrendamiento con la finalidad de comprobar su estado.

En 1766 el reglamento no estableció una partida concreta para afrontar los gastos de conservación y defensa jurídica del patrimonio. Estos debían englobarse dentro de los "gastos ordinarios y extraordinarios eventuales y no fijos en su importe", cuyo importe se fijó en 200.000 rs, correspondiendo 30.000 rs a los propios. El Consejo de Castilla limitó el 11 de diciembre de 1771 la cantidad total a 138.800 rs al haberse agotado algunas de las partidas

---

<sup>720</sup> AVM-S, 3-41-46

especificadas. En noviembre de 1777 se volvió a la asignación de 200.000 rs tras una petición en este sentido del corregidor madrileño. Los gastos de mantenimiento del patrimonio tanto en pleitos como en administración o reparaciones se pagaron del fondo de 30.000 rs para extraordinarios. Sin embargo, un acuerdo de la Junta de propios de 20 de abril de 1792 estimó que "los gastos legítimos judiciales y extrajudiciales hechos por el mayordomo de propios para su conservación y defensa, que es un gasto preciso de todos los años de mayor o menor cantidad, no se pueda ni deba librar sobre la cantidad librada en el reglamento y orden precisa del rey para los gastos eventuales y no previstos que ocurren en todo el año". La contaduría de cuentas se mostró contraria a cambiar el método seguido hasta entonces, por lo que la Junta cambió de opinión.<sup>721</sup>

F) GASTOS EXTRAORDINARIOS Y ANTICIPOS. En estas dos partidas se agrupan todos los gastos no expresamente consignados en los caudales municipales. Tienen una incidencia destacada entre 1722 y comienzos de los años 40; a partir de entonces la crisis de los ingresos (especialmente de la renta del peso de la harina) impide que las autoridades municipales puedan recurrir a los propios para afrontar desembolsos no previstos. La mayor importancia de los gastos extraordinarios tiene lugar entre 1722-1728, con un valor anual superior a los 10.000 rs. Son partidas muy variadas y heterogéneas, desde el alquiler de la casa escuela Pía para fomentar sus tareas docentes hasta el pago de las banderillas utilizadas en las festividades de toros de la Plaza Mayor.

En los anticipos se reúnen los fondos que los propios aportan en "calidad de reintegro" y que por lo tanto deben ser devueltos. En los doce años comprendidos entre 1729 y 1740 se pagaron 420.968 rs bajo esta condición, lo que representa un nada desdeñable 16,1% del total de los gastos del período. La partida más importante en este sentido -y que constituye uno de los desembolsos más elevados realizados por los propios en todo el siglo XVIII- fue el pago de la comisión del ayuntamiento madrileño que, por encargo de las autoridades reales, llevó a cabo el encabezamiento de alcabalas y cientos del reino de Sevilla. El consistorio celebrado el 4 de junio de 1732 acordó que era "urgentemente preciso se supla el gasto que se causase por esta comisión por ahora y interin que de la referida dependencia se reintegra a la bolsa de propios". El mayordomo viajó en la comisión realizando todos los desembolsos necesarios. El

---

<sup>721</sup> AVM-S, 3-31-12

gasto total ascendió a 251.559 rs, a los que hubo que añadir los 5.477 rs causados en otro viaje de encabezamiento del municipio a Balsaín. El mayordomo informaba en 1742 que no se había realizado el reintegro de dicha cantidad, lo que no consta tampoco en las cuentas posteriores.<sup>722</sup> Como se ve, los límites entre la hacienda real y la municipal podían quedar muy difusos en algunas ocasiones.

G) OTROS GASTOS. Se agrupa aquí un conjunto de gastos difícilmente clasificables y en general de escasa cuantía. Son, por ejemplo, los 4 rs diarios que los propios satisfacían en concepto de capellanía de la cárcel o el pago de algunas ejecuciones públicas. Así, en las cuentas de los años 1722 a 1744 se registra el pago de ejecuciones y autos de fe por parte del mayordomo de propios, con un valor anual en torno a 1.000 rs. No aparecen más noticias en las cuentas de los años siguientes, aunque en la documentación se encuentran algunos casos más tardíos.

Otra parte de este capítulo estaba formado por los denominados gastos menores, un conjunto de pequeños gastos de funcionamiento y limosnas pagadas por los propios: la iluminación de los dos principales edificios concejiles, las Casas del Ayuntamiento y la Casa Panadería (con un coste de unos 1.000 rs anuales) o el esterado de las dependencias municipales.

---

<sup>722</sup> AHN, Consejos, leg. 71, e. 9 y AVM-S, 2-388-83 y 3-115-28

## **CAPITULO 9 - LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**

Ya he hecho referencia en el primer capítulo sobre la formación de la Villa y Tierra de Madrid al proceso de formación y a la naturaleza del gobierno concejil. Conviene en este momento recordar algunos de sus principales rasgos.

Con anterioridad a 1345, la monarquía castellana no logró imponer sus pretensiones a unos "concejos abiertos" que disfrutaban de una autonomía basada en su propio origen foral. A partir de aquella fecha irán cristalizando los intentos de uniformizar el gobierno de las corporaciones locales por parte de un poder real que no deseaba verse expuesto a una precariedad fiscal. La progresiva designación de regidores y corregidores estaría encaminada a sanear la administración municipal y a evitar una evidente conflictividad político-social. Pero si estos eran los objetivos, no cabe duda que la realidad social de los concejos castellanos impuso su dinámica. Así, antes del reinado de Alfonso XI y la generalización de los regimientos, el poder concejil estaba en manos de una clase social bastante dinámica, como era la caballería popular y la pequeña nobleza. Con la instauración de los regidores, una fracción de este grupo tendió a monopolizar los aparatos de poder local, lo que dio origen a enfrentamientos en el seno de dicha clase. Pero encuentran un poderoso factor de unión en la exclusión del "común de vecinos" y sus representantes. El resultado es el progresivo cierre de los municipios, controlados por un grupo de "poderosos", una oligarquía urbana que irá integrando en su seno a los grupos sociales más dinámicos.

Por su parte, el nombramiento de delegados directos del poder real, tras una serie de tentativas en figuras como los pesquisidores, jueces de términos o asistentes, cristalizará en el cargo de corregidor. El cauce de comunicación entre municipio y monarquía estaba creado. Los amplios poderes concedidos al representante real se hacen bien patentes en el caso del patrimonio concejil, conociendo una importante ampliación a lo largo del período que estudiaremos.

Este retablo municipal<sup>723</sup> es el que contempla y descende a la administración del patrimonio. Ahora bien, si tal atribución corresponde a la estructura política administrativa municipal, tampoco le es ajena una política progresivamente descentralizadora, aunque con fases de más intensidad que otras. Tal dualidad se percibe en una Hacienda municipal que, por contar con unos bienes y unas rentas propiedad del municipio, no por ello deja de ser una sucursal recaudatoria de la Hacienda real. Es como si la presión fiscal de ésta última tuviera su contrapartida en la administración autónoma de unos propios, sin olvidar que dicho patrimonio concejil era fuente de rentas.

El cuidado de este patrimonio -administración económica y financiera- estuvo confiado a unos órganos y a unos oficiales. Nombres y funciones, fiscalizadoras o consultivas, experimentaron cambios pues no siempre estuvieron ligados a un mismo sistema dentro de la acción financiera municipal. A continuación presentaré el modelo de funcionamiento de la administración del patrimonio durante el final de la Edad Media, para pasar después a analizarlo más detenidamente durante la Edad Moderna, con una especial referencia a los intentos de reforma del s. XVIII.

## 1 - LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO EN LA BAJA EDAD MEDIA

### 1.1 - LOS "PODEROSOS": REGIDORES Y CABALLEROS Y SU CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Nos es conocida con exactitud la fecha de establecimiento de los primeros regidores en Madrid: el 6 de enero de 1346 el rey Alfonso XI procedió a establecer el concejo o ayuntamiento cerrado, compuesto inicialmente por doce miembros. Dato revelador de la importancia que para este cargo tenía el tema de la hacienda municipal es el que en el documento fundacional se les

---

<sup>723</sup> Una síntesis de la evolución organizativa del ayuntamiento madileño en el Antiguo Régimen, en HERNÁNDEZ BENITEZ, M. y MONTURIOL GONZALEZ, M. A.- “El ayuntamiento de Madrid”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas*, págs. 268-275

denomine como "los doce que han de ver hacienda del Conçejo".<sup>724</sup> Los bienes de propios, como afirma J. M. Mangas, son de tanta trascendencia que el problema de su administración motiva la reforma más trascendental del municipio medieval, esto es, la creación del regimiento, cuyos componentes son "de los que han de ver e ordenar hacienda del conçejo".<sup>725</sup>

Los regidores controlan el ayuntamiento, aunque en ocasiones cuenten con la presencia de representantes de otros grupos, como caballeros y escuderos o pecheros. Pero ellos disponen del poder decisorio, por lo que sus competencias son muy amplias. "Dicta Ordenanzas, nombra los oficios..., ordena la vida económica del Concejo, cuida de su abastecimiento, realiza la gestión de algunos otros servicios públicos, cuida y administra la hacienda municipal..."<sup>726</sup>

La documentación pone de manifiesto que uno de los objetivos de la monarquía era aplacar los conflictos sociales que tenían como escenario los concejos castellanos, ya que se hace referencia a la existencia de regidores "caballeros y del común de vecinos". Pero muy pronto se rompió esta tendencia al equilibrio interno. Los nuevos cargos intentaron asegurarse su continuidad, convirtiendo estos oficios que inicialmente eran de merced en cargos perpetuos. Asimismo se advierten los rasgos de la progresiva patrimonialización por parte de sus titulares, aspecto en el que incidirá decisivamente la Corona mediante la enajenación de los cargos públicos o ventas de oficios para ingresar recursos a las siempre necesitadas arcas reales.<sup>727</sup>

Esta creciente apropiación del gobierno concejil provocó la reacción de la clase social que anteriormente lo detentaba, los "caballeros y escuderos", a los que se unieron los "ommes buenos". Para acabar los enfrentamientos el rey Juan II envió a Madrid al licenciado Alfonso Díaz de Montalvo. En la carta de comisión se detallaba : "ay cierto debate e cuestion por quanto los dichos rregidores dizen que a ellos con mi instruccion pertenesce solamente fazer conçejo e proueer en todas cosas que a la villa pertenescen asi para la gobernacion della e en dar solares e dehesas e poner prescios en carnes e pescados e en derramas, et que as mismo los pertesnece la eleccion e nominacion de todos los oficios dela dicha villa, conuiene a saber: alcalldes e alguacil e fieles e caualleros de montes e procuradores del conçejo e escriuano e mayordomo de conçejo

---

<sup>724</sup> Documentos, t.I, págs. 272 y sigs.

<sup>725</sup> MANGAS NAVAS, J. M.- *El régimen comunal agrario*, p. 186

<sup>726</sup> GIBERT, R.- *El conçejo de Madrid*, p .180

<sup>727</sup> TOMAS Y VALIENTE, T.-"Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla", en *Actas del I Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1970

et otrosi las procuraciones cada que yo enbio llamar procuradores que vengan a mi corte delas cibdades e villas de mis rregnos, et que en ello non tienen que entender otra persona alguna; et los dichos caualleros e escuderos e onbres buenos diciendo lo contrario et que todos junta mente se deuen e pueden ayuntar en concejo e proveer en ellos" .<sup>728</sup> La sentencia de este pesquisidor real, dictada el 7 de enero de 1454 sancionó la preeminencia de los regidores y su control del aparato de poder concejil, dictaminando "que las elecciones y nombramientos activos pertenecen exclusivamente a los regidores, sin que estuviesen presentes ni fuesen llamados para ello los caballeros y escuderos ni otra persona alguna". Sin embargo los caballeros se aseguraban que el nombramiento de los oficios recayese exclusivamente en los miembros de este grupo: "Que los cargos de Alcaldes, Alguacil, Fieles, Mayordomo, Procurador y Caballeros de Montes, anduviesen en tandas por las colaciones entre los Caballeros y Escuderos, sus vecinos".<sup>729</sup> Así se conformaba un esquema que en lo general iba a perdurar durante todo este período.

En esta pugna por el control de los oficios nos aparecen dos cargos concejiles de enorme importancia para la gestión directa del patrimonio: el mayordomo del concejo o de propios y los caballeros de montes. Ambos son, después de las instancias de poder que dominan el municipio (regidores y corregidor) los encargados de llevar a cabo la administración diaria y habitual de los bienes concejiles. Del primero, dado su especial relevancia, me ocuparé en un apartado propio. Los segundos, por su parte, fueron analizados en el segundo capítulo, dentro de los mecanismos de control del término concejil.

## 1.2 - EL MAYORDOMO DE PROPIOS

El mayordomo del municipio es el encargado de la administración económica y de la percepción de las rentas del concejo medieval.<sup>730</sup> El cargo irá perfilándose con la consolidación

---

<sup>728</sup> *Documentos*, t.III, p.134 (la comisión de Montalvo aparece en págs. 121-127 y 133-139)

<sup>729</sup> DOMINGO PALACIO, T.-*Manual del empleado en el Archivo General de Madrid con una reseña histórica de su municipio*, Madrid, 1.875, p. 365 y 367 respect.

<sup>730</sup> VALDEAVELLANO, L. G<sup>a</sup>. de- *Curso de Historia de las Instituciones*, p. 546; SACRISTAN Y MARTINEZ, A.- *Municipalidades de Castilla y León. Estudio histórico- crítico*, Madrid, 1877, págs. 273-274; CARLE, M.del C.- *Del concejo medieval castellano-leonés*, Buenos Aires, 1968, págs. 120-121. Cada municipio tendrá sus peculiaridades y cronología en el establecimiento de este oficio. Así, en Sevilla deberá esperarse a los ordenamientos de Alfonso XI para conocer sus funciones. CARANDE- *Sevilla. Fortaleza y mercado*, p. 133. Más tardío resulta el caso de Carmona, pues el oficio de mayordomo fue reglamentado



administrativa del municipio, de forma que en los siglos XIV y XV presenta ya los rasgos fundamentales que mantendrá a lo largo de la Edad Moderna.

En Madrid nos encontramos con que se trata de un cargo muy antiguo, ya que el mayordomo aparece citado en el *Fuero de 1202*, si bien el término hace referencia a tres funciones distintas. En primer lugar, el mayordomo de los fiadores,<sup>731</sup> encargado de ayudarles en ciertas misiones como la recogida de caloñas o el control de las ventas de pescado.<sup>732</sup> Se menciona asimismo un mayordomo del azor o de la muralla, vinculado a la financiación de sus obras, siendo el encargado de recoger las caloñas que se aplican para construir y conservar el muro defensivo.<sup>733</sup> Por último, un mayordomo del concejo aparece junto a otros oficiales, si bien el cargo queda difuso al no especificarse sus características.<sup>734</sup>

A mediados del s. XIV aparece ya mencionado como administrador directo de los propios y rentas del concejo,<sup>735</sup> con lo que se ha constituido en un oficial ejecutivo, agente de la hacienda municipal, en contraposición a los oficiales de autoridad, que son aquellos que cuentan con poder decisorio.<sup>736</sup> Un siglo después, los *Libros de Acuerdos* municipales presentan claramente sus atribuciones. Su misión fundamental, tal y como se recoge en la certificación del nombramiento de un mayordomo es la de "pedir e demandar los bienes e rentas del dicho Concejo".<sup>737</sup> A ella se añaden otras que complementan este aspecto de recaudador concejil, como

---

definitivamente en tiempo de los Reyes Católicos. GONZALEZ JIMENEZ- *El Concejo de Carmona*, p.172

<sup>731</sup> El fiador es uno de los más destacados oficiales del concejo en el *Fuero de Madrid*, con atribuciones judiciales, administrativas y financieras. Posteriormente, sus funciones se desdoblaron, pasando una parte de ellas al "mayordomo" y otra a los "fieles".

<sup>732</sup> *Fuero de Madrid*, rúbricas LVII y LXXIII.

<sup>733</sup> *Ibidem*, rúb. XCVIII: "Qvi pennos reuellaret a los maiordomos del azor, pectet II morabetinos, el uno a los fiadores, e el otro a los maiordomos, so testes habuerit; si nos, sua iura".

<sup>734</sup> *Ibidem*, rúb. CXIII. Se trata de un añadido al cuerpo principal del Fuero realizado en 1.219.

<sup>735</sup> GIBERT, R.- *El Concejo de Madrid*, págs. 241- 242. LOSA CONTRERAS, C.- *El concejo de Madrid en el tránsito*, págs. 359-361

<sup>736</sup> LALINDE ABADIA, J.- "Los medios personales de gestión y su delimitación conceptual", en *Actas del II Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1971, p. 32, observa cómo el término "oficial" resulta ambiguo en los siglos XIV y XV, pues en unos casos "comprende todos los medios personales de gestión del concejo, mientras en otros parece reducirse a los inferiores, es decir, a los que tienen un papel ejecutivo o documental". En el caso del mayordomo, el término "oficial" se refiere a esta segunda acepción.

<sup>737</sup> *LAC-II*, p. 254 (sesión de 17 de enero de 1491)

la de percibir los ingresos de multas o tomar las prendas por deudas a la Villa y venderlas para reintegrar los débitos.

Al no existir una administración municipal totalmente centralizada, los mayordomos no controlan la percepción global de los ingresos municipales. Anticipando lo que será corriente en los siglos posteriores, determinadas fuentes de caudales se establecen con mecanismos de recaudación independientes. Así, con motivo de una sisa creada para obras de reparaciones en los puestos del mercado, se nombró "receptor de la sisa a Francisco, cambiador, y que los carniceros y pescadores sean obligados a dar cuenta la dicho Francisco", cuya misión concluiría al terminar la percepción de este impuesto indirecto.<sup>738</sup> Es decir, desde su origen la hacienda municipal se concibe como algo invertebrado, sin que haya una articulación unitaria de sus diversas ramas, que generan sus propios aparatos administrativos independientes.

Un segundo aspecto del cargo es la función de pagador. Los pagos se realizaban previa una libranza del ayuntamiento, que debían ir autorizadas por el corregidor o algunos regidores, con la certificación del escribano. Se dan tanto para los gastos ordinarios (salarios, festividades) como para un amplio conjunto de gastos extraordinarios (referidos a pleitos, gratificaciones, obras públicas). Tanto de los ingresos como de los gastos debía presentar cuentas que estableciesen el alcance o saldo a su favor o al del municipio. La reiteración de peticiones de cuentas en las actas municipales indica claramente que no se cumplía con rigor esta obligación.

La importancia del cargo dentro del aparato de gobierno local reflejada en la pugna que ya conocemos en torno a su provisión entre los regidores y los caballeros y escuderos, enmarcada dentro de la lucha por el control del municipio. La ya citada sentencia de Montalvo establecía que el puesto de mayordomo, junto con los demás oficiales de la Villa, debía ser elegido por los regidores entre los integrantes del grupo de "caballeros y escuderos", siguiendo un turno por colaciones o parroquias que no será respetado en el período moderno. De este modo, la mayordomía de propios quedó vinculada al "estado noble". En todas las elecciones los candidatos debían presentar los títulos justificativos que demostraran su procedencia social. Cuando el estado de caballeros hijos-dalgo de Madrid se reunió en cuerpo colegiado en una fecha tan tardía como 1782, obtendrá sucesivas confirmaciones de sus privilegios el 17 de junio de 1790, 18 de marzo de 1800, 4 de noviembre de 1818 y 12 de junio de 1824. En todas se especificaba cómo a los individuos de dicho cuerpo correspondía con exclusividad la provisión

---

<sup>738</sup> LAC-II, p. 173 (sesión de 5 de septiembre de 1489)

del empleo de mayordomo de propios, además de los cargos de procurador síndico general, secretario, alcaldes de la Santa Hermandad y de Mesta y alguacil mayor de la cárcel.<sup>739</sup> Será, pues, la pequeña nobleza urbana la que monopolice el cargo, lo que contribuye a acentuar el peso de la oligarquía municipal en la hacienda local.

### 1.3.-LA PRESENCIA REAL: PESQUISIDORES Y CORREGIDORES

No fueron las ciudades castellanas esas islas de plena autonomía que quiso cierta historiografía. La presencia del poder real es constante, desde actos como el otorgamiento de los fueros a oficiales como los jurados, etc. Centrándonos en la Baja Edad Media asistimos al establecimiento de delegados regios que se convierten en cabeza del ayuntamiento pleno. Este proceso, que cristalizará con la generalización de la figura del corregidor en las más importantes ciudades castellanas durante el reinado de los Reyes Católicos, conoce antes diversas tentativas con el nombramiento de diversos oficiales, como los jueces de términos o asistentes. Los primeros se encuentran muy vinculados al patrimonio municipal y tiene una gran incidencia en Madrid, por lo que los analizaremos a continuación.

Los *jueces de términos* son oficiales de carácter comisarial, enviados a una localidad concreta para realizar un encargo del monarca durante un período de tiempo determinado, esto es, una pesquisa, de ahí la denominación de *pesquisidores* con que también se les conoce. Como su propio nombre indica, los términos del concejo constituyen su finalidad esencial. Son la respuesta del gobierno real ante los abusos de los poderosos con el patrimonio concejil, en el que practican reiteradamente usurpaciones, vedamientos y roturas de términos comunales.

En Madrid hay constancia del envío de jueces de términos desde comienzos del s. XV. En la provisión real de Juan II nombrando por pesquisidor ante el concejo madrileño al licenciado Marcos Ferrández en 1421 se especifica con claridad la problemática que había de afrontar: "algunos cavalleros e escuderos e comarcanos desa dicha villa e algunos lugares de señorío, e algunos vezinos desa dicha villa tienen entrados e tomados çiertos terminos e prados e pastos e dehesas e exidos que dezides que pertenesçen a esa dicha villa, que envíe alla al

---

<sup>739</sup> *DERECHOS, empleos y distinciones que corresponden al estado Colegiado de Caballeros Hijos-dalgo de esta M.H. Villa de Madrid*, Madrid, 1.828, págs. 4-5.

licenciado Marcos Ferrandez para fazer pesquisa sobre ello".<sup>740</sup> Su número es muy abundante y se alargan hasta comienzos del s. XVI. Precisamente tal repetición de estos enviados reales nos pone de manifiesto la complejidad del problema con el que se enfrentaban. En efecto, el asalto de las oligarquías urbanas a los bienes municipales es un hecho conocido en diversas zonas. Madrid no es ninguna excepción, como se ha visto en el capítulo 2.

La justicia que dictan estos jueces resulta bastante expeditiva. Tras convocar a las partes que pudieran estar interesadas en los términos denunciados y oír a los testigos, se procede al reconocimiento directo del terreno, dictándose a continuación la sentencia de restitución al concejo madrileño o de amparo a su poseedor, sin trámite de juicio formal. Este procedimiento legal fue regulado en las Cortes de Toledo de 1480, que le dio un carácter general acorde con la política de restitución de los patrimonios municipales llevada a cabo en este reinado. Se establecía un plazo máximo de 30 días "los quales no se puedan prorrogar, dentro de los quales él [el demandado] aya de mostrar, i muestre el titulo o derecho,.... i entretanto el tal Juez, ó Pesquisidor haga pesquisa simpliciter, i de plano, i sin figura de juicio, i sepa la verdad por escripturas, ó testigos, ó por otras quantas vias pudiere..... torne, i restituya, i haga tornar, i restituir al tal Concejo la possession libre, i pacifica de aquello, que hallare que fue despojado".<sup>741</sup> De las consecuencias para el patrimonio municipal madrileño de estos jueces de términos ya se ha tratado en el capítulo 2. Señalar, por último, que el afianzamiento de los corregidores supuso el progresivo abandono de la figura del pesquisidor o juez de términos, por lo que éstos fueron desapareciendo a comienzos de la Edad Moderna.

## II - LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE MADRID EN LA EDAD MODERNA.

### 2.1.- LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: CORREGIDOR Y REGIDORES.

"Muy dilatado es el oficio de corregidor: son sin límite las obligaciones de su empleo. Del corregidor no menos, con verdad, puede decirse lo que de los procónsules y presidentes de

---

<sup>740</sup> AVM-S, 3-90-2

<sup>741</sup> Citado en MANGAS NAVAS- *El régimen comunal agrario*, p. 135

las provincias dijo un jurisconsulto: que de cuanto pudiera ocurrir en la provincia debía cuidarse aquel magistrado".<sup>742</sup> Así resume un clásico tratadista político, Lorenzo de Santayana, el amplio conjunto de las competencias del corregidor.

Centrándonos en el tema que nos interesa, el patrimonio municipal, el corregidor se convertirá, al igual que en cualquier otro aspecto de trascendencia para la vida local, en un elemento decisorio fundamental gracias al control que ejerce de las medidas tomadas en el ayuntamiento que preside. Su actuación política concreta vendrá definida, lógicamente, por su mayor o menor independencia respecto al grupo de los regidores que conforman la oligarquía urbana o el grado de escrupulosidad en el cumplimiento de las directrices del poder real, por quien es nombrado y a quien teóricamente representa en el gobierno municipal.

Concretando, podemos señalar las siguientes grandes líneas de actuación del corregidor en el patrimonio municipal. En primer lugar, y como una clara herencia de los jueces de términos bajomedievales, la obligación de visitar los términos y lugares de la jurisdicción de las ciudades (la Tierra), con una especial incidencia en la vigilancia de los bienes comunales y de propios para impedir su pérdida y usurpación. Hay, pues, una clara continuidad en esta actividad de control y salvaguardia del patrimonio municipal entre los corregidores y los pesquisidores. Así, la *Instrucción de Corregidores de 1648* todavía recoge en su primer punto: "Ha de visitar el Corregidor por lo menos una vez en el discurso de su oficio los términos del distrito, y renovar los mojones, si fuere necesario, y restituir lo que injustamente estuviere tomado, conforme a la Ley de Toledo".<sup>743</sup> Por su parte, Castillo de Bovadilla advierte de lo perjudicial que sería el no cumplimiento de su obligación: "La visita de los terminos, assi de la ciudad, como de los lugares de la Jurisdiccion, esta muy encargada a los Corregidores, y es la cosa que mas floxa y descuidadamente se cumple, porque no sienten de quanto perjuyzio es dexar olvidar un año, y otro, como se entro el vezino en los bienes concejiles, y como se metio el estraño en los bienes Realengos, y como el Regidor, que es el que se ha de esforçar a mirar por las cosas de su pueblo, de cuyos bienes es administrador, se los apropia para si, y despoja a su vezino, y a su patria dellos".<sup>744</sup> Todo un panorama de la problemática de los bienes concejiles en la Edad Moderna y de las reponsabilidades de las oligarquías municipales.

---

<sup>742</sup>- SANTAYANA Y BUSTILLO, L.- *Gobierno político de los pueblos de España, y el corregidor, alcalde y juez en ellos*, Madrid, 1979 (1ª ed: 1742), p. 165

<sup>743</sup>. N. *Recop. Autos Acordados*, Lib. III, Tít. VI, Auto I.

<sup>744</sup> CASTILLO DE BOVADILLA, J.- *Política para Corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz y*

Inicialmente, esta obligación se cumplió con bastante regularidad en el caso madrileño. Así, el corregidor Alonso Martínez de Angulo, acompañado por dos regidores, un letrado, el procurador de la Villa y el guarda mayor (nombrado por caballeros y escuderos), llevaron a cabo una detallada visita de los lugares de la Tierra de Madrid entre 1500 y 1501. En su trascurso procedieron a ejecutar las sentencias de los términos que se hallaron ocupados, así como a atender diversas reclamaciones que sobre este tema hicieron algunas aldeas, como la petición de una nueva dehesa por parte de Alcorcón y Las Rozas.<sup>745</sup> Pues bien, entre 1502 y 1505 su sucesor renovó las visitas, que continuaron en 1508 y de nuevo en 1512 con los nuevos ocupantes del cargo.<sup>746</sup> Este ritmo se fue perdiendo en el trascurso del s. XVI, dilatándose el período de tiempo transcurrido entre las visitas de los corregidores.

Una segunda línea de actuación del corregidor es la obligación de controlar y fiscalizar las cuentas del encargado de la recaudación de los bienes de propios, el mayordomo. Estas cuentas debían ser anuales y su vigilancia impediría la malversación de los caudales por los oficiales municipales. La importancia de esta tarea queda reflejada en el hecho de que las cuentas de los propios eran revisadas en el juicio de residencia que se hacía al finalizar el mandato de cada corregidor, haciéndosele responsable personalmente de cualquier irregularidad que se observase.<sup>747</sup> Trataré del cumplimiento de esta obligación al hablar de los mayordomos de propios y sus cuentas.

Queda por último el aspecto jurisdiccional, pues es el corregidor quien ejerce la jurisdicción real dentro del ámbito territorial de su corregimiento. Esto incluye también al patrimonio municipal, si bien en el caso de Madrid conforme se vaya complicando el gobierno local, se observa que los casos judiciales del patrimonio se tratan ante el teniente de corregidor, ayudante con formación específica de letrado. Esta jurisdicción tiene un límite geográfico: la Tierra de Madrid, que es a la vez social, pues excluye a los habitantes del señorío. Para contrarrestar esta limitación, agravada además por la venta de vasallos que está teniendo lugar en los alrededores de la Corte y que está cercenando el ámbito jurisdiccional de Madrid, el ayuntamiento consiguió un importante privilegio real. La ocasión, como es habitual con los

---

*de guerra*, Madrid, 1.978 (1ª ed: 1.597), vol. II, p. 626.

<sup>745</sup> AVM-S, 2-413-1

<sup>746</sup> Respectivamente: AVM-S, 2-413-2, 3 y 5.

<sup>747</sup> CASTILLO DE BOVADILLA- *Política para Corregidores*, vol. II, págs. 571-593

Austrias, es la concesión de un servicio por el Reino en las Cortes, concretamente el servicio de 18 millones de ducados en 1629. Una de las condiciones impuestas por la Villa madrileña para su aprobación fue la ampliación de la jurisdicción del corregidor en el tema del patrimonio municipal. Una Real Provisión de 7 de marzo autorizaba al corregidor de Madrid "para que pueda proceder y proceda contra los que talaren los montes de esta villa o cortaren parte de ellos aunque los dichos taladores o cualquier de ellos sean vecinos de cualesquier villas y lugares fuera de su jurisdicción y de los eximidos de ella, procediendo en las causas que sobre todo ello o cualquier cosa se ofreciere por prisión y vía executiva.... con inhibición a los alcaldes de Corte y de otros cualesquier jueces y justicia, así de esta villa como de las demás villas y lugares".<sup>748</sup>

Por lo que respecta a la actuación concreta de los corregidores en la administración del patrimonio municipal, se suele dar en el marco de la colaboración de los regidores, pudiendo señalarse dos instancias principales: las sesiones plenarias municipales, recogidas en los *Libros de Acuerdos* y en las que se aprecia el papel del corregidor como transmisor de las directrices reales y la intervención particular de cada uno de los regidores, conformándose normalmente el corregidor con el parecer de la mayoría del cabildo. Por otro lado, la constitución de *Juntas* para tratar determinados problemas del patrimonio o para unificar su gestión, y de las que hablaré más adelante.

La intervención de los *regidores* en el gobierno y administración del patrimonio municipal desde el establecimiento de este cargo ha sido siempre fundamental.<sup>749</sup> Intervención marcada por la sospecha o, mejor aún, por la certidumbre de un manejo interesado y una manipulación constante. Al configurarse este grupo como una auténtica oligarquía urbana y utilizar en su beneficio los resortes de poder que el control del gobierno municipal les otorga, encuentran en los bienes comunales y de propios (junto con otros ramos, como los abastos o las rentas) un campo propicio para satisfacer sus intereses, opuestos a los del común de vecinos. Es un tema recurrente tanto en los tratadistas como en la copiosa legislación dictada para evitarlo (lo que certifica la profundidad y persistencia de esta lacra). Oigamos a Castillo de Bovadilla: "Esta plaga de meter los Regidores la mano en la hazienda publica, es antigua y muy general.... porque muchos echan todo su caudal en un Regimiento y se sustentan con el y otros tomando dineros

---

<sup>748</sup> AVM-S, 2-397-76

<sup>749</sup> Sobre los regidores en el Madrid de la Edad Moderna, HERNÁNDEZ BENITEZ, M.- *A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana. Madrid, 1606-1808*, Madrid, 1995. Con un ámbito cronológico más limitado, GUERRERO MAYLLO, A.- *Familia y vida cotidiana de una élite de poder. Los regidores madrileños en tiempos de Felipe II*, Madrid, 1993

prestados de los propios y positos, y con otros aprovechamientos suplen algo de sus menesteres".<sup>750</sup>

Además del poder decisorio que recae en el ayuntamiento pleno, constituido por la reunión de los regidores con el corregidor y en el que aquellos deliberan libremente y votan sobre los temas planteados, existen dos mecanismos administrativos por los que tiene lugar la intervención de los regidores en el gobierno del patrimonio municipal: las comisiones y las juntas.

El origen de las *comisiones*, lo mismo que el de los oficios concejiles, debe buscarse en la necesidad del municipio medieval de encargar aquella parte de las funciones para las que se requiere una especialización o dedicación permanente. De la misma práctica administrativa del ayuntamiento, sin estar reguladas en un principio, las comisiones reciben una delegación de la autoridad municipal para una gestión en un período de tiempo determinado. El objeto principal es siempre la actividad del ayuntamiento, que suele ser de quien parte la iniciativa de nombrarlas. Sus encargos son múltiples y vienen dados por las necesidades concretas de la actividad cotidiana municipal. Pueden ser tan variados como el de informar sobre un tema que el concejo debe resolver, realizar una actividad en nombre del mismo concejo, e incluso puede llegar a ser una comisión para realizar un acto de disposición, en el que los encargados de decidir son los integrantes. Su composición en el s. XV es muy heterogénea, apareciendo procuradores, sexmeros, caballeros y escuderos, el propio corregidor y, como no, los regidores. De hecho, el predominio de este grupo es algo característico ya en este período.<sup>751</sup>

Durante los siglos XVI y XVII este control de las comisiones municipales por parte de los regidores se hace total, monopolizando los cargos, hasta el punto de convertirse en el mecanismo normal por el cual los regidores realizan la administración de los distintos ámbitos competenciales del concejo. Se trata de un elemento más del proceso que en este período lleva al cierre oligárquico de la vida municipal y que culmina con la exclusión por los regidores de cualquier poder concurrente fuera del corregidor.<sup>752</sup> Veamos como ejemplo el proceso de constitución de una comisión de regidores en Madrid.

---

<sup>750</sup> CASTILLO DE BOVADILLA- *Política para corregidores*, vol. II, p. 25.

<sup>751</sup> GIBERT- *El Concejo de Madrid*, págs. 180-187

<sup>752</sup> Sobre este proceso, GONZALEZ ALONSO, B.- "Sociedad urbana y gobierno municipal", págs. 57-83.



En el último tercio del s. XVI, los "caballeros de montes", cuyo nombramiento correspondía al ayuntamiento y que debía recaer en los caballeros y escuderos de Madrid, ha sido sustituidos por un "guarda mayor de los montes", cargo que ostenta un regidor. Sus funciones se centran en visitar y controlar a los guardas elegidos por el ayuntamiento para vigilar el cumplimiento de las ordenanzas de la Villa en los montes de la Tierra de Madrid y para salvaguardar los derechos de aprovechamientos comunales en los del Real de Manzanares, tal y como se ha tratado en el capítulo 2. Este sistema, sin embargo, no era considerado suficiente para garantizar la salvaguarda del patrimonio, habida cuenta de los continuos descepes realizados para la roturación de términos, ante los cuales los guardas municipales, escasamente controlados, mostraban permisividad y connivencia. Para evitarlo, un informe del secretario del ayuntamiento propuso en 1580 el nombramiento de otro regidor que colaborara en el encargo: "hasta agora se ha nombrado un caballero del ayuntamiento para que visite los montes, sotos y dehesas de esta Villa y para tener cuenta y razón con las guardas y denunciasiones que hacen; se podrían elegir dos, nombrando un antiguo con uno moderno por elección, como a V.S. mejor le pareciere".

El ayuntamiento de 16 de diciembre de dicho año aprobó esta propuesta, pues "en esta forma los dos caballeros nombrados podrán muy bien repartir entre sí, que un mes visite el uno las dehesas y montes codrios y la parte del Real que le pareciere, y el otro los sotos y riberas de esta Villa; y en esta forma no se pasará ningún mes que no se cumpla con la obligación y ordenança para ello instituida, y las guardas temerán que han de ser visitadas y usarán mejor sus oficios". En cuanto a la forma de elección "sea por turno juntando el antiguo con el más moderno y si se escusare pase al siguiente". Un Auto del Consejo de Castilla de 6 de febrero de 1581 ordenaba que se cumpliera este acuerdo, matizando "que el turno de los regidores se guarde no entrando en él los que hasta agora han servido hasta haberse acabado".<sup>753</sup> De esta forma los regidores madrileños habían sustituido a los antiguos caballeros de montes, reservándose una tarea que podía ser económicamente rentable ante la posibilidad de imponer multas y tomar prendas a los contraventores de las ordenanzas. La forma de elección también resulta significativa del modo de operar dentro del ayuntamiento madrileño.

A comienzos del s. XVIII el proceso de constitución de comisiones ha culminado, y los regidores madrileños estructuran los asuntos del gobierno local en un conjunto de comisiones

---

<sup>753</sup> AVM-S, 2-396-12

anuales, ocupadas por uno o dos capitulares, según nos informa el secretario del ayuntamiento Martín Marcelino de Vergara.<sup>754</sup>

Para el manejo del patrimonio hay una multiplicidad de comisiones, con funciones no siempre muy bien delimitadas pues junto a una de carácter más general, como es la de propios, aparecen otras encargadas de diversos componentes del patrimonio. La causa de tal diversidad de comisiones puede explicarse por el hecho de que el patrimonio municipal no es concebido por los regidores como un ramo articulado que precisa una dirección única y homogénea, sino que se trata de un conjunto de bienes heterogéneos y desarticulados, que en determinadas circunstancias como pueden ser su propia constitución (caso de algunos edificios municipales) o por cierta problemática en su gestión, pasan a ser gobernados por uno o varios capitulares madrileños.

La *comisión más general es la de propios*, cuyas atribuciones son las más amplias y por ello mismo las menos definidas. Compuesta por dos regidores, su misión se centra en la vigilancia de los arrendamientos de los bienes municipales, informando sobre las posturas presentadas y presidiendo (en ocasiones junto al corregidor) las subastas y los consiguientes contratos de arrendamiento. Asimismo se encargan de controlar la actividad del mayordomo de estos bienes, con especial atención a la presentación de sus cuentas. Y, por último, la misión de proponer todo tipo de medidas encaminadas a la mejora de los propios, debiendo informar sobre cualquier "otra cosa que se ofrezca con grande especulación de todas las cosas que ocurrieren en pro o en contra de ellas".

De esta comisión general son tributarias otras especializadas en algunos bienes patrimoniales. No son estrictamente comisiones subordinadas, pues en su funcionamiento no se aprecia la intervención de los miembros de la comisión de propios. Los regidores miembros de estas comisiones gozaban de autonomía en la gestión, sólo subordinada a las decisiones del ayuntamiento pleno. Según la importancia y complejidad de los bienes de los que se encargaban, estaban integradas por uno o dos regidores.

La *comisión de veintenas* se encarga del cobro de este porcentaje en las ventas que se produzcan en los terrenos o edificios gravados con un "censo perpetuo" a favor de los propios

---

<sup>754</sup> AVM-S, Libro mss. 150. Se trata de la obra *Comisiones y patronatos que Madrid sortea cada un año, notados por don Martín Marcelino Vergara, secretario de S.M. y escribano mayor de su Ayuntamiento*. Esta recopilación fue ordenada por un acuerdo municipal de 24 de mayo de 1715. Con una valiosa información, puede completarse con los borradores que utilizó el autor en AVM-S, 4-127-1.

madrileños. En este tipo de censo procedente de la enajenación de suelo público en la ciudad para la edificación, el ayuntamiento madrileño se reservó los derechos de licencia, tanteo y laudemio. El más importante era, sin duda, éste último, cifrado en una "veintena" que suponía que Madrid percibiera un 5% del valor del edificio construido sobre el solar gravado con el censo perpetuo cada vez que se enajenara o transmitiera. El cobro de esta cantidad se convertía en un mecanismo muy importante de revalorización de los censos perpetuos del ayuntamiento, pero la compleja problemática y el estado de abandono y desconocimiento en que se encuentran muchos de estos censos impidieron que el cobro de las veintenas se realizara con normalidad.

La *comisión de sotos* se encarga, lógicamente de la administración de esta parte del patrimonio rústico municipal. Terrenos situados en las riberas de los ríos Jarama y Manzanares, constituyen las fincas más rentables del ayuntamiento, y también figuran entre las más complejas. Los dos regidores miembros de esta comisión están encargados de visitar los sotos antes de ajustar su arrendamiento (que se realiza el 29 de septiembre) con el fin de dictaminar su estado y realizar reclamaciones al antiguo arrendatario, además de ajustar las condiciones de los contratos de arriendo, denunciar las ocupaciones de tierras, los aprovechamientos abusivos y encargarse de la administración de las cortas que se realizan de leña que no han sido rematadas en subasta.

La *comisión de barcas* es unipersonal. El regidor titular queda encargado de todo lo relativo a las dos barcas que pertenecen a los bienes de propios de Madrid sobre el río Jarama, la de Arganda y la de Mejorada del Campo (o de Arrebatacardos). Sus tareas son parecidas a las de las demás comisiones: encargarse de los contratos de arrendamiento, vigilar el cumplimiento de las condiciones ajustadas, así como revisar el estado material de las barcas y vigilar las condiciones de seguridad.

El edificio más singular que produce rentas al ayuntamiento madrileño (no sólo por su cuantía, sino sobre todo por su riqueza artística y funcionalidad), la *Casa de la Panadería*, también disponía de su propia comisión. Un regidor se encargaba de vigilar la conservación del inmueble, de que los inquilinos cumplieran con sus obligaciones y de preparar el "cuarto real" para las actividades que presenciara el monarca en la Plaza Mayor. Por su parte, *las carnicerías* (del Rastro, del matadero y carnicería mayor, sita en la Plaza Mayor enfrente de la Casa Panadería) eran vigiladas por su propia comisión, que además del mantenimiento de los edificios, velaba por asegurar el nivel de abastecimiento de carne y la calidad del mismo.

Finalmente, la vigilancia de las tierras concejiles era competencia de tres comisiones que complementaban a la de sotos: la de *acotamiento*, cuya misión se restringía a los casos en que era necesario llevar a cabo un apeo o medición de las fincas municipales; la de *visita de tierras*, limitada a acompañar al corregidor de Madrid en las visitas de términos dentro de la jurisdicción de la ciudad (obligación del corregidor cuyo cumplimiento fue cayendo en desuso a lo largo de la Edad Moderna), y la de *montes*, cuyo origen y principales competencias ya hemos analizado.

El funcionamiento práctico de estas comisiones muestra que la de propios va adquiriendo una importancia determinante a costa de las demás. Para resolver algunos problemas que se plantean en sus sesiones el ayuntamiento pleno solicita información a este conjunto de *comisiones especializadas* que hemos visto. Pero a mediados del s. XVIII es la de propios la que centra casi todas las actividades de este ramo y la gran protagonista de las consultas del ayuntamiento, como se colige observando los *Libros de Acuerdos* municipales.

Por lo que respecta al nombramiento de sus miembros, teóricamente se realizaba por sorteo. Sólo en las comisiones denominadas de turno (que eran las de alcabalas, cientos, millones, baronesa y tasa de casas), los regidores que las han ocupado no vuelven a figurar como candidatos en el sorteo hasta que ha participado el resto; en todas las demás el capitular comisionado vuelve a ser aspirante al año siguiente, lo que supone que se había abandonado el mecanismo de elección establecido inicialmente en la comisión de sotos.

Pero estos aspectos formales no lo son tanto desde el momento en que, al incumplirse, se aprecia la intervención decisiva de ciertos regidores en el gobierno de los bienes de propios, por ser repetidas veces comisarios o por aparecer ligados a las intervenciones más decisivas que se realizan sobre ellos. Un claro ejemplo, centrado en el s. XVIII, lo constituye el clan de los Negrete, una de las familias clave para estudiar las estructuras de poder en el municipio madrileño. Ambrosio Negrete, además del título de regidor tenía la Depositaria General de Madrid y en 1756 era, según el *Catastro de Ensenada*, el principal propietario de ganado lanar trashumante en la capital, con una cabaña de 40.000 cabezas. Cándido de Negrete, su hijo, colaboró en el informe que llevó al establecimiento de la Junta de Administración de Propios en 1744, formando parte de la misma (vid. infra). También fue miembro de la Junta diputada para la incorporación de las tierras de Madrid al recinto real de los Montes de El Pardo, al igual que Ambrosio y Antonio Moreno de Negrete. Este último, yerno de aquél, fue uno de los dos comisionados que ultimaron dicha incorporación y posteriormente fue presidente del abasto de

carnes.<sup>755</sup> Otro muy destacado caso es el de Manuel de Santa Clara que, además de regidor, era miembro de la Junta de propios y arbitrios y comisario de propios y que ocupó el importante puesto de director del Pósito de Madrid entre 1774 y 1799.<sup>756</sup>

Ejemplos como los citados reflejan que ser regidor no es ninguna servidumbre desinteresada en pro del servicio público, y explican que la suma pagada por un regimiento se elevara a 200.000 y más reales, cantidad impresionante - y paradójica- si se la compara con su modesto salario anual. La explicación de tal contradicción es anunciada en las peticiones de Cortes así como en las numerosas disposiciones de la *Nueva Recopilación* alusivas a la corrupción administrativa de la vida concejil. Todo ello permite dar cuerpo a aquella intuición de Francisco Tomás y Valiente, según el cual quien compraba uno de estos oficios compraba poder, pues lo hacía pensando en resarcirse del precio pagado, esto es, calculando las compensaciones que le reportarían las ventajas y prepotencia derivada del ejercicio del cargo.<sup>757</sup>

El segundo mecanismo administrativo por el que se produce la participación de los regidores, dentro del entramado municipal -el ayuntamiento general- lo constituyen las *Juntas*. Los elementos básicos de su composición son el corregidor y varios regidores, a los que en ocasiones se añaden otros empleados municipales. Suponen siempre un intento por acabar con una situación de crisis o de decadencia del patrimonio. El 18 de noviembre de 1695 el ayuntamiento acordó establecer una *Junta de propios* compuesta por el corregidor, los dos comisarios de propios, el secretario del ayuntamiento, los contadores de cuentas, el mayordomo y el contador de propios: el objetivo era analizar la situación de los bienes municipales, aunar criterios de todas las instancias locales que intervenían en su administración y tomar las medidas necesarias para su recuperación y control.<sup>758</sup> Aunque con posterioridad a esta fecha aparecen referencias a una Junta de propios, no se aprecia que tenga un papel administrativo destacado.

---

<sup>755</sup> El dato que he dado de su propiedad pecuaria procede de MATILLA TASCON, A.- "El primer catastro de la Villa de Madrid", *Rev. BAM*, t. LXIX (1961), p. 513. Un análisis del ascenso social, económico y político de esta familia, HERNÁNDEZ BENITEZ, M.- *A la sombra de la Corona*, págs. 234-271

<sup>756</sup> Manuel de Santa Clara como director del Pósito en RINGROSE, D. R.- *Madrid y la economía española. Ciudad, Corte y País en el Antiguo Régimen*, Madrid, 1985, págs. 179-180

<sup>757</sup> TOMÁS Y VALIENTE, F.- "Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII)", en *Actas de las II Jornadas de Metodología aplicada de las ciencias históricas*, III, Santiago de Compostela, 1976, p. 560. Que en el caso madrileño han quedado más que confirmadas con los trabajos de M. Hernández y A. Guerrero.

<sup>758</sup> La constitución fue recogida en el *Libro Becerro de 1695*. Su primera medida consistió, precisamente, en formar este libro

Para ciertos asuntos de especial relevancia relativos al patrimonio, el ayuntamiento encomienda una misión especial a varios regidores, conjuntamente con el corregidor. Con motivo de la incorporación de las tierras concejiles madrileñas al Cordón Real de El Pardo se estableció el 17 de marzo una Junta diputada compuesta por el corregidor, procurador general y seis regidores, si bien ante la lentitud del proceso el entramado administrativo se redujo a una comisión integrada por dos regidores.<sup>759</sup> Un funcionamiento similar se produce en el caso de los numerosos apeos o deslindes que se realizaban en las tierras de propios. El encargado de llevarlos a cabo es el corregidor, juez privativo de las tierras municipales. Este suele delegar su misión en algunos regidores, que a su vez pueden subdelegar en otros empleados municipales.<sup>760</sup>

En definitiva, habrá que esperar al establecimiento de la Junta municipal de propios y arbitrios en 1766 (que estudiaré más adelante) para encontrar un esquema articulado en los rectores concejiles para el gobierno de su patrimonio. Hasta entonces destacan los regidores miembros de la comisión de propios -elegidos en un dudoso sorteo-, si bien en la gestión cotidiana de los propios cabe destacar el papel ejercido por el mayordomo.

## 2.2.- EL MAYORDOMO DE PROPIOS

### A)- *ELECCIÓN*

La elección del cargo correspondía al ayuntamiento pleno, esto es, al corregidor más los regidores. La votación era pública y, cuando en 1748 la mayoría de los capitulares pretendieron el voto secreto, el corregidor impuso el público, conforme se había practicado hasta entonces y estaba mandado por Resolución del Consejo de Castilla de 25 de mayo de 1748.<sup>761</sup>

---

<sup>759</sup> AVM-S, 2-185-8

<sup>760</sup> Es lo que sucede en 1.758 con Ignacio Fernández Cacho, a quien los comisarios de propios nombran para un apeo. AVM-S, 2-214-15

<sup>761</sup> AVM-S, 3-29-88. SANTAYANA- *Gobierno político*, señala cómo para estas elecciones "se requiere la viva voz y presencia de los capitulares electores"

Como ya se he explicado anteriormente, los aspirantes debían justificar su pertenencia al estado noble, tal y como había establecido la sentencia de Montalvo en 1454 sobre la provisión de los denominados "oficios de concordia", uno de los cuales era el del mayordomo. Hay que esperar a un período tan tardío como finales del s. XVIII para que este sistema de nombramiento experimentara una cierta modificación. La constitución del cuerpo colegiado de caballeros hijosdalgo en 1782 introdujo un cambio en los mecanismos de elección. Si anteriormente la presentación de candidaturas era libre, a partir de ese momento la Junta de Gobierno de dicho cuerpo debía presentar doce de sus miembros que aspiraran al cargo.<sup>762</sup> El primer nombramiento de un mayordomo de propios elegido según este sistema tuvo lugar en 1802. Se formó una comisión de cuatro regidores que dictaminaron sobre los candidatos propuestos, que posteriormente serían votados por el ayuntamiento. Esta comisión aprovechó la ocasión para protestar contra la selección de doce caballeros y denunciar la intromisión de su estado en los asuntos municipales: "Este nuevo cuerpo, erguido más que de la justicia que le asiste en sus orgullosos intentos del poderoso valimiento de los individuos que mañosamente recauda, se ha introducido y logrado de poder asistir o concurrir a loa Ayuntamientos y actos públicos que éste autoriza a las personas en quien recae cierta clase de oficios y empleos a que se les nombra por Madrid, siendo de temer que en el día de mañana pretendan ya introducirse en lo gubernativo del pueblo y peculiar de V.I.[se refiere al corregidor]"<sup>763</sup>.

La mayoría de los candidatos presentan como rasgos comunes la experiencia en la administración de rentas y la vinculación (profesional, familiar o ambas a la vez) al concejo.<sup>764</sup> Cabe destacar el predominio de los relacionados con el manejo de los caudales municipales, como tesoreros y contadores. En 1700 tres tesoreros de sisas solicitan, entre otros, el puesto. El elegido, Antonio Manzano, era tesorero de las sisas moderada y nueva de carnes, y cuando en 1704 abandonó la mayordomía fue nombrado tesorero de la Caja de Carnicerías. Entre los solicitantes o elegidos aparecen cargos como los de administrador de la sal de los alfolíes de Madrid, escribiente de la Contaduría Mayor de Cuentas, cajero principal de la Tesorería General de Madrid. Con menos frecuencia proceden de las rentas reales: oficial de la contaduría de la Superintendencia general del azogue o escribiente de la Secretaría del Consejo y Cámara de

---

<sup>762</sup> *DERECHOS, empleos*, págs. 4 -5

<sup>763</sup> AVM-S, 3-31-31

<sup>764</sup> Datos sobre diversas elecciones de mayordomo en: AVM-S, 3-29-81, 4-127-1, 3-29-85, 3-29-88, 3-30-34, 3-31-3, 3-31-31 y 3-31-32.

Indias de la Negociación del Perú. De otros no se conoce su dedicación o tienen oficios tan dispares como mayordomo del infante-cardenal o alcaide propietario de la cárcel real.

Algunos aspirantes están unidos por lazos familiares a los regidores: Gaspar Antonio del Campo, oficial de la Contaduría de la Superintendencia general del azogue, está encargado de la manutención de la familia de su tío Gaspar Antonio Calderón, que fue regidor de Madrid; Gonzalo Hurtado de Mendoza es nieto y hermano de capitulares madrileños. Resalta el caso de Antonio de Bengoa que, regidor como patrono-administrador de las memorias fundadas por José de Garro, renunció a dicho cargo para ser mayordomo de propios entre 1748 y 1768.

Existe, asimismo, relación de parentesco o personal de varios pretendientes con anteriores mayordomos. En la elección de 1700 para cubrir la vacante producida por la muerte de Francisco de Narbaiza, su hija recomienda a Pedro Fernández de Espasande, que colaboró con su padre durante quince años. En esta última elección se presentaron el sobrino político (que era además tesorero de tres sisas), y el hijo de Marcos de Sabugal, que había sido mayordomo entre 1665 y 1684. Eusebio de Sabugal, el hijo, que sería elegido en 1704 y ocupó el puesto durante nada menos que cuatro décadas, demuestra la existencia de una concepción patrimonial del cargo al afirmar que su padre “al tiempo de su fallecimiento se sirvió de favorecer a su madre en ofrecer que pusiese persona que administrase dicha mayordomía mientras alguno de sus hijos tuviese edad”.<sup>765</sup> De hecho su sobrino José Joaquín Ballesteros y Sabugal solicitó, sin obtenerlo, el cargo en 1748, pese a que Eusebio de Sabugal saldó su gestión con un elevado déficit y con abundantes irregularidades en su contabilidad.

En resumen, los aspirantes y ocupantes de la mayordomía de propios proceden de círculos muy restringidos especializados en el manejo de las rentas municipales y, en menor medida reales, y en este caso en posiciones no muy destacadas. Se explica así las conexiones familiares entre ellos y con miembros del regimiento, y también la tendencia a acaparar y vincular patrimonialmente el puesto.

Una práctica habitual en los siglos XVII y comienzos del XVIII es compaginar el empleo de mayordomo con la administración de otros caudales municipales.<sup>766</sup> Marcos de

---

<sup>765</sup> AVM-S, 3-29-81

<sup>766</sup> SANTAYANA- *Gobierno político*, p. 82 se muestra contrario a esta práctica. Sobre el mayordomo de propios opina: "No será conveniente esté implicado en otras administraciones de que deba dar cuenta, y si lo estuviere en la del pósito, no se le dará este otro encargo"



Sabugal (mayordomo entre 1665 y 1684) era además tesorero de las sisas de bajadas de medidas y sexta parte. Francisco de Narbaiza (1685-1699) lo era de las del cuarto de palacio, carnero de hospitales y segunda en onza de azúcar, y Antonio Manzano (1700-1704) de las sisas moderada y nueva de carne. Esta simultaneidad del cargo de mayordomo y tesorero de sisas desaparece en 1704. Desde entonces la persona que ocupa la mayordomía se dedica exclusivamente al patrimonio dentro del municipio madrileño, aunque podía seguir desempeñando tareas en el ámbito privado. En ocasiones se le agregan otros encargos, pero resultan poco relevantes: a partir de 1772 cobró el arrendamiento de los cajones en la Plaza Mayor y plazuelas de los gremios de fruta y pescados, cuyo importe se destinaba a la sisa del cuarto de palacio.<sup>767</sup>

Según la sentencia de Montalvo de 1454, el cargo de mayordomo tenía una duración anual, debiendo elegirse el día de San Miguel (29 de septiembre) a un caballero, siguiendo el turno entre las diversas colaciones. Sin embargo, desde fines del s. XV se observa la tendencia a prorrogar los nombramientos, dando origen a la profesionalización del cargo.<sup>768</sup> Esta tendencia se fue afianzando con posterioridad, hasta el punto de ocupar una misma persona el puesto en dos períodos diferentes.<sup>769</sup> A lo largo de los siglos XVII y XVIII la continuidad de los mayordomos en su cargo una vez nombrados ya es total: sólo se abandona el empleo por fallecimiento, jubilación o dimisión (que en algún caso no es aceptada). Una situación reflejada en el siguiente cuadro sobre los titulares de la mayordomía de propios entre 1665 y 1810. Además, tiene lugar el nombramiento de suplentes por parte del mayordomo enfermo, manteniéndose la responsabilidad del titular: Domingo González de Villa habilitó en 1766 a Andrés de Ojeda, dependiente de su casa, tanto para esta función como para sus asuntos particulares comerciales; en 1787 Dionisio de la Torre hizo lo mismo con su sobrino Sinforiano de la Torre.<sup>770</sup> Es claro que existía una clara visión patrimonial del cargo, con los consiguientes efectos lesivos para la administración municipal.

---

<sup>767</sup> AVM-C, 3-86-4

<sup>768</sup> GIBERT- *El concejo de Madrid*, p. 242

<sup>769</sup> Así, García Vázquez lo fue entre 1610-1619 y 1623-1626

<sup>770</sup> AVM-S, 3-31-3 y 3-31-9

## CUADRO 25 - MAYORDOMOS DE PROPIOS, 1665-1810

1665-1684	MARCOS DE SABUGAL
1685-1700	FRANCISCO DE NARBAIZA
1700-1704	ANTONIO MANZANO
1704-1744	EUSEBIO DE SABUGAL
1744-1748	JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DE PROPIOS. AGENTE RECAUDADOR: MIGUEL DE MENDOZA
1748-1768	ANTONIO DE BENGUA
1768-1777	DOMINGO GONZALEZ DE VILLA
1777-1802	DIONISIO DE LA TORRE
1802-1810	JOSE GARCIA ABELLA

FUENTE: v. nota 754

### B) – *SALARIO*

La evolución de las retribuciones salariales ilustra el proceso de especialización del cargo de mayordomo. En 1529 Madrid obtuvo licencia real para que pudiese pagar de salario al mayordomo 5.000 mrs anuales más dos cahíces de trigo y dos de cebada, si bien el municipio todavía aseguraba “que aun no se halla persona tal que con el dicho salario se quiera encargar del dicho oficio por el mucho trabajo que diz que tiene”.<sup>771</sup> A comienzos del s. XVIII se ha convertido en 2.491 rs más otros 1.100 rs por administrar y cobrar los alquileres de los hornos de

---

<sup>771</sup> AVM-S, 2-483-37

Villanueva.<sup>772</sup> El reglamento de sueldos y consignaciones de 1715 lo fijó su retribución en 6.600 rs. Al compararlo con otros salarios se aprecia la índole del puesto, situado en el nivel medio: inferior al del corregidor, procurador general, escribanos o secretarios mayores, contadores y tesorero, mientras superaba al de los oficiales mayores de las contadurías, primer cajero de la tesorería, teniente de procurador general o maestro mayor de obras y fuentes.<sup>773</sup>

Posteriormente se la aumentaron 950 rs al año en concepto de "ayuda de costa", 400 rs por ocuparse de las cortas de leña de los montes de El Pardo y 550 por su participación en la fiesta del Corpus.<sup>774</sup> Este salario de 7.550 rs fue reconocido por el Reglamento de propios y arbitrios elaborado por el Consejo en 1766.<sup>775</sup> Además, el mayordomo percibía las asignaciones de cera en las festividades de Madrid, las dietas en caso de desplazamiento fuera de la ciudad y las asignadas por su participación en el apeo general de propios.

En 1789 el mayordomo Dionisio de la Torre reclamó un aumento de salario y el nombramiento de un oficial ayudante, pues debido a los numerosos encargos que planteaba el cargo se había visto obligado a emplear a su sobrino. Obtuvo el dictamen favorable de los comisarios de propios y del procurador personero, que aconsejaron el aumento de sueldo a 11.100 rs y la retribución de 2.200 rs para un escribiente que le ayudara. Finalmente la Junta de propios decidió elevar el salario a 12.000 rs anuales, siendo de su cuenta el contratar a un ayudante si lo necesitaba.<sup>776</sup>

El sueldo, pues fue progresivamente incrementado al nivel de un administrador profesionalizado y con capacidad de realizar la recaudación y control de un patrimonio disperso y sujeto a numerosas presiones y ataques. Que la función-competencia estuviera al nivel de la percepción ya es otro cantar. Así, al privilegio (oficio del estado noble) y a un sueldo que no tenía su contraprestación, se unían las ventajas derivadas del ejercicio del cargo.

---

<sup>772</sup> AVM-C, 1-435-1, 2-250-1 y 1-113-1

<sup>773</sup> AVM-S, 2-311-5

<sup>774</sup> AVM-C, 3-412-1

<sup>775</sup> AVM-S, 2-353-43 y 4-108-144

<sup>776</sup> AVM-S, 3-31-11

Durante los siglos XVI y XVII las funciones del mayordomo apenas evolucionan con respecto a las ya descritas para la segunda mitad del s. XV. Las escrituras de poder dadas por Madrid a favor de los nuevos cargos<sup>777</sup> y el análisis de la práctica administrativa permiten precisarla: realización de los arrendamientos de parte de los bienes del patrimonio municipal, cobro de sus rentas, así como de las deudas y atrasos, pago de los libramientos sobre estos ingresos y llevar a cabo las diligencias judiciales oportunas; todo ello justificado en sus cuentas, cuya conclusión era el superávit o déficit a su favor o al de la Villa. Para asegurar el resultado de su gestión debía haber otorgado con anterioridad la correspondiente fianza.

Al mayordomo correspondían de forma exclusiva la percepción de los ingresos producidos por los bienes de propios. Además, debía cobrar las deudas y atrasos y en caso de no hacerlo, justificar las diligencias realizadas en esta materia. Cumple, pues, la función de *recaudador*. El gran número de partidas, la fijación de diversas fechas para su pago y la dispersión espacial del patrimonio municipal son factores que explican la dificultad de su control. El resultado es que si bien técnicamente es responsable de todos los bienes, en la práctica tiene lugar el abandono y olvido de cierto número de bienes. Esta es, precisamente, la acusación de un buen conocedor de la documentación madrileña, como es Timoteo Domingo Palacio, archivero municipal a finales del s. XIX, cuando afirma que los mayordomos “se han dado por satisfechos con velar por las grandes propiedades, cuyos rendimientos se alcanzaban a poca costa, dejando en el mayor abandono las fincas de menos valor a medida que su poca significación y el mayor trabajo en conservarlas al abrigo de la rapacidad exigía superiores atenciones y servicios”.<sup>778</sup>

Disponía, asimismo, de poder legal para realizar los contratos de arrendamiento, ajustando con los interesados las condiciones de precio, tiempo, plazos, y otras, salvo en los casos en que intervenían los regidores como miembros de las comisiones encargadas de algún tipo de bienes o rentas (sotos, barcas...). En caso de que se administrara directamente por el municipio algún ingreso por no haberse arrendado, podía recurrirse al mayordomo, lo que solía

---

<sup>777</sup> AVM-S, 2-213-60 y AVM-C, 1-135-2

<sup>778</sup> DOMINGO PALACIO- *Manual del empleado*, p.461

ocurrir en el caso de los sotos o cortas de leñas, pero no en el de las rentas, para el que se normalmente se nombraba un administrador particular.

Además de recaudador, el mayordomo de propios cumplía el papel de *pagador*. Depositario de los caudales cobrados, estaba encargado de hacer los pagos que correspondieran a estos fondos, siempre previo libramiento de los regidores encargados. De esta forma, al coincidir las funciones de cobrador y pagador, el mayordomo actuaba como *tesorero*. Estos fondos no estaban sometidos a intervención o fiscalización de su manejo (si bien sí lo estaban a su justificación en las cuentas), por lo que en algún caso se aprecia su mezcla con los negocios particulares del empleado municipal.<sup>779</sup> Asimismo diversos mayordomos realizaron adelantos de efectivo cuando no había caudales de propios disponibles.

Pero no acaban aquí sus atribuciones que, por otra parte, no eran meramente retributivas o contables. Recibía el poder “para que si en razón de lo referido o parte de ello fuese necesario, parezca en juicio ante cualesquier jueces y justicias eclesiásticas y seglares, y haga y presente pedimientos, requerimientos, citaciones, oposiciones, protestas, pida embargos, desembargos, execuciones, prisiones, denunciaciones, ventas, trances y remates de bienes, costas, las cobre, presente papeles, escrituras, probanzas, informaciones y otros instrumentos, recuse jueces, letrados, escribanos, notarios y otros ministros, oiga autos y sentencias interlocutorias y definitivas, consienta lo favorable y de lo en contrario apele y suplique y siga las apelaciones y súplicas en todas las instancias y tribunales y, finalmente, haga todos los demás autos y diligencias que judicial y estrajudicialmente se requieran”. Tan amplias facultades judiciales se deben a la misión que le está encomendada de promover todas las acciones que redundaran en la conservación y beneficio de los propios. Así, realiza también informes sobre las mejoras que pueden hacerse, nuevos aprovechamientos, etc. Al ser este encargo difícilmente separable del de los regidores comisarios, será el descuido o la falta de interés de éstos lo que permita la intervención con creciente protagonismo del mayordomo.

Debía presentar las cuentas de los caudales manejados. Si en un principio, de acuerdo con la duración del cargo, la presentación era anual, desde el s. XVI, debido al gran número de partidas que comprendía se impuso el plazo trienal. En realidad esta obligación no se cumplió

---

<sup>779</sup>.- Así, en 1.743, el mayordomo Eusebio de Sabugal, que era cosechero de vinos, notifica a dos arrendatarios de propios: "Francisco Hernández me dice le han entregado para labores de mis viñas por dos veces sendos recibos y en el mes presente ciento ochenta rs de vellón, los que en fuerza de los referidos recibos y esta carta abonará a Vms. en cuenta". AVM-S, 3-32-89. También, AVM-S, 3-84-3

totalmente hasta principios del s. XVIII, pero las desviaciones eran todavía poco importantes. La contaduría de cuentas era la encargada de su toma y fenecimiento, mientras la contaduría de la razón de la hacienda de Madrid procedía a inscribir los caudales de propios (vid. infra). La diferencia entre ingresos y gastos pasaba como “*resulta*” a la cuenta siguiente, al capítulo de ingresos si había superávit y al de gastos si se producía déficit. El balance final de la última cuenta presentada por un mayordomo era pagado por su sucesor si le había resultado favorable o se cobraba de su fianza si era favorable a la Villa de Madrid (y si la cantidad era suficiente).

Otorgar fianza era una de las obligaciones del elegido para el cargo.<sup>780</sup> Su valor a mediados del s. XVII era de 8.000 ducados (88.000 rs) y se situan sobre censos, efectos de sisas e incluso se recurre a fiadores. A fines de esta centuria, las condiciones se fueron relajando y, así, Francisco de Narbaiza (1685-1700) no otorgó fianza, ni Antonio Manzano (1700-1704), aunque si dio escritura de obligación general. Con su sucesor Eusebio de Sabugal se volvió a la fianza de 8.000 ducados, manteniendo la obligación general. En 1746 el ayuntamiento se planteó exigir una fianza de 12.000 ducados en hipotecas dentro del casco de Madrid, que aumentaría conforme lo hiciera el valor de los propios de Madrid. Sin embargo al mayordomo elegido en 1748 se le admitió una fianza de tan sólo 4.000 ducados, que en 1768 resultaría insuficiente para el pago de su alcance. Se volvió así a mantener el valor de 8.000 ducados para la fianza, aunque en el caso de Dionisio de la Torre, nombrado en 1777, la escritura no se formalizó hasta el 9 de septiembre de 1802, en el momento en que estaba tramitando su jubilación. Una fianza cuyo importe se situaba en torno a la tercera parte de los ingresos anuales de propios debía haber resultado una garantía y un medio de control suficiente sobre la gestión de los mayordomos. Sin embargo, el escaso rigor en su solicitud en algunos casos y, sobre todo, la falta de fiscalización en la presentación de cuentas hicieron que no siempre resultara suficiente.

#### D) – CAMBIOS EN EL S. XVIII

El cargo de mayordomo experimentó a lo largo del s. XVIII cambios importantes en sus funciones y responsabilidades. El primero y fundamental tiene su origen en la gestión de Eusebio

---

<sup>780</sup> Sobre la fianza de los mayordomos: AVM-S, 3-29-82, 3-29-84, 3-29-85, 3-29-88, 3-33-3, 3-31-20 y AVM-C, 3-80-1

de Sabugal. Derivadas de las transformaciones administrativas a partir del reglamento de 1766 tienen lugar diversas variaciones menos significativas.

Eusebio de Sabugal ocupó el empleo en un dilatado período, entre 1704 y 1744. Hasta 1716 cumplió con la obligación de presentar las cuentas trimestrales, pero posteriormente los plazos comenzaron a alargarse: 1717-1721, 1722-1728. En 1744 el retraso en la presentación de cuentas era de quince años, lo que coincide con importantes modificaciones en la composición e ingresos de los bienes de propios, como la caída de la más destacada de sus rentas, el peso de la harina. Al solicitar su jubilación como mayordomo de propios el ayuntamiento pidió a Sabugal informase del estado de los caudales a su cargo entre 1728 y 1742. Su comunicación no pudo ser más alarmante. Aunque las cifras no eran definitivas -de hecho variaron mucho en la versión definitiva de las mismas-, se deducía un déficit medio anual que casi alcanzaba los 24.000 rs, a los que había que añadir importantes cantidades (más de 100.000 rs) adelantadas por el mayordomo para gastos extraordinarios: festejos, luminarias, etc. Por otra parte, las deudas a los propios (partidas no cobradas) eran muy elevadas, en torno a 300.000 rs para el período en que Sabugal había servido el cargo. Añadíase a todo ello la impresión de un caos administrativo y contable total: retraso en la presentación de sus cuentas, numerosas partidas sin justificación...<sup>781</sup>

El ayuntamiento de 4 de diciembre de 1743 encargó un dictamen a los regidores comisarios de propios, Antonio Gaspar de Pinedo y Cándido de Negrete –miembro del ya mencionado clan de los Negrete, de tan destacada presencia en los órganos de gobierno del municipio madrileño-, ambos con experiencia en estos temas. En su informe de 13 de marzo de 1744 estimaron oportuna la jubilación honorífica de Eusebio de Sabugal, aunque debía continuar encargado de la cobranza de las cantidades adeudadas a los propios hasta fines del año anterior, dada su experiencia y conocimiento del asunto. Pero es en la administración de estas rentas donde proponen las medidas más destacadas. Según los dos comisarios, al mayordomo únicamente debía corresponder la recaudación y manejo de los caudales, mientras que las decisiones sobre su administración serían exclusivas del ayuntamiento, que había hecho dejación de tal atribución: “tampoco debe ser suyo [del mayordomo] otro cuidado que el de dar cuentas con pago de los caudales, quedando siempre la principal y verdadera administración y la solicitud de aumento y conservación a cargo de Madrid, como una de sus principales y estrechas obligaciones y como en ella no han permitido poner todo el esfuerzo necesario las otras muchas

---

<sup>781</sup> AVM-S, 3-32-89

importancias de que ha cuidado el ayuntamiento se ve claramente el origen de la desgracia con que hoy se hallan los propios reducidos a tanta escasez y empeño”.<sup>782</sup>

Consecuentemente, el medio propuesto para acabar con la crítica situación era sustituir momentáneamente el cargo de mayordomo por una *Junta de administración de propios*, que estaría integrada por el corregidor, regidores, procurador general y el secretario del ayuntamiento. Este esquema se completaba con un agente recaudador o cobrador y el establecimiento de un arca para depositar los caudales, sometida a la intervención de los claveros municipales. Aprobado este informe en la sesión municipal de 20 de abril de 1744, la Junta desarrolló sus actuaciones encaminadas a una recuperación y ordenación de la gestión del patrimonio hasta 1748, fecha en que se restableció el puesto de mayordomo.

El nuevo organigrama de administración de los bienes de propios del ayuntamiento de Madrid planteado en 1744 suponía sustanciales innovaciones en el que había venido funcionando desde la Baja Edad Media. En primer lugar, la figura del mayordomo de propios era sometida a un drástico recorte de funciones al limitar su papel al de recaudador, anulando así las labores de pagador y tesorero que había venido desarrollando hasta entonces. Pero sin duda la reforma más profunda consistía en el intento por parte del ayuntamiento (y más concretamente por los regidores) de hacerse cargo de las tareas fundamentales de gestión, esto es toda la toma de decisiones importantes relativas al patrimonio municipal, incluyendo el control efectivo de los administradores. Aunque teóricamente era atribución del gobierno municipal –especialmente de las comisiones de regidores y del ayuntamiento pleno, en el que participaba el corregidor-, se había producido una auténtica dejación de funciones en el pasado. El regimiento pretendía ahora ampliar su intervención directa más que sus competencias estrictas, lo que significaba más implicación en el gobierno efectivo de la ciudad. Un intento que se estaba desarrollando en otros ámbitos municipales, como el abastecimiento o la gestión hacendística, y que suponía luchar en un doble frente: contra el tradicional abandono de funciones y responsabilidades del ayuntamiento en siglos precedentes, y contra la creciente presencia de los órganos de gobierno de la monarquía en una ciudad que era también sede de la Corte. En el caso del patrimonio municipal los logros fueron limitados; el impulso de regeneración del regimiento resultó de corto alcance, pues tras la restauración del mayordomo de propios en 1748 su papel en la gestión directa fue creciendo y menguando el de los regidores. Sólo tras las reformas municipales –en el

---

<sup>782</sup> AVM-S, 3-8-1



caso de Madrid a partir del Reglamento de 1766- se desarrollaron nuevas iniciativas de mejora en la administración de los bienes de propios.

El reglamento para regular las funciones del mayordomo aprobado en el ayuntamiento de 21 de marzo de 1748<sup>783</sup> segrega definitivamente del cargo la tarea de pagador y de tesorero. El mayordomo debía “correr con la universal y general administración de todos los efectos y rentas de propios de esta Villa, formando y teniendo libros de cada clase de hacienda, como tierras, casas, censos al quitar y perpetuos y así de las demás alhaxas de propios por donde siempre conste los que de cada clase hubiere y cuenta subcesiva en ellos de lo que se fuere operando”, así como descubrir propiedades ocultas, de cuya renta percibiría el 10%. Al final de cada mes entregaría lo recaudado en la Tesorería de causa pública, “de forma que con los doce recibos de las mesnadas de cada año verifique la data del caudal entrado en su poder en el año”. En sus cuentas desaparecen, por tanto, las relaciones de gastos, estando constituido el haber por la justificación del traspaso de fondos. El tesorero de causa pública sería el encargado de realizar los pagos correspondientes a los propios.

La intervención del mayordomo en los caudales se limitaba así a la recaudación, entrega en tesorería y justificación en sus cuentas. Sin embargo, sus atribuciones como pagador no desaparecieron totalmente. Con el fin de agilizar los trámites burocráticos, se le encargó satisfacer determinados gastos difícilmente presupuestables y que se pueden denominar “extraordinarios”: los causados en las diligencias judiciales o extrajudiciales, los gastos de administración producidos por el cobro de las rentas, reparaciones de edificios, redenciones de censos sobre los propios, costes de apeos de tierras y visitas en los términos de los comisarios de propios. Los pagos los debía hacer según las órdenes y con la intervención de dichos comisarios, presentada la cuenta en la secretaría de ayuntamiento que despachaba la libranza correspondiente contra el tesorero. Este entregaba a cambio el recibo que aparecía en su cuenta de haber, manteniendo de esta forma la normativa de su cargo.<sup>784</sup>

Esta separación teórica supone una mayor homogeneidad funcional y la posibilidad de incrementar el control de los fondos de propios. El reglamento de 1766 mantuvo el mismo esquema, encargándole de “administrar y recaudar sus productos en la conformidad y con la intervención que hasta aquí, entregándolos en la tesorería por mesnadas”. En la práctica el

---

<sup>783</sup> AVM-S, 3-29-88

<sup>784</sup>. AVM-C, 3-80-1

mayordomo siguió realizando los mismos pagos, que se libraban sobre la partida nº 159 del reglamento, “gastos ordinarios y extraordinarios eventuales y no fijos en su importe”, para los que asignaba un total de 200.000 rs. El volumen de estos gastos en el caso de los propios podía llegar a ser muy elevado, ascendiendo en 1785 a 65.317 rs, casi la tercera parte de lo presupuestado para todos los ramos de la hacienda municipal madrileña.<sup>785</sup>

Otro mecanismo de control de los caudales radicaba en las fechas de presentación de las cuentas de los administradores. En el reglamento del cargo de 1748 se preveía que su cuenta debía ser entregada “luego que cumpla cada año sin retardación alguna”. En la nueva estructura financiera municipal creada en 1767, el Consejo ordenaba a los administradores municipales, incluido el de propios, que entregaran “por semanadas en las arcas de sisas el importe de los derechos y rentas que hubiese cobrado y debido cobrar en la antecedente, en las mismas especies que las reciban y no en otras, ni en papeletas, cartas de pago o recibo”. Pese a que la Junta de propios y sisas, en representación de 18 de diciembre del mismo año, explicaba cómo el mayordomo (junto con el receptor de censos de fuentes) hacían sus cobros según los plazos fijados en los arrendamientos y por tanto habría semanas en que recibirían caudales y otras en que no, el Consejo no modificó su medida.<sup>786</sup> Por otra orden de 16 de septiembre de 1772 se marcaba como límite para la presentación de cuentas anuales los dos primeros meses del siguiente.<sup>787</sup> Medidas que resultaron eficaces en un primer momento, observándose gran regularidad y continuidad en la presentación y finiquito de las cuentas en la década de 1770.

El titular de la mayordomía de propios apeló contra ambos plazos en 1793 alegando que precisaba hasta mayo o junio para realizar la cuenta del año antecedente al tener que cobrar las rentas dentro y fuera de Madrid. Con el informe favorable de los contadores de cuentas, que verificaron la particularidad de su recaudación, la Junta de propios acordó que el mayordomo realizara mensualmente la entrega en arcas de los caudales y que dispusiese de cuatro meses para

---

<sup>785</sup>. AVM-S, 3-31-8. Esta cantidad produjo muchos problemas con las contadurías de cuentas e intervención, que se negaron a reconocerla. Además, la partida de gastos extraordinarios de ese año se habían destinado al pago del desfile real a la basílica de Atocha con motivo de las bodas de los infantes. Sin embargo, en los años posteriores se siguió con este mismo procedimiento. Las cantidades elevadas resultan lógicas si tenemos en cuenta el coste de mantenimiento de las propiedades madrileñas: en 1790 los gastos de obras y reparaciones ascendieron a 25.199 rs. AVM-C, 4-222-2

<sup>786</sup>. AVM-S, 3-115-38

<sup>787</sup>. AVM-S, 3-31-20

entregar la cuenta anual.<sup>788</sup> Pero el retraso a fines de siglo era considerablemente mayor de lo establecido: en 1783 todavía no se había presentado la cuenta correspondiente al año 1781. A esta demora había que añadir la causada por la actuación de la contaduría, de la que me ocupo a continuación.

### 2.3.- CONTADURÍAS Y TESORERÍAS

La estructura y los cambios en la administración financiera de los propios madrileños exigía una continua referencia al cuidado de los libros de contabilidad, registros de rentas, expedición de libramientos, métodos de proceder a su ajuste, informes elevados al ayuntamiento y respuestas a las autoridades si éstas las demandaban.

#### A) – ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN.

Tres eran las principales gestiones encomendadas a las contadurías para el control de los fondos de propios. En primer lugar, la “*toma de razón*” o registro de los recibos y libranzas del mayordomo, que mediante este acto obtenían la validación y quedaban anotadas para cualquier comprobación que se realizara. También se tomaba la razón de todas las adquisiciones y enajenaciones que tuvieran lugar, con lo que en teoría se obtenía un inventario completo del patrimonio municipal y del manejo de sus caudales.

El segundo cometido era la “*toma de cuentas*”. Una vez que el mayordomo (o el agente recaudador entre 1744 y 1748) presentaba el balance contable de su gestión (anual, trienal o por períodos todavía más dilatados), la contaduría encargada procedía a comprobarlo, utilizando para ello los registros de la toma de razón, recibos y libranzas presentados por el administrador, las recetas o relaciones despachadas por las secretarías e incluso las mismas cuentas de los años antecedentes, según los casos. Tras la verificación de todas las partidas (que en algunos casos

---

<sup>788</sup>. AVM-S, 3-31-20. La Junta informó el 10 de septiembre de 1802 al Consejo que había aceptado las dos modificaciones sin esperar el dictamen de este tribunal con el fin de poder firmar la escritura de fianza del cargo.

superan las 800), los contadores exponían sus reparos a las anotaciones dudosas que encontraran, decidiendo su solución las autoridades municipales. Una vez concluido el proceso se entregaba al administrador el finiquito correspondiente. Caso de que hubiera superávit a favor del mayordomo, se contabilizaba en el “haber” del año siguiente, mientras que si el alcance era favorable al municipio se integraba en el “debe”.

Por último, la *intervención* o fiscalización de caudales en las arcas de los tesoreros de fondos públicos, función que hasta 1744 correspondía al mayordomo de propios, para ser desempeñada por la Tesorería municipal a partir de ese año. Era un proceso necesario para la legalización del movimiento de caudales, encargándose los contadores de vigilar su aplicación a los fines consignados por el ayuntamiento mediante las libranzas correspondientes, firmadas por los regidores responsables.

A estas tres gestiones estrictamente contables cabe añadir la obligación que tenían los contadores de asesorar al ayuntamiento sobre temas financieros. Tampoco descuida otros asuntos como las relaciones de valores, gastos y cargas, informes sobre el montante y los movimientos de caudales municipales, o las exposiciones acerca de los mecanismos de funcionamiento y administración de la hacienda madrileña.

Durante los siglos XVI y XVII se estructura una compleja red que comprende tres contadurías con competencia sobre los bienes de propios: la de la razón de la hacienda de Madrid, la de propios (ambas para ejercer la toma de razón) y la de cuentas para la verificación de las mismas. Hasta 1744 no existe intervención del manejo de los caudales por el mayordomo, sin controlarse la aplicación de los fondos recaudados a los fines consignados pues, como ya he dicho, éste podía utilizar el dinero de los arrendamientos para sus negocios particulares y adelantar capitales privados para gastos públicos. En esta época tan sólo las libranzas dadas para los pagos de los mayordomos deben cumplir el requisito de su toma de razón por las contadurías de la razón y de los propios.

*La contaduría de la razón de la hacienda de Madrid* es un oficio enajenado. Fue creado por Real Cédula de 6 de noviembre de 1619<sup>789</sup> con motivo de una visita que Felipe III ordenó entre 1617 y 1619 para inspeccionar la hacienda y el pósito madrileño.<sup>790</sup> En 1644, a la muerte

---

<sup>789</sup>. AVM-S, 2-483-4

<sup>790</sup>. Fruto de esta visita fue también la creación de una Junta compuesta por el presidente y dos miembros del Consejo de Castilla y por el corregidor y dos regidores de la Villa. Fue anulada por la Real Cédula de 31 de mayo de 1631, que devolvió el total control de estos asuntos al municipio. *CEDULAS REALES y otras*

del primer titular, Diego de Arrendono de Agüero, el rey ordenó que se vendiese -siempre la venta de oficios ligada a las necesidades hacendísticas-, sirviendo su importe como parte de los 46.405 ducados que correspondió pagar a la villa de Madrid en el servicio de 300.000 ducados. El precio en que fue adquirida por Simón Rodríguez de Ubierna fue de 100.000 reales de plata y 15.500 de vellón, despachándose el título el 24 de julio de 1644. Transmitido a sus herederos, este oficio no podía ser tanteado por Madrid ni disfrutado por ningún regidor ni escribano municipal. Disfrutaba en los últimos años del XVII y primeros del XVIII de un salario de 11.279 rs, de los cuales 8.823 rs eran en concepto de salario y los 2.456 rs restantes por propinas y festividades, además de una consignación de cera de 26 libras ordinarias y 24 para las extraordinarias.<sup>791</sup> El reglamento de 1715 rebajó la cifra total a 9.002 rs, cantidad que se mantuvo en el de 1766.

El funcionamiento práctico del encargado nombrado por el titular se limitó a validar los documentos de que tomaba razón. No tuvo ninguna efectividad en el inventario de bienes y movimientos de caudales, no pudiendo informar sobre ninguno de estos aspectos las contadas ocasiones en que el municipio se lo pidió. Tampoco utilizó la prerrogativa de la asistencia a todas las Juntas que trataran los arrendamientos de rentas para informar sobre esta materia. Su efectividad, pues, fue escasa si la comparamos con otros mecanismos contables.

*La contaduría de propios* (en realidad es un único contador) tiene la misma misión que la anterior: tomar razón de las libranzas, validándolas. De esta forma, una función tan destacada no es exclusiva de un puesto enajenado. Su origen se remonta a comienzos del s. XVI. Una Real Provisión de 27 de noviembre de 1515 informaba de que “a causa que antiguamente en la hazienda y propios desta dicha villa avian acaesçido algunos fraudes y negligencias para remedio dello podra aver quinze años poco mas o menos contratastes un contador que toviere libro e quenta y razon de los dichos propios y hazienda y de los que se librase y gastase y desta manera avian auido en ello mucha claridad”.<sup>792</sup> En la segunda mitad del s. XVII el contador de propios gozaba del limitado salario de 588 rs anuales,<sup>793</sup> cantidad que fue confirmada por el reglamento de 1715.

---

*disposiciones referentes a la administración de Madrid, s.a., s.f.*

<sup>791</sup>. AVM-S, 4-127-1 y 2-185-40

<sup>792</sup>. AVM-S, 2-483-44

<sup>793</sup>. AVM-C, 4-300-3

En 1717, con motivo del nombramiento de un nuevo contador, Joaquín Félix Gómez de Pedrosa, se intentó una reestructuración de esta dependencia.<sup>794</sup> El objetivo era la creación de un organismo capaz de contribuir a un inventario del patrimonio municipal que permitiera aclarar las numerosas ocultaciones y pérdidas sufridas. Para ello el contador recibiría de todas las oficinas del ayuntamiento los títulos de pertenencia, reglas de administración y cualquier otra documentación que permitiera salvar las numerosas deficiencias que se observaban en la contaduría de la razón.<sup>795</sup> El intento fue infructuoso. Los informes que el contador presentó en 1721, 1726 y 1729 confirman la ausencia de resultados prácticos.<sup>796</sup> El inventario o razón general de los propios madrileños no se consiguió (algo que tampoco había logrado realizar la contaduría de la razón), debido a la falta de cooperación de los demás despachos. Por su parte, el intento de ampliar sus facultades a la toma de cuentas también fracasó, manteniéndose en esta función contable la posición predominante de la tercera oficina:

*La contaduría de cuentas* es el principal organismo en el control de los fondos municipales. Creada en un principio para el manejo de las sisas,<sup>797</sup> sus atribuciones se extienden a otros ramos de la hacienda madrileña. Su importancia viene resaltada por el número de empleados y sus salarios. Cada uno de los contadores de cuentas percibía según el reglamento de 1715, 20.027 rs, consignados 19.825 en sisas y 202 en propios. Sus dos oficiales mayores recibirían un salario de 4.400 rs cada uno, de los que 100 provenían del ramo de propios. Hasta 1746 es la oficina donde se toman las cuentas de los mayordomos, siguiendo el proceso que ya he explicado. La disociación existente en esta época entre las contadurías de toma de razón y la de cuentas hace que los encargados de ésta se basen en las relaciones juradas del administrador (en nuestro caso, el mayordomo de propios) y las recetas o catálogos despachados por las secretarías para comprobar las partidas.

---

<sup>794</sup>. Joaquín Félix Gómez de Pedrosa había auxiliado a su padre Blas de Pedrosa en su cargo de oficial segundo de la Contaduría General de las rentas de millones. AVM-S, 2-185-8. Su hermano, José Gómez de Pedrosa, era regidor, desempeñando importantes funciones en el gobierno de los propios: comisario, encargado de un apeo de tierras... AVM-S, 2-185-51

<sup>795</sup>. Acuerdos del ayuntamiento de 30 de agosto y 6 de octubre de 1717. AVM-S, 2-185-51

<sup>796</sup>. AVM-S, 2-185-10, 2-185-51 y 1-463-1

<sup>797</sup> Sobre este tema me remito a la investigación que de forma inminente va a presentar Carlos de la Hoz García

## B) – *ALTERACIONES DEL ESQUEMA CONTABLE E INTERVENCIÓN ESTATAL.*

A esta estructura de las contadurías se añade la creación del *Oficial mayor de propios* por Real Decreto de 29 de noviembre de 1735. Se trata de una merced concedida a Agustín Gómez Lozano como hijo de Pedro Gómez Lozano, quien al fallecer ocupaba los cargos de secretario del Consejo de Hacienda y oficial mayor de la Secretaría del despacho de Guerra. El Real Decreto citado fijaba el salario del puesto en 6.500 rs anuales y le encargaba la toma de cuentas del ramo de propios.<sup>798</sup>

Consiste, pues, en una concesión real que su titular pretendió hacer hereditaria. Agustín Gómez Lozano elevó un memorial en 1748 para que su empleo lo heredase quien se casase con su hija y poder nombrar hasta entonces un sustituto debido a su mala salud. El corregidor se mostró totalmente opuesto a la pretensión de perpetuar el puesto, opinión que fue recogida y aprobada por Real Resolución comunicada el 31 de marzo de 1748.<sup>799</sup> Sí se admitió el nombramiento de un sustituto, puesto que recae en alguien con experiencia en las contadurías madrileñas, insistiéndose en que el salario de dicho empleado debería ser pagado por el titular, sin que pudiera exigir nada al municipio.<sup>800</sup>

Este confuso esquema se vio modificado en 1744 con la constitución de la *Junta de administración de propios*, que decidió establecer un arca donde depositar los caudales de dicho ramo como medio para asegurar el empleo de los ingresos en los fines destinados. Segregada la atribución de tesorería del mayordomo, a quien hasta entonces había pertenecido, aparece ahora la tercera intervención contable que señalé anteriormente: la *intervención de caudales*. La Junta encargó a la contaduría de cuentas la fiscalización de todos los ingresos en el arca, además de seguir verificando las cuentas, en este caso no del mayordomo, sino del agente recaudador. Por su parte, la contaduría de la razón de la hacienda de Madrid debería intervenir los pagos, que se hacían en cumplimiento de las libranzas despachadas.<sup>801</sup> A partir de ese momento y dado que el

---

<sup>798</sup>. AVM-S, 2-185-67

<sup>799</sup>. AVM-S, 2-185-15

<sup>800</sup> AVM-C, 1-163-2

<sup>801</sup> AVM-S, 3-8-4

depósito de caudales estará siempre separado del recaudador, los fondos de propios estarán sometidos a intervención contable.

Con el establecimiento del Gobierno político- militar del conde de Maceda tiene lugar el primer gran intento estatal de unificar y clarificar los sistemas de gestión financiera del municipio madrileño. Un real decreto de 22 de septiembre de 1746 sustituía el corregimiento de la Villa por un gobierno político-militar, que consiste en una gran acumulación de poderes en el conde de Maceda, el cual debe “plena y única subordinación a mi real persona por medio del Secretario del Despacho Universal de Gracia y Justicia”. El Consejo de Castilla es el gran derrotado frente al equipo ministerial que impulsa la dinastía borbónica.

Entre las atribuciones de Maceda se encuentra la hacienda municipal, especialmente la *causa pública*, importante ramo en el que se recogen y centralizan las obras y servicios públicos (limpieza, empedrado y fuentes) para el que se propone una administración propia, separada de los mecanismos de administración y contabilidad precedentes. El control de los ingresos y gastos y la mejora de los servicios municipales constituían por tanto objetivos fundamentales de este intento –por lo demás de corta duración- de intervención del gobierno central en el ayuntamiento madrileño.

Si bien en este Real Decreto no se vincula el ramo de propios a la nueva estructura de la causa pública, sí se hace en un conjunto de Reales Órdenes que, con la misma fecha de 22 de septiembre de 1746, pretenden completar y clarificar el gobierno político-militar madrileño. En lo correspondiente a la administración y dotación de causa pública se establece la creación de “un tesorero y una contaduría... y en esta oficina se ha de llevar con las debidas separaciones las cuentas generales y particulares de todos los caudales que ahora señalo por vía de asignación interina y en adelante asignare o mandare librar sobre las sisas o sobre otros fondos con destino a la causa pública o funciones extraordinarias de Madrid”. Las nuevas oficinas de contaduría y tesorería de causa pública extendieron su ámbito competencial al ramo de cuarteles y al de propios.

La Real Instrucción que concreta las reglas para el gobierno interino de la contaduría y tesorería de causa pública determina que de cada ramo (propios y rentas, cuarteles y dotación de causa pública) se había de llevar una cuenta independiente de ingresos y gastos, de periodicidad anual, que estaría tomada y fenecida en el plazo de seis meses. En el mes siguiente se enviarían directamente a la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia para su revisión. El plazo para la



liquidación de las cuentas pendientes de propios y de los demás sectores era de seis meses, momento en el que se habrían ingresado además los alcances producidos, lo que, al menos en el caso de los propios, no se cumplió de forma estricta.<sup>802</sup>

El nombramiento de los titulares tuvo lugar en mayo de 1747.<sup>803</sup> El contador recibiría una asignación anual de 7.700 rs por 16.000 del tesorero y sus oficiales. Buena parte de los componentes de estas oficinas provenía de los ramos incorporados: limpieza, cuarteles... La estructura de la contaduría y tesorería de causa pública se mantuvo hasta 1766 pues aunque el efímero cargo de gobernador político y militar desapareció por Real Decreto de 14 de octubre de 1747, el corregidor nombrado para sustituirle ordenó el 3 de noviembre del mismo año “no ser conveniente innovar en el establecimiento de la referida contaduría y reglas de librar que ha habido en el tiempo del expresado gobierno”.

Tampoco en este caso se consiguió una administración contable eficaz de los propios madrileños. En buena medida ello se debió al conflicto de competencias suscitado entre la nueva contaduría de causa pública y la de cuentas.<sup>804</sup> El punto de partida se encuentra en el reglamento del cargo de mayordomo de 1748, que atribuía la toma de razón de los recibos que percibía el mayordomo a la contaduría de cuentas. Era la primera vez que se fijaba la toma de razón de los ingresos del mayordomo (antes sólo se comprendían las libranzas). El contador de causa pública recurrió contra esta determinación, afirmando ser de su competencia la toma de razón y cuentas de propios. El ayuntamiento así lo reconoció, lo que motivó la reacción de la contaduría de cuentas, que se basó en la consideración de la nueva contaduría de causa pública como una estricta contaduría de intervención, encargada de la vigilancia de la aplicación de caudales a los fines previstos.

El acuerdo del ayuntamiento de 17 de agosto de 1753 arbitró una solución salomónica. Siguiendo las propuestas realizadas por los comisarios de propios se decidió que se presentasen duplicadas las cuentas por entender que la contaduría de causa pública era un mecanismo estatal para controlar los fondos locales. Así, en el ayuntamiento de 7 de junio se afirmaba “no ser justo emancipar a la citada contaduría de cuentas de la posesión que desde su origen tiene adquirida y de sus derechos, concediéndoselos en perjuicio de su antiguo honor a otra puramente de

---

<sup>802</sup> Los decretos y órdenes citados se encuentran en AVM-S, 2-408-2

<sup>803</sup>. Además del expediente anterior, AVM-S,2-353-1

<sup>804</sup>. AVM-S, 2-408-2 y AVM-C, 4-395-2

comisión, cuyos inconvenientes se dejan bastante comprendidos”, encargando al corregidor que pidiera al rey se mantuviera la exclusividad de la contaduría de cuentas en la toma de las de propios. Sin embargo, no se hicieron novedades en el proceso de fenecimiento de las relaciones presentadas por el mayordomo. Lo que si se produjo fue lógicamente su retraso, a lo que hay que añadir el de su presentación por parte del administrador. No es extraño, por tanto, que las cuentas de Antonio de Bengoa entre 1754 y 1768 se comprobaran y fenecieran en 1772, cuando ya el reglamento de 1766 había centralizado esta función en la de cuentas.

En definitiva, hasta el *Reglamento del Consejo de Castilla de 1766* no se unificaron los sistemas contables de la hacienda concejil. Con la desaparición de las contadurías de causa pública y de refacción, era la de cuentas la encargada de “llevar la cuenta y razón del valor y distribución” de todos los efectos municipales. La contaduría de intervención de arcas de sisas tenía como misión fiscalizar los ingresos y pagos en dichas arcas, que recibirían no sólo los caudales de sisas, sino los de todos los ramos, incluido el de propios. La tesorería se componía de dos titulares (que se turnaban en el puesto anualmente), un cajero y sus ayudantes. Todos los gastos se hacían por libramientos formales de la Junta.

Los miembros de las dos oficinas de causa pública continuarían percibiendo sus salarios hasta que la Junta les otorgase otros empleos. Se suprimía además el puesto de oficial mayor de propios que detentaba Agustín Gómez Lozano “por inútil este puesto y tenerle para mantenerse”, si bien en el municipio se alegó que aunque el titular era ayuda de cámara del príncipe de Asturias, tenía un encargado en el puesto que emitía diversos informes.<sup>805</sup> La retribución del contador de la razón de la hacienda de Madrid (que se mantenía si bien prácticamente ya no participaba en la administración financiera) permanecía estancada en 9.002 rs.

Dotadas de más medios personales (ocho oficiales en la de cuentas y cuatro en la de intervención de arcas) y más claras atribuciones, las nuevas contadurías desarrollan en un principio un eficaz control de las relaciones de ingresos de propios. La regularidad en la presentación del mayordomo y en la comprobación de la contaduría se rompe en la década de 1780.

---

<sup>805</sup>. AVM-S, 2-219-8

## 2.4.- VISITADOR DE PROPIOS Y PERSONAL SUBALTERNO

El cargo de *visitador de propios* aparece muy tardíamente como resultado del apeo general de tierras y los intentos por controlar estas posesiones rústicas a fines del s. XVIII. Tiene su origen en una representación del secretario mayor del ayuntamiento, Vicente Lorenzo Verdugo, a la Junta de propios el 28 de marzo de 1788.<sup>806</sup> Denunciaba el estado de las tierras de Madrid que, tras un proceso de apeo general que había durado más de veinte años, comenzaban a sufrir nuevas ocupaciones ilegales, además de experimentarse el desconocimiento y falta de control de otros predios municipales. Para evitarlo presentaba diversas medidas administrativas: registro en el archivo de los títulos de propiedad de las tierras, conclusión de los apeos inacabados, control de las escrituras de arrendamiento al otorgarse ante el escribano de propios, etc. Pero su más destacada propuesta era la creación de un nuevo puesto: el visitador de propios.

Las obligaciones del visitador se centran en el control directo de las tierras de propios para evitar las ocupaciones ilegales: “celará, visitará y reconocerá con la mayor frecuencia las posesiones de Madrid, para ver quien se intrusa en ellas sin licencia”. A esta función esencial añade otras relacionadas: vigilar el “que los labradores no rompan ni deshagan las lindes de las suertes en que se dividen las de labrantío”, comprobar el cumplimiento de las condiciones de arrendamiento en lo referido a los diversos aprovechamientos: cortas de leña, caza de conejos, plantío de árboles; inspeccionar la labor de los guardas de los sotos o tierras... La persona indicada para el cargo sería, según Verdugo, Francisco Rosado, oficial segundo de su secretaría y con experiencia en el tema de propios por haber sido representante de Madrid en la comisión de apeos de sus tierras.

La Junta de propios procedió al nombramiento el 5 de diciembre de 1788, acordando también la reanudación del proceso de apeos. Quedaba pendiente informar al fiscal del Consejo de la creación del nuevo cargo y fijar sus retribuciones, proponiéndose que fuera salarial o se le dotase con un 10% de las rentas que pusiere efectivas. El 10 de noviembre la Junta decidió dar cuenta al fiscal del Consejo del establecimiento del cargo de visitador de propios, justificando su necesidad por las numerosas ocupaciones ilegales de tierras y la incapacidad del mayordomo para hacer frente a todas sus ocupaciones. El fiscal del Consejo, encargado de la contratación de nuevos funcionarios en los municipios, aprobó el cargo de visitador el 5 de mayo de 1792,

---

<sup>806</sup>. AVM-C, 3-12-1. Es el expediente de creación del cargo.

fijando como retribución el 10% de los ingresos debidos a su actuación y las dietas que percibiera en la comisión de apeos.<sup>807</sup> La segregación de funciones del mayordomo para otorgarlas al visitador y la difícil delimitación de competencias dio origen a numerosos enfrentamientos entre ambos, así como a múltiples diferencias entre los dos cargos administrativos. Nuevamente será la Junta la encargada de distribuir las actividades y cometidos.

La documentación pone de manifiesto la participación de otros empleados municipales en la administración de los propios de Madrid pero que desempeñan una función secundaria. Muchos son comisionados para asuntos concretos, sobre todo descubrimientos de tierras o censos. Otras veces son funcionarios municipales que en el cumplimiento de sus cometidos participan en los temas de propios: abogados de Madrid, procurador general o los informes que a los arquitectos o maestros de obras municipales se les encarga realizar sobre las casas y solares.

Hay también cargos específicos. El *agente de pleitos y dependencias* de propios lo era también de sisas. En la segunda mitad del s. XVII recibía 588 rs de los propios,<sup>808</sup> siendo su salario en el reglamento de 1715 de 1.500 rs (440 de ellos procedentes de los propios), que se elevaron a 2.200 rs en el reglamento de 1766.

El *escribano de propios* era un miembro de una Secretaría del ayuntamiento encargado de las escrituras de arrendamiento de los bienes patrimoniales, por lo que recibía 220 rs.<sup>809</sup> Desde 1786 se unificó con los de fuentes y faroles. En 1793 la Junta ordenó al mayordomo y agente de Madrid que para evitar gastos este escribano tramitara todos los asuntos de propios. Los procuradores, síndico general y personero dictaminaron, no obstante, que el mayordomo podría utilizar otros escribanos en aquellos expedientes en los que el corregidor no era juez privativo.<sup>810</sup>

---

<sup>807</sup>. AVM-Correg, 1-212-73

<sup>808</sup>. AVM-C, 4-300-3

<sup>809</sup>. AVM-S, 2-219-8

<sup>810</sup>. AVM-S, 3-31-16

## 2.5.- LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

### A) – *ANTES DE 1760.*

A lo largo de las páginas precedentes he hecho constantemente referencia a la intervención del aparato de la monarquía en los propios madrileños, y muy especialmente de la institución central del gobierno polisinodial, el Consejo de Castilla. Esta intervención es, desde luego, muy anterior a 1760 y presenta diversas manifestaciones. En primer lugar, cabría destacar las continuas peticiones de informes sobre los propios y su valor al municipio madrileño. En este sentido, hay una clara línea de continuidad en la actividad fiscalizadora y vigilante de esta alta institución entre, por ejemplo, la Provisión del Consejo de 1524 para que el corregidor de Madrid enviase relación de los propios que tenía la Villa y los salarios que se pagaban anualmente a los regidores,<sup>811</sup> y el Auto del mismo organismo dictado en 1699 para que Madrid presentase relación de todos sus propios y rentas, cargas que los gravaban, lugares de su jurisdicción, propiedad de oficios, tierras y demás cosas que pertenecieran a Madrid.<sup>812</sup> Otras líneas destacables son la intervención en los asuntos litigiosos, las concesiones de licencias para arrendar términos públicos o para enajenar tierras baldías, las medidas referidas a las concesiones o ventas de censos... aspectos todos ellos referidos a las prerrogativas reales que el Consejo se encarga de salvaguardar.

Pero no parece que el control directo fuera muy efectivo. Incluso cuando se hizo un claro “esfuerzo” por ejecutar una vigilancia estricta no hubo continuidad. Las irregularidades continuaron y, así, el desajuste administrativo existente dentro del ramo de propios hacia 1744 no motivó una intervención específica del Consejo; tendrá que ser el ayuntamiento el que se encargue de intentar enderezar una situación que él mismo ha tolerado.

Por su parte, el rey recurre al Consejo de Castilla para que a través del corregidor entre en contacto con el municipio para tratar cualquier asunto de interés para el patrimonio municipal, generalmente referido al patrimonio real, como fue el caso de la ampliación de las posesiones de

---

<sup>811.</sup> AVM-S, 2-483-35

<sup>812.</sup> AVM-S, 2-159-10

los monarcas en una parte del monte del Pardo a mediados del s. XVII (monte de las Angorrillas). En el s. XVIII este cauce se modifica y, aunque el Consejo sigue jugando un papel muy importante como institución en lo referente a todos los bienes municipales, los monarcas utilizan a los secretarios de Estado y de Despacho o de Gracia y Justicia para que traten -siempre por intermedio del corregidor- las transferencias patrimoniales que desea, como sucedió con las ampliaciones de la Zarzuela y El Pardo. También dispone del aparato de gobierno y administrativo municipal a su libre albedrío, creando cargos concedidos como privilegio a sus servidores que no tienen ninguna funcionalidad para el ayuntamiento de Madrid.

“La mala organización, sin embargo, de los cuerpos capitulares, cuyos individuos, suponiendo un derecho tradicional y hereditario el talento y las virtudes, se hipotecaron en algunas familias poderosas los cargos municipales, obligó al rey D. Fernando VI á dictar leyes concernientes á la mejora de la administración de los Propios; pero no fueron suficientes á cortar los abusos de los concejales perpetuos”.<sup>813</sup> La Instrucción de 1745 marcaba ya las bases que la administración de las rentas municipales tendría en la segunda mitad del s. XVIII, una nueva administración que se enmarca en el progresivo predominio del modelo de organización administrativo o ministerial frente a la monarquía judicial.<sup>814</sup>

Ya se ha estudiado cómo los propios madrileños se vieron afectados por el establecimiento del gobierno político-militar del conde de Maceda, un intento de control de la hacienda municipal madrileña -entre otros campos- por parte del equipo ministerial. La corta duración del intento parece demostrar que la situación no estaba todavía suficientemente madura.

#### B) – DESDE 1760: LA CONTADURÍA GENERAL DE PROPIOS Y ARBITRIOS.

No se cesó, sin embargo, en los intentos de control de las haciendas locales por parte del poder estatal, con lo que llegamos a la creación de la *Contaduría General de Propios y Arbitrios* en 1760. No es mi intención repetir algo tan conocido como este aparato administrativo y el

---

<sup>813</sup>. SAIZ MILANES- *Origen e historia de los bienes de Propios*, p. 449

<sup>814</sup>. FERNANDEZ ALBADALEJO, P.- "Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del siglo XVIII", en ARTOLA, M. y BILBAO, L. M.- *Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon*, Madrid, 1979, passim

conjunto de normas que lo fueron configurando.<sup>815</sup> Tan sólo resaltaré el que del intento inicial de reforma y saneamiento de las finanzas concejiles se pasó a la supeditación total a las exigencias fiscales de una Corona en guerra. Una vez más, la Hacienda aparece como un factor explicativo decisivo de las reformas y crisis de las instituciones y las medidas de gobierno.

Dentro de la política de concesión de reglamentos a las entidades municipales que desarrolla la nueva Contaduría, a Madrid le tocó el turno en 1766.<sup>816</sup> Dado que he recogido en el esquema institucional con que he estudiado la administración del patrimonio municipal las aportaciones del reglamento a cada uno de los sectores, me limitaré a completar esta visión con la *Junta de propios y arbitrios*, que unificó todos los ramos de la hacienda local.

Este cambio suponía en primer lugar el fin del modelo de administración del patrimonio (y de los otros sectores que integraban el ámbito de actuación municipal) que habían impuesto los regidores por medio de su articulación en comisiones que ellos controlan totalmente. Un modelo que comenzó a aparecer en la Baja Edad Media y que se consolidó a partir del s. XVI, y para cuya imposición los regidores se enfrentaron a los grupos sociales que intentaron entrar en el gobierno municipal (caballeros y escuderos y, sobre todo, pecheros). La nueva Junta estaba integrada por el corregidor, cinco regidores, el procurador general y un secretario del ayuntamiento. El Consejo ordenó que los cinco regidores integrantes de la primera Junta fuesen los que ejercían en ese momento las comisiones de propios (dos), arcas de sisas, aduana y contaduría de cuentas. Cada uno recibiría 3.300 rs como asignación.

En cuanto a las atribuciones, reflejan un corte drástico en comparación al período precedente, en el que los aparatos de poder municipal gozaban de poder decisorio, aunque conviene no olvidar la intervención constante del Consejo de Castilla en la toma de resoluciones. Así, la nueva Junta tenía encomendada la “administración, recaudación y distribución” de los

---

<sup>815</sup> Además de los estudios citados anteriormente, añadir dos trabajos de épocas muy diferentes sobre el conjunto de las reformas carolinas: PEREZ BUA, M.- *Las reformas de Carlos III en el régimen local de España*, Madrid, 1919 y el de GUILLAMON, J.- *Las reformas de la Administración local durante el reinado de Carlos III*, Madrid, 1980. Por su parte, la referencia fundamental para el estudio de la Contaduría General de Propios y Arbitrios es GARCIA GARCIA, C.- *La crisis de las haciendas locales. De la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845)*, Valladolid, 1996

<sup>816</sup> Con el título “Reglamento que el Consejo dio a esta villa de Madrid para la Administración, Recaudación y Distribución de los caudales de Propios y Sisas, Impuestos, Arbitrios y demás Rentas.” Existen varias copias en el archivo municipal: AVM-S, 2-353-43 y 4-108-144. Ha sido publicado por MARTÍNEZ NEIRA, M., *Una reforma ilustrada para Madrid. El Reglamento del Consejo Real de 16 de marzo de 1766*, Madrid, 1994

ingresos municipales. Su autonomía era limitada, estando subordinada al Consejo de Castilla a través de la Contaduría de propios y arbitrios. Por otro lado, un segundo factor que restringía su capacidad decisoria plena lo constituía el hecho de que debía ceñirse en la distribución de los gastos al presupuesto detallado en el mismo reglamento, en el que se especificaba totalmente el destino concreto de cada uno de los ingresos (salvo una partida de "gastos extraordinarios" cuyo importe no se podía fijar). La Junta era la encargada de formalizar las libranzas necesarias para cualquier tipo de pago, y debían ir firmadas por el corregidor, dos diputados y un secretario del ayuntamiento, así como figurar la correspondiente toma de razón e intervención de las contadurías.

Es de destacar que, pese a la unificación en un único órgano ejecutivo, se mantuvieron los dos comisarios de propios, regidores que actúan como agentes especializados que informan a la Junta de las cuestiones relativas al patrimonio municipal. La documentación también evidencia que se siguió utilizando la denominación de "Junta de propios", lo que parece demostrar que se celebraban sesiones paralelas para tratar independientemente los asuntos concernientes a los propios de los referidos a otros ramos municipales. Esta parece ser la práctica administrativa que prolonga el esquema de funcionamiento anterior, en el que existe una hacienda municipal invertebrada.

A partir de entonces la intervención del Consejo de Castilla a través del Contador General es continua. A esta entidad se presentarán todos los asuntos de importancia para que tome la resolución pertinente, así como los casos en que existen discrepancias de criterio entre los miembros de la Junta municipal o de algún oficial. Sin embargo, en la documentación consultada, procedentes del archivo municipal y de los fondos conservados de la Contaduría General de propios y arbitrios,<sup>817</sup> no se aprecia una línea de actuación predominante, sin duda porque una de las orientaciones más claras de la política de la Contaduría con respecto a los bienes municipales, como es la redención de los censos que los grababan, se había producido en Madrid unos años antes gracias a la inversión del caudal pagado a Madrid por la expropiación de los montes de El Pardo.

---

<sup>817</sup>. AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Serie Propios y Arbitrios, legs. 425-453



## **CONCLUSIONES**

A lo largo de este trabajo se ha analizado la evolución del patrimonio municipal de Madrid dentro de un ámbito cronológico amplio, desde la reconquista medieval hasta finales del s. XVIII, con el objetivo de precisar las transformaciones experimentadas por el patrimonio, así como los factores económicos, sociales e institucionales que determinan la funcionalidad de los bienes concejiles y los cambios en su naturaleza.

Desde la reconquista y repoblación medieval, Madrid se fue constituyendo en concejo de villa y tierra, el marco institucional que se desarrolló como fórmula de organización del espacio al sur del Duero. La fijación de su territorio se vio sometida, al igual que otros concejos de la Transierra, a la presión expansiva de los de la Extremadura castellana. La pugna entre Madrid y Segovia se centró en el área serrana que sería conocida como el Real de Manzanares. Si el conflicto terminó con la señorialización del espacio en disputa, al menos Madrid recibió el reconocimiento del derecho a los aprovechamientos comunales de sus habitantes. Por otro lado, el proceso de señorialización impulsado por los monarcas en el período bajomedieval supuso una considerable pérdida territorial y el marco para nuevos conflictos centrados en la jurisdicción y los aprovechamientos comunales.

Paralelamente se desarrollaba un proceso de maduración institucional del concejo y de su control sobre el territorio jurisdiccional, la Tierra, configurándose como un auténtico señorío urbano de tipo corporativo. La consolidación de la caballería urbana como grupo privilegiado a partir del reinado de Alfonso X es la clave que explica este proceso. Más tardíamente, la Tierra de Madrid fue desarrollando su articulación institucional, en torno a los concejos de aldea en primer lugar, y a partir de comienzos del s. XV alrededor de los sexmeros, representantes de la Tierra con funciones tributarias y de control del régimen comunal. Se habían constituido, pues, los mecanismos institucionales que regularían el patrimonio colectivo.

La articulación del régimen comunal en la Tierra de Madrid durante el período medieval permitiría asegurar la provisión con carácter comunal de una serie de recursos productivos básicos para garantizar la supervivencia de las economías campesinas, encargadas de organizar el proceso productivo, y con ellas de los poderosos urbanos, encargados del proceso de apropiación

del producto excedente que generaban. Por eso la reserva en exclusiva de los aprovechamientos comunales en la Tierra era tan importante, motivando toda una estrategia de la oligarquía concejil para eliminar posibles competidores y controlar el territorio. De ahí se deriva también la virulencia de los pleitos de términos con los señoríos bajomedievales, que se concreta en los numerosos conflictos del concejo madrileño con los Arias Dávila, señores de Alcobendas y Torrejón de Velasco. En contrapartida, los derechos de usufructos comunales de Madrid en el Real de Manzanares se vieron sometidos a una creciente presión. La fórmula de los acuerdos o igualas entre las partes para regular el ejercicio de estos derechos, fue perdiendo vigencia conforme se acrecentaban las contradicciones entre los intereses económicos de los habitantes de Madrid y su Tierra, pobladores del Real y señores. Finalmente, la acentuación de la presión por parte de los Mendoza motivó una dura reacción judicial de la Villa madrileña, que se garantizó el reconocimiento de sus derechos, si bien con costes importantes.

El patrimonio concejil durante la Edad Media era objeto de regulación por parte del concejo de la Villa. En líneas generales se salvaguardaba el carácter comunal de recursos tan básicos como los pastizales y el monte. La presión de los cultivos obligaba ya en el s. XV a delimitar mejor los espacios en exclusiva para tal fin, las dehesas, que se ampliaron tanto en Madrid (progresivamente destinadas al abasto urbano), como en las aldeas de la Tierra. Por su parte, las ordenanzas concejiles empezaron (muy lentamente) a proteger el monte, ya amenazado por la extensión de las roturaciones. Pero otra amenaza se cernía, no sobre la supervivencia del espacio forestal, pero sí sobre su carácter de bien de aprovechamiento comunal, la cada vez más frecuente presencia de los monarcas en El Pardo, la principal área boscosa del entorno madrileño. La dedicación del territorio a la caza real por un lado o a usos comunales (leñas, pastos, bellota, caza) por otro, empieza a ser objeto de pugna cada vez más constante y menos soterrada entre la monarquía y el concejo madrileño.

Esta articulación no era evidentemente estática, sino que ya a fines del XV está sometida a presiones importantes que van a disparar los procesos de transformación y adaptación del patrimonio municipal, orientados básicamente a la conversión de términos comunales en bienes de propios del ayuntamiento madrileño. Las usurpaciones en primer lugar; impulsadas sobre todo por los “poderosos” urbanos, por las comunidades campesinas en menor medida. La recuperación de parte de este patrimonio (no todo) provocó un cambio de su naturaleza, ya que pasó a ser objeto de explotación rentística. Por otro lado, la demanda de tierras en una situación expansiva provocó la roturación de términos baldíos, apropiados por el municipio madrileño y

cedidos para el cultivo de cereal a los campesinos de la Tierra mediante la fórmula de los “nihares”, el pago de unos derechos en especie, cuya recaudación era arrendada por la Villa como uno de sus propios.

Durante la Edad Moderna tendrá lugar una transformación trascendental en el régimen comunal en Madrid. Si en el s. XVI se mantienen vías de continuidad con el último siglo medieval, a lo largo del XVII la ruptura es casi completa. Para empezar, una mutación institucional, la práctica desarticulación de la Tierra de Madrid con la oleada señorializadora de comienzos del XVII; la transformación de la oligarquía urbana, con intereses más alejados de la tierra, y, por supuesto, la presencia de la Corte en Madrid.

A lo largo del XVI la dinámica de expansión motivó la continuidad del proceso de roturaciones tanto de antiguos baldíos como de términos usurpados, que pasaban a integrarse en los propios madrileños. La fórmula de cesión de uso pasó a ser el arrendamiento directo por el municipio de Madrid (lo que reforzaba la patrimonialización de estas tierras). Fueron los concejos aldeanos los principales protagonistas de estos arrendamientos; de esta manera los concejos reforzaban su papel institucional al asumir la importante función que suponía gestionar la explotación de esta oferta de tierras antiguamente comunales o baldíos. La distribución que organizaban los concejos favorecía a los campesinos más acomodados al atribuirles una mayor cantidad de tierra, pero también garantizaba el acceso a una pequeña explotación a los campesinos más desfavorecidos, que encontrarían en ella un medio para complementar sus estrategias de supervivencia.

Durante el XVII la presión fiscal de la monarquía se convirtió, en Madrid como en tantas otras localidades, en un factor trascendental en la transformación del régimen comunal. Para empezar, la operación de arrendamiento de baldíos del Cuarto de Palacio, desarrollada por el municipio ante la voracidad recaudatoria de la Real Hacienda. Una voracidad que no se quedaría ahí, sino que a mediados de siglo tomó la forma de venta de baldíos (que en el siglo anterior había respetado la Tierra madrileña). La transferencia de tierras públicas a manos privadas por esta vía favoreció en primer lugar a campesinos acomodados y notables de algunas aldeas, pero sobre todo a grandes funcionarios y asentistas de la Corte, que adquieran importantes patrimonios rústicos, proceso relacionado con la señorialización de parte de las localidades madrileñas. La situación creada por la enajenación de baldíos fue finalmente aprovechada por el municipio madrileño, que a finales del s. XVII desarrolló un apeo en el que junto a las tierras de

propios incluyó los baldíos arbitrados del Cuarto de Palacio, ya definitivamente convertidos en propios.

Este proceso de patrimonialización tomó un sesgo distinto en el caso de El Pardo. La presencia estable de la monarquía en Madrid va a reforzar su interés por el aprovechamiento cinegético de un espacio comunal madrileño. Durante mucho tiempo lo hizo por medio de la reserva de la jurisdicción a sus oficiales sobre todo el entorno. El resultado es que a lo largo de los siglos XVI y XVII los usos comunales de los madrileños en El Pardo se vieron sometidos a un creciente proceso de restricción. Los pastos: especialmente perjudicado el sistema de abastecimiento de carne a Madrid, que utilizaba esta zona como pastizales para el descanso y engorde del ganado que alimentaba a los madrileños. Los cultivos, que afecta a las localidades cercanas (Fuencarral, Las Rozas, Majadahonda) que aprovechaban las tierras del entorno. Las leñas, cada vez más restringidas para los madrileños. La solución vendrá en el s. XVII, cuando la monarquía decida crear un formidable coto redondo alrededor del palacio, el “Cordón de El Pardo” que garantice su propiedad exclusiva. Las tierras madrileñas fueron así expropiadas y tras largo proceso de negociación tasadas en unos seis millones de reales.

En la segunda parte del trabajo se ha analizado la evolución de los bienes de propios, tanto en su composición como en su evolución contable. Se ha prestado un particular interés a las tierras que, como hemos visto, tienen un origen mayoritario en términos anteriormente comunales.

Desde finales de la edad Media se fue estructurando unos propios cuyo objetivo sería cubrir los gastos ordinarios del municipio, fundamentalmente salarios y festividades, en menor medida otros servicios todavía escasos. En su origen predominan dos componentes: la explotación de tierras y las rentas, que tienen su origen en el control y regulación de las condiciones de intercambio mercantil por parte del concejo. Otro elemento importante, no tanto por su nivel de ingresos como por su repercusión sobre la expansión urbanística, fueron los censos perpetuos, procedentes de la cesión de suelo público para la edificación; su carácter enfiteútico les hará perder importancia rentística a largo plazo.

Fue a raíz de la capitalidad cuando estos bienes de propios sufrieron sus mayores transformaciones. Para empezar, la aparición de un importante patrimonio inmobiliario urbano, centrado en la Plaza Mayor y los hornos del Pósito. También las rentas se vieron positivamente

afectadas por el crecimiento de la población y el consumo, generando aumento de los ingresos de propios.

Sin embargo, su funcionalidad para la hacienda municipal pronto se vería en entredicho. Ya desde finales de la Edad Media fue preciso acudir para afrontar los gastos extraordinarios a fórmulas como las derramas o las sisas. Durante el s. XVI, con la expansión del gasto municipal que la capitalidad suponía se recurrió al endeudamiento de los propios mediante los censos. Pero desde comienzos del XVII, ante la evidencia de la limitación estructural de los ingresos patrimoniales y el peligro de pérdida de los propios así hipotecados, se optó por el recurso a una hacienda municipal tributaria: las sisas serán las encargadas de financiar la mayor parte del gasto del municipio (que en realidad iba a parar a manos de la Hacienda Real).

Durante el s. XVIII los propios se ven sometidos a importantes transformaciones patrimoniales. Destacan la relacionada con la inversión del caudal de El Pardo y las relacionadas con los reajustes en la política de abastecimiento urbano. Y es que a lo largo del siglo anterior y especialmente en éste, los propios estuvieron cada vez más sometidos a las exigencias de la política de abastecimiento urbano, auténtica prioridad del gobierno municipal.

Por lo que respecta a sus ingresos los propios experimentan un descenso hasta la década de 1740, consecuencia de la deficiente gestión y la desaparición del peso de la harina. A partir de esa fecha comienzan a subir sus ingresos. Una gestión sometida a mayores controles (como la reivindicación de la administración directa frente al arrendamiento por el municipio) y la expansión urbana y agraria explican esta dinámica.

Las tierras de propios, por su parte, después de la expropiación de El Pardo, fueron objeto de un largo apeo general con el que se intentaba asegurar los derechos de propiedad. Enfrente, las usurpaciones campesinas, que constituían un medio de garantizarse el acceso a la tierra y pugnar por la renta con el ayuntamiento madrileño. Aunque los derechos de propiedad de éste no eran discutidos, lo que tenía su correspondencia en una cierta tolerancia con las dificultades en el pago de la renta por parte de las economías campesinas, en una relación que ha sido analizada como una auténtica “economía moral”. Con todo, a finales del s. XVIII los arrendamientos de las tierras de propios estaban cada vez más concentrados en manos de los campesinos acomodados, los labradores de las localidades cercanas a Madrid. Se trata ya por tanto de un grupo social en condiciones de aspirar a competir por la propiedad de la tierra con el municipio madrileño. La desamortización sería su gran oportunidad.

## **APENDICES**

## **APÉNDICE I - ABREVIATURAS**

### **ARCHIVOS**

- AVM-S: Archivo de la Villa de Madrid, sección Secretaría.
- AVM-C: Archivo de la Villa de Madrid, sección Contaduría.
- AHN: Archivo Histórico Nacional.
- AGS: Archivo General de Simancas
- AGP: Archivo General de Palacio

### **REVISTAS**

- AHDE: Anuario de Historia del Derecho Español.
- AIEM: Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
- RevBAM: Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid.
- RHE: Revista de Historia Económica.



## **APÉNDICE 2**

### **RENTAS DE PROPIOS DE MADRID EN LA PRIMERA MITAD DEL S. XVI**

La serie presentada ha sido elaborada a partir de los “Libros de Rentas de los Propios de Madrid”. En ellos se recoge todo el proceso de arrendamiento de estas rentas, comenzando por el pregón, las diversas pujas hasta el remate definitivo, las fianzas presentadas por los postores y variadas vicisitudes que se planteaban, como la cesión del arrendamiento. De particular interés resultan las “condiciones de arrendamiento” que se incluyen en ocasiones, que nos informan sobre el funcionamiento real de dicha renta. Se presentan los valores netos de arrendamiento, después de haber descontado los diversos prometidos que se ganaban por los postores. Estos valores, que en la documentación aparecen en maravedís, han sido convertidos en reales para facilitar la comparación con otras series de años posteriores.

Los Libros de Rentas de los Propios constituyen una documentación habitual en los concejos durante el s. XVI<sup>818</sup>. La diferencia con los Libros de cuentas de los mayordomos es que en éstos se recogen los ingresos netos, que pueden ser diferentes a los valores nominales de la renta, así como ingresos de atrasos, etc., por lo que es frecuente que aparezcan discordancias entre ambas fuentes. Las rentas de propios constituyen, como se ha planteado en el trabajo, el principal componente de los propios madrileños durante este período, por lo que su evolución constituye un indicador claro de la tendencia seguida por el patrimonio municipal, con mayor interés dada la imposibilidad de obtener en el Archivo de Villa una serie completa de las cuentas presentadas por los mayordomos de propios en esta época.

La serie no está completa: faltan los años de 1510 a 1516, 1519-1520, y 1526-1527. No ha sido posible localizarlos en el archivo, bien porque se haya perdido la documentación o bien porque –caso nada infrecuente– se encuentre deficientemente catalogada o referenciada en los índices.

---

<sup>818</sup> Como ejemplo, constituyen la fuente documental en la que se basa el trabajo de MARTINEZ RUIZ, E.- *Propios y subastas municipales en Granada, 1553-1593*, Granada, 1988. Su utilización resulta particularmente útil ante la ausencia de Libros de Cuentas de los mayordomos de propios para esta época en Granada.

Las referencias documentales de esta serie son las siguientes:

- AVM-S, 3-225-6: Años 1506 a 1509
- AVM-S, 3-225-9: Años 1517-1518
- AVM-S, 3-225-7: Año 1521
- AVM-S, 3-225-12: Años 1522-1523
- AVM-S, 3-225-13: Año 1524
- AVM-S, 3-225-14: Año 1525
- AVM-S, 3-226-2: Años 1528-1529 y 1532-1535
- AVM-S, 3-226-3: Años 1530-1531
- AVM-S, 3-226-4: Años 1536-1540
- AVM-S, 3-226-5: Años 1541-1544

**RENTAS DE PROPIOS, 1ª MITAD DEL S. XVI (RS)-I**

	1506	1507	1508	1509	1517	1518
PESO Y CUCHARES			191	368	1.160	699
CORREDURIA	132	147	331		384	202
MOJONERIA	42	313	215		327	118
RED DEL PESCADO	41	47	38	74	79	88
AGUA	132	97	97	109	343	446
PASO DEL GANADO					294	412
NIHARES ANTIGUOS	910			537	868	1.074
NIHARES NUEVOS	85			131	204	168
EXIDOS Y CARRASCALES					1.232	1.294
DEHESA DE ARGANZUELA			29	515*	21	182*
TIENDAS	18	18		56		
PORTALES DEL ARRABAL				238		
CASA CARNICERIA						
CASILLAS ALHONDIGA						
NIHARES ROTURAS AMANIEL						

**RENTAS DE PROPIOS, 1ª MITAD DEL S. XVI (RS)-II**

	<b>1521</b>	<b>1522</b>	<b>1523</b>	<b>1524</b>	<b>1525</b>
<b>PESO Y CUCHARES</b>	735	500	500	879	735
<b>CORREDURIA</b>	87	91	132	132	221
<b>MOJONERIA</b>	353	368	400	466	243
<b>RED DEL PESCADO</b>	76	88	59	71	103
<b>AGUA</b>	162	147	115	140	191
<b>PASO DEL GANADO</b>	221	221	226		188
<b>NIHARES ANTIGUOS</b>	559	471	544	794	794
<b>NIHARES NUEVOS</b>	179	162	265	212	212
<b>EXIDOS Y CARRASCALES</b>					
<b>DEHESA DE ARGANZUELA</b>	22	22			
<b>TIENDAS</b>					
<b>PORTALES DEL ARRABAL</b>					
<b>CASA CARNICERIA</b>					
<b>CASILLAS ALHONDIGA</b>					
<b>NIHARES ROTURAS AMANIEL</b>					

**RENTAS DE PROPIOS, 1ª MITAD DEL S. XVI (RS)-III**

	<b>1528</b>	<b>1529</b>	<b>1530</b>	<b>1531</b>	<b>1532</b>	<b>1533</b>
<b>PESO Y CUCHARES</b>	1.441 (574)**		2.059 (529)	471	1.471 (467)	1.176
<b>CORREDURIA</b>	99	52	188	FIELDAD***	206 (FIELDAD***)	77
<b>MOJONERIA</b>	343	FIELDAD***	FIELDAD***	FIELDAD***	76	
<b>RED DEL PESCADO</b>	88	76	107	76	107 (56)	147
<b>AGUA</b>	207	118	281	51	41	74
<b>PASO DEL GANADO</b>	176	176	162	191		
<b>NIHARES ANTIGUOS</b>	794	794	529	662	662	662
<b>NIHARES NUEVOS</b>	231	231	206	480	483	412
<b>EXIDOS Y CARRASCALES</b>						
<b>DEHESA DE ARGANZUELA</b>						
<b>TIENDAS</b>						
<b>PORTALES DEL ARRABAL</b>						
<b>CASA CARNICERIA</b>						
<b>CASILLAS ALHONDIGA</b>						
<b>NIHARES ROTURAS</b>						
<b>AMANIEL</b>						

# **RENTAS DE PROPIOS, 1ª MITAD DEL S. XVI (RS)-IV**

	<b>1534</b>	<b>1535</b>	<b>1536</b>	<b>1537</b>	<b>1538</b>	<b>1539</b>
<b>PESO Y CUCHARES</b>	1.588 (368)**	1.765	1.794 (382)**	456	546	2.361
<b>CORREDURIA</b>	FIELDAD***	FIELDAD***	FIELDAD***	FIELDAD***	FIELDAD***	FIELDAD***
<b>MOJONERIA</b>	47	50	50	50	50	50
<b>RED DEL PESCADO</b>	77	FIELDAD***	110	53	53	53
<b>AGUA</b>	66	81	100	65	65	65
<b>PASO DEL GANADO</b>						110
<b>NIHARES ANTIGUOS</b>	662	662	662	662	720	720
<b>NIHARES NUEVOS</b>	412	412	412	368	368	368
<b>EXIDOS Y CARRASCALES</b>						
<b>DEHESA DE ARGANZUELA</b>						
<b>TIENDAS</b>						
<b>PORTALES DEL ARRABAL</b>						
<b>CASA CARNICERIA</b>			353			
<b>CASILLAS ALHONDIGA</b>						206
<b>NIHARES ROTURAS AMANIEL</b>						

**RENTAS DE PROPIOS, 1ª MITAD DEL S. XVI (RS)-V**

	<b>1540</b>	<b>1541</b>	<b>1542</b>	<b>1543</b>	<b>1544</b>
<b>PESO Y CUCHARES</b>	2.441	2.150	1.912 (544)**	522	412
<b>CORREDURIA</b>	FIELDAD***	88	88	143	143
<b>MOJONERIA</b>	50	FIELDAD***	FIELDAD***	FIELDAD***	FIELDAD***
<b>RED DEL PESCADO</b>	67	59	59	96	96
<b>AGUA</b>	77 (55)**	77 (55)**	77 (55)**	86 (64)**	86 (64)**
<b>PASO DEL GANADO</b>	110	125	125	125	125
<b>NIHARES ANTIGUOS</b>	720	720	720	720	858
<b>NIHARES NUEVOS</b>	368	368	368	368	368
<b>EXIDOS Y CARRASCALES</b>					
<b>DEHESA DE ARGANZUELA</b>					
<b>TIENDAS</b>					
<b>PORTALES DEL ARRABAL</b>					
<b>CASA CARNICERIA</b>					
<b>CASILLAS ALHONDIGA</b>				195	176 (88)**
<b>NIHARES ROTURAS</b>					
<b>AMANIEL</b>	206	176			

### **NOTAS :**

\* En 1509 y 1518 se procede a arrendar la hierba de la Dehesa de Arganzuela durante los meses de noviembre a febrero. El resto de los años se arrendaba sólo el derecho a cobrar las penas a los contraventores de las ordenanzas.

\*\* Las dos cifras indican el valor en el que se remataba el arrendamiento durante el período en que la Corte permaneciese durante en Madrid (primera cifra, sin paréntesis) o cuando la Corte abandonase la ciudad (segunda cifra, entre paréntesis).

\*\*\* La fieldad consistía en la administración directa por el ayuntamiento, que nombraba un fiel administrador para la renta. La causa era la ausencia de postores al arrendamiento. No aparecen en los Libros de Rentas los ingresos percibidos, que sí se registran en los Libros de Cuentas.



### **APÉNDICE 3**

#### **INGRESOS DE LOS BIENES DE PROPIOS EN EL S. XVI.**

Para analizar la evolución de los Bienes de Propios a lo largo del s. XVI he utilizado varios informes o relaciones de los propios preparados por las Secretarías del Ayuntamiento, destinados habitualmente a informar a los corregidores o al Consejo de Castilla sobre el estado del patrimonio municipal. Las dificultades para localizar las cuentas presentadas por los mayordomos de propios en este período (como se explica en el apéndice siguiente) han obligado a recurrir a una documentación mucho menos precisa y en ocasiones incompleta (en la relación del año 1561, por ejemplo, no aparece información sobre los censos). Con todo, los datos recogidos permiten una visión de las principales tendencias de la evolución y las transformaciones patrimoniales de Madrid, destacando especialmente la importancia que tendrá el establecimiento de la Corte a partir de 1561.

Con la finalidad de comprender mejor los cambios en el largo plazo he procedido a deflactar los valores de los ingresos de propios. Para ello he utilizado la serie de precios que presentan REHER, D-S. y BALLESTEROS, E.- “Precios y salarios en Castilla la Nueva: la construcción de un índice de salarios reales, 1501-1991”, *Revista de Historia Económica*, v. XI, nº 1 (1993), págs. 101-151. Su pertenencia se debe no sólo al hecho de ser relativamente reciente, sino también a centrarse en los precios de Castilla la Nueva e incluir determinadas correcciones (como la utilización de precios en plata) a la tan clásica serie de Hamilton.

Las referencias documentales son:

- 1502: AVM-S, 3-6-5
- 1513: AVM-S, 3-6-8
- 1513: AVM-S, 3-6-8
- 1525: AVM-S, 2-483-68
- 1561: AVM-S, 3-6-18
- 1600: 3-8-10.

**EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE PROPIOS, S.XVI (Rs.)**

	<b>1502</b>	<b>1513</b>	<b>1519</b>
<b>RENTAS</b>			
Peso real	441	382	408
Correduría	287	176	162
Almotacén			
Contraste marcador			
Mojonería	75	206	254
Agua	265	165	294
Paso del ganado	285	310	247
Barca de Arganda			
Barca de Arrebatcardos			
Portales de la Plaza	294		
Basura de las calles			
Pena de los que meten uva y vino		221	
<b><i>TOTAL RENTAS</i></b>	<b>1.647</b>	<b>1.460</b>	<b>1.364</b>
<b>EDIFICIOS</b>			
Casa carnicería	471	353	471
Escarpías del Rastro			
Matadero			
Casa del pescado	221	221	353
Red del pescado		63	103
Casa del Peso real		12	
Casa del Peso de la harina			
Alhóndiga			
Costalejo en peso harina			
Taberna			
Pilas Caños del Peral			
Lavadero río Manzanares			
Puestos de bizcochos			
Escritorios San Salvador			
Casa del Corregidor			
Casa de las candelas	29		
Tiendas de la Plaza	59	71	
<b><i>TOTAL EDIFICIOS</i></b>	<b>779</b>	<b>718</b>	<b>926</b>

	1502	1513	1519
<b>TIERRAS</b>			
Renta de los nihares	609	768	853
Renta nihares nuevos	88	165	171
Renta ejidos y carrascales	853	1.226	
Ejidos y carrascales			
Sotos			
Dehesa de Arganzuela	24	50	59
Penas de los que sacan leña de Querada		126	
<b><i>TOTAL TIERRAS</i></b>	<b>1.574</b>	<b>2.336</b>	<b>1.082</b>
<b>Rentas en especie</b>			
Trigo(fgs)	273 f		463.5 f
Cebada (fgs)	261 f		463.5 f
<b><i>Total</i></b>	<b>534 f</b>		<b>927 f</b>
<b>CENSOS</b>			
Perpetuos	147	67	231
Al Quitar			
Del Pósito			
Juros			
<b><i>TOTAL CENSOS</i></b>	<b>147</b>	<b>67</b>	<b>231</b>
<b>DERECHOS</b>			
Martiniega			
Martiniega Cobeña			
Conveniencia Cobeña	74	74	74
Conveniencia Alcobendas			
<b><i>TOTAL DERECHOS</i></b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b><i>INGRESOS TOTALES (RS)</i></b>	<b>4.221</b>	<b>4.654</b>	<b>3.678</b>
<b><i>INGRESOS EN ESPECIE</i></b>	<b>534 f</b>		<b>927 f</b>

**EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE PROPIOS, S.XVI (Rs.)**

	1525	1561	1600
<b>RENTAS</b>			
Peso real	882	2.323	12.170
Correduría	147	1.328	
Almotacén			1.654
Contraste marcador			
Mojonería	412	81	
Agua	176		
Paso del ganado	221	75	
Barca de Arganda	10	110	3.547
Barca de Arrebatacardos			993
Portales de la Plaza			
Basura de las calles			2.206
Pena de los que meten uva y vino			
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>1.848</b>	<b>3.917</b>	<b>20.570</b>

**EDIFICIOS**

Casa carnicería	471		721
Escarpías del Rastro			4.800
Matadero		471	824
Casa del pescado	353	353	
Red del pescado	88		
Casa del Peso real			6.995
Casa del Peso de la harina			2.373
Alhóndiga		66	1.471
Costalejo en peso harina		3	
Taberna			1.650
Pilas Caños del Peral			4.200
Lavadero río Manzanares			221
Puestos de bizcochos			551
Escritorios San Salvador		33	882
Casa del Corregidor	88	265	88
Casa de las candelas			
Tiendas de la Plaza			
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.190</b>	<b>24.775</b>

	1525	1561	1600
<b>TIERRAS</b>			
Renta de los nihares	794	775	
Renta nihares nuevos	221		
Renta ejidos y carrascales	1.029		
Ejidos y carrascales		2.270	
Sotos			12.230
Dehesa de Arganzuela			
Penas de los que sacan leña de Querada			
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>2.044</b>	<b>3.044</b>	<b>12.230</b>
<b>Rentas en especie</b>			
Trigo(fgs)	375 f	404 f	840 f
Cebada (fgs)	375 f	413 f	840 f
<b>Total</b>	<b>750 f</b>	<b>817 f</b>	<b>1680 f</b>
<b>CENSOS</b>			
Perpetuos	882		3.021
Al Quitar			35.362
Del Pósito			8.987
Juros			6.740
<b>TOTAL CENSOS</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>54.109</b>
<b>DERECHOS</b>			
Martiniega	29	592	592
Martiniega Cobeña		18	18
Conveniencia Cobeña	74	74	74
Conveniencia Alcobendas		88	88
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>103</b>	<b>771</b>	<b>771</b>
<b>INGRESOS TOTALES (RS)</b>	<b>5.878</b>	<b>8.923</b>	<b>112.455</b>
<b>INGRESOS EN ESPECIE</b>	<b>750 f</b>	<b>817 f</b>	<b>1680 f</b>

**EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE PROPIOS, S.XVI**

**VALORES REALES (RS)**

	<b>1502</b>	<b>1513</b>	<b>1519</b>	<b>1525</b>	<b>1561</b>	<b>1600</b>
<b>RENTAS</b>	8.951	7.300	6.686	7.574	7.504	24.813
<b>EDIFICIOS</b>	4.234	3.590	4.539	4.098	2.280	29.885
<b>CENSOS</b>	799	335	1.132	3.615	0	65.270
<b>DERECHOS</b>	402	370	363	422	1.477	930
<b>TIERRAS</b>	8.554	11.680	5.304	8.377	5.831	14.753
<b>TOTAL</b>	<b>22.940</b>	<b>23.275</b>	<b>18.025</b>	<b>24.086</b>	<b>17.092</b>	<b>135.651</b>

**RENTAS EN ESPECIE (FGS.)**

TRIGO	273 f	463.5 f	375 f	404 f	840 f
CEBADA	261 f	463.5 f	375 f	413 f	840 f
<b>TOTAL</b>	<b>534 f</b>	<b>927 f</b>	<b>750 f</b>	<b>817 f</b>	<b>1680 f</b>

**EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE PROPIOS, S.XVI**

**VALORES NOMINALES (RS)**

	<b>1502</b>	<b>1513</b>	<b>1519</b>	<b>1525</b>	<b>1561</b>	<b>1600</b>
<b>RENTAS</b>	1.647	1.460	1.364	1.848	3.917	20.570
<b>EDIFICIOS</b>	779	718	926	1.000	1.190	24.775
<b>CENSOS</b>	147	67	231	882		54.109
<b>DERECHOS</b>	74	74	74	103	771	771
<b>TIERRAS</b>	1.574	2.336	1.082	2.044	3.044	12.230
<b>TOTAL</b>	<b>4.221</b>	<b>4.655</b>	<b>3.677</b>	<b>5.877</b>	<b>8.922</b>	<b>112.455</b>

**RENTAS EN ESPECIE (FGS.)**

<b>TRIGO</b>	273 f	463.5 f	375 f	404 f	840 f
<b>CEBADA</b>	261 f	463.5 f	375 f	413 f	840 f
<b>TOTAL</b>	<b>534 f</b>	<b>927 f</b>	<b>750 f</b>	<b>817 f</b>	<b>1680 f</b>

## APENDICE 4

### **INGRESOS DE LOS BIENES DE PROPIOS, SIGLOS XVII-XVIII.**

La muy deficiente catalogación de la documentación de origen contable en el Archivo de Villa de Madrid se ha erigido en la principal dificultad para realizar una serie completa de la evolución de los Bienes de Propios madrileños durante los siglos XVII y XVIII. Una situación que se remonta a fines del s. XIX, cuando se lleva a cabo la gran tarea de organizar el Archivo municipal. Los índices elaborados entonces (y todavía hoy de ineludible consulta) presentan títulos muy genéricos y con frecuencia erróneos para la documentación contable, frente a la precisión y detallismo con que se recogen los expedientes generados por las Secretarías municipales.

Como se comprueba en el enunciado de las referencias documentales utilizadas, no hay ninguna señal de continuidad o proximidad en la documentación de las cuentas de los Propios madrileños; ha sido necesario realizar una trabajosa tarea de búsqueda y localización de estas cuentas. Por todo ello no me ha resultado posible completar totalmente la serie referida a estos dos siglos. Con todo, la amplitud es considerable: prácticamente está completa desde 1650, con escasa ausencias puntuales en ese período.

La serie presentada utiliza en su práctica totalidad los datos procedentes de las Cuentas de Propios que presentaban los mayordomos de propios para su aprobación a las Contadurías municipales. Aun cuando tenían la obligación teórica de presentarlas cada tres años, no siempre se realizaba, e incluso en alguna ocasión los incumplimientos era flagrantes. Desde mediados del s. XVIII se presentaban anualmente.

He presentado en primer lugar los datos correspondientes a cada “cuenta”, respetando los tramos cronológicos que comprendían. A continuación he recopilado la información agrupando los contenidos de los cinco bloques o componentes en que he clasificado los bienes de propios de Madrid (tierras, edificios, rentas, censos y derechos y otros); asimismo he agrupado los datos en períodos cronológicos de tres años cuando existía una clara continuidad



de las cuentas anuales (especialmente en la segunda mitad del s. XVIII). Con todo la serie no es estrictamente homogénea: he respetado los años sueltos (en los que no existían datos colindantes para realizar medias aritméticas) y los tramos superiores a los tres años. La claridad de la representación gráfica se resiente por no aparecer siempre períodos cronológicos similares, pero se mantiene la “naturaleza contable” de la serie y el rigor en la compresión de la evolución de los ingresos patrimoniales madrileños.

Para terminar, he procedido a deflactar los datos, utilizando para ello la ya citada serie de precios elaborada por Reher y Ballesteros. La utilización de ingresos de carácter real introduce importantes matizaciones a la serie precedente.

A pesar de que se mantuvo durante toda la Edad Moderna la contabilidad en maravedís por parte de los mayordomos de propios, he utilizado siempre el real como unidad monetaria para facilitar la comparación entre épocas y con los datos de otros municipios.

#### Referencias documentales:

- 1629-31: AVM-C, 1-153-10
- 1650-53: AVM-C, 1-109-1
- 1656-59: AVM-C, 1-444-2
- 1660-63: AVM-C, 1-132-4
- 1664-76: AVM-C, 4-256-2
- 1677-82: AVM-C, 3-138
- 1685-89: AVM-C, 1-423-1
- 1690-99: AVM-C, 3-704-1
- 1705-07: AVM-C, 1-435-1
- 1708-10: AVM-C, 2-250-1
- 1711-13: AVM-C, 1-113-1
- 1714-16: AVM-C, 4-209-2
- 1717-44: AVM-S, 1-34-36
- 1744-47: AVM-C, 3-412-1
- 1748-49: AVM, C, 3-20-3
- 1750: AVM-C, 1-103-1

- 1751: AVM-C, 1-469-2
- 1752: AVM-C, 3-13-1
- 1753-68: AVM-C, 3-80-1
- 1768-69: AVM-C, 3-470-1
- 1771-77: AVM-C, 3-86-4
- 1780-82: AVM-C, 1-160-4
- 1783-89: AVM-C, 1-441-1
- 1790-92: AVM-C, 4-222-2
- 1793-96: AVM-C, 1-464-1

**INGRESOS DE PROPIOS, 1629-1631**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>ANUAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	48.025	16.008	9,2
SOTO DEL NEGRALEJO	13.795	4.598	2,6
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	6.472	2.157	1,2
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA	35.611	11.870	6,8
DEHESA DE ARGANZUELA	5.274	1.758	1,0
SOTO DE LA SOPEÑA	588	196	0,1
SOTO DEL HENAR DE VALLECAS	1.184	395	0,2
SOTO DE LOS BALDÍOS Y JUNQUERAL DE PERALES	59	20	0,0
CONDENACIONES DE MONTES	2.333	778	0,4
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>113.341</b>	<b>37.780</b>	<b>21,7</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>			
CASA DE LA PANADERIA	57.750	19.250	11,1
CASAS DE LA CARNICERIA	20.590	6.863	3,9
CASA DEL PAN Y LA HARINA	4.412	1.471	0,8
CASA DEL PESO REAL	6.600	2.200	1,3
ESCRITORIOS DE SAN SALVADOR	3.176	1.059	0,6
BODEGONES DE SANTO DOMINGO	990	330	0,2
BODEGONES PLAZA SAN LUIS	693	231	0,1
ESCARPIAS DEL RASTRO	23.960	7.987	4,6
LAVADEROS Y PILAS DEL PERAL	3.659	1.220	0,7
CUARTO DE LA CASA AYUNTAMIENTO	2.100	700	0,4
TABERNILLAS PUENTE TOLEDANA	7.675	2.558	1,5
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>131.606</b>	<b>43.869</b>	<b>25,2</b>
<b>3 - RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	18.319	6.106	3,5
PESO REAL	4.846	1.615	0,9
CORREDURIA	42.682	14.227	8,2
ALMOTACEN	13.062	4.354	2,5
CONTRASTE MARCADOR	20.250	6.750	3,9
BARCA DE ARGANDA	27.875	9.292	5,3
BARCA DE ARREBATACARDOS	6.680	2.227	1,3
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>133.714</b>	<b>44.571</b>	<b>25,6</b>
<b>4 - CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	255	85	0,0
CENSOS PERPETUOS	5.810	1.937	1,1
CENSOS AL QUITAR	60.403	20.134	11,6
CENSOS DE LA ADMINISTRACION	3.161	1.054	0,6
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS	265	88	0,1
CONVENIENCIA DE COBEÑA	274	91	0,1
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>70.167</b>	<b>23.389</b>	<b>13,4</b>
<b>5 - OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS (BOCACALLES)	53.390	17.797	10,2
TOROS VIVOS	14.824	4.941	2,8
TOROS MUERTOS	1.749	583	0,3
EXTRAORDINARIO (LIBRANZAS)	3.702	1.234	0,7
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>73.664</b>	<b>24.555</b>	<b>14,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>522.492</b>	<b>174.164</b>	
<b>RENTAS EN ESPECIE (FGS)</b>			
TRIGO	1.649	550	
CEBADA	1.643	548	
<b>TOTAL FGS</b>	<b>3.292</b>	<b>1.097</b>	

**INGRESOS DE PROPIOS, 1650-52**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>ANUAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	41.060	13.687	5,8
SOTO DEL NEGRALEJO	7.173	2.391	1,0
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	3.171	1.057	0,4
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA	17.745	5.915	2,5
DEHESA DE ARGANZUELA	3.529	1.176	0,5
DEHESA DE VIÑUELAS	44.118	14.706	6,2
TIERRAS ARRENDADAS			
TIERRAS EN ESPECIE			
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>116.795</b>	<b>38.932</b>	<b>16,4</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>			
CASA DE LA PANADERIA	42.000	14.000	5,9
CASAS DE LA CARNICERIA	36.000	12.000	5,1
CASA DEL MATADERO	1.412	471	0,2
CASA DEL PAN Y LA HARINA	4.412	1.471	0,6
CASA DEL PESO REAL	4.500	1.500	0,6
CASA DE LA CALLE MAYOR	3.600	1.200	0,5
ESCRITORIOS DE SAN SALVADOR			
RED PLAZUELA DE LA CEBADA	1.584	528	0,2
RED PLAZUELA DE SANTO DOMINGO			
BODEGONES DE SANTO DOMINGO	2.376	792	0,3
BODEGONES PLAZA SAN LUIS	6.900	2.300	1,0
ESCARPIAS DEL RASTRO	18.620	6.207	2,6
LAVADEROS Y PILAS DEL PERAL	3.309	1.103	0,5
MESON DEL LUGAR DE PERALES			
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>124.712</b>	<b>41.571</b>	<b>17,5</b>
<b>3 - RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	24.687	8.229	3,5
PESO REAL	11.831	3.944	1,7
CORREDURIA	32.740	10.913	4,6
ALMOTACEN	11.173	3.724	1,6
CONTRASTE MARCADOR	30.570	10.190	4,3
BARCA DE ARGANDA	19.500	6.500	2,7
BARCA DE ARREBATACARDOS	6.000	2.000	0,8
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>136.501</b>	<b>45.500</b>	<b>19,2</b>
<b>4 - CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	4.029	1.343	0,6
CENSOS PERPETUOS	549	183	0,1
CENSOS AL QUITAR	27.052	9.017	3,8
CENSOS SISAS	10.296	3.432	1,4
CENSOS DE LA ADMINISTRACION	265	88	0,0
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS	265	88	0,0
CONVENIENCIA DE COBEÑA	274	91	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>42.728</b>	<b>14.243</b>	<b>6,0</b>
<b>5 - OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS	62.542	20.847	8,8
TOROS MUERTOS	9.672	3.224	1,4
ADEHALAS DE TOROS	133.000	44.333	18,7
EXTRAORDINARIO (LIBRANZAS)	84.696	28.232	11,9
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>289.910</b>	<b>96.637</b>	<b>40,8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>710.647</b>	<b>236.882</b>	

**INGRESOS DE PROPIOS, 1653**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	13.360	6,9%
SOTO DEL NEGRALEJO	2.236	1,2%
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	864	0,4%
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA	5.938	3,1%
DEHESA DE ARGANZUELA	1.176	0,6%
DEHESA DE VIÑUELAS	7.353	3,8%
TIERRAS ARRENDADAS		
TIERRAS EN ESPECIE		
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>30.927</b>	<b>16%</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>		
CASA DE LA PANADERIA	14.000	7,3%
CASAS DE LA CARNICERIA	12.000	6,2%
CASA DEL MATADERO	471	0,2%
CASA DEL PAN Y LA HARINA	1.471	0,8%
CASA DEL PESO REAL	1.400	0,7%
CASA DE LA CALLE MAYOR	1.200	0,6%
ESCRITORIOS DE SAN SALVADOR		
RED PLAZUELA DE LA CEBADA	528	0,3%
RED PLAZUELA DE SANTO DOMINGO		
BODEGONES DE SANTO DOMINGO	792	0,4%
BODEGONES PLAZA SAN LUIS	2.300	1,2%
ESCARPIAS DEL RASTRO	6.860	3,6%
LAVADEROS Y PILAS DEL PERAL	1.103	0,6%
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>42.124</b>	<b>22%</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO DE LA HARINA	10.405	5,4%
PESO REAL	5.029	2,6%
CORREDURIA	12.600	6,5%
ALMOTACEN	3.773	2,0%
CONTRASTE MARCADOR	9.000	4,7%
BARCA DE ARGANDA	5.675	2,9%
BARCA DE ARREBATACARDOS	3.000	1,6%
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>49.482</b>	<b>26%</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
VEINTENAS	1.025	0,5%
CENSOS PERPETUOS	212	0,1%
CENSOS AL QUITAR	5.209	2,7%
CENSOS SISAS	13.414	7,0%
CENSOS DE LA ADMINISTRACION	88	0,0%
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS	88	0,0%
CONVENIENCIA DE COBEÑA	91	0,0%
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>20.127</b>	<b>10%</b>
<b>5-OTROS</b>		
FIESTAS DE TOROS	27.828	14,4%
TOROS MUERTOS	3.322	1,7%
ADEHALAS DE TOROS		
EXTRAORDINARIO (LIBRANZAS)	18.850	9,8%
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>50.000</b>	<b>26%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>192.661</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1657-59

	TOTAL (RS)	ANUAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	43.120	14.373	10,3%
SOTO DEL NEGRALEJO	7.801	2.600	1,9%
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	4.114	1.371	1,0%
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA	12.537	4.179	3,0%
DEHESA DE ARGANZUELA	3.529	1.176	0,8%
DEHESA DE VIÑUELAS	0	0	
TIERRAS ARRENDADAS	1.810	603	0,4%
TIERRAS EN ESPECIE	21.450	7.150	5,1%
CONDENACIONES DE MONTES	250	83	0,1%
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>94.611</b>	<b>31.537</b>	<b>22,6%</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>			
CASA DE LA PANADERIA	34.200	11.400	8,2%
CASAS DE LA CARNICERIA	36.000	12.000	8,6%
CASA DEL MATADERO	1.412	471	0,3%
CASA DEL PAN Y LA HARINA	4.412	1.471	1,1%
CASA DEL PESO REAL	4.200	1.400	1,0%
CASA DE LA CALLE MAYOR	3.600	1.200	0,9%
ESCRITORIOS DE SAN SALVADOR	0	0	
RED PLAZUELA DE LA CEBADA	551	184	0,1%
RED PLAZUELA DE SANTO DOMINGO	0	0	
BODEGONES DE SANTO DOMINGO	2.112	704	0,5%
BODEGONES PLAZA SAN LUIS	5.122	1.707	1,2%
ESCARPIAS DEL RASTRO	15.900	5.300	3,8%
LAVADEROS Y PILAS DEL PERAL	2.206	735	0,5%
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>109.715</b>	<b>36.572</b>	<b>26,2%</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	22.838	7.613	5,5%
PESO REAL Y CORREDURIA	29.620	9.873	7,1%
ALMOTACEN	6.447	2.149	1,5%
CONTRASTE MARCADOR	32.769	10.923	7,8%
BARCA DE ARGANDA	20.636	6.879	4,9%
BARCA DE ARREBATACARDOS	5.471	1.824	1,3%
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>117.781</b>	<b>39.260</b>	<b>28,1%</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	6.498	2.166	1,6%
CENSOS PERPETUOS	3.116	1.039	0,7%
CENSOS AL QUITAR	17.168	5.723	4,1%
CENSOS SISAS	21.011	7.004	5,0%
CENSOS DE LA ADMINISTRACION	0	0	
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS	265	88	0,1%
CONVENIENCIA DE COBEÑA	274	91	0,1%
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>48.332</b>	<b>16.111</b>	<b>11,5%</b>
<b>5-OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS	39.176	13.059	9,4%
TOROS MUERTOS	5.934	1.978	1,4%
EXTRAORDINARIO (LIBRANZAS CORPUS)	3.000	1.000	0,7%
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>48.110</b>	<b>16.037</b>	<b>11,5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>514.770</b>	<b>139.516</b>	

### INGRESOS DE PROPIOS, 1660-63

	TOTAL (RS)	ANUAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	55.778	13.944	10%
SOTO DEL NEGRALEJO	9.991	2.498	2%
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	3.905	976	1%
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA	14.816	3.704	3%
DEHESA DE ARGANZUELA	3.529	882	1%
DEHESA DE VIÑUELAS			
TIERRAS ARRENDADAS	312	78	0%
TIERRAS EN ESPECIE	23.135	5.784	4%
CONDENACIONES DE MONTES			
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>111.467</b>	<b>27.867</b>	<b>19%</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>			
CASA DE LA PANADERIA	48.596	12.149	8%
CASAS DE LA CARNICERIA	60.928	15.232	11%
CASA DEL MATADERO	1.647	412	0%
CASA DEL PAN Y LA HARINA	5.882	1.471	1%
CASA DEL PESO REAL	5.600	1.400	1%
CASA DE LA CALLE MAYOR	4.800	1.200	1%
ESCRITORIOS DE SAN SALVADOR			
RED PLAZUELA DE LA CEBADA			
RED PLAZUELA DE SANTO DOMINGO			
BODEGONES DE STO DOMINGO Y S LUIS	15.145	3.786	3%
ESCARPIAS DEL RASTRO	28.075	7.019	5%
LAVADEROS Y PILAS DEL PERAL	4.951	1.238	1%
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>175.624</b>	<b>43.906</b>	<b>30%</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	35.508	8.877	6%
PESO REAL Y CORREDURIA	44.956	11.239	8%
ALMOTACEN	10.703	2.676	2%
CONTRASTE MARCADOR	36.879	9.220	6%
BARCA DE ARGANDA	31.143	7.786	5%
BARCA DE ARREBATACARDOS	12.153	3.038	2%
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>171.342</b>	<b>42.835</b>	<b>30%</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	2.810	702	0%
CENSOS PERPETUOS	2.341	585	0%
CENSOS AL QUITAR	5.931	1.483	1%
CENSOS SISAS	33.550	8.388	6%
CENSOS DE LA ADMINISTRACION			
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS			
CONVENIENCIA DE COBEÑA			
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>44.632</b>	<b>11.158</b>	<b>8%</b>
<b>5-OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS	42.434	10.609	7%
TOROS MUERTOS	6.000	1.500	1%
ADEHALAS DE TOROS			
EXTRAORDINARIO (LIBRANZAS)	25.308	6.327	4%
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>73.742</b>	<b>18.435</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>576.806</b>	<b>144.202</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1664-1665

	TOTAL (RS)	ANUAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	44.007	22.003	12,6%
SOTO DEL NEGRALEJO	5.198	2.599	1,5%
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	2.908	1.454	0,8%
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA	7.079	3.540	2,0%
DEHESA DE ARGANZUELA	2.353	1.176	0,7%
DEHESA DE VIÑUELAS			
TIERRAS ARRENDADAS	10.622	5.311	3,1%
TIERRAS EN ESPECIE	8.871	4.435	2,5%
CONDENACIONES DE MONTES	650	325	0,2%
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>81.687</b>	<b>40.843</b>	<b>23,5%</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>			
CASA DE LA PANADERIA	26.396	13.198	7,6%
CASAS DE LA CARNICERIA	30.464	15.232	8,8%
CASA DEL MATADERO	941	471	0,3%
CASA DEL PAN Y LA HARINA	2.941	1.471	0,8%
CASA DEL PESO REAL	3.360	1.680	1,0%
CASA DE LA CALLE MAYOR	2.400	1.200	0,7%
ESCRITORIOS DE SAN SALVADOR			
RED PLAZUELA DE LA CEBADA			
RED PLAZUELA DE SANTO DOMINGO			
BODEGONES DE SANTO DOMINGO	5.750	2.875	1,7%
BODEGONES PLAZA SAN LUIS	4.800	2.400	1,4%
ESCARPIAS DEL RASTRO	17.542	8.771	5,0%
LAVADEROS Y PILAS DEL PERAL	1.972	986	0,6%
MESON DEL LUGAR DE PERALES	400	200	0,1%
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>96.966</b>	<b>48.483</b>	<b>27,9%</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	19.950	9.975	5,7%
PESO REAL	23.520	11.760	6,8%
ALMOTACEN	5.880	2.940	1,7%
CONTRASTE MARCADOR	19.353	9.676	5,6%
BARCA DE ARGANDA	17.078	8.539	4,9%
BARCA DE ARREBATACARDOS	4.952	2.476	1,4%
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>90.732</b>	<b>45.366</b>	<b>26,1%</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	5.133	2.566	1,5%
CENSOS PERPETUOS	2.387	1.194	0,7%
CENSOS AL QUITAR	1.998	999	0,6%
CENSOS SISAS	20.840	10.420	6,0%
CENSOS DE LA ADMINISTRACION			
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS			
CONVENIENCIA DE COBEÑA			
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>30.358</b>	<b>15.179</b>	<b>8,7%</b>
<b>5-OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS	28.242	14.121	8,1%
TOROS MUERTOS	5.196	2.598	1,5%
EXTRAORDINARIO (LIBRANZAS)	14.840	7.420	4,3%
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>48.278</b>	<b>24.139</b>	<b>14%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>348.021</b>	<b>174.011</b>	



## INGRESOS DE PROPIOS, 1666-1676

	TOTAL (RS)	ANUAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	231.789	20.603	11,7%
SOTO DEL NEGRALEJO	47.747	4.244	2,4%
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	15.218	1.353	0,8%
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA	44.447	3.951	2,2%
DEHESA DE ARGANZUELA	14.118	1.255	0,7%
DEHESA DE VIÑUELAS			
TIERRAS ARRENDADAS	97.919	8.704	5,0%
TIERRAS EN ESPECIE	56.828	5.051	2,9%
CONDENACIONES DE MONTES	54	5	0,0%
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>508.119</b>	<b>45.166</b>	<b>25,7%</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>			
CASA DE LA PANADERIA	124.189	11.039	6,3%
CASAS DE LA CARNICERIA	158.804	14.116	8,0%
CASA DEL MATADERO	5.647	502	0,3%
CASA DEL PAN Y LA HARINA	16.176	1.438	0,8%
CASA DEL PESO REAL	20.040	1.781	1,0%
CASA DE LA CALLE MAYOR	6.778	602	0,3%
ESCRITORIOS DE SAN SALVADOR			
RED PLAZUELA DE LA CEBADA			
RED PLAZUELA DE SANTO DOMINGO			
BODEGONES DE SANTO DOMINGO	15.889	1.412	0,8%
BODEGONES PLAZA SAN LUIS	28.372	2.522	1,4%
ESCARPIAS DEL RASTRO	58.481	5.198	3,0%
LAVADEROS Y PILAS DEL PERAL	16.842	1.497	0,9%
LUGAR DE PERALES	27.039	2.403	1,4%
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>478.257</b>	<b>42.512</b>	<b>24,2%</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	178.099	15.831	9,0%
PESO REAL	122.181	10.861	6,2%
ALMOTACEN	37.871	3.366	1,9%
CONTRASTE MARCADOR	93.875	8.344	4,7%
BARCA DE ARGANDA	99.566	8.850	5,0%
BARCA DE ARREBATACARDOS	31.579	2.807	1,6%
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>563.171</b>	<b>50.060</b>	<b>28,5%</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	34.011	3.023	1,7%
CENSOS PERPETUOS	4.827	429	0,2%
CENSOS AL QUITAR	14.326	1.273	0,7%
CENSOS SISAS	204.753	18.200	10,4%
CENSOS DE LA ADMINISTRACION	11.590	1.030	0,6%
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS	971	86	0,0%
CONVENIENCIA DE COBEÑA	1.003	89	0,1%
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>271.481</b>	<b>24.132</b>	<b>13,7%</b>
<b>5-OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS	123.428	10.971	6,2%
TOROS MUERTOS	11.019	979	0,6%
ADEHALAS DE TOROS			
EXTRAORDINARIO (LIBRANZAS)	21.333	1.896	1,1%
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>155.780</b>	<b>13.847</b>	<b>7,9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.976.807</b>	<b>175.716</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1677-79

	TOTAL (RS)	ANUAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	70.522	23.507	9,5
SOTO DEL NEGRALEJO	15.702	5.234	2,1
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	4.380	1.460	0,6
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA	6.552	2.184	0,9
DEHESA DE ARGANZUELA	3.529	1.176	0,5
DEHESA DE VALFRIO Y NAVALACARRERA	4.500	1.500	0,6
TIERRAS ARRENDADAS	44.628	14.876	6,0
TIERRAS EN ESPECIE	15.130	5.043	2,0
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>164.943</b>	<b>54.981</b>	<b>22,3</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>			
CASA DE LA PANADERIA	47.667	15.889	6,4
CASAS DE LA CARNICERIA	35.670	11.890	4,8
CASA DEL MATADERO	1.412	471	0,2
CASA DEL PAN Y LA HARINA	1.172	391	0,2
PESO DE LA HARINA VIEJO Y MESON	15.360	5.120	2,1
CASA DEL PESO REAL	5.292	1.764	0,7
CASA DE LA CALLE MAYOR	4.500	1.500	0,6
ESCRITORIOS DE SAN SALVADOR			
RED PLAZUELA DE LA CEBADA			
RED PLAZUELA DE SANTO DOMINGO			
BODEGONES DE STO DOMINGO Y S LUIS	11.748	3.916	1,6
ESCARPIAS DEL RASTRO			
LAVADEROS Y PILAS DEL PERAL	5.896	1.965	0,8
HORNOS DEL POSITO	49.590	16.530	6,7
LUGAR DE PERALES	960	320	0,1
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>179.267</b>	<b>59.756</b>	<b>24,2</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA NUEVO (POSITO)	47.610	15.870	6,4
PESO REAL	31.928	10.643	4,3
ALMOTACEN	13.314	4.438	1,8
CONTRASTE MARCADOR	27.306	9.102	3,7
BARCA DE ARGANDA	2.931	977	0,4
BARCA DE ARREBATACARDOS	11.046	3.682	1,5
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>134.135</b>	<b>44.712</b>	<b>18,1</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	11.805	3.935	1,6
CENSOS PERPETUOS	1.845	615	0,2
CENSOS AL QUITAR	10.940	3.647	1,5
CENSOS SISAS	124.733	41.578	16,8
CENSOS DE LA ADMINISTRACION			
OFICIO DE CARTAS DE PAGO	76.738	25.579	10,4
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS	265	88	0,0
CONVENIENCIA DE COBEÑA	274	91	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>226.599</b>	<b>75.533</b>	<b>30,6</b>
<b>5-OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS	31.828	10.609	4,3
TOROS MUERTOS	3.742	1.247	0,5
EXTRAORDINARIO (LIBRANZAS)			
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>35.570</b>	<b>11.857</b>	<b>4,8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>740.514</b>	<b>246.838</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1680-82

	TOTAL (RS)	ANUAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	54.392	18.131	8,0
SOTO DEL NEGRALEJO	5.088	1.696	0,7
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	3.708	1.236	0,5
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA	3.601	1.200	0,5
DEHESA DE ARGANZUELA	3.529	1.176	0,5
DEHESA DE VALFRIO Y NAVALACARRERA	4.500	1.500	0,7
TIERRAS ARRENDADAS	32.946	10.982	4,8
TIERRAS EN ESPECIE	15.235	5.078	2,2
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>122.999</b>	<b>41.000</b>	<b>18,0</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>			
CASA DE LA PANADERIA	42.891	14.297	6,3
CASAS DE LA CARNICERIA	51.414	17.138	7,5
CASA DEL MATADERO	1.412	471	0,2
CASA DEL PESO REAL	5.292	1.764	0,8
CASA DE LA CALLE MAYOR	3.300	1.100	0,5
PESO DE LA HARINA VIEJO Y MESON	14.846	4.949	2,2
BODEGONES DE STO DOMINGO Y S LUIS	10.485	3.495	1,5
ESCARPIAS DEL RASTRO			
HORNOS DEL POSITO	68.562	22.854	10,0
LAVADEROS Y PILAS DEL PERAL	1.850	617	0,3
LUGAR DE PERALES			
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>200.052</b>	<b>66.684</b>	<b>29,3</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA NUEVO (POSITO)	66.107	22.036	9,7
PESO REAL Y CORREDURIA	39.988	13.329	5,9
ALMOTACEN	12.029	4.010	1,8
CONTRASTE MARCADOR	26.190	8.730	3,8
BARCA DE ARGANDA	33.638	11.213	4,9
BARCA DE ARREBATACARDOS	11.916	3.972	1,7
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS			
CONVENIENCIA DE COBEÑA			
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>189.867</b>	<b>63.289</b>	<b>27,8</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	3.421	1.140	0,5
CENSOS PERPETUOS ATRASADOS	1.990	663	0,3
CENSOS PERPETUOS	1.178	393	0,2
CENSOS AL QUITAR ATRASADOS	882	294	0,1
CENSOS AL QUITAR	5.559	1.853	0,8
CENSOS SISAS	48.527	16.176	7,1
CENSOS DE LA ADMINISTRACION	3.161	1.054	0,5
OFICIO DE CARTAS DE PAGO	84.844	28.281	12,4
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>149.563</b>	<b>49.854</b>	<b>21,9</b>
<b>5-OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS	19.674	6.558	2,9
TOROS MUERTOS	1.255	418	0,2
EXTRAORDINARIO (LIBRANZAS)			
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>20.929</b>	<b>6.976</b>	<b>3,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>683.410</b>	<b>227.803</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1685-89

	TOTAL (RS)	ANUAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	47.741	9.548	5,0
SOTO DEL NEGRALEJO	9.070	1.814	0,9
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	3.300	660	0,3
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA			
DEHESA DE ARGANZUELA	5.294	1.059	0,6
DEHESA DE VALFRIO Y NAVALACARRERA			
TIERRAS ARRENDADAS	39.929	7.986	4,2
TIERRAS EN ESPECIE	11.790	2.358	1,2
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>117.125</b>	<b>23.425</b>	<b>12,2</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>			
CASA DE LA PANADERIA	55.380	11.076	5,8
CASAS DE LA CARNICERIA	55.380	11.076	5,8
CASA DEL MATADERO	2.118	424	0,2
HORNOS DEL POSITO	86.342	17.268	9,0
CASA DEL PESO REAL	5.961	1.192	0,6
CASA DE LA CALLE MAYOR			
MESON CAVA BAJA Y PESO DE LA HARINA VIEJO	19.132	3.826	2,0
BODEGONES DE STO DOMINGO Y S LUIS	7.228	1.446	0,8
ESCARPIAS DEL RASTRO			
LAVADEROS Y PILAS DEL PERAL	4.400	880	0,5
LUGAR DE PERALES	4.040	808	0,4
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>239.980</b>	<b>47.996</b>	<b>25,0</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA NUEVO (POSITO)	183.680	36.736	19,1
PESO REAL Y CORREDURIA	51.711	10.342	5,4
ALMOTACEN	24.811	4.962	2,6
CONTRASTE MARCADOR	48.513	9.703	5,1
BARCA DE ARGANDA	39.560	7.912	4,1
BARCA DE ARREBATACARDOS	17.300	3.460	1,8
BARCA NUEVA PUENTE VIVEROS	9.583	1.917	1,0
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>375.158</b>	<b>75.032</b>	<b>39,1</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	14.413	2.883	1,5
CENSOS PERPETUOS	9.713	1.943	1,0
CENSOS AL QUITAR	119.167	23.833	12,4
CENSOS SISAS	48.032	9.606	5,0
CENSOS DE LA ADMINISTRACION	5.268	1.054	0,5
OFICIO DE CARTAS DE PAGO			
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS			
CONVENIENCIA DE COBEÑA			
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>196.594</b>	<b>39.319</b>	<b>20,5</b>
<b>5-OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS	14.053	2.811	1,5
TOROS MUERTOS	1.378	276	0,1
EXTRAORDINARIO (LIBRANZAS)			
REINTEGRADO POR PAGO INDEBIDO	2.701	540	0,3
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>18.132</b>	<b>3.626</b>	<b>1,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>946.989</b>	<b>189.398</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1690-96

	TOTAL (RS)	ANUAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	88.101	12.586	5,5
SOTO DEL NEGRALEJO	19.246	2.749	1,2
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	5.480	783	0,3
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA	25.915	3.702	1,6
DEHESA DE ARGANZUELA	8.235	1.176	0,5
TIERRAS ARRENDADAS	85.270	12.181	5,4
TIERRAS EN ESPECIE	13.113	1.873	0,8
TIERRAS A CENSO PERPETUO	16.898	2.414	1,1
TIERRAS APEADAS SIN CONTRATO	5.556	794	0,3
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>267.814</b>	<b>38.259</b>	<b>16,8</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>			
CASA DE LA PANADERIA	69.875	9.982	4,4
CASAS DE LA CARNICERIA	84.000	12.000	5,3
CASA DEL MATADERO	3.294	471	0,2
HORNOS DEL POSITO	124.200	17.743	7,8
CASA DEL PESO REAL	8.795	1.256	0,6
CASA DE LA CALLE MAYOR	2.800	400	0,2
MESON CAVA BAJA Y PESO DE LA HARINA VIEJO	26.200	3.743	1,6
CENSO BODEGONES SANTO DOMINGO	7.124	1.018	0,4
BODEGONES DE LA RED DE SAN LUIS	15.570	2.224	1,0
ESCARPIAS DEL RASTRO			
LAVADEROS Y PILAS DEL PERAL	7.150	1.021	0,4
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>349.009</b>	<b>49.858</b>	<b>21,9</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA NUEVO (POSITO)	516.812	73.830	32,5
PESO REAL Y CORREDURIA	98.032	14.005	6,2
ALMOTACEN	37.037	5.291	2,3
CONTRASTE MARCADOR	78.112	11.159	4,9
BARCA DE ARGANDA	53.954	7.708	3,4
BARCA DE ARREBATACARDOS	21.800	3.114	1,4
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>805.747</b>	<b>115.107</b>	<b>50,6</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	13.444	1.921	0,8
CENSOS PERPETUOS ATRASADOS	7.207	1.030	0,5
CENSOS PERPETUOS	2.117	302	0,1
CENSO PERPETUO REDIMIDO	5.280	754	0,3
CENSOS AL QUITAR (INCLUYE ATRASOS)	41.167	5.881	2,6
CENSOS SISAS	59.524	8.503	3,7
CENSOS DE LA ADMINISTRACION	7.376	1.054	0,5
PATRONATO ISABEL DE GALVEZ	21.403	3.058	1,3
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS	638	91	0,0
CONVENIENCIA DE COBEÑA	618	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>158.774</b>	<b>22.682</b>	<b>10,0</b>
<b>5-OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS	10.140	1.449	0,6
TOROS MUERTOS	825	118	0,0
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>10.965</b>	<b>1.566</b>	<b>0,7</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.592.308</b>	<b>227.473</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1697-99

	TOTAL (RS)	ANUAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	37.200	12.400	4,7
SOTO DEL NEGRALEJO	8.400	2.800	1,1
SOTO DE CUEVAS Y ORILLAS DE VELILLA	1.500	500	0,2
SOTO Y TIERRAS DE SALMEDINA	11.013	3.671	1,4
DEHESA DE ARGANZUELA	3.529	1.176	0,5
TIERRAS ARRENDADAS	41.201	13.734	5,3
TIERRAS A CENSO PERPETUO	8.442	2.814	1,1
TIERRAS A CENSO EN ESPECIE	2.732	911	0,3
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>114.017</b>	<b>38.006</b>	<b>14,6</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>			
CASA DE LA PANADERIA	35.641	11.880	4,5
CASAS DE LA CARNICERIA	36.000	12.000	4,6
CASA DEL MATADERO	1.412	471	0,2
HORNOS DEL POSITO	75.600	25.200	9,6
CASA DEL PESO REAL	5.406	1.802	0,7
CASA DEL PASADIZO	2.100	700	0,3
MESON CAVA BAJA	10.200	3.400	1,3
CENSO BODEGONES SANTO DOMINGO	3.836	1.279	0,5
BODEGONES DE LA RED DE SAN LUIS	5.448	1.816	0,7
CASAS REGISTRO DE LA PUERTA DE ALCALA	6.300	2.100	0,8
ESCARPIAS DEL RASTRO	11.616	3.872	1,5
PILAS DE LOS CAÑOS DEL PERAL	2.700	900	0,3
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>196.259</b>	<b>65.420</b>	<b>25,0</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA NUEVO (POSITO)	253.520	84.507	32,4
PESO REAL Y CORREDURIA	46.500	15.500	5,9
ALMOTACEN Y CONTRASTE MARCADOR	42.338	14.113	5,4
BARCA DE ARGANDA	24.902	8.301	3,2
BARCA DE ARREBATACARDOS	11.800	3.933	1,5
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>379.060</b>	<b>126.353</b>	<b>48,4</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	2.578	859	0,3
CENSOS PERPETUOS	3.980	1.327	0,5
CENSOS AL QUITAR	15.380	5.127	2,0
CENSOS SISAS	56.708	18.903	7,2
CENSOS DE LA ADMINISTRACION			
PATRONATO ISABEL DE GALVEZ	7.719	2.573	1,0
CONVENIENCIA DE ALCOBENDAS			
CONVENIENCIA DE COBEÑA			
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>86.364</b>	<b>28.788</b>	<b>11,0</b>
<b>5-OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS	7.422	2.474	0,9
TOROS MUERTOS	495	165	0,1
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>7.917</b>	<b>2.639</b>	<b>1,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>783.617</b>	<b>261.206</b>	

**INGRESOS DE PROPIOS, 1705-07**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>MEDIA (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	33.000	10.154	3,8
SOTO DEL NEGRALEJO	9.154	2.817	1,0
SOTO DE CUEVAS	1.200	369	0,1
SOTO DE SALMEDINA	6.300	1.938	0,7
DEHESA DE ARGANZUELA	1.745	537	0,2
PRADO DEL CORREGIDOR			
LEÑA DE EL PARDO			
TIERRAS ARRENDADAS	57.282	17.625	6,6
TIERRAS A CENSO	12.655	3.894	1,4
TIERRAS EN ESPECIE	5.265	1.620	0,6
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>121.336</b>	<b>37.334</b>	<b>13,9</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	28.639	8.812	3,3
CASA CARNICERIA MAYOR	36.000	11.077	4,1
CARNICERIA ANTON MARTIN			
CASAS RED DE SAN LUIS	11.153	3.432	1,3
ESCARPIAS DEL RASTRO	13.999	4.307	1,6
HORNOS DE VILLANUEVA	81.900	25.200	9,4
CASAS REGISTRO	4.722	1.453	0,5
MESON DE LA VILLA	9.804	3.017	1,1
CASA CALLE DE LAS POSTAS	6.370	1.960	0,7
CUARTOS DEL CORRAL DEL PRINCIPE	0	0	0,0
CAÑOS DEL PERAL	5.370	1.652	0,6
SOLARES VENDIDOS			
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>197.957</b>	<b>60.910</b>	<b>22,7</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	287.742	88.536	33,0
PESO REAL Y CORREDURIA	52.189	16.058	6,0
ALMOTACEN Y CONTRASTE MARCADOR	53.186	16.365	6,1
BARCA DE ARGANDA	29.333	9.026	3,4
BARCA DE MEJORADA	8.828	2.716	1,0
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>431.278</b>	<b>132.701</b>	<b>49,4</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	12.477	3.839	1,4
CENSOS PERPETUOS	5.296	1.630	0,6
CENSOS AL QUITAR	9.375	2.885	1,1
CENSOS REDIMIDOS	55.215	16.989	6,3
EFFECTOS DE VILLA	39.418	12.129	4,5
MARTINEGA DE ALCOBENDAS	264	81	0,0
CONVENIENCIA DE COBEÑA	273	84	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>122.318</b>	<b>37.636</b>	<b>14,0</b>
<b>5-OTROS</b>			
<b>TOTAL OTROS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>872.889</b>	<b>268.581</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1708-10

	TOTAL (RS)	ANUAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	18.000	6.000	2,4
SOTO DEL NEGRALEJO	9.887	3.296	1,3
SOTO DE CUEVAS	1.200	400	0,2
SOTO DE SALMEDINA	6.300	2.100	0,8
DEHESA DE ARGANZUELA	4.991	1.664	0,7
PRADO DEL CORREGIDOR			
LEÑA DE EL PARDO			
TIERRAS ARRENDADAS	52.782	17.594	7,1
TIERRAS A CENSO	11.480	3.827	1,5
TIERRAS EN ESPECIE	5.265	1.755	0,7
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>109.905</b>	<b>36.635</b>	<b>14,7</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	25.423	8.474	3,4
CASA CARNICERIA MAYOR	33.895	11.298	4,5
CARNICERIA ANTON MARTIN	5.720	1.907	0,8
CASAS RED DE SAN LUIS	9.480	3.160	1,3
ESCARPIAS DEL RASTRO	12.012	4.004	1,6
HORNOS DE VILLANUEVA	75.600	25.200	10,1
CASAS REGISTRO	7.701	2.567	1,0
MESON DE LA VILLA	10.200	3.400	1,4
CASA CALLE DE LAS POSTAS	5.460	1.820	0,7
CUARTOS DEL CORRAL DEL PRINCIPE	1.320	440	0,2
CAÑOS DEL PERAL	6.780	2.260	0,9
SOLARES VENDIDOS			
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>193.591</b>	<b>64.530</b>	<b>25,9</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	286.632	95.544	38,3
PESO REAL Y CORREDURI	43.848	14.616	5,9
ALMOTACEN Y CONTRASTE MARCADOR	58.032	19.344	7,8
BARCA DE ARGANDA	29.134	9.711	3,9
BARCA DE MEJORADA	8.578	2.859	1,1
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>426.224</b>	<b>142.075</b>	<b>56,9</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	1.847	616	0,2
CENSOS PERPETUOS Y VEINTENAS	3.464	1.155	0,5
CENSOS AL QUITAR	6.963	2.321	0,9
CENSOS REDIMIDOS			
EFFECTOS DE VILLA	6.089	2.030	0,8
MARTINEGA DE ALCOBENDAS	264	88	0,0
CONVENIENCIA DE COBEÑA	273	91	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>18.900</b>	<b>6.300</b>	<b>2,5</b>
<b>5-OTROS</b>			
<b>TOTAL OTROS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>748.620</b>	<b>249.540</b>	



### INGRESOS DE PROPIOS, 1711-13

	TOTAL (RS)	MEDIA (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	8.800	2.933	1,1
SOTO DEL NEGRALEJO	6.028	2.009	0,7
SOTO DE CUEVAS	1.200	400	0,1
SOTO DE SALMEDINA	8.100	2.700	1,0
DEHESA DE ARGANZUELA	4.941	1.647	0,6
PRADO DEL CORREGIDOR			
LEÑA DE EL PARDO			
TIERRAS ARRENDADAS	29.360	9.787	3,6
TIERRAS A CENSO	11.252	3.751	1,4
TIERRAS EN ESPECIE	5.265	1.755	0,7
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>74.946</b>	<b>24.982</b>	<b>9,3</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	19.776	6.592	2,5
CASA CARNICERIA MAYOR	34.370	11.457	4,3
CARNICERIA ANTON MARTIN			
CASAS RED DE SAN LUIS	9.517	3.172	1,2
ESCARPIAS DEL RASTRO	12.012	4.004	1,5
HORNOS DE VILLANUEVA	75.600	25.200	9,4
CASAS REGISTRO	7.830	2.610	1,0
MESON DE LA VILLA	10.200	3.400	1,3
CASA CALLE DE LAS POSTAS	5.460	1.820	0,7
CUARTOS DEL CORRAL DEL PRINCIPE	1.000	333	0,1
CAÑOS DEL PERAL	6.780	2.260	0,8
SOLARES VENDIDOS			
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>182.545</b>	<b>60.848</b>	<b>22,7</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	286.632	95.544	35,6
PESO REAL Y CORREDURIA	44.296	14.765	5,5
ALMOTACEN Y CONTRASTE MARCADOR	58.080	19.360	7,2
BARCA DE ARGANDA	30.229	10.076	3,8
BARCA DE MEJORADA	8.400	2.800	1,0
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>427.637</b>	<b>142.546</b>	<b>53,2</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	9.735	3.245	1,2
CENSOS PERPETUOS	3.621	1.207	0,5
CENSOS AL QUITAR Y EFECTOS DE VILLA	19.441	6.480	2,4
CENSOS REDIMIDOS	46.021	15.340	5,7
MARTINEGA DE ALCOBENDAS	264	88	0,0
CONVENIENCIA DE COBEÑA	273	91	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>79.355</b>	<b>26.452</b>	<b>9,9</b>
<b>5-OTROS</b>			
CREDITO PARA HONRAS DELFINES DE FRANCIA	40.000	13.333	5,0
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>40.000</b>	<b>13.333</b>	<b>5,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>804.483</b>	<b>268.161</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1714-16

	TOTAL (RS)	MEDIA (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	13.200	4.400	1,7
SOTO DEL NEGRALEJO	2.300	767	0,3
SOTO DE CUEVAS	1.200	400	0,2
SOTO DE SALMEDINA	8.100	2.700	1,1
DEHESA DE ARGANZUELA (MATADERO)	4.941	1.647	0,7
PRADO DEL CORREGIDOR			
LEÑA DE EL PARDO			
TIERRAS ARRENDADAS	21.039	7.013	2,8
TIERRAS A CENSO	11.252	3.751	1,5
TIERRAS EN ESPECIE	5.265	1.755	0,7
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>67.297</b>	<b>22.432</b>	<b>8,9</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	20.689	6.896	2,7
CASA CARNICERIA MAYOR	34.342	11.447	4,5
CARNICERIA ANTON MARTIN	1.200	400	0,2
CASAS RED DE SAN LUIS	8.930	2.977	1,2
ESCARPIAS DEL RASTRO	12.012	4.004	1,6
HORNOS DE VILLANUEVA	75.600	25.200	10,0
CASAS REGISTRO	8.080	2.693	1,1
MESON DE LA VILLA	10.200	3.400	1,3
CASA CALLE DE LAS POSTAS	5.460	1.820	0,7
CUARTOS DEL CORRAL DEL PRINCIPE	1.320	440	0,2
CAÑOS DEL PERAL	3.816	1.272	0,5
SOLARES VENDIDOS			
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>181.649</b>	<b>60.550</b>	<b>24,0</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	286.632	95.544	37,8
PESO REAL Y CORREDURIA	36.646	12.215	4,8
ALMOTACEN Y CONTRASTE MARCADOR	58.176	19.392	7,7
BARCA DE ARGANDA	30.699	10.233	4,1
BARCA DE MEJORADA	8.400	2.800	1,1
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>420.553</b>	<b>140.184</b>	<b>55,5</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	12.578	4.193	
CENSOS PERPETUOS	4.357	1.452	0,6
CENSOS AL QUITAR Y EFECTOS DE VILLA	45.476	15.159	6,0
DEPOSITARIA GENERAL	3.775	1.258	0,5
MARTINEGA DE ALCOBENDAS			
CONVENIENCIA DE COBEÑA			
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>66.186</b>	<b>22.062</b>	<b>8,7</b>
<b>5-OTROS</b>			
LIBRANZA PARA HONRAS REALES	20.602	6.867	2,7
LICENCIA PUESTOS DE AGUA FRIA	1.100	367	0,1
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>21.702</b>	<b>7.234</b>	<b>2,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>757.387</b>	<b>252.462</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1717-21

	TOTAL (RS)	MEDIA (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	21.600	4.320	1,5
SOTO DEL NEGRALEJO	11.500	2.300	0,8
SOTO DE CUEVAS	2.000	400	0,1
SOTO DE SALMEDINA	13.500	2.700	1,0
DEHESA DE ARGANZUELA (MATADERO)	8.235	1.647	0,6
PRADO DEL CORREGIDOR			
LEÑA DE EL PARDO	196.869	39.374	14,0
TIERRAS ARRENDADAS			
TIERRAS A CENSO	105.221	21.044	7,5
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>358.925</b>	<b>71.785</b>	<b>25,6</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	44.152	8.830	3,2
CASA CARNICERIA MAYOR	54.336	10.867	3,9
CARNICERIA ANTON MARTIN	7.000	1.400	0,5
CASAS RED DE SAN LUIS	6.742	1.348	0,5
ESCARPIAS DEL RASTRO	20.022	4.004	1,4
HORNOS DE VILLANUEVA	126.000	25.200	9,0
CASAS REGISTRO	13.224	2.645	0,9
MESON DE LA VILLA	17.000	3.400	1,2
CASA CALLE DE LAS POSTAS	15.000	3.000	1,1
CUARTOS DEL CORRAL DEL PRINCIPE	4.600	920	0,3
CAÑOS DEL PERAL	2.194	439	0,2
SOLARES VENDIDOS	2.220	444	0,2
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>312.490</b>	<b>62.498</b>	<b>22,3</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	442.624	88.525	31,6
PESO REAL Y CORREDURIA	73.803	14.761	5,3
ALMOTACEN Y CONTRASTE MARCADOR	86.784	17.357	6,2
BARCA DE ARGANDA	39.384	7.877	2,8
BARCA DE MEJORADA	10.657	2.131	0,8
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>653.252</b>	<b>130.650</b>	<b>46,6</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	1.642	328	0,1
CENSOS PERPETUOS	6.741	1.348	0,5
CENSOS AL QUITAR Y EFECTOS DE VILLA	53.615	10.723	3,8
DEPOSITARIA GENERAL			
CONSIGNACION DE APOSENTO	12.230	2.446	0,9
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS			
CONVENIENCIA DE COBEÑA			
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>74.228</b>	<b>14.846</b>	<b>5,3</b>
<b>5-OTROS</b>			
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>0,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.401.395</b>	<b>280.279</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1722-28

	TOTAL (RS)	MEDIA (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	33.000	4.714	1,8
SOTO DEL NEGRALEJO	16.100	2.300	0,9
SOTO DE CUEVAS	2.800	400	0,2
SOTO DE SALMEDINA	18.300	2.614	1,0
DEHESA DE ARGANZUELA (MATADERO)	11.529	1.647	0,6
PRADO DEL CORREGIDOR	2.928	418	0,2
LEÑA DE EL PARDO			
TIERRAS ARRENDADAS Y A CENSO	181.305	25.901	9,8
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>265.962</b>	<b>37.995</b>	<b>14,4</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	54.756	7.822	3,0
CASA CARNICERIA MAYOR	84.257	12.037	4,6
CARNICERIA ANTON MARTIN	10.108	1.444	0,5
CASAS RED DE SAN LUIS	31.585	4.512	1,7
ESCARPIAS DEL RASTRO	20.028	2.861	1,1
HORNOS DE VILLANUEVA	176.400	25.200	9,5
CASAS REGISTRO	18.133	2.590	1,0
MESON DE LA VILLA	23.800	3.400	1,3
CASA CALLE DE LAS POSTAS	21.000	3.000	1,1
CUARTOS DEL CORRAL DEL PRINCIPE	7.271	1.039	0,4
CAÑOS DEL PERAL	1.686	241	0,1
SOLARES VENDIDOS	4.479	640	0,2
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>453.503</b>	<b>64.786</b>	<b>24,5</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	567.509	81.073	30,7
PESO REAL Y CORREDURIA	165.710	23.673	9,0
ALMOTACEN Y CONTRASTE MARCADOR	110.500	15.786	6,0
BARCAS DE ARGANDA Y MEJORADA	82.410	11.773	4,5
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>926.129</b>	<b>132.304</b>	<b>50,1</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	17.720	2.531	1,0
CENSOS PERPETUOS	8.558	1.223	0,5
CENSOS AL QUITAR	9.797	1.400	0,5
CENSOS REDIMIDOS			
EFFECTOS DE VILLA	93.427	13.347	5,1
DEPOSITARIA GENERAL			
CONSIGNACION DE APOSENTO	19.171	2.739	1,0
MARTINEGA DE ALCOBENDAS			
CONVENIENCIA DE COBEÑA			
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>130.953</b>	<b>21.239</b>	<b>8,0</b>
<b>5-OTROS</b>			
FIESTAS DE TOROS	52.316	7.474	2,8
VARIOS	19.610	2.801	1,1
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>71.926</b>	<b>10.275</b>	<b>3,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.848.473</b>	<b>266.599</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1729-40

	TOTAL (RS)	MEDIA (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	60.000	5.000	2,3
SOTO DEL NEGRALEJO	31.600	2.633	1,2
SOTO DE CUEVAS	5.000	417	0,2
SOTO DE SALMEDINA	30.250	2.521	1,2
DEHESA DE ARGANZUELA	19.765	1.647	0,8
PRADO DEL CORREGIDOR	8.794	733	0,3
LEÑA DE EL PARDO	240.474	20.040	9,3
RETAMAR CAMINO DE EL PRADO			
TIERRAS ARRENDADAS Y A CENSO	121.598	10.133	4,7
ARENALES DE GETAFE	75.030	6.253	2,9
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>592.511</b>	<b>49.376</b>	<b>22,8</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	102.815	8.568	4,0
CASA CARNICERIA MAYOR	144.439	12.037	5,6
CARNICERIA ANTON MARTIN	13.297	1.108	0,5
CASAS RED DE SAN LUIS	68.170	5.681	2,6
ESCARPIAS DEL RASTRO	48.048	4.004	1,9
HORNOS DE VILLANUEVA	302.775	25.231	11,7
CASAS REGISTRO	31.294	2.608	1,2
MESON DE LA VILLA	34.750	2.896	1,3
CASA CALLE DE LAS POSTAS	37.000	3.083	1,4
CUARTOS DEL CORRAL DEL PRINCIPE	12.017	1.001	0,5
CAÑOS DEL PERAL			
SOLARES VENDIDOS			
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>794.605</b>	<b>66.217</b>	<b>30,6</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA	149.456	12.455	5,8
PESO REAL Y CORREDURIA	255.011	21.251	9,8
ALMOTACEN CONTRASTE MARCADOR	170.945	14.245	6,6
BARCA DE ARGANDA	128.674	10.723	5,0
BARCA DE MEJORADA	29.441	2.453	1,1
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>733.527</b>	<b>61.127</b>	<b>28,2</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	37.607	3.134	1,4
CENSOS PERPETUOS	9.009	751	0,3
CENSOS AL QUITAR Y EFECTOS DE VILLA	178.096	14.841	6,9
CENSOS REDIMIDOS	112.530	9.378	4,3
DEPOSITARIA GENERAL	69.363	5.780	2,7
CONSIGNACION DE APOSENTO	9.408	784	0,4
MARTINEGA DE ALCOBENDAS			
CONVENIENCIA DE COBEÑA			
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>416.013</b>	<b>34.668</b>	<b>16,0</b>
<b>5-OTROS</b>			
CONSIGNACION DE CERA	58.823	4.902	2,3
LAMINAS Y TIMBALES VENDIDOS	1.107	92	0,0
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>59.930</b>	<b>4.994</b>	<b>2,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.596.586</b>	<b>216.382</b>	

**INGRESOS DE PROPIOS, 1741-44 (30 ABRIL)**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>MEDIA (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	21.666	6.506	3,4
SOTO DEL NEGRALEJO	13.345	4.008	2,1
SOTO DE CUEVAS			
SOTO DE SALMEDINA	9.225	2.770	1,4
DEHESA DE ARGANZUELA	4.941	1.484	0,8
PRADO DEL CORREGIDOR	2.196	659	0,3
LEÑA DE EL PARDO	76.030	22.832	11,9
RETAMAR CAMINO DE EL PRADO			
TIERRAS ARRENDADAS	13.842	4.157	2,2
TIERRAS A CENSO	13.678	4.108	2,1
ARENALES DE GETAFE	17.922	5.382	2,8
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>172.845</b>	<b>51.905</b>	<b>27,0</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	27.077	8.131	4,2
CASA CARNICERIA MAYOR	41.098	12.342	6,4
CARNICERIA ANTON MARTIN	4.875	1.464	0,8
CASAS RED DE SAN LUIS	16.241	4.877	2,5
ESCARPIAS DEL RASTRO	10.010	3.006	1,6
HORNOS DE VILLANUEVA	84.333	25.325	13,2
CASAS REGISTRO	7.003	2.103	1,1
MESON DE LA VILLA	5.254	1.578	0,8
CASA CALLE DE LAS POSTAS	10.500	3.153	1,6
CUARTOS DEL CORRAL DEL PRINCIPE	2.688	807	0,4
CAÑOS DEL PERAL-VENTA DE LAS PILAS	2.340	703	0,4
SOLARES VENDIDOS	13.648	4.098	2,1
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>225.067</b>	<b>67.588</b>	<b>35,2</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA			
PESO REAL Y CORREDURIA	80.500	24.174	12,6
ALMOTACEN CONTRASTE MARCADOR	52.066	15.635	8,1
BARCA DE ARGANDA	33.590	10.087	5,2
BARCA DE MEJORADA	7.557	2.269	1,2
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>173.713</b>	<b>52.166</b>	<b>27,1</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
VEINTENAS	5.931	1.781	0,9
CENSOS PERPETUOS	2.252	676	0,4
CENSOS AL QUITAR Y EFECTOS DE VILLA	25.107	7.540	3,9
CENSOS REDIMIDOS	882	265	0,1
DEPOSITARIA GENERAL	4.056	1.218	0,6
CONSIGNACION DE APOSENTO			
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS			
CONVENIENCIA DE COBEÑA			
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>38.228</b>	<b>11.480</b>	<b>6,0</b>
<b>5-OTROS</b>			
CONSIGNACION DE CERA	47.059	14.132	7,3
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>47.059</b>	<b>14.132</b>	<b>7,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>656.912</b>	<b>197.271</b>	

**INGRESOS DE PROPIOS, 1744 (1 MAYO)-1749**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>MEDIA (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	16.995	2.997	2,6
SOTO DEL NEGRALEJO	18.098	3.192	2,7
SOTO DE CUEVAS	600	106	0,1
SOTO DE SALMEDINA	7.800	1.376	1,2
DEHESA DE ARGANZUELA			
PRADO DEL CORREGIDOR	1.859	328	0,3
LEÑA DE EL PARDO	109.770	19.360	16,6
RETAMAR CAMINO DE EL PRADO	10.341	1.824	1,6
TIERRAS ARRENDADAS Y A CENSO	61.764	10.893	9,3
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>227.227</b>	<b>40.075</b>	<b>34,3</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	43.882	7.739	6,6
CASA CARNICERIA MAYOR	28.810	5.081	4,4
CARNICERIA ANTON MARTIN	7.575	1.336	1,1
CASAS RED DE SAN LUIS	21.644	3.817	3,3
ESCARPIAS DEL RASTRO			
HORNOS DE VILLANUEVA	20.955	3.696	3,2
CASAS REGISTRO	2.747	484	0,4
MESON DE LA VILLA	8.253	1.456	1,2
CASA CALLE DE LAS POSTAS	16.500	2.910	2,5
CUARTOS DEL CORRAL DEL PRINCIPE			
SOLARES VENDIDOS			
CASILLAS TALLERES	729	129	0,1
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>49.184</b>	<b>26.648</b>	<b>22,8</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO DE LA HARINA			
PESO REAL Y CORREDURIA	18.496	3.262	2,8
ALMOTACEN CONTRASTE MARCADOR	70.456	12.426	10,6
BARCA DE ARGANDA	62.152	10.962	9,4
BARCA DE MEJORADA	21.840	3.852	3,3
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>172.944</b>	<b>30.502</b>	<b>26,1</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	19.320	3.407	2,9
CENSOS REDIMIDOS	29.859	5.266	4,5
EFFECTOS DE VILLA	37.616	6.634	5,7
DEPOSITARIA GENERAL			
CONSIGNACION DE APOSENTO			
MARTINEGA DE ALCOBENDAS			
CONVENIENCIA DE COBEÑA			
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>86.795</b>	<b>15.308</b>	<b>13,1</b>
<b>5-OTROS</b>			
CONSIGNACION DE CERA	23.529	4.150	3,6
VARIOS	419	74	0,1
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>23.948</b>	<b>4.224</b>	<b>3,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>560.098</b>	<b>116.756</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1750

	TOTAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	10.700	6,7
SOTO DEL NEGRALEJO		
SOTO DE CUEVAS	600	0,4
SOTO DE SALMEDINA	650	0,4
DEHESA DE ARGANZUELA	800	0,5
PRADO DEL CORREGIDOR	750	0,5
LEÑA DE EL PARDO	14.289	8,9
RETAMAR CAMINO DE EL PRADO		
TIERRAS ARRENDADAS	9.843	6,1
TIERRAS A CENSO	5.550	3,5
ARENALES DE GETAFE	5.340	3,3
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>48.522</b>	<b>30,2</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	10.533	6,6
CASA CARNICERIA MAYOR	8.215	5,1
CARNICERIA ANTON MARTIN	1.500	0,9
CASAS RED DE SAN LUIS	4.404	2,7
MESON DE LA VILLA		
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	1,9
SOLARES VENDIDOS	2.200	1,4
CASILLAS TALLERES	461	0,3
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>30.313</b>	<b>18,9</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	10.130	6,3
ALMOTACEN	8.000	5,0
CONTRASTE MARCADOR	8.800	5,5
BARCA DE ARGANDA	9.612	6,0
BARCA DE MEJORADA	2.812	1,7
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>39.354</b>	<b>24,5</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
VEINTENAS		
CENSOS PERPETUOS	3.324	2,1
CENSOS AL QUITAR	892	0,6
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	17.512	10,9
DEPOSITARIA GENERAL		
CONSIGNACION DE APOSENTO		
MARTINEGA DE ALCOBENDAS		
CONVENIENCIA DE COBEÑA		
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>21.728</b>	<b>13,5</b>
<b>5-OTROS</b>		
TIERRA VENDIDA AL REY	9.019	5,6
CONSIGNACION DE CERA	11.764	7,3
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>20.783</b>	<b>12,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>160.700</b>	



## INGRESOS DE PROPIOS, 1751

	TOTAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	5.800	2,6
SOTO DEL NEGRALEJO	5.000	2,2
SOTO DE CUEVAS	600	0,3
SOTO DE SALMEDINA		
DEHESA DE ARGANZUELA	800	0,4
PRADO DEL CORREGIDOR	750	0,3
LEÑA DE EL PARDO	50.000	22,5
RETAMAR CAMINO DE EL PRADO	9.750	4,4
TIERRAS ARRENDADAS	5.939	2,7
TIERRAS A CENSO	4.654	2,1
ARENALES DE GETAFE	14.326	6,4
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>97.619</b>	<b>43,8</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	10.738	4,8
CASA CARNICERIA MAYOR	11.120	5,0
CARNICERIA ANTON MARTIN	1.500	0,7
CASAS RED DE SAN LUIS	3.644	1,6
MESON DE LA VILLA	7.117	3,2
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	1,3
SOLARES VENDIDOS	2.200	1,0
CASILLAS TALLERES	421	0,2
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>39.740</b>	<b>17,8</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	15.828	7,1
ALMOTACEN	6.000	2,7
CONTRASTE MARCADOR	8.800	4,0
BARCA DE ARGANDA	10.492	4,7
BARCA DE MEJORADA	2.812	1,3
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>43.932</b>	<b>19,7</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
VEINTENAS		
CENSOS PERPETUOS	4.773	2,1
CENSOS AL QUITAR	821	0,4
CENSOS REDIMIDOS		
EFECTOS DE VILLA	15.187	6,8
DEPOSITARIA GENERAL		
CONSIGNACION DE APOSENTO		
MARTINEGA DE ALCOBENDAS		
CONVENIENCIA DE COBEÑA		
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>20.781</b>	<b>9,3</b>
<b>5-OTROS</b>		
CONSIGNACION DE CERA	11.764	5,3
VARIOS	8.876	4,0
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>20.640</b>	<b>9,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>222.712</b>	

**INGRESOS DE PROPIOS, 1752**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTOS Y DEHESAS	23.679	11,4
LEÑA DE EL PARDO	50.000	24,1
TIERRAS ARRENDADAS	8.935	4,3
TIERRAS A CENSO	8.949	4,3
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>91.563</b>	<b>44,1</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>33.964</b>	<b>16,3</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	22.000	10,6
ALMOTACEN	6.000	2,9
CONTRASTE MARCADOR	8.800	4,2
BARCAS DE ARGANDA Y MEJORADA	11.886	5,7
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>48.686</b>	<b>23,4</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
VEINTENAS		
CENSOS PERPETUOS	1.473	0,7
CENSOS AL QUITAR	821	0,4
CENSOS REDIMIDOS	3.496	1,7
EFFECTOS DE VILLA	15.037	7,2
DEPOSITARIA GENERAL		
CONSIGNACION DE APOSENTO		
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	1.000	0,5
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>21.827</b>	<b>10,5</b>
<b>5-OTROS</b>		
CONSIGNACION DE CERA	11.764	5,7
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>11.764</b>	<b>5,7</b>
<b>TOTAL</b>	<b>207.804</b>	

### INGRESOS DE PROPIOS, 1753

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	5.800	2,6
SOTO DEL NEGRALEJO	4.100	1,9
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	9.000	4,1
SOTO DE CUEVAS		
SOTO DE SALMEDINA		
DEHESA DE ARGANZUELA	800	0,4
PRADO DEL CORREGIDOR	750	0,3
LEÑA DE EL PARDO	60.000	27,3
TIERRAS ARRENDADAS	2.914	1,3
TIERRAS A CENSO	510	0,2
ARENALES DE GETAFE	4.233	1,9
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>88.107</b>	<b>40,0</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	31.803	14,5
CASA CARNICERIA MAYOR	13.466	6,1
CARNICERIA ANTON MARTIN	1.500	0,7
CASAS RED DE SAN LUIS	3.117	1,4
MESON DE LA VILLA	2.372	1,1
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	1,4
SOLARES VENDIDOS	165	0,1
CASILLAS TALLERES	342	0,2
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>55.765</b>	<b>25,3</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	22.000	10,0
ALMOTACEN	6.000	2,7
CONTRASTE MARCADOR	8.800	4,0
BARCA DE ARGANDA	2.800	1,3
BARCA DE MEJORADA	2.812	1,3
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>42.412</b>	<b>19,3</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
VEINTENAS		
CENSOS PERPETUOS	5.802	2,6
CENSOS AL QUITAR	821	0,4
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	15.412	7,0
DEPOSITARIA GENERAL		
CONSIGNACION DE APOSENTO		
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS		
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>22.035</b>	<b>10,0</b>
<b>5-OTROS</b>		
CONSIGNACION DE CERA	11.764	5,3
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>11.764</b>	<b>5,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>220.083</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1754-60

	TOTAL (RS)	MEDIA (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	45.475	6.496	4,3
SOTO DEL NEGRALEJO	38.474	5.496	3,6
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	63.000	9.000	6,0
SOTO DE CUEVAS	1.200	171	0,1
SOTO DE SALMEDINA	17.658	2.523	1,7
DEHESA DE ARGANZUELA	5.600	800	0,5
PRADO DEL CORREGIDOR	5.590	799	0,5
LEÑA DE EL PARDO	50.000	7.143	4,7
TIERRAS ARRENDADAS	62.620	8.946	5,9
TIERRAS A CENSO	41.738	5.963	3,9
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>331.355</b>	<b>47.336</b>	<b>31,3</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	75.006	10.715	7,1
CASA CARNICERIA MAYOR	85.025	12.146	8,0
CARNICERIA ANTON MARTIN	10.101	1.443	1,0
CASAS RED DE SAN LUIS	16.245	2.321	1,5
MESON DE LA VILLA	16.607	2.372	1,6
CASA CALLE DE LAS POSTAS	21.100	3.014	2,0
SOLARES VENDIDOS	5.868	838	0,6
CASILLAS TALLERES	2.140	306	0,2
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>232.092</b>	<b>33.156</b>	<b>22,0</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO REAL Y CORREDURIA	33.936	4.848	3,2
ALMOTACEN	30.466	4.352	2,9
CONTRASTE MARCADOR	58.667	8.381	5,5
BARCA DE ARGANDA	100.438	14.348	9,5
BARCA DE MEJORADA	45.508	6.501	4,3
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>269.015</b>	<b>38.431</b>	<b>25,4</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
CENSOS PERPETUOS Y VEINTENAS	38.286	5.469	3,6
CENSOS AL QUITAR	5.586	798	0,5
CENSOS REDIMIDOS			
EFFECTOS DE VILLA	82.855	11.836	7,8
DEPOSITARIA GENERAL	15.926	2.275	1,5
CONSIGNACION DE APOSENTO			
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS			
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>142.653</b>	<b>20.379</b>	<b>13,5</b>
<b>5-OTROS</b>			
CONSIGNACION CERA	82.068	11.724	7,8
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>82.068</b>	<b>11.724</b>	<b>7,8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.057.183</b>	<b>151.026</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1761-65

	<b>TOTALES</b>	<b>MEDIA</b>	<b>%</b>
	<b>(RS)</b>	<b>(RS)</b>	<b>DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	38.750	7.750	3,5
SOTO DEL NEGRALEJO	14.622	2.924	1,3
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	45.000	9.000	4,1
SOTO DE CUEVAS	2.400	480	0,2
SOTO DE SALMEDINA	21.137	4.227	1,9
DEHESA DE ARGANZUELA	4.000	800	0,4
PRADO DEL CORREGIDOR	5.265	1.053	0,5
LEÑA DE EL PARDO	343.248	68.650	30,9
RETAMAR CAMINO DE EL PARDO	3.800	760	0,3
TIERRAS ARRENDADAS	14.667	2.933	1,3
TIERRAS A CENSO	10.075	2.015	0,9
ARENALES DE GETAFE	14.440	2.888	1,3
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>517.404</b>	<b>103.481</b>	<b>46,6</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	61.128	12.226	5,5
CASA CARNICERIA MAYOR	57.153	11.431	5,2
CARNICERIA ANTON MARTIN	8.660	1.732	0,8
CASAS RED DE SAN LUIS	20.112	4.022	1,8
MESON DE LA VILLA	12.576	2.515	1,1
CASA CALLE DE LAS POSTAS	15.000	3.000	1,4
SOLARES VENDIDOS	4.867	973	0,4
CASILLA TALLER	1.241	248	0,1
CASILLA BOTILLERIA	1.645	329	0,1
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>182.382</b>	<b>36.476</b>	<b>16,4</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO REAL Y CORREDURIA	41.258	8.252	3,7
ALMOTACEN	22.400	4.480	2,0
CONTRASTE MARCADOR	44.000	8.800	4,0
BARCA DE ARGANDA	65.761	13.152	5,9
BARCA DE MEJORADA	22.135	4.427	2,0
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>195.554</b>	<b>39.111</b>	<b>17,6</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
CENSOS PERPETUOS Y VEINTENAS	20.975	4.195	1,9
CENSOS AL QUITAR	3.949	790	0,4
CENSOS REDIMIDOS	39.450	7.890	3,6
EFFECTOS DE VILLA	96.779	19.356	8,7
DEPOSITARIA GENERAL	51.631	10.326	4,7
CONSIGNACION DE APOSENTO	0	0	0,0
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	500	100	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>213.284</b>	<b>42.657</b>	<b>19,2</b>
<b>5-OTROS</b>			
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>970</b>	<b>194</b>	<b>0,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.109.594</b>	<b>221.919</b>	

**INGRESOS DE PROPIOS, 1766-67**

	<b>TOTAL</b> <b>(RS)</b>	<b>MEDIA</b> <b>(RS)</b>	<b>%</b> <b>DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	16.190	8.095	4,6
SOTO DEL NEGRALEJO	18.750	9.375	5,4
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	18.000	9.000	5,1
SOTO DE CUEVAS	3.300	1.650	0,9
SOTO DE SALMEDINA	10.937	5.469	3,1
DEHESA DE ARGANZUELA	1.600	800	0,5
PRADO DEL CORREGIDOR	1.795	898	0,5
SOTO DE MIGASCALIENTES	23.870	11.935	6,8
RETAMAR CAMINO DE EL PARDO			
TIERRAS ARRENDADAS	6.810	3.405	1,9
TIERRAS A CENSO	4.037	2.019	1,2
ARENALES DE GETAFE	14.805	7.403	4,2
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>120.094</b>	<b>60.047</b>	<b>34,3</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	20.564	10.282	5,9
CASA CARNICERIA MAYOR	28.293	14.147	8,1
CARNICERIA ANTON MARTIN	6.841	3.421	2,0
CASAS RED DE SAN LUIS	4.709	2.355	1,3
MESON DE LA VILLA	7.600	3.800	2,2
CASA CALLE DE LAS POSTAS	6.000	3.000	1,7
SOLARES VENDIDOS			
CASILLA TALLER	408	204	0,1
CASILLA BOTILLERIA	450	225	0,1
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>74.865</b>	<b>37.433</b>	<b>21,4</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO REAL Y CORREDURIA	6.540	3.270	1,9
ALMOTACEN	12.450	6.225	3,6
CONTRASTE MARCADOR	21.594	10.797	6,2
BARCA DE ARGANDA	28.940	14.470	8,3
BARCA DE MEJORADA	41.652	20.826	11,9
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>111.176</b>	<b>55.588</b>	<b>31,7</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
CENSOS PERPETUOS Y VEINTENAS	2.192	1.096	0,6
CENSOS AL QUITAR	1.320	660	0,4
CENSOS REDIMIDOS			
EFFECTOS DE VILLA	29.262	14.631	8,4
DEPOSITARIA GENERAL	8.224	4.112	2,3
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	3.132	1.566	0,9
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>44.130</b>	<b>22.065</b>	<b>12,6</b>
<b>5-OTROS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>350.265</b>	<b>175.133</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1768-69

	<b>TOTAL</b> (RS)	<b>MEDIA</b> (RS)	<b>%</b> <b>DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>			
SOTO DEL PORCAL	14.000	7.000	2,5
SOTO DEL NEGRALEJO	14.010	7.005	2,5
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	9.000	4.500	1,6
SOTO DE CUEVAS	600	300	0,1
SOTO DE SALMEDINA	10.937	5.469	2,0
DEHESA DE ARGANZUELA	1.600	800	0,3
DEHESA DE AMANIEL	531	266	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	2.037	1.019	0,4
SOTO DE MIGASCALIENTES	20.078	10.039	3,6
RETAMAR CAMINO DE EL PARDO	1.000	500	0,2
PRADO HERRERO	5.500	2.750	1,0
DEHESA DE LA SERENA	115.584	57.792	20,7
TIERRAS ARRENDADAS	33.530	16.765	6,0
TIERRAS A CENSO	8.148	4.074	1,5
ARENALES DE GETAFE	8.986	4.493	1,6
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>245.541</b>	<b>122.771</b>	<b>44,1</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>			
CASA PANADERIA	24.275	12.138	4,4
CASA CARNICERIA MAYOR	23.931	11.966	4,3
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.900	1.950	0,7
CASAS RED DE SAN LUIS	14.594	7.297	2,6
MESON DE LA VILLA	9.500	4.750	1,7
CASA CALLE DE LAS POSTAS	6.000	3.000	1,1
SOLARES VENDIDOS			
CASILLA TALLER	714	357	0,1
CASILLA BOTILLERIA			
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>82.914</b>	<b>41.457</b>	<b>14,9</b>
<b>3-RENTAS</b>			
PESO REAL Y CORREDURIA	20.710	10.355	3,7
ALMOTACEN	19.250	9.625	3,5
CONTRASTE MARCADOR	32.186	16.093	5,8
BARCA DE ARGANDA	25.470	12.735	4,6
BARCA DE MEJORADA	32.578	16.289	5,8
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>130.194</b>	<b>65.097</b>	<b>23,4</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>			
CENSOS PERPETUOS Y VEINTENAS	14.813	7.407	2,7
CENSOS AL QUITAR	2.990	1.495	0,5
CENSOS REDIMIDOS	17.577	8.789	3,2
EFFECTOS DE VILLA	39.952	19.976	7,2
DEPOSITARIA GENERAL	15.523	7.762	2,8
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	997	499	0,2
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>91.852</b>	<b>45.926</b>	<b>16,5</b>
<b>5-OTROS</b>			
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>6.800</b>	<b>3.400</b>	<b>1,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>557.301</b>	<b>278.651</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1771

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	23.119	9,4
SOTO DEL NEGRALEJO	8.556	3,5
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO		
SOTO DE CUEVAS		
SOTO DE SALMEDINA	5.469	2,2
DEHESA DE ARGANZUELA	800	0,3
DEHESA DE AMANIEL	200	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	750	0,3
SOTO DE MIGASCALIENTES	11.325	4,6
RETAMAR CAMINO DE EL PARDO		
PRADO HERRERO	5.500	2,2
DEHESA DE LA SERENA	27.596	11,2
TIERRAS ARRENDADAS	14.020	5,7
TIERRAS A CENSO	2.610	1,1
ARENALES DE GETAFE	8.359	3,4
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>108.304</b>	<b>43,8</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	9.131	3,7
CASA CARNICERIA MAYOR	15.085	6,1
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.150	1,3
CASAS RED DE SAN LUIS	6.120	2,5
MESON DE LA VILLA	3.800	1,5
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	1,2
CASA DE LOS LUJANES		
CASILLA EN LA TELA	102	0,0
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>40.388</b>	<b>16,4</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	5.912	2,4
ALMOTACEN	8.250	3,3
CONTRASTE MARCADOR	16.094	6,5
BARCA DE ARGANDA	11.000	4,5
BARCA DE MEJORADA	15.123	6,1
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>56.379</b>	<b>22,8</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y VEINTENAS	8.587	3,5
CENSOS AL QUITAR	660	0,3
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	19.512	7,9
DEPOSITARIA GENERAL	7.696	3,1
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS		
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>36.455</b>	<b>14,8</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS COBRADAS	5.484	2,2
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>5.484</b>	<b>2,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>247.010</b>	



### INGRESOS DE PROPIOS, 1774

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	7.000	2,3
SOTO DEL NEGRALEJO	9.767	3,2
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	18.000	5,9
SOTO DE CUEVAS		
SOTO DE SALMEDINA	7.294	2,4
DEHESA DE ARGANZUELA	2.244	0,7
DEHESA DE AMANIEL	200	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	750	0,2
SOTO DE MIGASCALIENTES	4.654	1,5
RETAMAR CAMINO DE EL PARDO		
PRADO HERRERO	5.500	1,8
DEHESA DE LA SERENA	47.259	15,6
TIERRAS ARRENDADAS	4.697	1,6
TIERRAS A CENSO	1.837	0,6
ARENALES DE GETAFE	2.753	0,9
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>111.955</b>	<b>37,0</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	20.730	6,8
CASA CARNICERIA MAYOR	22.925	7,6
CARNICERIA ANTON MARTIN	4.223	1,4
CASAS RED DE SAN LUIS	4.829	1,6
MESON DE LA VILLA	3.800	1,3
CASA CALLE DE LAS POSTAS	1.500	0,5
CASA DE LOS LUJANES		
CASILLA EN LA TELA		
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	2,0
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>64.207</b>	<b>21,2</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	32.899	10,9
ALMOTACEN	11.000	3,6
CONTRASTE MARCADOR	21.467	7,1
BARCA DE ARGANDA	14.470	4,8
BARCA DE MEJORADA	7.500	2,5
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>87.336</b>	<b>28,9</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	2.879	1,0
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	19.508	6,4
DEPOSITARIA GENERAL	13.064	4,3
MARTINEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>35.539</b>	<b>11,7</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS COBRADAS	3.641	1,2
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>3.641</b>	<b>1,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>302.678</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1775

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	8.092	3,1
SOTO DEL NEGRALEJO	9.000	3,4
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	13.399	5,1
SOTO DE CUEVAS		
SOTO DE SALMEDINA	7.295	2,8
DEHESA DE ARGANZUELA	800	0,3
DEHESA DE AMANIEL	2.200	0,8
PRADO DEL CORREGIDOR	1.600	0,6
SOTO DE MIGASCALIENTES	12.694	4,9
PRADO HERRERO	5.500	2,1
DEHESA DE LA SERENA	35.244	13,5
TIERRAS ARRENDADAS	1.432	0,5
TIERRAS A CENSO	7.477	2,9
ARENALES DE GETAFE	2.851	1,1
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>107.584</b>	<b>41,2</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	7.528	2,9
CASA CARNICERIA MAYOR	28.679	11,0
CARNICERIA ANTON MARTIN	2.000	0,8
CASAS RED DE SAN LUIS	4.943	1,9
MESON DE LA VILLA	3.800	1,5
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	1,1
CASA DE LOS LUJANES		
CASILLA EN LA TELA		
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	2,4
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>56.150</b>	<b>21,5</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	24.101	9,2
ALMOTACEN	8.250	3,2
CONTRASTE MARCADOR	5.467	2,1
BARCA DE ARGANDA	14.470	5,5
BARCA DE MEJORADA	9.000	3,4
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>61.288</b>	<b>23,5</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	3.702	1,4
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	19.508	7,5
DEPOSITARIA GENERAL	11.201	4,3
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>34.499</b>	<b>13,2</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS COBRADAS	1.355	0,5
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>1.355</b>	<b>0,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>260.876</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1776

	TOTAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL		
SOTO DEL NEGRALEJO	8.750	3,3
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	9.000	3,4
SOTO DE CUEVAS	2.899	1,1
SOTO DE SALMEDINA		
DEHESA DE ARGANZUELA	3.680	1,4
DEHESA DE AMANIEL	200	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	2.250	0,8
SOTO DE MIGASCALIENTES	5.222	2,0
PRADO HERRERO	5.500	2,1
DEHESA DE LA SERENA	53.719	20,1
TIERRAS ARRENDADAS	6.069	2,3
TIERRAS A CENSO	4.722	1,8
ARENALES DE GETAFE	4.526	1,7
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>106.537</b>	<b>39,9</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	14.176	5,3
CASA CARNICERIA MAYOR	31.165	11,7
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.526	1,3
CASAS RED DE SAN LUIS	5.250	2,0
MESON DE LA VILLA	3.800	1,4
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	1,1
CASA DE LOS LUJANES	1.900	0,7
CASILLA EN LA TELA		
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	2,3
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>69.017</b>	<b>25,8</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	27.644	10,3
ALMOTACEN		
CONTRASTE MARCADOR		
BARCA DE ARGANDA	14.470	5,4
BARCA DE MEJORADA	15.000	5,6
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>57.114</b>	<b>21,4</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPEYUOS Y AL QUITAR	2.673	1,0
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	19.548	7,3
DEPOSITARIA GENERAL	8.302	3,1
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>30.611</b>	<b>11,5</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	3.834	1,4
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>3.834</b>	<b>1,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>267.113</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1777

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	6.550	2,1
SOTO DEL NEGRALEJO	15.716	5,0
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	9.000	2,9
SOTO DE CUEVAS		
SOTO DE SALMEDINA	7.294	2,3
DEHESA DE ARGANZUELA	2.244	0,7
DEHESA DE AMANIEL	200	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	3.750	1,2
SOTO DE MIGASCALIENTES	476	0,2
PRADO HERRERO		
DEHESA DE LA SERENA	61.812	19,8
TIERRAS ARRENDADAS	5.368	1,7
TIERRAS A CENSO	8.275	2,7
ARENALES DE GETAFE	4.936	1,6
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>125.621</b>	<b>40,3</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	15.836	5,1
CASA CARNICERIA MAYOR	31.233	10,0
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.625	1,2
CASAS RED DE SAN LUIS	7.110	2,3
MESON DE LA VILLA	5.700	1,8
CASA CALLE DE LAS POSTAS	4.500	1,4
CASA DE LOS LUJANES	1.500	0,5
CASILLA EN LA TELA		
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	5.900	1,9
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>75.404</b>	<b>24,2</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	44.561	14,3
ALMOTACEN		
CONTRASTE MARCADOR		
BARCA DE ARGANDA	18.750	6,0
BARCA DE MEJORADA	7.500	2,4
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>70.811</b>	<b>22,7</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	7.216	2,3
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	19.454	6,2
DEPOSITARIA GENERAL	12.161	3,9
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>38.919</b>	<b>12,5</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	1.083	0,3
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>1.083</b>	<b>0,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>311.838</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1778

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	19.650	6,4
SOTO DEL NEGRALEJO	24.120	7,9
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	6.416	2,1
SOTO DE CUEVAS		
SOTO DE SALMEDINA	6.000	2,0
DEHESA DE ARGANZUELA	2.581	0,8
DEHESA DE AMANIEL	200	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	2.250	0,7
SOTO DE MIGASCALIENTES	2.287	0,7
PRADO HERRERO		
DEHESA DE LA SERENA	41.947	13,7
TIERRAS ARRENDADAS	8.515	2,8
TIERRAS A CENSO	5.562	1,8
ARENALES DE GETAFE	6.577	2,1
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>126.105</b>	<b>41,2</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	15.278	5,0
CASA CARNICERIA MAYOR	30.341	9,9
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.250	1,1
CASAS RED DE SAN LUIS	5.114	1,7
MESON DE LA VILLA	3.800	1,2
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	1,0
CASA DE LOS LUJANES	600	0,2
CASILLA EN LA TELA		
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	5.900	1,9
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>67.283</b>	<b>22,0</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	37.493	12,2
ALMOTACEN	13.964	4,6
CONTRASTE MARCADOR	0	0,0
BARCA DE ARGANDA	12.500	4,1
BARCA DE MEJORADA	15.435	5,0
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>79.392</b>	<b>25,9</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	4.349	1,4
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	19.564	6,4
DEPOSITARIA GENERAL	8.853	2,9
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>32.854</b>	<b>10,7</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	771	0,3
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>771</b>	<b>0,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>306.405</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1779

	TOTAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	13.100	3,7
SOTO DEL NEGRALEJO	15.030	4,2
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	6,1
SOTO DE CUEVAS	1.485	0,4
SOTO DE SALMEDINA	6.000	1,7
DEHESA DE ARGANZUELA	2.581	0,7
DEHESA DE AMANIEL	4.200	1,2
PRADO DEL CORREGIDOR	2.250	0,6
SOTO DE MIGASCALIENTES	9.984	2,8
PRADO HERRERO	16.500	4,6
DEHESA DE LA SERENA	44.234	12,3
TIERRAS ARRENDADAS	12.428	3,5
TIERRAS A CENSO	9.279	2,6
ARENALES DE GETAFE	4.781	1,3
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>163.685</b>	<b>45,7</b>
<b>2-EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	15.589	4,3
CASA CARNICERIA MAYOR	39.375	11,0
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.275	0,9
CASAS RED DE SAN LUIS	4.718	1,3
MESON DE LA VILLA	3.800	1,1
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	0,8
CASA DE LOS LUJANES	1.800	0,5
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	5.900	1,6
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>77.457</b>	<b>21,6</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	37.493	10,5
ALMOTACEN		
CONTRASTE MARCADOR	22.154	6,2
BARCA DE ARGANDA	12.500	3,5
BARCA DE MEJORADA	12.645	3,5
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>84.792</b>	<b>23,7</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	6.969	1,9
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	19.990	5,6
DEPOSITARIA GENERAL	2.246	0,6
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>29.293</b>	<b>8,2</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	3.258	0,9
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>3.258</b>	<b>0,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>358.485</b>	

### INGRESOS DE PROPIOS, 1780

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	21.628	5,7
SOTO DEL NEGRALEJO	28.620	7,6
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	5,8
SOTO DE CUEVAS	3.036	0,8
SOTO DE SALMEDINA	12.000	3,2
DEHESA DE ARGANZUELA	2.469	0,7
DEHESA DE AMANIEL	200	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	2.250	0,6
SOTO DE MIGASCALIENTES		
PRADO HERRERO	5.500	1,5
DEHESA DE LA SERENA	50.669	13,4
TIERRAS ARRENDADAS	11.234	3,0
TIERRAS A CENSO	5.422	1,4
ARENALES DE GETAFE	4.200	1,1
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>169.061</b>	<b>44,7</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	18.695	4,9
CASA CARNICERIA MAYOR	32.259	8,5
CARNICERIA ANTON MARTIN	2.875	0,8
CASAS RED DE SAN LUIS	5.975	1,6
MESON DE LA VILLA	3.800	1,0
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	0,8
CASA DE LOS LUJANES	787	0,2
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	5.900	1,6
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>73.291</b>	<b>19,4</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	37.493	9,9
ALMOTACEN		
CONTRASTE MARCADOR	8.494	2,2
BARCA DE ARGANDA	4.500	1,2
BARCA DE MEJORADA	7.677	2,0
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>58.164</b>	<b>15,4</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	2.795	0,7
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	28.511	7,5
DEPOSITARIA GENERAL	43.682	11,5
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>75.076</b>	<b>19,8</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	2.781	0,7
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>2.781</b>	<b>0,7</b>
<b>TOTAL</b>	<b>378.373</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1781

	TOTAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	13.100	3,8
SOTO DEL NEGRALEJO	15.060	4,3
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	6,3
SOTO DE CUEVAS	525	0,2
SOTO DE SALMEDINA	6.000	1,7
DEHESA DE ARGANZUELA	2.469	0,7
DEHESA DE AMANIEL	3.700	1,1
PRADO DEL CORREGIDOR	1.740	0,5
SOTO DE MIGASCALIENTES	47.841	13,8
PRADO HERRERO	17.535	5,1
DEHESA DE LA SERENA	44.802	12,9
TIERRAS ARRENDADAS	12.942	3,7
TIERRAS A CENSO	7.581	2,2
ARENALES DE GETAFE	4.571	1,3
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>199.699</b>	<b>57,6</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	17.091	4,9
CASA CARNICERIA MAYOR	29.244	8,4
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.250	0,9
CASAS RED DE SAN LUIS	5.254	1,5
MESON DE LA VILLA	3.800	1,1
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	0,9
CASA DE LOS LUJANES	500	0,1
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	1,8
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>68.339</b>	<b>19,7</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	26.095	7,5
ALMOTACEN		
CONTRASTE MARCADOR	16.093	4,6
BARCA DE ARGANDA	3.000	0,9
BARCA DE MEJORADA	17.689	5,1
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>62.877</b>	<b>18,1</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	1.137	0,3
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	9.800	2,8
DEPOSITARIA GENERAL	1.583	0,5
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>12.608</b>	<b>3,6</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	3.313	1,0
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>3.313</b>	<b>1,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>346.836</b>	



## INGRESOS DE PROPIOS, 1782

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	32.472	9,8
SOTO DEL NEGRALEJO	21.210	6,4
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	6,6
SOTO DE CUEVAS	714	0,2
SOTO DE SALMEDINA	6.000	1,8
DEHESA DE ARGANZUELA	2.581	0,8
DEHESA DE AMANIEL	200	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	2.289	0,7
SOTO DE MIGASCALIENTES	16.537	5,0
PRADO HERRERO	5.500	1,7
DEHESA DE LA SERENA	44.634	13,5
TIERRAS ARRENDADAS	10.222	3,1
TIERRAS A CENSO	3.449	1,0
ARENALES DE GETAFE	3.085	0,9
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>170.726</b>	<b>51,7</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	16.036	4,9
CASA CARNICERIA MAYOR	29.208	8,8
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.620	1,1
CASAS RED DE SAN LUIS	5.188	1,6
MESON DE LA VILLA	4.111	1,2
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	0,9
CASA DE LOS LUJANES	650	0,2
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	1,9
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>68.013</b>	<b>20,6</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	27.195	8,2
ALMOTACEN		
CONTRASTE MARCADOR	21.457	6,5
BARCA DE ARGANDA	10.043	3,0
BARCA DE MEJORADA	4.504	1,4
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>63.199</b>	<b>19,1</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	4.470	1,4
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	20.975	6,4
DEPOSITARIA GENERAL	2.234	0,7
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>27.767</b>	<b>8,4</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	532	0,2
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>532</b>	<b>0,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>330.237</b>	

### INGRESOS DE PROPIOS, 1783

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	1.500	0,6
SOTO DEL NEGRALEJO	9.500	3,8
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	8,8
SOTO DE CUEVAS	898	0,4
SOTO DE SALMEDINA	6.000	2,4
DEHESA DE ARGANZUELA	2.581	1,0
DEHESA DE AMANIEL	730	0,3
PRADO DEL CORREGIDOR	1.640	0,7
SOTO DE MIGASCALIENTES	4.930	2,0
PRADO HERRERO	5.500	2,2
DEHESA DE LA SERENA	38.600	15,6
TIERRAS ARRENDADAS	7.644	3,1
TIERRAS A CENSO	7.541	3,0
ARENALES DE GETAFE	5.828	2,4
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>114.725</b>	<b>46,4</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	14.973	6,1
CASA CARNICERIA MAYOR	26.754	10,8
CARNICERIA ANTON MARTIN	1.250	0,5
CASAS RED DE SAN LUIS	4.686	1,9
MESON DE LA VILLA	4.200	1,7
CASA CALLE DE LAS POSTAS	1.500	0,6
CASA DE LOS LUJANES	1.694	0,7
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	2,5
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>61.257</b>	<b>24,8</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	23.208	9,4
ALMOTACEN		
CONTRASTE MARCADOR	10.729	4,3
BARCA DE ARGANDA	13.921	5,6
BARCA DE MEJORADA	3.500	1,4
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>51.358</b>	<b>20,8</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	1.959	0,8
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	8.710	3,5
DEPOSITARIA GENERAL	3.473	1,4
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>14.230</b>	<b>5,8</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	5.902	2,4
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>5.902</b>	<b>2,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>247.472</b>	

**INGRESOS DE PROPIOS, 1784**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	22.601	6,7
SOTO DEL NEGRALEJO	14.219	4,2
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	6,5
SOTO DE CUEVAS		
SOTO DE SALMEDINA		
DEHESA DE ARGANZUELA	2.581	0,8
DEHESA DE AMANIEL	1.480	0,4
PRADO DEL CORREGIDOR	2.080	0,6
SOTO DE MIGASCALIENTES	1.468	0,4
PRADO HERRERO	5.500	1,6
DEHESA DE LA SERENA	44.634	13,2
TIERRAS ARRENDADAS	7.130	2,1
TIERRAS A CENSO	2.701	0,8
ARENALES DE GETAFE	25.015	7,4
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>151.242</b>	<b>44,8</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	16.337	4,8
CASA CARNICERIA MAYOR	26.430	7,8
CARNICERIA ANTON MARTIN	2.875	0,9
CASAS RED DE SAN LUIS	6.041	1,8
MESON DE LA VILLA	4.200	1,2
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	0,9
CASA DE LOS LUJANES		
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	1,8
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>65.083</b>	<b>19,3</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	20.000	5,9
ALMOTACEN		
CONTRASTE MARCADOR	16.093	4,8
BARCA DE ARGANDA	21.871	6,5
BARCA DE MEJORADA	7.000	2,1
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>64.964</b>	<b>19,2</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	4.041	1,2
CENSOS REDIMIDOS		
EFECTOS DE VILLA	19.729	5,8
DEPOSITARIA GENERAL	5.709	1,7
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS	9.152	2,7
MARTINEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>38.719</b>	<b>11,5</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	17.869	5,3
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>17.869</b>	<b>5,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>337.877</b>	

**INGRESOS DE PROPIOS, 1785**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	11.080	3,7
SOTO DEL NEGRALEJO	10.471	3,5
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	7,3
SOTO DE CUEVAS	495	0,2
SOTO DE SALMEDINA	4.200	1,4
DEHESA DE ARGANZUELA	6.093	2,0
DEHESA DE AMANIEL	200	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	790	0,3
SOTO DE MIGASCALIENTES	1.286	0,4
PRADO HERRERO	5.500	1,8
DEHESA DE LA SERENA	33.320	11,2
TIERRAS ARRENDADAS	10.368	3,5
TIERRAS A CENSO	6.121	2,0
ARENALES DE GETAFE	6.451	2,2
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>118.208</b>	<b>39,6</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	17.225	5,8
CASA CARNICERIA MAYOR	33.768	11,3
CARNICERIA ANTON MARTIN		
CASAS RED DE SAN LUIS	5.305	1,8
MESON DE LA VILLA	4.200	1,4
CASA CALLE DE LAS POSTAS	4.500	1,5
CASA DE LOS LUJANES	180	0,1
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	2,1
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>71.378</b>	<b>23,9</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	14.000	4,7
ALMOTACEN		
CONTRASTE MARCADOR	16.093	5,4
BARCA DE ARGANDA	13.783	4,6
BARCA DE MEJORADA	7.000	2,3
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>50.876</b>	<b>17,0</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	11.669	3,9
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	9.834	3,3
DEPOSITARIA GENERAL	310	0,1
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS	25.728	8,6
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>47.629</b>	<b>15,9</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	10.601	3,5
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>10.601</b>	<b>3,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>298.692</b>	

**INGRESOS DE PROPIOS, 1786**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	10.163	2,5
SOTO DEL NEGRALEJO	8.930	2,2
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	11.724	2,9
SOTO DE CUEVAS	495	0,1
SOTO DE SALMEDINA	8.400	2,1
DEHESA DE ARGANZUELA	4.156	1,0
DEHESA DE AMANIEL	132	0,0
LA TELA	99	0,0
PRADO DEL CORREGIDOR	4.940	1,2
SOTO DE MIGASCALIENTES	43.680	10,8
PRADO HERRERO	5.967	1,5
DEHESA DE LA CEPEDA	12.427	3,1
DEHESA DE LA SERENA	61.985	15,3
TIERRAS ARRENDADAS	8.007	2,0
TIERRAS A CENSO	4.105	1,0
ARENALES DE GETAFE	4.823	1,2
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>190.033</b>	<b>47,0</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	21.850	5,4
CASA CARNICERIA MAYOR	39.387	9,7
CARNICERIA ANTON MARTIN	4.068	1,0
CASAS RED DE SAN LUIS	5.120	1,3
MESON DE LA VILLA	6.300	1,6
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	0,7
CASA DE LOS LUJANES	1.880	0,5
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	1,5
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>87.805</b>	<b>21,7</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	21.333	5,3
ALMOTACEN	18.103	4,5
CONTRASTE MARCADOR	5.364	1,3
BARCA DE ARGANDA	19.404	4,8
BARCA DE MEJORADA	5.026	1,2
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>69.230</b>	<b>17,1</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	2.341	0,6
CENSOS REDIMIDOS	0	0,0
EFFECTOS DE VILLA	19.543	4,8
DEPOSITARIA GENERAL	5.533	1,4
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS	24.366	6,0
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>51.871</b>	<b>12,8</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	5.494	1,4
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>5.494</b>	<b>1,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>404.433</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1787

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	29.294	7,7
SOTO DEL NEGRALEJO	13.695	3,6
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	5,8
SOTO DE CUEVAS	2.045	0,5
SOTO DE SALMEDINA	4.200	1,1
DEHESA DE ARGANZUELA	4.312	1,1
DEHESA DE AMANIEL	3.900	1,0
LA TELA	580	0,2
PRADO DEL CORREGIDOR	1.650	0,4
SOTO DE MIGASCALIENTES	20.150	5,3
PRADO HERRERO	5.500	1,5
DEHESA DE LA CEPEDA	14.000	3,7
DEHESA DE LA SERENA	48.505	12,8
TIERRAS ARRENDADAS	5.058	1,3
TIERRAS A CENSO	6.784	1,8
ARENALES DE GETAFE	5.767	1,5
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>187.273</b>	<b>49,5</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	9.603	2,5
CASA CARNICERIA MAYOR	26.449	7,0
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.330	0,9
CASAS RED DE SAN LUIS	4.938	1,3
MESON DE LA VILLA	2.100	0,6
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	0,8
CASA DE LOS LUJANES		
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	1,6
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>55.620</b>	<b>14,7</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	33.285	8,8
ALMOTACEN	17.797	4,7
CONTRASTE MARCADOR	17.341	4,6
BARCA DE ARGANDA	9.702	2,6
BARCA DE MEJORADA	1.000	0,3
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>79.125</b>	<b>20,9</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	2.678	0,7
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	24.555	6,5
DEPOSITARIA GENERAL	7.128	1,9
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS	18.760	5,0
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>53.209</b>	<b>14,1</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	3.192	0,8
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>3.192</b>	<b>0,8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>378.419</b>	

# INGRESOS DE PROPIOS, 1788

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	10.846	3,0
SOTO DEL NEGRALEJO	10.440	2,9
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	10.109	2,8
SOTO DE CUEVAS	495	0,1
SOTO DE SALMEDINA		
DEHESA DE ARGANZUELA	4.312	1,2
DEHESA DE AMANIEL	2.700	0,7
LA TELA	314	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	1.050	0,3
SOTO DE MIGASCALIENTES	28.513	7,8
PRADO HERRERO	5.500	1,5
DEHESA DE LA CEPEDA	14.000	3,8
DEHESA DE LA SERENA	20.818	5,7
TIERRAS ARRENDADAS	6.411	1,8
TIERRAS A CENSO	6.463	1,8
ARENALES DE GETAFE	6.095	1,7
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>128.066</b>	<b>35,2</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	11.342	3,1
CASA CARNICERIA MAYOR	18.242	5,0
CARNICERIA ANTON MARTIN	1.270	0,3
CASAS RED DE SAN LUIS	5.134	1,4
MESON DE LA VILLA	4.200	1,2
CASA CALLE DE LAS POSTAS	1.500	0,4
CASA DE LOS LUJANES	3.125	0,9
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	1,7
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>51.013</b>	<b>14,0</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	78.147	21,5
ALMOTACEN	19.797	5,4
CONTRASTE MARCADOR	30.682	8,4
BARCA DE ARGANDA	4.487	1,2
BARCA DE MEJORADA	10.343	2,8
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>143.456</b>	<b>39,4</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	2.628	0,7
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	15.081	4,1
DEPOSITARIA GENERAL	4.980	1,4
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS	13.400	3,7
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>36.177</b>	<b>9,9</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	5.273	1,4
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>5.273</b>	<b>1,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>363.986</b>	

## **INGRESOS DE PROPIOS, 1789**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	13.739	3,3
SOTO DEL NEGRALEJO	10.000	2,4
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	43.666	10,5
SOTO DE CUEVAS	495	0,1
SOTO DE SALMEDINA	1.725	0,4
DEHESA DE ARGANZUELA	4.312	1,0
DEHESA DE AMANIEL	200	0,0
LA TELA	686	0,2
PRADO DEL CORREGIDOR	2.550	0,6
SOTO DE MIGASCALIENTES	4.395	1,1
PRADO HERRERO	5.500	1,3
DEHESA DE LA CEPEDA	14.000	3,4
DEHESA DE LA SERENA	44.636	10,8
TIERRAS ARRENDADAS	7.621	1,8
TIERRAS A CENSO	5.841	1,4
ARENALES DE GETAFE	5.222	1,3
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>164.588</b>	<b>39,7</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	13.409	3,2
CASA CARNICERIA MAYOR	30.762	7,4
CARNICERIA ANTON MARTIN	5.820	1,4
CASAS RED DE SAN LUIS	6.203	1,5
MESON DE LA VILLA	4.200	1,0
CASA CALLE DE LAS POSTAS	4.500	1,1
CASA DE LOS LUJANES	1.871	0,5
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	1,5
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>72.965</b>	<b>17,6</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	37.873	9,1
ALMOTACEN	17.108	4,1
CONTRASTE MARCADOR	29.629	7,2
BARCA DE ARGANDA	21.508	5,2
BARCA DE MEJORADA	12.799	3,1
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>118.917</b>	<b>28,7</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	482	0,1
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	19.966	4,8
DEPOSITARIA GENERAL	2.257	0,5
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS	13.400	3,2
DEPOSITO EN CINCO GREMIOS MAYORES	7.223	1,7
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>43.416</b>	<b>10,5</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	14.401	3,5
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>14.401</b>	<b>3,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>414.287</b>	



## **INGRESOS DE PROPIOS, 1790**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	16.955	4,3
SOTO DEL NEGRALEJO	13.861	3,5
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	5,6
SOTO DE CUEVAS	2.972	0,8
SOTO DE SALMEDINA	4.602	1,2
DEHESA DE ARGANZUELA	4.762	1,2
DEHESA DE AMANIEL	498	0,1
LA TELA	500	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	3.593	0,9
SOTO DE MIGASCALIENTES	31.459	8,0
PRADO HERRERO	5.500	1,4
DEHESA DE LA CEPEDA	14.000	3,6
DEHESA DE LA SERENA	58.551	15,0
TIERRAS ARRENDADAS	10.916	2,8
TIERRAS A CENSO	5.008	1,3
ARENALES DE GETAFE	6.716	1,7
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>201.726</b>	<b>51,5</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	15.313	3,9
CASA CARNICERIA MAYOR	29.001	7,4
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.150	0,8
CASAS RED DE SAN LUIS	5.019	1,3
MESON DE LA VILLA	4.200	1,1
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	0,8
CASA DE LOS LUJANES	1.740	0,4
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.200	1,6
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>67.623</b>	<b>17,3</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	24.506	6,3
ALMOTACEN	15.698	4,0
CONTRASTE MARCADOR	26.210	6,7
BARCA DE ARGANDA	7.219	1,8
BARCA DE MEJORADA	5.097	1,3
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>78.730</b>	<b>20,1</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	10.340	2,6
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	19.949	5,1
DEPOSITARIA GENERAL		
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS		
DEPOSITO EN CINCO GREMIOS MAYORES	7.223	1,8
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>37.600</b>	<b>9,6</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	5.942	1,5
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>5.942</b>	<b>1,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>391.621</b>	

## **INGRESOS DE PROPIOS, 1791**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	19.981	4,7
SOTO DEL NEGRALEJO	10.000	2,3
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	5,1
SOTO DE CUEVAS	500	0,1
SOTO DE SALMEDINA	3.400	0,8
DEHESA DE ARGANZUELA	1.250	0,3
DEHESA DE AMANIEL	3.590	0,8
LA TELA	550	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	1.242	0,3
SOTO DE MIGASCALIENTES	8.559	2,0
PRADO HERRERO	5.500	1,3
DEHESA DE LA CEPEDA	14.000	3,3
DEHESA DE LA SERENA	44.636	10,4
TIERRAS ARRENDADAS	20.637	4,8
TIERRAS A CENSO	6.571	1,5
ARENALES DE GETAFE	9.167	2,1
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>171.416</b>	<b>40,1</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	17.862	4,2
CASA CARNICERIA MAYOR	33.209	7,8
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.770	0,9
CASAS RED DE SAN LUIS	6.126	1,4
MESON DE LA VILLA	4.200	1,0
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	0,7
CASA DE LOS LUJANES	1.138	0,3
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.400	1,5
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>75.705</b>	<b>17,7</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	63.873	14,9
ALMOTACEN	17.768	4,2
CONTRASTE MARCADOR	30.612	7,2
BARCA DE ARGANDA	14.438	3,4
BARCA DE MEJORADA	13.992	3,3
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>140.683</b>	<b>32,9</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	1.348	0,3
CENSOS REDIMIDOS		
EFECTOS DE VILLA	20.495	4,8
DEPOSITARIA GENERAL		
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS		
DEPOSITO EN CINCO GREMIOS MAYORES	7.223	1,7
CONSIGNACION REGALIA APOSENTO	8.518	2,0
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>37.672</b>	<b>8,8</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	2.320	0,5
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>2.320</b>	<b>0,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>427.796</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1792

	TOTAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	19.300	4,7
SOTO DEL NEGRALEJO	1.900	0,5
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	5,4
SOTO DE CUEVAS	500	0,1
SOTO DE SALMEDINA	3.450	0,8
DEHESA DE ARGANZUELA	1.338	0,3
DEHESA DE AMANIEL	597	0,1
LA TELA	550	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	2.579	0,6
SOTO DE MIGASCALIENTES	18.115	4,5
PRADO HERRERO	5.500	1,4
DEHESA DE LA CEPEDA	14.000	3,4
DEHESA DE LA SERENA	13.914	3,4
TIERRAS ARRENDADAS	10.817	2,7
TIERRAS A CENSO	11.832	2,9
ARENALES DE GETAFE	6.465	1,6
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>132.690</b>	<b>32,6</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	18.334	4,5
CASA CARNICERIA MAYOR	33.379	8,2
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.800	0,9
CASAS RED DE SAN LUIS	6.797	1,7
MESON DE LA VILLA	4.200	1,0
CASA CALLE DE LAS POSTAS	3.000	0,7
CASA DE LOS LUJANES	1.595	0,4
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.400	1,6
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>77.505</b>	<b>19,0</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	67.918	16,7
ALMOTACEN	17.746	4,4
CONTRASTE MARCADOR	32.011	7,9
BARCA DE ARGANDA	21.437	5,3
BARCA DE MEJORADA	9.593	2,4
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>148.705</b>	<b>36,5</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	3.512	0,9
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	22.325	5,5
DEPOSITARIA GENERAL		
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS	13.400	3,3
DEPOSITO EN CINCO GREMIOS MAYORES	7.223	1,8
CONSIGNACION REGALIA APOSENTO	500	0,1
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>47.048</b>	<b>11,6</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	1.085	0,3
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>1.085</b>	<b>0,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>407.033</b>	

## **INGRESOS DE PROPIOS,1793**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	20.166	4,3
SOTO DEL NEGRALEJO	21.520	4,6
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	4,7
SOTO DE CUEVAS	2.444	0,5
SOTO DE SALMEDINA	2.200	0,5
DEHESA DE ARGANZUELA	5.357	1,2
DEHESA DE AMANIEL	597	0,1
LA TELA	550	0,1
PRADO DEL CORREGIDOR	750	0,2
SOTO DE MIGASCALIENTES	6.459	1,4
PRADO HERRERO	62.303	13,4
DEHESA DE LA CEPEDA	14.000	3,0
DEHESA DE LA SERENA	61.550	13,3
TIERRAS ARRENDADAS	12.754	2,8
TIERRAS A CENSO	7.736	1,7
ARENALES DE GETAFE	6.639	1,4
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>246.858</b>	<b>53,2</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	15.942	3,4
CASA CARNICERIA MAYOR	27.026	5,8
CARNICERIA ANTON MARTIN	5.050	1,1
CASAS RED DE SAN LUIS	5.494	1,2
MESON DE LA VILLA	2.100	0,5
CASA CALLE DE LAS POSTAS	1.500	0,3
CASA DE LOS LUJANES	1.775	0,4
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	6.600	1,4
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>65.487</b>	<b>14,1</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	62.637	13,5
ALMOTACEN	17.057	3,7
CONTRASTE MARCADOR	29.750	6,4
BARCA DE ARGANDA	7.000	1,5
BARCA DE MEJORADA	4.796	1,0
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>121.240</b>	<b>26,1</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	3.191	0,7
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	20.438	4,4
DEPOSITARIA GENERAL		
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS		
DEPOSITO EN CINCO GREMIOS MAYORES	4.156	0,9
CONSIGNACION REGALIA APOSENTO	1.300	0,3
MARTINIEGA DE ALCOBENDAS		
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>29.085</b>	<b>6,3</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	1.067	0,2
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>1.067</b>	<b>0,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>463.737</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1794

	TOTAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	18.900	3,9
SOTO DEL NEGRALEJO	400	0,1
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO		
SOTO DE CUEVAS	500	0,1
SOTO DE SALMEDINA	2.400	0,5
DEHESA DE ARGANZUELA	11.131	2,3
DEHESA DE AMANIEL	917	0,2
LA TELA		
PRADO DEL CORREGIDOR	2.400	0,5
SOTO DE MIGASCALIENTES	2.100	0,4
PRADO HERRERO		
DEHESA DE LA CEPEDA		
DEHESA DE LA SERENA	23.818	4,9
TIERRAS ARRENDADAS	18.372	3,8
TIERRAS A CENSO	6.422	1,3
ARENALES DE GETAFE	4.819	1,0
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>92.179</b>	<b>19,0</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	14.846	3,1
CASA CARNICERIA MAYOR	33.784	7,0
CARNICERIA ANTON MARTIN	3.150	0,6
CASAS RED DE SAN LUIS	5.561	1,1
MESON DE LA VILLA	4.200	0,9
CASA CALLE DE LAS POSTAS	4.500	0,9
CASA DE LOS LUJANES	1.595	0,3
COLISEO DE LOS CAÑOS DEL PERAL	135.000	27,8
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	7.365	1,5
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>210.001</b>	<b>43,3</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	64.473	13,3
ALMOTACEN	22.817	4,7
CONTRASTE MARCADOR	27.413	5,7
BARCA DE ARGANDA	14.000	2,9
BARCA DE MEJORADA	9.592	2,0
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>138.295</b>	<b>28,5</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	9.687	2,0
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	25.990	5,4
DEPOSITARIA GENERAL		
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS		
DEPOSITO EN CINCO GREMIOS MAYORES	6.623	1,4
CONSIGNACION REGALIA APOSENTO	1.300	0,3
MARTINEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>43.688</b>	<b>9,0</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	615	0,1
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>615</b>	<b>0,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>484.778</b>	

## **INGRESOS DE PROPIOS, 1795**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	18.900	4,8
SOTO DEL NEGRALEJO	20.090	5,1
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	5,6
SOTO DE CUEVAS		
SOTO DE SALMEDINA		
DEHESA DE ARGANZUELA	6.507	1,7
DEHESA DE AMANIEL	200	0,1
LA TELA		
PRADO DEL CORREGIDOR	750	0,2
SOTO DE MIGASCALIENTES		
PRADO HERRERO	5.500	1,4
DEHESA DE LA CEPEDA	14.000	3,6
DEHESA DE LA SERENA	23.818	6,1
TIERRAS ARRENDADAS	18.578	4,7
TIERRAS A CENSO	1.676	0,4
ARENALES DE GETAFE	6.612	1,7
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>138.464</b>	<b>35,3</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	11.483	2,9
CASA CARNICERIA MAYOR	32.853	8,4
CARNICERIA ANTON MARTIN	1.300	0,3
CASAS RED DE SAN LUIS	6.137	1,6
MESON DE LA VILLA	7.850	2,0
CASA CALLE DE LAS POSTAS	1.500	0,4
CASA DE LOS LUJANES	1.595	0,4
COLISEO DE LOS CAÑOS DEL PERAL	22.500	5,7
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	7.365	1,9
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>92.583</b>	<b>23,6</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	53.853	13,7
ALMOTACEN	20.858	5,3
CONTRASTE MARCADOR	23.657	6,0
BARCA DE ARGANDA	14.000	3,6
BARCA DE MEJORADA	18.896	4,8
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>131.264</b>	<b>33,5</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	2.956	0,8
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	17.385	4,4
DEPOSITARIA GENERAL		
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS		
DEPOSITO EN CINCO GREMIOS MAYORES	6.623	1,7
CONSIGNACION REGALIA APOSENTO	1.300	0,3
MARTINEGA DE ALCOBENDAS	88	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>28.352</b>	<b>7,2</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	1.685	0,4
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>1.685</b>	<b>0,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>392.348</b>	

## INGRESOS DE PROPIOS, 1796

	TOTAL (RS)	% DEL TOTAL
<b>1-TIERRAS</b>		
SOTO DEL PORCAL	15.308	3,2
SOTO DEL NEGRALEJO	9.080	1,9
PASTOS DEL PORCAL Y NEGRALEJO	21.833	4,6
SOTO DE CUEVAS	3.744	0,8
SOTO DE SALMEDINA	1.900	0,4
DEHESA DE ARGANZUELA	5.707	1,2
DEHESA DE AMANIEL	8.230	1,7
LA TELA	1.200	0,3
PRADO DEL CORREGIDOR	4.241	0,9
SOTO DE MIGASCALIENTES	4.183	0,9
PRADO HERRERO	5.500	1,2
DEHESA DE LA CEPEDA	14.000	2,9
DEHESA DE LA SERENA	58.604	12,3
TIERRAS ARRENDADAS	26.462	5,6
TIERRAS A CENSO	23.990	5,0
ARENALES DE GETAFE	7.796	1,6
<b>TOTAL TIERRAS</b>	<b>211.778</b>	<b>44,5</b>
<b>2- EDIFICIOS</b>		
CASA PANADERIA	17.065	3,6
CASA CARNICERIA MAYOR	32.610	6,9
CARNICERIA ANTON MARTIN	1.300	0,3
CASAS RED DE SAN LUIS	6.513	1,4
MESON DE LA VILLA	11.500	2,4
CASA CALLE DE LAS POSTAS	4.500	0,9
CASA DE LOS LUJANES	1.730	0,4
CASA DE LA CALLE DEL PRINCIPE	9.100	1,9
COLISEO DE LOS CAÑOS DEL PERAL	22.918	4,8
PUESTOS DE AGUA DE CEBADA	7.965	1,7
<b>TOTAL EDIFICIOS</b>	<b>115.201</b>	<b>24,2</b>
<b>3-RENTAS</b>		
PESO REAL Y CORREDURIA	37.522	7,9
ALMOTACEN	23.520	4,9
CONTRASTE MARCADOR	19.669	4,1
BARCA DE ARGANDA	9.664	2,0
BARCA DE MEJORADA	14.100	3,0
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>104.475</b>	<b>22,0</b>
<b>4-CENSOS Y DERECHOS</b>		
CENSOS PERPETUOS Y AL QUITAR	15.376	3,2
CENSOS REDIMIDOS		
EFFECTOS DE VILLA	21.235	4,5
DEPOSITARIA GENERAL		
ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS		
DEPOSITO EN CINCO GREMIOS MAYORES	6.623	1,4
CONSIGNACION REGALIA APOSENTO		
MARTINEGA DE ALCOBENDAS	176	0,0
<b>TOTAL CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>43.410</b>	<b>9,1</b>
<b>5-OTROS</b>		
DEUDAS	557	0,1
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>557</b>	<b>0,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>475.421</b>	

**INGRESOS DE PROPIOS, 1650-1796****VALORES MEDIOS ANUALES (RS.)**

<b>AÑOS</b>	<b>INGRESOS NOMINALES MEDIA ANUAL (RS)</b>	<b>INDICE DE PRECIOS</b>	<b>INGRESOS REALES MEDIA ANUAL (RS)</b>
<b>1650-52</b>	236.882	100,3	236.173
<b>1653</b>	192.661	94,1	204.741
<b>1656-59</b>	139.516	85,4	163.368
<b>1660-63</b>	144.202	85,5	168.657
<b>1664-65</b>	174.011	107,9	161.271
<b>1666-76</b>	175.716	69,1	254.292
<b>1677-79</b>	246.838	73,8	334.469
<b>1680-82</b>	227.803	88	258.867
<b>1685-89</b>	189.398	70,5	268.650
<b>1690-96</b>	227.419	63	360.983
<b>1697-99</b>	261.206	68,8	379.660
<b>1705-07</b>	292.721	64	457.377
<b>1708-10</b>	249.531	65,9	378.651
<b>1711-13</b>	268.163	56,1	478.009
<b>1714-16</b>	252.465	51,7	488.327
<b>1717-21</b>	280.282	42,2	664.175
<b>1722-28</b>	267.749	47,4	564.871
<b>1729-40</b>	211.481	51,1	413.857
<b>1741-44</b>	185.741	52	357.194
<b>1744-49</b>	116.143	49	237.027
<b>1750-53</b>	181.160	65,6	276.159
<b>1754-60</b>	142.800	56,4	253.191
<b>1761-65</b>	221.940	69,3	320.260
<b>1766-67</b>	175.132	80,2	218.369
<b>1768-69</b>	283.570	78,3	362.158
<b>1771</b>	247.110	66,2	373.278
<b>1774-76</b>	276.876	68	407.171
<b>1777-79</b>	325.575	71,5	455.350
<b>1780-82</b>	351.901	82,5	426.547
<b>1783-85</b>	294.999	77,8	379.176
<b>1786-88</b>	375.355	89,8	417.990
<b>1789-91</b>	411.766	89,9	458.027
<b>1792-94</b>	451.856	94,6	477.649
<b>1795-96</b>	433.887	91,3	475.232



## **INGRESOS DE PROPIOS**

VALORES NOMINALES (RS). MEDIA ANUAL						
AÑOS	CENSOS					TOTAL
	TIERRAS	EDIFICIOS	RENTAS	Y	OTROS	
				DERECHOS		
1629-31	37.780	43.869	44.571	23.389	24.555	174.164
1650-52	38.932	41.571	45.500	14.243	96.637	236.883
1.653	30.927	42.124	49.482	20.127	50.000	192.660
1657-59	31.537	36.572	39.260	16.111	16.037	139.517
1660-63	27.867	43.906	42.835	11.158	18.435	144.201
1664-65	40.843	48.483	45.366	15.179	24.139	174.010
1666-76	45.166	42.512	50.060	24.132	13.847	175.717
1677-79	54.981	59.756	44.712	75.533	11.857	246.839
1680-82	41.000	66.684	63.289	49.854	6.976	227.803
1685-89	23.425	47.996	75.032	39.319	3.626	189.398
1690-96	38.259	49.858	115.107	22.682	1.566	227.472
1697-99	38.006	65.420	126.353	28.788	2.639	261.206
1705-07	37.334	60.910	132.701	37.636		268.581
1708-10	36.635	64.530	142.075	6.300		249.540
1711-13	24.982	60.848	142.546	26.452	13.333	268.161
1714-16	22.432	60.550	140.184	22.062	7.234	252.462
1717-21	71.785	62.498	130.650	14.846	500	280.279
1722-28	37.995	64.786	132.304	21.239	10.275	266.599
1729-40	49.376	66.217	61.127	34.668	4.994	216.382
1741-44(30-IV)	51.905	67.588	52.166	11.480	14.132	197.271
1744 (1-V)-49	40.075	26.648	30.502	15.308	4.224	116.757
1751-53	81.453	39.946	43.596	21.445	16.238	202.677
1754-60	47.336	33.156	38.431	20.379	11.724	151.026
1761-65	103.481	36.476	39.111	42.657	194	221.919
1766-67	60.047	37.433	55.588	22.065		175.133
1768-69	122.771	41.457	65.097	45.926	3.400	278.651
1.771	108.304	40.388	56.379	36.455	5.484	247.010
1774-76	108.692	63.125	68.579	33.550	2.943	276.889
1777-79	138.470	73.381	78.332	33.686	1.704	325.573
1780-82	179.829	69.881	61.413	38.483	2.209	351.815
1783-85	128.058	65.906	55.733	33.526	11.457	294.680
1786-88	168.457	64.813	97.270	47.086	4.653	382.279
1789-91	167.069	64.780	120.956	37.150	4.512	394.467
1792-94	157.242	117.664	136.080	39.940	922	451.849
1795-96	175.121	103.892	117.870	35.881	1.121	433.885

**INGRESOS DE PROPIOS****VALORES REALES (RS). MEDIA ANUAL**

<b>AÑOS</b>	<b>INDICE DE PRECIOS</b>	<b>TIERRAS</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>RENTAS</b>	<b>CENSOS Y DERECHOS</b>	<b>OTROS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1629-31</b>	<b>100,8</b>	37.480	43.521	44.217	23.203	24.360	<b>172.782</b>
<b>1650-52</b>	<b>100,3</b>	38.816	41.447	45.364	14.200	96.348	<b>236.174</b>
<b>1.653</b>	<b>94,1</b>	32.866	44.765	52.584	21.389	53.135	<b>204.740</b>
<b>1657-59</b>	<b>85,4</b>	36.929	42.824	45.972	18.865	18.779	<b>163.369</b>
<b>1660-63</b>	<b>85,5</b>	32.593	51.352	50.099	13.050	21.561	<b>168.656</b>
<b>1664-65</b>	<b>107,9</b>	37.853	44.933	42.044	14.068	22.372	<b>161.270</b>
<b>1666-76</b>	<b>69,1</b>	65.363	61.522	72.446	34.923	20.039	<b>254.294</b>
<b>1677-79</b>	<b>73,8</b>	74.500	80.970	60.585	102.348	16.066	<b>334.470</b>
<b>1680-82</b>	<b>88,0</b>	46.591	75.777	71.919	56.652	7.927	<b>258.867</b>
<b>1685-89</b>	<b>70,5</b>	33.227	68.079	106.428	55.772	5.143	<b>268.650</b>
<b>1690-96</b>	<b>63,0</b>	60.729	79.140	182.710	36.003	2.486	<b>361.067</b>
<b>1697-99</b>	<b>68,8</b>	55.241	95.087	183.653	41.843	3.836	<b>379.660</b>
<b>1705-07</b>	<b>64,0</b>	58.334	95.172	207.345	58.806		<b>419.658</b>
<b>1708-10</b>	<b>65,9</b>	55.592	97.921	215.592	9.560		<b>378.665</b>
<b>1711-13</b>	<b>56,1</b>	44.531	108.463	254.093	47.152	23.766	<b>478.005</b>
<b>1714-16</b>	<b>51,7</b>	43.389	117.118	271.149	42.673	13.992	<b>488.321</b>
<b>1717-21</b>	<b>42,2</b>	170.107	148.100	309.597	35.180	1.185	<b>664.168</b>
<b>1722-28</b>	<b>47,4</b>	80.158	136.679	279.122	44.808	21.677	<b>562.445</b>
<b>1729-40</b>	<b>51,1</b>	96.626	129.583	119.622	67.843	9.773	<b>423.448</b>
<b>1741-44(30- IV)</b>	<b>52,0</b>	99.817	129.977	100.319	22.077	27.177	<b>379.367</b>
<b>1744 (I-V)- 1749</b>	<b>49,0</b>	81.786	54.384	62.249	31.241	8.620	<b>238.280</b>
<b>1751-53</b>	<b>65,6</b>	124.166	60.893	66.457	32.691	24.753	<b>308.959</b>
<b>1754-60</b>	<b>56,4</b>	83.929	58.787	68.140	36.133	20.787	<b>267.777</b>
<b>1761-65</b>	<b>69,3</b>	149.323	52.635	56.437	61.554	280	<b>320.229</b>
<b>1766-67</b>	<b>80,2</b>	74.872	46.675	69.312	27.512		<b>218.370</b>
<b>1768-69</b>	<b>78,3</b>	156.796	52.946	83.138	58.654	4.342	<b>355.876</b>
<b>1.771</b>	<b>66,2</b>	163.601	61.009	85.165	55.068	8.284	<b>373.127</b>
<b>1774-76</b>	<b>68,0</b>	159.841	92.831	100.851	49.338	4.328	<b>407.190</b>
<b>1777-79</b>	<b>71,5</b>	193.664	102.631	109.555	47.113	2.383	<b>455.347</b>
<b>1780-82</b>	<b>82,5</b>	217.975	84.704	74.440	46.646	2.678	<b>426.442</b>
<b>1783-85</b>	<b>77,8</b>	164.599	84.712	71.636	43.093	14.726	<b>378.766</b>
<b>1786-88</b>	<b>89,8</b>	187.591	72.175	108.318	52.434	5.182	<b>425.700</b>
<b>1789-91</b>	<b>89,9</b>	185.839	72.058	134.545	41.324	5.019	<b>438.784</b>
<b>1792-94</b>	<b>94,6</b>	166.218	124.381	143.848	42.220	975	<b>477.642</b>
<b>1795-96</b>	<b>91,3</b>	191.808	113.792	129.102	39.300	1.228	<b>475.230</b>

## **APENDICE 5**

### **GASTOS DE PROPIOS, SIGLOS XVII-XVIII**

La serie sobre el gasto de los Propios madrileños se basa en las Cuentas de Propios presentadas por los mayordomos, por lo que son de aplicación las consideraciones presentadas en el apéndice anterior sobre los ingresos. Sin embargo, desde 1744 los mayordomos perdieron la competencia de realizar los pagos consignados sobre los Propios directamente; sus funciones se limitaron entonces a la recaudación y gestión del patrimonio municipal. Desde esa fecha la “data” de las cuentas consiste simplemente en las cartas de pago de los caudales depositados en la Tesorería.

Además de las referencias documentales comunes con el apéndice anterior (hasta 1744) hay que añadir:

- 1744-46: AVM-S, 3-84-5
- 1760: AVM-C, 1-13-1.

**GASTOS DE PROPIOS, 1629-1631**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>MEDIA (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS ORDINARIOS	60.249	20.083	11
SALARIOS GUARDAS	20.604	6.868	4
SALARIO MAYORDOMO	8.824	2.941	2
SALARIOS EXTRAORDINARIOS	15.090	5.030	3
AYUDAS DE COSTA	12.840	4.280	2
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>117.606</b>	<b>39.202</b>	<b>21</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	61.663	20.554	11
CORPUS	8.372	2.791	1
LIMOSNAS Y SERMONES	30.426	10.142	5
TOROS Y CAÑAS	188.253	62.751	33
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>288.714</b>	<b>96.238</b>	<b>51</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION			
REPARACIONES	45.633	15.211	8
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>45.633</b>	<b>15.211</b>	<b>8</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS POR NOMINA	27.898	9.299	5
CENSOS POR LIBRANZA	930	310	0
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>28.828</b>	<b>9.609</b>	<b>5</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO	13.388	4.463	2
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>13.388</b>	<b>4.463</b>	<b>2</b>
<b>6 - OTROS</b>			
EXTRAORDINARIOS	29.888	9.963	5
GASTOS DE AYUNTAMIENTO	32.751	10.917	6
ALQUILER DE CASA	9.015	3.005	2
EMPEDRADOR	1.439	480	0
VARIOS	625	208	0
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>73.718</b>	<b>24.573</b>	<b>13</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>567.887</b>	<b>189.296</b>	

<b>SALARIOS EN ESPECIE</b>	<b>TOTAL TRIGO</b>	<b>CEBADA</b>	<b>ANUAL TRIGO</b>	<b>CEBADA</b>
ESCRIBANOS DEL AYUNTAMIENTO	72		24	
PORTEROS DEL AYUNTAMIENTO	108		36	
GUARDAS	26		9	
PROCURADOR GENERAL DE MADRID		40		13
MAYORDOMO DE PROPIOS	72	72	24	24
LIMOSNAS A CONVENTOS	800		267	0
<b>TOTAL (FGS)</b>	<b>1.078</b>	<b>112</b>	<b>359</b>	<b>37</b>

## GASTOS DE PROPIOS, 1650-1652

	<b>TOTAL</b> (RS)	<b>MEDIA</b> (RS)	<b>%</b> <b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS ORDINARIOS	54.439	18.146	7,4
SALARIOS GUARDAS	5.882	1.961	0,8
SALARIO MAYORDOMO	8.824	2.941	1,2
SALARIO PROCURADOR DE CORTES	2.740	913	0,4
SALARIOS EXTRAORDINARIOS	3.826	1.275	0,5
SALARIOS ATRASADOS	294	98	0,0
AYUDAS DE COSTA	26.841	8.947	3,6
AGUINALDOS	13.728	4.576	1,9
DEMASIAS DE CONEJOS	8.091	2.697	1,1
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>124.664</b>	<b>41.555</b>	<b>16,9</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	132.175	44.058	17,9
CORPUS	15.674	5.225	2,1
LIMOSNAS Y SERMONES	15.196	5.065	2,1
TOROS	224.506	74.835	30,4
FIESTAS DEL RETIRO	9.188	3.063	1,2
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>387.552</b>	<b>129.184</b>	<b>52,5</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	6.453	2.151	0,9
REPARACIONES	22.387	7.462	3,0
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>28.840</b>	<b>9.613</b>	<b>3,9</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	19.944	6.648	2,7
CENSOS ATRASADOS	9.053	3.018	1,2
CENSOS DE SISAS DE 6ª PARTE	29.156	9.719	3,9
CENSOS DE SISAS ORDINARIAS	20.086	6.695	2,7
CENSO SOBRE SOTO DE SALMEDINA	905	302	0,1
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>79.144</b>	<b>26.381</b>	<b>10,7</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO DEL CORREGIDOR	13.723	4.574	1,9
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>13.723</b>	<b>4.574</b>	<b>1,9</b>
<b>6 - OTROS</b>			
EXTRAORDINARIOS	86.043	28.681	11,6
GASTOS DE AYUNTAMIENTO	12.312	4.104	1,7
CAPELLANIA DE LA CARCEL	3.248	1.083	0,4
VARIOS	3.272	1.091	0,4
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>104.875</b>	<b>34.958</b>	<b>14,2</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>738.797</b>	<b>246.266</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1653**

	<b>GASTOS (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>		
SALARIOS ORDINARIOS	20.912	12
SALARIOS GUARDAS	4.118	2
SALARIO MAYORDOMO	2.941	2
SALARIOS EXTRAORDINARIOS	4.694	3
AYUDAS DE COSTA	2.980	2
AGUINALDOS	4.560	3
DEMASIAS DE CONEJOS	3.385	2
<b><i>TOTAL PERSONAL</i></b>	<b>43.590</b>	<b>25</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>		
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	24.211	14
CORPUS	6.584	4
LIMOSNAS Y SERMONES	6.838	4
TOROS ORDINARIOS	12.134	7
TOROS EXTRAORDINARIOS	11.041	6
<b><i>TOTAL FESTIVIDADES</i></b>	<b>60.808</b>	<b>35</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>		
PLEITOS Y ADMINISTRACION		
REPARACIONES	3.538	2
<b><i>TOTAL MANTENIMIENTO</i></b>	<b>3.538</b>	<b>2</b>
<b>4 - DEUDA</b>		
CENSOS	4.736	3
CENSOS ATRASADOS	3.308	2
CENSOS DE SISAS DE 6ª PARTE	11.041	6
CENSOS DE SISAS ORDINARIAS	11.700	7
CENSO SOBRE SOTO DE SALMEDINA	302	0
<b><i>TOTAL DEUDA</i></b>	<b>31.087</b>	<b>18</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>		
CASA DE APOSENTO DEL CORREGIDOR	4.412	3
<b><i>TOTAL CONTRIBUCIONES</i></b>	<b>4.412</b>	<b>3</b>
<b>6 - OTROS</b>		
EXTRAORDINARIOS	17.371	10
GASTOS DE AYUNTAMIENTO	4.425	3
CAPELLANIA DE LA CARCEL	1.460	1
VARIOS	5.049	3
<b><i>TOTAL OTROS</i></b>	<b>28.305</b>	<b>16</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>171.741</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1656-59**

	<b>TOTAL</b> <b>(RS)</b>	<b>MEDIA</b> <b>(RS)</b>	<b>%</b> <b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS ORDINARIOS	48.659	16.220	12,0
SALARIOS GUARDAS	2.353	784	0,6
SALARIOS EN ESPECIE	14.438	4.813	3,6
SALARIOS ATRASADOS	13.625	4.542	3,4
AYUDAS DE COSTA Y AGUINALDOS	17.154	5.718	4,2
DEMASIAS DE CONEJOS	11.611	3.870	2,9
<b><i>TOTAL PERSONAL</i></b>	<b>107.839</b>	<b>35.946</b>	<b>26,7</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	117.072	39.024	28,9
CORPUS	3.379	1.126	0,8
LIMOSNAS Y SERMONES	19.794	6.598	4,9
TOROS ORDINARIOS	30.558	10.186	7,6
TOROS EXTRAORDINARIOS	18.681	6.227	4,6
<b><i>TOTAL FESTIVIDADES</i></b>	<b>189.484</b>	<b>63.161</b>	<b>46,8</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	3.309	1.103	0,8
REPARACIONES	18.102	6.034	4,5
<b><i>TOTAL MANTENIMIENTO</i></b>	<b>21.411</b>	<b>7.137</b>	<b>5,3</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	17.272	5.757	4,3
CENSOS ATRASADOS			
CENSOS DE SISAS DE 6ª PARTE	20.073	6.691	5,0
CENSOS DE SISAS ORDINARIAS	5.773	1.924	1,4
<b><i>TOTAL DEUDA</i></b>	<b>43.118</b>	<b>14.373</b>	<b>10,7</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO DEL CORREGIDOR	14.873	4.958	3,7
<b><i>TOTAL CONTRIBUCIONES</i></b>	<b>14.873</b>	<b>4.958</b>	<b>3,7</b>
<b>6 - OTROS</b>			
EXTRAORDINARIOS	4.791	1.597	1,2
GASTOS DE AYUNTAMIENTO	17.154	5.718	4,2
CAPELLANIA DE LA CARCEL	5.840	1.947	1,4
<b><i>TOTAL OTROS</i></b>	<b>27.785</b>	<b>9.262</b>	<b>6,9</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>404.511</b>	<b>134.837</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1660-63**

	<b>TOTAL</b> (RS)	<b>MEDIA</b> (RS)	<b>%</b> <b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS ORDINARIOS	58.100	14.525	9,6
SALARIOS GUARDAS	3.235	809	0,5
SALARIO MAYORDOMO	11.765	2.941	2,0
SALARIOS EN ESPECIE	8.100	2.025	1,3
SALARIOS PROCURADORES DE CORTES	27.770	6.942	4,6
SALARIOS EXTRAORDINARIOS	8.042	2.011	1,3
SALARIOS ATRASADOS	5.521	1.380	0,9
AYUDAS DE COSTA	8.425	2.106	1,4
AGUINALDOS	20.154	5.039	3,3
DEMASIA DE CONEJOS	16.422	4.106	2,7
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>167.534</b>	<b>41.884</b>	<b>27,8</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	132.927	33.232	22,0
CORPUS	4.389	1.097	0,7
LIMOSNAS Y SERMONES	31.725	7.931	5,3
TOROS ORDINARIOS	72.157	18.039	12,0
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>241.197</b>	<b>60.299</b>	<b>40,0</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	4.412	1.103	0,7
REPARACIONES	77.916	19.479	12,9
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>82.328</b>	<b>20.582</b>	<b>13,7</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	17.471	4.368	2,9
CENSOS ATRASADOS	13.854	3.464	2,3
CENSOS DE SISAS DE 6ª PARTE	29.284	7.321	4,9
CENSOS DE SISAS ORDINARIAS	1.000	250	0,2
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>61.610</b>	<b>15.402</b>	<b>10,2</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO DEL CORREGIDOR	17.647	4.412	2,9
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>17.647</b>	<b>4.412</b>	<b>2,9</b>
<b>6 - OTROS</b>			
EXTRAORDINARIOS	3.575	894	0,6
GASTOS DE AYUNTAMIENTO	17.725	4.431	2,9
CAPELLANIA DE LA CARCEL	4.374	1.093	0,7
VARIOS	7.077	1.769	1,2
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>32.751</b>	<b>8.188</b>	<b>5,4</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>603.067</b>	<b>150.767</b>	



**GASTOS DE PROPIOS, 1664-65**

	<b>TOTAL</b> <b>(RS)</b>	<b>MEDIA</b> <b>(RS)</b>	<b>%</b> <b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS ORDINARIOS	33.181	16.590	9,1
SALARIO MAYORDOMO	5.882	2.941	1,6
SALARIOS EN ESPECIE	3.672	1.836	1,0
SALARIOS PROCURADORES DE CORTES	5.638	2.819	1,5
SALARIOS EXTRAORDINARIOS	3.066	1.533	0,8
SALARIOS ATRASADOS	10.004	5.002	2,7
AYUDAS DE COSTA	3.346	1.673	0,9
AGUINALDOS	11.778	5.889	3,2
DEMASIA DE CONEJOS	9.853	4.926	2,7
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>86.419</b>	<b>43.209</b>	<b>23,6</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	97.204	48.602	26,6
CORPUS	1.798	899	0,5
LIMOSNAS Y SERMONES	10.906	5.453	3,0
TOROS ORDINARIOS	47.357	23.679	12,9
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>157.265</b>	<b>78.632</b>	<b>43,0</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	2.206	1.103	0,6
REPARACIONES	40.492	20.246	11,1
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>42.697</b>	<b>21.349</b>	<b>11,7</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	8.024	4.012	2,2
CENSOS ATRASADOS	15.251	7.625	4,2
CENSOS DE SISAS DE 6ª PARTE	17.743	8.872	4,8
CENSOS DE SISAS ORDINARIAS			
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>41.018</b>	<b>20.509</b>	<b>11,2</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO DEL CORREGIDOR	9.424	4.712	2,6
ALCABALA DEL CONTRASTE MARCADOR	560	280	0,2
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>9.984</b>	<b>4.992</b>	<b>2,7</b>
<b>6 - OTROS</b>			
EXTRAORDINARIOS	1.750	875	0,5
GASTOS DE AYUNTAMIENTO Y ESTRADOS	17.344	8.672	4,7
CAPELLANIA DE LA CARCEL	4.388	2.194	1,2
VARIOS	5.021	2.510	1,4
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>28.503</b>	<b>14.251</b>	<b>7,8</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>365.885</b>	<b>182.943</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1666-76**

	<b>TOTAL</b> <b>(RS)</b>	<b>MEDIA</b> <b>(RS)</b>	<b>%</b> <b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIO CORREGIDOR	51.594	4.586	2,9
SALARIOS REGIDORES	25.882	2.301	1,4
SALARIOS EMPLEADOS	126.335	11.230	7,0
SALARIO MAYORDOMO	39.771	3.535	2,2
SALARIOS EN ESPECIE	15.480	1.376	0,9
SALARIOS PROCURADORES DE CORTES	4.549	404	0,3
SALARIOS EXTRAORDINARIOS	31.786	2.825	1,8
SALARIOS ATRASADOS	6.159	547	0,3
AYUDAS DE COSTA Y AGUINALDOS	94.394	8.391	5,2
DEMASIA DE CONEJOS	64.390	5.724	3,6
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>460.339</b>	<b>40.919</b>	<b>25,5</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	484.027	43.025	26,9
CORPUS	8.576	762	0,5
LIMOSNAS Y SERMONES	74.151	6.591	4,1
TOROS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	76.186	6.772	4,2
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>642.940</b>	<b>57.150</b>	<b>35,7</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	13.200	1.173	0,7
REPARACIONES	211.026	18.758	11,7
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>224.226</b>	<b>19.931</b>	<b>12,4</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	117.650	10.458	6,5
CENSOS ATRASADOS	65.723	5.842	3,6
CENSOS DE SISAS DE 6ª PARTE	117.109	10.410	6,5
CENSOS DE SISAS ORDINARIAS	3.701	329	0,2
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>304.183</b>	<b>27.038</b>	<b>16,9</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO DEL CORREGIDOR	51.594	4.586	2,9
ALCABALA DEL CONTRASTE MARCADOR			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>51.594</b>	<b>4.586</b>	<b>2,9</b>
<b>6 - OTROS</b>			
EXTRAORDINARIOS			
CAPELLANIA DE LA CARCEL	16.060	1.428	0,9
GASTOS DE AYUNTAMIENTO Y ESTRADOS	85.720	7.620	4,8
VARIOS	17.339	1.541	1,0
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>119.119</b>	<b>10.588</b>	<b>6,6</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>1.802.402</b>	<b>160.214</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1677-79**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>MEDIA (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS ORDINARIOS	65.282	21.761	9,6
SALARIO MAYORDOMO	8.824	2.941	1,3
SALARIOS EN ESPECIE	5.022	1.674	0,7
SALARIOS PROCURADORES DE CORTES			
SALARIOS EXTRAORDINARIOS			
SALARIOS ATRASADOS			
AYUDAS DE COSTA	12.678	4.226	1,9
AGUINALDOS	15.634	5.211	2,3
DEMASIA DE CONEJOS	23.639	7.880	3,5
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>131.078</b>	<b>43.693</b>	<b>19,2</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	136.156	45.385	19,9
CORPUS	17.667	5.889	2,6
LIMOSNAS Y SERMONES	22.816	7.605	3,3
TOROS ORDINARIOS	25.625	8.542	3,8
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>202.264</b>	<b>67.421</b>	<b>29,6</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	3.309	1.103	0,5
REPARACIONES	83.224	27.741	12,2
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>86.533</b>	<b>28.844</b>	<b>12,7</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	138.327	46.109	20,2
CENSOS ATRASADOS			
CENSOS DE SISAS DE 6ª PARTE	31.390	10.463	4,6
CENSOS DE SISAS ORDINARIAS			
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>169.717</b>	<b>56.572</b>	<b>24,8</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO DEL CORREGIDOR	13.381	4.460	2,0
ALCABALA DEL CONTRASTE MARCADOR			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>13.381</b>	<b>4.460</b>	<b>2,0</b>
<b>6 - OTROS</b>			
EXTRAORDINARIOS			
CAPELLANIA DE LA CARCEL	4.380	1.460	0,6
GASTOS DE AYUNTAMIENTO Y ESTRADOS	70.597	23.532	10,3
VARIOS	5.306	1.769	0,8
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>80.283</b>	<b>26.761</b>	<b>11,8</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>683.256</b>	<b>227.752</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1680-82**

	<b>TOTAL</b> <b>(RS)</b>	<b>MEDIA</b> <b>(RS)</b>	<b>%</b> <b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS ORDINARIOS	51.085	17.028	8,1
SALARIO MAYORDOMO	8.824	2.941	1,4
SALARIOS EN ESPECIE	5.958	1.986	0,9
SALARIOS EXTRAORDINARIOS			
SALARIOS ATRASADOS			
PILON DE AZUCAR EN NAVIDAD	47.850	15.950	7,6
AYUDAS DE COSTA Y AGUINALDOS	17.264	5.755	2,7
DEMASIA DE CONEJOS	17.037	5.679	2,7
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>148.017</b>	<b>49.339</b>	<b>23,4</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	137.502	45.834	21,7
CORPUS			
LIMOSNAS Y SERMONES	15.674	5.225	2,5
TOROS ORDINARIOS	36.777	12.259	5,8
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>189.953</b>	<b>63.318</b>	<b>30,0</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	3.309	1.103	0,5
REPARACIONES	34.712	11.571	5,5
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>38.021</b>	<b>12.674</b>	<b>6,0</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	141.090	47.030	22,3
CENSOS ATRASADOS	6.669	2.223	1,1
CENSOS DE SISAS DE 6ª PARTE	37.069	12.356	5,9
CENSOS EN OTRAS SISAS	4.072	1.357	0,6
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>188.899</b>	<b>62.966</b>	<b>29,9</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO DEL CORREGIDOR	8.800	2.933	1,4
ALCABALA DEL CONTRASTE MARCADOR			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>8.800</b>	<b>2.933</b>	<b>1,4</b>
<b>6 - OTROS</b>			
EXTRAORDINARIOS			
GASTOS DE AYUNTAMIENTO Y ESTRADOS	44.474	14.825	7,0
CAPELLANIA DE LA CARCEL	4.380	1.460	0,7
BAJA DE MONEDA	3.250	1.083	0,5
VARIOS	6.703	2.234	1,1
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>58.807</b>	<b>19.602</b>	<b>9,3</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>632.497</b>	<b>210.832</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1685-89**

	<b>TOTAL (RS)</b>	<b>MEDIA (RS)</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS ORDINARIOS	90.876	18.175	11,7
SALARIO MAYORDOMO	13.659	2.732	1,8
SALARIOS EN ESPECIE	7.762	1.552	1,0
SALARIOS EXTRAORDINARIOS			
SALARIOS ATRASADOS	1.734	347	0,2
PILON DE AZUCAR EN NAVIDAD			
AYUDAS DE COSTA	3.740	748	0,5
AGUINALDOS	24.177	4.835	3,1
DEMASIA DE CONEJOS	18.801	3.760	2,4
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>160.750</b>	<b>32.150</b>	<b>20,8</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	207.572	41.514	26,8
CORPUS			
LIMOSNAS Y SERMONES	24.370	4.874	3,1
TOROS ORDINARIOS	62.946	12.589	8,1
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>294.887</b>	<b>58.977</b>	<b>38,1</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	5.780	1.156	0,7
REPARACIONES	70.014	14.003	9,0
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>75.794</b>	<b>15.159</b>	<b>9,8</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	125.146	25.029	16,2
CENSOS ATRASADOS			
CENSOS DE SISAS DE 6ª PARTE	12.755	2.551	1,6
CENSOS EN OTRAS SISAS			
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>137.901</b>	<b>27.580</b>	<b>17,8</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO DEL CORREGIDOR	17.600	3.520	2,3
ALCABALA DEL CONTRASTE MARCADOR			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>17.600</b>	<b>3.520</b>	<b>2,3</b>
<b>6 - OTROS</b>			
EXTRAORDINARIOS			
GASTOS DE AYUNTAMIENTO Y ESTRADOS	69.765	13.953	9,0
CAPELLANIA DE LA CARCEL	8.030	1.606	1,0
PATRONATO DE ISABEL DE GALVEZ	5.283	1.057	0,7
BAJA DE MONEDA			
VARIOS	3.790	758	0,5
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>86.868</b>	<b>17.374</b>	<b>11,2</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>773.800</b>	<b>154.760</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1690-96**

	<b>TOTAL</b> <b>(RS)</b>	<b>MEDIA</b> <b>(RS)</b>	<b>%</b> <b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS ORDINARIOS	121.063	17.295	8,4
SALARIO MAYORDOMO	20.588	2.941	1,4
SALARIOS EN ESPECIE	12.096	1.728	0,8
SALARIOS EXTRAORDINARIOS			
SALARIOS ATRASADOS			
AYUDAS DE COSTA	3.300	471	0,2
AGUINALDOS	34.062	4.866	2,4
DEMASIA DE CONEJOS	24.923	3.560	1,7
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>216.031</b>	<b>30.862</b>	<b>15,0</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	285.970	40.853	19,8
CORPUS			
LIMOSNAS Y SERMONES	41.936	5.991	2,9
TOROS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	68.282	9.755	4,7
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>396.187</b>	<b>56.598</b>	<b>27,5</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	9.931	1.419	0,7
REPARACIONES	482.476	68.925	33,5
COMISION DE APEOS DE TIERRAS	9.931	1.419	0,7
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>502.339</b>	<b>71.763</b>	<b>34,9</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	162.775	23.254	11,3
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>162.775</b>	<b>23.254</b>	<b>11,3</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO DEL CORREGIDOR	30.862	4.409	2,1
ALCABALA DEL CONTRASTE MARCADOR			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>30.862</b>	<b>4.409</b>	<b>2,1</b>
<b>6 - OTROS</b>			
EXTRAORDINARIOS			
GASTOS DE AYUNTAMIENTO Y ESTRADOS	106.249	15.178	7,4
CAPELLANIA DE LA CARCEL	8.760	1.251	0,6
PATRONATO DE ISABEL DE GALVEZ	13.218	1.888	0,9
VARIOS	4.276	611	0,3
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>132.503</b>	<b>18.929</b>	<b>9,2</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>1.440.697</b>	<b>205.814</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1697-99**

	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>	<b>%</b>
	<b>(RS)</b>	<b>(RS)</b>	<b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIO CORREGIDOR	13.933	4.644	2,2
SALARIOS REGIDORES	7.026	2.342	1,1
SALARIOS EMPLEADOS	27.296	9.099	4,4
SALARIO MAYORDOMO	8.977	2.992	1,4
SALARIOS EN ESPECIE	5.225	1.742	0,8
SALARIOS ATRASADOS	13.602	4.534	2,2
AYUDAS DE COSTA	4.480	1.493	0,7
AGUINALDOS	14.978	4.993	2,4
DEMASIA DE CONEJOS	12.294	4.098	2,0
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>107.811</b>	<b>35.937</b>	<b>17,2</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS (FIESTAS DE SANTOS)	122.966	40.989	19,6
CORPUS			
LIMOSNAS Y SERMONES	3.216	1.072	0,5
TOROS ORDINARIOS	31.105	10.368	5,0
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>157.287</b>	<b>52.429</b>	<b>25,1</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	7.721	2.574	1,2
REPARACIONES	133.105	44.368	21,2
APEOS Y DILIGENCIAS DE TIERRAS	22.588	7.529	3,6
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>163.413</b>	<b>54.471</b>	<b>26,1</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	26.126	8.709	4,2
CENSOS ATRASADOS			
CENSOS DE SISAS DE 6ª PARTE	32.067	10.689	5,1
CENSOS DE SISAS ORDINARIAS	3.309	1.103	0,5
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>61.502</b>	<b>20.501</b>	<b>9,8</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO DEL CORREGIDOR	13.972	4.657	2,2
CASA DE APOSENTO EDIFICIOS DE PROPIOS	13.209	4.403	2,1
ALCABALA DEL CONTRASTE MARCADOR	254	85	0,0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>27.435</b>	<b>9.145</b>	<b>4,4</b>
<b>6 - OTROS</b>			
EXTRAORDINARIOS	66.000	22.000	10,5
CAPELLANIA DE LA CARCEL	4.380	1.460	0,7
GASTOS DE AYUNTAMIENTO Y ESTRADOS	36.876	12.292	5,9
MEMORIAS DE ISABEL DE GALVEZ	2.376	792	0,4
VARIOS	220	73	0,0
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>109.852</b>	<b>36.617</b>	<b>17,5</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>627.299</b>	<b>209.100</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1705-1707**

	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>	<b>%</b>
	<b>(RS)</b>	<b>(RS)</b>	<b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS	84.683	28.228	11,2
SALARIOS ATRASADOS	5.976	1.992	0,8
AGUINALDOS Y AYUDAS DE COSTA	19.772	6.591	2,6
DEMASIAS DE CONEJOS	11.549	3.850	1,5
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>121.980</b>	<b>40.660</b>	<b>16,1</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS	146.851	48.950	19,4
EXTRAORDINARIAS			
TOROS	22.769	7.590	3,0
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>169.620</b>	<b>56.540</b>	<b>22,4</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	65.854	21.951	8,7
REPARACIONES	72.237	24.079	9,5
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>138.091</b>	<b>46.030</b>	<b>18,2</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	25.621	8.540	3,4
CENSOS ATRASADOS	28.671	9.557	3,8
EMPEÑO DEL PESO DE LA HARINA	236.560	78.853	31,2
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>290.852</b>	<b>96.951</b>	<b>38,3</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO	9.099	3.033	1,2
ALCABALA DEL CONTRASTE	140	47	0,0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>9.239</b>	<b>3.080</b>	<b>1,2</b>
<b>6 - OTROS</b>			
CAPELLANIA DE LA CARCEL	5.840	1.947	0,8
MEMORIAS ISABEL DE GALVEZ	6.519	2.173	0,9
GASTOS MENORES	16.322	5.441	2,2
COMPRA DE SOLARES			
CAPITAL DADO A CENSO			
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>28.681</b>	<b>9.560</b>	<b>3,8</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>758.463</b>	<b>252.821</b>	



**GASTOS DE PROPIOS, 1708-1710**

	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>	<b>%</b>
	<b>(RS)</b>	<b>(RS)</b>	<b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS	96.301	32.100	10,8
SALARIOS ATRASADOS	16.117	5.372	1,8
AGUINALDOS Y AYUDAS DE COSTA	14.638	4.879	1,6
DEMASIAS DE CONEJOS	10.247	3.416	1,1
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>137.303</b>	<b>45.768</b>	<b>15,3</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS	157.590	52.530	17,6
EXTRAORDINARIAS			
TOROS	22.518	7.506	2,5
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>180.108</b>	<b>60.036</b>	<b>20,1</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	81.155	27.052	9,1
REPARACIONES	97.486	32.495	10,9
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>178.641</b>	<b>59.547</b>	<b>19,9</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	32.511	10.837	3,6
CENSOS ATRASADOS	16.418	5.473	1,8
EMPEÑO DEL PESO DE LA HARINA	286.632	95.544	32,0
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>335.561</b>	<b>111.854</b>	<b>37,5</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO	8.523	2.841	1,0
ALCABALA DEL CONTRASTE	210	70	0,0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>8.733</b>	<b>2.911</b>	<b>1,0</b>
<b>6 - OTROS</b>			
CAPELLANIA DE LA CARCEL	4.377	1.459	0,5
MEMORIAS ISABEL DE GALVEZ	2.647	882	0,3
GASTOS MENORES	12.262	4.087	1,4
COMPRA DE SOLARES	36.133	12.044	4,0
CAPITAL DADO A CENSO			
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>55.419</b>	<b>18.473</b>	<b>6,2</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>895.765</b>	<b>298.588</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1711-1713**

	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>	<b>%</b>
	<b>(RS)</b>	<b>(RS)</b>	<b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS	86.770	28.923	11,1
SALARIOS ATRASADOS	1.135	378	0,1
AGUINALDOS Y AYUDAS DE COSTA	15.118	5.039	1,9
DEMASIAS DE CONEJOS	12.996	4.332	1,7
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>116.019</b>	<b>38.673</b>	<b>14,9</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS	154.277	51.426	19,8
EXTRAORDINARIAS	81.543	27.181	10,5
TOROS	22.518	7.506	2,9
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>258.338</b>	<b>86.113</b>	<b>33,2</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	51.253	17.084	6,6
REPARACIONES	108.962	36.321	14,0
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>160.215</b>	<b>53.405</b>	<b>20,6</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	20.104	6.701	2,6
CENSOS ATRASADOS	5.653	1.884	0,7
EMPEÑO DEL PESO DE LA HARINA	169.939	56.646	21,8
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>195.696</b>	<b>65.232</b>	<b>25,1</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO	7.195	2.398	0,9
ALCABALA DEL CONTRASTE	210	70	0,0
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>7.405</b>	<b>2.468</b>	<b>1,0</b>
<b>6 - OTROS</b>			
CAPELLANIA DE LA CARCEL	4.380	1.460	0,6
MEMORIAS ISABEL DE GALVEZ	1.382	461	0,2
GASTOS MENORES	12.929	4.310	1,7
COMPRA DE SOLARES			
CAPITAL DADO A CENSO	22.000	7.333	2,8
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>40.691</b>	<b>13.564</b>	<b>5,2</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>778.364</b>	<b>259.455</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1714-1716**

	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>	<b>%</b>
	<b>(RS)</b>	<b>(RS)</b>	<b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS	124.822	41.607	16,3
SALARIOS ATRASADOS	1.620	540	0,2
AGUINALDOS Y AYUDAS DE COSTA	13.998	4.666	1,8
DEMASIAS DE CONEJOS	4.225	1.408	0,6
<b><i>TOTAL PERSONAL</i></b>	<b>144.665</b>	<b>48.222</b>	<b>18,9</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS	124.975	41.658	16,3
EXTRAORDINARIAS	38.512	12.837	5,0
TOROS	7.506	2.502	1,0
<b><i>TOTAL FESTIVIDADES</i></b>	<b>170.993</b>	<b>56.998</b>	<b>22,4</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	52.863	17.621	6,9
REPARACIONES	85.949	28.650	11,2
<b><i>TOTAL MANTENIMIENTO</i></b>	<b>138.812</b>	<b>46.271</b>	<b>18,1</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	15.580	5.193	2,0
CENSOS ATRASADOS	28.134	9.378	3,7
EMPEÑO DEL PESO DE LA HARINA	245.190	81.730	32,1
<b><i>TOTAL DEUDA</i></b>	<b>288.904</b>	<b>96.301</b>	<b>37,8</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO	4.072	1.357	0,5
ALCABALA DEL CONTRASTE	70	23	0,0
<b><i>TOTAL CONTRIBUCIONES</i></b>	<b>4.142</b>	<b>1.381</b>	<b>0,5</b>
<b>6 - OTROS</b>			
CAPELLANIA DE LA CARCEL	2.190	730	0,3
MEMORIAS ISABEL DE GALVEZ	2.132	711	0,3
GASTOS MENORES	13.164	4.388	1,7
COMPRA DE SOLARES			
CAPITAL DADO A CENSO			
<b><i>TOTAL OTROS</i></b>	<b>17.486</b>	<b>5.829</b>	<b>2,3</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>765.002</b>	<b>255.001</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1717-1721**

	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>	<b>%</b>
	<b>(RS)</b>	<b>(RS)</b>	<b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS	317.473	63.495	23,8
SALARIOS ATRASADOS	15.271	3.054	1,1
AGUINALDOS Y AYUDAS DE COSTA	12.769	2.554	1,0
DEMASIAS DE CONEJOS			
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>345.513</b>	<b>69.103</b>	<b>25,9</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS	195.495	39.099	14,7
EXTRAORDINARIAS			
TOROS			
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>195.495</b>	<b>39.099</b>	<b>14,7</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	65.714	13.143	4,9
REPARACIONES	348.780	69.756	26,2
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>414.494</b>	<b>82.899</b>	<b>31,1</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	31.027	6.205	2,3
CENSOS ATRASADOS	24.057	4.811	1,8
EMPEÑO DEL PESO DE LA HARINA	269.312	53.862	20,2
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>324.396</b>	<b>64.879</b>	<b>24,4</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO	3.500	700	0,3
ALCABALA DEL CONTRASTE	420	84	0,0
VALIMIENTOS	7.178	1.436	0,5
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>11.098</b>	<b>2.220</b>	<b>0,8</b>
<b>6 - OTROS</b>			
CAPELLANIA DE LA CARCEL	8.760	1.752	0,7
EJECUCIONES Y VERDUGO	740	148	0,1
MEMORIAS ISABEL DE GALVEZ	3.356	671	0,3
GASTOS MENORES	28.159	5.632	2,1
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>41.015</b>	<b>8.203</b>	<b>3,1</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>1.332.011</b>	<b>266.402</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1722-1728**

	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>	<b>%</b>
	<b>(RS)</b>	<b>(RS)</b>	<b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS	398.565	56.938	22,3
SALARIOS ATRASADOS			
AGUINALDOS Y AYUDAS DE COSTA	17.482	2.497	1,0
DEMASIAS DE CONEJOS			
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>416.047</b>	<b>59.435</b>	<b>23,3</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS	274.277	39.182	15,4
EXTRAORDINARIAS	468.225	66.889	26,3
TOROS	9.967	1.424	0,6
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>752.469</b>	<b>107.496</b>	<b>42,2</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS Y ADMINISTRACION	30.579	4.368	1,7
REPARACIONES	202.333	28.905	11,3
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>232.912</b>	<b>33.273</b>	<b>13,1</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	64.520	9.217	3,6
CENSOS ATRASADOS	37.860	5.409	2,1
EMPEÑO DEL PESO DE LA HARINA			
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>102.380</b>	<b>14.626</b>	<b>5,7</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO			
ALCABALA DEL CONTRASTE	490	70	0,0
VALIMIENTOS			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>490</b>	<b>70</b>	<b>0,0</b>
<b>6 - OTROS</b>			
CAPELLANIA DE LA CARCEL	10.950	1.564	0,6
EJECUCIONES Y VERDUGO	4.993	713	0,3
MEMORIAS ISABEL DE GALVEZ	7.712	1.102	0,4
GASTOS MENORES	82.899	11.843	4,6
GASTOS EXTRAORDINARIOS	129.231	18.462	7,2
ANTICIPOS	43.350	6.193	2,4
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>279.135</b>	<b>39.876</b>	<b>15,7</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>1.783.433</b>	<b>254.776</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1729-1740**

	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>	<b>%</b>
	<b>(RS)</b>	<b>(RS)</b>	<b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS	775.047	64.587	29,6
SALARIOS ATRASADOS			
AGUINALDOS Y AYUDAS DE COSTA			
DEMASIAS DE CONEJOS			
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>775.047</b>	<b>64.587</b>	<b>29,6</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS Y EXTRAORDINARIAS	635.356	52.946	24,3
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>635.356</b>	<b>52.946</b>	<b>24,3</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS	15.694	1.308	0,6
ADMINISTRACION	55.115	4.593	2,1
REPARACIONES	268.482	22.374	10,3
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>339.291</b>	<b>28.274</b>	<b>13,0</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	87.811	7.318	3,4
CENSOS ATRASADOS	41.602	3.467	1,6
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>129.413</b>	<b>10.784</b>	<b>4,9</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO			
ALCABALA DEL CONTRASTE	4.668	389	0,2
VALIMIENTOS			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>4.668</b>	<b>389</b>	<b>0,2</b>
<b>6 - OTROS</b>			
CAPELLANIA DE LA CARCEL	16.790	1.399	0,6
EJECUCIONES Y VERDUGO	17.039	1.420	0,7
MEMORIAS ISABEL DE GALVEZ	12.056	1.005	0,5
GASTOS MENORES	185.348	15.446	7,1
GASTOS EXTRAORDINARIOS	81.882	6.824	3,1
ANTICIPOS	420.963	35.080	16,1
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>734.078</b>	<b>61.173</b>	<b>28,0</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>2.617.853</b>	<b>218.154</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1741-1744 (30 ABRIL)**

	<b>TOTAL</b>	<b>MEDIA</b>	<b>%</b>
	<b>(RS)</b>	<b>(RS)</b>	<b>DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>			
SALARIOS	170.003	51.516	30,6
SALARIOS ATRASADOS			
AGUINALDOS Y AYUDAS DE COSTA			
DEMASIAS DE CONEJOS			
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>170.003</b>	<b>51.516</b>	<b>30,6</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>			
RELIGIOSAS Y EXTRAORDINARIAS	215.511	65.306	38,8
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>215.511</b>	<b>65.306</b>	<b>38,8</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>			
PLEITOS			
ADMINISTRACION	22.460	6.806	4,0
REPARACIONES	75.175	22.780	13,5
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>97.635</b>	<b>29.586</b>	<b>17,6</b>
<b>4 - DEUDA</b>			
CENSOS	23.778	7.205	4,3
CENSOS ATRASADOS	1.405	426	0,3
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>25.183</b>	<b>7.631</b>	<b>4,5</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>			
CASA DE APOSENTO			
ALCABALA DEL CONTRASTE	760	230	0,1
VALIMIENTOS			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>760</b>	<b>230</b>	<b>0,1</b>
<b>6 - OTROS</b>			
CAPELLANIA DE LA CARCEL	2.920	885	0,5
EJECUCIONES Y VERDUGO	4.054	1.228	0,7
MEMORIAS ISABEL DE GALVEZ	2.132	646	0,4
GASTOS MENORES	18.227	5.523	3,3
GASTOS EXTRAORDINARIOS	15.914	4.822	2,9
ANTICIPOS	2.751	834	0,5
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>45.998</b>	<b>13.939</b>	<b>8,3</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>555.090</b>	<b>168.209</b>	

# **GASTOS DE PROPIOS, 1744 (DESDE 1 MAYO) - 1746**

	<b>1744</b>		<b>1745</b>		<b>1746</b>	
	(DESDE 1 MAYO)	% DEL TOTAL		% DEL TOTAL		% DEL TOTAL
<b>1 - PERSONAL</b>						
CORREGIDOR	5.844	11,0	10.002	8,0	5.789	6,3
REGIDORES	3.243	6,1	17.540	14,1	12.515	13,6
EMPLEADOS	4.667	8,8	15.993	12,9	15.993	17,4
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>13.754</b>	<b>25,8</b>	<b>43.535</b>	<b>35,0</b>	<b>34.297</b>	<b>37,3</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>						
RELIGIOSAS Y EXTRAORDINARIAS	11.601	21,8	16.771	13,5	18.579	20,2
TOROS					17.062	18,6
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>11.601</b>	<b>21,8</b>	<b>16.771</b>	<b>13,5</b>	<b>35.641</b>	<b>38,8</b>
<b>3 - GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>22.575</b>	<b>42,4</b>	<b>61.334</b>	<b>49,3</b>	<b>20.873</b>	<b>22,7</b>
<b>4 - RESTO</b>	<b>5.338</b>	<b>10,0</b>	<b>2.724</b>	<b>2,2</b>	<b>1.086</b>	<b>1,2</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>53.268</b>		<b>124.364</b>		<b>91.897</b>	



**GASTOS DE PROPIOS, 1751-1760**

	<b>1.751</b>	<b>% DEL TOTAL</b>	<b>1.760</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>				
SALARIOS	63.169	30,2	61.187	35,1
OFICINAS DE CAUSA PUBLICA	2.426	1,2		
AYUDAS DE COSTA	4.482	2,1	14.430	8,3
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>70.077</b>	<b>33,5</b>	<b>75.617</b>	<b>43,3</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>				
RELIGIOSAS	58.185	27,8	52.137	29,9
EXTRAORDINARIAS	2.803	1,3		
<b>TOTAL FESTIVIDADES</b>	<b>60.988</b>	<b>29,1</b>	<b>52.137</b>	<b>29,9</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>				
PLEITOS Y ADMINISTRACION	27.154	13,0		
REPARACIONES	15.692	7,5		
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>42.846</b>	<b>20,5</b>	<b>20.000</b>	<b>11,5</b>
<b>4 - DEUDA</b>				
CENSOS	16.539	7,9	13.394	7,7
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>16.539</b>	<b>7,9</b>	<b>13.394</b>	<b>7,7</b>
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>				
ALCABALA DE LAS CABALLERIZAS	150	0,1	2.714	1,6
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>	<b>150</b>	<b>0,1</b>	<b>2.714</b>	<b>1,6</b>
<b>6 - OTROS</b>				
CAPELLANIA DE LA CARCEL				
EJECUCIONES Y VERDUGO	4.483	2,1	1.408	0,8
GASTOS MENORES	14.144	6,8	9.263	5,3
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>18.627</b>	<b>8,9</b>	<b>10.671</b>	<b>6,1</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>209.227</b>		<b>174.533</b>	

**GASTOS DE PROPIOS, 1766 (REGLAMENTO)**

	<b>GASTOS</b>	<b>% DEL TOTAL</b>
<b>1 - PERSONAL</b>		
CORREGIDOR	11.100	7,5
REGIDORES	16.326	11,1
EMPLEADOS	59.705	40,5
<b><i>TOTAL PERSONAL</i></b>	<b>87.131</b>	<b>59,2</b>
<b>2 - FESTIVIDADES</b>		
RELIGIOSAS	21.204	14,4
EXTRAORDINARIAS		
<b><i>TOTAL FESTIVIDADES</i></b>	<b>21.204</b>	<b>14,4</b>
<b>3 - MANTENIMIENTO</b>		
PLEITOS Y ADMINISTRACION		
REPARACIONES		
<b><i>TOTAL MANTENIMIENTO</i></b>	<b>30.000</b>	<b>20,4</b>
<b>4 - DEUDA</b>		
CENSOS	REDIMIDOS	
<b><i>TOTAL DEUDA</i></b>		
<b>5 - CONTRIBUCIONES</b>		
ALCABALA DE LAS CABALLERIZAS	150	0,1
<b><i>TOTAL CONTRIBUCIONES</i></b>	<b>150</b>	<b>0,1</b>
<b>6 - OTROS</b>		
CAPELLANIA DE LA CARCEL	1.460	1,0
EJECUCIONES Y VERDUGO	148	0,1
GASTOS MENORES	7.183	4,9
<b><i>TOTAL OTROS</i></b>	<b>8.791</b>	<b>6,0</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>147.276</b>	

## BIBLIOGRAFIA

AGUILERA KLINK, F.- “¿La tragedia de la propiedad común o la tragedia de la malinterpretación en economía?”, *Agricultura y Sociedad*, nº 61 (1991), págs. 157-181

AGUNDE FERNANDEZ, A.- *Viaje a la Serena en 1.791. Historia de una comarca extremeña escrita tras los pasos del magistrado Cunebles*, Cáceres, 1.955

ALARCON Y OLMOS, A.- *Expediente causado en el Consejo a representación de la Sala de Provincia de él, sobre fomentar los edificios en la Corte, y reducir a la Ley, y equidad los Contratos enphytéuticos, o Censo perpetuos, con que están gravados los más de los solares públicos de Madrid y sobre la reducción de censos*, Madrid, 1.767

ALMAZAN, duque de- *Historia de la Montería en España*, Madrid, 1934

ALONSO-GUILAUME, A.- “Justice royale et oligarchies urbaines en Castille a travers les pétitions des Cortes (1518-1538)”, *Melanges de la Casa de Velásquez*, t. XXV (1989), págs. 103-120

ALTAMIRA Y CREVEA, R.- *Historia de la propiedad comunal*, Madrid, 1890 (reed. Madrid, 1981)

ALVAR EZQUERRA, A.- “Control social, cuestionarios, riqueza y pobreza en el último cuarto del siglo XVI. Algunas noticias referidas al mundo rural madrileño”, *Hispania*, t. XLVIII, nº 170 (1988), págs. 875-907

ALVAR EZQUERRA, A.- *El nacimiento de una capital europea. Madrid entre 1561 y 1606*, Madrid, 1989

ALVAR EZQUERRA, A.- *Felipe II, la Corte y Madrid en 1561*, Madrid, 1985

ALVAR EZQUERRA, A.- *Hacienda Real y mundo campesino con Felipe II*, Madrid, 1990

ALVAR EZQUERRA, A., comp.- *Visión histórica de Madrid (Siglos XVI al XX)*, Madrid, 1991

ALVAREZ BORGE, I.- *Monarquía feudal y organización territorial. Alfoces y merindades en Castilla (siglos X-XIV)*, Madrid, 1993

ALVAREZ CIENFUEGOS, I.- "Notas para el estudio de la formación de las Haciendas municipales", en *Homenaje a D. Ramón Carande*, Madrid, 1963, tomo II, págs. 3-18

ALVAREZ DE FRUTOS, P.- “Segovia y la guerra de las Comunidades: análisis social”, *Hispania*, t. XLIV, nº 158 (1984), págs. 469-494

ALVAREZ VAZQUEZ, J. A.- “Evolución de los arrendamientos agrícolas de 1450 a 1850 en Zamora”, en *Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1984, págs. 613-623

ALVAREZ VAZQUEZ, J. A.- *Rentas, precios y crédito en Zamora en el Antiguo Régimen*, Zamora, 1987

AMADOR DE LOS RIOS, J.- *Historia de la Villa y Corte de Madrid*, 4 vols., Madrid, 1990 (edic. orig: 1861)

AMALRIC, J.-P. y PONSOT, P., dirs.- *L'exploitation des grands domaines dans l'Espagne d'Ancien Régime*, París, 1985

AMELANG, J. S.- *La formación de una clase dirigente. Barcelona, 1490-1714*, Barcelona, 1986

ANDRADA MARTIN, J. M.- *Los propios, comunes y baldíos de Mérida en el siglo XVI*, Mérida, 1986

ANDRES, G. de- *Las cacerías en la provincia de Madrid en el siglo XIV según el Libro de la Montería de Alfonso XI*, Madrid, 2000

ANES ALVAREZ, G.- *Las crisis agrarias en la España moderna*, Madrid, 1970

ANES ALVAREZ, G. y otros- *La economía agraria en la historia de España. Propiedad, explotación, comercialización, rentas*, Madrid, 1979

AÑON, C. y SANCHO, J. L., eds.- *Jardín y Naturaleza en el reinado de Felipe II*, Madrid, 1998

ARANDA DONCEL, J.- “El municipio de Córdoba y la crisis de la Hacienda Real en el siglo XVII a través de un cabildo abierto”, *Axarquía. Revista de estudios cordobeses*, nº 14 (1985), págs. 125-144

ARANDA Y ANTON, G. De- “Visión histórica de la selvicultura popular española”, en MARIN PAGEO, F.; DOMINGO SANTOS, J.; CALZADO CARRETERO, A. (Eds.)- *Los montes y su historia*, Huelva, 2000, págs. 9-31

ARDEMANS, T.- *Ordenanzas de Madrid, y otras diferentes que se practican en las ciudades de Toledo y Sevilla, con algunas advertencias a los alarifes y particulares*, Madrid 1756

ARGENTE DEL CASTILLO, C.- *La ganadería medieval andaluza, siglos XIII-XVI (Reinos de Jaén y Córdoba)*, Jaén, 1991

ARROYO ILERA, F.- “Caza y pesca en Castilla la Nueva en el siglo XVI según las Relaciones Topográficas de Felipe II”, en *Actas del VI Coloquio de Geografía Rural*, Madrid, 1991, págs. 183-196

ARTOLA, M. y BILBAO, L. M.- *Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon*, Madrid, 1979

ASENJO GONZALEZ, M.- “Ciudad y Tierra: relaciones económicas y sociales en la época medieval”, en *Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad. Actas*, Segovia, 1991, págs. 57-75

ASENJO GONZALEZ, M.- “La ville de Segovie et son finage. Hierarchisation sociale et organisation de l'espace”, *Melanges de la Casa de Velásquez*, t. XXIII (1987), págs. 201-212

ASENJO GONZALEZ, M.- “Labradores ricos: nacimiento de una oligarquía rural en la Segovia del siglo XV”, *En la España Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez*, t. I, Madrid, 1984, págs. 63-85

- ASENJO GONZALEZ, M.- "Sociedad urbana y repoblación de las tierras de Segovia, al sur de la Sierra de Guadarrama", *En la España Medieval V. Estudios en memoria del profesor D. Claudio Sánchez-Albornoz*, vol. I, Madrid, 1986, págs. 125-149
- ASENJO GONZALEZ, M.- *Segovia. La Ciudad y su Tierra a fines del Medievo*, Segovia, 1986
- ASTARITA, C.- "Estudio sobre el concejo medieval de la Extremadura castellano leones: Una propuesta para resolver la problemática", *Hispania*, t. XLII, nº 151 (1982), págs. 355-413
- ASTON, T. H. y PHILPIN, C. H. E., eds.- *El debate Brenner*, Barcelona, 1988
- AZCARATE, G. de- *Ensayo sobre la Historia del Derecho de propiedad y su estado actual en Europa*. 2 vols., Madrid, 1903
- BARBAZZA, M-C.- *La société paysanne en Nouvelle-Castille. Famille, mariage et transmission de biens à Pozuelo de Aravaca (1580-1640)*, Madrid, 2000
- BARBEITO DIEZ, J. M.- "La capital de la Monarquía, 1535-1600", en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX*, Barcelona, 1995, págs. 32-39
- BARBEITO DIEZ, J. M.- *El Alcázar de Madrid*, Madrid, 1992
- BAREL, Y.- *La ciudad medieval. Sistema social-Sistema urbano*, Madrid, 1981
- BARRIOS GARCIA, A.- "Repoblación y feudalismo en las Extremaduras", en *En torno al feudalismo hispánico. I Congreso de Estudios Medievales*, Avila, 1989
- BARRIOS GARCIA, A.- *Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Avila (1085-1320)*, 2 vols., Salamanca, 1983-1984
- BAUER MANDERSCHIED, E.- *Los montes de España en la Historia*, Madrid, 1980
- BAUER-MANDERSCHIED, E.- "Los bosques españoles. Evolución forestal de España en el marco europeo", en MARIN PAGEO, F.; DOMINGO SANTOS, J.; CALZADO CARRETERO, A. (eds.)- *Los montes y su historia*, Huelva, 2000, págs. 139-149
- BENNASSAR, B.- *Valladolid en el Siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI*, Valladolid, 1983
- BERMUDEZ AZNAR, A.- "Bienes concejiles de propios en la Castilla bajomedieval", *Actas del III Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1974, págs. 825-867
- BERNAL RODRIGUEZ, A. M.- "La propiedad de la tierra: problemas que enmarcan su estudio y evolución", en ANES ALVAREZ, G. y otros- *La economía agraria en la historia de España. Propiedad, explotación, comercialización, rentas*, Madrid, 1979, págs 108-109
- BERNAL, A. M.- "Haciendas locales y tierras de propios: funcionalidad económica de los patrimonios municipales (siglos XVI-XIX)", *Hacienda Pública Española*, nº 55 (1978), págs. 285-312
- BERNAL, A. M.- *La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen*, Madrid, 1979

- BERNARDO ARES, J. M. de- “Las ordenanzas municipales y la formación del Estado moderno”, *Axarquía. Revista de estudios cordobeses*, nº 6 (1983), págs. 63-83
- BERNARDO ARES, J. M. de- “Presión fiscal y bienes de propios a principios del siglo XVII”, *Axarquía. Revista de estudios cordobeses*, nº 2 (1981), págs. 129-142
- BERNARDOS SANZ, J. U.- “Mercado y abastecimiento, 1561-1850”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX*, Barcelona, 1995, págs. 232-243
- BERNARDOS SANZ, J. U.- *No sólo de pan. Ganadería, abastecimiento y consumo de carne en Madrid (1450-1805)*, Tesis doctoral inédita, Universidad Autónoma de Madrid, 1997
- BILBAO, L. M.- “La crisis del siglo XVII en su lectura económica. Un debate inconcluso”, *Areas*, nº 10 (1989), págs. 51-72
- BILBAO, L. M. y FERNANDEZ DE PINEDO, E.- “Exportación de lanas, trashumancia y ocupación del espacio en Castilla durante los siglos XVI, XVII y XVIII”, en GARCIA MARTIN, P. y SANCHEZ BENITO, J. M., comps.- *Contribución a la historia de la Trashumancia en España*, Madrid, 1.986, págs. 343-359
- BISHKO, C. J.- “El castellano, hombre de llanura. La explotación ganadera en el área fronteriza de La Mancha y Extremadura durante la Edad Media”, en *Homenaje a Vicens Vives*, t. I, Barcelona, 1965, págs. 201-218
- BISHKO, C. J.- “The andalusian municipal Mestas in the 14th-16th centuries: administrative and social aspects”, *Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval*, t. I, Córdoba, 1978, págs. 347-374
- BISHKO, C. J.- “The municipal Mestas of New Castile and Murcia. Sites, Sources and Structures XIII th- XVth Centuries”, *Cuadernos de Historia de España*, t. LXXIV (1997), págs. 7-27
- BLAZQUEZ GARBAJOSA, A.- “Ensayo de clasificación metodológica de los Bienes de Propios”, en *Actas de las II Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia. Historia Moderna*, Cáceres, 1983, págs. 147-157
- BONACHIA HERNANDO, J. A.- “El concejo como señorío (Castilla, siglos XIII-XV)”, en *Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales*, Avila, 1990, págs. 429-463
- BONACHIA, J. A.- *El señorío de Burgos durante la Baja Edad Media (1255-1508)*, Valladolid, 1988
- BRAVO LOZANO, J.- “El Madrid barroco. Vida política. Sociedad. Economía”, en FERNANDEZ GARCIA, A., ed.- *Historia de Madrid*, Madrid, 1993, págs 223-251
- BRAVO LOZANO, J.- *Montes para Madrid. El abastecimiento de carbón vegetal a la Villa y Corte entre los siglos XVII y XVIII*, Madrid, 1993
- BRENNER, R.- “Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial”, en ASTON, T. H. y PHILPIN, C. H. E., eds.- *El debate Brenner*, Barcelona, 1988, págs. 21-81
- BRENNER, R.- “Las raíces agrarias del capitalismo europeo”, en ASTON, T. H. y PHILPIN, C. H. E., eds.- *El debate Brenner*, Barcelona, 1988, págs. 254-386

- BROENS, N.- *Monarquía y capital mercantil: Felipe IV y las redes comerciales portuguesas (1627-1635)*, Madrid, 1989
- BROWN, J. y ELLIOTT, J. H.- *Un palacio para el Rey. El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV*, Madrid, 1981
- BRUMONT, F.- *Campo y campesinos de Castilla la Vieja en tiempos de Felipe II*, Madrid, 1984
- CABO ALONSO, A.- “Colectivismo agrario en tierras de Sayago”, *Estudios Geográficos*, nº 65 (1956), págs. 593-658
- CABO ALONSO, A.- “La ganadería española. Evolución y tendencias actuales”, *Estudios Geográficos*, t. XXI (1960), págs. 123-171
- CABRAL CHAMORRO, A.- *Propiedad comunal y reparto de tierras en Cádiz (siglos XV-XIX)*, Cádiz, 1995
- CABRERA MUÑOZ, E.- “Usurpación de tierras y abusos señoriales en la Sierra cordobesa durante los siglos XIV y XV”, *Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval*, t. II, Córdoba, 1978, págs. 33-83;
- CALANDRE, L.- *El Palacio del Pardo (Enrique III-Carlos III)*, Madrid, 1953
- CALVO LOZANO, M. P. y LUIS-ANDRE QUATTELBAUM, U. de- “Dinámica de la población 1560-1804”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX*, Barcelona, 1995, págs. 150-155
- CAMARA, M. de la- *Tratado teórico práctico de Agrimensura y Arquitectura legal*, Valladolid, 2ª ed., 1.863
- CAPELLA MARTINEZ, M. y MATILLA TASCON, A.- *Los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Estudio crítico-histórico*, Madrid, 1957
- CARANDE, R.- *Sevilla. Fortaleza y Mercado. Las tierras, las gentes y la administración de la ciudad en el siglo XIV*, Sevilla, 3ª ed., 1982
- CARBAJO ISLA, M. F.- *La población de la Villa de Madrid: desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX*, Madrid, 1987
- CARDENAS, F.- *Ensayo sobre la Historia de la propiedad territorial en España*, Madrid, 1873, 2 vols
- CARLE, M. del C.- “El bosque en la Edad Media (Asturias- León-Castilla)”, *Cuadernos de Historia de España*, nº LIX-LX (1976), págs. 297-374
- CARLE, M. del C.- “La ciudad y su contorno en León y Castilla (siglos X-XIII)”, *Anuario de Estudios Medievales*, t. 8 (1972-71), págs. 69-103
- CARLE, M. del C.- *Del concejo medieval castellano- leonés*, Buenos Aires, 1968
- CARMONA RUIZ, M. A.- *Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su “tierra” durante el siglo XV*, Madrid, 1995

CARO LOPEZ, C.- “Casas y alquileres del antiguo Madrid”, *AIEM*, t. XX (1983), págs. 97-153

CARRASCO TEZANOS, A.- “Estructura y articulación social del poblamiento en la Sierra de Madrid en el siglo XV: el Real de Manzanares y los sexmos de Casarrubios y Lozoya”, en SEGURA GRAÍÑO, C., ed.- *Orígenes históricos de la actual Comunidad autónoma de Madrid*, Madrid, 1995, págs. 91-109

CARRETERO ZAMORA, J. M.- “Los servicios de Cortes y las necesidades financieras de la monarquía castellana (1500-1515), *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, nº 8 (1987), págs 31-56

CARRETERO ZAMORA, J. M.- “Madrid y la Hacienda castellana: el servicio de Cortes, 1500-1554”, en *Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los Descubrimientos*, t. II, Madrid, 1994, págs. 829-851

CARRETERO ZAMORA, J. M.- *Cortes, monarquía, ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de a época moderna (1476-1515)*, Madrid, 1988

CASADO ALONSO, H.- *Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos a finales de la Edad Media*, Valladolid, 1987

CASTELLANOS OÑATE, J. M.- “El Regimiento madrileño (1464-1515)”, *AIEM*, t. XVI (1991), págs. 45-63

CASTILLO DE BOVADILLA, J.- *Política para Corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz y de guerra*, Madrid, 1.978 (1ª ed: 1.597)

CASTRO, C. de- *Campomanes. Estado y reformismo ilustrado*, Madrid, 1996

CASTRO, C. de- *El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen*, Madrid, 1987

CASTRO, C. de- *La Revolución Liberal y los municipios españoles (1812-1868)*, Madrid, 1979

CAYETANO MARTIN, C.- “El Concejo de Madrid y el Real de Manzanares: un modelo de conflicto territorial en la Castilla de los Reyes Católicos”, *AIEM*, t. XXXIV (1994)

CAYETANO MARTIN, C.- *La documentación medieval en el Archivo de Villa (1152-1474)*, Madrid, 1991

CAZORLA, A.; GARCIA ABRIL, A. y OTERO, I.- “Algunos procesos históricos y sociológicos en el espacio de la Comunidad de Madrid que han configurado la comunidad histórica”, *AIEM*, t. XXIV (1987), págs. 295- 313

*CEDULAS y Provisiones de Carlos I rey de España conservadas en el Archivo General de la Villa de Madrid. Tomo I-años 1516-1526*, Madrid, 1985

CHALMETA GENDRON, P.- *El señor del zoco en España: Edades Media y Moderna. Contribución al estudio de la historia del mercado*, Madrid. 1973

CLARK, P. y LEPETIT, B., eds.- *Capital Cities and their Hinterlands in Early Modern Europe*, Aldershot, 1996

CLAVERO AREVALO, B.- *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836)*, Madrid, 1974



- CLÉMENT, V.- “Frontière, Reconquête et mutation des paysages végétaux entre Duero et Système Central du XI<sup>e</sup> au milieu du XV<sup>e</sup> siècle”, *Melanges de la Casa de Velásquez*, v. XXIX, n° 1 (1993), págs. 87-126
- COLLANTES DE TERAN SÁNCHEZ, A.- “Alfonso X y los Reyes Católicos: La formación de las haciendas municipales”, *En la España Medieval*, n° 13 (1990), págs. 253-270
- CONCEJOS y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales, Avila, 1990.
- CORRAL GARCIA, E.- *Las Comunidades Castellanas y la Villa y Tierra antigua de Cuéllar*, Salamanca, 1978
- CORRAL, J. del- *La Plaza Mayor de Madrid*, Madrid, 1987
- COS-GAYON, F.- *Historia jurídica del Patrimonio Real*, Madrid, 1881
- COSTA, J.- *Colectivismo agrario en España*, edic. de Carlos Serrano, 2 vols., Zaragoza, 1983 (edic. orig. 1898)
- CRUZ VALENCIANO, J.- “Propiedad urbana y sociedad en Madrid, 1749-1774”, *Revista de Historia Económica*, n° 2 (1990), págs. 239-269
- CUADRADO IGLESIAS, M.- *Aprovechamientos en común de pastos y leñas*, Madrid, 1980
- CUADRADO IGLESIAS, M.- *Naturaleza jurídica de las aprovechamientos comunales de pastos y leñas*, Salamanca, 1961
- DA CRUZ MORA, H. y otros- *El Monte de El Pardo*, Madrid, 1998
- DERECHOS, empleos y distinciones que corresponden al estado Colegiado de Caballeros Hijos-dalgo de esta M.H. Villa de Madrid, Madrid, 1.828
- DIAGO HERNANDO, M.- “Los señoríos territoriales de las ciudades europeas bajomedievales. Análisis comparativo de los ejemplos castellano y alemán”, *Hispania*, t. LIV-3, n° 188 (1994), págs. 791-844
- DIAGO HERNANDO, M.- *Soria en la Baja Edad Media. Espacio rural y economía agraria*, Madrid, 1993
- DIEZ DE BALDEON, A. y LOPEZ MARSA, F.- *Historia de Villaverde*, Madrid, 1986
- DIEZ SANZ, E.- *La Tierra de Soria. Un universo campesino en la Castilla oriental del siglo XVI*, Madrid, 1995
- DIOS, S. de; INFANTE, J.; ROBLEDO, R.; TORIJANO, E.- *Historia de la Propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente. II Encuentro Interdisciplinar*, Salamanca, 2002
- DIOS, S. de- “Doctrina jurídica castellana sobre adquisición y enajenación de los bienes de las ciudades (1480-1640)”, en DIOS, S. de; INFANTE, J.; ROBLEDO, R.; TORIJANO, E.- *Historia de la Propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente. II Encuentro Interdisciplinar*, Salamanca, 2002, págs. 13-79

DOMINGO PALACIO, T.- *Manual del empleado en el Archivo General de Madrid con una reseña histórica de su municipio*, Madrid, 1.875

DOMINGO PALACIO, T.- *Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid*, 5 vols., Madrid, 1888-1902

DOMINGUEZ ORTIZ, A.- “La comisión de D. Luis Gudiel para la venta de baldíos en Andalucía”, en *Congreso de Historia rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1984, págs. 511-522

DOMINGUEZ ORTIZ, A.- “Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV”, en *Instituciones y sociedad en la España de los Austrias*, Barcelona, 1985

DOMINGUEZ ORTIZ, A.- *Crisis y decadencia en la España de los Austrias*, Barcelona, 1969

DOMINGUEZ ORTIZ, A.- *Los Reyes Católicos y los Austrias*, Madrid, 1977

DOMINGUEZ ORTIZ, A.- *Política fiscal y cambio social en la España de Felipe IV*, Madrid, 1984

DOMINGUEZ ORTIZ, A.- *Política y Hacienda de Felipe IV*, Madrid, 1960

DOMINGUEZ ORTIZ, A.- *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, Barcelona, 1976

DONEZAR, J. M.- *Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el siglo XVIII*, Madrid, 1984

EDWARDS, J.- *La España de los Reyes Católicos (1474-1520)*, Barcelona, 2001

*FUERO de Madrid*, Madrid, 1963

ELLIOTT, J. H.- *El Conde Duque de Olivares*, Barcelona, 1990

EPALZA, M. de- “La dualidad campello-fahs en el espacio agrícola de Al-Andalus (Alicante, Castalla, Pedreguer, Madrid)”, *Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes*, nº 4 (1987), págs. 159-173

EQUIPO MADRID- *Carlos III, Madrid y la Ilustración. Contradicciones de un proyecto reformista*, Madrid, 1988

ESPINOSA ROMERO, J. y otros- “Consolidación y límites de la ciudad en el siglo XVIII”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX*, Barcelona, 1995, págs. 194-209

ESPINOSA ROMERO, J. y otros- “La feudalización de la sociedad madrileña en el siglo XVII”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX*, Barcelona, 1995, págs. 182-193

ESTELLA, M.- “El comercio de la madera en Madrid (primera mitad del siglo XVI)”, *Revista de dialectología y tradiciones populares*, nº XLIV (1989), págs. 295-303

ESTEPA DIEZ, C.- “El alfoz y las relaciones campo-ciudad en Castilla y León durante los siglos XII y XIII”, *Studia Historica. Historia Medieval*, t. II (1984), págs. 7-26

ESTEPA DIEZ, C.- “El realengo y el señorío jurisdiccional concejil en Castilla y León (siglos XII-XV)”, en *CONCEJOS y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales*, Avila, 1990, págs. 465-506

ESTEPA DIEZ, C.- “Estado actual de los estudios sobre las ciudades medievales castellano-leonesas”, en *Historia Medieval: cuestiones de metodología*, Valladolid, 1982, págs. 27-81

ESTEPA DIEZ, C.- “El alfoz castellano en los siglos IX al XII”, en *la España Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez*, vol. I, Madrid, 1984, págs. 305-341

*ESTRUCTURAS Agrarias y Reformismo Ilustrado en la España del siglo XVIII. Actas del Seminario de Segovia sobre: Agricultura e Ilustración (14, 15 y 16 de septiembre de 1988)*, Madrid, 1989

FARIÑA JAMARDO, J.- *El Getafe del siglo XVIII*, Getafe, 1981

FERNANDEZ ALBADALEJO, P.- "Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del siglo XVIII", en ARTOLA, M. y BILBAO, L. M.- *Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon*, Madrid, 1979

FERNANDEZ CARRION, R.- “Funcionalidad económica de los baldíos. El problema de su venta en la Andalucía del siglo XVII”, *Revista de Historia Económica*, v. 2, nº 3 (1984), págs. 163-182.

FERNANDEZ GARCIA, A., ed.- *Historia de Madrid*, Madrid, 1993

FERNANDEZ GONZÁLEZ, M. R. - *Edificios municipales de la ciudad de Valladolid de 1500 a 1561*, Valladolid, 1985

FERNANDEZ HIDALGO, A. M.- “Una medida innovadora en el Madrid de Fernando VI: el Gobernador Político y Militar (1746-1747)”, *Cuadernos de Investigación Histórica*, nº 11 (1987), págs. 171-200

FERNANDEZ VILADRICH, J.- “La comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda durante la Edad Media”, *Anuario de Estudios Medievales*, t. 8 (1972-73), págs. 199-224

FERRERAS, C. y AROZENA, M. E.- *Guía Física de España. 2- Los bosques*, Madrid, 1987

FLAQUER MONTEQUI, R.- “El aprovechamiento de los comunales (Las Ordenanzas de Buitrago)”, *Agricultura y Sociedad*, nº 11 (1979), págs. 323-370

FORTEA PEREZ, J. I.- *Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de Felipe II*, Salamanca, 1990

FRANCO RUBIO, G.- “Las rentas decimales de la Iglesia madrileña el siglo XVIII”, *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, nº 6 (1985), págs. 25-56

FUENTES MORCILLO, S.- *Los propios de Mérida en la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX*, Mérida, 1986

GARAYO URRUELA, J. M.- *La propiedad comunal en el pensamiento social agrario: perspectivas sociológicas*, Tesis Doctoral, Universidad de Deusto, edic. en microficha, 1999

GARCIA DE ANDRES, I. y otros- *Madrid, Villa, Tierra y Fuero*, Madrid, 1989

GARCIA DE CORTAZAR, J. A.- “De una sociedad de frontera (el valle del Duero en el siglo X) a una frontera entre sociedades (el valle del Tajo en el s. XII)”, en *Las sociedades de frontera en la España medieval. Sesiones de trabajo. Seminario de Historia Medieval*, Zaragoza, 1993, págs 51-68

GARCIA DE CORTAZAR, J. A.- “Sociedad castellana y organización del espacio en los siglos IX a XI: de la dispersión a la definición de los usos económicos del espacio”, en SEGURA GRAIÑO, C., edit.- *Orígenes históricos de la actual Comunal Autónoma de Madrid. La organización social del espacio en la Edad Media. I*, Madrid, 1995, págs. 11-39

GARCIA DE CORTAZAR, J. A. y otros- *Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV*, Barcelona, 1985

GARCIA DE VALDEAVELLANO, L.- *Curso de Historia de las Instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media*, Madrid, 1982 (1ª edic.: 1968)

GARCIA FERNANDEZ, J.- *Castilla. (Entre la percepción del espacio y la tradición erudita)*, Madrid, 1985

GARCIA GALLO, A.- “Bienes propios y derechos de propiedad en la Alta Edad Media española. Notas para su estudio”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, t. XXIX (1959), págs. 351-387

GARCIA GARCIA, C.- *La crisis de las haciendas locales. De la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845)*, Valladolid, 1996

GARCIA LARRAGUETA, S.- “El apeo, documento diplomático”, *Anuario de Estudios Medievales*, nº 17 (1987), págs. 617-633

GARCIA MARTIN, P.- *La Ganadería Mesteña en la España Borbónica (1.700-1.836)*, Madrid, 1.988.

GARCIA MARTIN, P. y SANCHEZ BENITO, J. M.- “Arbitrios locales sobre la propiedad semoviente en Castilla durante los siglos XIV y XV”, en GARCIA MARTÍN, P. y SÁNCHEZ BENITO, J. M.- *Contribución a la historia de la trashumancia en España*, Madrid, 1.986, págs. 285-299

GARCIA MARTIN, P. y SANCHEZ BENITO, J. M., comps.- *Contribución a la historia de la Trashumancia en España*, Madrid, 1.986

GARCIA MONERRIS, M. C. y PESET, J. L.- “Los gremios menores y el abastecimiento de Madrid durante la Ilustración”, *Moneda y Crédito*, nº 140 (1977), págs. 67-97

GARCIA RODRIGUEZ, B.- “Gestión y conflictos generados por la caza en el monte de El Pardo (1800- 1931)”, en *Actas del VI Coloquio de Geografía Rural*, Madrid, 1991, págs. 197-203

GARCIA SANZ, A.- “La agonía de la Mesta y el hundimiento de las exportaciones laneras: un capítulo de la crisis económica del Antiguo Régimen en España”, *Agricultura y sociedad*, nº6 (1978), págs. 283-356

GARCIA SANZ, A.- “Bienes y derechos comunales y el proceso de su privatización en Castilla durante los siglos XVI y XVII: El caso de Tierras de Segovia”, *Hispania*, t. XL, nº 144 (1980), págs. 95-128

GARCIA SANZ, A.- “El reparto de tierras concejiles en Segovia entre 1768 y 1770”, en *Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1984, págs. 251- 259

GARCIA SANZ, A. y GARRABOU, R., eds.- *Historia Agraria de la España contemporánea. 1. Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850)*, Barcelona, 1985

GARCIA ULECIA, A.- *Los factores de diferenciación entre las personas en los Fueros de las Extremadura castellano-leonesa*, Sevilla, 1975

GAUTIER DALCHE, J.- "L'organisation de l'espace pastoral dans les pays de la Couronne de Castille avant la création de la Mesta (XIème-mil.XIIIème siècles), en *Economie et société dans les pays de la Couronne de Castille*, Londres, 1982, págs. 153-166

GAUTIER DALCHE, J.- *Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII)*, Madrid, 1979.

GERBET, M-C.- "Des 'Libertés de pâturage dans tout le royaume' aux exemptions partielles de taxes sur la trashumance. Le roi de Castille et l'essor de l'élevage monastique medieval", *En la España Medieval*, nº 14 (1991), págs. 77-130

GERBET, M-C.- *Un élevage original au Moyen Age. La Peninsule Ibérique*, Biarritz, 2000 (hay edic. esp.)

GIBERT Y SANCHEZ DE LA VEGA, R.- *El Concejo de Madrid. Su organización en los siglos XII a XV*, Madrid, 1949

GOMEZ IGLESIAS, A.- "Algunos aspectos referentes al abastecimiento de carne a la Villa de Madrid (1481-1887)", *AIEM*, t. VII (1971), págs. 34-48

GOMEZ IGLESIAS, A.- "Algunos términos del alfoz madrileño", *Rev. BAM*, nº 56, t. XVII (1948), págs. 181-238

GOMEZ IGLESIAS, A.- "La Casa Panadería, las Actas del Concejo y otras cosas", *Villa de Madrid*, nº 31 (1971), págs. 119-127

GOMEZ IGLESIAS, A.- "La dehesa de Amanuel o de la Villa", *AIEM*, t.II (1967)

GOMEZ IGLESIAS, A.- "Las sentencias del licenciado Guadalajara", *Rev BAM*, nº 55, t. XVI (1947), págs. 333-391

GOMEZ IGLESIAS, A.- "Quisquilla", *AIEM*, t. 11(1968), págs. 569-577

GOMEZ IGLESIAS, A.- "Dehesa de Arganzuela", *Villa de Madrid*, nº 19 (1966), págs. 48-55

GOMEZ IGLESIAS, A.- "Las arduas y espinosas relaciones entre la Mesta y Madrid. Una actividad desconocida dentro del Campo de la tela (1273-1849)", *Villa de Madrid*, nº 41 (1973), págs. 75-86

GOMEZ IGLESIAS, A.- *El Madrid medieval*, Madrid, 1966

GOMEZ IGLESIAS, A.- "Una orden de Carlos III sobre los balcones de la Casa Panadería" Rev. BAM, t. XIII, nº 49 (1944), págs. 225-228.

GOMEZ IGLESIAS, A.- "El Alcaide de la Casa Panadería y la mudanza del Peso Real", Rev.BAM, t. XIII, nº 49 (1944), págs. 193-215

GOMEZ MENDOZA, J.- "La venta de baldíos y comunales en el siglo XVI. Estudio de su proceso en Guadalajara", Estudios Geográficos, nº 109 (1967), págs. 499-559

- GONZALEZ ALONSO, B.- “El régimen municipal y sus reformas en el siglo XVIII”, en *Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen. Las Comunidades de Castilla y otros estudios*, Madrid, 1981, págs. 203-234
- GONZALEZ ALONSO, B.- “Sociedad urbana y gobierno municipal en Castilla (1450-1600)”, en *Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen. Las Comunidades de Castilla y otros estudios*, Madrid, 1981, págs. 57-83
- GONZALEZ BERNALDEZ, F.- “El Monte de El Pardo, paraíso amenazado”, *Alfoz. Madrid, Territorio, economía y sociedad*, nº 6 (1984), págs. 39-42
- GONZALEZ HERRERO, M.- “Sobre la jurisdicción de la Mesta en Sepúlveda”, *Estudios Segovianos*, nº 52 (1966), págs. 46-60
- GONZALEZ DE MOLINA, M.; ORTEGA SANTOS, A. y TORIJANO PEREZ, E.- “Bienes comunales desde la perspectiva medioambiental”, en DIOS, S. de; INFANTE, J.; ROBLEDO, R.; TORIJANO, E.- *Historia de la Propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente. II Encuentro Interdisciplinar*, Salamanca, 2002, págs. 493-531
- GONZALEZ, J.- *Repoblación de Castilla la Nueva*, 2 vols., Madrid, 1975
- GORDON, M. D.- “Royal power and fundamental law in Western Europe, 1350-1650: The Crown lands”, en *Diritto e potere nella storia europea. Quarto Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto. Atti in onore di Bruno Paradisi*, Florencia, 1982, vol. I, págs. 255-270
- GROSSI, P.- *Historia del derecho de propiedad. La irrupción del colectivismo en la conciencia europea*, Barcelona, 1986
- GUERRA SANCHEZ-MORENO, E.- “La Casa de la Panadería”, *Rev. BAM*, t. VIII, nº 32 (1931), págs. 363-391
- GUERRERO MAYLLO, A.- *El Gobierno Municipal de Madrid (1569-1606)*, Madrid, 1993
- GUERRERO MAYLLO, A.- *Familia y vida cotidiana de una élite de poder. Los regidores madrileños en tiempos de Felipe II*, Madrid, 1993
- GUILARTE, A. M.- *El régimen señorial en el siglo XVI*, Madrid, 1962
- GUILLAMON, J.- *Las reformas de la Administración local durante el reinado de Carlos III*, Madrid, 1980
- GUTIERREZ ALONSO, A.- *Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII*, Valladolid, 1989
- GUTIERREZ BRINGAS, M. A.- “La productividad de la tierra en España, 1752-1930: tendencias a largo plazo”, *Revista de Historia Económica*, v. XI, nº 3 (1993), págs. 505-540
- GUTIERREZ NIETO, J. I.- *Las Comunidades como movimiento antiseñorial*, Barcelona, 1973
- HALIZCER, S.- *Los Comuneros de Castilla. La forja de una revolución, 1474-1521*, Valladolid, 1987
- HERNANDEZ BENITEZ, M.- *A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana. Madrid, 1606-1808*, Madrid, 1995

HERNANDEZ BENITEZ, M.- "El desembarco de los nuevos mestieños en Extremadura: la venta de la dehesa de la Serena y las transformaciones de la trashumancia, 1744-1770", *Historia Agraria*, nº 27 (2002), págs. 65-99

HERNANDEZ BENITEZ, M. y MONTURIOL GONZALEZ, M. A.- "El ayuntamiento de Madrid", en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX -XIX*, Barcelona, 1995, págs. 268-275

HERNANDO ORTEGO, F. J.- "El patrimonio municipal de Madrid: La tierra y la función de la oligarquía urbana, 1.450-1.700". *Cuarto Congreso de la Asociación de Historia Económica de España*. Alicante, 1.989

HERNANDO ORTEGO, F. J.- "Control del espacio y control del municipio. Carlos III y El Pardo", en EQUIPO MADRID - *Carlos III, Madrid y la Ilustración. Contradicciones de un proyecto reformista*, Madrid, 1988, págs. 49-76

HERNANDO ORTEGO, F. J.- "La lucha por el Monte de El Pardo. Rey, municipio y uso del espacio en el Madrid del Antiguo Régimen", *Cuadernos de Investigación Histórica*, nº 12 (1.989), págs. 169-196

HERNANDO ORTEGO, F. J.- "Fuentes para el estudio del patrimonio municipal en el Madrid de la Edad Moderna", en *Primeras Jornadas sobre Fuentes Documentales para la Historia de Madrid*. Madrid, 1.990, págs. 315-326

HERNANDO ORTEGO, F. J.- "La gestión de las tierras de propios de Madrid en el siglo XVIII", en FERNANDEZ PRIETO, L. y BALBOA LOPEZ, X.- *La sociedad rural en la España contemporánea. Mercado y patrimonio*, A Coruña, 1996, págs. 258-269

HERNANDO ORTEGO, F. J.- "Aprovechamientos forestales y gestión municipal en la ribera del Jarama. Los sotos de Madrid durante el Antiguo Régimen", *IX Congreso de Historia Agraria*, Bilbao, 1999

HERNANDO ORTEGO, F. J.- "Poder y usos del espacio: la construcción del monte de El Pardo durante el Antiguo Régimen", en SABIO ALCUTEN, A. e IRIARTE GOÑI, I., (eds)- *La construcción histórica del paisaje agrario en España y Cuba*, Madrid, 2003. págs. 131-146.

HERRERA GARCIA, A.- "Labradores, ganaderos y aprovechamientos comunales. Algunos aspectos de su conflictividad en las tierras sevillanas durante el Antiguo Régimen", *Agricultura y Sociedad*, nº 17 (1980), págs. 255-291

HOFNER, H.- "La evolución de los bosques de Castilla la Vieja en tiempos históricos. Contribución a la investigación del primitivo paisaje de la España central", *Estudios Geográficos*, nº 56, v. XV (1954), págs. 415-439

HOZ GARCIA, C. de la- "El sistema fiscal de Madrid en el Antiguo Régimen: Las sisas", *AIEM*, t. XXV (1988), págs. 371-386

HOZ GARCIA, C. de la- "Hacienda, deuda municipal y poder urbano en el Madrid del siglo XVII", comunicación presentada al *IV Congreso de la Asociación de Historia Económica*, Alicante, 1989

- HOZ GARCIA, C. de la- “Las reformas de la Hacienda madrileña en la época de Carlos III”, en EQUIPO MADRID - *Carlos III, Madrid y la Ilustración. Contradicciones de un proyecto reformista*, Madrid, 1988, págs. 77-101
- IÑIGUEZ ALMECH, F.- "La Casa Real de la Panadería", *Rev. BAM*, t.XVII, nº 56 (1940), págs. 400-413
- IRADIEL, P.; MORETA, S. y SARASA, E.- *Historia medieval de la España cristiana*, Madrid, 1989
- IZQUIERDO MARTIN, J.- *El rostro de la comunidad. La identidad del campesino en la Castilla del Antiguo Régimen*, Madrid, 2002
- JACQUART, J.- "La rente foncière, indice cojoncturel?", *Revue historique*, nº 514 (1975), págs. 355-376
- JIMENEZ DE GREGORIO, F.- *Raíces medievales de la división provincial de Madrid*, Madrid, 1986
- JIMENEZ GADEA, J.- “La red viaria en la provincia de Madrid: épocas romana e islámica”, en VALDES, F., ed.- *Mayrit. Estudios de arqueología medieval madrileña*, Madrid, 1992, págs. 17-29
- JIMENEZ ROMERO, C.- “El pensamiento agrario de Joaquín Costa a la luz del debate europeo sobre el campesinado”, *Agricultura y sociedad*, nº 56 (1990)
- JIMENEZ ROMERO, C.- “La polémica europea sobre la comunidad aldeana (1850-1900)”, *Agricultura y Sociedad*, nº 55 (1990), págs. 9-64
- JIMENEZ ROMERO, C.- *Valdelaguna y Coatepec. Permanencia y funcionalidad del régimen comunal agrario en España y México*, Madrid, 1991
- JULIA, S., RINGROSE, D., y SEGURA, C.- *Madrid, historia de una capital*, Madrid, 1994
- KAGAN, R. L.- *Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700*, Salamanca, 2001
- KLEIN, J.- *La Mesta. Estudio de la historia económica española, 1273-1836*, Madrid, 1979 (edic. orig. 1936)
- KULA, W.- *Las medidas y los hombres*, Madrid, 1980
- KULA, W.- *Problemas y métodos de la historia económica*, Barcelona, 1977
- LADERO QUESADA, M. A.- “Corona y ciudades en la Castilla del siglo XV”, *En la España Medieval V. Estudios en memoria del profesor D.Claudio Sánchez-Albornoz*, vol. I, Madrid, 1986, págs. 220-244
- LADERO QUESADA, M. A.- “El poder central y las ciudades en España del siglo XIV al final del Antiguo Régimen”, *Revista de Administración Pública*, nº 94 (1981), págs. 173-198
- LADERO QUESADA, M. A.- “La caza en la legislación municipal castellana. Siglos XIII a XVIII”, *En la España Medieval. Estudios dedicados al profesor D. Julio González González*, Madrid, 1980, págs. 193-221



LADERO QUESADA, M. A.- "Las ordenanzas locales. Siglos XIII- XVIII", *En la España Medieval*, nº 21 (1998), págs. 293-337

LADERO QUESADA, M. A.- *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV*, La Laguna, 1973

LADERO QUESADA, M. A. y GALAN PARRA, I.- "Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII)", *Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval*, nº 1 (1982), págs. 221-243

LADERO QUESADA, M. F.- *Zamora en la época de los Reyes Católicos. Economía y gobierno*, Zamora, 1991

LALINDE ABADIA, J.- "Los medios personales de gestión y su delimitación conceptual", en *Actas del II Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1971

LAMPEREZ Y ROMEA, V.- *Arquitectura civil española de los siglos XV al XVIII*, 2 vols. Madrid, 1922

LAMPEREZ Y ROMEA, V.- *Las ciudades españolas y su arquitectura municipal al finalizar la Edad Media*, Madrid, 1917

LAYNA SERRANO, F.- *Castillos de Buitrago y Real de Manzanares*, Madrid, 1935

LE FLEM, J. P - "El valle de Alcudia en el siglo XVIII", en *Congreso de historia rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1.984

*Libro de la Montería del Rey D. Alfonso XI*, edic. de José Gutiérrez de la Vega, Madrid, 1983 (edic. orig. 1877)

LLOPIS AGELAN, E.- "Las explotaciones trashumantes en el siglo XVIII y primer tercio del XIX: la cabaña del monasterio de Guadalupe, 1709-1835", en ANES, G., ed.- *La economía española al final del Antiguo Régimen. I-Agricultura*, Madrid, 1982, págs. 1-101

LLOPIS AGELAN, E.- "El agro castellano en el siglo XVII: ¿depresión o reajuste y readaptaciones?", *Revista de Historia Económica*, v. IV, nº1 (1986), págs. 11-37

LOMBANA DOMINGUEZ, N.- "El enclave estratégico de Buitrago de Lozoya y su evolución histórica (siglos X-XV)", en SEGURA GRAIÑO, C., edit.- *Orígenes históricos de la actual Comunidad Autónoma de Madrid*, págs. 111-126

LOPEZ BENITO, C. I.- "La devolución de las tierras usurpadas al concejo de Salamanca en los comienzos de la Edad Moderna. Aproximación a su estudio", *Studia Historica, Historia Moderna*, vol II, nº 3 (1984), págs. 95-111

LOPEZ BENITO, C. I.- "Usurpaciones de bienes concejiles en Salamanca durante el reinado de los Reyes Católicos", *Studia Historica, Historia Moderna*, vol. II, nº 3 (1983), págs. 169-183

LOPEZ GARCIA, J. M.- "Las economías monásticas ante la crisis del siglo XVII: Fray Hernando de Aedo y la reorganización de la abadía de la Santa Espina", en *Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1984, págs. 659-679

LOPEZ GARCIA, J. M.- *La transición del feudalismo al capitalismo en un señorío monástico castellano. El Abadengo de la Santa Espina, 1147-1835*, Valladolid, 1990

- LOPEZ GARCIA, J. M. y MADRAZO, S.- “A Capital City in the Feudal Order: Madrid from the Sixteenth to the Eighteenth Century”, en CLARK, P. y LEPETIT, B., eds.- *Capital Cities and their Hinterlands in Early Modern Europe*, Aldershot, 1996, págs. 119-142
- LOPEZ GARCIA, J. M., dir.- *El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moderna*, Madrid, 1998
- LOPEZ GONZALEZ, A. L.- *El Real de Manzanares y su castillo*, Madrid, 1987
- LOPEZ RODRIGUEZ, C.- “La organización del espacio rural en los fueros de la Extremadura castellana”, *En la España Medieval*, nº 12 (1989), págs. 63-94
- LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J.- *Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha* (ss. XVI-XVII), Ciudad Real, 1986
- LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. y MARTIN GALAN, M.- “La producción cerealística del Arzobispado de Toledo, 1463-1699”, *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, v. II (1981), págs. 21-103
- LOPEZ-SALAZAR, J.- “Los pleitos antiseñoriales en Castilla la Nueva. Tipología y factores de conflictividad”, en SARASA SÁNCHEZ, E. y SERRANO MARTÍN, E., eds.- *Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica* (ss. XII-XIX), t. 2, Zaragoza, 1993, págs. 389-418
- LOSA CONTRERAS, C.- *El Concejo de Madrid en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna*, Madrid, 1999
- LUIS LOPEZ, C.- *La Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahita en el tránsito de la Edad Media a la Moderna*, Avila, 1987
- MACKAY, A.- “Campo y ciudad en la Europa medieval”, *Studia Historica. Historia Medieval*, t. II (1984), págs. 27-53
- MACKAY, A.- *La España de la Edad Media. Desde la frontera hasta el Imperio (100-1500)*, Madrid, 1981
- MADRAZO MADRAZO, S.- “La lógica smithiana en la historia económica y social de Madrid. A propósito de una traducción reciente”, *Revista de Historia Económica*, v. IV, nº 3 (1986), págs. 609-617
- MADRAZO MADRAZO, S.- “Madrid: ciudad y territorio en la época de Carlos III”, en V.V. A.A.- *Carlos III. Alcalde de Madrid, 1788-1988*, Madrid, 1988, págs. 109-126
- MADRAZO MADRAZO, S.; BERNARDOS SANZ, J. U.; HERNANDO ORTEGO, F. J.; DE LA HOZ GARCIA, C.- “La Tierra de Madrid”, en MADRAZO, S. y PINTO, V.- *Madrid en la época moderna: Espacio, sociedad y cultura*, Madrid, 1991, págs. 33-50
- MADRAZO, S. y PINTO, V., eds.- *Madrid en la época moderna: Espacio, sociedad y cultura*, Madrid, 1991
- MANGAS NAVAS, J. M.- *El régimen comunal agrario de los concejos de Castilla*, Madrid, 1981
- MANGAS NAVAS, J. M.- *La propiedad de la tierra en España: los Patrimonios Públicos. Herencia contemporánea de un reformismo inconcluso*, Madrid, 1984

- MANUEL VALDES, C. M.- “Características y transformaciones de la gestión forestal en España (siglos XVI-XIX)”, en MARIN PAGEO, F.; DOMINGO SANTOS, J.; CALZADO CARRETERO, A. (Eds.)- *Los montes y su historia*, Huelva, 2000, págs. 33-49
- MANUEL VALDES, C. M.- *Tierras y montes públicos en la sierra de Madrid (Sectores central y meridional)*, Madrid, 1996
- MARAVALL, J. A.- *Las Comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna*, Madrid, 1976 (1ª edic.: 1963)
- MARCOS MARTIN, S.- “¿Qué es una ciudad en la época moderna? Reflexión histórica sobre el fenómeno de lo urbano”, en *Tolède et l’expansion urbaine en Espagne (1450-1650)*, Madrid, 1991, págs. 273-288
- MARCOS MARTIN, S.- *Economía, sociedad, pobreza en Castilla: Palencia, 1500-1814*, 2 vols., Palencia, 1985
- MARCOS MARTIN, S.- *España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad*, Barcelona, 2000
- MARCOS MARTIN, S.- “Evolución de la propiedad pública municipal en Castilla la Vieja durante la Edad Moderna”, *Studia Historica. Historia Moderna*, n. 16 (1997), págs. 57-100
- MARIN BARRIGUETE, F.- “Madrid y la Mesta: Privilegios locales y privilegios cabañiles (siglos XIV- XVI)”, *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, nº 8 (1987), págs. 13-29
- MARIN BARRIGUETE, F.- “Un antagonismo ignorado: La Mesta y las ciudades en el reinado de Felipe II”, en MARTINEZ RUIZ, E. (Dir.)- *Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía. Vol II. Capitalismo y Economía*, Madrid, 2000, págs. 421-445
- MARIN PAGEO, F.; DOMINGO SANTOS, J.; CALZADO CARRETERO, A. (Eds.)- *Los montes y su historia. Una perspectiva política, económica y social. I Jornadas Forestales: Historia, Socioeconomía y Política Forestal*, Huelva, 1999
- MARIN PERELLON, F. J.- “El Madrid medieval, desde el siglo IX hasta 1535”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX – XIX*, Barcelona, 1995, págs.18-31
- MARIN PERELLON, F. J.- “La configuración de centro y periferia”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX -XIX*, Barcelona, 1995, págs. 88-93
- MARIN PERELLON, F. J.- “La morfología del casco en la Edad Moderna: ejes y plazas”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX -XIX*, Barcelona, 1995, págs. 94-103
- MARIN PERELLON, F. J.- “Propiedad y precio del suelo en el Antiguo Régimen”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX - XIX*, Barcelona, 1995, págs. 112-117
- MARTINEZ DIEZ, G.- “Estructura administrativa local en el naciente Reino de Toledo”, en *Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes*, Toledo, 1988, págs. 43-162

MARTINEZ DIEZ, G.- *Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana (Estudio Histórico-Geográfico)*, Madrid, 1983

MARTINEZ GIJON et al.- "Bienes urbanos de aprovechamiento comunal en los derechos locales de Castilla y León. Notas para su estudio", *Actas del III Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1974

MARTINEZ LLORENTE, F. J.- *Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval. Las Comunidades de Villa y Tierra (S: X-XIV)*, Valladolid, 1990

MARTINEZ MORO, J.- *La Tierra en la Comunidad de Segovia. Un proyecto señorial urbano (1088-1500)*, Valladolid, 1985

MARTÍNEZ NEIRA, M.- *Una reforma ilustrada para Madrid. El Reglamento del Consejo Real de 16 de marzo de 1766*, Madrid, 1994

MARTÍNEZ NEIRA, M.- *Revolución y fiscalidad municipal. La Hacienda de la Villa de Madrid en el reinado de Fernando VII*, Madrid, 1995

MARTINEZ RUIZ, E. (dir.)- *Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía. Vol II. Capitalismo y Economía*, Madrid, 2000

MARTINEZ RUIZ, E.- "Los montes en la cultura islámica. Los bosques de al-Andalus del siglo VIII al XIII", en MARIN PAGEO, F.; DOMINGO SANTOS, J.; CALZADO CARRETERO, A. (eds.)- *Los montes y su historia*, Huelva, 2000, págs. 63-87

MARTINEZ RUIZ, E.- *Propios y subastas municipales en Granada ,1553-1593*, Granada, 1988

MARTINEZ RUIZ, J. I.- "Donativos y empréstitos sevillanos a la Hacienda Real (siglos XVI al XVII)", *Revista de Historia Económica, Actas del II Congreso de Historia Económica*, v. I, nº 3 (1984), págs. 233-244

MARTINEZ RUIZ, J. I.- "La deuda municipal de Sevilla en la Epoca Moderna: tendencias a largo plazo, 1537-1768", comunicación presentada al *IV Congreso de la Asociación de Historia Económica*, Alicante, 1989

MARTINEZ RUIZ, J. I.- *Finanzas municipales y crédito público en la España moderna. La hacienda de la ciudad de Sevilla, 1528-1768*, Sevilla, 1992

MARTINEZ SALVADOR, C.- "Fuentes escritas sobre el Madrid árabe", en VALDES; F., ed.- *Mayrit. Estudios de arqueología medieval madrileña*, Madrid, 1992, págs. 77-86

MATA OLMO, R.- "Participación de la alta nobleza andaluza en el mercado de la tierra. La Casa de Arcos (siglos XV-XVIII)", en *Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1984, págs. 681-710

MATALLANA UREÑA, A.; MARTINEZ LILLO, S. Y SAEZ LARA, F.- "La ruta del Jarama y su entorno en época andalusí", en SEGURA GRAIÑO, C.- *Orígenes históricos de la actual Comunidad de Madrid*, págs. 139-181

MATILLA TASCÓN, A.- "El primer catastro de la Villa de Madrid", *RevBAM*, t. LXIX (1961), págs. 463-530

MATILLA TASCON, A.- "Madrid arrienda las tierras de sus Propios. Años 1792-1794", *AIEM*, t. XXV (1988), págs. 311-334

MATILLA TASCON, A.- "Noticias sobre el agro de Madrid a mediados del siglo XVIII", *Hispania*, nº 171, t. XLIX (1989), págs. 325-334

MATILLA TASCON, S.- *Abastecimiento de carne a Madrid (1477-1678)*, Madrid, 1994

MENDO CARMONA, C.- "Dehesas y ejidos en la villa y tierra de Madrid a fines del siglo XV", *Anuario de Estudios Medievales*, nº 20 (1990), págs. 359-374

MENESES GARCIA, E.- "Documentos sobre la caballería de alarde madrileña", *Hispania*, t. XXI (1961), págs. 323-341

MENESES GARCIA, E.- "Origen de San Sebastián de los Reyes y Torrejón de la Calzada", *AIEM*, t. II (1987), págs. 99-123

MEXIA DE LAS HIGUERAS, D.- *Discurso en que se propone la fundación de hornos municipales para la fabricación y venta de pan*, 25 de enero de 1647, B.N.-Mss. 6.734

MIGNOT C.- "Le "Municipio" de Guadalajara au XVème siècle, Système administratif et économique (1342-1567)", *Anuario de Estudios Medievales*, nº 14 (1984), págs. 581-609

MIGUEL RODRIGUEZ, J. C. de, ed.- *El Madrid medieval: sus tierras y sus hombres*, Madrid, 1990

MILLARES CARLO, A.- "León V de Armenia y el señorío de Madrid", en MILLARES CARLO, A.- *Contribuciones documentales a la historia de Madrid*, Madrid, 1971, págs. 210-212

MILLARES CARLO, A.- "Índices y extractos de los "Libros de Cédulas y Provisiones" (siglos XV-XVI)", en MILLARES CARLO, A.- *Contribuciones documentales a la historia de Madrid*, Madrid, 1971, págs. 93-180

MILLARES CARLO, A.- "Índices y extractos del "Libro Horadado" del Concejo Madrileño", en MILLARES CARLO, A.- *Contribuciones documentales a la historia de Madrid*, Madrid, 1971, págs. 11-92

MILLARES CARLO, A. y VARELA HERVIAS, E.- *Documentos del Archivo de Villa de Madrid. Segunda Serie*, 2 vols., Madrid, 1932

MINGUEZ FERNANDEZ, J. M.- "Feudalismo y concejos. Aproximación metodológica al análisis de las relaciones sociales en los concejos castellano-leoneses", *En la España Medieval. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó*, vol. II, Madrid, 1982, págs. 109-122

MINGUEZ FERNANDEZ, J. M.- "Ganadería, aristocracia y reconquista en la Edad Media castellana", *Hispania*, nº 151, t. XLII (1982), págs. 341-354

MINGUEZ FERNÁNDEZ, J. M.- "La transformación social de las ciudades y las Cortes de Castilla y León", en *Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media. Tomo II*, Valladolid, 1988, págs. 15-43

MOLENAT, J. P.- "L'organisation du territoire entre Cordillère Centrale et Sierra Morena du XIIème au XIVème siècle", en *Génesis medieval del Estado Moderno: Castilla y Navarra (1250-1370)*, Valladolid, 1987, págs. 67-78

MOLENAT, J. P.- *Campagnes et Monts de Tolède du XII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle*, Madrid, 1997

MOLENAT, J.-P.- "Tolède et ses finages au temps des Rois Catholiques: contribution à l'histoire sociale et économique de la cité avant la révolte des Comunidades", *Melanges de la Casa de Velázquez*, t. VIII (1972), págs. 327-377

MOLENAT, J.-P.- "Villes et forteresses musulmanes de la région tolédane disparues après l'occupation chrétienne", *Castrum 3. Guerre, fortification et habitat dans le Monde méditerranéen au Moyen Age*, Madrid-Roma, 1984, págs. 135-154

MONSALVO ANTON, J. M.- "La participación política de los pecheros en los municipios castellanos de la Baja Edad Media. Aspectos organizativos", *Studia Historica. Historia Medieval*, vol. VII (1989), págs. 37-93

MONSALVO ANTON, J. M.- "La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la época del Regimiento medieval. La distribución social del poder", en *CONCEJOS y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales*, Avila, 1990, págs. 357-413

MONSALVO ANTON, J. M.- "Poder municipal y mercado urbano precapitalista. Una introducción a las ordenanzas de la "renta del Peso mayor" del concejo de Salamanca", *Salamanca. Revista provincial de Estudios*, nº 8 (1983), págs. 59-76

MONSALVO ANTON, J. M.- *El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra*, Salamanca, 1988

MONSALVO ANTON, J. M.- Poder político y aparatos de estado en la Castilla bajomedieval. Consideraciones sobre su problemática", *Studia Historica. Historia Medieval*, t. IV (1986), págs. 100-167

MONSALVO ANTON, J. M.- "Transformaciones sociales y relaciones de poder en los concejos de frontera, siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante las instituciones municipales", en PASTOR, R.- *Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna*, Madrid, 1990

MONTEMAYOR, J.- "Une conjuncture municipale: Les Propios de Tolède 81540-1660)", *Melanges de la Casa de Velázquez*, t. XVII (1981), págs. 183-204

MONTEMAYOR, J.- *Tolède entre fortune et decline (1530-1640)*, Limoges, 1996

MONTERO VALLEJO, M.- *El Madrid Medieval*, Madrid, 1987

MONTURIOL GONZALEZ, M. A.- "El ingreso en la hacienda municipal de Madrid: su estructura y evolución (1464-1497)", en *La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI*, t. II, Madrid, 1985, págs. 1027-1057;

MONTURIOL GONZALEZ, M. A.- "Estructura y evolución del gasto en la Hacienda Municipal de Madrid: último tercio del siglo XV", en *La España Medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez*, vol. I, Madrid, 1984, págs. 653-694

MONTURIOL GONZALEZ, M. A.- "Madrid a fines del XV: crecimiento económico y transformación de la Hacienda municipal", ponencia presentada en el *IV Congreso de la Asociación de Historia Económica*, Universidad de Alicante, 18-19 de diciembre de 1989, ejemplar reprografiado.

MORAN TURINA, J. M. y CHECA CREMADES, F.- *Las Casas del Rey. Casas de Campo, Cazaderos y Jardines. Siglos XVI y XVII*, Madrid, 1988

MORENO FERNANDEZ, J. R.- “El régimen comunal y la reproducción de la comunidad campesina en las sierras de La rioja, siglos XVIII-XIX”, *Historia Agraria*, nº 15 (1998), págs. 75-111

MORENO FERNANDEZ, J. R.- “La lógica del comunal en Castilla en la Edad Moderna: avances y retrocesos de la propiedad común”, en DIOS, S. de; INFANTE, J.; ROBLEDO, R.; TORIJANO, E.- *Historia de la Propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente. II Encuentro Interdisciplinar*, Salamanca, 2002, págs. 139-177

MORETA, S. y VACA, A.- “Los concejos urbanos núcleos de señoríos corporativos conflictivos. Aproximación a las relaciones entre oligarquía urbana y campesinos en Zamora y su tierra, siglo XV”, *Agricultura y Sociedad*, nº 23 (1982), págs. 343-385

MORO, R.- *Guía de los árboles de España*, Barcelona, 1988

NAVASCUES, P.- *La Casa Ayuntamiento de Madrid*, Madrid, 1987

NEESON, J. M.- *Commoners: common right, enclosure and social change in England, 1700-1820*, Cambridge, 1996 (1ª ed: 1993)

NIETO, A.- *Ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras*, 2 vols., Valladolid, 1959

NIETO, A.- *Bienes comunales*, Madrid, 1964

NUÑEZ ROLDAN, F.- “Haciendas municipales en el reino de Sevilla a mediados del siglo XVIII”, *Historia. Instituciones. Documentos*, nº 12 (1985), págs. 89-132

ORTEGA, M.- *La lucha por la tierra en la Corona de Castilla al final del Antiguo Régimen. El expediente de ley agraria*, Madrid, 1986

ORTIZ DE PINEDO, A.- *Los cazaderos de Madrid*, Madrid, 1898

OSTROM, E.- *Governing the Commons. The evolution of institutions for collectiv action*, Cambridge, 1990

PABLO GAFAS, J. L. de- “La Sala de Alcaldes de Casa y Corte, 1581-1834”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX -XIX*, Barcelona, 1995, págs. 267-276

PABLO GAFAS, J. L. de- “Las circunscripciones civiles en la Edad Moderna, siglos XVI-XIX”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX -XIX*, Barcelona, 1995, págs. 126-131

PANADERO ACEDO, C.- “Los límites del territorio de Madrid (siglos XI-XIII)”, en SEGURA GRAIÑO, C.- *Orígenes históricos de la actual Comunidad Autónoma de Madrid*, págs. 61-74

PASTOR DE TOGNERI, R.- “La lana en Castilla y León antes de la organización de la Mesta” en GARCIA MARTIN, P. y SANCHEZ BENITO, J. M., comp.- *Contribución a la historia de la trashumancia en España*, Madrid, 1986, págs. 363-390 (edic. orig.: 1970).

PASTOR DE TOGNERI, R.- *Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económico-sociales*, Barcelona, 1985, p. 103 (1ª ed: 1975).

PASTOR, R.- "Apuntes para el estudio de los conflictos por el espacio ganadero del concejo de Madrid en el siglo XIII", *I Jornadas de estudios sobre la provincia de Madrid*, Madrid, 1980, pags. 678-684

PASTOR, R.- "Poblamiento, frontera y estructura agraria en Castilla la Nueva (1085-1230), *Cuadernos de Historia de España*, nº 47-48 819689, págs. 171-225

PASTOR, R.- *Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de la formación feudal. Castilla y León, siglos X-XIII*, Madrid, 1980

PASTOR, R., ed.- *Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna*, Madrid, 1990

PEREIRA PEREIRA, J.- "El impacto de la Corte. La sociedad en el siglo XVI", en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX - XIX*, Barcelona, 1995, págs. 170-181

PEREZ BUA, M.- *Las reformas de Carlos III en el régimen local de España*, Madrid, 1919

PEREZ BUSTAMANTE, R.- "El Real de Manzanares, el marqués de Santillana y el Honrado Concejo de la Mesta", en *Homenaje a Lucas Beltrán*, Madrid, 1982, págs. 503-531

PEREZ DE CASTRO, F.- "Extracto de los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Madrid a partir del año 1601", *RevBAM*, t. XVIII (1949), págs. 415-433

PEREZ PICAZO, M. T. y LEMEUNIER, G.- "Le municipe et la régulation de la vie agrarie: l'exemple de Murcie (XVI<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup>s.)", en *Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1984, págs.63-74

PEREZ, J.- *Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos*, Madrid, 1988

PEREZ, J.- *La revolución de las Comunidades de Castilla, 1520-21*, Madrid, 1977

PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX -XIX*, Barcelona, 1995

PORTELA, E.- "Del Duero al Tajo", en GARCIA DE CORTAZAR, J. A.- *La organización social del espacio en la España medieval*, págs. 85-122

PUÑAL FERNANDEZ, T.- *El mercado de Madrid en la Baja Edad Media: Estructuras y sistemas de abastecimiento de un concejo medieval castellano (Siglo XV)*, Madrid, 1992

QUINTANILLA RASO, M. C.- "La tenencia de fortalezas en Castilla durante la Baja Edad Media", *En la España Medieval V*, vol. II, Madrid, 1986, págs. 861-895

REHER, D-S. y BALLESTEROS, E.- "Precios y salarios en Castilla la Nueva: la construcción de un índice de salarios reales, 1501-1991", *Revista de Historia Económica*, v. XI, nº 1 (1993), págs. 101-151

REPRESA RODRIGUEZ, A.- "La Tierra medieval de Segovia", *Estudios Segovianos*, t. XXI (1969), págs. 227-244



REY CASTELAO, O.- *Montes y política forestal en la Galicia del Antiguo Régimen*, Santiago de Compostela, 1995

REY CASTELAO, O.- “La propiedad colectiva en la España moderna”, *Studia Historica. Historia Moderna*, v. 16, págs. 5-16

REYES LEOZ, J. L. de los- “Evolución de la población, 1561-1857”, en PINTO CRESPO, V. y MADRAZO MADRAZO, S., dirs.- *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX -XIX*, Barcelona, 1995, págs. 140-145

RINGROSE, D. R.- “Madrid y Castilla, 1560-1850. Una capital nacional en una economía regional”, *Moneda y Crédito*, nº 111 (1969), págs. 65-122

RINGROSE, D. R.- *Madrid y la economía española, 1560-1850. Ciudad, Corte y País en el Antiguo Régimen*, Madrid, 1985

RIO BARREDO, M. J. del- *Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica*, Madrid, 2000

RIU, M.- “Agricultura y ganadería en el Fuero de Cuenca”, en *En la España Medieval III. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó*, vol. II, Madrid, 1982, págs. 369-385

RIVAS-MARTINEZ, S. y otros- “La vegetación de El Pardo y la cuenca alta del río Manzanares”, en DA CRUZ MORA, H. y otros- *El Monte de El Pardo*, Madrid, 1998

RIVERA RECIO, J. F.- *La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208). Volumen I*, Roma, 1966

ROBLEDO HERNANDEZ, R.- *Economistas y reformadores españoles: La cuestión agraria (1760-1935)*, Madrid, 1993

RODRIGUEZ SILVA, A.- “La situación de los despoblados en tierras castellano-leonesas durante el siglo XVIII. El caso de los despoblados en la provincia de Avila”, en *El pasado histórico de Castilla y León, Vol. 2, Edad Moderna*, Salamanca, 1984, págs. 381-394

RODRIGUEZ SILVA, A.- “Venta de baldíos en el siglo XVIII. Una aproximación a su estudio. La Comisión de Baldíos de las Cuatro Villas de la Costa del Mar de Cantabria”, en *Desamortización y Hacienda Pública*, vol. I, Madrid, 1986, págs. 137-154

ROJAS-MIX, M.- *La Plaza Mayor. El urbanismo, instrumento de dominio colonial*, Barcelona, 1978

ROMERO FERNANDEZ-PACHECO, J. R.- “Madrid, 1086-1500. Notas sobre el espacio, su organización y ocupación”, en SEGURA, C., ed.- *Orígenes históricos de la actual Comunidad de Madrid. La organización social del espacio en la Edad Media*, Madrid, 1995, págs. 41-60

RUCQUOI, A.- *Valladolid en la Edad Media. I- Génesis de un poder*, Valladolid, 1987

RUCQUOI, A.- *Valladolid en la Edad Media. II- El mundo abreviado*, Valladolid, 1987

RUIZ DE CELADA, J.- *Estado de la Bolsa de Valladolid. Examen de sus tributos, cargas y medios de su extinción. De su gobierno y reforma*. Edición y estudio de B. Yun Casalilla, Valladolid, 1990 (edic. orig.: 1777)

RUIZ MARTIN, F.- “La banca en España hasta 1782”, en *El Banco de España. Una Historia Económica*, Madrid, 1970, págs. 1-196

RUIZ MARTIN, F.- “Procedimientos crediticios para la recaudación de los tributos fiscales en las ciudades castellanas durante los siglos XVI y XVII”, en OTAZU, A.- *Dinero y crédito*, Madrid, 1978, págs. 37-48

RUIZ MARTIN, F.- *Las finanzas de la Monarquía hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-1665)*, Madrid, 1990

SACRISTAN Y MARTINEZ, A.- *Municipalidades de Castilla y León. Estudio histórico- crítico*, Madrid, 1877

SAEZ POMBO, E. Y MANUEL VALDES, C.- “La propiedad pública de la tierra en España (1950-1988). Recopilación bibliográfica”, *Agricultura y Sociedad*, nº 55 (1990), págs. 315-383

SAIZ MILANES, J.- “Origen e historia de los Bienes de Propios”, en ESTAPE Y RODRÍGUEZ, F., ed.- *Textos olvidados*, Madrid, 1973, págs. 441-4

SALOMÓN, N.- *La vida rural castellana en tiempos de Felipe II*, Barcelona, 1973

SAMBRICIO, C.- *Territorio y ciudad en la España de la Ilustración*, Madrid, 1991

SANCHEZ ALONSO, B.- “La Villa de Madrid ante el traslado de la Corte (1600-1601)”, *RevBAM*, t. III (1924), págs. 327-340

SANCHEZ LEON, P.- *Absolutismo y comunidad. Los orígenes sociales de la guerra de los comuneros en Castilla*, Madrid, 1998

SANCHEZ SALAZAR, F.- “El reparto y venta de las tierras concejiles como proyecto de los ilustrados”, *Agricultura y Sociedad*, nº 47 (1988), págs. 123-141

SANCHEZ SALAZAR, F.- “Los repartos de tierras concejiles en Andalucía durante la segunda mitad del siglo XVIII”, en *Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1984, págs. 261-271

SANCHEZ SALAZAR, F.- *Extensión de cultivos en España en el siglo XVIII*, Madrid, 1988

SANCHEZ, G.- “El Fuero de Madrid y los derechos locales castellanos”, en *El Fuero de Madrid*, Madrid, 1963, págs. 11-33

SANCHO, J. L.- *La Arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo Histórico de los Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional*, Madrid, 1995

SANTAMARIA LANCHO, M.- “Del concejo y su término a la Comunidad de Ciudad y Tierra: surgimiento y transformación del señorío urbano de Segovia (siglos XIII-XVI)”, *Studia Historica. Historia Medieval*, t. III (1985), págs. 83-116

SANTAYANA Y BUSTILLO, L.- *Gobierno político de los pueblos de España, y el corregidor, alcalde y juez en ellos*, Madrid, 1979 (1ª ed: 1742)

SARASA SANCHEZ, E. y SERRANO MARTIN, E., eds.- *Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX)*, 3 tomos, Zaragoza, 1993

SEBASTIAN AMARILLA, J. A.- “La renta de la tierra en León durante la Edad Moderna. Primeros resultados y algunas reflexiones a partir de fuentes monásticas”, *Revista de Historia Económica*, v. VIII, nº 1 (1990), págs. 53-80

SEGURA GRAIÑO, C., edit.- *Orígenes históricos de la actual Comunidad Autónoma de Madrid. La organización social del espacio en la Edad Media. I*, Madrid, 1995

SEGURA GRAIÑO, C., edit.- *Caminos y caminantes por las tierras del Madrid medieval*, Madrid, 1994

SUAREZ ALVAREZ, M. J.- *La Villa de Talavera y su Tierra en la Edad Media*, Oviedo, 1983

TERRASSE, M.- “La región de Madrid d’apres les “Relaciones topográficas”. (Peuplement- Voies de Communication)”, *Melanges de la Casa de Velásquez*, t. IV (1968), págs. 143-172

THOMPSON, E. P.- *Costumbres en Común*, Barcelona, 1995

TOMAS Y VALIENTE, F.- "Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII)", en *Actas de las II Jornadas de Metodología aplicada de las ciencias históricas*, III, Santiago de Compostela, 1976

TOMAS Y VALIENTE, F.- *Los validos en la Monarquía española del siglo XVII*, Madrid, 1982

TOMAS Y VALIENTE, F.- "Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla", en *Actas del I Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1970

TORMO, E.- “El estrecho cerco del Madrid de la Edad media por la admirable colonización segoviana”, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, t. CXVIII (1946), págs. 47-205

TOVAR MARTIN, V.- *Arquitectura madrileña del siglo XVII*, Madrid, 1983

TOVAR MARTIN, V.- *El Real Pósito de la Villa de Madrid. Historia de su construcción durante los siglos XVII y XVIII*, Madrid, 1982

TOVAR MARTIN, V.- “Real Sitio de El Pardo”, en AÑON, C. y SANCHO, J. L., eds.- *Jardín y Naturaleza en el reinado de Felipe II*, Madrid, 1998, págs. 440-459

TRAVESI DE DIEGO, J. C.- “Las relaciones campo-ciudad en el Madrid medieval”, en MIGUEL RODRÍGUEZ, J. C. de, ed.- *El Madrid medieval: sus tierras y sus hombres*, Madrid, 1990, págs. 113-121

URGORRI CASADO, F.- " El ensanche de Madrid en tiempos de Enrique IV y Juan II. La urbanización de las cavas", *Rev BAM*, t. XXIII, nº 67 (1.954), págs. 3-63

URTEAGA, L.- *La tierra esquilhada. Las ideas sobre la conservación de la naturaleza en la cultura española del siglo XVIII*, Barcelona, 1987

VACA LORENZO, A.- “Recesión económica y crisis social de Castilla en el siglo XIV”, en WICKHAM, Ch. y otros- *Las crisis en la Historia*, Salamanca, 1995, págs. 33-55

VALDES, F., ed.- *Mayrit. Estudios de arqueología medieval madrileña*, Madrid, 1992

VALENZUELA RUBIO, M.- *Urbanización y Crisis Rural en la Sierra de Madrid*, Madrid, 1977

VALENZUELA RUBIO, M. - “Segregación y cambio funcional en un espacio forestal suburbano: El Pardo”, *AIEM*, t. XI (1975)

VASSBERG, D. E.- *La venta de tierras baldías. El comunitarismo agrario en la Corona de Castilla durante el s. XVI*, Madrid, 1983

VASSBERG, D. E.- *Tierra y sociedad en Castilla. Señores, poderosos y campesinos en la España del siglo XVI*, Barcelona, 1986

VERA YAGÜE, C. M.- “Espacio, poblamiento y señorialización en el Madrid bajomedieval: La Comunidad de Villa y Tierra de Madrid, el sexmo de Valdemoro y las encomiendas de la orden de Santiago en la ribera del Tajo”, *Villa de Madrid*, nº 105-106 (1991), págs. 62-77

VERA YAGÜE, C. M.- *Territorio y población en Madrid y su Tierra en la Baja Edad Media. La señorialización del espacio madrileño y la repoblación concejil “antiseñorial” en los siglos XIV a XVI*, Madrid, 1999

VICEDO RIUS, E.- “Bienes y usos comunales a debate”, *Historia Agraria*, nº 9 (1995), págs. 193-197

VILLAR GARCIA, L. M.- *La Extremadura castellano-leonesa. Guerreros, clérigos y campesinos (711-1252)*, Valladolid, 1986

VIÑAS Y MEY, C. y PAZ, R., eds.- *Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II. Provincia de Madrid*, Madrid, 1949

VIVIER, N.- *Propriété collective et identité communale. Les Biens Communaux en France 1750-1914*, Paris, 1998

VV AA- *Carlos III. Alcalde de Madrid, 1788-1988*, Madrid, 1988

VV AA.- *Forum et Plaza Mavor dans le monde hispanique*, París, 1978

VV AA.- *Historia de Vicálvaro*, Madrid, 1987

VV AA.- “Plazas” et sociabilite en Espagne et Amérique Latine, París, 1982

WICKHAM, Ch. y otros- *Las crisis en la Historia*, Salamanca, 1995

YUN CASALILLA, B.- “Aristocracia, Corona y oligarquías urbanas en Castilla ante el problema fiscal, 1450-1660. (Una reflexión en el largo plazo)”, en *Historia de la Hacienda en España (siglos XVI-XX): Homenaje a D. Felipe Ruiz Martín, Hacienda Pública Española*, monografías, nº 1 (1991), págs. 25-41

YUN CASALILLA, B.- *Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos, 1500-1830*, Salamanca, 1987

ZAPATA BLANCO, S.- “Contribución al análisis histórico de la ganadería extremeña”, en *Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano*, Cáceres, 1979, págs. 825-851

ZOZAYA STABEL-HANSEN, J.- “La islamización en la provincia de Madrid”, *II Jornadas de Estudios sobre la provincia de Madrid*, Madrid, 1980, págs. 77-83